

## CAPÍTULO II

### PETICIONES, CASOS Y MEDIDAS CAUTELARES

#### A. Atraso Procesal

1. La CIDH cuenta con un mecanismo único para la protección de los derechos humanos en la región, que es el sistema de peticiones y casos y las soluciones amistosas. Mediante la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana, las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos pueden obtener medidas de justicia y reparación. En la medida que este mecanismo opere adecuadamente, las personas cuyos derechos hayan sido violentados podrán contar con un instrumento de resolución de sus demandas, que no solo podrá beneficiarlas para su caso puntual, sino que también ofrece una importante capacidad para cambiar situaciones estructurales de violaciones a los derechos humanos, producto de las recomendaciones de la CIDH, o producto también de acuerdos de solución amistosa por ella homologados. Dicho sistema es una herramienta fundamental para lograr justicia y reparación, combatir la impunidad, y lograr reformas estructurales en la ley, política y práctica.

2. Sin embargo, uno de los principales desafíos que enfrenta la CIDH es reducir el atraso procesal en el sistema de peticiones y casos, ya que afecta las posibilidades de dar una respuesta oportuna a las personas que acuden al sistema interamericano a denunciar violaciones a sus derechos humanos. La causa principal del atraso procesal es el aumento constante en la cantidad de peticiones que la CIDH recibe, en un contexto de desafíos presupuestarios e insuficiencia de recursos humanos que afectan la posibilidad de brindar la respuesta oportuna requerida, lo cual puede restar efectividad y desincentivar su uso.

3. Dado lo anterior, la CIDH ha implementado una serie de iniciativas para enfrentar el atraso procesal con los recursos existentes y dentro de los parámetros de las normas y de su propio Reglamento. Un primer paso ha sido eliminar el retraso en la fase de estudio inicial. A través de una iniciativa concreta, la CIDH pudo hacer un cambio fundamental, lo cual fue oportunamente informado en el comunicado de prensa [CIDH busca reducir atraso procesal en el sistema de peticiones y casos](#). En el contexto de esta iniciativa, se revisaron casi 6500 peticiones en etapa de estudio. De esta forma, se logró superar el rezago procesal en la etapa de estudio inicial. A la fecha, se han evaluado al menos en una ocasión todas las peticiones que fueron presentadas ante la CIDH hasta el año 2016. Con excepción de aquellas donde fue estrictamente necesario solicitar información, se tomaron decisiones sobre la tramitabilidad o no de las mismas. Sin embargo, debido a los limitados recursos administrativos, la Secretaría Ejecutiva aún está notificando las decisiones de apertura a trámite. Por lo tanto, como resultado de dicho trabajo, en lugar de realizar el estudio inicial de peticiones presentadas hace años, actualmente la Secretaría Ejecutiva realiza una revisión inicial de cada petición presentada el año anterior.

4. La CIDH está centrando actualmente sus esfuerzos en la necesidad de agilizar la tramitación en las etapas de admisibilidad y fondo, revisando y mejorando sus metodologías para lograr que el sistema responda oportunamente. En este sentido, la CIDH está aplicando de manera rigurosa los requisitos de apertura a trámite y la política de archivo y desactivación definitiva de peticiones. Asimismo, los equipos legales de la Secretaría están trabajando, dentro de sus posibilidades, en portafolios especializados en cada etapa procesal, lo cual agiliza el análisis de los casos y peticiones. Además, en cumplimiento del Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH, la Secretaría Ejecutiva ha creado una Unidad de Tramitación, que ya se encuentra en funcionamiento, la cual centraliza la tramitación de peticiones y casos en las distintas etapas procesales, permitiendo que los equipos legales se dediquen exclusivamente a la preparación del análisis jurídico. Por otra parte, el cambio de formato de los informes sobre admisibilidad anunciado en el mencionado comunicado de prensa, ha permitido agilizar la preparación, revisión y aprobación de los informes. Gracias a estos cambios de metodología, este año la Comisión ha adoptado 120 informes sobre admisibilidad, los cuales representan 129 peticiones debido a las acumulaciones, en comparación con los 45 informes aprobados en 2016. La implementación de las medidas de reducción de atraso procesal también ha

producido un impacto en la etapa de fondo, habiendo aprobado la CIDH este año 35 informes de fondo, en comparación con los 16 informes adoptados en 2016.

5. Si bien estas medidas aún no son suficientes para revertir los años de atraso procesal, son pasos claves que reflejan el compromiso de la CIDH con el sistema de peticiones y casos. Además, las iniciativas y resultados que se han logrado demuestran la posibilidad real y concreta de implementar más y mejores medidas para dar una respuesta oportuna a las personas que acuden al sistema interamericano.

6. El presente capítulo refleja el trabajo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el año 2017 en relación con su sistema de peticiones y casos individuales.

## **B. Mecanismo de soluciones amistosas**

7. Actualmente existen 124 asuntos en procedimiento de solución amistosa, de los cuales 46 tiene acuerdos de solución amistosa suscritos en proceso de implementación previa a la homologación. De esos asuntos, 60 peticiones se encuentran en etapa de admisibilidad y 64 se encuentran en etapa de fondo.

8. Durante el año 2017 se realizaron 4 visitas de trabajo para el impulso de las negociaciones de acuerdos de solución amistosa y el cumplimiento de decisiones de la CIDH en peticiones y casos. La primera visita se realizó el 25 de abril de 2017 a México, y en ese espacio se facilitaron 8 reuniones de trabajo sobre asuntos del país<sup>1</sup>. En el mismo sentido, el 18 de mayo se realizaron dos visitas de trabajo simultáneas a Argentina y Paraguay, en donde se facilitaron 4 reuniones de trabajo en Buenos Aires<sup>2</sup> y 6 reuniones de trabajo en Asunción<sup>3</sup>, respectivamente. Finalmente, el 31 de agosto de 2017, se realizó una visita de trabajo a México, en la cual se facilitaron 5 reuniones de trabajo<sup>4</sup>.

9. Por otro lado, también se organizaron reuniones de trabajo en períodos de sesiones dentro y fuera de la sede de la CIDH en el año 2017. En ese sentido, durante el 161 período de sesiones que tuvo lugar en Washington DC, se sostuvieron 12 reuniones de trabajo<sup>5</sup>; en el 163 período de sesiones en la ciudad de Lima, Perú, se sostuvieron 7 reuniones de trabajo<sup>6</sup>; en el 164 período de sesiones en la Ciudad de México, se facilitaron 5 reuniones de trabajo<sup>7</sup> y en el 165 período de sesiones en Montevideo, Uruguay, se facilitaron 7 reuniones de trabajo<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> P-735-07- Ismael Mondragón Bustamante; Caso 12.986 - José Antonio Bolaños; Caso 11.824 - Sabino Díaz Osorio; Caso 11.411 Hermelindo Santíz Gómez y Otros (El Ejido Morelia); Caso 12.610 - Faustino Jiménez Álvarez; Caso 12.627 - María Nicolasa García Reynoso; 12.791 - Jesús Ángel Gutiérrez Olvera; P-1171-09 Ananías Laparra Martínez y otros.

<sup>2</sup> Caso 13.011 - Graciela Ramos Rocha; P-1314-05 - Anatole Alejandro y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez; P-675-06 Raúl Franklin Buganem; Caso 12.056 Gabriel Oscar Jenkins.

<sup>3</sup> Caso 12.330 - Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez; Caso 12.359 - Cristina Aguayo Ortíz y otros; Caso 12.629 - Com. Ind. Kelyenmagategma - Pueblo Enxet; Caso 12.699 - Pedro Antonio Centurión; P-747-05 - Comunidad Indígena Yaka Marangatu del Pueblo Maya; Caso 12.358 - Octavio Rubén González Acosta.

<sup>4</sup> Caso 12.986 - José Antonio Bolaños; P-735-07- Ismael Mondragón Bustamante; Caso 11.733 Víctor Pineda Hernestrosa y Modesto Patolzin Miocen; Caso 11.520 Tomás Porfirio Rondín (Masacre de Aguas Blancas); P-1014-06 - Antonio Jacinto López.

<sup>5</sup> P1415/06 - Yamil Saunders y otros; Caso 11.411 Hermelindo Santíz Gómez, Sebastián Santíz Gómez, Severiano Santíz Gómez; P1171/09 - Ananías Laparra Martínez y familia; Caso 13.011 - Graciela Ramos Rocha y familia; Caso 12.191 - María Mamérita Mestanza Chávez; P118/12 - Isabel Guzmán Errazuriz y otros; P1014/06 - Antonio Jacinto Lopez; Caso 12.714 - Masacre de Belén Altavista; Caso 11.562 Dixie Miguel Urbina Rosales; P1159/08 - A.N. y P 1377/13 - Aurora; Caso 12.904 - Comunidad indígena Chusmiza Usmagama; P687/11 - GBB y CBB.

<sup>6</sup> Caso 11.007 Masacre de Trujillo; Caso 11.520 Tomas Rodin y Otros (Aguas Blancas); Caso 12.541 Omar Zuñiga Vasquez; Caso 12.756- El Aracatazzo; Caso 12.905- Galvan y Migueles; P-108-00 Masacre de Segovia; P-1256-05 Ivana Rosales.

<sup>7</sup> Caso 11.677 Diego Velásquez Soc y Matías Velásquez; Caso 12.241 Herminia Isabel Campos; Caso 12.961 Juan González y Otros; Caso 11.545 Martha Saire; Caso 12.934 Frank Guelfi, Pacientes del Hospital Santo Tomás.

<sup>8</sup> Caso 12.629 - Com. Ind. Kelyenmagategma - Pueblo Enxet; P-850-15- Pueblo Ayoreo y sus miembros; P1159/08 - A.N. y P 1377/13 - Aurora; P-12224-07 David Rabinovich; Caso 12.904 - Comunidad indígena Chusmiza Usmagama P687/11 - GBB y CBB; Caso 12.094 - Lhaka Honhat.

10. En síntesis, durante el año 2017, la CIDH facilitó en total 54 reuniones de trabajo con la participación de Estados, peticionarios y víctimas, en distintos asuntos en etapa de negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa y supervisión de cumplimiento de recomendaciones de la CIDH formuladas en Informes de Fondo.

11. Asimismo, con el objetivo de promover el uso del procedimiento de solución amistosa, la CIDH emitió 4 comunicados de prensa sobre las visitas de trabajo a Argentina<sup>9</sup>, México<sup>10</sup> y Paraguay<sup>11</sup> llevados a cabo entre el 25 de abril y el 19 de mayo de 2017, así como sobre la emisión de una legislación sobre negociación de acuerdos de solución amistosa en Bolivia<sup>12</sup>. En el mismo la sección de la página web de la CIDH referida a soluciones amistosas fue actualizada constantemente en el año 2017.

12. En la misma línea, la CIDH diagramó y publicó la “Guía práctica para usuarios sobre el uso del mecanismo de soluciones amistosas”<sup>13</sup> como una herramienta sencilla que permite acercar a los usuarios conocimientos básicos sobre el procedimiento de manera que puedan tomar decisiones informadas respecto a su uso.

13. Producto de la labor de facilitación de la CIDH, en el año 2017 se suscribieron 4 acuerdos de solución amistosa, Caso 11.562, Dixie Miguel Urbina de Honduras; Caso 12.714, Masacre Belén de Altavista y Caso 12.712, Rubén Darío Arroyave de Colombia; y en la petición P-1224-07, David Rabinovich de Uruguay.

14. Por otro lado, este año la CIDH aprobó 5 informes de solución amistosa, a saber: el Informe No. 135/17 sobre el caso 12.712, Rubén Darío Arroyave y el Informe No. 136/17 sobre el Caso 12.714, Masacre Belén de Altavista, ambos de Colombia; el Informe No. 137/17 sobre el Caso 12.383 Néstor Albornoz Eyzaguirre de Perú; el Informe No. 36/17, sobre el Caso 12.854, Ricardo Javier Kaplun y familia de Argentina; y finalmente, el Informe No. 92/17, Caso 12.627, María Nicolasa García Reynoso de México.

15. Dentro de la labor de difusión del mecanismo de solución amistosas e intercambio de buenas prácticas, se destaca la labor de creación de competencias para la negociación de acuerdos, realizada en Paraguay en el año 2017 con una capacitación a funcionarios Estatales en el uso del PSA, que tuvo lugar el 19 de mayo de 2017, y la primera capacitación de esta naturaleza que se dictó a sociedad civil el 18 de mayo de 2017.

16. Asimismo, el 19 de mayo de 2017, se organizó el V Seminario Nacional Sobre el Mecanismo de Soluciones Amistosas, el cual tuvo como objetivo promover la utilización del mecanismo de solución amistosa como una alternativa al procedimiento contencioso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e intercambiar buenas prácticas en la materia entre Estado y sociedad civil en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este espacio de diálogo permitió a representantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del gobierno argentino, conocer el impacto de los acuerdos de solución amistosa aprobados por la CIDH, la identificación tanto de buenas prácticas, como de los desafíos que es necesario superar para la utilización eficaz de dicho mecanismo, en beneficio de la protección de los derechos de las víctimas. Entre los años 2013 y 2016, se realizaron eventos similares en México, Paraguay, Bolivia y Colombia, mientras que la Conferencia Interamericana sobre esta temática se realizó en Antigua, Guatemala.

<sup>9</sup> Ver, Comunicado de prensa, CIDH realizó visita de trabajo a Argentina de 13 de julio de 2017. Disponible electrónicamente en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/098.asp>

<sup>10</sup> Ver, Comunicado de prensa: CIDH realizó visita de trabajo a México de 20 de julio de 2017. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/102.asp>

<sup>11</sup> Ver, Comunicado de prensa: CIDH realizó visita de trabajo a Paraguay de 13 de julio de 2017. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/099.asp>

<sup>12</sup> Ver, Comunicado de Prensa CIDH saluda la aprobación de la modificación legislativa que puede facilitar el uso de soluciones amistosas en Bolivia de 2 de agosto de 2017. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/113.asp>

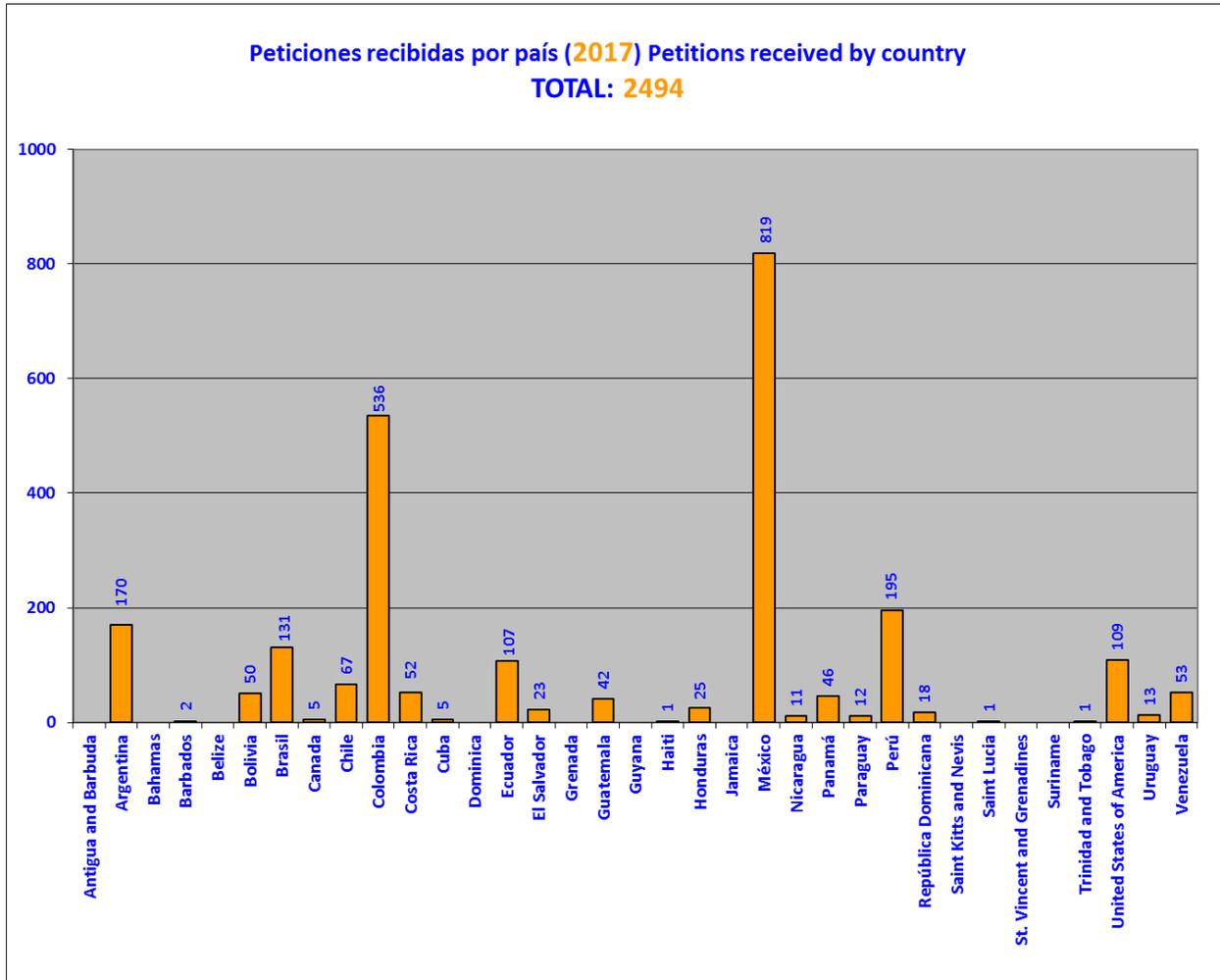
<sup>13</sup> Ver, CIDH, Guía práctica para usuarios sobre el uso del mecanismo de soluciones amistosas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 45/13 18 diciembre 2013 Original: Español. Disponible en: [http://www.oas.org/es/cidh/soluciones\\_amistosas/docs/Informe-Soluciones-Amistosas.pdf](http://www.oas.org/es/cidh/soluciones_amistosas/docs/Informe-Soluciones-Amistosas.pdf)

17. Por otro lado, el 21 de septiembre de 2017, la CIDH organizó la Primera Reunión Especializada sobre Implementación de Acuerdos de Solución Amistosa y Recomendaciones de la CIDH, con el objetivo de proporcionar un espacio de diálogo entre los Estados, peticionarios, académicos y expertos en solución alternativa de conflictos, para la identificación de las buenas prácticas y retos en la negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa y acuerdos de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH en Informes de Fondo con el fin de promover su cumplimiento eficaz. Esta reunión especializada fue una de dos eventos de esta naturaleza organizados por la CIDH, y contó con expertos académicos y en resolución alternativa de conflictos. A la fecha de cierre de este informe se está organizando una reunión similar con peticionarios, Estados y académicos, dentro del marco del Foro Interamericano de Derechos Humanos el día 5 de diciembre de 2017, para impulsar el diálogo sobre el cumplimiento de acuerdos de solución amistosa y recomendaciones de la CIDH. Estos espacios de diálogo permitirán a la CIDH impulsar el desarrollo de marcos, estructuras y/o procedimientos que permitan avanzar en las negociaciones y en la implementación de los acuerdos de solución amistosa de manera más expedita y efectiva en la región.

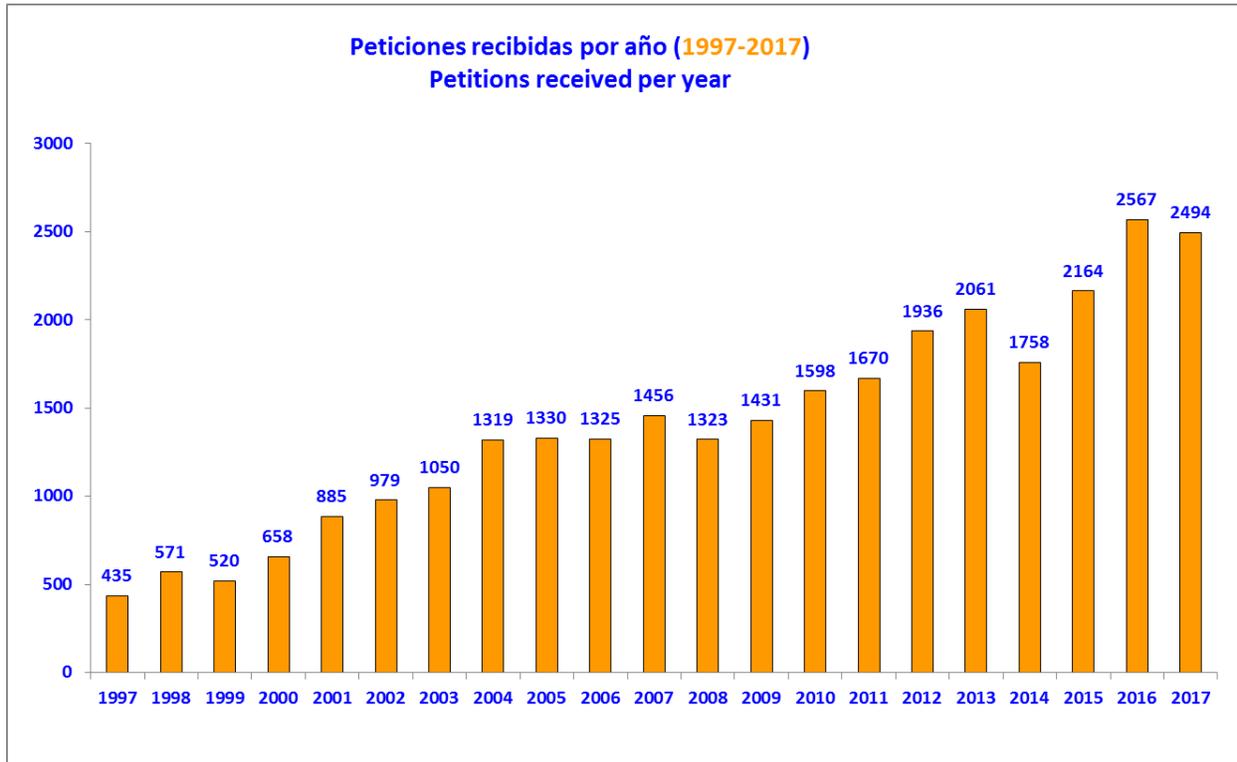
### **C. Estadísticas**

18. La presente sección incluye información estadística con la finalidad de brindar una visión general sobre las diferentes actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar se presentan los datos referentes a los casos y peticiones en trámite, que constituyen el mayor volumen de trabajo de la CIDH. Por “casos” se entienden todas aquellas peticiones que han sido declaradas admisibles mediante un informe de admisibilidad. Por “peticiones” se entienden todas aquellas denuncias en las que se ha dado traslado al Estado pero que no cuentan con informe de admisibilidad. De esta forma, se incluyen los cuadros estadísticos sobre el total de peticiones recibidas por la Comisión durante el año 2017, detallando el número de peticiones presentadas acerca de cada país, así como también la comparación del total de peticiones recibidas en el año 2017 en relación al total de peticiones presentadas en los últimos veinte años; la información estadística sobre el número de peticiones respecto de las cuales se decidió dar traslado a los Estados y el número total de peticiones en trámite acerca de cada país. Asimismo, la información estadística recoge el número de solicitudes de medidas cautelares que la Comisión recibió durante el año 2017, así como del número de medidas cautelares que la Comisión decidió otorgar y ampliar en el mismo período. Las estadísticas muestran además el número de informes de admisibilidad, inadmisibilidad, solución amistosa, archivo y fondo que la Comisión publicó durante el año 2017. Asimismo, dicha sección incluye cuadros estadísticos de la actividad de la Comisión ante la Corte Interamericana. Finalmente, se incluyen estadísticas sobre el total de audiencias que la Comisión celebró a lo largo del año 2017.

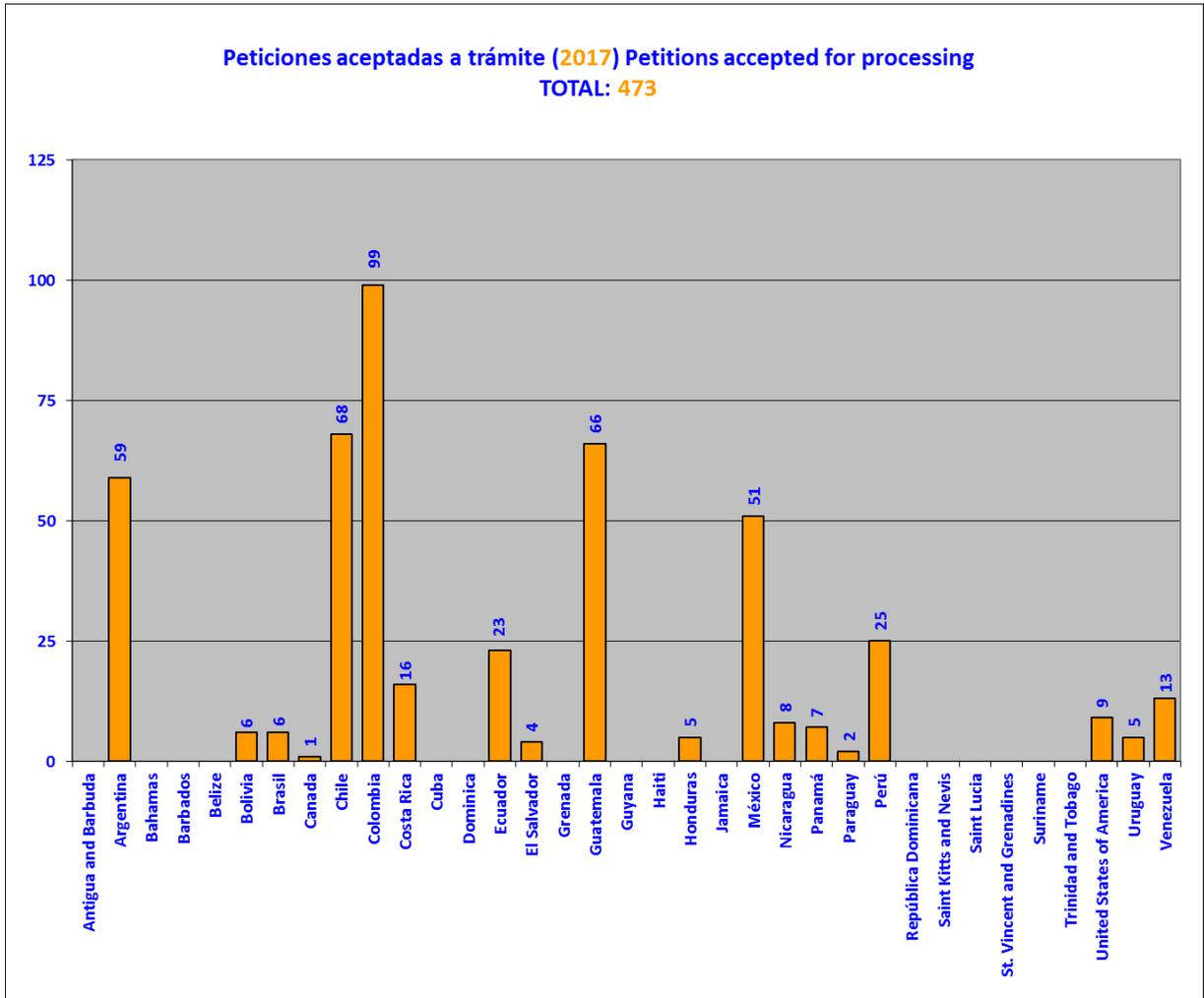
1. Peticiones recibidas por país en 2017 - Total: 2494



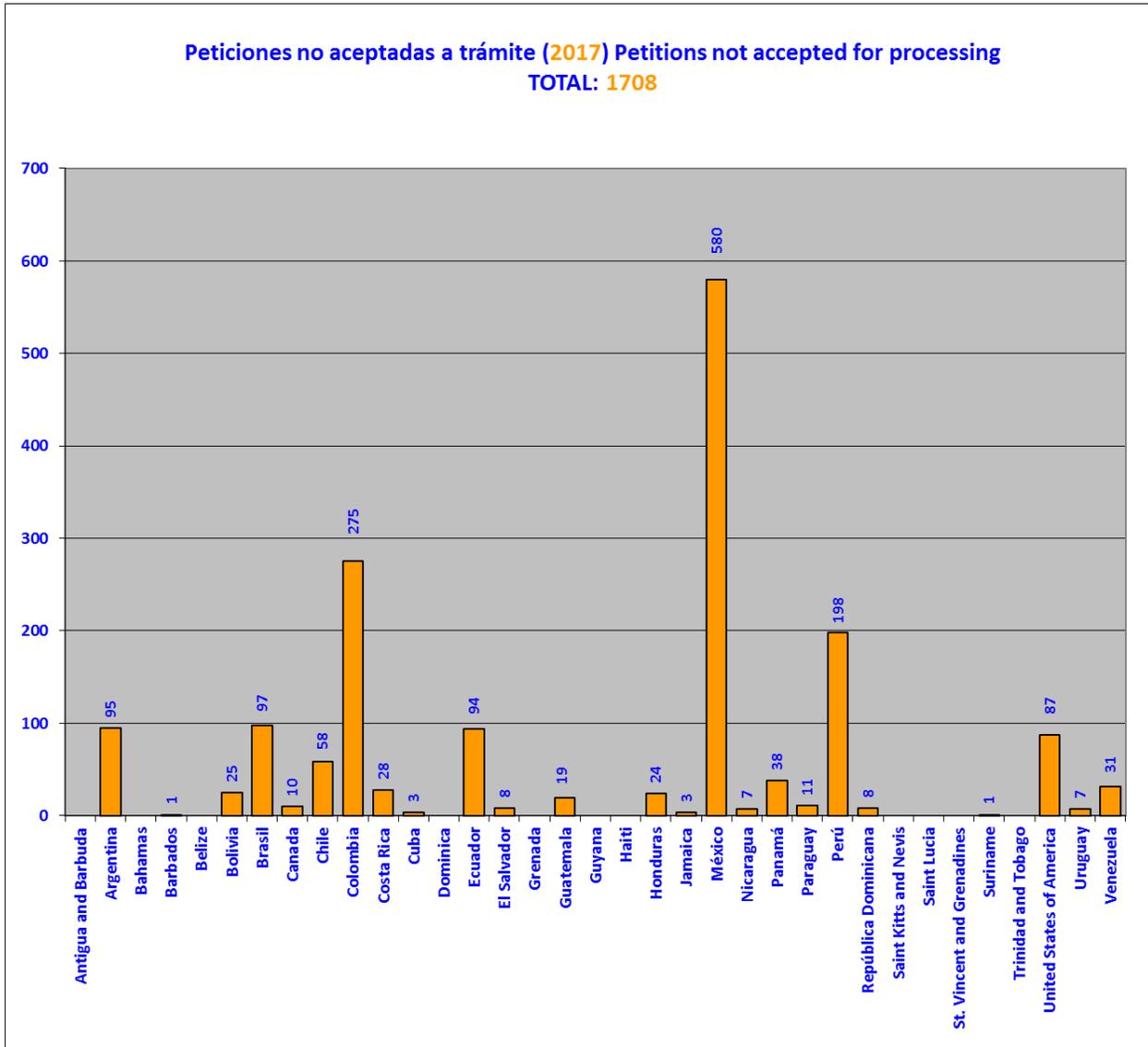
## 2. Peticiones recibidas por año:



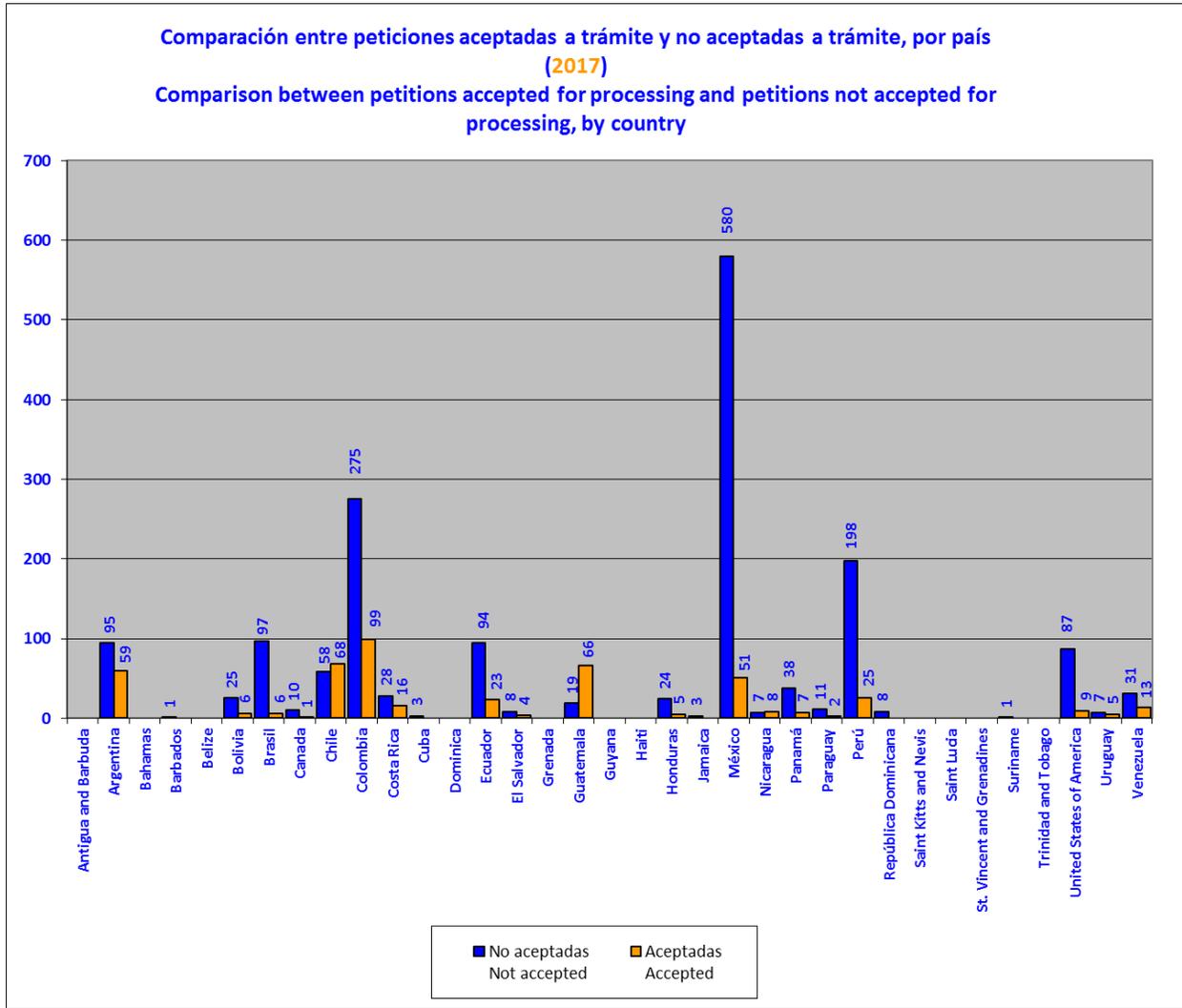
### 3. Peticiones aceptadas a trámite (2017)



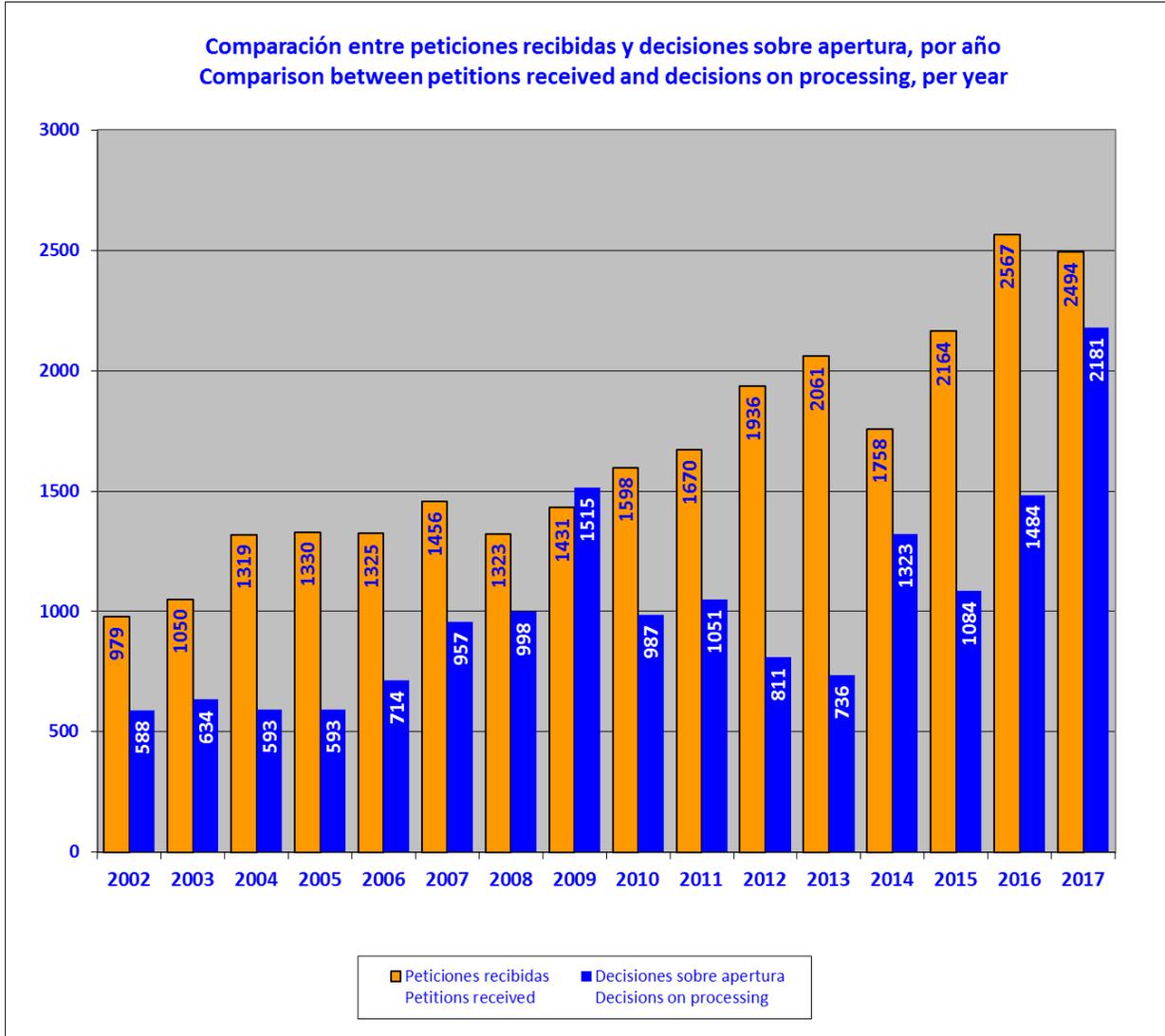
4. Peticiones no aceptadas a trámite (2017)



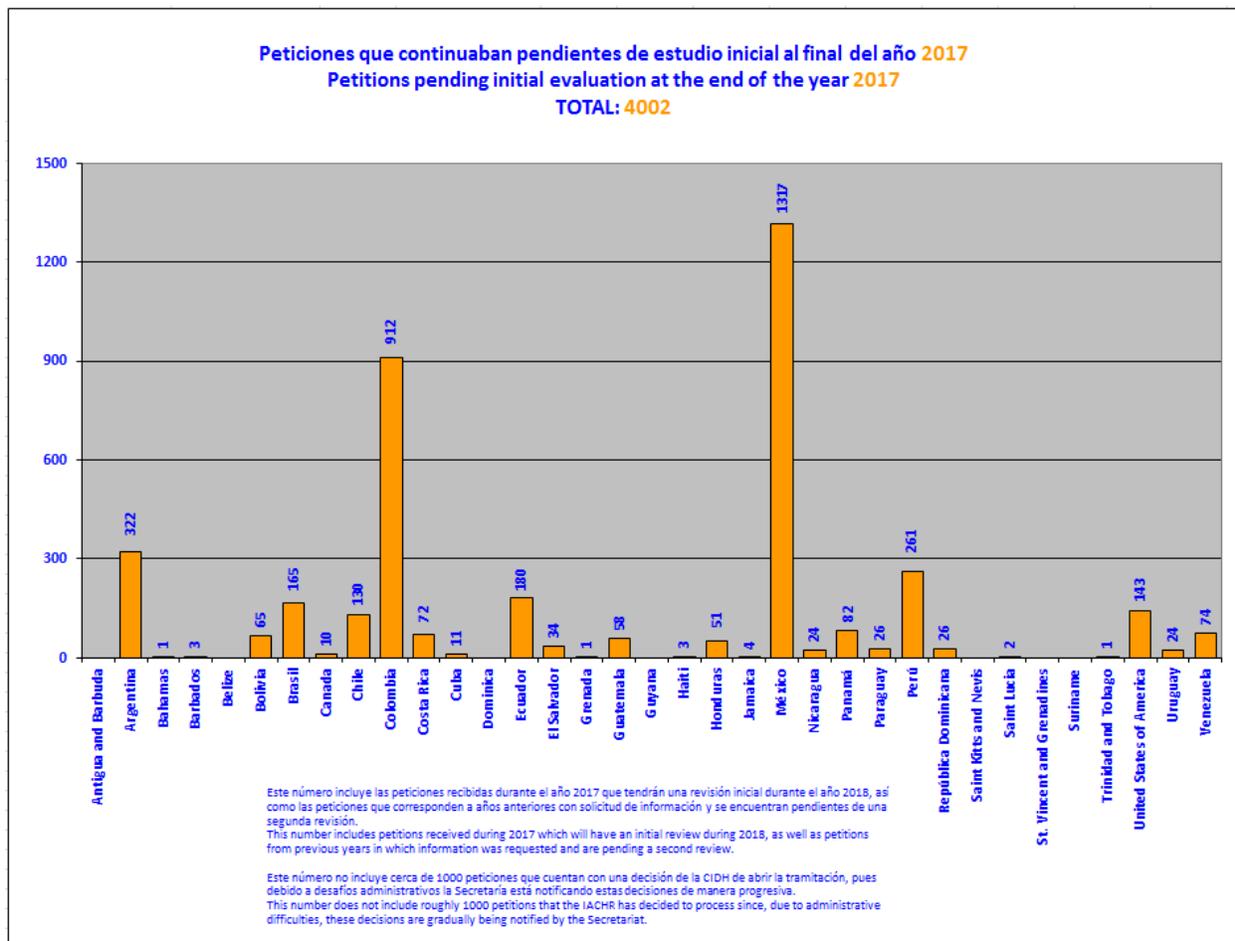
5. Comparación entre peticiones aceptadas a trámite y no aceptadas a trámite, por país (2017)



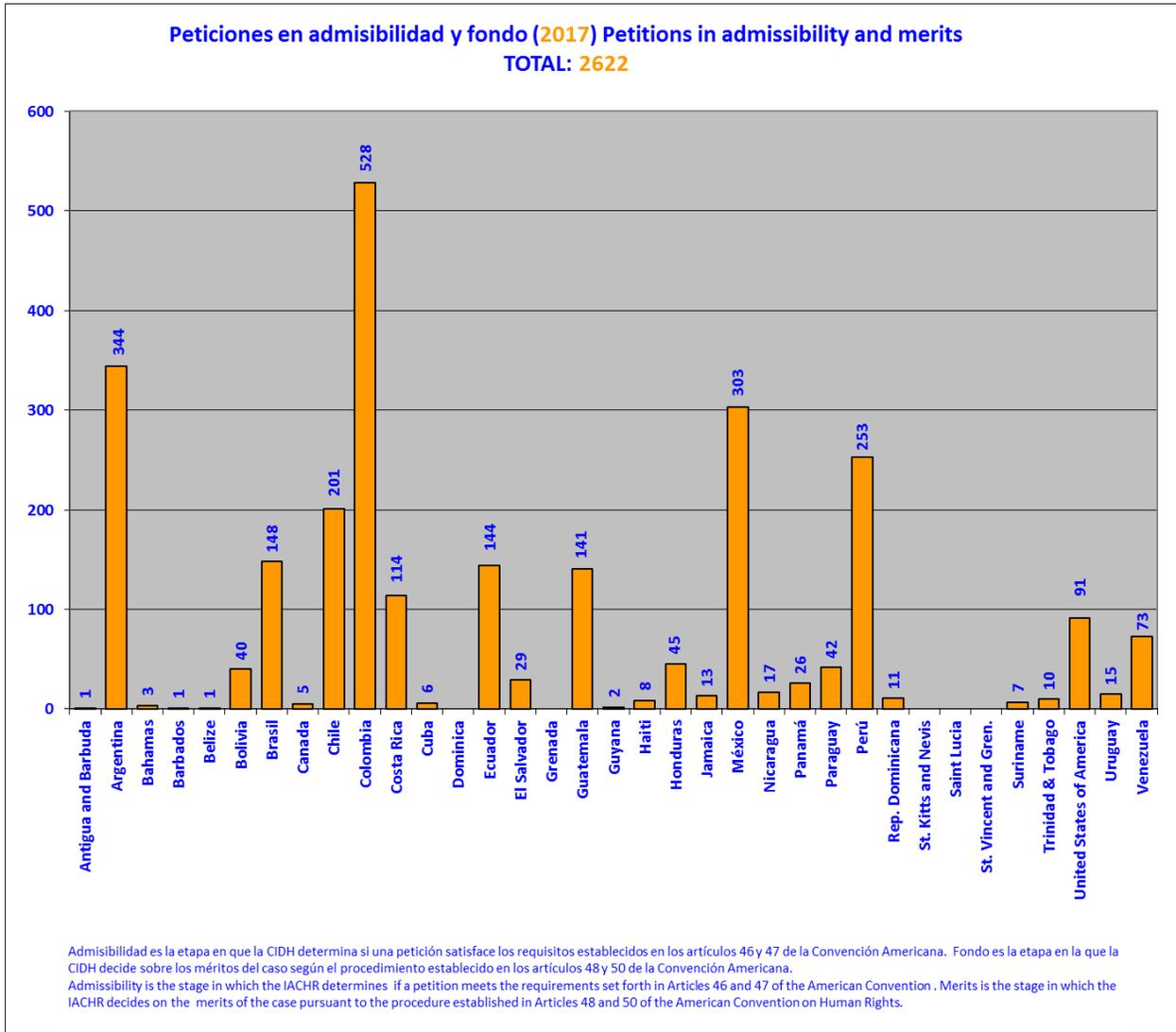
6. Comparación entre peticiones recibidas y decisiones sobre aperturas por año



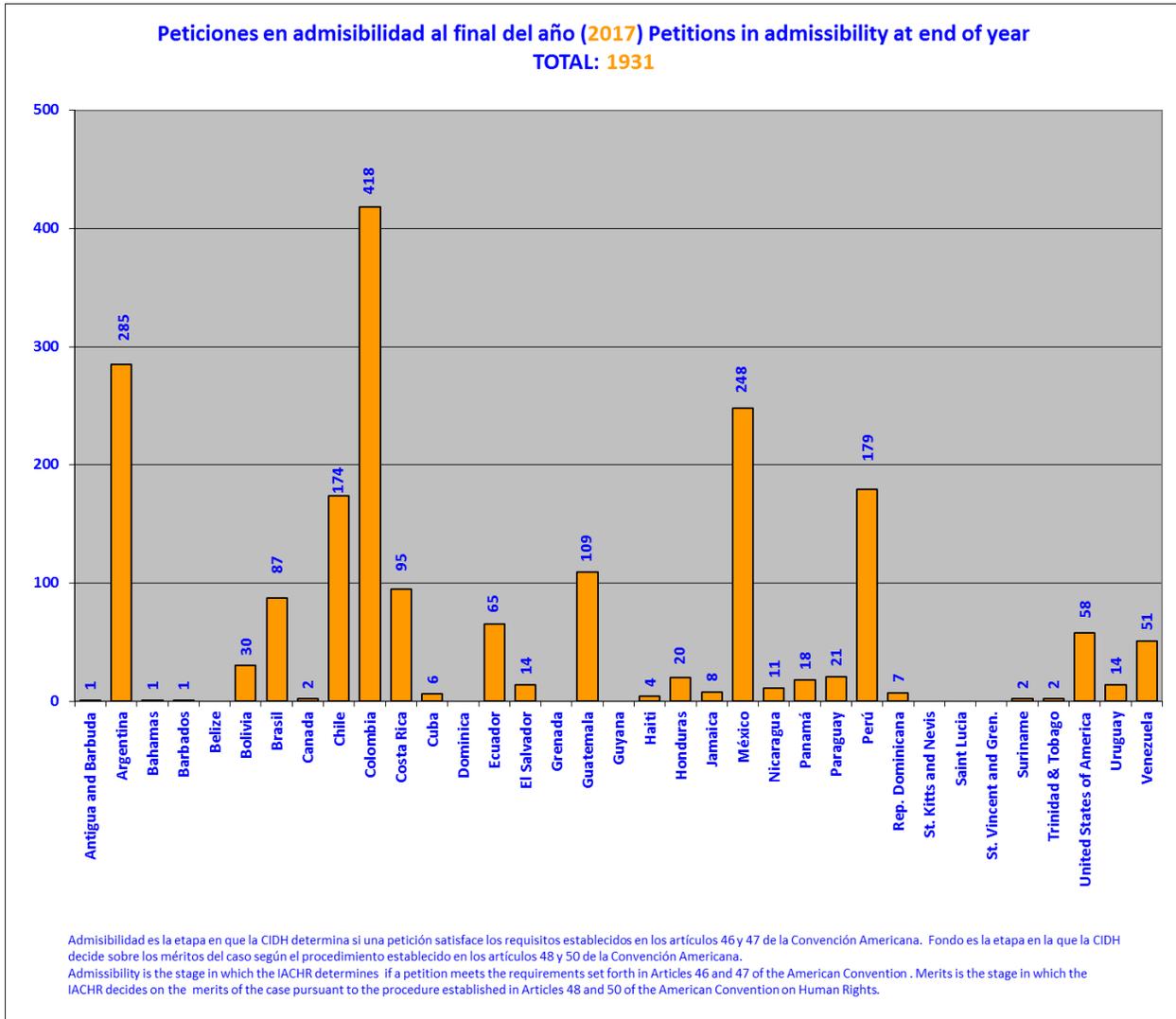
## 7. Peticiones que continuaban pendientes de estudio inicial al final del año 2017 por país



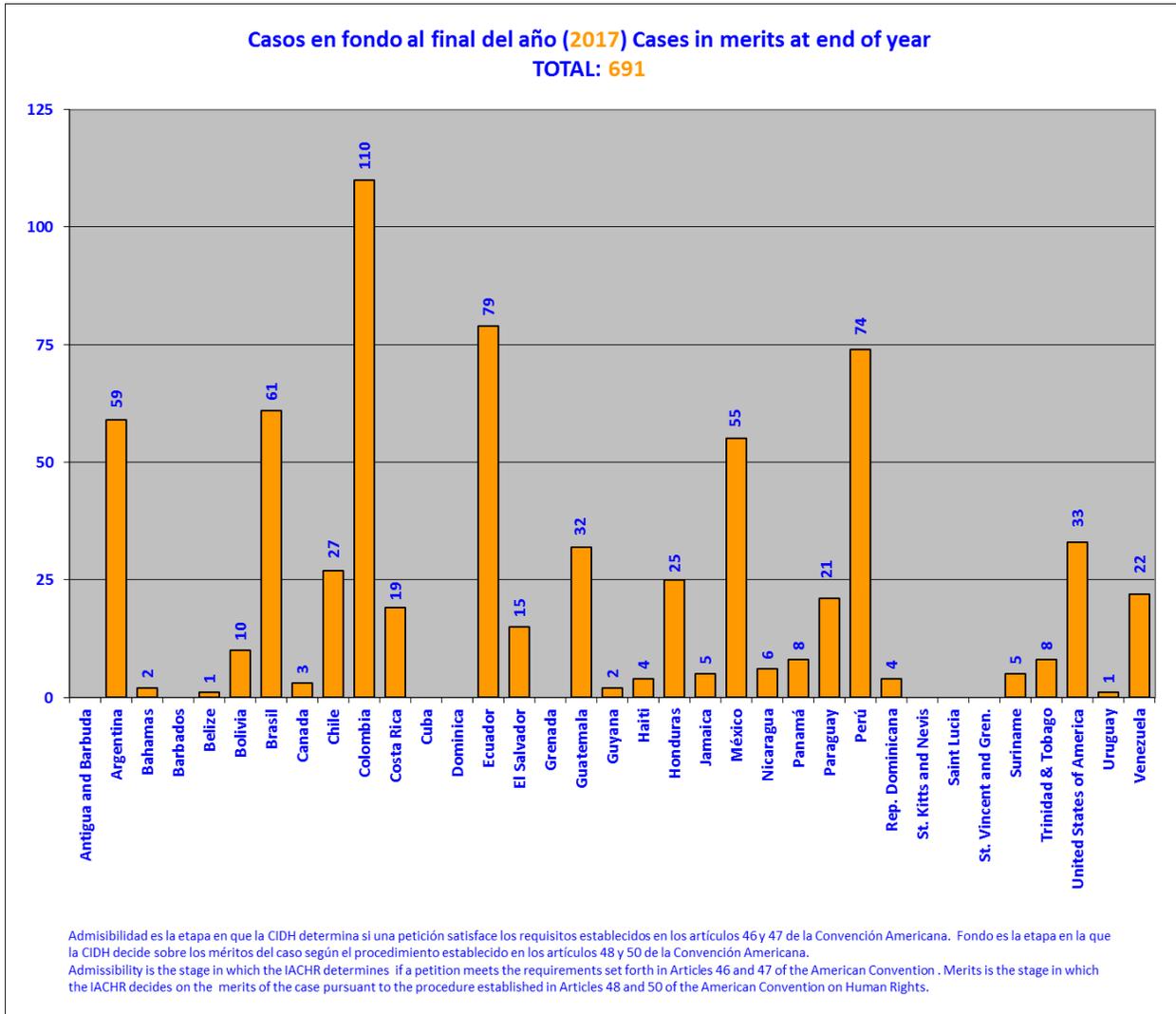
8. Peticiones en admisibilidad y fondo por país – Total: 2622



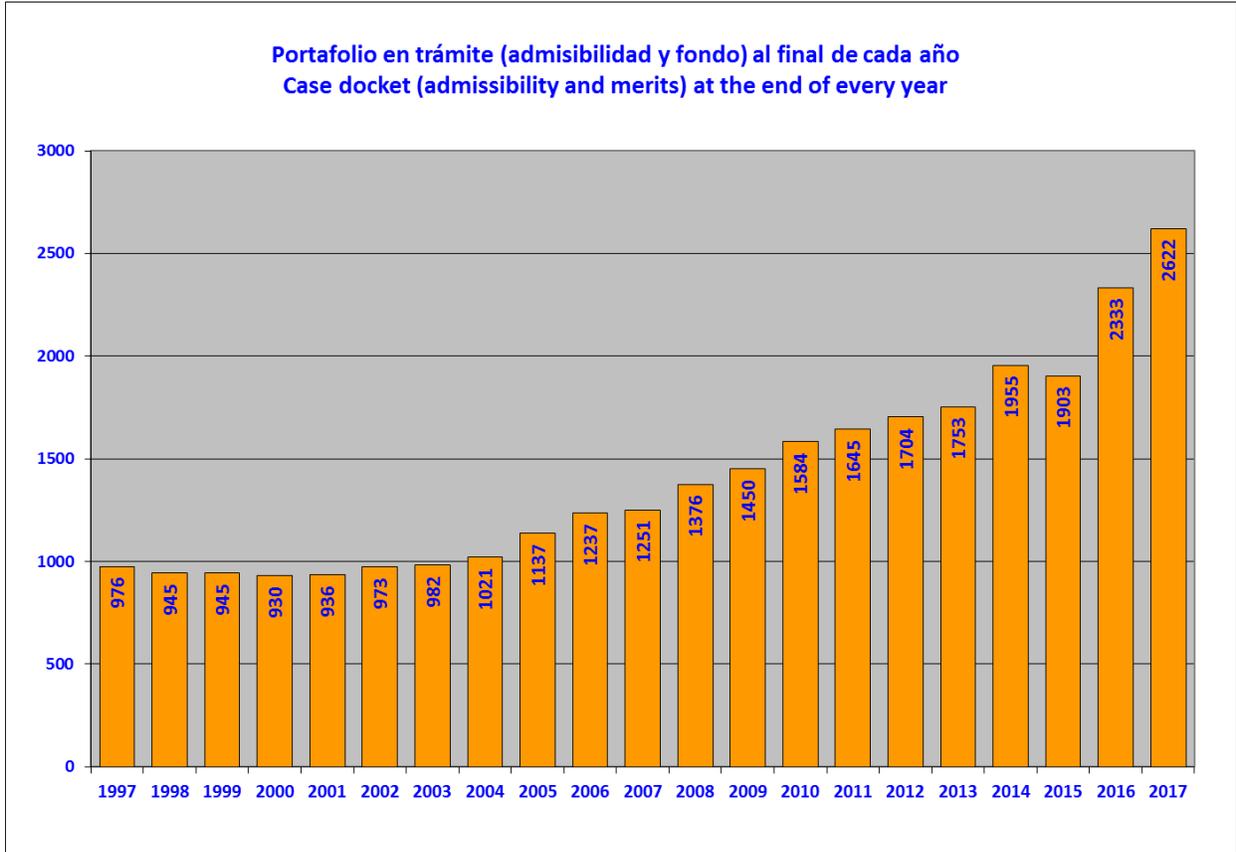
9. Peticiones en admisibilidad al final de 2017 - Total: 1931



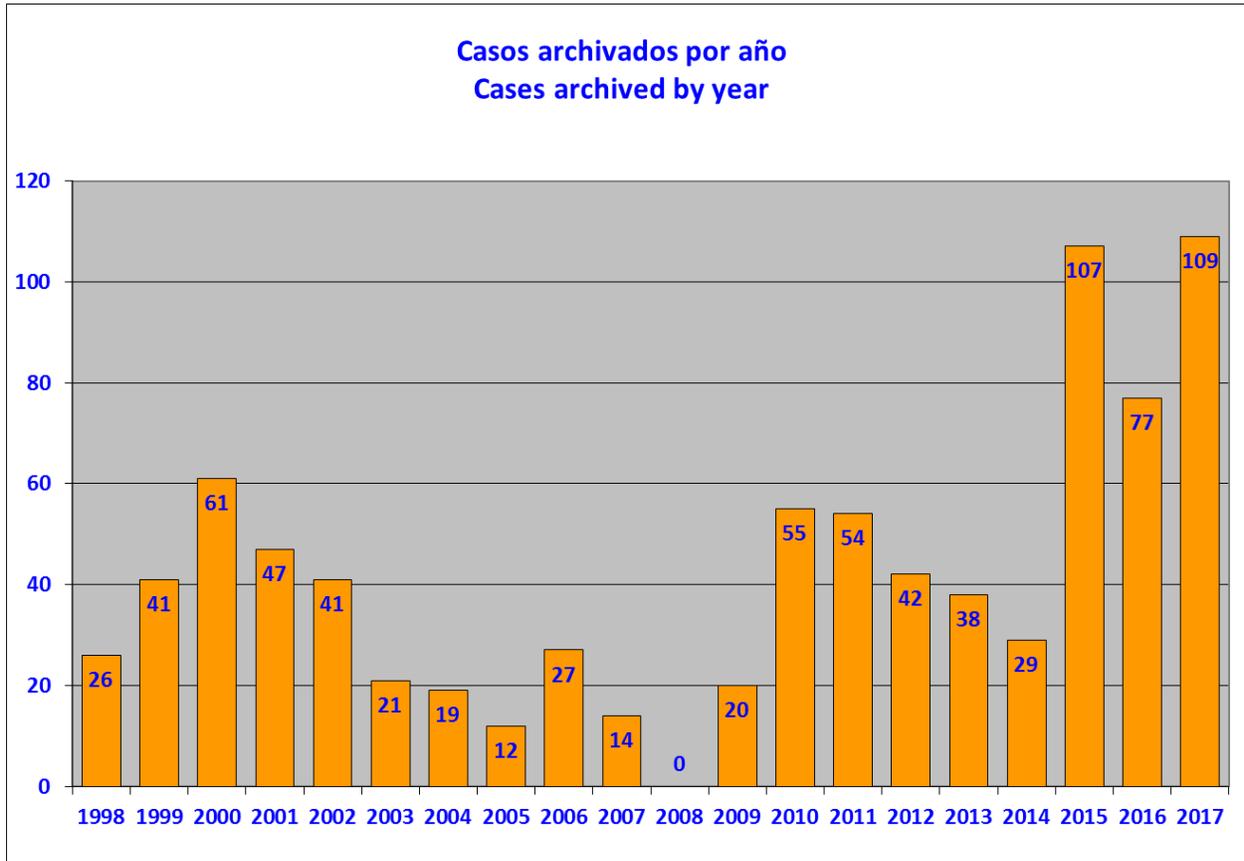
10. Casos en fondo al final de 2017 – Total: 691



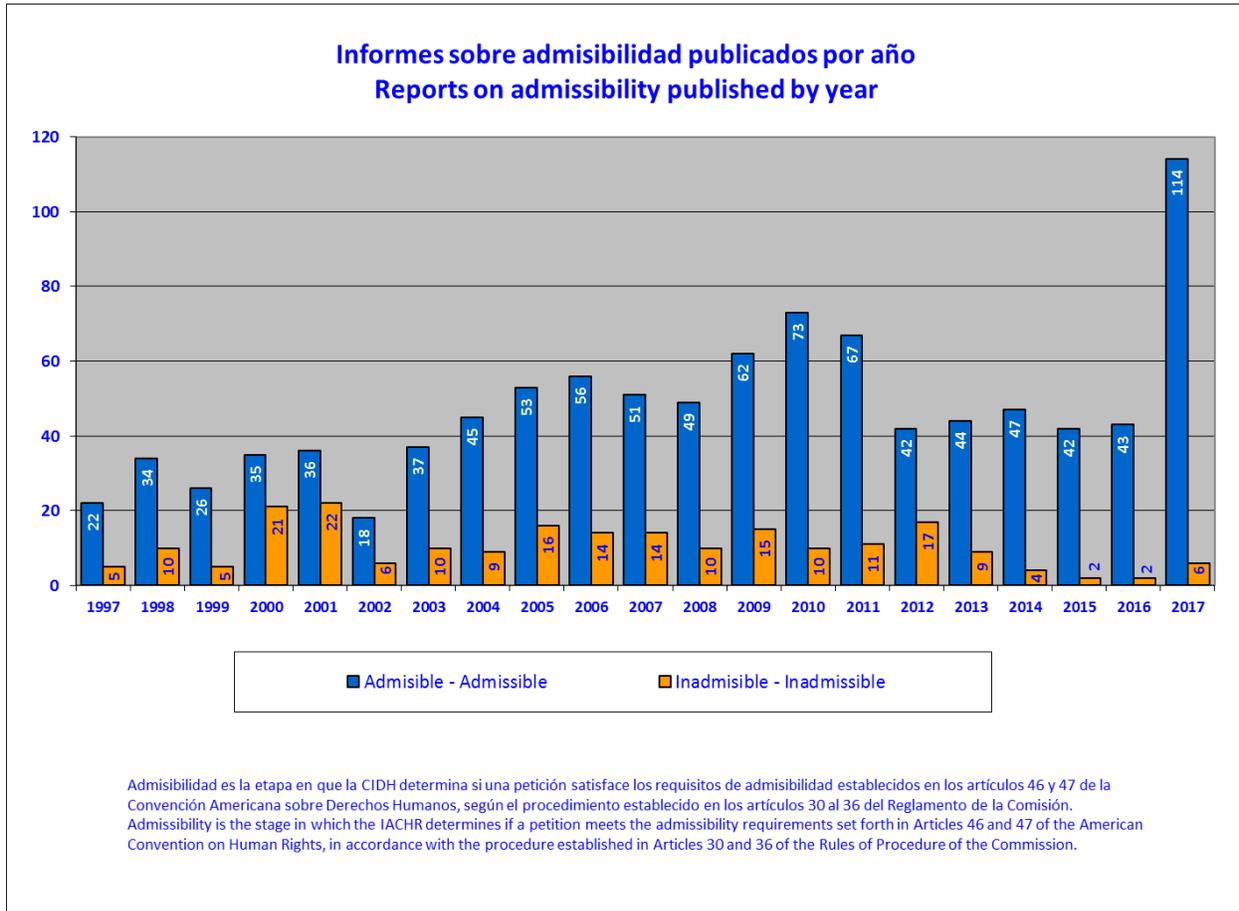
### 11. Portafolio en trámite (admisibilidad y fondo) al final de cada año



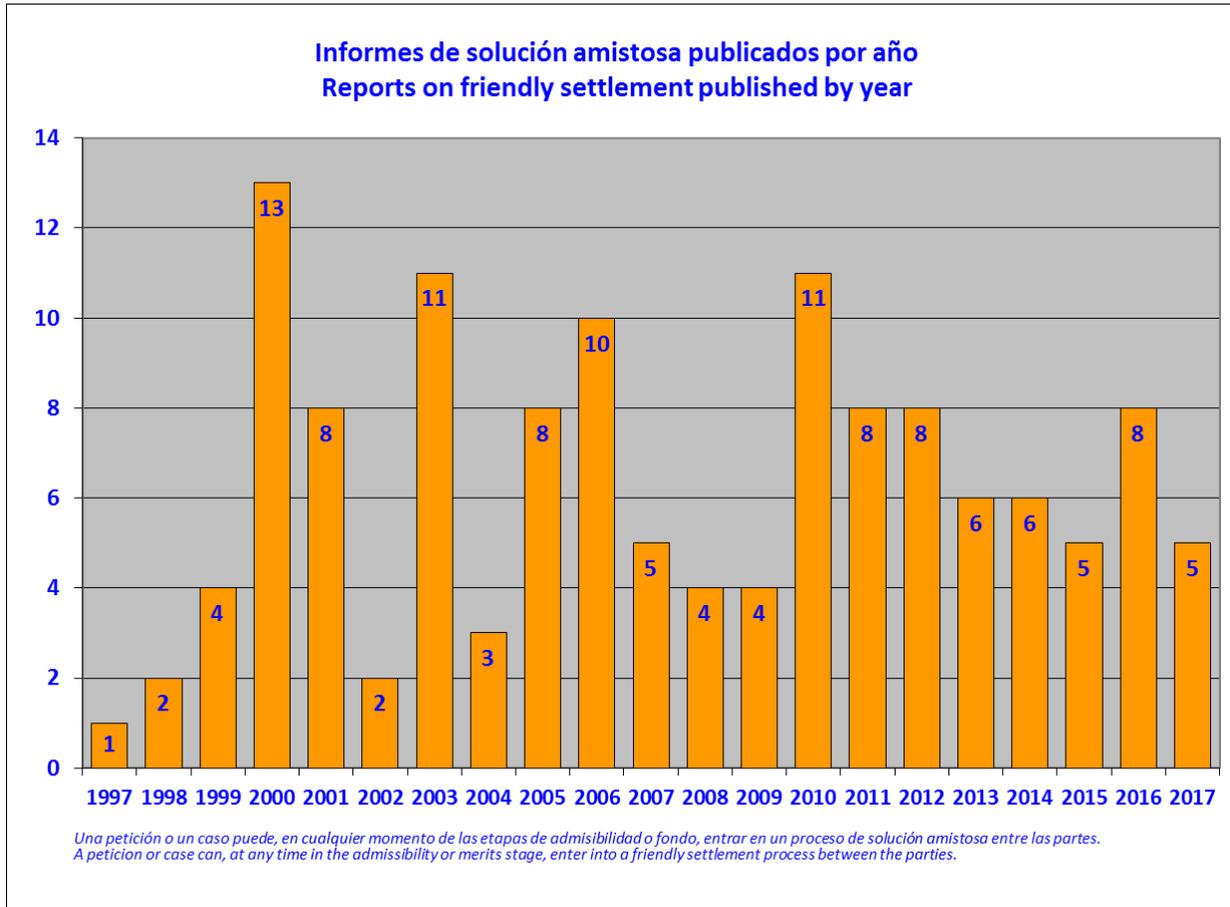
## 12. Peticiones y casos archivados por año



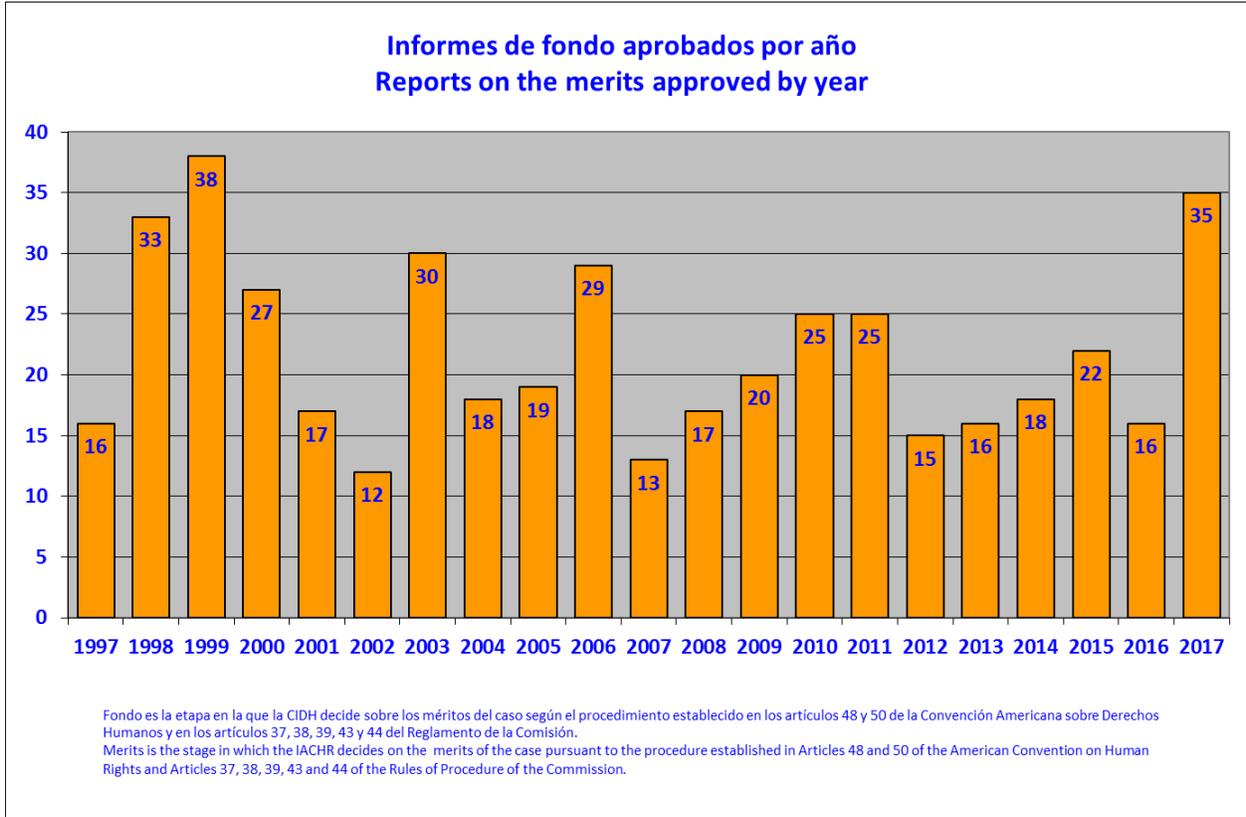
### 13. Informes sobre admisibilidad publicados por año



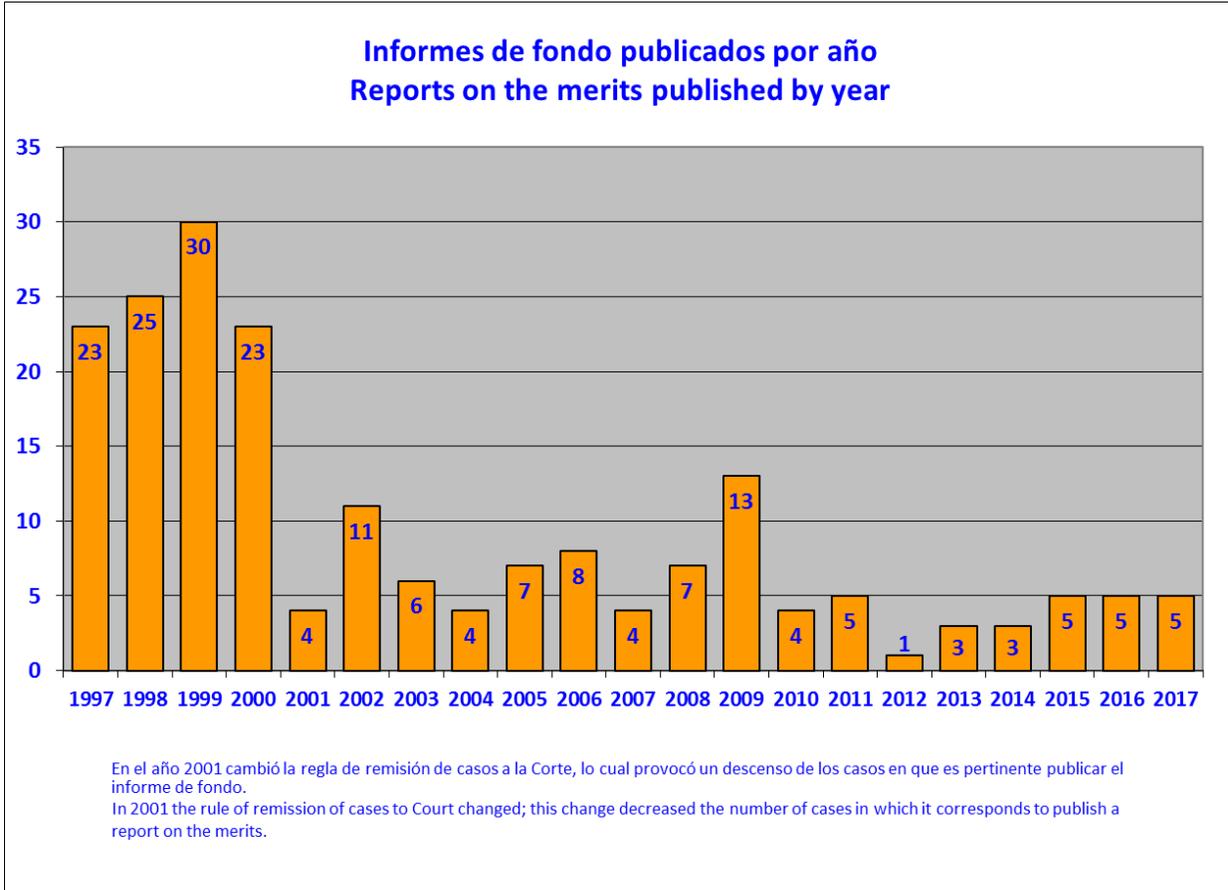
**14. Informes de solución amistosa publicados por año**



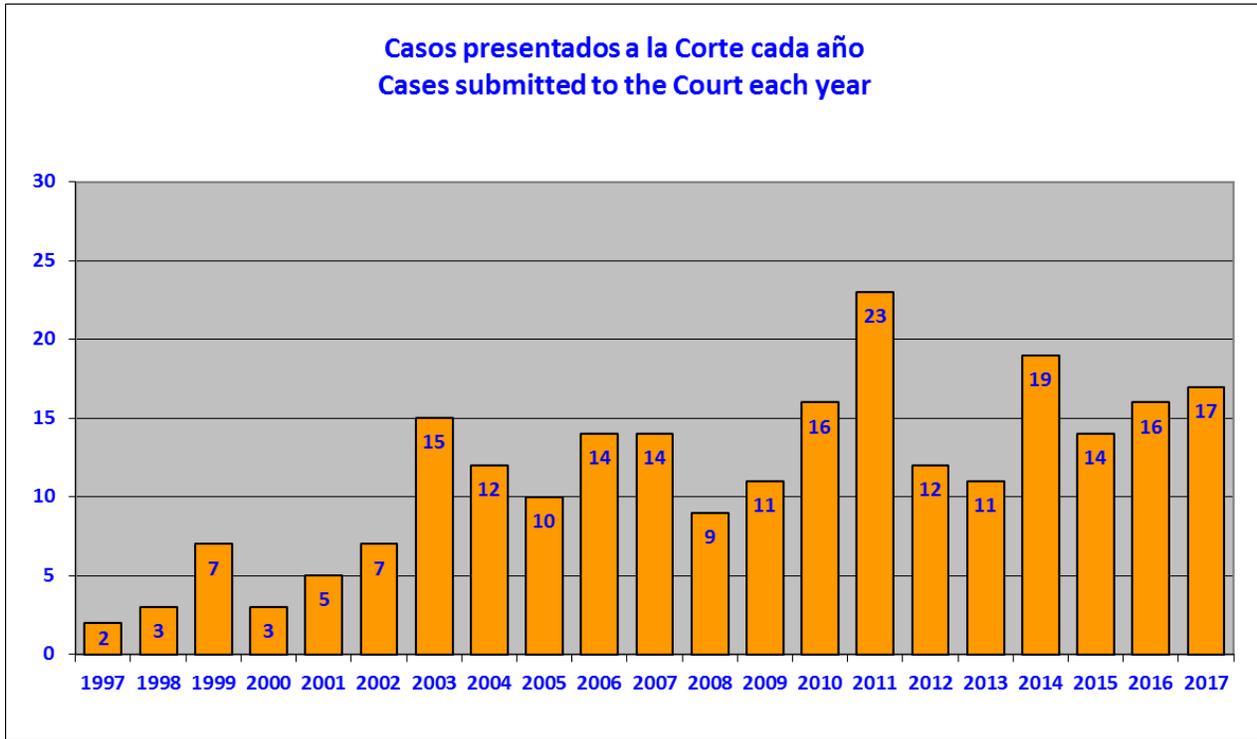
**15. Informes de fondo aprobados por año**



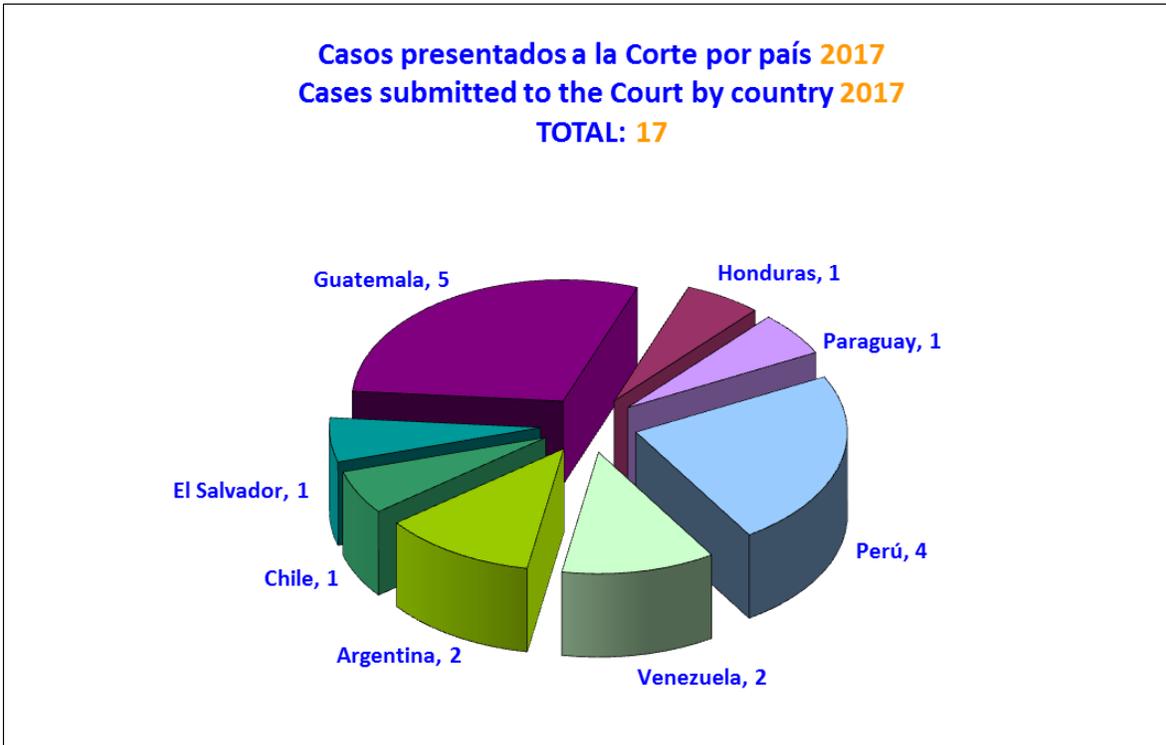
**16. Informes de fondo publicados por año**



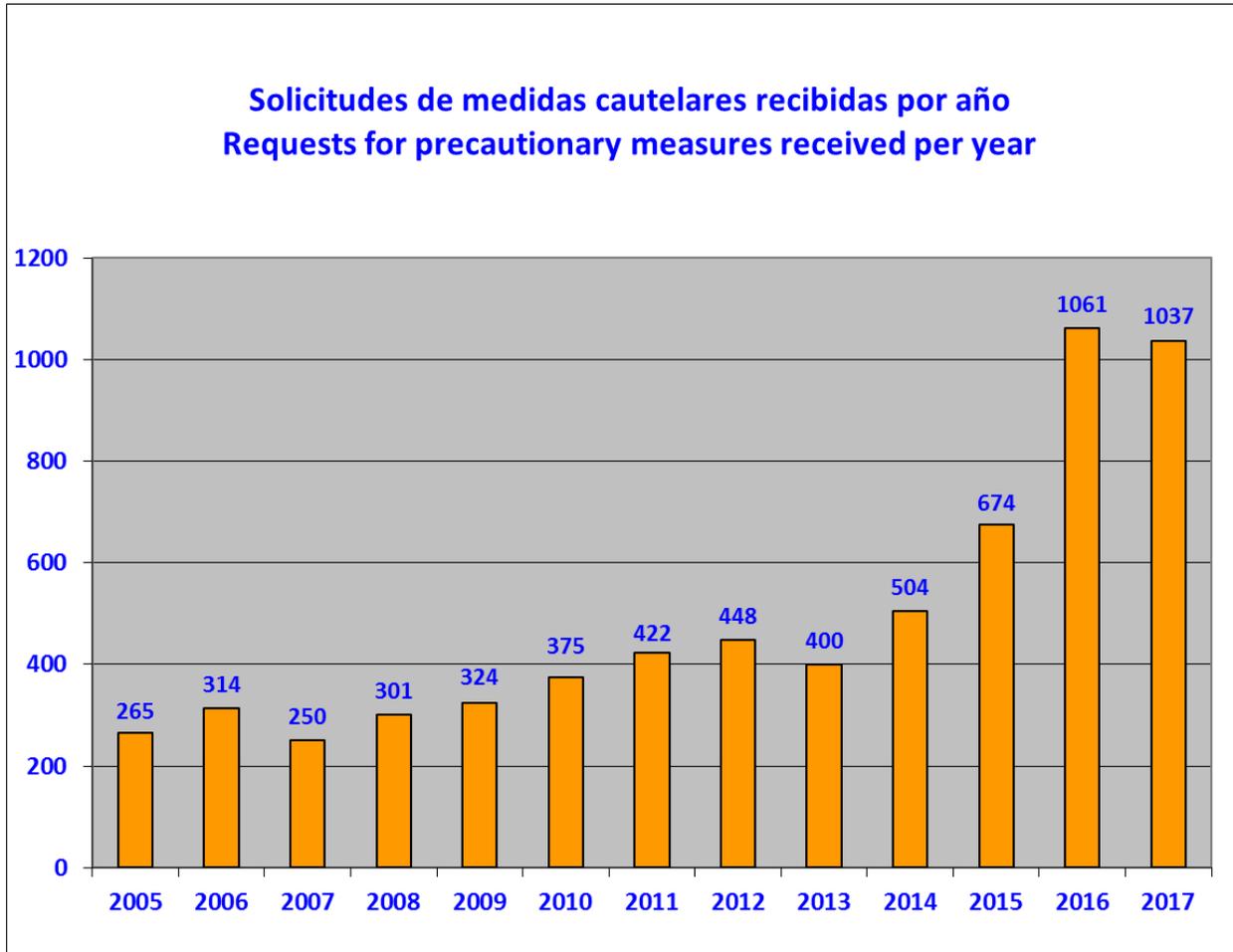
### 17. Casos presentados a la Corte IDH por año



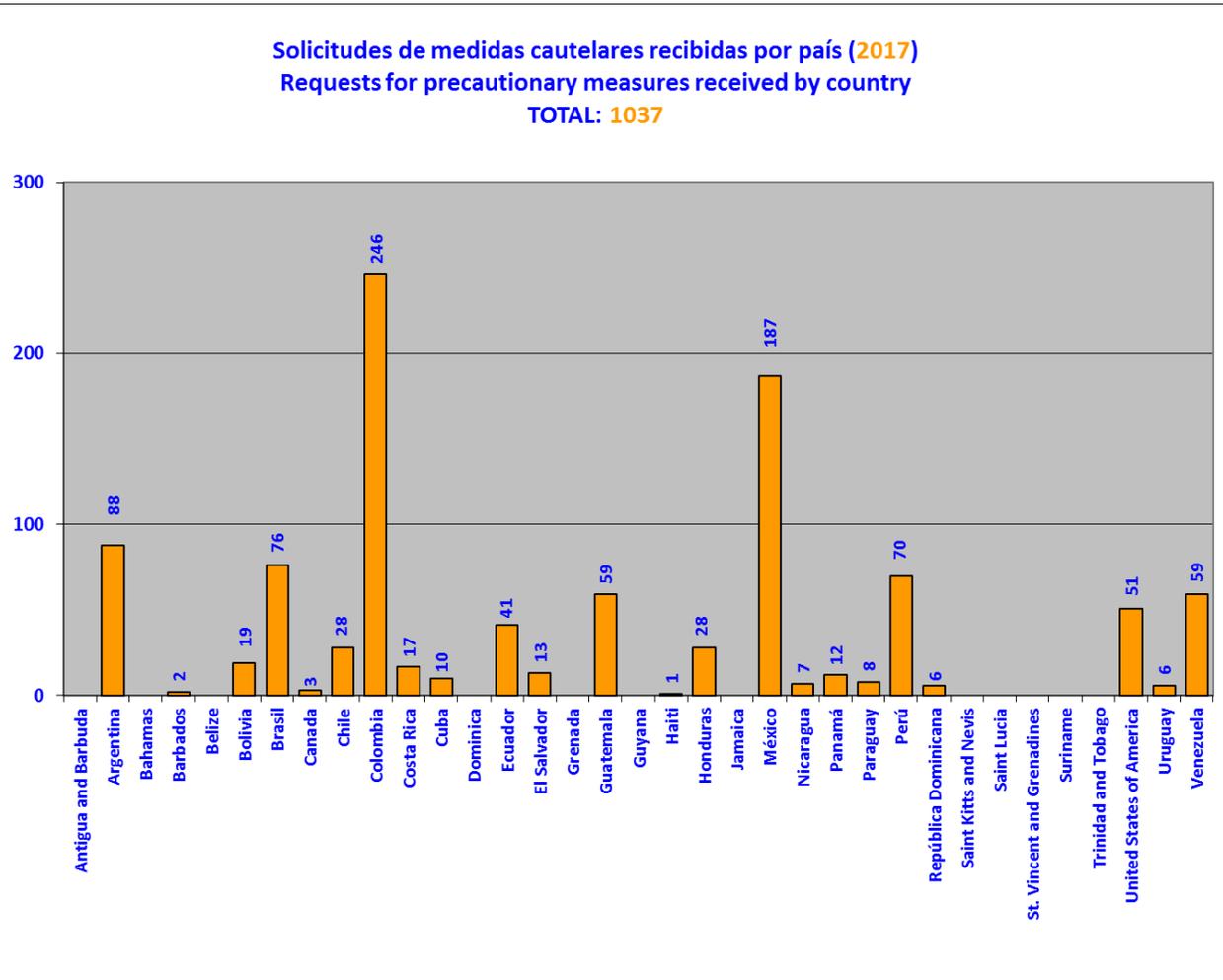
18. Casos presentados a la Corte IDH por país en 2017



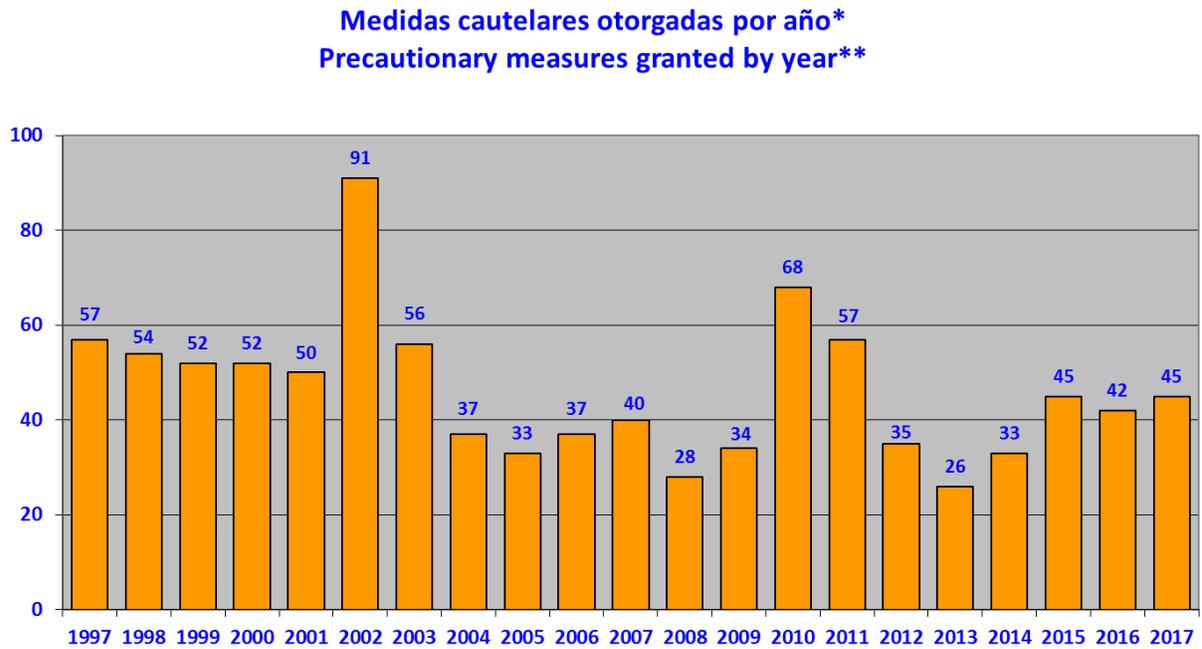
**19. Solicitudes de medidas cautelares recibidas por año**



20. Solicitudes de medidas cautelares recibidas por país



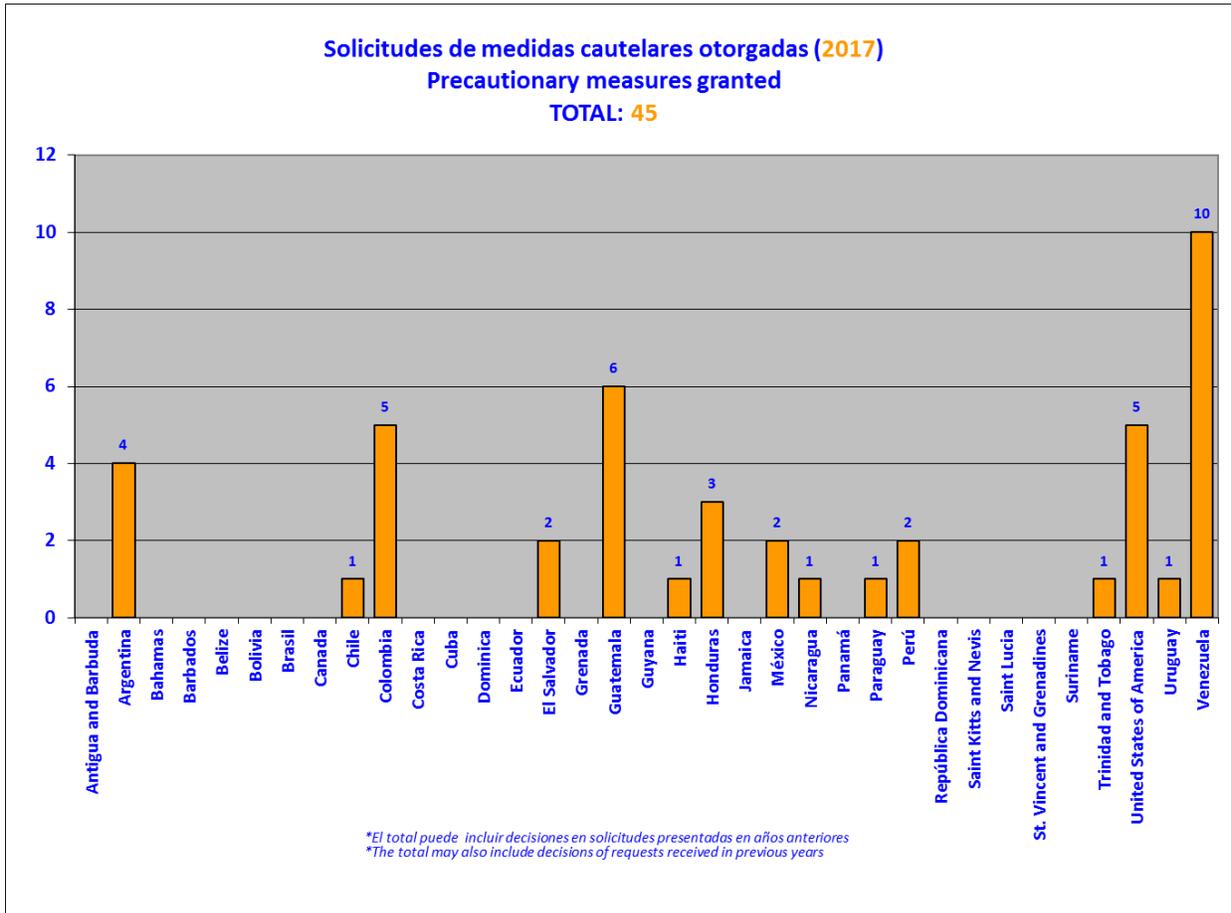
## 21. Medidas cautelares otorgadas por año



\*Las medidas cautelares otorgadas pueden incluir situaciones presentadas en años anteriores

\*\*Precautionary measures granted may include requests presented in previous years

## 22. Solicitudes de medidas cautelares otorgadas por país en 2017



**D. Decisiones de admisibilidad, inadmisibilidad, fondo, soluciones amistosas y archivos**

19. Esta sección contiene un total de 130 informes que incluyen 114 informes de admisibilidad; 6 informes de inadmisibilidad; 5 informes de solución amistosa; y 5 informes de fondo publicados. Asimismo, contiene una lista de 109 peticiones y casos archivados por la CIDH.

**1. Informes de admisibilidad**

1. Informe No. 6/17, Petición 187-07, Enrique Alberto Gamarro y familia (Argentina)
2. Informe No. 20/17, Petición 1500-08, Rodolfo David Piñeyro Ríos (Argentina)
3. Informe No. 81/17, Petición 980-07, Horacio Alejandro Martínez (Argentina)
4. Informe No. 82/17, Petición 1067-07, Rosa Ángela Martino, (Argentina)
5. Informe No. 83/17, Petición 151-08, José Francisco Cid (Argentina)
6. Informe No. 102/17, Petición 383- 08, Hebe Alicia López Osuna, (Argentina)
7. Informe No. 103/17, Petición 468- 07, Pablo Rafael Seydell (Argentina)
8. Informe No. 104/17, Petición 1281-07, Mirta Carmen Torres Nieto (Argentina)
9. Informe No. 138/17, Petición 642-08, Julio César Rotela y Alberto Enrique Baez (Argentina)
10. Informe No. 173/17, Petición 1111-08, – Marcela Brenda Iglesias (Argentina)
11. Informe No. 7/17, Petición 1049- 11, José Antonio Cantoral Benavides (Bolivia)
12. Informe No. 25/17, Petición 86-12, Brisa Liliana de Angulo Losada (Bolivia)
13. Informe No. 46/17, Petición 69-08, Javier Charque Choque y familia (Bolivia)
14. Informe No. 84/17, Petición 188-11, Marcos Luis Abarca Zamorano y otros, (Chile)
15. Informe No. 85/17, 1580-07, Gloria Lucía Magali Neira Rivas y Juan Pablo Belisario Poupin Neira Chile
16. Informe No. 105/17, Petición 798-07, David Valderrama Opazo y otros (Chile)
17. Informe No. 152/17, Peticiones 280-08, 860-08, 738-08 y 629-08, P-280-08: Hugo Tomás Martínez Guillén, Raquel Uberlinda Martínez Rodríguez (esposa) y Manuel Fernando Martínez Rodríguez (por determinar); P-860-08: Gabriel Augusto Marfull González y Pedro Marfull González (hermano); P-738-08: Egidio Enrique París Poa, Enrique Isaac París Horvitz (hijo) y Maria Eugenia Paríz Horvitz (hija); P-629-08: Ricardo Ruz Zañartu, Pedro Edgardo Ruz Castillo (hijo) y Sylvia María Castillo Araya (esposa) (Chile)
18. Informe No. 153/17, Petición 274-08, Jimmy Freddy Torres Villalva y familia (Chile)
19. Informe No. 8/17, Petición 323-08, Dora María Vélez Roger y familia (Colombia)
20. Informe No. 9/17, Petición 481-08, Rubén Darío Ocampo Henao y otros (Colombia)
21. Informe No. 10/17, Petición 864-08, Willan Fernández Becerra y familia (Colombia)
22. Informe No. 11/17, Petición 946-08, María Hilaria González Sierra y otros (Colombia)
23. Informe No. 12/17, Petición 972-08, Luis Fernando Cano Martínez y familia (Colombia)
24. Informe No. 13/17, Petición 1194-08, Javier Rodríguez Baena y familia (Colombia)
25. Informe No. 14/17, Petición 1197-08, José Rubián Gómez Martínez, Rolfe Arialdo Figueredo Martínez, Miguel Novoa Martínez, Alcira Martínez Álvarez y familias (Colombia)
26. Informe No. 26/17, Petición 1208-08, William Olaya Moreno y familia (Colombia)
27. Informe No. 27/17, Petición 1653-07, Desplazamiento forzado en Nueva Venecia, Caño el Clarín y Buena Vista (Colombia)
28. Informe No. 28/17, Petición 1710-07, Alexander Segundo Muentes García y otros (Colombia)

29. Informe No. 37/17, Petición P854-07, Ricardo Antonio Elías Puente y familia (Colombia)
30. Informe No. 38/17, Petición P1241-08, Omar Ernesto Vásquez Agudelo y familia (Colombia)
31. Informe No. 47/17, Petición 42-07, Jenner Alfonso Mora Moncaleano y otros (Colombia)
32. Informe No. 48/17, Petición 338-07, Luis Fernando Leyva Micolta (Colombia)
33. Informe No. 49/17, Petición 384-08, Trabajadores despedidos de ECOPETROL (Colombia)
34. Informe No. 50/17, Petición 464-10B, José Ruperto Agudelo Ciro y familia (Colombia)
35. Informe No. 51/17, Petición 766-07, Joaquín Guillermo Campillo Restrepo (Colombia)
36. Informe No. 52/17, Petición 816-08, Diana Milena Barona Sánchez y familia, (Colombia)
37. Informe No. 53/17, Petición 1285-04, Dora Inés Meneses Gómez y otros (Colombia)
38. Informe No. 54/17, Petición 1327-07, Luz Angélica Porras Camacho y otros (Colombia)
39. Informe No. 71/17, Petición 271-07, Jorge Luis de la Rosa Mejía y otros (Colombia)
40. Informe No. 93/17, Petición 48- 08, Ernesto Lizarralde Ardila y otros (Colombia)
41. Informe No. 106/17, Petición 272-07, Luis Horacio Patiño y familia (Colombia)
42. Informe No. 107/17, Petición 535-07, Vitelio Capera Cruz (Colombia)
43. Informe No. 108/17, Petición 562-08, Pedro Herber Rodríguez Cárdenas (Colombia)
44. Informe No. 109/17, Petición 795-08, Rosalía Benavides Franco y otros (Colombia)
45. Informe No. 110/17, Petición 802-07, Leonardo Vanegas y familia (Colombia)
46. Informe No. 111/17, Petición 883-07, Rosario Bedoya Becerra (Colombia)
47. Informe No. 112/17, Petición 1102-08, Juan Alfonso Lara Zambrano y otros (Colombia)
48. Informe No. 113/17, Petición 1141-07, Alfredo Manuel Martínez Meza y otros (Colombia)
49. Informe No. 114/17, Petición 1151-08, José Ismael Martínez Román y familia (Colombia)
50. Informe No. 115/17, Petición 1297-07, Álvaro Javier Cisneros Medina (Colombia)
51. Informe No. 116/17, Petición 1338-07, William Jimmy Lizarazo Ávila y otros (Colombia)
52. Informe No. 117/17, Petición 1460-07788-10, Alexander López Maya y otros SINTRAEMCALI (Colombia)
53. Informe No. 118/17, Petición 1484-07, Carmen Luz Cachimba Vallejos y otros (Colombia)
54. Informe No. 119/17, Petición 1618- 07, Duver Alberto y Fredy Alonso Orozco García (Colombia)
55. Informe No. 125/17, Petición 1477-08, Henry Torres y otros (Colombia)
56. Informe No. 139/17, Petición 331-07, Carlos Antonio Reyes y familia (Colombia)
57. Informe No. 140/17, Petición 677-08, Fabián Pérez Owen (Colombia)
58. Informe No. 141/17, Petición 1617-07, Geminiano Gil Martínez y familia (Colombia)
59. Informe No. 154/17, Petición 274-08, Jimmy Freddy Torres Villalva y familia (Colombia)
60. Informe No. 155/17, Petición 1470-08 Beatriz Elena Sanmiguel Bastidas y familia (Colombia)
61. Informe No. 15/17, Petición 358-07, Miguel Ángel Larios Ugalde (Costa Rica)
62. Informe No. 16/17, Petición 101-03, Eva Cristina Allan Ramos (Ecuador)
63. Informe No. 55/17, Petición 438-07, Víctor Noel Larrea Bourne (Ecuador)
64. Informe No. 56/17, Petición 955-07, Carlín Olivio Ajon Avilés (Ecuador)
65. Informe No. 86/17, Petición 292-07, Edinson Vinicio Benavidez Pazmiño y familia (Ecuador)
66. Informe No. 123/17, Petición 1344-07, Diputados destituidos del Congreso Ecuador
67. Informe No. 142/17, Petición 144-08, Esperanza Guadalupe Llori Abarca (Ecuador)

68. Informe No. 143/17, Petición 23507, Pedro Roura Ortega (Ecuador)
69. Informe No. 156/17, Petición 585-08, Carlos Alfonso Fonseca Murillo (Ecuador)
70. Informe No. 157/17, Petición 286-07, Carlos Andrade Almeida y otros (Ecuador)
71. Informe No. 29/17, Petición 424-12, Manuela y familia (El Salvador)
72. Informe No. 58/17, Petición 242-07, Adrián Meléndez Quijano (El Salvador)
73. Informe No. 59/17, Petición 4947-02, Rosa Elsa González de Moreno y otros (El Salvador)
74. Informe No. 88/17, Petición 1286-06, Familia Rivas (El Salvador)
75. Informe No. 120/17, Petición 2003-13, Beatriz (El Salvador)
76. Informe No. 17/17, Petición 1105-06, Pedro Roselló (Estados Unidos)
77. Informe No. 60/17, Petición 776-06, Four million American citizens residents in Puerto Rico (Estados Unidos)
78. Informe No. 30/17, Petición 1118-11, Comunidad Maya Q'eqchí' Agua Caliente (Guatemala)
79. Informe No. 61/17, Petición 282-05, Reina Isabel Herrarte Molina y otros (Guatemala)
80. Informe No. 62/17, Petición 731-11, Familia Orellana Vásquez (Guatemala)
81. Informe No. 63/17, Petición 1304-08, Hugo René Vásquez Hernández (Guatemala)
82. Informe No. 158/17, Petición 404-08, José Luis Villeda Recinos (Guatemala)
83. Informe No. 64/17, Petición 585-06, Juan Ramón Matta y familia (Honduras)
84. Informe No. 65/17, Petición 606-08, E.J.M. y familia (Honduras)
85. Informe No. 70/17, Petición 1346-07, Marcos Omar Madrid Reyes (Honduras)
86. Informe No. 89/17, Petición 788-08, Curtis Armstrong o/c Tyrone Traill (Jamaica)
87. Informe No. 18/17, Petición 267-07, Ana Luisa Ontiveros López (México)
88. Informe No. 68/17, Petición 474-07, Reyes Alpízar Ortiz y Daniel Rodríguez García (México)
89. Informe No. 69/17, Petición 570-08, Héctor Marcelino Flores Jiménez (México)
90. Informe No. 90/17, Petición 1066-07, Carlos Francisco Cervantes Rodríguez (México)
91. Informe No. 126/17, Petición P-861-03: Silvia Elena Rivera Morales y Ramona Morales Huerta; P-425-07: Brenda Berenice Delgado Rodríguez y Juana Rodríguez Bermúdez , P-443-07: Cecilia Covarrubias Aguilar y otros; P-444-07: Maria Sagrario González Flores y Paula Flores Bonilla; P-470-07: Olga Alicia Carrillo Pérez e Irma Pérez y P-928-07: Maria Elena Chávez Caldera y Julia Caldera (México)
92. Informe No. 128/17, Pilar Noriega García, Leonel Rivero Rodríguez y familia (México)
93. Informe No. 144/17, Petición 49-12, Ernestina Ascensio Rosario y otras (México)
94. Informe No. 145/17, Petición 72-11, "C" (México)
95. Informe No. 165/17, Petición 86-08, Dionicio Cervantes Nolasco y Armando Aguilar Reyes (México)
96. Informe No. 166/17, Petición 365-09, Fausto Soto Miller (México)
97. Informe No. 167/17, Petición 1119-10, Alberto Patishtán Gómez (México)
98. Informe No. 146/17, Petición 296-07, Orosmán Marcelino Cabrera Barnés (México)
99. Informe No. 174/17, Petición 831-11, Hester Suzanne Van Nierop y familia (México)
100. Informe No. 147/17, Petición 120-09, Arnaldo Javier Córdoba y D. (Paraguay)
101. Informe No. 159/17, Petición 712-08, Sebastián Larroza Velázquez y familia (Paraguay)
102. Informe No. 121/17, Petición 70-07, José Fernando Montoso Alvarado (Perú)
103. Informe No. 122/17, Petición 156-08, Williams Mariano Paría Tapia (Perú)
104. Informe No. 124/17, Petición 21-08, Fernanda Graciela López Medina y otros (Perú)
105. Informe No. 148/17, Petición 44-07, Julio Alcázar Dolmos (Perú)
106. Informe No. 149/17, Petición 559-08, Samuel Walter Romero Aparco (Perú)
107. Informe No. 160/17, Petición 531-07, Franklin Nima Curay (Perú)

108. Informe No. 161/17, Petición 29-07, Andy Williams Garcés Suárez (Perú)
109. Informe No. 162/17, Petición 627-08, María del Pilar Sulca Berrocal y familia (Perú)
110. Informe No. 163/17, Petición 1323-07, Yngrit Hermelinda Garro Vásquez (Perú)
111. Informe No. 168/17, Petición 1502-07, Miguel Ángel Morales Morales (Perú)
112. Informe No. 172/17, Petición 1718-11, Crissthian Manuel Olivera Fuentes (Perú)
113. Informe No. 57/17, Petición 406-04, Washington David Espino Muñoz (República Dominicana)
114. Informe No. 164/17, Petición 222-07, Santiago Adolfo Villegas Delgado (Venezuela)

## 2. Informes de inadmisibilidad

1. Informe No. 19/17, Petición 984-07, Carlos Jorge Chávez (Argentina)
2. Informe No. 91/17, Petición 1400-07, Adriana Sonia Peralta (Argentina)
3. Informe No. 150/17, Petición 123-08, Hernando de Jesús Ramírez Rodas (Colombia)
4. Informe No. 171/17, Petición 1454-07, María del Carmen Camargo Romero (Colombia)
5. Informe No. 127/17, Petición 527-07, Juan José Reséndiz Chávez (México)
6. Informe No. 151/17, Petición 1474-07, Felicidad Flores Solórzano (México)

## 3. Informes de soluciones amistosas

1. Informe No. 36/17, Caso 12.854, Ricardo Javier Kaplun (Argentina)
2. Informe No. 135/07, Caso 12.712, Rubén Darío Arroyave Gallego (Colombia)
3. Informe No. 136/17, Caso 12.714, Masacre de Belén Alta-Vista (Colombia)
4. Informe No. 92/17, Petición 12.627, María Nicolasa García Reynoso (México)
5. Informe No. 137/17, Caso 12.383, Néstor Albornoz Eyzaguirre (Perú)

## 4. Informes de fondo publicados

1. Informe No. 35/17, Caso 12.713, José Rusbel Lara y otros (Colombia)
2. Informe No. 45/17, Caso 10.455, Valentín Basto Calderón (Colombia)
3. Informe No. 101/17, Caso 10.414, Alcides Torres Arias, Angel David Quintero y otros (Colombia)
4. Informe No. 44/17, Caso 12.393, James Judge (Ecuador)
5. Informe No. 24/17, Caso 12.254, Víctor Saldaño (Estados Unidos)

## 5. Archivos

20. En conformidad con los artículos 41 y 42 del Reglamento de la CIDH y el artículo 48.1.b de la Convención Americana, la CIDH archivó las peticiones y los casos que se encuentran en la presente lista debido al desistimiento de la parte peticionaria o a su inactividad procesal de al menos cuatro años. Antes de archivar estos asuntos, la Comisión envió una advertencia de archivo a las direcciones de contacto de la parte peticionaria y confirmó que ésta no había enviado una respuesta a la advertencia, a pesar de haber contado con tiempo suficiente para ello.

ESTADO	CASO/PETICIÓN	NOMBRE
Argentina	11.672	Natalia Alonso
Argentina	12.951	Carlos Jorge Cacace
Argentina	13.010	Gabriel Alejandro Benítez
Argentina	P-67-00	Marta Susana Trabuchi
Argentina	P-4361-02	Juan Ramón Gorosito

Argentina	P-24-04	Mario Alberto de Candido
Argentina	P-52-04	Hugo Ramón Romberg
Argentina	P-812-04	Marcelo Antonio Lombardi
Argentina	P-1117-04	Leonardo Gilberto Caño
Argentina	P-1071-05	Ramón Osvaldo Britos
Argentina	P-42-06	Carlos Enrique Fader Mora
Argentina	P-179-06	Gabriel Aloy
Argentina	P-710-06	Juan Jose Ramos
Argentina	P-1001-06	Aldo Omar Mira y otros
Argentina	P-1099-06	Enrique Carlos Ricci
Argentina	P-1507-06	Alejandro José Mansilla
Argentina	P-581-07	Víctor Javier Salazar Ustare
Argentina	P-1039-07	Sebastián Ricardo Sandoval
Argentina	P-7-08	Juan Carlos Zuñiga
Argentina	P-1076-08	Sergio Gabriel Barbone
Argentina	P-293-09	Víctor Alonso Villegas Ramos
Bolivia	12.292	Alberto Enrique Mendez Prinque
Brasil	11.414	Ozeas Antonio Dos Santos
Brasil	12.654	Personas Privadas de Libertad en la Cárcel de Guarujá
Brasil	P-1268-09	Personas Privadas de Libertad en el Sistema Prisional del Estado de Mato Grosso do Sul
Canadá	P-15-02	Ghyslain Gaudet
Chile	12.373	Marcos Jaramillo Arriagada
Chile	12.410	Verónica Matus Madrid y otras
Chile	12.696	Miguel Ignacio Fredes González y Andrea Tuzek Fries
Chile	P-306-06	Aucan Huilcaman Paillana y otros
Colombia	12.677	Andrés Mestre Esquivel
Colombia	P-1239-05	Paulino Esmelín Betancourt Quiñones
Colombia	P-97-06	Eliecer Enrique Argote Rodríguez
Costa Rica	12.506	Jorge Luis Chaves Cambronero
Costa Rica	P-1429-05	Juan Villalobos Parajeles
Costa Rica	P-598-06	Bernabé Minas Alvarado
Costa Rica	P-981-06	Erick Chacón Valerio y personas ciegas costarricenses
Costa Rica	P-1611-07	Sigifredo Martínez Meléndez
Costa Rica	P-791-11	Leodan Atencio Atencio y otros
Ecuador	12.735 B	David Estuardo Delgado Galarza
Ecuador	P-78-06	Joselito Arce y Otros
Ecuador	P-419-06	Jhonny y Luis Valverde Monaga
Ecuador	P-135-07	A, B y Z
Ecuador	P-313-08	Mario Andrés García Condeza y otros
Ecuador	P-92-14	Diane Marie Rodríguez Zambrano
El Salvador	P-207-07	Oscar René Marroquín Contreras
Estados Unidos	12.706	Frank I. Enwonwu
Estados Unidos	P-990-06	Michael Mackson and others

Estados Unidos	P-18-09	Benamar Benatta
Guatemala	11.536	Comunidad de Rubelpec
Guatemala	12.481	Edgar Eduardo Pineda
Guatemala	12.648	Edgar Raúl Rivas Rodríguez
Guatemala	P-1414-06	Carlos René Barrientos Vásquez y otros
Haití	P-116-03	Pierre Etienne e Mercedieu Nazaire
Haití	P-1349-08	Marie Yvette Odena y otros
Haití	P-28-09	A.J., B.J., J.L. y otros
Honduras	P-891-07	Ramón Antonio Ortega Mejía
México	P-790-04	Antonio Palma López
México	P-997-05	Ricardo Bernal Ballesteros y otros
México	P-5-06	Fernando Chávez Vásquez
México	P-31-06	Pedro Vázquez Valdez
México	P-105-06	Giovanni Ramírez Camacho
México	P-561-06	Dora Toca Orona
Nicaragua	P-1090-06	Vidal Poveda Muller y otros
Nicaragua	P-189-07	María Julieta Choiseul Burgos
Paraguay	12.382 D	Martin Javier Torres Duran
Paraguay	P-465-06	Darío Ruben Colman Cardozo
Perú	11.316	Alberto Gálvez Olaechea
Perú	12.286	Fabián Esteban Salazar Olivares
Perú	12.445	Internos del Penal de Challapalca
Perú	12.471	Comunidad San Mateo de Huanchor
Perú	12.824	Marco Antonio Abarca Rupay
Perú	P-644-98	Pascual Pablo Llancari Illanez
Perú	P-854-98	Antonio Tinco Arimana
Perú	P-1073-98	Juan Francisco Guarniz Albildo
Perú	P-277-99	Bernardo Rivera Pariona y Otros
Perú	P-624-01	Leandro Mamani y otros
Perú	P-490-02	Germán Huamaní Juárez y Vidal Flores Carrasco
Perú	P-638-03	Rosa Elvira Cáceres Salazar y Otros
Perú	P-3-04	Carlos Mariano Maldonado Duarte
Perú	P-562-04	Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga
Perú	P-991-04	Laura Cecilia Bozzo Rotondo
Perú	P-4-05	Santos Agustín Cruz Dioses
Perú	P-18-05	Segundo Nicolás Trujillo López
Perú	P-607-05	Sergio Hermógenes Sánchez Urrello y Milton Rosas Vargas Agipe
Perú	P-1410-05	Delinda Tapia Huacasi
Perú	P-17-06	Ana María Valcárcel Saldaña de Centurión
Perú	P-240-06	Sara Rosana Vallejo Vásquez y otros
Perú	P-807-06	Felix Bautista Barzola
Perú	P-831-06	Luis Tello Vela
Perú	P-1009-06	Ricardo Gil Sancho
Perú	P-1100-06	Juan de Dios Lara Contreras

Perú	P-1161-06	Máximo Torres Mercado
Perú	P-1185-06	Edgar Oswaldo Cuneo Ortiz
Perú	P-399-07	Edinson Trujillo del Castillo
Perú	P-1609-07	Antauro Igor Humala Tasso
Perú	P-641-09	Sixto Tamo Tamo
República Dominicana	P-873-05	Justo Vicente Cabrera Martínez
República Dominicana	P-991-06	César Domingo Sánchez Torres
Trinidad y Tobago	10.462	Peters Collin
Trinidad y Tobago	11.813	Thomas Ángel
Trinidad y Tobago	P-785-01	Kumar Sahadeo
Uruguay	12.962	Duvi Alfredo Teixidor Vinjoy
Venezuela	11.882	Antonio José Varela
Venezuela	P-173-04	Accionistas, Directores y Periodistas de Globovisión
Venezuela	P-542-05	Danny Ramírez
Venezuela	P-1072-06	Félix Ramón Camacho
Venezuela	P-573-07	Diamarys Maryoaly Agrinzones Gamarra y familia
Venezuela	P-1511-07	Alirio Alejandro Camacho Navarro y María Celina Márquez

## E. Medidas Cautelares

21. El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Según lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente. Estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a personas o grupos de personas. A este respecto, es importante mencionar que el número de medidas cautelares otorgadas no refleja el número de personas protegidas mediante su adopción. Asimismo, el Reglamento indica que el otorgamiento de esas medidas y su adopción por el Estado no constituirán prejuzgamiento sobre la violación de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.

22. A continuación se hace referencia a las resoluciones sobre medidas cautelares adoptadas durante el 2017, así como a las reuniones y visitas de trabajo celebradas.

### 1. Resoluciones adoptadas

23. Durante el presente año, la Comisión adoptó resoluciones de otorgamiento (45), ampliación (5) y levantamiento (3) de medidas cautelares de conformidad con el artículo 25 del reglamento de la CIDH. Es de notar que a partir de la reforma reglamentaria aprobada por la Comisión Interamericana mediante la Resolución 1/2013 a partir del 1º de agosto de 2013, fecha de entrada en vigor del nuevo reglamento, los resúmenes de medidas cautelares contienen un enlace a sus resoluciones. Estas resoluciones detallan los parámetros utilizados por la CIDH en la determinación de los requisitos de urgencia, gravedad e irreparabilidad para cada situación en particular. Las medidas cautelares otorgadas en el 2017 pueden incluir situaciones presentadas en años anteriores.

<b>Argentina</b>				
<b>No. De MC</b>	<b>Nombre de beneficiarios (as)</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Decisión</b>
<u>MC 17/17</u>	Niño Juan	Argentina	7 de abril de 2017	Otorgamiento
<u>MC 298/14</u>	Juan José Barrientos Soto	Argentina	6 de julio de 2017	Levantamiento
<u>MC 25/16</u>	Milagro Sala	Argentina	27 de julio de 2017	Otorgamiento
<u>MC 356/16</u>	Niño A.R.	Argentina	27 de julio de 2017	Otorgamiento
<u>MC 564/17</u>	Santiago Maldonado	Argentina	22 de agosto de 2017	Otorgamiento
<b>Chile</b>				
<u>MC 1098/17</u>	Juan José Barrientos Soto Vargas	Chile	27 de octubre de 2017	Otorgamiento
<b>Colombia</b>				
<u>MC 51/15</u>	Niñas, niños y adolescentes de las comunidades Uribía, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, departamento de la Guajira.	Colombia	26 de enero de 2017	Ampliación
<u>MC 522/14</u>	Alberto Yepes Palacio y su hija	Colombia	10 de febrero de 2017	Otorgamiento
<u>MC 815/16</u>	Niña S.L. y otros.	Colombia	16 de junio de 2017	Otorgamiento
<u>MC 21/05</u>	Pueblo Indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta	Colombia	13 de junio de 2017	Ampliación
<u>MC 445/14</u>	Jessica Liliana Ramírez Gaviria	Colombia	4 de agosto de 2017	Levantamiento
<u>MC 178/17</u>	Niñas, niños y adolescentes de las comunidades Uribía, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, departamento de la Guajira.	Colombia	14 de agosto de 2017	Otorgamiento
<u>MC 261-16</u>	Daniel Ernesto Prado Albarracin	Colombia	21 de noviembre de 2017	Otorgamiento
<u>MC-51/15</u>	Personas Mayores de las comunidades Uribía, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, departamento de la Guajira.	Colombia	1 de diciembre de 2017	Ampliación
<u>MC-876/17</u>	X, Y y familia	Colombia	25 de diciembre de 2017	Otorgamiento
<b>El Salvador</b>				
<u>MC 678/17</u>	Las y los periodistas de la "Revista Factum"	El Salvador	27 de octubre de 2017	Otorgamiento
MC-731-17	R. A. G. P y familiares	El Salvador	10 de noviembre de 2017	Otorgamiento

<b>Estados Unidos</b>				
<u>MC 156/17</u>	William Charles Morva	Estados Unidos	16 de marzo de 2017	Otorgamiento
MC 241/17	Víctor Hugo Saldaño	Estados Unidos	26 de mayo de 2017	Otorgamiento
MC 250/17	Lezmond Mitchell	Estados Unidos	2 de julio de 2017	Otorgamiento
MC 184/17	Mohammad Rahim	Estados Unidos	25 de julio de 2017	Otorgamiento
<u>MC 736/17</u>	Rubén Ramírez Cárdenas	Estados Unidos	18 de octubre de 2017	Otorgamiento
<b>Guatemala</b>				
<u>MC 958/16</u>	“Hogar Seguro Virgen de la Asunción”	Guatemala	12 de marzo de 2017	Otorgamiento
<u>MC 161/17</u>	Centros Juveniles de Privación de Libertad	Guatemala	12 de junio de 2017	Otorgamiento
<u>MC 431/17</u>	Gloria Patricia Porras Escobar y familia	Guatemala	29 de agosto de 2017	Otorgamiento
<u>MC 412/17</u>	Pobladores desalojados y desplazados de la Comunidad Laguna Larga	Guatemala	8 de septiembre de 2017	Otorgamiento
MC 674/17	Augusto Jordán Rodas Andrade y otros	Guatemala	27 de octubre de 2017	Otorgamiento
MC 782-17	Paulina Mateo Chic	Guatemala	1 de diciembre de 2017	Otorgamiento
<b>Haití</b>				
<u>MC 125/17</u>	Penitenciaría Civil de Puerto Príncipe	Haití	26 de mayo de 2017	Otorgamiento
<b>Honduras</b>				
<u>MC 507/16</u>	Víctor Vázquez	Honduras	6 de febrero de 2017	Otorgamiento
<u>MC 688/16</u>	Erick Pérez y otros	Honduras	20 de febrero de 2017	Otorgamiento
MC 448/17	Señora Z y familia	Honduras	22 de septiembre de 2017	Otorgamiento
<b>México</b>				
<u>MC 209/17</u>	Francisco Javier Barraza Gómez	México	15 de agosto de 2017	Otorgamiento
<u>MC 519-17</u>	Eduardo Valencia Castellanos	México	27 de noviembre de 2017	Otorgamiento
<b>Nicaragua</b>				
<u>MC 505/15</u>	Lottie Cunningham	Nicaragua	11 de junio de 2017	Ampliación
<u>MC 331/17</u>	Francisca Ramírez y familiares	Nicaragua	22 de agosto de 2017	Otorgamiento
<b>Paraguay</b>				
<u>MC 68/17</u>	Adolescente Panambí	Paraguay	2 de marzo de 2017	Otorgamiento

<b>Panamá</b>				
<u>MC 393/15</u>	Detenidos en "Punta Coco"	Panamá	22 de marzo de 2017	Ampliación
<b>Perú</b>				
<u>MC 113/16</u>	Comunidad Nativa "Tres Islas" de Madre de Dios	Perú	8 de septiembre de 2017	Otorgamiento
<u>MC 530/14</u>	Gregorio Santos Guerrero	Perú	8 de septiembre de 2017	Levantamiento
<u>MC 120/16</u>	Pobladores de la Comunidad de Cuninico y otra	Perú	2 de diciembre de 2017	Otorgamiento
<b>Trinidad y Tobago</b>				
<u>MC 440/16</u>	Zaheer Seepersad	Trinidad and Tobago	4 de agosto de 2017	Otorgamiento
<b>Uruguay</b>				
<u>MC 402/17</u>	Jair Krischke	Uruguay	21 de junio de 2017	Otorgamiento
<b>Venezuela</b>				
<u>MC 475/15</u>	Miembros del partido Voluntad Popular	Venezuela	14 de enero de 2017	Otorgamiento
<u>MC 994/16</u>	Lorenzo Mendoza y su familia	Venezuela	20 de enero de 2017	Otorgamiento
<u>MC 616/16</u>	Luis Florido	Venezuela	7 de abril de 2017	Otorgamiento
<u>MC 248/17</u>	Henrique Capriles Radonski	Venezuela	1 de junio de 2017	Otorgamiento
<u>MC 403/17</u>	Julio Borges y otros	Venezuela	28 de julio de 2017	Otorgamiento
<u>MC 449/17</u>	Luisa Ortega Díaz y familia	Venezuela	3 de agosto de 2017	Otorgamiento
<u>MC 533/17</u>	Williams Dávila	Venezuela	6 de septiembre de 2017	Otorgamiento
<u>MC 309/17</u>	Johonnys Armando Hernández	Venezuela	8 de septiembre de 2017	Otorgamiento
<u>MC 600/15</u>	Ángel Omar Vivas Perdomo	Venezuela	27 de octubre de 2017	Otorgamiento
<u>MC 383/17</u>	Santiago José Guevara	Venezuela	1 de diciembre de 2017	Otorgamiento

24. A continuación se hace referencia a los resúmenes de las resoluciones adoptadas durante 2017, desglosadas por país:

## **ARGENTINA**

### **17/17 - Juan, Argentina**

25. El 7 de abril de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Juan, en Argentina. La CIDH mantiene en reserva la identidad del beneficiario debido a que se trata de un adolescente, y se le identificará como Juan. La solicitud de medidas cautelares alega que Juan, de 15 años de edad, se encontraría en una situación de riesgo en vista que desde el 15 de noviembre de 2016 se desconoce su paradero, tras haber sido detenido en varias oportunidades por la policía durante abril de 2016. La solicitud indica que el domicilio donde residía Juan y donde continúan residiendo sus familiares ha sido tiroteada, presuntamente como resultado de las denuncias interpuestas por sus familiares en relación con su desaparición. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Argentina que adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de Juan, con el propósito de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los miembros de su núcleo familiar; que concierte las medidas a adoptarse con

los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

#### **298/14 - Juan José Barrientos Soto Vargas, Argentina - (Levantamiento)**

26. El 6 de julio de 2017, la CIDH decidió levantar la medida cautelar otorgada el 13 de abril de 2016 a favor de Juan José Barrientos Soto Vargas, en Argentina. La Comisión solicitó a Argentina en la resolución 23/2016 que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Juan José Barrientos Soto Vargas, quien se habría enfrentado a una serie de actos de violencia y precarias condiciones de detención en el lugar donde se encontraba privado de libertad. La Comisión solicitó además que las autoridades competentes se pronunciaran sobre una solicitud presentada con el fin de trasladar al beneficiario a la República de Chile. En vista de que el Estado de Argentina ha resuelto favorablemente esta solicitud, y que el beneficiario ya no se encuentra bajo jurisdicción de las autoridades argentinas, la Comisión decidió levantar la presente medida cautelar.

#### **25/16 - Milagro Sala, Argentina**

27. El 27 de julio de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Milagro Sala, quien se encuentra privada de la libertad en la Unidad 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocida como “Penal del Alto Comedero”, en Argentina. La solicitud de medidas cautelares alega que existe una serie de particularidades que rodean la privación de la beneficiaria, así como múltiples factores de riesgo que incluyen presuntos hostigamientos, una amenaza de muerte y agresiones en su contra. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, así como las constataciones realizadas en su visita el 16 de junio de 2017, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que la beneficiaria se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Argentina que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Milagro Sala; concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y, tomando en cuenta la excepcionalidad de la prisión preventiva y el agravamiento de la situación riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las particularidades que tiene la continuidad de la privación de libertad de la beneficiaria, las autoridades competentes adopten, a la luz de los estándares descritos, medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la beneficiaria pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica.

#### **356/16 - Niño A.R, Argentina**

28. El 27 de julio de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor del niño A.R, en Argentina. La CIDH mantendrá en reserva la identidad del niño. La solicitud de medidas cautelares alega que A.R. se encuentra en una situación de riesgo ante la inminencia en la ejecución de una posible orden de restitución internacional, en el marco de un procedimiento sobre restitución internacional de niños, en circunstancias que podrían afectar de manera irreparable a sus derechos. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Argentina Que suspenda la ejecución de la orden de restitución hasta que exista una determinación de los derechos del niño A.R. conforme a las circunstancias actuales, atendiendo al interés superior; que adopte medidas para garantizar su integridad personal teniendo en cuenta su interés superior, proporcionándole los servicios y acompañamiento especializados para garantizar su recuperación y bienestar integral con respecto a la afectación generada por la situación materia de riesgo materia de las presentes medidas cautelares.

#### **564/17 - Santiago Maldonado, Argentina**

29. El 22 de agosto de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Santiago Maldonado, en Argentina. La solicitud de medidas cautelares alega que el beneficiario fue visto por última vez el 1 de agosto de 2017, cuando era cargado a una camioneta blanca de la Gendarmería

Nacional en el marco de un operativo policial en los predios ocupados por la comunidad mapuche “Vuelta del Río Pu-Lof”. Los solicitantes sostuvieron que el beneficiario presuntamente fue objeto de una desaparición forzada. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Argentina que adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.

## CHILE

### **1098-17- Juan José Barrientos Soto Vargas, Chile**

30. El 27 de octubre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Juan José Barrientos Soto Vargas, en Chile. La solicitud de medida cautelares alega, entre otros aspectos, que el beneficiario, quien se encuentra privado de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II en Santiago, fue objeto de una agresión por parte de otro interno con un objeto corto punzante que le ocasionó lesiones hepáticas, pancreáticos y gástricos, por lo que tuvo que ser hospitalizado, siendo posteriormente regresado al centro de detención, donde continuaría requiriendo tratamientos médicos. La solicitud indica que además de que existirían deficientes condiciones de detención, a la fecha, no se habría identificado a las personas que habrían atentado en su contra, encontrándose en una situación de riesgo. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que Juan José Barrientos Soto Vargas encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Chile que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del beneficiarios; que tome las medidas necesarias para garantizar que las condiciones de detención sean adecuadas conforme a los estándares internacionales aplicables; y que concierte las medidas a adoptar con el beneficiario y sus representantes.

## COLOMBIA

### **51/15 – Niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, departamento de la Guajira, Colombia (Ampliación)**

31. El 26 de enero de 2017, la CIDH decidió ampliar las medidas cautelares a favor de las mujeres gestantes y lactantes de la Comunidad Indígena Wayúu en los municipios de Manaure, Riohacha y Uribía, en Colombia. La solicitud alega que las mujeres Wayúu gestantes y lactantes se encontrarían en una situación de riesgo, debido a la falta de acceso a atención médica y altos niveles de desnutrición, en el marco de una serie de condiciones relacionadas con la falta de alimento y agua en la zona. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión decidió ampliar esta medida cautelar y en consecuencia solicitó a Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las beneficiarias, en particular asegurando la disponibilidad, accesibilidad y calidad de servicios de salud con un enfoque integral y culturalmente adecuado, acceso a agua potable y salubre y alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer con pertinencia cultural sus necesidades alimenticias.

### **522/14 - Alberto Yepes Palacio y su hija, Colombia**

32. El 10 de febrero de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Alberto Yepes Palacio y su hija, en Colombia. La solicitud de medidas cautelares alega que Alberto Yepes Palacio y su hija son objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia por parte del grupo armado ilegal “Águilas Negras” y de agentes de las Fuerzas Armadas, presuntamente debido a su participación en la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales y la publicación de un informe en donde se implicaba al Comandante del Ejército Nacional. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Alberto Yepes Palacio y su hija; que adopte las medidas necesarias para que Alberto Yepes Palacio pueda

desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos, sin ser objeto de violencia y hostigamientos; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

#### **815/16 - Niña S.L. y otros, Colombia**

33. El 6 de junio de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de niños y niñas que padecen de enfermedades onco-hematológicas en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar, y zonas aledañas, en Colombia. La solicitud de medidas cautelares alega que las niñas y los niños se encuentran en una situación de grave riesgo debido a la falta de implementación de un tratamiento médico adecuado por parte de las autoridades competentes a pesar de la seriedad de sus patologías y la existencia en varios casos de resoluciones judiciales a su favor. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que las y los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Colombia que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los niños y niñas identificados, tomando en consideración las particularidades de las enfermedades que padecen, a fin de garantizar que tengan acceso a un tratamiento médico integral y adecuado; y que concierte las medidas a adoptarse con las y los beneficiarios.

#### **21/05 - Pueblo Indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia (Ampliación)**

34. El 14 de junio de 2017, la CIDH decidió ampliar las medidas cautelares a favor del pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta en relación con la situación del señor Manuel Enrique Vega Sarmiento, en Colombia. La solicitud alega que el beneficiario se encontraría en una situación de riesgo en vista que desde el 25 de diciembre de 2016 se desconoce su paradero. En particular, según la información recibida, la última ocasión cuando el señor Vega Sarmiento fue visto ocurrió mientras se dirigía al corregimiento el Totumo; no obstante, los habitantes del corregimiento el Totumo señalan no haberlo visto llegar allí. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión decidió ampliar esta medida cautelar y en consecuencia solicitó a Colombia que adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de Manuel Enrique Vega Sarmiento, con el propósito de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; que concierte las medidas a adoptarse con sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

#### **445/14 - Jessica Liliana Ramírez Gaviria, Colombia - (Levantamiento)**

35. El 4 de agosto de 2017, la CIDH decidió levantar la medida cautelar otorgada el 4 de noviembre de 2015 a favor de Jessica Liliana Ramírez Gaviria, en Colombia. La Comisión solicitó a Colombia en la resolución 42/2015 que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Jessica Liliana Ramírez Gaviria, tomando en consideración las particularidades de la enfermedad que enfrenta, a fin de garantizar que tuviera acceso a un tratamiento médico adecuado. Como consecuencia de su fallecimiento, la Comisión decidió que las medidas habían quedado sin materia, por lo que decidió levantar la presente medida cautelar.

#### **178/17 - Julio César Vélez Restrepo y otros, Colombia**

36. El 14 de agosto de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Julio César Vélez Restrepo, Luis Adrián Vélez Restrepo, y los adolescentes B.V.R y L.S.N, en Colombia. La solicitud de medidas cautelares alega que los beneficiarios -miembros de la comunidad indígena Embera Chamí - fueron vistos por última vez el 8 de marzo de 2017, cuando salieron a pescar en la comunidad de La Esperanza, municipio de Alcalá, Valle del Cauca. Los solicitantes sostuvieron que los beneficiarios fueron desaparecidos por grupos armados al margen de la ley, teniendo en cuenta la información de contexto sobre

el accionar de dichos grupos en la zona, y manifestaron no tener noticias acerca de su paradero o destino desde aquel entonces, a pesar de las denuncias interpuestas. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Colombia que adopte las medidas necesarias para determinar el paradero y destino de los señores Julio César Vélez Restrepo y Luis Adrián Vélez Restrepo, así como de los adolescentes B.V.R. y L.S.N., con el fin de proteger sus vidas e integridad personal; concierte las medidas a adoptarse con sus familiares respectivos y representantes; e informe sobre las acciones implementadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.

#### **261-16- Daniel Ernesto Prado Albarracín, Colombia**

37. El 20 de noviembre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Daniel Ernesto Prado Albarracín, en Colombia. La solicitud de medida cautelares alega que el beneficiario se encontraría en una situación de riesgo dadas las actividades de defensa de derechos humanos que realiza; y, en particular, por su participación en el proceso penal del caso denominado “Los 12 Apóstoles”, en el que se investigarían presuntos crímenes a manos de un grupo paramilitar. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Colombia que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Daniel Ernesto Prado Albarracín; que adopte las medidas necesarias para que pueda desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el ejercicio de sus funciones; y que concierte las medidas a adoptar con el beneficiario y sus representantes.

#### **51/15 -Personas mayores pertenecientes de las comunidades de Uribí, Manaure y Riohacha del pueblo Wayúu, Colombia (Ampliación)**

38. El 1 de diciembre de 2017, la CIDH decidió ampliar las medidas cautelares a favor de aproximadamente tres mil personas mayores del pueblo indígena Wayúu por la situación de riesgo que enfrentarían en los municipios de Manaure, Riohacha y Uribí del departamento de La Guajira, en Colombia. En la solicitud se alegó que los beneficiarios se encontrarían en una situación de riesgo debido a la falta de acceso a atención médica en la zona y altos niveles de desnutrición, en el marco de una serie de condiciones relacionadas con la falta de alimento y agua en sus comunidades. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH consideró que la información presentada demuestra, en principio, que las personas beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión decidió ampliar esta medida cautelar y en consecuencia solicitó a Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas mayores pertenecientes al pueblo indígena Wayúu en los municipios de Manaure, Riohacha y Uribí del departamento de la Guajira; en particular, asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud para las personas mayores Wayúu; tomar medidas inmediatas para que las personas mayores puedan tener, a la brevedad posible, acceso a agua potable y salubre; tomar medidas inmediatas para que puedan tener alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias con pertinencia cultural; y que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.

#### **MC 876/17 - X, Y y familia, Colombia**

39. El 25 de diciembre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de X, Y, A y B, en Colombia. La solicitud de medidas cautelares alega que las personas propuestas beneficiarias, víctimas de desplazamiento interno en virtud de grupos armados al margen de la ley, habrían sido objeto de acoso y hostigamientos por parte de autoridades municipales, así como de privación ilegal de libertad y abuso sexual por parte de grupos criminales por varios años. Actualmente, estarían siendo objeto de hostigamientos y persecuciones y existirían amenazas de muerte en su contra. Tras analizar las

alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión consideró que la información presentada demuestra, en principio, que los beneficiarios se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Colombia que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de X, Y, A y B a través de medidas que tengan en cuenta su situación de pobreza y desplazamiento, así como la perspectiva de género o enfoques diferenciados adicionales que resulten pertinentes; y que concierte las medidas a adoptar con los beneficiarios y sus representantes, tomando en cuenta la obligación de evitar la revictimización y proporcionar los servicios de atención requeridos.

## **EL SALVADOR**

### **678-17- Las y los periodistas de la “Revista Factum”, El Salvador**

40. El 27 de octubre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de las y los periodistas de la Revista Factum, en El Salvador. La solicitud de medida cautelares alega que los beneficiarios han sido objeto de hostigamientos, amenazas y otros hechos de violencia tras publicar una investigación en la que se denunciaban presuntas ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales y extorsión por parte de oficiales de fuerzas de seguridad del Estado. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que las y los periodistas de la Revista Factum se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a El Salvador que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de las y los beneficiarios; que tome las medidas necesarias para que puedan desarrollar sus actividades periodísticas, en ejercicio de la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos; y que concierte las medidas a adoptar con el beneficiario y sus representantes.

### **731-17 R.A.G.P y familiares, El Salvador**

41. El 10 de noviembre de 2017, la Comisión decidió otorgar medidas cautelares a favor de una familia salvadoreña que habría sido forzada a desplazarse, en El Salvador. Según la información aportada, las personas beneficiarias serían objeto de violencia por la “pandilla 18”. De igual manera, se informó que la familia beneficiaria estaría atemorizada ante posibles represalias como resultado de las denuncias penales que habrían interpuesto, por lo que la familia habría abandonado su residencia habitual y buscado protección en diversos resguardos para evitar un atentado en contra de sus vidas. Adicionalmente, el Estado no estaría proporcionando ninguna medida de protección a la familia. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas, a la luz del contexto específico en que tendrían lugar, la Comisión consideró que, en principio, los integrantes de la familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. En consecuencia, la CIDH solicitó al Estado de El Salvador que: a) adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad del grupo familiar; b) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

## **ESTADOS UNIDOS**

### **156/17 – William Charles Morva, Estados Unidos**

42. El 16 de marzo de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de William Charles Morva, en Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares alega que el propuesto beneficiario, sentenciado a pena de muerte en 2008, se enfrenta a una ejecución inminente a pesar de supuestas vulneraciones a sus garantías procesales durante el proceso judicial. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho presentados por los solicitantes, la Comisión considera que si William Charles Morva es ejecutado sin tener la oportunidad de examinar profundamente su caso, se afectarían potenciales remedios y se ocasionarían daños irreparables. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la

CIDH, la Comisión solicitó a Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de William Charles Morva hasta que se pronuncie sobre su petición.

#### **241/17 Y 304/15 - Víctor Hugo Saldaño, Estados Unidos**

43. El 26 de mayo de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Víctor Hugo Saldaño, en Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares está relacionada con el caso 12.254, en el que la Comisión concluyó que Estados Unidos es responsable de violar los artículos I, II, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre durante el proceso en el que Víctor Hugo Saldaño fue sentenciado a muerte. La solicitud alega que el Estado no ha cumplido con las recomendaciones del informe de fondo de la Comisión sobre este caso. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Víctor Hugo Saldaño; que se abstenga de ejecutar su sentencia de muerte; que le brinde la atención médica apropiada para su estado de salud mental; y que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes.

#### **250/17 - Lezmond Mitchell, Estados Unidos**

44. El 2 de julio de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Lezmond Mitchell, miembro de la comunidad indígena Navajo, en Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares está relacionada con la petición P-627-17, en la que se alegan presuntas violaciones a los artículos I, II, III, XIII, XVIII, XIX, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre durante el proceso en el que el beneficiario fue sentenciado a pena de muerte. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad física de Lezmond Mitchell hasta que la CIDH se pronuncie sobre su petición, a fin de no frustrar el trámite de su caso ante el Sistema Interamericano.

#### **184/17 - Mohammad Rahim, Estados Unidos**

45. El 25 de julio de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Mohammad Rahim, en Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares alega que Mohammad Rahim, quien se encuentra privado de libertad en la Base Naval de Guantánamo tras haber sido retenido en un centro secreto de detención donde habría sido víctima de tortura, no habría recibido tratamiento médico adecuado y se encontraría confinado a espacios cerrados con aislamiento prolongado. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia como resultado de su situación actual de salud y condiciones de detención. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Mohammad Rahim; que garantice que sus condiciones de detención se ajusten a los estándares internacionales aplicables; que le garantice el acceso a tratamiento médico adecuado; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

#### **736-17 - Rubén Ramírez Cárdenas, Estados Unidos**

46. El 18 de octubre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Rubén Ramírez Cárdenas, en Estados Unidos. La solicitud de medida cautelares alega que Estados Unidos no ha cumplido con las recomendaciones del informe de fondo y admisibilidad que la Comisión publicó en agosto de 2009, en el que declaró a Estados Unidos responsable por violaciones en perjuicio de Rubén Ramírez Cárdenas, ciudadano mexicano, con respecto al proceso penal que derivó en la imposición de la pena

de muerte en su contra. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que Rubén Ramírez Cárdenas se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del beneficiario; se abstenga de aplicar la pena de muerte contra el Sr. Rubén Ramírez Cárdenas; asegure que las condiciones de detención se ajusten a los estándares internacionales aplicables; proporcione atención médica adecuada a Rubén Ramírez Cárdenas ante su situación de salud; y concierte las medidas a adoptar con el beneficiario y sus representantes.

## **GUATEMALA**

### **958/16 - “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, Guatemala**

47. El 12 de marzo de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de los niños, las niñas y adolescentes que se encuentren en el “Hogar Seguro Virgen de Asunción”, en Guatemala. La solicitud de medidas cautelares alega que los niños, las niñas y adolescentes en dicho centro están expuestos a múltiples factores de riesgo, que incluyen hacinamiento, hechos de violencia y deficientes condiciones de habitabilidad ante la falta de supervisión adecuada por parte del Estado. La parte solicitante aportó información adicional según la cual el 8 de marzo de 2017 se produjo un incendio que resultó en el fallecimiento de niños, niñas y adolescentes, y en múltiples heridos. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Guatemala que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el “Hogar Seguro Virgen de Asunción”, incluyendo aquellos/as que han resultado con quemaduras u otras afectaciones físicas o psicológicas como resultado del incendio producido el 8 de marzo de 2017. Estas medidas deben ser adoptadas por el Estado, atendiendo a la condición de niños, niñas y adolescentes de los/as beneficiarios/as y en ese sentido, orientadas por el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la Comisión solicitó al Estado que adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones en las que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en el “Hogar Seguro Virgen de la Asunción” se adecúen a los estándares internacionales aplicables, y que simultáneamente el Estado emprenda medidas efectivas para promover la reintegración a sus familias, cuando sea posible y con los apoyos necesarios, o identifique alternativas de cuidado que sean más protectoras. En consistencia con lo anterior, la Comisión solicita al Estado que aplique las medidas adecuadas para apoyar y asistir a las familias de los/las niños, niñas y adolescentes para facilitar la reintegración, y prohíba el ingreso de más niños, niñas y adolescentes al “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”. La CIDH solicitó a Guatemala que concierte las medidas a adoptarse con los/as beneficiarios/as y con la parte solicitante; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

### **161/17 - Centros Juveniles de Privación de Libertad, Guatemala**

48. El 12 de junio de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de las y los adolescentes que se encuentran en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II San José Pinula, el Centro Juvenil de Privación Provisional para Varones, el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones Anexo II y el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres, en Guatemala. La solicitud de medidas cautelares alega que existe una situación de riesgo a la vida e integridad personal de las y los adolescentes en los cuatro centros debido a una serie de múltiples factores de riesgo que afectarían de manera desproporcionada a las y los adolescentes privados de libertad en tales centros. Tales fuentes de riesgo incluirían tanto aspectos de salubridad, infraestructura de los centros, atención de salud, como de seguridad, entre otros. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Guatemala que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de las y los adolescentes de los cuatro centros, que tome las acciones necesarias para mejorar las condiciones de detención de las y los adolescentes de acuerdo a los estándares internacionales; que fortalezca la seguridad en los cuatro centros de privación de libertad; que adopte las medidas necesarias para contar con planes de emergencia ante la posible materialización de los factores de riesgo identificados; que concierte

las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

#### **412-17 - Pobladores desalojados y desplazados de la Comunidad Laguna Larga, Guatemala**

49. El 8 de septiembre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Pobladores desalojados y desplazados de la Comunidad Laguna Larga, en Guatemala. La solicitud de medida cautelares alega que aproximadamente 450 personas, agrupadas en aproximadamente 100 familias, de la comunidad Laguna Larga, Municipio de San Andrés, del Departamento de Petén, Guatemala, habrían estado asentados en un área considerada “área protegida” para el Estado de Guatemala y estarían en una situación de riesgo dado que se habrían visto forzadas a desplazarse desde su comunidad hacia la comunidad de El Desengaño, perteneciente al municipio de Candelaria, Estado de Campeche, México. Las familias se encontrarían viviendo a la intemperie en carpas de acampar y “champas” en una zona rural en la franja fronteriza entre Guatemala y México. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Guatemala que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias, a través de medidas dirigidas a mejorar, entre otros aspectos, las condiciones sanitarias y de salud, en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores; que adopte las medidas necesarias para proteger a la población desplazada frente a posibles actos de violencia por parte de terceros o de agentes del Estado, garantizando a su vez la protección de los enseres, propiedades y cosechas que fueron abandonadas en la comunidad antes de su desplazamiento; adopte las medidas necesarias para continuar con los diálogos y consultas correspondientes con las personas desalojadas, para alcanzar una solución duradera para la situación de las personas desalojadas y desplazadas; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.

#### **431/17 - Gloria Patricia Porras Escobar y familia, Guatemala**

50. El 29 de agosto de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Gloria Patricia Porras Escobar y su núcleo familiar, en Guatemala. La solicitud de medidas cautelares alega que la beneficiaria enfrenta una situación de riesgo debido a su desempeño como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Los solicitantes alegan que se han presentado diversos antejuicios en su contra con motivo de sus labores, así como que habría sido objeto de intimidaciones y hostigamientos y de seguimientos contra ella y su esposo. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que la beneficiaria se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Guatemala que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Gloria Patricia Porras Escobar y su núcleo familiar; que adopte las medidas necesarias para que Gloria Patricia Porras Escobar pueda desarrollar sus actividades como magistrada de la Corte de Constitucionalidad sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas, y hostigamientos; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

#### **674-17-Augusto Jordán Rodas Andrade y otros, Guatemala**

51. El 27 de octubre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Augusto Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos, y su núcleo familiar, en Guatemala. Según la solicitud de medidas cautelares: i) el señor Augusto Jordán Rodas Andrade en su carácter de Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala ha realizado labores de acompañamiento y ha ejercido acciones legales en asuntos de alto impacto tanto de asuntos vinculados la lucha contra corrupción y, en particular, de manera reciente a favor de la continuidad de las labores del Comisionado de la Comisión

Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el marco de la decisión de declararlo persona non grata; ii) estaría recibiendo amenazas por medio de redes sociales y otros medios de comunicación que generarían un clima de animadversión en su contra; iii) habría tenido conocimiento de que diversas personas estarían planeando acciones en su contra y de sus familiares, y iv) sería objeto de hostigamientos adicionales dirigidos a limitar sus labores, tales como la posible reducción del presupuesto de la entidad, o bien, la separación del cargo. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión concluyó que el señor Augusto Jordán Rodas Andrade y su núcleo familiar se encuentran *prima facie* en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. En consecuencia, la Comisión solicitó al Estado de Guatemala que: a) adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal del señor Augusto Jordán Rodas Andrade y su núcleo familiar; b) adopte las medidas necesarias para que el señor Augusto Jordán Rodas Andrade pueda desarrollar sus actividades como Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos; c) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

### **782/17 - Paulina Mateo Chic, Guatemala**

52. El 1 de diciembre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Paulina Mateo Chic, en Guatemala. La solicitud de medida cautelares alega que la beneficiaria, esposa de Macario Pu Chivalan, presunta víctima de desaparición forzada en el caso 12.932 que se encuentra en etapa de fondo ante la CIDH, se encontraría en una situación de riesgo dado su deteriorado estado de salud y la falta de atención médica adecuada para tratar las diversas patologías que enfrenta. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que la beneficiaria se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Guatemala que adopte las medidas necesarias e inmediatas para preservar la vida y la integridad personal de Paulina Mateo Chic, incluyendo realizar los diagnósticos y exámenes médicos necesarios, proporcionar una atención médica culturalmente adecuada conforme a sus patologías y garantizar que tenga acceso a una alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales; y que concierte las medidas a adoptar con la beneficiaria y sus representantes.

## **HAITÍ**

### **125/17 - Penitenciaría Civil de Puerto Príncipe, Haití**

53. 26 de mayo de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Civil y Hospital General de Puerto Príncipe, en Haití. La solicitud alega que los derechos a la vida e integridad personal de los beneficiarios están en una situación de riesgo con motivo de un cuadro de hacinamiento, condiciones de detención deficientes y la ausencia de acceso a tratamientos médicos adecuados. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Haití que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Civil y Hospital General de Puerto Príncipe, en particular adoptar las medidas necesarias para prevenir las enfermedades informadas y brindar un tratamiento adecuado; que tome acciones inmediatas para reducir progresivamente el hacinamiento al interior de la Penitenciaría; que provea condiciones adecuadas de higiene en los recintos; que adopte las medidas necesarias para garantizar que las condiciones de detención se adecuen a los estándares internacionales; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

## HONDURAS

### **507/16 - Víctor Vásquez, Honduras**

54. El 6 de febrero de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Víctor Vásquez, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que Víctor Vásquez se encuentra en una situación de riesgo con motivo de su desempeño como presidente del consejo indígena de la comunidad de Simpinula en el marco de una serie de disputas judiciales sobre la titularidad de unos territorios que pertenecen a los indígenas Lenca en calidad de tierras ancestrales. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Víctor Vásquez; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

### **688/16 - Erick Pérez y otros, Honduras**

55. El 20 de febrero de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de José Erick Pérez Sorto, Paul Emilio Zepeda, Gabriela Blen y Georgina Sierra Rodríguez, integrantes de Oposición Indignada, y sus familiares, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que los integrantes de Oposición Indignada se encuentran en una situación de riesgo con motivo de su desempeño como defensores y defensoras de derechos humanos, en el marco de una serie de acciones emprendidas en contra de la corrupción en Honduras. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de José Erick Pérez Sorto, Paul Emilio Zepeda, Gabriela Blen, Georgina Sierra Rodríguez y sus familiares; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

### **448-17 Señora Z y familia, Honduras**

56. El 8 de septiembre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de señora Z y su núcleo familiar. La CIDH mantendrá en reserva la identidad de los beneficiarios. La solicitud de medida cautelares alega que la señora Z se encuentra en una situación de grave riesgo con motivo de su calidad de testigo en el marco de la investigación penal; en particular la señora Z y los miembros de su núcleo familiar habrían sido objeto de hostigamientos, amenazas y actos de violencia de manera continuada durante los años 2016 y 2017, habiendo recientemente abandonado su residencia por temor a un posible atentado y ante la aparente falta de idoneidad en las medidas de protección implementadas por el Estado. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión consideró que la información presentada demuestra que la señora Z se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de la señora Z y los miembros identificados de su núcleo familiar; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones tendentes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

## MÉXICO

### **209/17 - Francisco Javier Barraza Gómez, México**

57. El 15 de agosto de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Francisco Javier Barraza Gómez, en México. La solicitud de medidas cautelares alega que el beneficiario fue visto por última vez el 31 de enero de 2017 en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, mientras estaba llevando a cabo unas diligencias en el marco de sus labores como abogado, cuando habría sido interceptado por un grupo de hombres fuertemente armados. La solicitud alega que el señor Barraza fue objeto de una desaparición, señalando a las autoridades de dicha entidad federativa como presuntos responsables, y que lo

anterior constituiría un acto más de intimidación en contra de su hermana, Alma Angélica Barraza Gómez, una defensora de los derechos humanos de las comunidades locales. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a México que adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero del señor Francisco Javier Barraza Gómez, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.

#### **519/17 - Eduardo Valencia Castellanos, México**

58. El 27 de noviembre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Eduardo Valencia Castellanos, en México. La solicitud de medida cautelares alega que el beneficiario se encontraría en una situación de riesgo tras haber sido víctima de un grave atentado contra su vida por parte de internos en el lugar donde se encuentra privado de libertad y sufrir hostigamientos por parte de la persona que habría determinado que se realizara el atentado en su contra. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Eduardo Valencia Castellanos; y que concierte las medidas a adoptar con el beneficiario y sus representantes.

### **NICARAGUA**

#### **505/15 - Lottie Cunningham, Nicaragua (Ampliación)**

59. El 11 de junio de 2017, la CIDH decidió ampliar las medidas cautelares a favor de Lottie Cunningham, en Nicaragua. La solicitud alega que la beneficiaria se encontraría en una situación de riesgo, debido a que estaría siendo objeto de actos de violencia, incluyendo amenazas de muerte y hostigamientos, como consecuencia de sus actividades como presidenta de la organización “Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua” (CEJUDHCAN) en favor de las comunidades indígenas Miskitus en el marco de un conflicto territorial en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que la beneficiaria se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión decidió ampliar esta medida cautelar y en consecuencia solicitó a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Lottie Cunningham y el desarrollo de sus actividades como defensora de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamiento; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

#### **331/17 - Francisca Ramírez y familiares, Nicaragua**

60. El 22 de agosto de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Francisca Ramírez y los miembros de su núcleo familiar, en Nicaragua. La solicitud de medidas cautelares alega que la beneficiaria se encuentra en una situación de grave riesgo con motivo de su desempeño como defensora de derechos humanos, especialmente en relación con la representación de aquellas personas cuyos territorios habrían resultado afectados a raíz de la construcción del canal transoceánico. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que la beneficiaria se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Francisca Ramírez y de los miembros de su núcleo familiar; que adopte las medidas necesarias para asegurar que la pueda desarrollar sus actividades como defensora de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el ejercicio de funciones; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y que

informe sobre las acciones adoptadas tendentes a investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

## PANAMÁ

### **393/15 - Personas privadas de libertad en centro de detención transicional de Punta Coco, Panamá (Ampliación)**

61. El 22 de marzo de 2017, la CIDH decidió ampliar las medidas cautelares a favor de las personas privadas de libertad en el Centro de detención transitorio de Punta Coco, en Panamá. La solicitud alega que los beneficiarios privados de libertad se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos como resultado de las circunstancias excepcionales de detención que enfrentarían en “Punta Coco”. Adicionalmente, se aduce que las señoras Shirley Castañeda y Jessica Canto serían objeto de una serie de hostigamientos como resultado de sus labores como abogadas defensoras de personas privadas de libertad en “Punta Coco”. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión decidió ampliar esta medida cautelar y en consecuencia solicitó a Panamá, entre otras, que: a) adopte las medidas necesarias para preservar los derechos a la vida e integridad de las personas detenidas en el centro de detención transitorio de “Punta Coco”. En este sentido, la Comisión solicita al Estado adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para trasladar a todos los detenidos actualmente alojados en dicho centro a un lugar que cumpla con los estándares internacionales aplicables para personas privadas de libertad; y abstenerse de trasladar nuevamente a personas privadas de libertad a este Centro, hasta que el mismo cumpla con dichos estándares; y b) adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Shirley Castañeda y Jessica Canto; y permitir que puedan desarrollar sus actividades como defensoras de derechos humanos sin ser sujetas a actos de violencia y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones.

## PARAGUAY

### **68/17 - Adolescente Panambí, Paraguay**

62. El 2 de marzo de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de la adolescente Panambí, en Paraguay. La CIDH mantendrá en reserva la identidad de la adolescente, a quien se identificará como Panambí a requerimiento de la parte solicitante. La solicitud de medidas cautelares alega que la adolescente Panambí, de 15 años de edad, se encuentra en una situación de grave riesgo en vista de su actual condición de salud y la necesidad de tratamiento médico especializado, en el marco de una serie de circunstancias que profundizarían su situación de vulnerabilidad. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Paraguay que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Panambí, a fin de garantizar que tenga acceso a un tratamiento médico adecuado a su situación y recomendado por especialistas; asegurar que los derechos de Panambí estén oportunamente representados y garantizados en todas las decisiones y procedimientos en materia de salud, atención a personas víctimas de abusos sexuales, entre otros procesos que pudieran estar relacionados; adoptar todas las medidas que sean necesarias para que la adolescente cuente con todos los apoyos técnicos y familiares que sean necesarios para proteger de modo integral sus derechos; y adoptar un plan de atención y protección integral a favor de Panambí, en el corto, mediano y largo plazo, una vez que haya salido del estado de gravedad en el que se encuentra actualmente, tomando en consideración la elevada situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.

## PERÚ

### **113-16 Comunidad Nativa “Tres Islas” de Madre de Dios, Perú**

63. El 8 de septiembre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de los miembros de la Comunidad Nativa “Tres Islas” de Madre de Dios. La solicitud de medida cautelares alega que los propuestos beneficiarios se encontrarían en una situación de grave riesgo debido a la falta de atención médica efectiva, integral y continua frente a la presencia de mercurio en sus organismos, y

en sus fuentes de agua y suelo debido a la presencia de concesiones mineras en su territorio. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Perú que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los miembros de la Comunidad Nativa “Tres Islas” de Madre de Dios, incluyendo realizar diagnósticos médicos para determinar los niveles de contaminación que tendrían los propuestos beneficiarios, a fin de suministrar atención médica adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales, garantizar que los miembros de la comunidad tengan acceso a una alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales y tomar medidas de protección a los miembros de la comunidad frente posibles agresiones de terceros; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las medidas adoptadas para mitigar, reducir y eliminar las fuentes de riesgo identificadas en el presente procedimiento, e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

#### **530-14 Gregorio Santos Guerrero, Perú - (Levantamiento)**

64. El 8 de septiembre de 2017, la CIDH decidió levantar la medida cautelar otorgada el 14 de mayo de 2015 a favor de Gregorio Santos Guerrero, en Perú. La Comisión solicitó a Perú en la resolución 18/2015 que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Gregorio Santos Guerrero y para que sus condiciones de detención fueran adecuadas conforme a estándares internacionales aplicables. La Comisión observa que el beneficiario ya no se encuentra privado de libertad, por lo que decidió levantar la presente medida cautelar

#### **MC 120-16 pobladores de la Comunidad de Cuninico y otra, Perú**

65. El 2 de diciembre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares de los pobladores de la comunidad de Cuninico y San Pedro en Loreto. De acuerdo con la información aportada, tras un derrame de petróleo ocurrido en 2014, y no obstante el paso del tiempo y medidas adoptadas por el Estado peruano, existiría una continuidad en los efectos de la presunta contaminación. De acuerdo a la parte solicitante, esta situación es verificable en los valores de la presencia de algunos metales pesados, como el cadmio y el mercurio, por encima de los niveles recomendables. Asimismo, la CIDH fue informada que estos niveles por encima de los recomendables fueron verificados en algunas decisiones judiciales de tribunales peruanos. Los solicitantes alegaron diversas patologías o padecimientos asociados con dicha afectación que resultan consistentes con los efectos que podría tener la exposición prolongada a tales elementos, por lo cual se requiere la adopción de medidas inmediatas para proteger sus derechos. Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho presentadas por las partes y la información obtenida en la visita a la zona en julio de 2017, la Comisión consideró que la información disponible demuestra, en principio, el cumplimiento de los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicitó al Estado de Perú que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los pobladores de las comunidades identificadas. Esto debe incluir realizar los diagnósticos médicos necesarios para determinar los niveles de contaminación por metales pesados u otras sustancias que tendrían los beneficiarios, a fin de suministrar atención médica adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales aplicables en la materia. Asimismo, en este proceso el Estado debe prestar especial atención a niños y niñas. Asimismo, la CIDH solicitó al Estado que garantice que los miembros de la comunidad tengan acceso a agua potable, libre de agentes contaminantes, y a una alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales y dentro de los niveles considerados aceptables por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por último, la CIDH solicitó al Estado que informe sobre las medidas adoptadas para mitigar los efectos que tendría en la salud humana las fuentes de riesgo que dieron lugar a la presente medida cautelar. Las medidas deberán adoptarse en concertación con los beneficiarios y sus representantes.

## TRINIDAD Y TOBAGO

### **440/16 - Zaheer Seepersad, Trinidad y Tobago**

66. El 4 de agosto de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Zaheer Seepersad, en Trinidad y Tobago. La solicitud de medidas cautelares alega que el beneficiario padece “distancia focal” y se encuentra en una situación de riesgo debido a su condición médica y la amenaza existente de ser internado en un asilo psiquiátrico, lo que agravaría su condición. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia como resultado de la situación de salud del propuesto beneficiario y la presunta falta de tratamiento médico adecuado. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Trinidad y Tobago que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal del beneficiario, tomando en consideración su condición médica y su condición de persona con discapacidad, en particular garantizando su acceso a tratamiento médico y terapias adecuadas; que concierte las medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

## URUGUAY

### **402/17 - Jair Krischke, Uruguay**

67. El 21 de junio de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Jair Krischke, en Uruguay. La solicitud de medidas cautelares alega que el propuesto beneficiario se encuentra en una situación de riesgo tras haber recibido amenazas de muerte con motivo de su trabajo en el impulso de causas judiciales y el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la dictadura militar uruguaya, amenazas contra autoridades, operadores de justicia y defensores de derechos humanos que fueron condenadas por la Comisión en comunicado de prensa del 1 de marzo de 2017. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Uruguay que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal del señor Jair Krischke y para que pueda desarrollar sus labores como defensor de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el marco de sus funciones; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

## VENEZUELA

### **475/15 - Miembros del partido Voluntad Popular, Venezuela**

68. El 14 de enero de 2017, la CIDH decidió solicitar medidas cautelares a favor de David Smolansky, Freddy Guevara, Ismael León, Juan Pablo López Gross, miembros del partido Voluntad Popular; Theresly Malavé, defensora de derechos humanos; y Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel, Ángel Contreras, Yon Goicoechea y Delson Guárate, detenidos en el Centro para Procesados 26 de julio y el Helicoide, en Venezuela. La solicitud de medidas cautelares alega que miembros y activistas de Voluntad Popular se encuentran en una situación de riesgo en vista de presuntas amenazas, actos de violencia, hostigamiento, alegadas torturas, tratos crueles y detenciones arbitrarias a las que estarían siendo objeto como consecuencia de su posición política contraria al actual Gobierno Venezolano. En vista de los antecedentes señalados, la CIDH consideró que el presente asunto reúne, en principio, los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno de Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de i) David Smolansky, Freddy Guevara, Ismael León y Juan Pablo López Gross, miembros del partido Voluntad Popular, ii) Theresly Malavé, defensora de derechos humanos, y iii) Alexander Tirado; Raúl Emilio Baduel, Ángel Contreras, Yon Goicoechea y Delson Guárate, detenidos en el Centro para Procesados 26 de julio y el

Helicoide; que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos políticos de David Smolansky, Freddy Guevara, Ismael León y Juan Pablo López Gross a fin de que puedan desarrollar sus actividades como líderes de la oposición sin ser objeto de actos de hostigamiento, amenazas y actos de violencia; que adopte las medidas necesarias para garantizar que Theresly Malavé pueda desarrollar sus actividades como defensora de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos por el ejercicio de sus funciones; que asegure que las condiciones de detención de los beneficiarios alojados en el Centro para Procesados 26 de julio y en El Helicoide se adecuen a estándares internacionales; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

#### **994/16 - Lorenzo Mendoza y su familia, Venezuela**

69. El 20 de enero de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Lorenzo Mendoza y su familia, en Venezuela. La solicitud de medidas cautelares alega que Lorenzo Mendoza y su familia se encuentran en situación de riesgo con motivo de supuestos señalamientos y actos de hostigamiento presuntamente llevados a cabo por parte de altas autoridades del Estado y terceras personas. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Lorenzo Mendoza y su familia; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

#### **616/16 - Luis Florido, Venezuela**

70. El 7 de abril de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Luis Florido, en Venezuela. La solicitud de medidas cautelares alega que Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional, habría sido objeto de comentarios negativos y estigmatizantes por parte de altas autoridades nacionales ante medios de comunicación, así como amenazas y seguimientos por parte de sujetos que estarían vinculados con agentes del Estado. Esto como resultado de sus actividades y expresiones como Presidente de la Comisión de Política Exterior, Integración y Soberanía de la Asamblea Nacional, incluido encabezar la misión parlamentaria que solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la aplicación de la Carta Democrática Interamericana respecto del Estado venezolano. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, y considerando la tensión institucional y social generada en Venezuela en el marco de la alteración al orden constitucional y democrático en el país, así como los antecedentes de riesgo en los que se encuentran los miembros del partido Voluntad Popular, previamente constatados por la Comisión, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal del señor Luis Florido, y asegurar que pueda ejercer sus derechos políticos como miembro de la Asamblea Nacional sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

#### **248/17 - Henrique Capriles Radonski, Venezuela**

71. El 2 de junio de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Henrique Capriles Radonski, en Venezuela. La solicitud de medidas cautelares alega que el propuesto beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos como resultado de su rol como líder de oposición política y participación activa en protestas sociales dentro del contexto actual que atraviesa el Estado de Venezuela y como consecuencia de declaraciones estigmatizantes en su contra por parte de altas autoridades. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, y considerando la tensión institucional y social generada en el marco de la alteración al orden constitucional y democrático en Venezuela, la CIDH considera que la información presentada

demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y derechos políticos del señor Henrique Capriles Radonski sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

#### **403/17 - Julio Borges y otros, Venezuela**

72. El 28 de julio de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Julio Borges, Tomás Guanipa y José Guerra, en Venezuela. La solicitud de medidas cautelares alega que los beneficiarios, diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentran en una situación de grave riesgo debido a una serie de pronunciamientos estigmatizantes, señalamientos y hostigamientos por parte de altas autoridades del Estado y funcionarios, así como miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que pondrían en riesgo sus derechos a la vida e integridad personal. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, y considerando la tensión institucional y social generada en el marco de la alteración al orden constitucional y democrático en Venezuela, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Julio Borges, Tomás Guanipa y José Guerra, y asegurar que puedan ejercer sus derechos políticos como miembros de la Asamblea Nacional sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia; que concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

#### **449/17 - Luisa Ortega Díaz y familia, Venezuela**

73. El 3 de agosto de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Luisa Ortega Díaz, en Venezuela. La solicitud de medidas cautelares alega que la beneficiaria, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra en una situación de grave riesgo debido a una serie de pronunciamientos estigmatizantes, señalamientos y hostigamientos por parte de altas autoridades del Estado, así como miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que pondrían en riesgo sus derechos a la vida e integridad personal. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, y considerando la tensión institucional y social generada en el marco de la alteración al orden constitucional y democrático en Venezuela, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que la beneficiaria se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Luisa Ortega Díaz, y asegurar que pueda ejercer sus funciones como Fiscal General sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia; que concierte las medidas a implementarse con la beneficiaria y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

#### **533-17 Williams Dávila, Venezuela**

74. El 6 de septiembre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Williams Dávila, en Venezuela. La solicitud de medidas cautelares alega que el beneficiario, electo en 2015 diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por el estado de Mérida, se encuentra en una situación de grave riesgo debido a una serie de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en su contra presuntamente perpetrados por parte de autoridades estatales y terceras personas afines al régimen. En particular, los solicitantes señalaron que recibió amenazas de muerte explícitas a través de redes sociales y a su teléfono particular, que en algunos de los seguimientos reportados los presuntos agresores arrojaron objetos contundentes a su vehículo, y que personas no identificadas habían disparado a

su residencia a principios del mes de agosto de 2017. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Williams Dávila, y asegurar que pueda llevar a cabo sus actividades como diputado de la Asamblea Nacional sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de sus funciones; que concierte las medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.

### **309-17 Johonnys Armando Hernández, Venezuela**

75. El 8 de septiembre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Johonnys Armando Hernandez, en Venezuela. La solicitud de medida cautelares alega que el propuesto beneficiario se encuentra en una situación de riesgo por no recibir el tratamiento prescrito para tratar su hemofilia. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del beneficiario, tomando en consideración la enfermedad que enfrenta, en particular mediante la adopción de medidas inmediatas que posibiliten que reciba un tratamiento médico adecuado atendiendo a su condición actual de salud, conforme a los estándares internacionales aplicables; que concierte las medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes; e que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.

### **600- 15 - Ángel Omar Vivas Perdomo, Venezuela**

76. El 27 de octubre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Angel Omar Vivas Perdomo, en Venezuela. La solicitud de medida cautelares alega que el beneficiario quien tendría 60 años de edad, se encuentra privado de la libertad en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, desde abril de 2017 sin recibir un tratamiento médico adecuado para atender sus patologías, requiriendo atención médica especializada y quirúrgica. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, en el contexto específico, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Angel Omar Vivas Perdomo, en particular, mediante la adopción de medidas que posibiliten el tratamiento médico adecuado atendiendo su condición de salud, conforme a los estándares internacionales aplicables; y que concierte las medidas a adoptar con el beneficiario y sus representantes.

### **383/17 - Santiago José Guevara, Venezuela**

77. El 1 de diciembre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Santiago José Guevara García, en Venezuela. La solicitud de medida cautelares alega que el beneficiario se encuentra en una situación de riesgo de daño irreparable a su vida e integridad personal con motivo del deterioro de su estado de salud y la falta de un tratamiento médico adecuado en el marco de su privación de libertad. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Santiago José Guevara García, en particular, proporcionando una atención médica adecuada, conforme a sus patologías, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables; y que concierte las medidas a adoptar con el beneficiario y sus representantes

## 2. Reuniones de trabajo

78. El Artículo 25 del Reglamento de la CIDH señala que la Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento apropiadas con relación al otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares. Dichas medidas pueden incluir, cuando resulte pertinente, cronogramas de implementación, audiencias, reuniones de trabajo y visitas de seguimiento y revisión. Durante el 2017 la CIDH sostuvo 40 reuniones de trabajo en el marco de sus periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones, así como 7 reuniones de trabajo como parte de visitas realizadas por Comisionados relatores de país. A continuación se representa un listado de dichas reuniones.

<b>161 período extraordinario de sesiones (15 al 22 de marzo de 2017), Washington D.C, Estados Unidos</b>			
1	MC 700-15	Asunto F y Familia	Argentina
2	MC 35-14	Penitenciarias de Mendoza	Argentina
3	MC 750-16	Braulio Jatar Alonso	Venezuela
4	MC 223-13	Lorent Saleh	Venezuela
5	MC 335-14	Leopoldo López y otros	Venezuela
6	MC 409-14	Estudiantes de la escuela rural "Raúl Isidro Burgos"	México
7	MC 178-15	Mainumby	Paraguay
8	MC 271-05	La Oroya	Perú
9	MC 262-05	Pueblo indígena Mascho Piro	Perú
10	MC 46-14	Juana Calfunao y familiares	Chile
11	MC 141-10	Sandra Mosquera Díaz y otros	Colombia
12	MC-242-09	Miembros de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES	Colombia
13	MC-658-16	Erlendy Cuero Bravo	Colombia
14	MC-51-15	Pueblo Indígena Wayúu Asentado en el Departamento de La Guajira	Colombia
15	MC-70-99	Miembros de CAVIDA	Colombia
16	MC 457-13	Integrantes de la Asociación Para una Vida Mejor - APUVIMEH	Honduras
17	MC-112-16	Familiares de Berta Cáceres y otros	Honduras
18	MC-935-04	Miembros de la Colonia Cerrito Lindo, Deysi Xiomara Flores y otros	Honduras
19	MC-50-14	Movimiento Unificado Campesino del Aguán-MUCA	Honduras
<b>163 período de extraordinario de sesiones (3 al 7 de julio de 2017), Lima, Perú</b>			
20	MC 71-15	Marco Antonio Ponce	Venezuela
21	MC 750-16	Braulio Jatar	Venezuela
22	MC 359-10	Integrantes de la Corporación Justicia y Dignidad	Colombia
23	MC 185-13	Sofía Lorena Mendoza Martínez y otros	Honduras
24	MC 475-15	Miembros del partido Voluntad Popular	Venezuela
25	MC 409-14	Estudiantes de la escuela rural "Raúl Isidro Burgos"	México
<b>164 periodo extraordinario de sesiones (4 al 8 de septiembre de 2017), Ciudad de México, México</b>			
26	MC 71-10	Claudia Samayoa y otros miembros de UDEFEGUA	Guatemala
27	MC 370-12	Pacientes del Hospital Federico Mora	Guatemala
28	MC 958-16	Hogar Virgen de la Asunción	Guatemala
29	MC 50-14	Movimiento Unificado Campesino del Aguan- MUCA y otros	Honduras

30	MC 505-15	Comunidades Indígenas Miskitu	Nicaragua 14
31	MC 399-09	Trabajadores de Radio Progreso	Honduras
32	MC 935-04	Miembros de la Colonia Cerrito Lindo y otros	Honduras
<b>165 período ordinario de sesiones (23 al 27 de octubre de 2017)</b>			
34	MC 17-17	Niño Juan	Argentina
35	MC 564-17	Santiago Andrés Maldonado	Argentina
36	MC 25-16	Milagro Amalia Ángela Sala	Argentina
37	MC 265-02	Pueblo Indígena Embera Chamí y otros	Colombia
38	MC 70-99	Miembros de CAVIDA (Comunidades del Cacarica)	Colombia
39	MC 223-13	Lorent Saleh y Gerardo Carrero	Venezuela
40	MC 409-14	Estudiantes de la escuela rural "Raúl Isidro Burgos"	México

<b>Visita de trabajo del Comisionado Relator de País a Honduras (17 de mayo de 2017)</b>			
1	MC 457-13	Integrantes de la Asociación para Una Vida Mejor en Honduras (APUVIMEH)	Honduras
2	MC 50-14	Movimiento Unificado Campesino del Aguan- MUCA y otros	Honduras
3	MC 935-04	Miembros de la Colonia Cerrito Lindo y otros	Honduras
4	MC 112-16	Familiares de Berta Cáceres y otros	Honduras
<b>Visita de trabajo del Comisionado Relator de País a Argentina (18 de mayo de 2017)</b>			
5	MC 104-12	Unidades 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la provincia de Buenos	Argentina
6	MC 496-14 y MC 37-15	Personas privadas de libertad en las Comisarias del departamento judicial de La Matanza	Argentina
7	MC 700-15	Asunto F y Familia	Argentina

## F. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH

79. El cumplimiento integral de las decisiones de la Comisión Interamericana constituye un elemento indispensable para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, así como para contribuir al fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Por tal motivo, en la presente sección, la CIDH incluye un análisis sobre el estado del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes adoptados por la Comisión durante los últimos quince años.

80. En varias ocasiones, la Asamblea General de la OEA ha alentado a los Estados miembros a que den seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo hizo mediante su resolución AG/RES. 2672 (XLI-O/11) sobre Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (punto resolutivo 3.b). Asimismo, la resolución AG/RES. 2675 (XLI-O/11) sobre Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Seguimiento de los Mandatos Derivados de las Cumbres de las Américas, encomendó al Consejo Permanente continuar la consideración de medios para promover el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión por parte de los Estados miembros de la Organización (punto resolutivo 3.d).

<sup>14</sup> El Estado de Nicaragua no asistió a la reunión de trabajo.

81. Tanto la Convención (artículo 41) como el Estatuto de la Comisión (artículo 18) otorgan explícitamente a la CIDH la facultad de solicitar información a los Estados miembros y producir los informes y recomendaciones que estime conveniente. Específicamente el Reglamento de la CIDH dispone en su artículo 48:

Seguimiento 1. Una vez publicado un informe sobre solución amistosa o sobre el fondo en los cuales haya formulado recomendaciones, la Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento que considere oportunas, tales como solicitar información a las partes y celebrar audiencias, con el fin de verificar el cumplimiento con los acuerdos de solución amistosa y recomendaciones. 2. La Comisión informará de la manera que considere pertinente sobre los avances en el cumplimiento de dichos acuerdos y recomendaciones.

82. En cumplimiento de sus atribuciones convencionales y estatutarias y en atención a las resoluciones citadas y de conformidad con el artículo 48 del Reglamento, la CIDH solicitó información a los Estados acerca del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en los informes publicados sobre casos individuales incluidos en sus Informes Anuales correspondientes a los años 2000 a 2016. Para la elaboración del presente capítulo, la CIDH tuvo en cuenta la información recibida hasta el 3 de noviembre de 2017, por lo que se tiene esa como la fecha de cierre.

83. Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Francisco Eguiguren, nacional de Perú, no participó en el debate ni en las conclusiones sobre el seguimiento de los informes referidos a dicho país; como tampoco lo hicieron los Comisionados José de Jesús Orozco Henríquez, de los asuntos de México; Paulo Vannuchi, de los asuntos de Brasil; Jim L. Cavallaro, de los asuntos de Estados Unidos; Margarette Macaulay, de los asuntos de Jamaica; Esmeralda Arosemena de Troitiño, de los asuntos de Panamá; Francisco Jose Eguiguren Praeli, de los asuntos de Perú; y Luis Ernesto Vargas Silva, de los asuntos de Colombia, por ser nacionales de dichos países.

84. El cuadro que la Comisión presenta a continuación incluye el estado en que se encuentra el cumplimiento de los acuerdos de solución amistosa, así como de las recomendaciones de la CIDH formuladas en el marco de casos resueltos y publicados en los últimos diecisiete años. La CIDH resalta que diferentes recomendaciones formuladas son de cumplimiento de tracto sucesivo y no inmediato y que algunas de ellas requieren de un tiempo prudencial para poder ser cabalmente implementadas. Por lo tanto, el cuadro presenta el estado actual de cumplimiento que la Comisión reconoce como un proceso dinámico. Desde esta perspectiva, la Comisión evalúa si las recomendaciones se encuentran o no cumplidas y no si ha habido un comienzo de cumplimiento de tales recomendaciones.

85. Las tres categorías que se incluyen en el cuadro son las siguientes:

- Cumplimiento total (aquellos casos en que el Estado ha cumplido a cabalidad con todas las recomendaciones formuladas por la CIDH. Dado los principios de efectividad y reparación integral, la Comisión considera como cumplidas totalmente aquellas recomendaciones en las que el Estado ha iniciado y concluido satisfactoriamente los trámites para su cumplimiento).
- Cumplimiento parcial (aquellos casos en los que el Estado ha cumplido parcialmente con las recomendaciones formuladas por la CIDH, ya sea por haber dado cumplimiento solamente a alguna/s de las recomendaciones o por haber cumplido de manera incompleta con todas las recomendaciones).
- Pendientes de cumplimiento (aquellos casos en los cuales la CIDH considera que no ha habido cumplimiento de las recomendaciones, debido a que no se ha iniciado ninguna gestión encaminada a tal fin; a que las gestiones iniciadas aún no han producido resultados concretos; a que el Estado explícitamente ha indicado que no cumplirá con las recomendaciones formuladas o a que el Estado no ha informado a la CIDH y ésta no cuenta con información de otras fuentes que indique una conclusión contraria).

CASO	ART. 49 (SSA) ART. 51 (SR) <sup>15</sup>	CUMPLIMIENTO TOTAL	CUMPLIMIENTO PARCIAL	PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO
Caso 11.307, Informe No. 103/01, María Meriadri de Morini (Argentina) <sup>16</sup>	49	X		
Caso 11.804, Informe No. 91/03, Juan Ángel Greco (Argentina)	49		X	
Caso 12.080, Informe No. 102/05, Sergio Schiavini y María Teresa Schnack (Argentina)	49		X	
Caso 12.298, Informe No. 81/08, Fernando Giovanelli (Argentina)	49		X	
Caso 12.159, Informe No. 79/09, Gabriel Egisto Santillán Reigas (Argentina)	49		X	
Caso 11.732, Informe No. 83/09, Horacio Aníbal Schillizzi (Argentina)	51		X	
Caso 11.758, Informe No. 15/10, Rodolfo Correa Belisle (Argentina) <sup>17</sup>	49	X		
Petición 11.796, Informe No. 16/10, Mario Humberto Gómez Yardez (Argentina) <sup>18</sup>	49	X		
Caso 12.536, Informe No. 17/10, Raquel Natalia Lagunas y Sergio Antonio Sorbellini (Argentina)	49		X	
Petición 242-03, Informe No. 160/10, Inocencia Luca Pegoraro (Argentina)	49		X	
Petición 4554-02, Informe No. 161/10, Valerio Castillo Báez (Argentina) <sup>19</sup>	49	X		
Petición 2829-02, Informe No. 19/11, Inocencio Rodríguez (Argentina) <sup>20</sup>	49	X		
Petición 11.708, Informe No. 20/11, Aníbal Acosta y L. Hirsch (Argentina) <sup>21</sup>	49	X		
Petición 11.833, Informe No. 21/11, Ricardo Monterisi (Argentina) <sup>22</sup>	49	X		
Petición 12.532, Informe No. 84/11, Penitenciarías de Mendoza (Argentina)	49		X	

<sup>15</sup> Para efectos de este aparte SSA se refiere a los casos en Seguimiento de Solución Amistosa o Informes emitidos bajo el artículo 49 de la CADH y SR se refiere al Seguimiento de las Recomendaciones o Informes emitidos bajo el artículo 51 de la CADH.

<sup>16</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2008*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 38-40.

<sup>17</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2015*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 114.

<sup>18</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2011*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 159-164.

<sup>19</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2013*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 165 – 175.

<sup>20</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2016*, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones Amistosas en casos individuales, párrs. 194-205.

<sup>21</sup> Ver, CIDH, *Informe Anual 2014*, Capítulo II, Sección D: Estados de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrafos 173-181

<sup>22</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2012*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 180-183.

Petición 12.306, Informe No. 85/11, Juan Carlos de la Torre (Argentina)	49		X	
Petición 11.670, Informe No. 168/11, Menéndez y Caride (Argentina) <sup>23</sup>	49	X		
Caso 12.324, Informe No. 66/12, Rubén Luis Godoy (Argentina)	51		X	
Caso 12.182, Informe No. 109/13, Florentino Rojas (Argentina)	49		X	
Petición 21-05, Informe No. 101/14, Ignacio Cardozo y otros (Argentina)	49			X
Caso 12.710, Informe No. 102/14, Marcos Gilberto Chaves y Sandra Beatriz Chaves (Argentina)	49		X	
Caso 12.632, Informe No. 43/15, Adriana Beatriz Gallo, Ana María Careaga and Silvia Maluf De Christin (Argentina)	51			X
Casos 12.067, 12.068 y 12.086, Informe No. 48/01, Michael Edwards, Omar Hall, Brian Schroeter y Jerónimo Bowleg (Bahamas)	51		X	
Caso 12.265, Informe No. 78/07, Chad Roger Goodman (Bahamas)	51		X	
Caso 12.513, Informe No. 79/07, Prince Pinder (Bahamas)	51			X
Caso 12.231, Informe No. 12/14, Peter Cash (Bahamas)	51			X
Caso 12.053, Informe No. 40/04, Comunidad Maya del Distrito Toledo (Belize)	51			X
Caso 12.475, Informe No. 97/05, Alfredo Díaz Bustos (Bolivia)	49		X	
Caso 12.516, Informe No. 98/05, Raúl Zavala Málaga y Jorge Pacheco Rondón (Bolivia) <sup>24</sup>	49	X		
Petición 269-05, Informe No. 82/07, Miguel Ángel Moncada Osorio y James David Rocha Terraza (Bolivia) <sup>25</sup>	49	X		
Petición 788-06, Informe No. 70/07, Víctor Hugo Arce Chávez (Bolivia) <sup>26</sup>	49	X		
Caso 12.350, Informe No. 103/14, M.Z. (Bolivia) <sup>27</sup>	49	X		
Caso 12.051, Informe No. 54/01, Maria da Penha Maia Fernandes (Brasil)	51		X	

<sup>23</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2013*, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 225-252.

<sup>24</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2009*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 109-114.

<sup>25</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2009*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 115-119.

<sup>26</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2009*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 120-124.

<sup>27</sup> Ver CIDH, Informe de Solución Amistosa No. 103-14, *Caso 12.350, (M.Z. vs. Bolivia)*, de fecha 7 de noviembre de 2014. Ver CIDH, *Informe Anual 2015*, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 290.

Casos 11.286, 11.406, 11.407, 11.412, 11.413, 11.415, 11.416 y 11.417, Informe No. 55/01, Aluísio Cavalcante y otros (Brasil)	51		X	
Caso 11.517, Informe No. 23/02, Diniz Bento da Silva (Brasil)	51		X	
Caso 10.301, Informe No. 40/03, Parque São Lucas (Brasil)	51		X	
Caso 11.289, Informe No. 95/03, José Pereira (Brasil)	49		X	
Caso 11.556, Informe No. 32/04, Corumbiara (Brasil)	51		X	
Caso 11.634, Informe No. 33/04, Jailton Neri da Fonseca (Brasil)	51		X	
Casos 12.426 y 12.427, Informe No. 43/06, Raniê Silva Cruz, Eduardo Rocha da Silva y Raimundo Nonato Conceição Filho (Brasil) <sup>28</sup>	49	X		
Caso 12.001, Informe No. 66/06, Simone André Diniz (Brasil)	51		X	
Caso 12.019, Informe No. 35/08, Antonio Ferreira Braga (Brasil)	51			X
Caso 12.310, Informe No. 25/09, Sebastião Camargo Filho (Brasil)	51		X	
Caso 12.440, Informe No. 26/09, Wallace de Almeida (Brasil)	51		X	
Petición 12.308, Informe No. 37/10, Manoel Leal de Oliveira (Brasil)	51		X	
Caso 12.213, Informe No. 7/16, Aristeu Guida da Silva y sus familiares (Brasil)	51			X
Caso 12.586, Informe No. 78/11, John Doe (Canadá)	51		X	
Caso 11.661, Informe No. 8/16, Manickavasagam Suresh (Canadá)	51			X
Caso 11.771, Informe No. 61/01, Samuel Alfonso Catalán Lincoleo (Chile)	51		X	
Caso 11.715, Informe No. 32/02, Juan Manuel Contreras San Martín y otros (Chile) <sup>29</sup>	49	X		
Caso 12.046, Informe No. 33/02, Mónica Carabantes Galleguillos (Chile) <sup>30</sup>	49	X		
Caso 11.725, Informe No. 19/03, Carmelo Soria Espinoza (Chile)	51		X	
Petición 4617/02, Informe No. 30/04, Mercedes Julia Huenteao Beroiza y otras (Chile)	49		X	
Caso 12.142, Informe No. 90/05, Alejandra Marcela Matus Acuña y Otros (Chile) <sup>31</sup>	51	X		

<sup>28</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2008*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 162-175.

<sup>29</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2007*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 187-190.

<sup>30</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2007*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 191-194.

<sup>31</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2008*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 216-224.

Caso 12.337, Informe No. 80/09, Marcela Andrea Valdés Díaz (Chile) <sup>32</sup>	49	X		
Petición 490-03, Informe No. 81/09 "X" (Chile) <sup>33</sup>	49	X		
Caso 12.469, Informe No. 56/10, Margarita Barbería Miranda (Chile)	51		X	
Caso 12.281, Informe No. 162/10, Gilda Rosario Pizarro y otras (Chile) <sup>34</sup>	49	X		
Caso 12.195, Informe No. 163/10, Mario Alberto Jara Oñate (Chile) <sup>35</sup>	49	X		
Caso 12.232, Informe No. 86/11, María Soledad Cisternas (Chile) <sup>36</sup>	49	X		
Caso 12.799, Informe No. 48/16, Miguel Ángel Millar Silva y otros (Radio Estrella del Mar de Melinka) (Chile)	51		X	
Caso 11.654, Informe No. 62/01, Masacre de Riofrío (Colombia)	51		X	
Caso 11.710, Informe No. 63/01, Carlos Manuel Prada González y Evelio Antonio Bolaño Castro (Colombia)	51		X	
Caso 11.712, Informe No. 64/01, Leonel de Jesús Isaza Echeverry (Colombia)	51		X	
Caso 11.141, Informe No. 105/05, Masacre de Villatina (Colombia)	49		X	
Caso 10.205, Informe No. 53/06, Germán Enrique Guerra Achuri (Colombia) <sup>37</sup>	49	X		
Caso 12.009, Informe No. 43/08, Leydi Dayan Sánchez (Colombia) <sup>38</sup>	51	X		
Caso 12.448, Informe No. 44/08, Sergio Emilio Cadena Antolinez (Colombia) <sup>39</sup>	51	X		
Petición 477-05, Informe No. 82/08 X y familiares (Colombia) <sup>40</sup>	49	X		

<sup>32</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2010*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 298-302.

<sup>33</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2010*, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 303-306.

<sup>34</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2011*, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 337-345.

<sup>35</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2011*, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 346-354.

<sup>36</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2012*, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 408-412.

<sup>37</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2010*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 329-333.

<sup>38</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2016*, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones Amistosas en casos individuales, párrs. 602-614.

<sup>39</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2009*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 274-280.

<sup>40</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2010*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 339-344.

Petición 401-05, Informe No. 83/08 Jorge Antonio Barbosa Tarazona y otros (Colombia)	49		X	
Caso 10.916, Informe No. 79/11, James Zapata Valencia y José Heriberto Ramírez (Colombia)	51		X	
Caso 12.376, Informe No. 59/14, Alba Lucía, Rodríguez (Colombia)	49		X	
Caso 12.756, Informe No. 10/15, Masacre Estadero El Aracatazzo (Colombia)	49		X	
Petición 108-00, Informe No. 38/15, Masacre de Segovia (28 grupos familiares) (Colombia)	49		X	
Petición 577-06, Informe No. 82/15, Gloria González y familia (Colombia)	49		X	
Caso 11.538, Informe No. 43/16, Herson Javier Caro (Colombia)	49		X	
Caso 12.541, Informe No. 67/16, Omar Zúñiga Vásquez y Amira Isabel Vásquez de Zúñiga (Colombia)	49		X	
Caso 11.007, Informe No. 68/16, Masacre de Trujillo (Colombia)	49		X	
Caso 12.476, Informe No. 67/06, Oscar Elías Biscet y Otros (Cuba)	51		X	
Caso 12.477, Informe No. 68/06, Lorenzo Enrique Copello Castillo y Otros (Cuba)	51			X
Caso 11.421, Informe No. 93/00, Edison Patricio Quishpe Alcívar (Ecuador)	49		X	
Caso 11.439, Informe No. 94/00, Byron Roberto Cañaverl (Ecuador)	49		X	
Caso 11.445, Informe No. 95/00, Ángelo Javier Ruales Paredes (Ecuador) <sup>41</sup>	49	X		
Caso 11.466, Informe No. 96/00, Manuel Inocencio Lalvay Guamán (Ecuador)	49		X	
Caso 11.584, Informe No. 97/00, Carlos Juela Molina (Ecuador)	49		X	
Caso 11.783, Informe No. 98/00, Marcia Irene Clavijo Tapia, (Ecuador)	49		X	
Caso 11.868, Informe No. 99/00, Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy (Ecuador)	49		X	
Caso 11.991, Informe No. 100/00, Kelvin Vicente Torres Cueva (Ecuador)	49		X	
Caso 11.478, Informe No. 19/01, Juan Clímaco Cuellar y otros (Ecuador)	49		X	
Caso 11.512, Informe No. 20/01, Lida Ángela Riera Rodríguez (Ecuador)	49		X	
Caso 11.605, Informe No. 21/01, René Gonzalo Cruz Pazmiño (Ecuador)	49		X	

<sup>41</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2008*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 283-286.

Caso 11.779, Informe No. 22/01, José Patricio Reascos (Ecuador)	49		X	
Caso 11.992, Informe No. 66/01, Dayra María Levoyer Jiménez (Ecuador)	51		X	
Caso 11.441, Informe No. 104/01, Rodrigo Elicio Muñoz Arcos y otros (Ecuador)	49		X	
Caso 11.443, Informe No. 105/01, Washington Ayora Rodríguez (Ecuador)	49		X	
Caso 11.450, Informe No. 106/01, Marco Vinicio Almeida Calispa (Ecuador)	49		X	
Caso 11.542, Informe No. 107/01, Ángel Reiniero Vega Jiménez (Ecuador)	49		X	
Caso 11.574, Informe No. 108/01, Wilberto Samuel Manzano (Ecuador)	49		X	
Caso 11.632, Informe No. 109/01, Vidal Segura Hurtado (Ecuador)	49		X	
Caso 12.007, Informe No. 110/01, Pompeyo Carlos Andrade Benítez (Ecuador)	49		X	
Caso 11.515, Informe No. 63/03, Bolívar Franco Camacho Arboleda (Ecuador)	49		X	
Caso 12.188, Informe No. 64/03, Joffre José Valencia Mero, Priscila Fierro, Zoreida Valencia Sánchez, Rocío Valencia Sánchez (Ecuador)	49		X	
Caso 12.394, Informe No. 65/03, Joaquín Hernández Alvarado, Marlon Loor Argote y Hugo Lara Pinos (Ecuador)	49		X	
Caso 12.205, Informe No. 44/06, José René Castro Galarza (Ecuador)	49		X	
Caso 12.207, Informe No. 45/06, Lizandro Ramiro Montero Masache (Ecuador)	49		X	
Caso 12.238, Informe No. 46/06, Myriam Larrea Pintado (Ecuador)	49		X	
Petición 12.558, Informe No. 47/06, Fausto Mendoza Giler y Diógenes Mendoza Bravo	49		X	
Caso 12.487, Informe 17/08, Rafael Ignacio Cuesta Caputi (Ecuador)	51		X	
Caso 12.525, Informe No. 84/09, Nelson Iván Serrano Sáenz (Ecuador)	51		X	
Petición 533-05, Informe No. 122/12, Julio Rubén Robles Eras (Ecuador)	49		X	
Caso 12.631, Informe No. 61/13, Karina Montenegro y otras (Ecuador)	49		X	
Caso 12.249, Informe No. 27/09, Jorge Odir Miranda Cortez y otros (El Salvador)	51		X	
Caso 9.903, Informe No. 51/01, Rafael Ferrer Mazorra y otros (Estados Unidos)	51			X
Caso 12.243, Informe No. 52/01, Juan Raúl Garza (Estados Unidos)	51			X
Caso 11.753, Informe No. 52/02, Ramón Martínez Villarreal, (Estados Unidos)	51		X	

Caso 12.285, Informe No. 62/02, Michael Domingues (Estados Unidos) <sup>42</sup>	51		X	
Caso 11.140, Informe No. 75/02, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos)	51			X
Caso 11.193, Informe No. 97/03, Shaka Sankofa (Estados Unidos)	51		X	
Caso 11.204, Informe No. 98/03, Statehood Solidarity Committee (Estados Unidos)	51			X
Caso 11.331, Informe No. 99/03, Cesar Fierro (Estados Unidos)	51		X	
Caso 12.240, Informe No. 100/03, Douglas Christopher Thomas (Estados Unidos)	51		X	
Caso 12.412, Informe No. 101/03, Napoleón Beazley (Estados Unidos)	51		X	
Caso 12.430, Informe No. 1/05 Roberto Moreno Ramos, (Estados Unidos)	51		X	
Caso 12.439, Informe No. 25/05, Toronto Markkey Patterson (Estados Unidos)	51		X	
Caso 12.421, Informe No. 91/05, Javier Suarez Medina (Estados Unidos)	51		X	
Caso 12.534, Informe No. 63/08, Andrea Mortlock (Estados Unidos)	51		X	
Caso 12.644, Informe No. 90/09, Medellín, Ramírez Cárdenas y Leal García (Estados Unidos)	51			X
Caso 12.562, Informe No. 81/10, Wayne Smith, Hugo Armendariz y otros (Estados Unidos)	51			X
Caso 12.626, Informe No. 80/11, Jessica Lenahan (Gonzales) (Estados Unidos)	51		X	
Caso. 12.776, Informe No. 81/11, Jeffrey Timothy Landrigan (Estados Unidos)	51			X
Caso 11.575, 12.333 y 12.341, Informe No. 52/13, Clarence Allen Jackey y otros; Miguel Ángel Flores, James Wilson Chambers (Estados Unidos)	51			X
Caso 12.864, Informe No. 53/13, Iván Teleguz (Estados Unidos)	51			X
Caso 12.422, Informe No. 13/14, Abu-Ali Abdur' Rahman (Estados Unidos)	51			X
Caso 12.873, Informe No. 44/14, Edgar Tamayo Arias (Estados Unidos)	51			X
Caso 12.833, Informe No. 11/15, Felix Rocha Diaz (Estados Unidos)	51			X
Caso 12.831, Informe No. 78/15, Kevin Cooper (Estados Unidos)	51			X
Caso 12.994, Informe No. 79/15, Bernardo Aban Tercero (Estados Unidos)	51			X

<sup>42</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2005*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 185-186.

Caso 12.834, Informe No. 50/16, Trabajadores indocumentados (Estados Unidos)	51			X
Caso 12.028, Informe No. 47/01, Donnason Knights (Grenada)	51		X	
Caso 11.765, Informe No. 55/02, Paul Lallion (Grenada)	51		X	
Caso 12.158, Informe No. 56/02, Benedict Jacob (Grenada)	51		X	
Caso 11.625, Informe No. 4/01, María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala)	51		X	
Caso 9207, Informe No. 58/01, Oscar Manuel Gramajo López (Guatemala)	51		X	
Caso 10.626 Remigio Domingo Morales y Rafael Sánchez; Caso 10.627 Pedro Tau Cac; Caso 11.198(A) José María Ixcaya Pixtay y otros; Caso 10.799 Catalino Chochoy y otros; Caso 10.751 Juan Galicia Hernández y otros y Caso 10.901 Antulio Delgado, Informe No. 59/01 Remigio Domingo Morales y otros (Guatemala)	51		X	
Caso 9111, Informe No. 60/01, Ileana del Rosario Solares Castillo y otros (Guatemala)	51		X	
Caso 11.382, Informe No. 57/02, Trabajadores de la Hacienda San Juan, Finca "La Exacta" (Guatemala)	51		X	
Caso 11.312, Informe No. 66/03, Emilio Tec Pop (Guatemala)	49		X	
Caso 11.766, Informe No. 67/03, Irma Flaquer (Guatemala)	49		X	
Caso 11.197, Informe No. 68/03, Comunidad San Vicente de los Cimientos (Guatemala)	49		X	
Caso 9.168, Informe No. 29/04, Jorge Alberto Rosal Paz (Guatemala)	49		X	
Petición 133-04, Informe No. 99/05, José Miguel Mérida Escobar (Guatemala)	49		X	
Caso 10.855, Informe No. 100/05, Pedro García Chuc (Guatemala)	49		X	
Caso 11.171, Informe No. 69/06, Tomas Lares Cipriano (Guatemala)	51		X	
Caso 11.658, Informe No. 80/07, Martín Pelicó Coxic (Guatemala)	51		X	
Caso 11.422, Informe No. 1/12, Mario Alioto López Sánchez (Guatemala)	49		X	
Caso. 12.546, Informe No. 30/12, Juan Jacobo Arbenz Guzmán (Guatemala)	49		X	
Petición 12.591, Informe No. 123/12, Ángelica Jerónimo Juárez (Guatemala) <sup>43</sup>	49	X		

<sup>43</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2013*, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 879-885.

Petición 279-03, Informe No. 39/15 Fredy Rolando Hernández Rodríguez y otros (Guatemala)	49		X	
Caso 12.264, Informe No. 1/06, Franz Britton (Guyana)	51			X
Caso 12.504, Informe No. 81/07 Daniel y Kornel Vaux (Guyana)	51		X	
Caso 11.335, Informe No. 78/02, Guy Malary (Haití)	51			X
Petición 11.805, Informe No. 124/12, Carlos Enrique Jaco (Honduras) <sup>44</sup>	49	X		
Caso 12.547, Informe No. 62/13, Rigoberto Cacho Reyes (Honduras) <sup>45</sup>	49	X		
Casos 11.826, 11.843, 11.846 y 11.847, Informe No. 49/01, Leroy Lamey, Kevin Mykoo, Milton Montique y Dalton Daley (Jamaica)	51		X	
Caso 12.069, Informe No. 50/01, Damion Thomas (Jamaica)	51		X	
Caso 12.183, Informe No. 127/01, Joseph Thomas (Jamaica)	51		X	
Caso 12.275, Informe No. 58/02, Denton Aitken (Jamaica)	51		X	
Caso 12.347, Informe No. 76/02, Dave Sewell (Jamaica)	51		X	
Caso 12.417, Informe No. 41/04, Whitley Myrie (Jamaica)	51			X
Caso 12.418, Informe No. 92/05, Michael Gayle (Jamaica)	51		X	
Caso 12.447, Informe No. 61/06, Derrick Tracey (Jamaica)	51		X	
Caso 11.565, Informe No. 53/01, Hermanas González Pérez (México)	51			X
Caso 11.807, Informe No. 69/03, José Guadarrama (México) <sup>46</sup>	49	X		
Petición 388-01, Informe 101/05 Alejandro Ortiz Ramírez (México) <sup>47</sup>	49	X		
Caso 12.130, Informe No. 2/06, Miguel Orlando Muñoz Guzmán (México)	51			X
Petición 161-02, Informe No. 21/07, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto (México) <sup>48</sup>	49	X		
Caso 11.822, Informe No. 24/09, Reyes Penagos Martínez y otros (México)	49		X	

<sup>44</sup> Ver CIDH, Informe de Solución Amistosa No. 124/12, Caso 11.805 (Carlos Enrique Jaco), de fecha de 12 de noviembre de 2012.

<sup>45</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2014*, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 956-960.

<sup>46</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2007*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 552-560.

<sup>47</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2007*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 561-562.

<sup>48</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2012*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 833-844.

Caso 12.228, Informe No. 117/09, Alfonso Martín del Campo Dodd (México)	51		X	
Caso 12.642, Informe No. 90/10, José Iván Correa Arévalo (México)	49		X	
Caso 12.660, Informe No. 91/10, Ricardo Uacán Seca (México) <sup>49</sup>	49	X		
Caso 12.623, Informe No. 164/10, Luis Rey García (México) <sup>50</sup>	49	X		
Petición 318-05, Informe No. 68/12, Gerónimo Gómez López (México) <sup>51</sup>	49	X		
Caso 12.551, Informe No. 51/13, Paloma Angélica Escobar Ledezma y otros (México)	51		X	
Caso 12.769, Informe No. 65/14, Irineo Martínez Torres y Calendario (México)	49		X	
Caso 12.689, Informe No. 80/15, J.S.C.H y M.G.S (México) <sup>52</sup>	51	X		
Caso 12.813, Informe No. 81/15, Blanca Olivia Contreras Vital y otros (México)	49		X	
Petición 1171-09, Informe No. 15/16, Ananías Laparra y familiares (México)	49		X	
Caso 12.847, Informe No. 16/16, Vicenta Sanchez Valdivieso (México)	49		X	
Caso 11.564, Informe No. 51/16, Gilberto Jiménez Hernández "La Grandeza" (México)	51			X
Caso 11.381 Informe No. 100/01, Milton García Fajardo (Nicaragua)	51		X	
Caso 12.848, Informe No. 42/16, Señora N, (Panamá) <sup>53</sup>	49	X		
Caso 11.506, Informe No. 77/02, Waldemar Gerónimo Pinheiro y José Víctor Dos Santos (Paraguay)	51		X	
Caso 11.607, (Informe No. 85/09 Víctor Hugo Maciel (Paraguay)	51		X	
Caso 12.431, Informe No. 121/10, Carlos Alberto Mojoli Vargas (Paraguay) <sup>54</sup>	51	X		

<sup>49</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2012*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 876-881.

<sup>50</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2011*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 982-987.

<sup>51</sup> Ver CIDH, Informe de Solución Amistosa No. 68/12, Petición 318-05, (Gerónimo Gómez López vs. México), de fecha 17 de julio de 2012.

<sup>52</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones Amistosas en casos individuales, párrs. 1685-1708.

<sup>53</sup> Ver CIDH, Informe No. 42/16, Caso 12.848. Solución Amistosa. Señora N. Panamá. 25 de septiembre de 2016.

<sup>54</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2012*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 904-908.

Caso 12.358, Informe No. 24/13, Octavio Rubén González Acosta (Paraguay)	49		X	
Petición 1097-06, Informe No. 25/13, Miriam Beatriz Riquelme Ramírez (Paraguay) <sup>55</sup>	49	X		
Caso 11.800, Informe No. 110/00, César Cabrejos Bernuy (Perú) <sup>56</sup>	51	X		
Caso 11.031, Informe No. 111/00, Pedro Pablo López González y otros (Perú)	51		X	
Casos 10.247 y otros, Informe No. 101/01, Luis Miguel Pasache Vidal y otros (Perú)	51		X	
Caso 11.099, Informe No. 112/00, Yone Cruz Ocalio (Perú)	51		X	
Caso 12.035; Informe No. 75/02(bis), Pablo Ignacio Livia Robles (Perú) <sup>57</sup>	49	X		
Caso 11.149, Informe No. 70/03 Augusto Alejandro Zúñiga Paz (Perú) <sup>58</sup>	49	X		
Caso 12.191, Informe No. 71/03, María Mamerita Mestanza (Perú)	49		X	
Caso 12.078, Informe No. 31/04, Ricardo Semoza Di Carlo (Perú)	49		X	
Petición 185-02, Informe No. 107/05, Roger Herminio Salas Gamboa (Perú) <sup>59</sup>	49	X		
Caso 12.033, Informe No. 49/06, Rómulo Torres Ventocilla (Perú) <sup>60</sup>	49	X		
Petición 711-01 y otras, Informe No. 50/06, Miguel Grimaldo Castañeda Sánchez y otros; Petición 33-03 y otras, Informe No. 109/06, Héctor Núñez Julia y otros (Perú); Petición 732-01 y otras; Petición 758-01 y otras, Informe 20/07 Eulogio Miguel Melgarejo y otros (Perú); Petición 758-01, Informe No. 71/07, Hernán Atilio Aguirre Moreno y otros (Perú)	49		X	
Petición 494-04, Informe No. 20/08, Romeo Edgardo Vargas Romero (Perú)	49		X	
Peticiones 71-06 y otras, Informe No. 22/11, Gloria José Yaquetto Paredes y otros (Perú)	49		X	
Caso 12.041, Informe No. 69/14, M.M. (Perú) <sup>61</sup>	49	X		
Petición 288-08, Informe No. 6916, Jesús Salvador Ferreyra González (Perú)	49		X	

<sup>55</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2014, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 1101-1105.

<sup>56</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2010, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 928-935.

<sup>57</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2005, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 332-335.

<sup>58</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2005, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 336 y 337.

<sup>59</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 1094 y 1107.

<sup>60</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2007, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 613-616.

<sup>61</sup> Ver CIDH, Informe de Solución Amistosa No. 69/14, Caso 12.041 (M.M. vs Perú), de fecha 25 de julio de 2014.

Petición 1339-07, Informe No. 70/16, Tito Guido Gallegos Gallegos, (Perú)	49		X	
Caso 12.174, Informe No. 31/12, Israel Gerardo Paredes Acosta (República Dominicana) <sup>62</sup>	49	X		
Caso 12.269, Informe No. 28/09, Dexter Lendore (Trinidad y Tobago)	51			X
Caso 11.500, Informe No. 124/06, Tomás Eduardo Cirio (Uruguay) <sup>63</sup>	51	X		
Petición 228-07, Informe No. 18/10, Carlos Dogliani (Uruguay) <sup>64</sup>	49	X		
Caso 12.553, Informe No. 86/09, Jorge José y Dante Peirano Basso (Uruguay)	51		X	
Caso 12.555, Informe No. 110/06, Sebastián Echaniz Alcorta y Juan Víctor Galarza Mendiola (Venezuela)	49			X
Caso 11.706, Informe No. 32/12, Pueblo indígena Yanomami de Haximú (Venezuela)	49		X	
Caso 12.473, Informe No. 63/13, Jesús Manuel Cárdenas y otros (Venezuela)	49		X	
<b>Total de asuntos en Seguimiento</b>	<b>Art. 49 = 117</b> <b>Art. 51 = 103</b> <b>Total: 220</b>	Cumplimiento total Art. 49 = 41 Art. 51 = 7 Total: 48	Cumplimiento parcial Art. 49 = 74 Art. 51 = 66 Total: 140	Pendiente de cumplimiento Art. 49 = 2 Art. 51 = 30 Total: 32

### Caso 11.804, Informe No. 91/03, Juan Ángel Greco (Argentina)

86. El 22 de octubre de 2003, mediante Informe No. 91/03 la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Juan Ángel Greco. En resumen, los peticionarios alegaron que el 25 de junio de 1990 el Sr. Greco, de 24 años de edad, fue detenido ilegalmente y maltratado cuando trataba de obtener asistencia policial al denunciar una agresión. Los peticionarios señalaron que mientras el Sr. Greco estaba detenido en la Comisaría de Puerto Vilelas, Provincia del Chaco, se produjo un incendio en su celda, en circunstancias no aclaradas, que le provocó graves quemaduras. Asimismo, sostuvieron que la Policía era responsable de provocar el incendio y de demorar varias horas el traslado de la víctima al hospital. El Sr. Greco estuvo hospitalizado hasta su fallecimiento, el 4 de julio de 1990, y enterrado, conforme a lo denunciado por los peticionarios, sin una autopsia adecuada. Los peticionarios señalaron también que el Estado no realizó una investigación adecuada para aclarar los hechos aducidos, con lo cual denegó a la familia su derecho a que se hiciera justicia y a obtener una indemnización.

87. De conformidad con el acuerdo de solución amistosa, el Estado se comprometió a:

#### II. Medidas de reparación no pecuniarias:

1. Enviar a los peticionarios y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por intermedio de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, fotocopia certificada y legalizada de dos causas en la que la Provincia de Chaco ha solicitado el reexamen.

<sup>62</sup> Ver CIDH, Informe de Solución Amistosa No. 31/12, Caso 12.174 (Israel Gerardo Paredes Acosta vs. República Dominicana), de fecha 20 de marzo de 2012.

<sup>63</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2010*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 1020-1027.

<sup>64</sup> Ver CIDH, *Informe Anual 2012*, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 1033-1039.

2. Instar, en el marco de sus competencias, la reapertura de la causa penal y las investigaciones correspondientes.
3. Disponer la reapertura del sumario administrativo N°130/91-250690-1401 una vez reabierta la causa penal.
4. Asegurar en el marco de sus competencias, el acceso de los familiares de la víctima a las investigaciones judiciales y administrativas.

### III. Reparación económica

Reparar económicamente a los familiares de Juan Ángel Greco en la suma de Pesos Trescientos Mil (\$300.000) que se pagarán a la Sra. Zulma Bastianini de Greco a razón de Pesos Treinta Mil (\$30.000) mensuales en el plazo previsto en el Punto 3 del presente Ítem, comprendiendo la misma daño material, daño moral, lucro cesante, gastos, honorarios y todo otro rubro que pudiera derivarse de la responsabilidad asumida por la Provincia del Chaco. [...]

### IV. Otras reparaciones:

1. Publicar el acuerdo en los principales medios de prensa gráficos nacionales y de la provincia del Chaco.
2. Continuar impulsando medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de los Derechos Humanos. Al respecto el Estado dejó constancia en el acuerdo de que se había elaborado y remitido a la Cámara de Diputados de la Provincia para su estudio y aprobación un Proyecto de Ley a través del cual se crea una Fiscalía Penal de Derechos Humanos.
3. Fortalecer la tarea de la Comisión Permanente de Control de los Centros de Detención creada por Resolución del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia del Chaco Nro. 119, de fecha 24 de febrero de 2.003.
4. Acentuar la tarea del Órgano de Control Institucional (O.C.I.) creado por el Art. 35 de la Ley Orgánica Policial de la Provincia del Chaco N° 4.987 diseccionándolo hacia una más efectiva protección de los derechos humanos, por parte de la Policía de la Provincia. En ese sentido, el Estado deja constancia que por iniciativa del Poder Ejecutivo se constituyó en el ámbito de la Cámara de Diputados, el Consejo Provincial para la Promoción y Educación de los Derechos Humanos creado por Ley Nro. 4.912, para lo cual ya se han designado y convocado los representantes de los distintos organismos y poderes intervinientes. (Numeraciones por fuera del texto del acuerdo de solución amistosa).

88. En su Informe Anual del año 2009<sup>65</sup>, la CIDH dio por cumplidos los aspectos del acuerdo de solución amistosa relacionados tanto con la indemnización monetaria, como los aspectos relacionados con la publicación del mismo.

89. La CIDH ha dado seguimiento al cumplimiento de este acuerdo de solución amistosa desde su publicación en el año 2003, a través de solicitudes de información y el acompañamiento a las partes en reuniones de trabajo.

90. En relación con el punto 2 de la cláusula II sobre reapertura de la causa penal e investigación penal, entre el 2010 al 2014, las partes proporcionaron información según la cual la causa penal fue reabierta

<sup>65</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 43-68. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap2-D.pdf>

en contra el Comisario Principal de la Policía Juan Carlos Escobar, el Subcomisario de Policía Adolfo Eduardo Valdez y el Sargento Primero Julio Ramón Obregón. La CIDH fue informada por los peticionarios en el 2011, que se habría iniciado el juicio oral para determinar la responsabilidad de los agentes policiales involucrados en los hechos y acusados por el delito de abandono de persona seguido de muerte. Sin embargo, los peticionarios denunciaron en reiteradas ocasiones la falta de avances en las investigaciones debido a la reticencia de las autoridades judiciales.

91. El 9 de diciembre de 2013, el Estado informó que la Sentencia No. 62 dictada el 31 de mayo de 2012, por la Cámara Primera en lo Criminal, en contra de los cuatro policías Juan Carlos Escobar, Adolfo Eduardo Valdez, Ramón Antonio Brunet y Julio Ramón Obregón, quedó firme por no haberse interpuesto ningún recurso en contra. Dicha sentencia absolvió de culpa a Juan Carlos Escobar y a Ramón Antonio Brunet por el delito de abandono de persona seguido de muerte; además de condenar a Adolfo Eduardo Valdez, y Julio Ramón Obregón como autores responsables de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a sufrir la pena de un año y diez meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble tiempo de la pena impuesta.

92. El 19 de diciembre de 2013, los peticionarios informaron que si bien después de la firma del acuerdo de solución amistosa, la Justicia Provincial inició el juicio a los responsables de la muerte del Sr. Greco; éste se habría realizado sobre la base de pruebas producidas por una investigación deficiente, las cuales han entorpecido el proceso y la determinación de la responsabilidad de los agentes policiales implicados en los hechos. Mediante dicha comunicación reclaman al Estado dilucidar los hechos que provocaron la muerte de Juan Ángel Greco y sancionar a los responsables, así como determinar las razones por las que originalmente se realizó una investigación deficiente y determinar la responsabilidad de los funcionarios que la llevaron adelante.

93. El 12 de diciembre de 2016, los peticionarios reiteraron que la investigación penal sobre la muerte de Juan Ángel Greco no esclareció las circunstancias de su fallecimiento, y no se sancionó a los responsables por el delito de tortura, a pesar de haberse condenado a los policías por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

94. En relación al punto 3 de la cláusula II del acuerdo de solución amistosa sobre la reapertura del sumario administrativo contra el Comisario Principal de la Policía Juan Carlos Escobar, el Subcomisario de Policía Adolfo Eduardo Valdez y el Sargento Primero Julio Ramón Obregón. El 26 de marzo de 2011, el Estado informó que se habría ampliado el sumario administrativo a todo el personal policial involucrado en los hechos. Los peticionarios corroboraron dicha información en sus comunicaciones de 2011. El 12 de diciembre de 2016, los peticionarios indicaron que no cuentan con información actualizada sobre el particular; sin que se cuente con información al respecto por parte del Estado.

95. En relación al punto 2 de la cláusula IV sobre el impulso de las medidas legislativas y administrativas para la mejor protección de los derechos humanos, en particular sobre *“el impulso de un acuerdo que se había elaborado y remitido a la Cámara de Diputados de la Provincia para su estudio y aprobación de un Proyecto de Ley a través del cual se crea una Fiscalía Penal de Derechos Humanos”*, las partes han proporcionado información según la cual la mencionada Fiscalía habría sido creada por el Estado. La CIDH observa que el 7 de julio de 2011, el Estado remitió fotocopia de la Ley N° 6.786 sancionada por el parlamento local y promulgada por Decreto N° 982 del 18 de mayo de 2011, mediante la que se modifica la figura de la Fiscalía en lo Penal Especial en Derechos Humanos. Al respecto, a pesar de que los peticionarios reconcomen la creación de dicho órgano, han informado entre 2011 y 2015 que la actuación material de la Fiscalía no ha sido efectiva.

96. El 12 de diciembre de 2016, los peticionarios valoraron nuevamente la creación y puesta en marcha de la Fiscalía Especial. Asimismo, reiteraron que ésta no ha tenido una relevancia que permita dar cuenta del funcionamiento efectivo de dicha institución, por lo que solicitan que la CIDH inste al Estado a proporcionar información actualizada sobre la labor de la Fiscalía que incluya la cantidad de casos que recibe, los que lleva a juicio, la partida presupuestaria, la cantidad de funcionarios destinados al trabajo, en dicha institución entre otros temas.

97. Dentro de este mismo rubro, las partes han dialogado y avanzado sobre la creación de un Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles inhumanos o Degradantes. Al respecto, según lo informado por las partes, un Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Cruelles, Inhumanos y Degradantes comenzó su funcionamiento en mayo de 2012, sobre este órgano los peticionarios han cuestionado la falta de presupuesto, el cual, según su escrito de diciembre de 2016, es bastante precario, otorgándosele solo efectivamente un 30% del total que había sido inicialmente previsto. Los peticionarios solicitaron a la Comisión que inste al Estado para que proporcione información sobre el funcionamiento del Comité, incluyendo la partida presupuestaria.

98. Tomando en consideración los elementos anteriormente enunciados, la CIDH considera que existe un cumplimiento parcial del punto 2 de la cláusula IV sobre el impulso de “medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de los Derechos Humanos”. Al mismo tiempo, la CIDH observa que el alcance de dicha cláusula merece una determinación más específica de sus componentes, lo cual debe ser delimitado por las partes conjuntamente, para finalizar el cumplimiento de la misma. Por lo anterior, la CIDH insta a las partes a dialogar sobre las condiciones exigibles para que el Estado dé cumplimiento total de dicho punto del acuerdo de solución amistosa.

99. El 14 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. Según lo resumido supra, los peticionarios presentaron un informe actualizado sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa el 12 de diciembre de 2016. El Estado no presentó información en esa oportunidad.

100. El 9 de enero de 2017, el Estado indicó en cuanto a la cláusula referida a la reapertura del sumario administrativo, que ésta se encuentra debidamente cumplida, en virtud de que, se dio una reapertura del sumario administrativo y se dictó el decreto provincial No. 381 de 17 de marzo de 2014, por el cual se procedió a sancionar administrativamente a los agentes policiales Sargento Julio Obregón y Subcomisario Adolfo Valdez con la sanción de cesantía, y al Comisario Principal Juan Escobar y al ex Cabo de Policía Ramón Brunet con la sanción de 35 días de arresto y el sobreseimiento definitivo al Suboficial Principal Jorge Antonio González. Dicha información fue trasladada a los peticionarios para que presentaran sus observaciones.

101. El 18 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento.

102. El 13 de octubre de 2017, el Estado reiteró la información presentada en años anteriores sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. Dicha información fue trasladada a los peticionarios para que presentaran sus observaciones.

103. El 13 de octubre de 2017, los peticionarios indicaron que si bien existe una sanción administrativa, los familiares y representantes no tuvieron participación en el proceso de investigación ni acceso al expediente, en violación del acuerdo de solución amistosa. Al mismo tiempo, indicaron que es sumamente preocupante que no hubo oportunidad de dialogo con las autoridades en el proceso administrativo y que desconoció los motivos, circunstancias y pruebas que motivaron la sanción administrativa de algunos policías y la absolución de otros, y que desconocen la sanción aplicada. Los peticionarios reiteraron que no han recibido información sobre la investigación penal Greco II por parte del Estado, pero que tienen conocimiento de que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco se presentó como querellante en dicha causa y que fue aceptado el 11 de mayo de 2017 en dicha calidad. Los peticionarios también indicaron en relación a las reformas legislativas e institucionales que el Estado no ha presentado información clara y concisa sobre el presupuesto asignado al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos cruells, inhumanos o degradantes, ni sobre la labor de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos.

104. Finalmente, los peticionarios indicaron que para poder valorar el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa se requeriría que el Estado entregara información sobre los siguientes puntos:

1) **De la investigación penal llamada “Greco II”.** La información deberá contener una descripción completa sobre cómo se inició la causa, si hay imputados, cuáles son los hechos objeto de investigación, qué diligencias han sido realizadas, cuáles serán los próximos pasos en la investigación y cuál ha sido el rol de la fiscalía especial de derechos humanos.

2) **De la investigación administrativa.** La información debe abarcar las dos causas administrativas, los hechos que fueron investigados en ambos, el resultado final de ambas, las diligencias que fueron emprendidas y la motivación y justificación respecto a su cierre.

3) **El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos y penas cueles, inhumanos o degradantes.** Debe incluir la partida presupuestaria que se le ha asignado y entregado desde el inicio de sus funciones y hasta la fecha.

4) **Fiscalía Especial de Derechos Humanos y la Fiscalía Adjunta de Derechos Humanos.** La información debe incluir la partida presupuestaria asignada, la cantidad de personal que tienen, la cantidad de causas que tienen, cuántas han sido elevadas a juicio oral, cuáles han sido cerradas o archivadas y su motivo, así como las acciones que tomarán para acelerar exponencialmente su labor.

105. La Comisión observa que no han existido avances sustanciales en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en el último año, e insta a las partes a trabajar conjuntamente en la definición de fórmulas que permitan medir e impulsar el cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa. La Comisión también insta al Estado a presentar información detallada sobre los componentes solicitados por los peticionarios *supra* de manera que sea un punto de partida en dicha metodología de trabajo.

106. Por lo expuesto, la CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido e insta al Estado a suministrar información sobre la cláusula II (puntos 1, 3 y 4); y sobre la cláusula IV (puntos 2, 3 y 4) anteriormente señalados. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 12.080, Informe No. 102/05, Sergio Schiavini y María Teresa Schnack (Argentina)**

107. El 27 de octubre de 2005, mediante Informe No. 102/05 la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Sergio Schiavini y María Teresa Schnack. En resumen, los peticionarios habían planteado alegatos referentes a la responsabilidad del Estado por la muerte de Sergio Andrés Schiavini, ocurrida el 29 de mayo de 1991 durante un enfrentamiento entre miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y un grupo de asaltantes que tomaron como rehenes a varias personas entre las que se encontraba el joven Schiavini. Los peticionarios señalaron como agravios por parte del Estado el uso excesivo de la fuerza durante el tiroteo; la denegación de protección y garantías judiciales; y los actos de persecución a los que se vio sometida María Teresa Schnack a partir de la muerte de su hijo, Sergio Schiavini, por impulsar los procesos de investigación.

108. Por medio del acuerdo de solución amistosa, el Estado reconoció su responsabilidad por “los hechos sucedidos y la violación de los derechos y garantías reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que surgen del informe de admisibilidad No. 5/02 adoptado por la CIDH en el marco de su 114º período ordinario de sesiones.

109. De conformidad con dicho acuerdo, el Estado se comprometió a:

1. Constituir un Tribunal Arbitral “*ad-hoc*” a efectos de que éste determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a los causahabientes de Sergio Andrés Schiavini, integrado por tres expertos independientes, de reconocida versación en materia de derechos humanos y alta calidad moral, uno designado a propuesta de los peticionarios, el segundo a propuesta del Estado nacional y el tercero a propuesta de los dos expertos designados por

las partes. El Tribunal deberá estar integrado, a más tardar, dentro de los 30 días siguientes a la aprobación del presente acuerdo por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

2. Definir de común acuerdo el procedimiento a aplicar, labrando un acta y enviándola a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A tal efecto, las partes designarán un representante para participar en las deliberaciones sobre el procedimiento. A efectos de representar al Estado nacional, delegase en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la designación de un funcionario del área con competencia en materia de derechos humanos en ambos Ministerios.

3. Conformar un grupo de trabajo técnico, al que se invitará a participar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a efectos de realizar los estudios y diligencias necesarias para someter a consideración del Poder Legislativo, y en su Caso, de las autoridades que fueran competentes, de las siguientes iniciativas tendientes a adoptar las medidas necesarias para adecuar a estándares internacionales la normativa actualmente en vigor, de conformidad con el punto 2 del acta de fecha 11 de noviembre de 2004:

- a) Proyecto de reforma legislativa que establezca la obligatoriedad, sin excepción, de la realización de autopsias en todo Caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, incluyendo la prohibición de la participación en la misma de los miembros de las fuerzas de seguridad en aquellos hechos en los que hayan tenido participación;
- b) Proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación mediante el cual se incorpora el derecho de los familiares de la víctima de optar por designar un perito de parte con carácter previo a la realización de la autopsia;
- c) Análisis de la normativa vigente relacionada con la actuación del cuerpo médico forense, con el objeto de evaluar la posibilidad de modificaciones que contribuyan a garantizar transparencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones;
- d) Proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación, mediante la cual se introduce, como causal de revisión, la violación de derechos humanos;
- e) Proyecto de reforma al Código Penal de la Nación, mediante la cual se introduce, como causal de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, la violación de derechos humanos;
- f) Evaluación de la legislación interna en materia de toma de rehenes y uso de la fuerza, a efectos de adecuarla a los estándares internacionales conforme al principio N° 3 de la Resolución 1989/65 de la ONU;
- g) Propuesta de que, para el eventual caso de que el recurso de revisión vinculado con el Caso Schiavini interpuesto por la Procuración General provincial ante la Sala 111 del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires no prospere, se constituya una "Comisión de la Verdad", a cargo del Estado nacional, con el objeto facilitar la tutela efectiva de tal derecho;
- h) Elaboración de un proyecto normativo mediante el cual se establezca un procedimiento para la tramitación y diligenciamiento de las peticiones que se sustancien ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que contemple la creación de un órgano específico con competencia en el proceso de toma de decisiones - incluyendo la institución de la "solución amistosa" - y un mecanismo de

cumplimiento de las recomendaciones y/o sentencias de la Comisión *y/o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*.

4. Facilitar las actividades del grupo de trabajo, y proporcionar el soporte técnico y el uso de las instalaciones que sean necesarias para el desarrollo de su tarea, a informar periódicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de los resultados de la gestión encomendada al grupo técnico, invitándose a la Comisión a participar activamente en la evaluación de los proyectos que de allí surjan, como así también del seguimiento y desarrollo de tales iniciativas.

5. Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la República Argentina, en el diario "La Unión" de Lomas de Zamora, y en los diarios "Clarín", "La Nación" y "Página/12", una vez homologado.

110. En el informe anual del 2009<sup>66</sup>, la CIDH concluyó que los aspectos relativos a la indemnización monetaria se encuentran cumplidos.

111. El 19 de noviembre de 2010, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa.

112. Mediante comunicación de fecha 13 de enero de 2011, el Estado presentó información sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de los puntos que conforman el anterior acuerdo de solución amistosa. En ese sentido, en relación con las medidas de reparación no pecuniarias, el Estado informó los siguientes avances: En primer lugar, informó sobre la conformación de la Comisión de la Verdad la cual está integrada por el Dr. Martín Esteban Scotto, nombrado por la parte peticionaria, el Dr. Carlos Alberto Beraldi, propuesto por el Estado Nacional, y el Dr. Héctor Granillo Fernández, designado por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, indicó que con el fin de que dicha Comisión inicie sus trabajos se solicitó al gobierno provincial copia de tres causas judiciales y de una administrativa, las cuales fueron detalladas por el Estado en su presentación. Adicionalmente, informó sobre la reunión de trabajo celebrada el 1 de septiembre de 2010, en la que los expertos integrantes de la Comisión acordaron trabajar conjuntamente en el borrador del Reglamento de la Comisión.

113. Segundo, con respecto a las reformas normativas comprometidas, el Estado informó que los respectivos proyectos se encuentran en evaluación en las áreas estatales correspondientes. En cuanto a la reforma normativa tendiente a ordenar el procedimiento ante los Organismos Internacionales de promoción y protección de Derechos Humanos, el Estado informó que se llevó a cabo una reunión de trabajo convocada en el marco del 140º período de sesiones de la CIDH, en la que participaron la Comisionada Luz Patricia Mejía, representantes del CELS y CEJIL y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y de la Cancillería. En dicha reunión se expusieron los avances producidos en la preparación del proyecto de resolución conjunta, así como sobre la posibilidad de avanzar en un proyecto normativo de mayor jerarquía en cumplimiento de lo acordado en el presente seguimiento.

114. El 25 de octubre de 2011, la Comisión solicitó nuevamente información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. En relación con las reformas legislativas, el Estado actualizó la información sobre tres temas: la realización de autopsias, en materia recursiva y en seguridad ciudadana. Con respecto al primero, relativo al compromiso 3.a) del acuerdo, indicó que la obligatoriedad de la realización de autopsias en todos los casos de muerte sospechosa y violenta, está prevista "tanto el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (CPPBA), como el Código de Procedimientos de la Nación (CPPN) prevén la obligatoriedad de la realización de autopsias en dichos casos". Asimismo, indicó que dichos códigos, también, prevén la vía de la recusación por las mismas causales aplicables a los jueces, la cual puede ser utilizada de considerarse necesario cuestionar la designación de algún perito por su presunta parcialidad. En lo relativo al compromiso 3.b) del acuerdo destacó que, de

<sup>66</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 73. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap2-D.pdf>

conformidad con la legislación vigente, los familiares pueden participar y controlar la producción de la prueba, bajo la figura procesal del particular damnificado, que los faculta a proponer la participación de un perito de parte. Finalmente en cuanto al compromiso 3.c) del acuerdo referido a la normativa que reglamenta la actuación del cuerpo médico forense, el Estado destacó las medidas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia Nacional a través de las Acordadas 16/08, 47/09 y 22/10. En dicho marco, a través de la Acordada 47/09 se dictó el reglamento general que regula los aspectos generales que hacen a la actividad del Cuerpo Médico.

115. En cuanto a la inclusión de violaciones de derechos humanos como causal de revisión a la que se refiere el compromiso 3.d) del acuerdo, el Estado indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se encuentra elaborando un proyecto de ley para impulsar la modificación del código procesal penal de la nación, a fin de incorporar como causal de procedencia del recurso de revisión, los casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte una sentencia.

116. Finalmente, en cuanto a la implementación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana a las que se refiere el compromiso 3.f) del acuerdo, el Estado anunció información producida por el Ministerio de Seguridad Nacional respecto a las medidas adoptadas por cada fuerza de seguridad en materia de toma de rehenes.

117. Por su parte los peticionarios, expresaron su preocupación a la Comisión por la falta del cumplimiento por parte del Estado a dos puntos del acuerdo: el relativo al funcionamiento de la Comisión de la Verdad; y el referente a la adopción de normas dirigidas a facilitar el procedimiento interno con respecto a las denuncias internacionales. Respecto de dichos extremos del acuerdo, la Comisión observa que el Estado no proporcionó información alguna.

118. Mediante comunicación de 27 de noviembre de 2012, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones pendientes de cumplimiento. Con nota de fecha 18 de diciembre de 2012, los peticionarios brindaron información actualizada haciendo referencia en primer lugar, al Proyecto de reforma legislativa “que establezca la obligatoriedad, sin excepción, de la realización de autopsias en todo caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, incluyendo la prohibición de la participación en la misma de los miembros de las fuerzas de seguridad en aquellos hechos en los que hayan tenido participación”. Indicaron que oportunamente presentaron dicho proyecto, pero que habiendo transcurrido varios años, no se habría obtenido respuesta al mismo y que el tema no se habría abordado en ninguna reunión de trabajo con la Secretaria de Derechos Humanos. Asimismo, informaron respecto del Proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación, mediante la cual se incorporaría el derecho de los familiares de la víctima de optar por designar un perito de parte con carácter previo a la realización de la autopsia; y del Proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación, mediante la cual se introduciría, como causal de revisión, la violación de derechos humanos; que hasta la fecha y luego de varios años ambos proyectos presentados, no habrían sido tratados, ni con Secretaria de Derechos Humanos.

119. En cuanto a la evaluación de la legislación interna en materia de toma de rehenes y uso de la fuerza, a efectos de adecuarla a los estándares internacionales conforme al principio N° 3 de la Resolución 1989/65 de la ONU; los peticionarios indicaron que dicho punto no habría sido introducido en la agenda de trabajo de las reuniones mantenidas con la Secretaria de Derechos Humanos y la Representación Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional (REDHU) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

120. Con respecto a la conformación y funcionamiento de la "Comisión de la Verdad", los peticionarios informaron que en el mes de septiembre de 2010 se constituyó formalmente y que en julio de 2012, la Representación Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional (REDHU) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto procedió a la entrega de la copia íntegra de los expedientes judiciales tramitados en la Argentina a los integrantes de la referida Comisión. No obstante lo cual, indican que aún se encontraría pendiente la aprobación de su Reglamento por parte del Estado Argentino; lo que habría imposibilitado su pleno funcionamiento desde julio de 2012 a la fecha.

121. Finalmente, en cuanto a la elaboración de un proyecto normativo mediante el cual se establezca un procedimiento para la tramitación y diligenciamiento de las peticiones que se sustancien ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "que contemple la creación de un órgano específico con competencia en el proceso de toma de decisiones - incluyendo la institución de la "solución amistosa" - y un mecanismo de cumplimiento de las recomendaciones y/o sentencias de la Comisión y/o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos"; los peticionarios indicaron que tomaron conocimiento de un proyecto normativo elaborado por el Estado Argentino, el cual fue rechazado y que resultaría ineficaz para el cumplimiento de las reparaciones comprometidas por el Gobierno Argentino en el presente caso. En suma, los peticionarios destacaron que si bien hay buena voluntad de algunos funcionarios del Estado Argentino para avanzar en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa suscripto, los avances son demasiado lentos y atentan contra la reparación oportunamente comprometida el 2 de marzo de 2005.

122. Mediante comunicación de fecha 9 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento. Solicitud que fue respondida por la parte peticionaria en comunicación del 30 de octubre de 2013, mediante la cual informaron que hasta la fecha no hubo respuesta por parte del Estado en cuanto a las reformas legislativas incluidas el acuerdo de solución amistosa. En cuanto a los demás puntos, repitió la información descrita anteriormente. Asimismo, la parte peticionaria reiteró su preocupación en el retraso del pleno funcionamiento de la Comisión de la Verdad, aspecto que desde su perspectiva sería fundamental para el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. De igual manera, informaron sobre la falta de cumplimiento en cuanto al compromiso del Estado para facilitar las labores del grupo de trabajo, el soporte técnico y de los permisos para la utilización de instalaciones necesarias para el desarrollo de sus labores; así como la falta de información acerca de los resultados alcanzados por el grupo técnico. Respecto de dicha información, la Comisión observa que el Estado no proporcionó información alguna.

123. El 4 de junio de 2014, la peticionaria presentó una comunicación en la que resaltó que a pesar de que han pasado 9 años desde la firma del acuerdo con el Estado, el mismo presenta un incumplimiento reiterado y parcial por parte del Gobierno Nacional.

124. El 4 de diciembre de 2014, la CIDH volvió a solicitar información actualizada sobre el cumplimiento. A la fecha no se ha recibido información de ninguna de las partes.

125. El 27 de agosto de 2015, en la ciudad de Buenos Aires tuvo lugar una reunión entre las partes facilitada por la CIDH, con el objetivo de promover el cumplimiento de los puntos pendientes de un acuerdo de solución amistosa. En la reunión la parte peticionaria expresó que a 13 años de la suscripción del acuerdo, el único punto cumplido a cabalidad por parte del Estado había sido el relativo a la indemnización pecuniaria; y que la medida de crucial importancia para la madre de la víctima consistía en la Comisión de la Verdad, para cuya instauración y funcionamiento se había perdido muchos años. Explicó que el último desafío que se había presentado se refería al Reglamento de la Comisión de la Verdad, el cual estaba pendiente de aprobación debido al cuestionamiento del Estado sobre los términos en los que había sido redactado el artículo 17, el cual contiene una cláusula de indemnidad. Dicha cláusula establecía que el Estado Nacional asume la obligación de mantener indemne a los miembros de la Comisión de la Verdad frente a cualquier tipo de reclamo del que pudieran ser objeto en razón de las funciones asignadas. Asimismo, durante la reunión la parte peticionaria entregó un informe escrito sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa; copia de la Nota SDH No. 657/15 de fecha 20 de julio de 2015 dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la cual la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia sustenta la improcedencia de una cláusula de indemnidad de los integrantes de la Comisión de la Verdad; copia de la comunicación dirigida por la peticionaria al Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 30 de mayo de 2014, en la cual relaciona todas las iniciativas legislativas presentadas por esa parte para que el Estado pudiera dar cumplimiento a los diferentes extremos del acuerdo relativos a reformas legislativas, así como de las dificultades presentadas para el funcionamiento de la Comisión de la Verdad; y copia de la nota de fecha 5 de junio de 2013 suscrita por los integrantes de la Comisión de la Verdad, por medio de la cual presentaron al Ministerio de Relaciones Exteriores, un Reglamento para la aprobación del Estado Nacional, como obligado en el acuerdo de solución amistosa.

126. Por su parte, en la reunión el Estado confirmó que existía un desafío en la conformación de la Comisión de la Verdad, relacionado con uno de los artículos de reglamento que se refiere a la inmunidad por las funciones que se cumplan los miembros de la Comisión; y explicó que de conformidad con el ordenamiento jurídico argentino el único instrumento por medio del cual se podría garantizar esa inmunidad sería una ley. Como resultados de la reunión, las partes se comprometieron a celebrar una reunión sobre el reglamento para explorar fórmulas alternativas.

127. Mediante comunicación del 2 de septiembre de 2015, el Estado presentó copia de la Nota SDH No. 580/15 de fecha 16 de junio de 2015 del Ministerio de Justicia dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el cumplimiento del Informe No. 102/05 de la CIDH, concretamente sobre los aspectos relacionados con la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, por medio de los cuales se habría avanzado en la adecuación normativa a los estándares internacionales de derechos humanos en el marco del compromiso asumido el punto 3 del acuerdo de solución amistosa, sin especificar de qué manera. En esa misma oportunidad, el Estado anunció que la reunión de las partes se había fijado para el 18 de septiembre de 2015.

128. El 15 de septiembre de 2015, la Comisión solicitó información actualizada sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. La Comisión toma nota de la información suministrada por ambas partes, en particular en lo relativo al funcionamiento de la Comisión de la Verdad y a las adecuaciones legislativas a los estándares internacionales de derechos humanos. En relación con lo primero, la Comisión comprende la preocupación expresada por la peticionaria sobre el tiempo invertido para poner en funcionamiento la Comisión de la Verdad, la cual fue integrada desde septiembre de 2010 gracias a los esfuerzos de ambas partes, y, al mismo tiempo observa, que por diferentes razones dicha Comisión se ha visto impedida de realizar sus trabajos. De conformidad con la información suministrada por las partes, la Comisión observa que desde junio de 2013 los miembros de la Comisión de la Verdad remitieron al Estado Nacional un borrador de reglamento para su aprobación y que éste se expidió sobre su imposibilidad de aceptar la cláusula de indemnidad consignada en el artículo 17 del citado proyecto de reglamento. En consideración a que la reunión de trabajo celebrada entre las partes en agosto de 2015 las partes confirmaron su interés en el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, aclararon los antecedentes de la inclusión de dicha cláusula en el reglamento y que expresaron su disposición a explorar fórmulas alternativas, la CIDH queda a la espera de los resultados de la reunión fijada para el 18 de septiembre de 2015, así como de todos los esfuerzos dirigidos a superar ese desafío.

129. En relación con los compromisos incluidos en el punto 3 del acuerdo de solución amistosa, dado que de conformidad con la información aportada por el Estado, la aprobación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación fue posterior al estudio sobre los avances de las adecuaciones legislativas elaborado por el Ministerio de Justicia, la CIDH le insta a presentar información actualizada sobre los alcances de la reforma procesal penal en función de dichos compromisos. La actualización de dicho informe permitiría a la Comisión evaluar el cumplimiento de los literales a, b, d y e del punto 3 del acuerdo.

130. El 8 de enero de 2016, la parte peticionaria informó que el 18 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la reunión entre las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Representante Espacial para Derechos Humanos en el ámbito Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y los miembros de la Comisión de la Verdad, en la cual se acordó que los integrantes de dicha Comisión reformularían su Reglamento, en lo referente a la cuestión de indemnidad, lo cual efectivamente se habría realizado, remitiéndose la nueva propuesta de reglamento al Ministerio de Relaciones Exteriores el 25 de septiembre de 2015. Según la parte peticionaria, en la nueva versión se elimina la cuestión de la indemnidad. Las observaciones de la parte peticionaria fueron trasladadas al Estado el 23 de junio de 2016.

131. El 14 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. Las partes no presentaron información actualizada en dicha oportunidad.

132. El 18 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. Las partes no presentaron información actualizada en esta oportunidad.

133. Con base en la información disponible, la Comisión concluye que existen medidas de reparación no pecuniaria que continúan pendientes de cumplimiento. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 12.298, Informe No. 81/08, Fernando Horacio Giovanelli (Argentina)**

134. El 30 de octubre de 2008, mediante el Informe No. 81/08 la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes en el Caso 12.298, Fernando Horacio Giovanelli. En resumen, los peticionarios habían planteado alegatos referentes a la responsabilidad del Estado por la muerte de Fernando Horacio Giovanelli, quien alrededor de las 21:45 horas del 17 de octubre de 1991, a escasos metros de su hogar fue interceptado por funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y luego de requerirle su identificación, lo detuvieron y trasladaron en un móvil sin identificación a la sede de la Comisaría Tercera de Quilmes. Los peticionarios sostienen, que en dicho local policial la presunta víctima fue brutalmente golpeada y luego trasladada hasta la ubicación del Puente 14 de Agosto (Partido de Quilmes) a pocos metros de la comisaría, donde fue arrojada a la vereda y asesinada por uno de los agentes policiales con un disparo de arma de fuego en su cabeza (con ingreso en el lóbulo de la oreja izquierda). También afirmaron, que con posterioridad su cuerpo fue trasladado hasta la zona conocida como "Villa Los Eucaliptos", la cual pertenece a la jurisdicción de la Comisaría y, arrojado aproximadamente dos horas y media después de su muerte enfrente de la villa miseria. En relación con la investigación de los hechos, los peticionarios alegaron que la versión de los hechos expuesta en el atestado policial que sirvió de base para la respectiva causa penal estaba lleno de inconsistencias; que la investigación policial fue deliberadamente orientada para encubrir la verdad del homicidio; y que los distintos jueces que tuvieron a cargo la causa se limitaron a producir prueba poco conducente para el esclarecimiento de la muerte del joven Giovanelli y, no confrontaron los elementos que aparecieron confusos, sospechosos y contradictorios en la causa.

135. Por medio del acuerdo de solución amistosa, suscrito el 23 de agosto de 2007, el Gobierno de la República Argentina manifestó su voluntad de asumir responsabilidad objetiva en el ámbito internacional en su calidad de Estado parte de la Convención y solicitó a la Comisión tener por reconocidas las violaciones alegadas en los términos de la petición.

136. De conformidad con dicho acuerdo, el Estado se comprometió a:

#### **2. Medidas de reparación pecuniarias**

1. Las partes convienen en constituir un Tribunal Arbitral "ad-hoc", a efectos de que éste determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a los peticionarios, conforme a los derechos cuya violación se ha tenido por reconocida, y de acuerdo con los estándares internacionales que sean aplicables.

2. El Tribunal estará integrado por tres expertos independientes, de reconocida versación en materia de derechos humanos y alta calidad moral, uno designado a propuesta de los peticionarios, el segundo a propuesta del Estado nacional y el tercero a propuesta de los dos expertos designados por las partes. El Tribunal deberá estar integrado, a más tardar, dentro de los 30 días siguientes a la aprobación del presente acuerdo por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

3. El procedimiento a aplicar será definido de común acuerdo entre las partes, de cuyo contenido se dejará constancia en un acta cuya copia se elevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A tal efecto, las partes designarán un representante para participar en las deliberaciones sobre el procedimiento. A efectos de representar al Estado nacional, delegase en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la designación de un funcionario del área con competencia en materia de derechos humanos en ambos Ministerios.

4. El laudo del tribunal arbitral será definitivo e irrecurrible. El mismo deberá contener el monto y la modalidad de las reparaciones pecuniarias acordadas, los beneficiarios de las mismas, y la determinación de las costas y honorarios que pudieran corresponder, tanto en el procedimiento llevado a cabo en el ámbito internacional como en la instancia arbitral, debiendo ser sometido a la evaluación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del proceso de seguimiento del cumplimiento del acuerdo, con el objeto de verificar que el mismo se ajusta a los parámetros internacionales aplicables. Los montos reconocidos en el laudo serán inembargables y se encontrarán exentos del pago de todo impuesto, contribución o tasa existente o por crearse.

5. Los peticionarios renuncian, de manera definitiva e irrevocable, a iniciar todo otro reclamo de naturaleza pecuniaria contra el Estado Nacional en relación con el presente caso. Asimismo, ceden y transfieren a favor del Estado Nacional todos los derechos litigiosos que pudieran corresponderle en virtud de los hechos denunciados contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, obligándose a suscribir el correspondiente instrumento ante Escribano Público Nacional dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del cumplimiento efectivo del pago del monto que resultare del laudo arbitral.

6. Sin perjuicio de la precedente cesión a su favor, y a todo evento, el Estado nacional manifiesta que se reserva su derecho a repetir las sumas efectivamente abonadas a los peticionarios que determine el Tribunal Arbitral contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mediante la detracción de tales montos de las sumas que pudieran corresponder a la citada provincia como consecuencia de la ley de coparticipación federal, y/o cualquier otra vía que fuera jurídicamente procedente.

### **3. Medidas de reparación no pecuniarias**

1. El Gobierno de la República Argentina se compromete a dar a publicidad el presente acuerdo una vez que éste sea homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme lo dispuesto por el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el "Boletín Oficial de la República Argentina", y en un diario de alcance nacional mediante una gacetilla de prensa, cuyo texto será consensuado previamente con los familiares de la víctima.

2. El Gobierno de la República Argentina asume el compromiso de invitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a que informe respecto del estado de los siguientes expedientes que se encuentran radicados en dependencias públicas de la jurisdicción provincial, hasta su definitiva conclusión:

- a. Expediente N° 1-2378 caratulado "N.N. s/Homicidio - víctima: Giovanelli, Fernando Horacio" en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Transición N° 3 del Departamento Judicial de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.
- b. Expediente N° 3001-1785/00 caratulado "Suprema Corte de Justicia - Secretaría General S/Situación Irregular observada en la tramitación de la causa N° 1-2378 del Juzgado Criminal y Correccional de Transición N° 3 de Quilmes", en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires - Oficina de Control Judicial e Inspección.

3. El Gobierno de la República Argentina se compromete a invitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a evaluar la posibilidad de incorporar el caso "Giovanelli" a los planes de estudio actualmente en vigencia en los institutos de formación policial como medida de no repetición de prácticas violatorias de derechos humanos.

4. El Gobierno de la República Argentina se compromete a elaborar un proyecto normativo mediante el cual se establezca un procedimiento para la tramitación y diligenciamiento de las peticiones que se sustancien ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que contemple el proceso de toma de decisiones — incluyendo la institución de la "solución amistosa"—, un mecanismo de tratamiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y un procedimiento de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en consonancia con lo prescripto en el artículo 28 (cláusula federal) en relación con los artículos 1 inciso 1 (obligación genérica de respeto y garantía) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), de la Convención Americana de Derechos Humanos.

137. Según la documentación recibida por la CIDH, el 8 de abril de 2010, el Tribunal Arbitral para la Determinación de Reparaciones Pecuniarias en el Caso *Giovanelli vs. Argentina*, emitió su laudo arbitral estableciendo las reparaciones a favor de las víctimas, así como los montos de costas y gastos. Por requerimiento de las partes, dicho laudo fue evaluado por la CIDH, que concluyó que el mismo se ajustaba a los estándares internacionales aplicables<sup>67</sup>.

138. El 22 de noviembre de 2010, 26 de octubre de 2011 y 3 de diciembre de 2012, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. La parte peticionaria presentó información actualizada indicando que con respecto a las medidas de reparación no pecuniarias establecidas, aún no se había publicado el acuerdo de solución amistosa en el Boletín Oficial de la República Argentina, ni en un diario de alcance nacional.

139. Por otra parte, señaló que los dos expedientes citados en el acuerdo de solución amistosa (puntos 2.a y 2.b), se encontrarían archivados, pese a que no existiría una resolución definitiva en ninguno de ellos.

140. Asimismo, señaló que tampoco se habría impulsado por parte del Estado, el compromiso de evaluar la posibilidad de incorporar el caso "Giovanelli" a los planes de estudio actualmente en vigencia en los institutos de formación policial como medida de no repetición de prácticas violatorias de derechos humanos. En el mismo sentido, indicó que tampoco se habrían realizado gestiones por parte de las autoridades para elaborar un proyecto normativo mediante el cual se establezca un procedimiento para la tramitación y diligenciamiento de las peticiones que se sustancien ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme al último ítem de las medidas de reparación no pecuniarias insertas en el Acuerdo.

141. Respecto, a las medidas de reparación pecuniarias, la peticionaria informó que hasta el momento no se habría abonado el importe de reparación debido a la familia, ni ningún tipo de gasto dispuesto en el laudo arbitral.

142. Mediante comunicación de fecha 9 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de los puntos pendientes de cumplimiento. Los peticionarios no suministraron la información solicitada.

143. El 26 de noviembre de 2013, el Estado informó que a la fecha fueron cancelados y depositados en el Banco Provincia de Buenos Aires de la localidad de Quilmes, en la cuenta del Juzgado Civil y Comercial No.2 de ese mismo Departamento Judicial por concerniente sucesorio y por Capital e Intereses Moratorios, la suma de \$ 1.100.006,78 mediante Orden de Pago No. 215.491. En cuanto a las acreencias de la Sra. Ana Esther Ramos, el Estado informó que se depositó en el Banco Hipotecario la suma de \$ 1.100.006,78, mediante OP Número 222.937, al Sr. Guillermo Jorge Giovanelli, la suma de \$ 158.274,36, OP Número 222.936; a Enrique José Giovanelli, la suma de \$ 158.274,36 OP Número 222.938 y por último a la letrada

<sup>67</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 91. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap2-D.pdf>

Mariana Bordones en el Banco de la Provincia de Buenos Aires la suma de \$ 35.216,04. Quedando pendientes los depósitos a los representantes Árbiteros Shiappa, Montesisi y Salvioli quienes deberán contactarse con la Dirección de Obligaciones a cargo del Tesoro para solicitar la documentación pertinente y poder realizar sus depósitos. Igualmente, según la información enviada, la Sra. Mabel Yapur, se habría comprometido en nombre de COFAVI a hacer los trámites correspondientes en la AFIP para hacer posible su acreencia.

144. El 10 de diciembre, el Estado informó que el Expediente N° 1-2378 caratulado "N.N s/ homicidio - víctima: Giovanelli, Fernando Horacio", había sido desarchivado. Asimismo, se indicó que de conformidad a la información presentada por la Directora de Planificación e Investigación Educativa, el Plan de Estudios estipulado para la formación policial se enfoca específicamente a temas relacionados a la violencia institucional, derechos de los detenidos, distintas formas legales de privación de la libertad, tortura, prohibición de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes; uso de la fuerza y armas de fuego, principios éticos de actuación policial y en que se pretende concientizar al alumno en la importancia del apego a las normas jurídicas en el quehacer policial, profundizando en el conocimientos de las normas éticas de la profesión y reconociendo el respeto por los derechos humanos interpretando las normas nacionales e internacionales que rigen respecto de la función policial.

145. El 4 de diciembre de 2014, la CIDH volvió a solicitar información actualizada sobre el cumplimiento. Las partes no presentaron información actualizada en esa oportunidad.

146. El 15 de septiembre de 2015, el 14 de septiembre de 2016 y el 18 de agosto de 2017, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. A la fecha de cierre del presente informe no se ha recibido información de ninguna de las partes.

147. Ante ello, la Comisión concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

### **Caso 12.159, Informe No. 79/09, Gabriel Egisto Santillán (Argentina)**

148. El 6 de agosto de 2009, mediante el Informe No. 79/09 la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes en el Caso 12.159, Gabriel Egisto Santillán. En resumen, la parte peticionaria señala que el Estado es responsable por la muerte de Gabriel E. Santillán ocurrida el 8 de diciembre de 1991, cuando contaba con 15 años de edad, a causa de un impacto de bala recibido el 3 de diciembre de 1991, en circunstancias en que miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires perseguían a individuos no identificados acusados de la sustracción de un vehículo. La denuncia se refiere también a la supuesta denegación de protección y garantías judiciales por falta de debida diligencia en el proceso de investigación de los hechos y sanción de los responsables por la muerte de Gabriel E. Santillán.

149. El 28 de mayo de 2008, el Estado de Argentina y la madre de la víctima suscribieron un acuerdo de solución amistosa, que fue aprobado mediante Decreto Ejecutivo Nacional N° 171/2009 del 11 de marzo de 2009. El acuerdo estableció principalmente lo siguiente:

### **III. Medidas a adoptar**

#### **a. Medidas de reparación pecuniarias**

1. Las partes convienen en constituir un Tribunal Arbitral "ad-hoc", a efectos de que éste determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a los peticionarios, conforme a los derechos cuya violación se ha tenido por reconocida, y de acuerdo con los estándares internacionales que sean aplicables.
2. El Tribunal estará integrado por tres expertos independientes [...] El Tribunal deberá estar integrado, a más tardar, dentro de los 30 días siguientes del presente acuerdo por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

3. El procedimiento a aplicar será definido de común acuerdo entre las partes [...]
4. El laudo del tribunal arbitral será definitivo e irrecurrible [...]
5. Los peticionarios renuncian, de manera definitiva e irrevocable, a iniciar todo otro reclamo de naturaleza pecuniaria contra el Estado Nacional en relación con el presente caso [...]
6. Sin perjuicio de la precedente cesión a su favor, y a todo evento, el Estado nacional manifiesta que se reserva su derecho a repetir las sumas efectivamente abonadas a los peticionarios que determine el Tribunal Arbitral contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires [...]

**b. Medidas de reparación no pecuniarias**

1. El Gobierno de la República Argentina se compromete a dar a publicidad el presente acuerdo una vez que éste sea homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme lo dispuesto por el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, y en un diario de alcance nacional mediante una gacetilla de prensa, cuyo texto será consensuado previamente con los familiares de la víctima.
2. El Gobierno de la República Argentina asume compromiso de invitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a que informe respecto del estado de los siguientes expedientes que se encuentran radicados en dependencias públicas de la jurisdicción provincial, hasta su definitiva conclusión:
  - a. Expediente N° 5-231148-2 caratulado “Atentado y Resistencia a la autoridad en concurso ideal con Abuso de Armas, Homicidio y Hallazgo de Automotor, Víctima: Santillán, Gabriel Egisto” en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Transición N° 2 del Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires.
  - b. Expedientes número 3001-2014/99, caratulado “Ministerio de Justicia. Santillán, Gabriel Egisto. Informe sobre causa N° 23.148/91” y 3001-465/05 caratulado “Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires – Subsecretaría de Justicia remite causa 12.159 – Santillán, Gabriel Egisto”, ambos radicados ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
3. El Gobierno de la República Argentina se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para realizar, a la mayor brevedad posible, una actividad académica relacionada con la problemática vinculada con la interacción y articulación entre el Estado Federal y los Estados Provinciales en materia de cumplimiento de obligaciones asumidas internacionalmente, a la luz de lo dispuesto por el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

150. En el Informe 79/09 la Comisión valoró positivamente el reconocimiento de responsabilidad de la República Argentina por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales referido a los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 en relación con el artículo 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, reconoció los esfuerzos desplegados por las partes para lograr el acuerdo de solución amistosa y declaró que el mismo es compatible con el objeto y fin de la Convención. Asimismo,

determinó continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de los puntos establecidos por las partes. La CIDH declaró cumplidas las medidas de reparación pecuniarias en su informe anual de 2015<sup>68</sup>.

151. Por otra parte, con respecto a los dos expedientes citados en el acuerdo de solución amistosa (puntos 2.a y 2.b), los peticionarios han informado que se encontrarían archivados, pese a que no existiría una resolución definitiva en ninguno de ellos. De igual forma, indicaron que, no obstante lo anterior, la madre de la víctima solicitó en inicios del 2012 una autorización judicial para exhumar el cuerpo y cremarlo, a la vez de arbitrar las medidas pertinentes junto al Equipo de Antropología Forense para preservar su ADN en vista de un posible cotejo, si ocurriera la aparición de los restos de su padre Omar Santillán, desaparecido durante la época de la dictadura militar en Argentina.

152. Señala que tampoco se habría impulsado por parte del Estado, el compromiso de impulsar una actividad académica relacionada con la problemática de articulación entre el Estado Federal y los Estados Provinciales en materia de cumplimiento de las obligaciones asumidas internacionalmente, a la luz del artículo 28 de la Convención Americana.

153. En comunicación de 6 de marzo de 2014, la parte peticionaria informó que en relación a las medidas de reparación no pecuniarias establecidas en el acuerdo, a esa fecha no se había realizado la publicación del Acuerdo en el Boletín Oficial de la República Argentina, ni en diario del alcance nacional mediante gacetilla de prensa. En cuanto al expediente judicial por el homicidio de Gabriel Egisto Santillán, confirmó que se encuentra archivado, sin perjuicio que a comienzos de 2012 la madre de la víctima había requerido autorización judicial para exhumar el cuerpo de su hijo y cremarlo; a la vez que arbitró las medidas pertinentes junto al Equipo Argentino de Antropología Forense de preservar el patrón genético de A.D.N. del menor en vista al cotejo por la posible aparición de los restos de su padre Omar Santillán, forzosamente desaparecido durante la última dictadura militar en el año 1977. Asimismo, informó que los expedientes radicados ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se también encontraban archivados. Adicionalmente, indicó que el Estado se había abstenido de impulsar la actividad académica relativa a la articulación entre el Estado federal y los Estados provinciales en materia de cumplimiento de obligaciones asumidas internacionalmente.

154. En cuanto a las medidas de reparación no pecuniarias, la Comisión advierte que no ha recibido información sobre la publicación del Acuerdo en el Boletín Oficial de la República Argentina, ni en diario del alcance nacional mediante gacetilla de prensa; como tampoco sobre el compromiso de impulsar una actividad académica relacionada con la problemática de articulación entre el Estado Federal y los Estados Provinciales en materia de cumplimiento de las obligaciones asumidas internacionalmente, a la luz del artículo 28 de la Convención Americana. Asimismo, observa que el Estado omitió suministrar información sobre la causa N° 23.148/91” y 3001-465/05 caratulado “Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires – Subsecretaría de Justicia remite causa 12.159 – Santillán, Gabriel Egisto”.

155. El informe de fecha 3 de noviembre de 2015 del Estado fue remitido a la parte peticionaria para sus observaciones el 17 de noviembre de 2015, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta.

156. El 14 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada sobre el cumplimiento a las partes. A la fecha de cierre del presente informe ninguna de las partes ha presentado la información requerida.

157. Los días 14 de octubre y 21 de noviembre de 2016, así como el 18 de septiembre del 2017, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. A la fecha de cierre del presente informe no se ha recibido información de ninguna de las partes.

158. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.

<sup>68</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2015, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 91. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/InformeAnual2015-cap2Dseguimiento-ES.pdf>

**Caso 11.732, Informe No. 83/09, Horacio Aníbal Schillizzi Moreno (Argentina)**

159. En el Informe No. 83/09 de fecha 6 de agosto de 2009, la Comisión concluyó que el Estado argentino había violado, respecto a Horacio Aníbal Schillizzi Moreno, los derechos a la protección y a las garantías judiciales, bajo los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con los términos del artículo 1(1) de la misma. En resumen, los peticionarios alegaron que con motivo de un incidente de recusación, los jueces de la Sala "F" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal sancionaron el 17 de agosto de 1995 al señor Schillizzi a tres días de arresto por "maniobras destinadas a obstruir el curso de la justicia". Los peticionarios alegaron que la sanción de arresto se impuso sin respetar las garantías judiciales, porque a su juicio el tribunal no fue imparcial, no fundamentó la decisión, no permitió el derecho a la defensa y tampoco hubo un control judicial del fallo. Asimismo, que la sanción de arresto fue arbitraria e ilegal pues violó el derecho a la libertad personal, aunada a que el rechazo de las autoridades judiciales a la solicitud de cumplir esta sanción en el domicilio, violó el derecho a la integridad personal y a la igualdad ante la ley.

160. La CIDH formuló al Estado argentino las siguientes recomendaciones:

1. Reconocer públicamente responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos determinadas por la Comisión en el presente informe. En especial, realizar, con la participación de altas autoridades del Estado y el señor Horacio Aníbal Schillizzi Moreno, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso.

2. Adoptar, como medida de no repetición, las acciones necesarias para asegurar que las sanciones disciplinarias sean aplicadas a través de procesos realizados con el debido proceso legal.

161. En su informe anual del 2013<sup>69</sup>, la CIDH dio por cumplido la segunda recomendación, toda vez que constató que las autoridades judiciales argentinas habrían adoptado las previsiones reglamentarias necesarias según lo dispuesto por la acordada n° 26/08 de la Corte Suprema, para que las sanciones disciplinarias se apliquen conforme a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.

162. En dicho informe quedó de igual forma establecido que los peticionarios perdieron contacto con el señor Schillizzi tras la última entrevista que tuvieron con éste en el año 2006, información que fue reiterada el 31 de diciembre de 2012.

163. El 26 de octubre de 2011, el 3 de diciembre de 2012 y el 11 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a las partes respecto del cumplimiento de la primera recomendación, sin recibir respuesta concreta de las mismas.

164. El 4 de diciembre de 2014, la CIDH volvió a solicitar información actualizada sobre el cumplimiento. La parte peticionaria respondió el 23 de diciembre de 2014 desistiendo del caso, por no haber podido hasta fecha, retomar contacto con el señor Schillizzi. El Estado, por su parte, no ha presentado información.

165. El 15 de septiembre de 2015, la Comisión nuevamente solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. Mediante comunicación de fecha 25 de septiembre de 2015 el Estado solicitó el archivo de las presentes actuaciones. El Estado fundamenta su solicitud en que la segunda recomendación dirigida a asegurar que las sanciones disciplinarias sean aplicadas a través de procesos realizados con el debido proceso legal, ya fue dada por cumplida por la CIDH; y que la primera, sobre el acto público de reconocimiento con la participación del Sr. Schillizzi Moreno, resulta de

<sup>69</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 119-128. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap2-D.pdf>

imposible cumplimiento debido a que los peticionarios de manera reiterada han manifestado que perdieron contacto con el mismo desde 2006. Adicionalmente, el Estado explicó que atento a que sus propios representantes no podían localizar al Sr. Schillizzi Moreno, la Secretaría de Derechos Humanos les solicitó presentar una propuesta alternativa a los fines de dar cumplimiento a la recomendación pendiente, sin haber obtenido respuesta. Finalmente, indicó que el 23 de diciembre de 2014 la parte peticionaria desistió al caso motivada en la imposibilidad de retomar contacto con el Sr. Schillizzi.

166. El 3 de noviembre de 2015, el Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, reiteró la nota presentada el 23 de diciembre de 2014 en la que se informó su desistimiento del caso, por las razones allí expresadas.

167. En relación a la ejecución del acto de reconocimiento de responsabilidad, la Comisión toma nota de la imposibilidad de cumplimiento, manifestada por ambas partes, dado que no tenían contacto con el beneficiario. Al respecto, la Comisión estima, a la luz de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos en materia de seguimiento y cumplimiento de los Estados con las medidas reparatorias, en casos en los cuales no ha habido contacto con la persona beneficiaria, que es deber del Estado establecer al menos la posibilidad para que el interesado pueda acceder a esta medida<sup>70</sup>. En ese sentido, la Comisión insta al Estado a suministrar información sobre los esfuerzos realizados para localizar al Sr. Horacio Aníbal Schillizzi Moreno, entre los cuales podría considerarse la publicación de un edicto, emplazamiento, u otro instrumento de la misma naturaleza comprendido en la legislación argentina.

168. El 14 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada sobre el cumplimiento a las partes. El Estado no presentó información actualizada en dicha oportunidad.

169. El 30 de septiembre de 2016, la Comisión recibió por parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), nota mediante la cual informaron que desistían del caso debido a la imposibilidad de retomar contacto con el Sr. Schillizzi Moreno, y por tanto, solicitaron se eliminara su registro como representantes del caso.

170. El 31 de octubre de 2016 y el 13 de marzo de 2017, la CIDH solicitó al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y al Estado de Argentina, presentaran información actualizada sobre el presente caso.

171. En su Informe Anual de 2016, la CIDH indicó que a la luz de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos en materia de seguimiento y cumplimiento de los Estados con las medidas reparatorias, en casos en los cuales no ha habido contacto con la persona beneficiaria, es deber del Estado establecer al menos la posibilidad para que el interesado pueda acceder a esta medida<sup>71</sup>, y en ese sentido, instó al Estado a suministrar información sobre los esfuerzos realizados para localizar al Sr. Horacio Aníbal Schillizzi Moreno, entre los cuales podría considerarse la publicación de un edicto, emplazamiento, u otro instrumento de la misma naturaleza comprendido en la legislación argentina.

172. El 28 de septiembre de 2017, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones.

173. El 3 de octubre de 2017, el Estado indicó que en seguimiento a lo indicado por la Comisión en el Informe Anual de 2016 en relación al presente caso, se publicó un edicto en el Boletín Oficial de la República Argentina, citando por el plazo de 30 días al señor Schillizzi, e indicó que dicho plazo se encuentra actualmente vencido sin que éste haya contactado a las autoridades correspondientes; por lo cual solicitó que se tengan por cumplidas en forma total las recomendaciones realizadas y se ordene el correspondiente archivo de las

---

<sup>70</sup> Ver Corte IDH, Caso Gomes Lund y Otros (Guerrilla do Araguaia) Vs. Brasil, Sentencia de 24 de Noviembre de 2010. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

<sup>71</sup> Ver Corte IDH, Caso Gomes Lund y Otros (Guerrilla do Araguaia) Vs. Brasil, Sentencia de 24 de Noviembre de 2010. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

actuaciones. El Estado aportó copia del Boletín oficial No. 33.605, en el cual consta en la página 37, la alusión a las recomendaciones emitidas en el informe de Fondo No. 83/09 de 6 de agosto de 2009 y la citación al señor Horacio Aníbal Schillizzi Moreno ante la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.

174. La Comisión toma nota del desistimiento de la parte peticionaria y de la solicitud del cierre del seguimiento por parte del Estado, y en ese sentido, la Comisión evaluará el asunto y se pronunciará al respecto en una próxima oportunidad. La Comisión valora los esfuerzos del Estado para contactar a la víctima del caso e implementar las recomendaciones y declara que las recomendaciones se encuentran parcialmente cumplidas.

**Caso 12.536, Informe No. 17/10, Raquel Natalia Lagunas y Sergio Antonio Sorbellini (Argentina)**

175. En el informe No.17/10 de fecha 16 de marzo de 2010, la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes en el Caso 12.536, referido a Raquel Natalia Lagunas y Sergio Antonio Sorbellini, de 17 y 19 años respectivamente, quienes el día 12 de marzo de 1989, fueron vistos con vida por última vez cuando salieron al campo en una bicicleta doble a buscar pasto para sus conejos. En resumen, los peticionarios sostuvieron que, a partir del hallazgo de los cuerpos sin vida de sus hijos, se habría desplegado una actividad policial con el fin de encubrir el hecho y borrar o tergiversar las pruebas. Los peticionarios hicieron referencia a una serie de irregularidades procesales a consecuencia de las cuales se habría llegado incluso a la condena de dos personas, a favor de quienes más adelante se habría declarado la nulidad de la causa en su contra por los vicios procesales existentes. Señalaron que en el presente caso la Legislatura habría creado una Comisión Especial a fin de investigar la cadena de encubrimientos, por considerarlos graves hechos de interés público. Afirmaron que, a través de las acciones de dicha Comisión se habría realizado la exhumación de los cuerpos, y se habría comprobado que las autopsias declaradas judicialmente nunca se habrían realizado, y que eran falsas las actuaciones policiales y las actas de los peritos.

176. El 19 de noviembre de 2007, el Estado de Argentina y los representantes de la familia de Raquel Lagunas suscribieron un acuerdo de solución amistosa, al que se sumaron los representantes de la familia Sorbellini el 24 de noviembre de ese año, mediante un protocolo de adhesión. El acuerdo estableció principalmente lo siguiente:

**III. Medidas a adoptar**

**A. Medidas de reparación no pecuniarias**

1. El Gobierno de la Provincia de Río Negro se compromete, en pleno respeto a la división de poderes, a realizar sus mejores esfuerzos para continuar con las investigaciones del caso hasta las últimas consecuencias. Con ese objeto, y tal como se dejara constancia en el acta de fecha 8 de noviembre de 2007, el Gobierno de la Provincia de Río Negro y los peticionarios convienen en constituir una Comisión de Seguimiento a efectos de realizar un monitoreo de los avances del expediente judicial a fin de elaborar un diagnóstico de la causa para evaluar los pasos a seguir, a la que se invitará a participar al Estado nacional. Las partes acordarán la constitución de dicha comisión.
2. Asimismo, y tal como fuera comprometido en el punto 1.b del acta de fecha 6 de diciembre de 2006, se deja constancia que el Gobierno de la Provincia de Río Negro ha procedido a la implementación de un "Fiscal en Comisaría" en la ciudad de Río Colorado, que será nombrado por concurso público.
3. En cuanto a la reivindicación del buen nombre y honor de Raquel Natalia Lagunas y Sergio Sorbellini, se deja constancia que el Gobierno de la Provincia de Río Negro procedió a la publicación de la declaración pública convenida en el punto 2 del acta de fecha 30 de septiembre de 2002.

4. Como otra medida de satisfacción, se deja constancia del cumplimiento del punto 3 del acta de fecha 30 de septiembre de 2002, en virtud del cual el Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Colorado designó con el nombre de Raquel Lagunas y Sergio Sorbellini a una plaza de dicha ciudad.

## **B. Medidas de reparación pecuniarias**

1. El Gobierno de la Provincia de Río Negro se compromete a indemnizar a la familia de cada una de las víctimas con la suma de Cien Mil Dólares Estadounidenses respectivamente. Dicha indemnización se abonará de acuerdo al siguiente cronograma: a) Familia Lagunas: 60% del total, más 20% en concepto de honorarios profesionales de los letrados intervinientes, (Dres. Thompson, Espeche y Bugalfo), que se abonan en este acto, mediante cheque Nro.16664764 del Banco Patagonia por la suma de ciento noventa mil ochocientos pesos (\$ 190.800), a la orden de Leandro Nicolás Lagunas, y cheque Nro 16664762 del Banco Patagonia a la orden del Dr. Ricardo Thompson por la suma de sesenta y dos mil trescientos veintiocho pesos (\$ 62.328) habiéndose practicado a los letrados la retención del impuesto sobre los ingresos brutos por mil doscientos setenta y dos pesos (\$ 1.272) de la que reciben comprobante. El saldo restante se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas, cuyo vencimiento operará el 10 de diciembre de 2007 y el 10 de enero de 2008, respectivamente. El Sr. Leandro Lagunas percibe el importe correspondiente en representación de la familia de Raquel Lagunas y el Dr. Ricardo Thompson en representación de los letrados. b) Familia Sorbellini: El Gobierno de la Provincia de Río Negro se compromete a incluir la reparación debida en el presupuesto del año 2008, y a satisfacer su totalidad con anterioridad al 30 de junio de 2008.

177. El 24 de noviembre de 2007, los representantes de la familia Sorbellini firmaron un protocolo de adhesión en los siguientes términos:

1. Adhesión de la familia de Sergio Sorbellini al acuerdo de solución amistosa de fecha 19 de noviembre de 2007. En ese sentido, los peticionarios manifiestan que, en el carácter indicado en el acápite, adhieren en todos sus términos y condiciones al acuerdo de solución amistosa suscripto con fecha 19 de noviembre de 2007 entre los representantes de la familia de Raquel Lagunas y el Gobierno de la Provincia de Río Negro del que reciben un ejemplar. Así mismo el Dr. D'agnillo en su carácter de letrado patrocinante de la familia de Sergio Sorbellini, adhiere en todos sus términos y condiciones al citado acuerdo de solución amistosa.

178. En su informe anual del 2013<sup>72</sup>, la CIDH dio por cumplido el compromiso relativo a la reparación pecuniaria.

179. La CIDH observa en relación al punto 1 de la Cláusula A del acuerdo de solución amistosa que establece que “el Gobierno de la Provincia de Río Negro y los peticionarios convienen en constituir una Comisión de Seguimiento a efectos de realizar un monitoreo de los avances del expediente judicial a fin de elaborar un diagnóstico de la causa para evaluar los pasos a seguir, a la que se invitará a participar al Estado Nacional. Las partes acordarán la constitución de dicha Comisión.” Sin embargo, según se deriva de la información recopilada por la Comisión durante el seguimiento de este caso, el Estado informó en el año 2011 que se habría constituido e integrado la “Comisión de Seguimiento del Doble Crimen de Río Colorado” y que no habría sido posible que familiares de las víctimas fueran parte de esa Comisión, por negativa de los mismos a participar.

<sup>72</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 141-150. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap2-D.pdf>

180. A través de comunicación de 27 de septiembre de 2012, el peticionario informó que no habría tenido lugar una sola reunión para constituir la “Comisión de Seguimiento del Doble Crimen de Río Colorado”, desde noviembre de 2007.

181. Dada la inconsistencia entre las observaciones de las partes sobre las condiciones para constituir y para que los peticionarios participen en la Comisión de Seguimiento del Doble Crimen del Río Colorado frente a los compromisos derivados del texto del acuerdo. Por lo anterior, la CIDH insta a las partes a dialogar sobre como retomar el cumplimiento respecto a este compromiso.

182. El relación al punto 2 de la Cláusula A, el 22 de febrero de 2016, el Estado informó sobre la designación del Fiscal Daniel Zornita como titular de la Fiscalía Descentralizada de Río Colorado, que se encontraría en ejercicio de sus funciones desde el 20 de febrero de 2015. La CIDH trasladó dicha información a la parte peticionaria para sus observaciones. A la fecha la parte peticionaria no ha presentado observaciones. La CIDH, tomando en consideración la información aportada por el Estado, declara cumplida el punto 2 de la cláusula A, sobre el nombramiento de un funcionario para dicho cargo. Al mismo tiempo, la CIDH observa que los puntos 3 y 4 de la cláusula A, son declarativos. Por lo anterior, el único punto cuyo cumplimiento sería objeto de supervisión de la Comisión es el relacionado con el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Doble Crimen del Río Colorado. La CIDH insta a las partes a proporcionar información detallada sobre este extremo del acuerdo.

183. El 14 de septiembre de 2016, la Comisión solicitó información a las partes sobre el cumplimiento. Las partes no presentaron información en dicha oportunidad.

184. El 18 de agosto de 2017, la Comisión solicitó información a las partes sobre el cumplimiento.

185. El 18 de agosto de 2017, los peticionarios informaron que, el señor Leandro Lagunas, padre de Raquel Natalia Lagunas, había fallecido hace varios meses, al igual que su madre, la señora Graciela Lambert; y por tanto, sus hermanos, tenían dudas sobre si deben seguir con el procedimiento de seguimiento, dado que el señor Leandro, quien había dedicado toda su vida a esta causa, nunca pudo ver los resultados que esperaba. El Estado por su parte no proporcionó información en esta oportunidad.

186. En virtud de la información suministrada por el Estado, la Comisión concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido.

#### **Petición 242-03, Informe No. 160/10, Inocencia Luca de Pegoraro y otros (Argentina)**

187. En el Informe No.160/10 del 1º de noviembre de 2010, la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes en la Petición 242-03, Inocencia Luca de Pegoraro y otros. En resumen, las peticionarias sostienen que el 18 de junio de 1977, Susana Pegoraro, hija de Inocencia Pegoraro, con cinco meses de embarazo, fue detenida y llevada al Centro Clandestino de Detención que funcionó durante la dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Según el testimonio de Inocencia Luca Pegoraro, Susana Pegoraro dio a luz a una niña en el interior de esas instalaciones. Las peticionarias señalan que, en 1999, Inocencia Luca Pegoraro y Angélica Chimeno de Bauer, se constituyeron en parte querellante e iniciaron un proceso ante las autoridades judiciales, denunciando la sustracción de su nieta, a quien identificaron como Evelin Vásquez Ferra. En primer momento, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 1 ordenó una prueba pericial con el fin de establecer la identidad de Evelin Vásquez Ferra. Sin embargo, ante una impugnación de esta prueba, la diligencia fue decidida finalmente por la Corte Suprema como no compulsiva, por considerar dicha actuación pericial de carácter complementario para los fines del proceso, dado que los padres adoptivos Policarpo Luis Vásquez y Ana María Ferra, habían confesado que Evelin Vásquez Ferra no era su hija biológica; y además consideró que su realización compulsiva era violatoria al derecho de intimidad de esta última. Las peticionarias alegaron que dicha resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cerró las puertas a una posible investigación de la desaparición de Susana Pegoraro y Raúl Santiago Bauer además de la identificación de Evelin Vásquez Ferra.

188. El 11 de septiembre de 2009, el Estado de Argentina y las peticionarias suscribieron un acuerdo de solución amistosa, en el cual las partes incluyeron varias medidas de satisfacción y de no repetición. En el Informe No. 160/10 la Comisión dio cuenta del cumplimiento de los acuerdos contenidos en las secciones 2(1) (a), 2(1) (b), y 2(2) (a) del acuerdo de solución amistosa, mediante las leyes para establecer un procedimiento para la obtención de muestras de ADN y para la modernización del Banco Nacional de Datos Genéticos aprobadas por el Congreso Nacional el 18 de noviembre de 2009 y publicados el 27 de noviembre de 2009. Asimismo, informó sobre el cumplimiento de la sección 2(4) (a) mediante la creación de la "Unidad de regularización documental de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el marco del accionar del terrorismo de Estado", por Resolución No. 679/2009, publicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Boletín Oficial el 2 de octubre 2009; y del cumplimiento de la sección 2(2) (b) mediante la conformación del "Grupo de Asistencia Judicial" por Resolución No. 1229-1209 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

189. Desde la aprobación del acuerdo de solución amistosa, la CIDH ha dado seguimiento al cumplimiento de las cláusulas que se encontraban pendientes. A continuación se detalla el nivel de cumplimiento que para el año 2015 tenía cada uno de los compromisos asumidos, seguido de un resumen actualizado con la información proporcionada por las partes y el respectivo análisis de la Comisión sobre el cumplimiento de las mismas:

<b>Resumen de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa suscrito en el asunto P-242-03 Inocencia Luca de Pegoraro</b>	<b>Estado de Cumplimiento</b>
<b>2. Medidas de reparación no pecuniarias</b>	
<b>2.1 Sobre el Derecho a la Identidad</b>	
a. el poder ejecutivo nacional de la república argentina se compromete a enviar al honorable congreso de la nación un proyecto de ley para establecer un procedimiento para la obtención de muestras de ADN que resguarde los derechos de los involucrados y resulte eficaz para la investigación y juzgamiento de la apropiación de niños originada durante la dictadura militar.	Cumplido.
b. el poder ejecutivo nacional de la república argentina se compromete a enviar al honorable congreso de la nación un proyecto de ley para modificar la legislación que regula el funcionamiento del banco nacional de datos genéticos, a fin de adecuarla a los avances de la ciencia en la materia.	Cumplido.
<b>2.2 Sobre el Derecho de Acceso a la Justicia</b>	
a. el poder ejecutivo nacional de la república argentina se compromete a enviar al honorable congreso de la nación un proyecto de ley para garantizar de un modo más eficaz la participación judicial de las víctimas -entendiendo por tales a las personas presuntamente apropiadas como a sus legítimos familiares- y de las asociaciones intermedias conformadas para la defensa de sus derechos en los procesos en los que se investiga la apropiación de niños.	Cumplido.
b. el poder ejecutivo nacional de la república argentina se compromete a adoptar las medidas que fueran necesarias, dentro de un plazo razonable, para optimizar y profundizar la aplicación de la resolución n° 1229/09 del ministro de justicia, seguridad y derechos humanos de la nación.	Cumplido.
c. el poder ejecutivo nacional de la república argentina se compromete a trabajar en la adopción de medidas tendientes a optimizar el uso de la facultad que le confiere el art. 27 de la ley n° 24.946 (ley orgánica del ministerio público) a fin de proponer al procurador general de la nación: 1) que dicte instrucciones generales a los fiscales instándolos a concurrir a los registros domiciliarios que se practiquen en los casos en que se investigue la apropiación de niños; y 2) que diseñe y ejecute un plan especial de investigación sobre la apropiación de niños durante la dictadura militar a fin de optimizar la resolución de casos, disponiendo de fiscales especiales para ello en las jurisdicciones donde tramite una cantidad de casos que	Cumplido.

lo justifique.	
<b>2.3 Sobre la Capacitación de los actores judiciales</b>	
a. el poder ejecutivo nacional de la república argentina se compromete a trabajar en la adopción de medidas vinculadas con el uso de la facultad que le confiere el art. 27 de la ley n° 24.946 (ley orgánica del ministerio público) a fin de proponer al procurador general de la nación la capacitación de fiscales y demás funcionarios del ministerio público en el trato adecuado a las víctimas de estos graves delitos.	En proceso de cumplimiento.
b. el poder ejecutivo nacional de la república argentina se compromete a instar al consejo de la magistratura de la nación a planificar cursos de capacitación para magistrados, funcionarios y empleados del poder judicial en el trato adecuado a las víctimas de estos graves delitos (cfr. art. 7 inc. 11 de la ley n° 24.937, t.o. según art. 3° de la ley n° 26.080).	En proceso de cumplimiento.
<b>2.4 Sobre el Grupo de Trabajo</b>	
a. el poder ejecutivo nacional de la república argentina se compromete a establecer mecanismos específicos para facilitar la corrección de la documentación y los registros públicos y privados, tanto nacionales como provinciales y municipales, de toda persona cuya identidad haya sido sustituida durante la dictadura militar, a fin de favorecer el proceso de restitución de la identidad.	Cumplido.
b. las partes convienen en mantener reuniones periódicas de trabajo, en el ámbito de la cancillería, a efectos de evaluar la marcha de las medidas que aquí se comprometen.	En proceso de cumplimiento.
c. el gobierno de la república argentina se compromete a facilitar las actividades del grupo de trabajo, como así también a proporcionarles el soporte técnico y el uso de las instalaciones que sean necesarias para el desarrollo de su tarea, comprometiéndose a informar al respecto periódicamente a la comisión interamericana de derechos humanos.	En proceso de cumplimiento.
<b>2.5 Sobre la publicidad</b>	
El Gobierno de la República Argentina se compromete a dar publicidad al presente acuerdo en el Boletín Oficial de la República Argentina, y en los diarios "Clarín", "La Nación" y "Página 12", una vez que éste sea homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.	Cumplido.

190. En el informe No. 160/10 la Comisión dio cuenta del cumplimiento de los acuerdos contenidos en los puntos 2.1 (a), 2.1 (b), y 2.2 (a) del acuerdo de solución amistosa. Asimismo, la Comisión declaró el cumplimiento de los puntos 2.2 (b) y 2.4 (a)<sup>73</sup>. Por otro lado, durante el seguimiento de las cláusulas pendientes de implementación de manera posterior a la publicación del acuerdo de solución amistosa, la CIDH declaró el cumplimiento de del punto 2.2 (C)<sup>74</sup> y 2.5<sup>75</sup>. En ese sentido, la Comisión realiza el

<sup>73</sup> CIDH, Informe 160/10, Petición 242-03. Solución Amistosa. Inocencia Luca de Pegoraro y otros. Argentina. Aprobado el 1 de noviembre de 2010.

<sup>74</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párrs. 176 - 180.

seguimiento sobre los puntos 2.3 sobre capacitaciones de actores judiciales y 2.4 (b) y (c) sobre el funcionamiento del grupo de trabajo.

191. El 5 de noviembre de 2015, el Estado se refirió a jornadas de discusión y capacitación, e informó que mediante Resolución PGN No. 245/15 la Procuradora General de la Nación aprobó un curso diseñado por la citada Unidad Especializada sobre la investigación de delitos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. El curso de capacitación para funcionarios y magistrados judiciales fue dictado a partir de marzo de 2015 con el objetivo de brindar herramientas para una eficaz investigación del delito de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, así como para la obtención de muestras biológicas para el análisis de ADN que permita restituir la identidad de las víctimas de este delito.

192. Adicionalmente, el Estado anunció que en el mes de noviembre, la Unidad Especializada daría una clase sobre Investigación Criminal en causas por delitos contra la humanidad, en el marco de la capacitación en investigación criminal en el marco del nuevo Código de Procedimiento Penal de la Nación (CPPN) organizada por la Procuraduría General de la Nación. Finalmente, informó que dicha Unidad se encuentra elaborando una guía de trabajo para audiencias de ADN en los términos del artículo 218 bis del CPPN. El propósito de la guía es promover que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial compartan experiencias y elaboren pautas conjuntas para garantizar que esas audiencias se realicen con especial consideración al trato a la víctima, a fin de que se adopten medidas apropiadas para su seguridad, bienestar físico y psicológico e intimidación. En el informe se recordó que la importancia de que sea el mismo Estado el que asuma la responsabilidad de la adquisición probatoria y de sus consecuencias punitivas, radica en liberar de dicho peso a la víctima.

193. La Comisión ha valorado los importantes avances logrados por el Estado argentino en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. Respecto a las medidas sobre capacitaciones, la CIDH continúa a la espera de información actualizada sobre la adopción de la guía de trabajo para audiencias de ADN en los términos del artículo 218 bis de del CPPN.

194. En relación a los puntos 2.4 (b) y (c), el 11 de mayo de 2016, los peticionarios informaron que estarían haciendo uso del mecanismo de la mesa de trabajo para hacer seguimiento al cumplimiento del acuerdo. En particular, habrían solicitado a la Cancillería Argentina una reunión de trabajo el 10 de mayo de 2016, para dialogar sobre la Decisión Administrativa No. 421/2016 del Ministerio de Seguridad, a través de la cual se aprobó una nueva estructura administrativa, suprimiéndose del organigrama la Dirección de Derechos Humanos. Los peticionarios manifestaron con preocupación que desconocían si se había tomado alguna acción administrativa para garantizar la continuidad del Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ).

195. El 25 de julio de 2016, la CIDH trasladó la información suministrada por la parte peticionaria al Estado para sus observaciones. El 22 de agosto de 2016, el Estado informó que debido a la entrada en vigencia de una nueva estructura administrativa ministerial, prevista en la decisión administrativa No. 421/2016 y complementada con la Resolución No. MS N 225/2016, resultaba imperioso la modificación de la Resolución MS No 166/2011 (referida al funcionamiento del GEAJ), toda vez que según la disposición anterior, era de la órbita de la Dirección Nacional de Derechos Humanos el funcionamiento y coordinación del GEAJ. Sin embargo, a partir de la Resolución No. 225/2016, se creó la Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad, que tiene entre sus funciones la de intervenir en el seguimiento del cumplimiento de protocolos, acuerdos y fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como también el diseño y ejecución de los nuevos procedimientos de control y evaluación de desempleo operativo, gestión y práctica de las fuerzas policiales y de seguridad. A partir de esa facultad, según lo explicó el Estado, era administrativamente necesario que el GEAJ dependiera orgánicamente de esta dependencia ministerial. El Estado aclaró en su comunicación que independientemente del cambio administrativo en el organigrama ministerial, el GEAJ continúa cumpliendo las funciones propias de su actuación, tramitando y diligenciando todas aquellas medidas judiciales que requirieron su intervención, dependiendo orgánicamente de la

---

<sup>75</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones Amistosas en casos individuales, párr. 192.

Dirección Nacional de Control e Integridad. El Estado proporcionó copia autenticada de las decisiones administrativas correspondientes.

196. Dicha información fue trasladada a la parte peticionaria el 31 de octubre de 2016, sin que se hayan recibido observaciones sobre el particular.

197. El 17 de enero de 2017, el Estado informó que en relación al punto 2.3 del acuerdo, sobre la capacitación para funcionarios y magistrados judiciales a partir de marzo de 2015, se habría dictado un curso con el objetivo de brindar herramientas para una eficaz investigación del delito de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. El Estado indicó que esto se deriva de la aprobación de la Instrucción General Res. PGN 398/12 de 19 de octubre de 2012 de la Procuradora General de la Nación, de un Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, que constituye una guía de acción en las causas en trámite, tanto para los fiscales, como para muchos jueces. En ese sentido, las pautas que allí se sugieren, han permitido homogeneizar y mejorar la mecánica de las audiencias de toma de muestras biológicas para cotejos de ADN de las presuntas víctimas, todo conforme al punto 2.3 del Acuerdo de Solución Amistosa, y garantizar así la intervención de los fiscales en esas audiencias. Dicha información fue trasladada a los peticionarios para sus observaciones.

198. El 21 de abril de 2017, los peticionarios indicaron que no surge de la información suministrada por el Estado ningún elemento que dé cuenta del cumplimiento por parte del Estado del punto 2.3b del Acuerdo, toda vez que la cláusula mentada hace una referencia precisa al compromiso de planificar cursos de capacitación específicos respecto al trato adecuado a las víctimas de referidos delitos, es decir, acerca de cómo los actores judiciales toman contacto con las víctimas para evitar su re victimización en las investigaciones. En ese sentido, consideraron que la especificidad que requiere la problemática de la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado no puede considerarse satisfecha con un “curso sobre derechos humanos”, ni con visitas eventuales a la ex ESMA, como se menciona en el informe del Estado.

199. Igualmente indicaron los peticionarios que, el curso al que se hace referencia, como lo señala el mismo Director de la Escuela Judicial, se encuentra dirigido a los aspirantes a magistrados, siendo que en el ASA, lo acordado es que fuese dirigido a “magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial”; por tanto, refieren que este compromiso del Estado continúa sin ser cumplido.

200. El 18 de agosto de 2017, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento.

201. El 7 de septiembre del 2017, los peticionarios reportaron sobre puntos que ya fueron declarados cumplidos por la Comisión tanto en el Informe de Solución Amistosa No. 160/10 como en el seguimiento posterior de la implementación del acuerdo de solución amistosa a través del mecanismo del Capítulo II D del Informe Anual. En ese sentido, la Comisión no se pronunciará sobre el particular. Los peticionarios no informaron sobre el cumplimiento de los puntos 2.3 y 2.4 (a) y (b) objeto de seguimiento. El Estado por su parte no presentó información adicional.

202. En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que aún se encuentra en proceso de implementación la cláusula 2.3 del acuerdo de solución amistosa, y a su vez reitera la necesidad de desarrollar las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento a los puntos 2.4.b y 2.4.c. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.

### **Caso 12.532, Informe No. 84/11, Penitenciarías de Mendoza (Argentina)**

203. En el informe No. 84/11 del 21 de julio de 2011, la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito el 12 de octubre de 2007 por las partes en el caso 12.532, Penitenciarías de Mendoza. El 29 de mayo de 2003, la Comisión recibió una petición presentada por 200 internos del Pabellón 8 de la Penitenciaría de Mendoza en la cual se alegó la responsabilidad de la República de Argentina por la violación de los derechos de los internos a la integridad física, a la salud y a la vida. En resumen, los peticionarios alegan que aproximadamente 2,400 internos se encontraban alojados en un penal con capacidad para 600

internos, de tal forma que 4 o 5 internos se encontrarían en celdas de 3 x 2 metros cuadrados. Alegaron también que carecían de baños, duchas, comida suficiente y atención médica adecuada. Informaron que en muchos casos dicho encierro se extiende por un término que alcanza las veinte horas y que sólo durante cuatro horas alternadas pueden estar fuera de las celdas. Afirmaron que deben realizar sus necesidades fisiológicas dentro de una bolsa de nylon en condiciones de promiscuidad y dentro de la celda frente al resto de sus compañeros. Alegaron además que carecen de agua para bañarse debiendo recurrir a una manguera y que muchos de ellos padecen de sarna y otras enfermedades producto de la falta de higiene. Como producto del hacinamiento, los peticionarios denunciaron una serie de muertes de internos y de hechos en los que resultaron heridos un número indeterminado de internos sin que se hayan esclarecido las circunstancias de estos actos. Asimismo, denunciaron que los internos no tenían acceso a tratamiento médico, ni a ningún tipo de trabajo o tarea de resocialización ni puede asistir a la escuela ni a los oficios religiosos y que no existía separación entre condenados y encausados.

204. A continuación se detalla el estado que para febrero de 2016 tenía cada uno de los compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo de solución amistosa suscrito el 12 de octubre de 2007:

<b>Compromisos establecidos en el acuerdo de solución amistosa aprobado en el informe No. 84/11</b>	<b>Estado del cumplimiento</b>
<b>II. Medidas de Reparación Pecuniarias:</b>	
1. Las partes convienen en constituir un Tribunal Arbitral "ad-hoc", a efectos de que este determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a las víctimas involucradas en el caso, de acuerdo a los derechos cuya violación se ha tenido por reconocida en el punto I de la presente acta, conforme a los estándares internacionales que sean aplicables.	<b>Cumplimiento pendiente</b>
2. El Tribunal estará integrado por tres expertos independientes, de reconocida versación en materia de derechos humanos y alta calidad moral, uno designado a propuesta de los peticionarios, el segundo a propuesta del Estado, y el tercero a propuesta de los dos expertos designados por las partes. El Tribunal deberá estar integrado, a más tardar, dentro de los 30 días siguientes a la ratificación legislativa del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial mediante el cual se apruebe el presente acuerdo.	<b>Cumplimiento pendiente</b>
3. El procedimiento a aplicar será definido de común acuerdo entre las partes, de cuyo contenido se dejara constancia en un acta cuya copia se elevara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. A tal efecto, las partes designarán un representante para participar en las deliberaciones sobre el procedimiento.	<b>Cumplimiento pendiente</b>
4. El laudo del tribunal arbitral será definitivo e irrecurrible. El mismo deberá contener el monto y la modalidad de las reparaciones pecuniarias acordadas, los beneficiarios de las mismas, y la determinación de las costas y honorarios que pudieran corresponder, tanto en el procedimiento llevado a cabo en el ámbito internacional como en la instancia arbitral, debiendo ser sometido a la evaluación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del proceso de seguimiento del cumplimiento del acuerdo, con el objeto de verificar que el mismo se ajusta a los parámetros internacionales aplicables. Los montos reconocidos en el laudo serán inembargables y se encontraran exentos del pago de todo impuesto, contribución o tasa existente o por crearse.	<b>Cumplimiento pendiente</b>
5. Los peticionarios se obligan a desistir de las acciones civiles iniciadas ante los tribunales locales respecto de las personas que resulten beneficiarias de las reparaciones que determine el Tribunal	

Arbitral ad-hoc, y renuncian, de manera definitiva e irrevocable, a iniciar todo otro reclamo de naturaleza pecuniaria contra el Estado Provincial y/o contra el Estado Nacional en relación con el presente caso.	<b>Cumplimiento pendiente</b>
<b>III. Medidas de reparación no pecuniarias</b>	
<b>1. Medidas normativas:</b>	
a) Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza un proyecto de ley mediante el cual se cree un organismo local de prevención en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, y a realizar las gestiones pertinentes para lograr su aprobación. Dicho organismo deberá responder a los estándares de independencia y autonomía fijados en dicho Protocolo, y deberá adaptarse en definitiva a los criterios que se establezcan oportunamente al sancionarse el mecanismo nacional correspondiente. A tal fin se establece un plazo de 90 días a partir de la firma del presente;	<b>Cumplido parcialmente</b>
b) Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza un proyecto de ley mediante el cual se cree la figura del Defensor del Pueblo de Mendoza, que tendrá a su cargo la defensa de los derechos humanos al conjunto de la población (salud, educación seguridad, desarrollo, medio ambiente sano, libertad de información y comunicación, derechos de los consumidores y usuarios, etc.) y a realizar [as gestiones pertinentes para lograr su aprobación.	<b>Cumplido parcialmente</b>
c) Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza, en un plazo no mayor de 90 días, un proyecto mediante el cual se crea una Procuración a favor de las personas privadas de libertad, y a realizar las gestiones pertinentes para lograr su aprobación.	<b>Cumplido parcialmente</b>
d) Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza, en un plazo no mayor a 90 días, un proyecto de ley mediante el cual se crea una Defensoría Pública oficial ante los juzgados de ejecución penal, y a realizar las gestiones pertinentes para lograr su aprobación.	<b>Cumplido parcialmente</b>
e) Adoptar las medidas que fueran necesarias para jerarquizar la Coordinación de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno a nivel de Dirección o Subsecretaría.	<b>Cumplido parcialmente</b>
<b>2. Otras Medidas de Satisfacción:</b>	
a) El Gobierno de la Provincia de Mendoza adoptara las medidas necesarias para colocar, en un plazo no mayor a 90 días, una placa recordatoria de las medidas solicitadas por la CIDH y por la Corte IDH respecto de las cárceles de Mendoza, que se ubicara en la entrada de la Penitenciaría Provincial;	<b>Cumplido parcialmente</b>
b) El Gobierno de la Provincia de Mendoza se compromete a realizar, en el ámbito de su competencia, todas las gestiones necesarias para que continúen las investigaciones de todas las violaciones a derechos humanos que derivaron en el dictado de las medidas provisionales dispuestas por la Corte IDH. Los resultados de dichas gestiones serán presentadas por el Gobierno de la Provincia de Mendoza en el marco del proceso de seguimiento del cumplimiento del acuerdo, así como las medidas adoptadas a los efectos de determinar responsabilidades que de dichas violaciones se deriven. Los resultados de dichas investigaciones deberán ser difundidos por los medios de comunicación.	<b>Pendiente de cumplimiento</b>
<b>c) Plan de acción y presupuesto:</b>	
1. El Gobierno de la Provincia de Mendoza se compromete, en un plazo no mayor de 90 días, a elaborar, en consulta con el Estado Nacional y con los peticionarios un Plan de Acción en Política Penitenciaria que	<b>Cumplido parcialmente</b>

<p>permita establecer políticas públicas de corto, mediano y largo plazo con un presupuesto acorde que posibilite su implementación. Dicho plan deberá contemplar, al menos, los siguientes puntos:</p>	
<p>a) Indicar las medidas a implementar para que los jóvenes adultos privados de libertad en la Provincia de Mendoza sean asistidos y custodiados por personal con formación específica para dicha tarea. Asimismo, se deberá garantizar a la totalidad de la población en esas condiciones la educación, la recreación y el acceso a actividades culturales y deportivas, una adecuada asistencia médica/psicológica y toda otra medida destinada a una adecuada inserción social y laboral;</p>	<b>Cumplido parcialmente</b>
<p>b) Teniendo en cuenta las condiciones de detención de los internos de las penitenciarías de Mendoza, solicitar a las autoridades administrativas o judiciales la revisión de antecedentes disciplinarios o informes del Organismo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional que afecten la implementación de los beneficios contemplados en el Régimen Progresivo de la Pena. Además deberá analizar el funcionamiento del Organismo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional con el objeto de optimizar su labor;</p>	<b>Cumplido parcialmente</b>
<p>c) Mejorar el servicio de salud de la Penitenciaría Provincial con la colaboración del Ministerio de Salud y realizarse las inversiones necesarias para la efectiva prestación del servicio a toda persona privada de libertad;</p>	<b>Cumplido parcialmente</b>
<p>d) Garantizar el acceso a la actividad laboral a todos los internos de las Cárceles de Mendoza que así lo soliciten;</p>	<b>Cumplido parcialmente</b>
<p>e) Garantizar el acceso y adecuada atención en los Juzgados de Ejecución, de toda persona que tenga un interés legítimo sobre la Ejecución de la Pena de los internos de las Cárceles de Mendoza. En especial el libre acceso a los abogados quienes podrán compulsar libremente los expedientes que se tramitan en dichos juzgados;</p>	<b>Cumplido parcialmente</b>
<p>f) Se procurare una adecuada capacitación y formación profesional del Personal Penitenciario.</p>	<b>Cumplido totalmente</b>

205. El 14 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada sobre el cumplimiento a las partes. La Comisión no recibió información adicional de ninguna de las partes en esa oportunidad.

206. El 17 de febrero de 2017, el Estado argentino presentó un informe integral sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa que fue trasladado al peticionario para sus observaciones. La Comisión no ha recibido observaciones de la parte peticionaria desde el 16 de junio de 2011.

207. En su informe de 17 de febrero de 2017, el Estado Argentino presentó información actualizada sobre los avances en el cumplimiento el acuerdo, indicando respecto a las medidas de reparación pecuniarias, que el día 6 de octubre de 2016, se convocó a los peticionarios a una mesa de trabajo con el objeto de analizar los puntos pendiente de cumplimiento del ASA, y que en dicha oportunidad, los peticionarios manifestaron que han sido abonadas casi en su totalidad las medidas pecuniarias fijadas por el Laudo Arbitral. La parte peticionaria no presentó observaciones sobre el particular.

208. Según lo indicado por la Comisión en su Informe anual de 2016, en el Informe No. 84/11, el acuerdo de solución amistosa fue aprobado mediante Decreto No. 2740, en el cual se reconoció la responsabilidad del Estado y la Ley ratificatoria del acuerdo fue sancionada el 16 de septiembre de 2008 y publicada el 17 de octubre de 2008. En virtud de lo anterior, se constituyó el Tribunal Ad- Hoc el 15 de diciembre de 2008. Dicho Tribunal emitió laudo el 29 de noviembre de 2010. El Tribunal, examinó las 6 muertes (enumeradas como 1 a 6 del acuerdo) producidas en el penal de Lavalle por el incendio ocurrido el 1 de mayo de 2004, y estableció un total de 601.000 dólares estadounidenses. Estableció asimismo que el monto a pagar por el Estado en los 10 casos de las personas (7 a 18 del acuerdo) fallecidas en la penitenciaría

ubicada en Boulogne Sur Mer de 1.413.000 dólares estadounidenses. En los 8 casos de personas que sufrieron lesiones en los distintos centros, estableció un monto de 202.000 dólares estadounidenses. Como costas y honorarios, dispuso el pago de 100.000 dólares estadounidenses y 18.000 de remuneraciones a los árbitros.

209. Al respecto, la Comisión considera que de la información suministrada por el Estado se colige que el Tribunal ad Hoc fue creado y emitió su decisión que ha sido ejecutada sustancialmente. Por lo anterior, y ante la falta de información de la parte peticionaria, la Comisión declara que la cláusula II del acuerdo de solución amistosa se encuentra cumplida en su totalidad. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión continuará monitoreando el pago total de las compensaciones económicas dentro del marco del seguimiento del acuerdo de solución amistosa de así solicitarlo la parte peticionaria.

210. En relación al punto 1 (a) de la cláusula III, el Estado reiteró que, a través de la Ley Provincial No. 8279/1 de 15 de abril de 2011, se creó la Comisión Provincial de la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes con sede en la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza como órgano de aplicación del Protocolo Facultativo, y que está conformada por el Procurador de las Personas Privadas de Libertad y un Comité local integrado por representantes de organizaciones de sociedad civil. La parte peticionaria no presentó observaciones sobre el particular.

211. Al respecto, la Comisión observa que efectivamente como se indicara en el Informe 84/11, el acuerdo de solución amistosa, el 15 de abril de 2011, fue promulgada la Ley 8.279, que dispone la creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Dicha Ley fue publicada en el Boletín Oficial el lunes 16 de mayo de 2011, y que se encuentra a cargo del Procurador de las Personas Privadas de Libertad, organismo de control externo, independiente y con personería jurídica propia, funcionalmente autónomo y financieramente autárquico, que cuenta con un presupuesto de aproximadamente \$2.500.000, según lo reportado por el Estado en el año 2015.

212. La Comisión tomó conocimiento de que la Comisión provincial es un organismo descentralizado, independiente y con personalidad jurídica propia, funcionalmente autónomo y financieramente autárquico. Esta Comisión está integrada por el Procurador de las Personas Privadas de Libertad, quien ejerce las funciones de Presidente del organismo, y un Comité local para la Prevención de la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, inhumanos o degradantes integrado por representantes de organizaciones no gubernamentales. Cuenta con un Secretario Ejecutivo que tiene a su cargo todos los aspectos organizativos de la Comisión. Asimismo, la Comisión obtuvo información en búsqueda libre de que dicha Comisión tiene por objeto actuar “en la defensa y protección de los derechos y garantías consagrados en los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional, Provincial y las leyes, de toda persona que se encuentre o pueda encontrarse privada de su libertad de cualquier modo, en cualquier tipo de establecimiento bajo jurisdicción y control del Estado Provincial”, y que “sus facultades se extienden a la protección de aquellas personas alojadas en entidades de carácter privado de las que no puedan salir libremente, bajo cualquier forma de demora, retención, detención, internación o custodia, sea por orden de autoridad judicial, administrativa o de otra autoridad privada o pública, a instancia suya o con su consentimiento expreso o tácito”.

213. Asimismo, dentro de las funciones generales de la Comisión de Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, se encuentran entre otras, visitar periódicamente y sin previo aviso los lugares en que se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; controlar en forma permanente el trato que reciben las personas privadas de su libertad en los lugares de detención o durante los traslados, con miras a fortalecer su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y, entrevistarse libre y privadamente con las personas privadas de su libertad, personalmente o por cualquier medio de comunicación y con la asistencia de un intérprete cuando

sea necesario, así como con cualquier otra persona que se considere que pueda facilitar información pertinente<sup>76</sup>.

214. Al respecto, y frente a la falta de observaciones de la parte peticionaria, la Comisión declara el cumplimiento del punto 1 (a) de la cláusula III del acuerdo de solución amistosa.

215. En relación al punto 1 (b) de la cláusula III del acuerdo de solución amistosa, el Estado indicó que en la reunión sostenida con la parte peticionaria el 6 de octubre de 2016, se acordó trabajar conjuntamente en las fórmulas para la creación de la figura de Defensor del Pueblo y promover el impulso del proyecto legislativo firmado. La parte peticionaria no presentó información sobre el particular.

216. Al respecto, la Comisión valora los esfuerzos de las partes de avanzar conjuntamente en el impulso del cumplimiento de esta cláusula y queda a la espera de información adicional que permita valorar su total implementación.

217. En relación a los puntos 1 (c y d) de la cláusula III del acuerdo de solución amistosa, el Estado indicó que la figura de Procurador a favor de las personas privadas de la libertad se encuentra funcionando desde febrero de 2014, y según lo reportado en el año anterior, habían sido designados los defensores para el Penal Almafuerite y el Penal Boulogne sur Mer, aclarando que la defensora para el penal Boulogne Sur Mer tiene competencia para defensa se los condenados en el Complejo I Boulogne Sur Mer, Complejo II San Felipe, Unidad III “Cárcel del Mujeres”, Unidad IV, Colonia Granja Penal “Gustavo André”; que dicha defensoría cuenta con un co-defensor son sede en el Complejo III “Almafuerite” para la atención de los privados de libertad alojados en ese centro. La parte peticionaria no presentó información sobre el particular.

218. Al respecto, la Comisión valora los esfuerzos del Estado argentino para la creación de las defensorías públicas oficiales y la procuraduría de las personas privadas de la libertad según lo establecido en el acuerdo de solución amistosa, y frente a la falta de observaciones de la parte peticionaria, declara el cumplimiento total de los puntos 1 (c y d) de la cláusula III del acuerdo de solución amistosa.

219. En relación al punto 1(e) de la cláusula III del acuerdo de solución amistosa, el estado indicó sin dar detalles que esta medida se cumplió a través de Decreto Ejecutivo No. 186 del 29 de enero de 2008. El Estado agregó que a través del Decreto Provincial No. 909/16 se designó a Luz Amanda Faingold como Directora de Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo social y Deportes. La parte peticionaria no presentó información sobre el particular.

220. Al respecto, la Comisión nota que en la información suministrada por el Estado no se observa una estructura u organigrama que permita entender las acciones adoptadas por el Estado para la jerarquización de la Coordinación de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno a nivel de Dirección o Subsecretaría, por lo cual quedaría a la espera de información detallada sobre su estructura actual, funciones asignadas, presupuesto anual y demás indicadores que permitan a la Comisión valorar el cumplimiento total de la medida.

221. En relación al punto 2 (a) de la cláusula III, el Estado informó que se ha instalado una placa recordatoria en la entrada del Complejo penitenciario No. Boulogne Sur Mer. La parte peticionaria no presentó información sobre el particular.

222. Al respecto, la Comisión observó en el expediente del caso que la placa conmemorativa indica lo siguiente:

“Debido a las muertes violentas (sic) y hechos de extrema gravedad y urgencia que se suscitaron en el interior de la Penitenciaría Provincial de Mendoza y la Unidad de Gustavo

---

<sup>76</sup> Ver Pagina web Legislatura de Mendoza, Informe anual de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, disponible electrónicamente en: <http://www.legislaturamendoza.gov.ar/presentacion-informe-anual-de-la-comision-provincial-de-prevencion-de-la-tortura/>

André de Lavalle se dispusieron medidas cautelares y provisionales dictadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el marco de las referidas medidas provisionales la Corte IDH mediante resolución de 22 de noviembre de 2004 requirió al Estado que: 1. –Adopte de forma inmediata las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la Unidad Gustavo André, de Lavalle, así como la de todas las personas que se encuentren en el interior de estas. 2. –Investigar los hechos que motivaron la adopción de tales medidas, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes. Este memorial representa el firme compromiso del Estado Provincial por superar todas aquellas circunstancias que motivaron la adopción de tales medidas.”

223. Al respecto, la Comisión valora los esfuerzos del Estado argentino, y declara el cumplimiento total del punto 2 (a) de la cláusula III.

224. En relación al punto 2 (b) de la cláusula III del acuerdo de solución amistosa, el Estado indicó que el Ministerio de Seguridad Provincial solicitó un informe a la Inspección General de Seguridad respecto de las actuaciones que originaron los hechos de violencia contenidos en el caso objeto del acuerdo, así como a la suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza respecto del estado de las causas iniciadas a raíz de dichos hechos. La parte peticionaria no presentó información sobre el particular.

225. Al respecto, al Comisión toma nota de la información suministrada por el Estado y quedaría a la espera de los resultados de dichas gestiones y de la documentación anunciada a efectos de valorar el cumplimiento de dicho extremo del acuerdo de solución amistosa.

226. En relación a los extremos del acuerdo relacionados con el punto 2 (c) de la cláusula III del acuerdo de solución amistosa, el Estado indicó lo siguiente:

Numeral 1: se promulgó la Ley 8842 de 3 de marzo de 2016, a través de la cual la Provincia de Mendoza se adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia No. 228/15 del Poder Ejecutivo Nacional y se declaró el Estado de emergencia del Sistema de Seguridad Pública en la totalidad del territorio Nacional. En virtud de lo anterior, el Sistema penitenciario podrá llevar obras de mejoramiento por un monto total de \$140.000.000. El Estado proporcionó información sobre el Plan de Obras para mantenimiento de las instalaciones penitenciarias 2016-2017, que incluye mantenimiento correctivo de obras simples y complejas en los complejos penitenciarios Boulogne Sur Mer, San Felipe, Almafuerte y Borbollón, entre otros, y presentó las asignaciones presupuestarias para cada uno.

Literal a: mediante resolución 387/16 de la Dirección General de Servicio Penitenciario provincial, se resolvió denominar la Unidad de jóvenes adultos como Unidad IV- Penal de jóvenes Adultos, dotándola de estructura orgánica funcional independiente y adecuándola a los estándares exigidos. El Estado indicó que al finalizar las obras de reparación y mantenimiento se efectuará la separación física y visual de todas las actividades de la población carcelaria.

Literal b: se reestructuró el funcionamiento interno del Organismo Técnico criminológico para cumplir con las solicitudes realizadas por los internos. En diciembre de 2015 se tramitaron 844 expedientes relativos al período de observación de los internos entre 2011-2016, y se evidenció un retraso en los tiempos de tramitación, por lo cual se han establecido plazos para cumplir con las actuaciones.

Literal c: se han implementado guardias sanitarias en todas las unidades penales, las que se encuentran integradas por personal de seguridad exclusivamente dedicados a esta tarea. Se han otorgado turnos para atenciones médicas externas, así como la programación de cirugías en distintos complejos penitenciarios. Asimismo, se está tramitando la adquisición

de un módulo sanitario a fin de obtener dos consultorios externos con sus guardias sanitarias de seguridad, destinados a la atención médica de patologías leves y ambulatorias. Por otro lado, se están digitalizando las historias clínicas de los internos, de manera que se pueda contar con una política penitenciaria en salud ágil y útil.

Literal d: se sigue desarrollando la política penitenciaria y se está a la espera de que la “laborterapia” sea aplicada a toda la población carcelaria. Desde la Unidad de Producción Penitenciaria, se llevan a cabo tareas de mimbraría, imprenta, carpintería y textilera, entre otras, que facilita la reinserción social de las personas privadas de la libertad, en oficios existentes en el mercado laboral.

Literal e: se está trabajando en forma conjunta con el poder judicial de Mendoza, para mejorar la relación que habitualmente se da entre el poder judicial y el servicio penitenciario. Se han acentuado las mesas de consulta, que sesiona dos veces al mes, bajo la coordinación del poder judicial, con participación del Ministerio Público Fiscal y otros organismos estatales.

227. Al respecto, la Comisión toma nota de la información suministrada por el Estado, y valora los importantes avances, sin embargo, carece de información acerca del plan de acción en política penitenciaria, tal como lo establece el acuerdo. En ese sentido, la Comisión insta a las partes a definir los componentes necesarios para el cumplimiento total de las medidas establecidas en el literal c del punto 2 de la cláusula II del acuerdo de solución amistosa. Por lo anterior, la Comisión considera que existe un cumplimiento parcial de este extremo del acuerdo.

228. El 1 de agosto de 2017, los peticionarios remitieron notas de prensa sobre tortura y atentados en contra de la integridad física en el centro penitenciario de Almagre, sin presentar observaciones o detalles al respecto. Dicha información fue trasladada al Estado argentino para que presentara sus observaciones.

229. El 18 de agosto de 2017, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe la Comisión no ha recibido información actualizada de ninguna de las partes.

230. La Comisión valora la información presentada por el Estado, y observa que algunos de los compromisos adoptados por el Estado en el acuerdo de solución amistoso han sido cumplidos, sin embargo, se hace necesario indicar que no cuenta con pronunciamientos por parte de los peticionarios para verificar adecuadamente los avances en el cumplimiento del acuerdo desde el año de su aprobación, por tanto, aprovecha la oportunidad para instar a las partes seguir trabajando de manera conjunta en la implementación del acuerdo.

231. En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento total.

### **Caso 12.306, Informe No. 85/11, Juan Carlos de la Torre (Argentina)**

232. En el informe No. 85/11 del 21 de julio de 2011, la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito el 4 de noviembre de 2009 por las partes en el caso No. 12.306, Juan Carlos de la Torre. En resumen, los peticionarios alegan el señor Juan Carlos De la Torre, de nacionalidad uruguaya, ingresó a Argentina en el año 1974 con autorización de la Dirección Nacional de Migraciones y, luego de 24 años de permanencia en territorio argentino, el señor De la Torre fue detenido sin orden judicial y expulsado del país a través de un proceso sumario que no le brindó garantías judiciales. Los peticionarios alegan que mediante dichos hechos, el Estado argentino incurrió en una violación de los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la no injerencia en la vida privada y a la protección de la familia, consagrados respectivamente en los artículos 7, 8, 25, 11.2 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, en conexión con el artículo 1.1 del mencionado instrumento, en perjuicio del señor Juan Carlos De la Torre.

233. El 4 de noviembre de 2009, los peticionarios y los representantes del Gobierno de la República Argentina suscribieron un acuerdo, en cuyo texto se establecen los siguientes compromisos:

1. El Estado argentino se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para dictar, en el plazo de un (1) mes, la reglamentación de la nueva Ley de Migraciones, tomando como texto el Proyecto aprobado por la Comisión Asesora para la Reglamentación de la Ley N° 25.871, creada por la Disposición de la Dirección Nacional de Migraciones N° 37130/08, del 26 de mayo de 2008. La mencionada Comisión se integró con organizaciones eclesíásticas, como la Fundación Comisión Católica, y organizaciones de derechos humanos como el CELS, entre otras. La Comisión –que funcionó entre los meses de junio a octubre de 2008– elaboró un proyecto de reglamento de la ley de migraciones, que se adjunta como parte integrante del presente acuerdo. Este proyecto respeta el contenido de la nueva ley, garantizando, entre otros aspectos, el acceso igualitario de las personas migrantes a los servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social, el derecho a la reagrupación familiar, el derecho al debido proceso en el procedimiento migratorio, facilidades para el pago de la tasa migratoria y un sistema claro de exención de dicha tasa, y la adopción de las medidas que fueran necesarias para garantizar una adecuada asesoría jurídica para migrantes y sus familias.

2. El Estado argentino se compromete a realizar un pormenorizado análisis de la legislación vigente en la materia (nacional y provincial) a fin de impulsar la adecuación de aquella normativa que eventualmente contenga disposiciones que efectúen discriminaciones ilegítimas con base en la condición de extranjero de la persona o en su condición migratoria a los estándares internacionales y constitucionales en la materia. En este sentido, las partes destacan la aprobación del “Plan Nacional contra la Discriminación”, que incluye un capítulo específicamente dedicado a los migrantes y a los refugiados.

3. El Estado argentino se compromete, a través de la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a mantener periódicamente en la sede de la Cancillería las reuniones de trabajo que fueran necesarias con el objeto de monitorear la aplicación efectiva de los compromisos asumidos, a las que se convocará a las agencias estatales que tuvieran competencia en los distintos puntos a evaluar, y de informar con igual periodicidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

234. Según la información aportada por el Estado, el 6 de mayo de 2010 se promulgó el Decreto 616/2010, reglamentario de la ley 25.871, que continúa la línea de la Ley de Migraciones, con relación al respeto de los estándares de derechos humanos en la materia.

235. Mediante comunicación del 2 de enero de 2013 los peticionarios indicaron a la Comisión que si bien inicialmente el Estado dio importantes señales de compromiso en la implementación del acuerdo, en particular mediante el dictado de la reglamentación de la Nueva Ley de Migraciones, aún permanecen incumplidos puntos esenciales del acuerdo. En particular, los peticionarios indican que no se ha avanzado en el análisis pormenorizado de las normas nacionales y provinciales al que el Estado se comprometió con el fin de impulsar la adecuación de la normativa a los estándares de derechos humanos; y que no se ha instaurado formalmente una instancia de trabajo conjunta con miras a trabajar periódicamente para la aplicación efectiva de los compromisos asumidos.

236. Mediante comunicación de fecha 9 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento.

237. Mediante comunicación recibida el 4 de diciembre de 2013, el Estado informó que, sin perjuicio de considerar que el acuerdo de solución amistosa firmado entre las partes se encuentra

sustancialmente cumplido con la aprobación del referido Decreto N° 616/10, se han llevado a cabo reuniones de trabajo y que se continúa trabajando en el análisis de la normativa vinculada a la materia.

238. Con el fin de impulsar el cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo de solución amistosa con el auspicio de la CIDH, las partes realizaron una reunión de trabajo el 26 de abril de 2014. Adicionalmente, mediante comunicación del 28 de abril de 2014 los peticionarios solicitaron la habilitación de un canal de discusión o “mesa” interinstitucional para la modificación de aquellas normas relativas a pensiones sociales como el Decreto 432 del 97 y 582 del 03 y para reformar la exigencia de años de residencia para el acceso a esos derechos, de acuerdo a los mandatos asumidos por el Estado en el marco del seguimiento del Acuerdo oportunamente arribado”. Asimismo insistieron en la necesidad de habilitar un proceso urgente para la modificación inmediata del decreto 432 del año 1997, en cuanto también exige la acreditación de 20 años de residencia para el acceso a pensiones por discapacidad, ya que ese requisito elimina la posibilidad que todos los niños, niñas y adolescentes que estén en una situación de discapacidad puedan acceder a la pensión definida en aquel decreto.

239. El 4 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información sobre el cumplimiento del acuerdo. El 2 de enero de 2015, los peticionarios luego de reiterar su reconocimiento a la enorme relevancia del caso y del acuerdo de solución amistosa, así como a los logros alcanzados en materia legislativa, manifestaron su preocupación por los discursos de algunos funcionarios de alta jerarquía en el Estado y por la adopción de nuevas normativas que, a su juicio, constituyen un retroceso en materia migratoria. En primer lugar, los peticionarios refirieron distintas manifestaciones de funcionarios en medios de comunicación en los que habrían asociado a los migrantes con actividades delincuenciales.

240. En segundo lugar, en cuanto a las regulaciones que reducirían los actuales niveles de protección de los migrantes, los peticionarios indicaron que el 4 de diciembre de 2014 se aprobó el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que en relación a la medida de suspensión del juicio a pruebas incluye una modalidad específica para extranjeros en el artículo 35, en contra de la cual se manifestaron los peticionarios junto con otras 52 organizaciones de la sociedad civil. A su juicio, la modalidad consagrada en la norma supone la aplicación de casos en los que el migrante enfrenta el dilema de someterse a un juicio penal, ser condenado, cumplir la pena, para posteriormente ser expulsado del país conforme a la ley migratoria, o aceptar una suspensión del juicio a prueba y ser expulsado hasta por 15 años. Adicionalmente, los peticionarios advierten que el artículo 35 del CPPN incluye una preocupante distinción entre los casos de migrantes en situación regular e irregular, aun cuando la ley de migraciones había eliminado las consecuencias negativas hacia los derechos de las personas migrantes por cuestiones de irregularidad migratoria. Consideran que mediante dichas medidas, la carga de la prueba se invierte y corresponde al extranjero acreditar si está en una situación regular. Como otra normativa que, a su juicio, atenta contra el ingreso de extranjeros a la Argentina, citan la Disposición 4362/2014 que establece el procedimiento para la resolución de casos sobre sospecha fundada en la subcategoría turista. Indican que la determinación de “falso turista” que de conformidad con la norma se debe fundar en elementos objetivos identificables, puede sustentarse en meras sospechas infundadas o en nociones discriminatorias. Adicionalmente, señalan que el artículo 5 de la citada disposición habilita al agente migratorio a rechazar el ingreso de extranjeros que en el pasado se hubieran encontrado en una situación de migración irregular en la Argentina, con lo cual se crea una nueva figura de sanción no contemplada en la ley de migraciones.

241. Finalmente, los peticionarios indicaron que durante el 2014 no se llevaron a cabo reuniones entre las partes para discutir la normativa examinada en el punto 2.b del acuerdo o cualquier otra relacionada con migrantes.

242. Por su parte, en comunicación del 5 de febrero de 2014, el Estado reiteró que el acuerdo de solución amistosa se encuentra sustancialmente cumplido y que se continúa trabajando en el análisis de la normativa vinculada a la materia. Al respecto, informó sobre el compromiso de la ANSES respecto del análisis de la propuesta de los peticionarios relacionada con los requisitos exigidos a la personas migrantes en la tramitación de pensiones asistenciales, del que se está a la espera de respuesta.

243. El 21 de marzo de 2015, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre las partes convocada por la CIDH en el marco del 154 periodo de sesiones, en la que acordaron una metodología de trabajo para avanzar en el cumplimiento del punto del acuerdo de solución amistosa referido al análisis de la normativa vigente para adecuarla a los estándares internacionales en la materia, y para instaurar la instancia de trabajo conjunta que dé seguimiento a la implementación del acuerdo.

244. En seguimiento de dicha reunión, el 7 de abril de 2015, los peticionarios enviaron una comunicación al Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y a la Dirección de Contencioso Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores con copia a la CIDH, con una propuesta de agenda y de las autoridades a convocar para la reunión que en esa oportunidad se acordara. Asimismo, detallaron cuatro temas en los que debería priorizar el monitoreo del acuerdo de solución amistosa. Dichos temas son los siguientes: i) el otorgamiento de pensiones por invalidez (Ley No. 18.910 y su Decreto Reglamentario), pensiones a la vejez (ley No. 13.478 y su Decreto Reglamentario No. 582/03) y pensiones a madres de 7 o más hijos (ley No. 23.746 y su Decreto Reglamentario No. 2360/90); ii) el artículo 35 del nuevo Código Procesal Penal de la Nación; iii) La determinación del procedimiento para la resolución de casos sobre sospecha fundada en la subcategoría turista (Disposición 4362/2014); y iv) el acceso a la asignación universal por hijo (Decreto 1602/09).

245. El 15 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información a las partes sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa.

246. Mediante nota de fecha 15 de octubre de 2015 el Estado remitió las actas de las reuniones de trabajo celebradas entre las partes los días 15 de mayo, 17 de junio y 12 de agosto de 2015, en las cuales constan los desarrollos logrados en el marco de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. De conformidad a lo consignado en dichas actas, en las citadas reuniones las partes tuvieron la oportunidad de discutir los temas planteados por los peticionarios, quienes presentaron a la consideración algunas situaciones especialmente preocupantes, así como una propuesta concreta de revisión de la normativa señaladas por ellos. En la última reunión se acordó que las diferentes propuestas de reformas normativas circularían entre las distintas agencias para sus comentarios y/u observaciones.

247. La Comisión valora, una vez más, los esfuerzos desplegados por las partes que resultaron en la derogación de la ley de migraciones conocida como “Ley Videla”, y su sustitución por la ley 25.871, sancionada el 20 de enero de 2004, así como por el Reglamento de la Ley de Migraciones, aprobado el 3 de mayo de 2010 por la presidenta de la Nación argentina, a través del Decreto N° 616. Al mismo tiempo, observa que mediante las reuniones de trabajo sostenidas por las partes durante 2015 se han registrado avances importantes en el cumplimiento de los puntos 2.b y 2.c del acuerdo de solución amistosa, relativos al análisis de la normativa vigente para adecuarla a los estándares internacionales, con el fin de instaurar la instancia de trabajo conjunta que dé seguimiento a la implementación del acuerdo. En particular, destaca como pasos importantes, la identificación de los temas en los que se centraría el análisis de la normativa que podría ser objeto de revisión, así como la presentación de propuestas de reforma por parte de los peticionarios y la disposición del Estado a ponderarlas entre las distintas agencias. En ese sentido, la Comisión valora la información presentada por las partes y las insta a continuar trabajando de manera conjunta en el seguimiento de la implementación del acuerdo y a mantenerla informada.

248. El 14 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada sobre el cumplimiento a las partes. El Estado informó el 17 de septiembre de 2016 que, de acuerdo a los compromisos asumidos en la última reunión de trabajo sostenida con los peticionarios el 15 de septiembre de 2016, se encontraba a la espera de una presentación de su parte para la elaboración de un nuevo protocolo de modificación de la normativa cuestionada a los fines de su análisis. Dicha información fue trasladada a los peticionarios el 31 de octubre de 2016 para sus observaciones.

249. El 14 de octubre y el 30 de noviembre de 2016, los peticionarios solicitaron prorroga. La CIDH concedió una prorroga a los peticionarios el 31 de octubre de 2016. El 9 de diciembre de 2016, los peticionarios presentaron un informe en el cual indicaron que la reforma normativa esperada no se ha concretado, y que por el contrario, se han proliferado las medidas que contradicen el espíritu del acuerdo de

solución amistosa alcanzado en este caso. Entre dichas medidas listaron las siguientes: a) el desmantelamiento de programas de regularización y aumento de los operativos de control de permanencia; b) la detención por “portación del rostro” o “control poblacional”, basada en características étnicas o raciales, seguidos de expulsión del territorio; c) graves prácticas judiciales discriminatorias, entre las cuales denunciaron la convalidación de la desnudez forzada y la calificación del estatus migratorio como un agravante en procesos penales; d) el aumento de expulsiones de migrantes, indicando que de 1760 expulsiones en el año 2014, se pasó a 3528 en el 2016, según cifras de la Dirección Nacional de Migraciones; e) construcción de un centro de detención de migrantes; f) la falta de aplicación del Reglamento de Migraciones para expulsión sin condena penal en firme a migrantes; y g) el discurso discriminatorio de funcionarios públicos.

250. El 3 de agosto del 2017, los peticionarios manifestaron su profunda preocupación por el estado del ASA, y en la misma advirtieron que, los cambios introducidos por el DNU 70/2017 el 30 de enero de 2017, están directamente relacionados con las violaciones denunciadas en el caso De La Torre y representan un retorno a un escenario normativo muy similar a aquel vigente cuando sucedieron los hechos del caso, lo cual además de generar las condiciones para que un número relevante de migrantes viviese condiciones de irregularidad migratoria, genera un cuadro de persecución a través de mecanismos y procedimientos que no respetan sus derechos y garantías. En ese sentido, los peticionarios reiteraron que, el DNU 70/2017 ataca estructuralmente aspectos esenciales de la normativa forjada en el marco del trámite ante la CIDH. Los peticionarios indicaron que las nuevas prácticas de las autoridades estatales incluyen un mecanismo sumarisimo para la expulsión de personas migrantes, acortando el plazo en algunos casos de 30 días a 3 días. Asimismo, el plazo de detención al migrante es indefinido en aquellos casos en los cuales esté pendiente de resolución algún recurso impugnatorio de la decisión. Los peticionarios también indicaron cambios en materia de notificaciones, asistencia jurídica gratuita, asistencia letrada obligatoria y cancelación de residencia en caso de delitos menores, entre otros aspectos de la nueva política migratoria.

251. El 18 de agosto de 2017, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado información adicional.

252. El 17 de octubre de 2017, el Estado presentó un informe en relación a la Ley 13.478 y su Decreto reglamentario 582/03 sobre pensiones de vejez, al Decreto 1602/09 sobre asignación universal por hijo; y en relación al artículo 35 del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Sobre este último punto, el Estado indicó que el 28 de septiembre de 2016 se presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación para reformar dicho Código Penal. En relación a la política en materia migratoria, el Estado indicó que se está avanzando en las medidas necesarias para disponer de un espacio específico para el cumplimiento de órdenes de retención que son emanadas de autoridad judicial competente, y señaló que dicha acción encuentra su fundamento entre otros documentos, en el Informe Alternativo para el Comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, en virtud de no existir estructura alguna que pueda ser utilizada por parte de la autoridad migratoria y de los jueces que resuelven ordenes de retención; y en base a ello, la Dirección inició las medidas tendientes a cumplir con la necesidad de contar con un espacio diferenciado, sin embargo, no se ha puesto aun en funcionamiento el espacio específico para el cumplimiento de las ordenes de retención. Asimismo, el Estado indica que se ha trabajado en el establecimiento de nuevas oficinas migratorias y delegaciones, generando una nueva herramienta institucional eficaz de acercamiento a un mayor número de migrantes, destacando la apertura de 2 oficinas en Buenos Aires y encontrándose próximas a ser abiertas 2 oficinas en el municipio de Moreno y de La Matanza.

253. Asimismo, el Estado informó que se han abordado nuevas estrategias de acercamiento a la población migrante a fin de propender a su regularización, articulando tareas con diversos gremios, de modo que las acciones que se impulsen para la regularización de las situaciones laborales, incluyan la regularización migratoria, en caso de corresponder, y que se han desarrollado cursos de capacitación a los Centros de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a diversos equipos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya labor se desarrolla con presencia directa en los barrios más carenciados, a fin de que, en toda acción de acercamiento integral que lleve adelante el Gobierno, su personal se encuentre a la altura de asesorar en materia migratoria; por tanto, el Estado destaca que su gestión está lejos de tener una política represiva y estigmatizante respecto de los migrantes.

254. En cuanto al Decreto de Necesidad y Urgencia No. 70/2017 que modificara la Ley No. 25.871 la Dirección Nacional da tratamiento a las observaciones realizadas por los peticionarios, indicando que, constatada la irregularidad migratoria de un extranjero, la primera respuesta estatal en el sistema de la Ley N° 25.871 conforme su texto original, era intimar a regularizar, medida que no resultaba ser una simple actividad estatal, sino que se encuentra regulada en el artículo 61 de esta ley; el proceso básicamente contaba con 5 etapas enumeradas, en la que se debatían las mismas cuestiones, la existencia o no de la causal objetiva que daba lugar a la expulsión y la existencia o no de una condena o procesamiento penal que afectara al migrante; de ello, surgió la necesidad extrema de generar un proceso más razonable y ágil que respetase las garantías del debido proceso y permitiera hacer efectiva la finalidad de la norma.

255. Sobre este punto, el Estado también refirió que, la Dirección Nacional ha realizado una comparación con diversos regímenes migratorios vigentes en países bajo la órbita de control de la Corte IDH (Costa Rica, Perú, Chile, Paraguay y Bolivia), verificándose que los procedimientos de expulsión de personas de nacionalidad extranjera, se sustancian, por regla general, de manera expedita, obedeciendo a la naturaleza de las cuestiones en debate y teniendo como punto fundamental no perpetuar al migrante en un estado de incertidumbre respecto a su condición migratoria; por lo anterior, el Estado Argentino concluye que las cuestiones migratorias no revisten complejidad alguna para el análisis y definición de la situación migratoria que corresponde aplicar conforme a la normativa vigente, y que el plazo de 3 días resulta suficiente para revisar los recursos administrativos y judiciales.

256. Señala que, en cuanto a la asistencia jurídica gratuita, el requerimiento de acreditar la insuficiencia de medios económicos no es algo novedoso, sino que previamente a la sanción del Decreto No. 70/17, ya incluía la exigencia del requisito señalado, y ello no dificulta el acceso a la asistencia jurídica, sino todo lo contrario, sostiene que, en el plexo normativo argentino todo migrante puede acceder a la asistencia jurídica que escoja, y en caso que no pudiera solventarla, acreditado ello, podrá acceder al servicio de asistencia jurídica gratuita proporcionada por el Estado.

257. Finalmente, en referencia a los antecedentes penales como impedimento de ingreso y permanencia y como motivación de cancelación de residencias, refiere el Estado que el peticionario no identifica violación alguna a los Derechos Humanos, en efecto, indica que en atención a la crítica situación en materia de seguridad que atraviesa hoy la República Argentina, se han efectuado alteraciones y aclaraciones al texto legal a fines de que su aplicación sea más eficiente, destacando que, las provincias más importantes del país se han manifestado declarando un estado de emergencia en materia de seguridad, dado el crecimiento de la delincuencia transnacional, requiriendo un accionar de parte de cada una de las áreas de Gobierno para su combate eficaz. Resalta el Estado que, el impedimento derivado de registrar “antecedentes penales” entendidos ellos como autos de procedimiento firme o condena no firme, la cláusula no es novedosa toda vez que ya existía en el Decreto Reglamentario No. 616/10.

258. En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.

### **Caso 12.324, Informe No. 66/12, Rubén Luis Godoy (Argentina)**

259. En el Informe No. 66/12 de fecha 29 de marzo de 2012, la CIDH concluyó que el Estado de Argentina no investigó debidamente la denuncia de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes que hizo el señor Godoy, en el proceso penal en que fue condenado a prisión perpetua como autor de los delitos de tentativa de violación y homicidio calificado en concurso real, en violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 en relación con el artículo 5.1 de la Convención Americana. Asimismo, concluyó que la confesión que el señor Godoy hizo bajo alegatos de haber sido obtenida bajo tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, fue utilizada por los tribunales de justicia en su proceso penal, en violación del artículo 8.3 de la Convención. En adición, la CIDH concluyó que el señor Godoy no tuvo acceso a un recurso judicial que hiciera una revisión de los elementos de hecho, de derecho y valoración y recepción de la prueba que ponderó el tribunal de única instancia, en violación de lo dispuesto por el artículo 8.2.h) y artículo 2 de la Convención, todos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Asimismo, concluyó *iura novit*

*curiae*, que el Estado violó los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de Rubén Luis Godoy.

260. La CIDH formuló al Estado Argentino las siguientes recomendaciones:

1. Disponer las medidas necesarias para que el recurso interpuesto por la defensa de Rubén Luis Godoy con el fin de obtener una revisión amplia de la sentencia condenatoria, se resuelva en cumplimiento del artículo 8.2.h) de la Convención Americana, con exclusión de cualquier prueba obtenida bajo coacción, en los términos del artículo 8.3 de dicho instrumento. La CIDH dará seguimiento al trámite y resultados del recurso de revisión.

2. Completar la investigación penal dirigida a esclarecer la denuncia de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes hecha por Rubén Luis Godoy, a la mayor brevedad y de manera efectiva e imparcial. La CIDH dará seguimiento al trámite y resultados de dicha investigación.

261. Mediante comunicación de fecha 11 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento.

262. Mediante comunicación de fecha 19 de noviembre de 2013, la peticionaria informó que el día 24 de Septiembre de 2013, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, resolvió: "Tener por prescripta la acción penal y sobreseer" al señor Godoy. Asimismo, informó en relación a la causa en la cual el señor Godoy interviene como parte querellante y que investiga los apremios ilegales por él denunciados (Causa N° 343/1992 ante el Juzgado en lo Penal de Instrucción N° 3 de Rosario), se han realizado medidas de investigación solicitadas tanto por la Fiscalía General N° 8 como por parte de la Defensoría General de Cámaras, en su carácter de representante de la víctima.

263. El 4 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información sobre el cumplimiento del acuerdo. Ninguna de las partes presentó información adicional.

264. El 27 de agosto de 2015, en la ciudad de Buenos Aires las partes sostuvieron una reunión de trabajo convocada por la CIDH, con el fin de promover el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe No. 66/12. En la reunión las partes hicieron un recuento de las recomendaciones implementadas, para luego centrarse en la que se encuentra pendiente, esto es, la referida a la investigación penal dirigida a esclarecer la denuncia por hechos de tortura. El Estado explicó que debido al trascurso del tiempo la resolución de la causa se ha hecho dificultosa. Por su parte, los peticionarios indicaron que la Defensoría General se constituyó en querellante en la causa de apremios ilegales y que ha pedido una serie de medidas probatorias, las que se han diferido.

265. El 15 de septiembre de 2015, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

266. Mediante comunicación del 3 de noviembre de 2015 el Estado presentó un informe elaborado por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Santa Fe sobre la causa 343/92 (NN s/apremios ilegales – víctima: Rubén Luis Godoy), cuya investigación habría recibido un nuevo impulso en virtud de los compromisos asumidos por el Estado Provincial en el caso 12.324 de la CIDH. En seguimiento de la reunión de trabajo del 27 de agosto de 2015, el Estado reiteró su imposibilidad de ubicar a un testigo clave de la investigación de nacionalidad uruguaya, quien se ha logrado determinar que fue llevado detenido junto con el Sr. Godoy y habría visto a éste con posterioridad a los apremios ilegales denunciados. Al respecto, el Estado relaciona los esfuerzos realizados por la Procuración para dar con el paradero del testigo en Uruguay. Asimismo, el Estado reitera que el tiempo transcurrido desde la fecha de los presuntos hechos ha dificultado la producción de algunas medidas probatorias y que se ha avanzado cuanto ha sido posible. En todo caso, el Estado advierte que el Ministerio Público Fiscal ha girado instrucciones para que con independencia a la probabilidad de éxito, se mantengan las medidas desplegadas hasta obtener nuevos rumbos para la investigación.

267. El 14 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada sobre el cumplimiento a las partes. La Comisión no recibió información actualizada sobre el cumplimiento de ninguna de las partes en esa oportunidad.

268. El 8 de agosto de 2017, la Comisión solicitó información actualizada sobre el cumplimiento a las partes. A la fecha de cierre de este informe la Comisión no ha recibido información actualizada sobre el cumplimiento de ninguna de las partes.

269. En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que las recomendaciones se encuentran parcialmente cumplidas, y en consecuencia, seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.

### **Caso 12.182, Informe No. 109/13 Florentino Rojas (Argentina)**

270. El 5 de noviembre de 2013, la CIDH emitió el Informe No. 109/13, a través del cual aprobó el acuerdo de solución amistosa alcanzado por las partes el 23 de noviembre de 2009. El caso se refiere a violaciones a los derechos a la igualdad ante la ley y protección judicial, consagrados respectivamente en los artículos 24 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Florentino Rojas, quien había sufrido un accidente mientras regresaba a su hogar después de cumplir con una jornada en el servicio militar obligatorio, que le ocasionó una incapacidad física permanente del 85%. En razón de ello, el señor Florentino Rojas solicitó la obtención de una pensión militar la cual le habría sido denegada. El 23 de noviembre de 2009, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa en el que se estableció lo siguiente:

- a. Las partes convienen en constituir un Tribunal Arbitral “*ad-hoc*”, a efectos de que éste determine el monto de la asistencia humanitaria a otorgar al peticionario, conforme lo establecido en el punto III del presente, y de acuerdo con los estándares internacionales que sean aplicables.
- b. El Tribunal estará integrado por tres expertos independientes, de reconocida versación en materia de derechos humanos y alta calidad moral, uno designado a propuesta del peticionario, el segundo a propuesta del Estado nacional y el tercero a propuesta de los dos expertos designados por las partes. El Tribunal deberá estar integrado, a más tardar, dentro de los 30 días siguientes a la aprobación del presente acuerdo por Decreto de Poder Ejecutivo Nacional.
- c. El procedimiento a aplicar será definido de común acuerdo entre las partes, de cuyo contenido se dejará constancia en un acta cuya copia se elevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A tal efecto, las partes designarán un representante para participar en las deliberaciones sobre el procedimiento. A efecto de representar al Estado nacional, delegase en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la designación de un funcionario del área con competencia en materia de derechos humanos en ambos Ministerios.
- d. El laudo arbitral será definitivo e irrecorrible. El mismo deberá contener el monto y la modalidad de la asistencia pecuniaria acordada, los beneficiarios de las mismas, y la determinación de las costas y honorarios que pudieran corresponder, tanto en el procedimiento llevado a cabo en el ámbito internacional como en la instancia arbitral, debiendo ser sometido a la evaluación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del proceso de seguimiento del cumplimiento del acuerdo, con el objeto de verificar que el mismo se ajusta a los parámetros internacionales aplicables. Los montos reconocidos en el laudo serán inembargables y se encontrarán exentos del pago de todo impuesto, contribución o tasa existente o por crearse.

271. Según la información recibida de las partes en el año 2016 y 2017, el 3 de marzo de 2016 el Tribunal Ad Hoc emitió un laudo arbitral, en el cual consideró que el establecimiento de la responsabilidad internacional de un Estado excede la competencia arbitral, toda vez que la actuación arbitral tiene su origen y fundamento en el compromiso suscrito entre las partes en el acuerdo de solución amistosa, instrumento que delimita la actuación y decisión del Tribunal. En su decisión, el Tribunal ordenó, sobre la base de estudios periciales y ambientales, tomando en consideración la situación de extrema vulnerabilidad del señor Florentino Rojas, que el Estado argentino debe:

- a) Brindar una vivienda adecuada en la zona en que reside actualmente, con ciertas especificaciones físicas y geográficas indicadas en el resolutorio del laudo;
- b) Garantizar los servicios para la satisfacción de sus necesidades básicas, físicas y psíquicas, incluyendo entre otros, un servicio de asistencia domiciliaria, acompañamiento terapéutico, etc.;
- c) Otorgar una "asistencia económica" de dos y medio salarios mínimos para subsistir; que el Tribunal consideró como componentes de la asistencia humanitaria; y que deberán pagarse periódicamente como una pensión de por vida, de manera adicional a la pensión gracia que recibe actualmente;
- d) Pagar honorarios generados por el proceso arbitral por un monto de \$2,000 USD (dos mil dólares) a los letrados que fungieron como árbitros, que deberán distribuir conforme estimen conveniente;
- e) Pagar honorarios generados por el litigio internacional a los peticionarios por un monto de \$3,800USD (tres mil ochocientos dólares), que deberán distribuir conforme estimen conveniente, y;
- f) Pagar costas generadas por el proceso ante la CIDH por un monto de \$2,000 USD (dos mil dólares) a Florentino Rojas.

272. Dicho laudo fue impugnado por la parte peticionaria a través de un recurso de interpretación el 23 de marzo de 2016. Seguidamente, el Tribunal Ad Hoc emitió una decisión aclaratoria el 16 de junio de 2016, en la cual el Tribunal decidió declarar admisible el recurso de interpretación, y aclaró que:

- a) que el deber de "brindar al Sr. Florentino Rojas una vivienda adecuada" contenido en el apartado 1 de la parte dispositiva del laudo de fecha 03 de marzo de 2016 no impone al Estado argentino la obligación de entregar una vivienda en propiedad (derecho real de dominio), en copropiedad (derecho real de condominio), u otorgar al Sr. Rojas la titularidad de cualquier otro derecho real que permita un resultado análogo (v.gr. el usufructo), y que importaría -en los hechos-una prestación de un contenido económico que excede a la función asistencial que está llamada a cumplir;
- b) que el deber de "brindar al Sr. Florentino Rojas una vivienda adecuada" contenido en el apartado 1 de la parte dispositiva del laudo de fecha 03 de marzo de 2016 supone la obligación del Estado argentino de proporcionar al Sr. Rojas la tenencia de un inmueble - con las características que el propio laudo detalla- bajo una modalidad tal que le permita ejercer libremente un poder de hecho sobre la heredad, garantizándole el uso y goce con la correlativa posibilidad de resistir cualquier injerencia o amenaza ilegítima. La modalidad y la figura jurídica - contractual, administrativa o de cualquier otra especie- que sea menester utilizar para garantizar ese resultado deberá ser elegida por el Estado argentino, en tanto cumpla con los recaudos señalados y permita su utilización libre y exclusiva por el peticionario; y,
- c) la asistencia humanitaria cuyo contenido fuera definido en el laudo arbitral de fecha 03 de marzo de 2016 supone un mínimo o piso de tutela que no impide que el Estado -por las motivaciones que fueren- decida finalmente otorgar prestaciones asistenciales más amplias o superiores a las fijadas por este Tribunal, todo ello de conformidad con el postulado pro persona (art. 29 de la CADH).

273. El 11 de noviembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada y específica al Estado sobre “la forma en la cual el Estado argentino le va a entregar la vivienda adecuada al señor Florentino Rojas. La Comisión ha tomado nota del interés expresado por el señor Rojas, directa y concretamente de contar con una vivienda en propiedad. Tomando en cuenta la totalidad de las circunstancias de vida del señor Rojas reflejadas en el acuerdo, y el hecho de que el Tribunal dejó abierta la forma de entrega de la vivienda, la Comisión quisiera confirmar si la modalidad sería en propiedad según la solicitud de la víctima u otra”.

274. El 17 de enero de 2017, el Estado indicó que luego de realizar las consultas pertinentes a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, la obligación estatal se cumplirá “de conformidad con el alcance que a su respecto ha establecido el mencionado Tribunal Arbitral, no previéndose necesariamente su cumplimiento a través de la modalidad de titularidad dominal”.

275. El 9 de junio de 2017, la Comisión solicitó al Estado que indicara si la vivienda se daría en propiedad en la municipalidad de Guatimozin, en la Provincia de Cordoba, o si en su defecto, se daría en calidad de comodato en la Capital Federal, cerca de su lugar de residencia actual.

276. El 27 de junio de 2017, el Estado indicó que el lugar deberá ser elegido por Florentino Rojas, y que hasta esa fecha no se había recibido indicaciones del peticionario sobre donde querría que se le brindara la vivienda.

277. El 27 de agosto de 2017, dicha información fue trasladada al peticionario para sus observaciones, y se le solicitó al peticionario que indicara en qué lugar de su preferencia para fijar su vivienda a fin de que el Estado pudiera avanzar con la ejecución de la medida. El 31 de julio de 2017, el peticionario indicó que prefiere la opción de que la vivienda esté ubicada en las cercanías de su domicilio actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos Calvo 2346, CABA.

278. El 25 de septiembre de 2017, la Comisión notificó a las partes de su aprobación del laudo arbitral, el cual consideró que se ajusta a los estándares internacionales aplicables. En ese sentido, y dado el estado de salud del beneficiario del acuerdo, la Comisión estaría a la espera de información de las partes sobre la implementación del laudo arbitral e insta al Estado a actuar de la manera más expedita posible para la implementación de las medidas contenidas en dicho laudo.

#### **Petición 21-05, Informe No. 101/14, Ignacio Cardozo y otros (Argentina)**

279. El 7 de noviembre de 2014, la CIDH emitió el Informe de Solución Amistosa No. 101/14, por medio del cual aprobó el acuerdo suscrito entre las partes el 18 de octubre de 2012. El caso se relaciona con los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 1999, en el puente interprovincial que une las ciudades de Corrientes y Resistencia, durante un operativo en el cual las fuerzas armadas argentinas hicieron un uso desproporcionado de la fuerza en contra de los trabajadores que protestaban pacíficamente por la falta de pago de sus salarios. Resultado de lo anterior dos personas fallecieron y otras más resultaron heridas. Por lo anterior, los peticionarios sostuvieron que el Estado sería responsable de la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad ambulatoria, garantías judiciales, libertad de expresión, derecho de reunión, libertad de asociación, derechos del niño y protección judicial, en relación con la obligación de respeto y garantía consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8.1, 13, 15, 16, 19 y 25, respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según lo estipulado en el acuerdo alcanzado por las partes en este caso, el Estado asumió responsabilidad objetiva en el ámbito internacional en su calidad de Estado parte de la Convención y de conformidad con la normativa constitucional, y solicitó a la CIDH que se tengan por reconocidas las violaciones alegadas en los términos de la petición.

280. El Estado se comprometió a cumplir con los siguientes compromisos:

### **III. Medidas a adoptar**

#### **a. Medidas de reparación pecuniarias**

1. Las partes convienen en constituir un Tribunal Arbitral "ad-hoc", a efectos de que éste determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a los peticionarios, conforme a los derechos cuya violación se ha tenido por reconocida, y de acuerdo con los estándares internacionales que sean aplicables.
2. El Tribunal estará Integrado por tres expertos independientes(sic), de reconocida versación en materia de derechos humanos y alta calidad moral, uno designado a propuesta de los peticionarios, el segundo a propuesta del Estado nacional y el tercero a propuesta de los dos expertos designados por las partes. El Tribunal deberá estar integrado, a más tardar, dentro de los 30 días siguientes a la adopción del informe previsto en el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. El procedimiento a aplicar será definido de común acuerdo entre las partes, de cuyo contenido se dejará constancia en un acta cuya copia se elevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A tal efecto, las partes designarán un representante para participar en las deliberaciones sobre el procedimiento. A efectos de representar al Estado nacional, delégase en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (sic), y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la designación de un funcionario del área con competencia en materia de derechos humanos de ambos Ministerios.
4. El laudo del tribunal arbitral será definitivo e irrecurable. El mismo deberá contener el monto y la modalidad de las reparaciones pecuniarias acordadas, los beneficiarios de las mismas, y la determinación de las costas y honorarios que pudieran corresponder, tanto en el procedimiento llevado a cabo en el ámbito internacional como en la instancia arbitral, debiendo ser sometido a la evaluación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del proceso de seguimiento del cumplimiento del acuerdo, con el objeto de verificar que el mismo se ajusta a los parámetros internacionales aplicables. Los montos reconocidos en el laudo serán inembargables y se encontraran exentos del pago de todo impuesto, contribución o tasa existente o por crearse.
5. Los peticionarios renuncian, de manera definitiva e irrevocable, a iniciar todo otro reclamo de naturaleza pecuniaria contra el Estado Nacional en relación con el presente caso.

#### **b. Medidas de reparación no pecuniarias**

1. El Gobierno de la República Argentina se compromete a dar a publicidad el presente acuerdo una vez que éste sea homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme lo dispuesto por el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el "Boletín Oficial de la República Argentina", y en un diario de alcance nacional mediante una gacetilla de prensa, cuyo texto será consensuado previamente con los peticionarios.
2. El Gobierno de la República Argentina se compromete a articular con las áreas correspondientes a los fines de dar impulso a la investigación penal, arbitrando los medios a su alcance para evitar que siga transcurriendo el tiempo, identificando y sancionando a los autores materiales e ideológicos de las muertes y lesiones.
3. Sin perjuicio del trámite penal, el Gobierno de la República Argentina se compromete a impulsar las Investigaciones sumariales administrativas respecto de todos los intervinientes en el operativo(sic), incluyendo a quienes ya han tenido su retiro efectivo.
4. El Gobierno de la República Argentina se compromete a articular con las áreas competentes a los fines de conformar un grupo de trabajo técnico a efectos de continuar

con la realización de los estudios y diligencias necesarias para evaluar la situación socio ambiental y de salud de las víctimas y su núcleo familiar, que, de manera independiente y previa a las reparaciones pecuniarias, se provean soluciones concretas a sus necesidades materiales básicas y se garantice a las víctimas el acceso a un adecuado control y atención de su salud física y mental.

281. El 3 de noviembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento del acuerdo. La parte peticionaria no presentó la información solicitada.

282. El Estado por su parte presentó información el 13 de noviembre de 2015, indicando que en la actualidad se estaría a la espera de la designación del Presidente para la conformación del Tribunal Arbitral “Ad Hoc”, que determinará las reparaciones pecuniarias debidas a los peticionarios.

283. El 14 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada sobre el cumplimiento a las partes. El Estado no presentó información actualizada en dicha oportunidad.

284. El 19 de septiembre de 2016, el peticionario indicó que el 13 de mayo de 2015 habría comunicado a la Coordinadora de Asuntos Jurídicos Internacionales, que no tiene ninguna objeción al Reglamento para el funcionamiento del Tribunal Arbitral y que estaría a la espera de una decisión.

285. El 18 de agosto de 2017, la Comisión solicitó información actualizada sobre el cumplimiento a las partes. La Comisión no recibió información actualizada de ninguna de las partes en esta oportunidad.

286. En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra pendiente de cumplimiento. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendientes de cumplimiento.

**Caso 12.710, Informe No. 102/14, Marcos Gilberto Chaves y Sandra Beatríz Chaves (Argentina)**

287. El 7 de noviembre de 2014, la CIDH emitió el Informe de Solución Amistosa No. 102/14, por medio del cual aprobó el acuerdo suscrito entre las partes el 5 de agosto de 2014. El caso se refiere a las alegadas violaciones de los derechos a las garantías judiciales, protección a la honra, igualdad ante la ley y protección judicial, en relación con la obligación general de respeto y garantía, consagrados en los artículos 8, 11, 24 y 25 respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Marcos Gilberto Chaves y su hija, la señora Sandra Beatriz Chaves, quienes fueron condenados a prisión perpetua por el presunto homicidio del cónyuge de la señora Chaves.

288. A continuación se detalla el estado que para febrero de 2016 tenía cada uno de los compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo de solución amistosa suscrito el 5 de agosto de 2014, seguido de un resumen de la información proporcionada por las partes:

Compromisos establecidos en el acuerdo de solución amistosa aprobado en el informe No. 102/14	Estado del cumplimiento
<b>a. Medidas de asistencia humanitaria</b>	
1. El Gobierno de la Provincia de Salta mediante los Decretos N° 2.281 y 2.283, de fecha 4 de agosto de 2014, dispuso la conmutación de las penas privativas de libertad perpetuas impuestas a Sandra Beatriz Chaves y Marcos Gilberto Chaves, por el término de las penas efectivamente cumplidas por los señores Chaves al momento del otorgamiento de la conmutación, implicando dicha disposición la inmediata recuperación de la libertad personal de los peticionarios, sin restricción de ninguna especie. Se adjunta copia certificada del referido Decreto como Anexo II.	<b>Cumplido totalmente</b>

<b>b. Medidas de reparación no pecuniarias</b>	
1. El Gobierno de la Provincia de Salta se comprometió a prestar en forma inmediata, de acuerdo con la normativa vigente y sujeto a la previa solicitud y conformidad de los beneficiarios, la asistencia psicológica y médica que fuese necesaria a favor de Marco Gilberto Chaves, Sandra Beatriz Chaves, y sus hijos Luz María y Marcos Nicolás González Chaves, conforme surge del punta III.B del Acta de Compromiso de Solución Amistosa, incluida como Anexo I.	<b>Cumplido totalmente en relación a Sandra Chaves</b>  <b>Cumplido parcialmente en relación a los demás beneficiarios</b>
2. El Gobierno de la Provincia de Salta se comprometió a facilitar los medios para que Sandra Beatriz Chaves y sus hijos Luz María y Marcos Nicolás González Chaves, puedan recibir educación hasta la conclusión de sus estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios, en los términos convenidos en el punto III.C.1 del Acta de Compromiso de Solución Amistosa, incluida como Anexo I.	<b>Cumplido parcialmente</b>
3. El Gobierno de la Provincia de Salta se comprometió a adoptar medidas efectivas de reinserción, particularmente en el ámbito laboral, respecto de Sandra Beatriz Chaves, conforme surge del punta III.C.2 del Acta de Compromiso de Solución Amistosa, incluida como Anexo I.	<b>Cumplido totalmente</b>
4. El Gobierno de la Provincia de Salta se comprometió a continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación sobre perspectiva de género en la administración de justicia y prohibición de discriminación, conforme surge del punto III.D del Acta de Compromiso de Solución Amistosa, incluida como Anexo I.	<b>Cumplido parcialmente</b>
<b>ANEXO I</b>	
<b>Acta de Compromiso de Solución Amistosa</b>	
<b>II. Medidas de asistencia humanitaria</b>	
<b>A. Conmutación de las penas dictadas contra Sandra Beatriz Chaves y Marcos Gilberto Chaves</b>	
El Gobierno de la Provincia de Salta se compromete a impulsar las gestiones tendientes a otorgar la conmutación de las penas privativas de libertad perpetuas, impuestas a Sandra Beatriz Chaves y Marcos Gilberto Chaves con fecha 8 junio de 2001 por la Cámara Tercera en lo Criminal de la Provincia de Salta, por el término de las penas efectivamente cumplidas por los señores Chaves al momento del otorgamiento de la conmutación.	<b>Cumplido totalmente</b>
Dicha medida debería ser adoptada en el plazo máximo de quince (15) días hábiles judiciales, contados desde la suscripción del Acta de Acuerdo de Solución Amistosa de fecha 24 de julio de 2014, e implicará que Sandra Beatriz Chaves y Marcos Gilberto Chaves recuperarán su libertad personal, sin restricciones de ninguna especie	<b>Cumplido totalmente</b>
<b>B. Tratamiento médico y psicológico</b>	
A efectos de facilitar la reinserción social de ambas personas, y puesta en evidencia su situación de vulnerabilidad y la de su grupo familiar cercano, el Gobierno de la Provincia de Salta asume el compromiso de prestar en forma inmediata, de acuerdo con la normativa vigente y sujeto a la previa solicitud y conformidad de los beneficiarios, la asistencia psicológica y médica que fuese necesaria en favor de la señora Sandra Beatriz Chaves, el señor Marcos Gilberto Chaves y de los hijos de aquella, Luz María y Marcos Nicolás González Chaves. Por lo tanto, el Estado brindará gratuitamente y de forma inmediata, el tratamiento médico y psicológico que, conforme a criterios médicos, todos ellos requieran. Los tratamientos deben ser provistos por el tiempo que sea necesario, y deben incluir la provisión de	<b>Cumplido totalmente en relación a Sandra Chaves</b>  <b>Cumplido parcialmente en relación a los demás beneficiarios</b>

medicamentos y en su caso, de otros recursos que estén directamente relacionados con aquellos y que sean estrictamente necesarios.	
Por su parte, el tratamiento psicológico o psiquiátrico debe brindarse por personal e instituciones estatales especializadas. En el caso de que el Gobierno de la Provincia de Salta careciera de ellas deberá recurrir a instituciones privadas o de la sociedad civil especializadas. Al proveer dicho tratamiento se deberán considerar, además, las circunstancias y necesidades particulares de cada beneficiario, de manera que se les brinden tratamientos familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos, luego de una evaluación individual. Finalmente, el tratamiento se deberá brindar, en la medida de las posibilidades, en los centros más cercanos a su lugar de residencia.	<p><b>Cumplido totalmente en relación a Sandra Chaves</b></p> <p><b>Cumplido parcialmente en relación a los demás beneficiarios</b></p>
<b>C. Capacitación y medidas de reinserción laboral</b>	
1) El Gobierno de la Provincia de Salta y el representante de las presuntas víctimas acuerdan que el Estado Provincial facilitará los medios para que la señora Sandra Beatriz Chaves y sus hijos, Luz María y Marcos Nicolás González Chaves, puedan recibir educación hasta la conclusión de sus estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios. Los beneficiarios o sus representantes legales, disponen de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de suscripción del presente acuerdo, para dar a conocer al Estado sus solicitudes de capacitación o, en su caso, becas de estudio, conforme a la oferta educativa de la Provincia.	<b>Cumplido parcialmente</b>
2) Asimismo, en lo que hace al caso individual de Sandra Beatriz Chaves, dejando aquí aclarado que Marcos Gilberto Chaves está jubilado en la actualidad, el Gobierno de la Provincia de Salta se compromete a adoptar medidas efectivas de reinserción, particularmente en lo laboral, en un lapso breve y conforme a sus necesidades. En tal sentido, el Gobierno de la Provincia de Salta se compromete a brindar asesoramiento y acompañamiento profesional a la señora Sandra Beatriz Chaves, a los fines de que gestione ante el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable la obtención de un crédito para pequeños emprendedores, conforme al proyecto que defina Sandra Beatriz Chaves, correspondiente a la Línea de Desarrollo Productivo – Micro emprendimientos del Fondo Provincial de Inversión, conforme la normativa vigente y por hasta un monto de cincuenta mil pesos (\$ 50.000).	<b>Cumplido parcialmente</b>
<b>D. Capacitación operadores de justicia y fuerzas de seguridad</b>	
1. El Gobierno de la Provincia de Salta se compromete a continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación sobre perspectiva de género en la administración de justicia y prohibición de discriminación. Dichos cursos estarán destinados a los funcionarios y empleados de la Provincia de Salta, particularmente, a integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y de las fuerzas de seguridad.	<b>Cumplido parcialmente</b>

289. En el Informe Anual 2016, la Comisión declaró cumplidas totalmente las cláusulas a) 1 del Acuerdo de solución amistosa, y II, A 1 y 2 del acta de compromisos de solución amistosa. Asimismo, la CIDH atendió la solicitud de la parte peticionaria de concluir la supervisión de los puntos b) 1 y 3 del acuerdo de solución amistosa relacionados con las medidas de asistencia médica y psicológica, y reinserción laboral, respectivamente, respecto a la señora Chaves<sup>77</sup>.

290. En el mismo informe, la CIDH consideró que no contaba con información suficiente respecto a la medida de capacitación a operadores de justicia y fuerzas de seguridad, por lo cual quedó a la espera de información específica de parte del Estado sobre los programas y cursos permanentes de capacitación sobre

<sup>77</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones Amistosas en casos individuales, párr. 192.

perspectiva de género en la administración de justicia, de conformidad con el literal D. 1 del Acta de Compromiso de Solución Amistosa. Asimismo, indicó que continuaría la supervisión de los puntos de cumplimiento b) 1, 2 respecto a los demás beneficiarios, así como los puntos b) 2 y 4.

291. El 11 de octubre de 2016, la parte peticionaria señaló, en relación al tratamiento psicológico, que por iniciativa de las propias víctimas, ambos hijos de la señora Chaves se encuentran recibiendo tratamiento psicológico con profesionales especializados en forma privada.

292. El 18 de agosto de 2017, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento.

293. El 5 de octubre de 2017, el Estado suministró un Acta Compromiso para el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, en la cual las partes dan cuenta de que el día 19 de septiembre de 2017, las partes se reunieron, y se le brindó asesoría Marcos González Chaves para obtener los requisitos necesarios para tramitar una licencia de conductor de taxis. Asimismo, la provincia de Salta se comprometió a asumir el costo de la obra social Galeno u otra de costo equivalente a favor de Marcos Nicolás González Chaves, hasta que se obtenga un empleo formal y rentado, o se le otorgue la licencia de conductor profesional de taxis.

294. En relación a Luz María González Chaves, el gobierno de Salta se comprometió a designarla al cargo político Nivel 3, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, durante el mínimo de un año, con una remuneración de \$16.000 dieciséis mil pesos mensuales.

295. El 17 de octubre de 2017, los peticionarios confirmaron el contenido del Acta Compromiso, cuyo objeto es satisfacer todos los puntos pendientes de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, e indicaron que una vez que dichas pretensiones se hagan efectivas, le solicitarán a la CIDH que concluya la supervisión del cumplimiento de la solución amistosa y disponga el archivo de las actuaciones. Sobre el particular, los peticionarios actualizaron que Luz María González Chaves se encuentra operando en el cargo señalado en el Acta Compromiso desde el 2 de octubre de 2017.

296. La CIDH valora los esfuerzos realizados por las partes para delimitar el alcance de las cláusulas pendientes de cumplimiento y facilitar su total implementación. En ese sentido, la Comisión queda a la espera de la información actualizada de las partes sobre el cumplimiento de lo establecido en el acta compromiso.

297. Por otro lado, la Comisión observa que los compromisos establecidos en el acta compromiso se refieren específicamente a medidas de reparación de naturaleza individual, especialmente a las medidas de rehabilitación médica, psicológica y social de los dos beneficiarios restantes. Al mismo tiempo, la Comisión observa que el acuerdo de solución amistosa contiene dos medidas de no repetición relacionadas con la capacitación de funcionarios, establecidas en los puntos b 4 y D 1 del acuerdo.

298. Sobre lo anterior, la Comisión recuerda que el Estado indicó que a través de Decreto de Necesidad y Urgencia del Señor Gobernador de la Provincia de Salta No. 2.654/14, que adquirió carácter de Ley Provincial No. 7.857, se declaró la emergencia pública en materia social por violencia de género. Dicha declaración fue acompañada por la creación de 5 juzgados específicos de violencia familiar y de género. Asimismo, se agotó el concurso y designación de los jueces de violencia intrafamiliar y de género que se encuentran en funciones desde el 31 de agosto de 2015. En el mismo sentido se creó 1 cargo de fiscal penal; 5 cargos de defensores de violencia intrafamiliar y de género; y se creó la Unidad de Evaluación de Riesgo de Violencia de Género en el ámbito del Ministerio Público. El Estado indicó en su informe que se inauguró un Hogar de Protección Temporal para mujeres víctimas de violencia y sus hijos menores, se implementó la entrega de botones de pánico y se elaboró un plan provincial para la prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género, entre otras medidas. El Estado destacó la creación del Observatorio de Violencia contra mujeres a través de la Ley No. 7.863 para el diseño e implementación de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

299. Concretamente en relación a las capacitaciones, el Estado indicó que el Ministerio de Justicia ha dictado cursos y talleres sobre perspectiva de género y violencia intrafamiliar y de género, destinados a fuerzas de seguridad provinciales, agentes de salud, docentes y público en general; desarrollándose dichas actividades en Salta y barrios aledaños, y en diversos municipios. Asimismo, se suscribieron talleres de colaboración con instituciones vinculados a esa temática, entre los cuales destaca el Estado, el Convenio de Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación suscrito con el Observatorio de Derechos Humanos de la Nación el 27 de abril de 2015. Dentro del marco de dicho convenio se realizó el Taller de Justicia en Perspectiva de Género y Trata de Personas con fines de explotación sexual, con la participación de agentes estatales y de la sociedad civil. Asimismo, se llevó a cabo una Jornada de Reflexión “A Seis Años de la Sanción de la Ley No. 26.845 de Protección Integral de las mujeres” en el Senado de la Nación, y se tiene programado realizar otro taller sobre Violencia en el Noviazgo. El Estado también enunció otros talleres que se adelantaran con la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de la Nación, con la Fundación Género y Conciencia, entre otras iniciativas a realizar próximamente.

300. El Estado proporcionó información según la cual, la base de datos de la Dirección de Promoción y Formación de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos registró, que desde la fecha de la firma del acuerdo de solución amistosa, esto es desde el 5 de agosto de 2014, hasta el 22 de mayo de 2015, se realizaron 18 capacitaciones, de las cuales 14 tenían un componente de género. El total de las capacitaciones con componente de género incluyó a 1400 participantes de distintas agencias estatales como cuerpos de Policía Municipales, Profesionales de Centros de Salud Municipales, Cuerpos de Policía Provinciales, Cuerpos de Policía Federales, Gendarmería Nacional, Aeroportuaria, Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas, Periodistas, Estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Personal de Servicio Penitenciario, Personal de los Juzgados de Familia, entre otras. El Estado aportó notas de prensa de algunas de las actividades.

301. Sobre el particular, los peticionarios indicaron en su momento, en relación a la medida de capacitación a operadores de justicia y fuerzas de seguridad, que aun cuando valoran los esfuerzos del Estado respecto a las iniciativas en términos de política pública provincial, indicó que conforme al acta de compromiso de Solución Amistosa, el Estado debía implementar programas y cursos cuyo contenido esté puesto exclusivamente en la problemática de la discriminación en razón del género durante los procesos penales y en las sentencias de condena a mujeres. En este sentido, solicitó al Estado información precisa sobre las acciones de capacitación objeto de esta medida.

302. En ese sentido, el 22 de noviembre de 2016, el Estado presentó actualizada indicando que la Provincia de Salta continúa implementando medidas concretas para fortalecer la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres. A través de la Ley No. 7.946 del 1 de septiembre de 2016, la Provincia prorrogó la emergencia pública en materia social por violencia de género, la cual fue acompañada con el avance en la creación de un fuero especial de violencia familiar y de género en Salta hoy integrado por 5 juzgados específicos, 7 fiscalías especializadas y una unidad especial de delitos contra la integridad sexual; así como en el funcionamiento de 5 defensorías especiales y exclusivas para víctimas de violencia familiar y de género. Por otro lado, mediante la Ley No. 7.905 de diciembre 2015 se unificaron las carteras ministeriales de Derechos Humanos y Justicia y en ese ámbito, mediante Decreto No. 24/2015, se instituyó la Subsecretaría de Políticas de Género cuyo objetivo es generar e implementar acciones, desde un enfoque integral, interinstitucional e intersectorial, para la promoción de igualdad de derechos, oportunidades y de trato de las mujeres y de la comunidad L.G.T.B.I.Q.

303. Específicamente sobre las capacitaciones, el Estado presentó información referente a cursos y talleres desarrollados en el 2016 en materia de prevención, promoción y sensibilización de derechos destinados a fuerzas de seguridad, docentes provinciales, estudiantes de enseñanza de nivel inicial, jóvenes de los últimos años de la escuela secundaria, agentes de salud, abogados, mediadores comunitarios y referentes de los programas de violencia familiar, psicopedagogos, entre otros. Asimismo, informó sobre las acciones de fortalecimiento para formar redes de interinstitucionales para la protección de los derechos de todos y todas y, entre otros documentos, sobre la elaboración de la “Guía conjunta de buenas prácticas para la atención en casos de violencia: equipo interdisciplinario de asistencia, centro de mediación y servicios de asesoramiento jurídico.” El Estado destacó que desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, el cual

comenzó a funcionar en diciembre del año 2015, se han desarrollado capacitaciones dirigidas a agentes del Estado con perspectiva de género y de violencia contra las mujeres en el marco de numerosos cursos y talleres, se ha impulsado el desarrollo de estudios e investigaciones e indicó que, durante el 2016, se ha trabajado en proyectos como “Evaluación de la incorporación del enfoque de género en la implementación de la ESI en la ciudad de Salta,” entre otros. Por último, el Estado proporcionó información según la cual, desde la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de Salta, se han realizado alrededor de 40 “Talleres sobre perspectiva de género” dirigidos a magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as judiciales, en los cuales se trabaja en base a protocolos diseñados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, y validados por el Sistema de las Naciones Unidas en Argentina. La parte peticionaria no presentó observaciones adicionales sobre la implementación de las medidas de capacitación.

304. Tomando en consideración los elementos anteriormente descritos, y el contenido del acta de compromisos presentada ante la CIDH, la Comisión declara el cumplimiento de los puntos b 4 y D 1 del Anexo I del acuerdo de solución amistosa. En ese sentido, la Comisión considera que el Estado argentino ha cumplido parcialmente el acuerdo de solución amistosa, y queda a la espera de la información sobre la implementación del acta de compromisos para finalizar la supervisión de la implementación de los puntos pendientes de cumplimiento b 1 y 2 del acuerdo; b 1 y 2 y c 1 y 2 del anexo I al acuerdo de solución amistosa.

**Caso 12.632, Informe No. 43/15, Adriana Beatriz Gallo, Ana María Careaga y Silvia Maluf de Christin (Argentina)**

305. En el Informe No. 43/15 de fecha 28 de julio de 2015, la CIDH concluyó que el Estado de Argentina era responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad y retroactividad), 13 (libertad de pensamiento y expresión) y 25 (garantías de protección judicial) de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Adriana Gallo, Ana María Careaga y Silvia Maluf, quienes fueron destituidas, respectivamente, los días 6 de noviembre y 17 de diciembre de 1998, y 1 de noviembre de 2002, de su investidura de juezas, por un Jurado de Enjuiciamiento que no cumplía con los requisitos de independencia e imparcialidad objetiva, y con base en una ley que no estaba vigente al momento de comisión de los hechos, en un contexto de grave crisis institucional en la Provincia de San Luis, Argentina. Asimismo, dentro de los elementos del caso la CIDH conoció los procesos de destitución, en los cuales se produjeron diversas violaciones al debido proceso y las juezas no pudieron recurrir las sentencias de destitución. Finalmente, es de indicar que las juezas Careaga y Maluf fueron acusadas y destituidas por haber expresado su opinión sobre la situación del Poder Judicial de la Provincia de San Luis, al adherirse a los considerandos de un comunicado del Colegio de Abogados y Procuradores de Villa Mercedes.

306. La CIDH formuló al Estado Argentino las siguientes recomendaciones:

- 1) Reincorporar a las víctimas al Poder Judicial, en un cargo similar al que desempeñaban, con la remuneración, beneficios sociales y rango equiparable a los que les correspondería el día de hoy si no hubieran sido destituidas; b) si por razones fundadas no es posible la reincorporación, el Estado deberá pagar una indemnización razonable a las víctimas o sus causahabientes de ser el caso, que comprenda el daño moral causado.
- 2) Pagar a las víctimas los salarios, pensiones y beneficios laborales y/o sociales dejados de percibir desde el momento en que fueron destituidas hasta que se efectivice su reincorporación o el pago de la indemnización alternativa contemplada en la recomendación anterior.
- 3) Adoptar medidas de no repetición, que aseguren la independencia reforzada del Poder Judicial, incluyendo:
  - a) Las medidas necesarias para que la normativa interna, incluyendo el artículo 193 de la Constitución de la Provincia de San Luis, se adecue a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión,

- b) Las medidas necesarias para asegurar el acceso a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo para que los jueces y juezas puedan cuestionar su destitución y revisar la sanción aplicada.
- 4) Adoptar las medidas necesarias para la implementación de los puntos incluidos en el acuerdo de cumplimiento de recomendaciones suscrito por las partes.

307. El 8 de agosto de 2015, las partes informaron a la CIDH que habían llegado a un acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones, el cual fue aprobado a través del Decreto No. 2131/2013. En dicho acuerdo de cumplimiento, el Estado se comprometió a adoptar las siguientes medidas:

Medidas a adoptar:

1. Medidas de reparación pecuniaria [...] (disposiciones sobre la conformación y el funcionamiento de un Tribunal Ad Hoc).
2. Medidas de reparación no pecuniarias

Medidas de no repetición:

El Estado argentino se compromete a realizar gestiones ante las autoridades de la Provincia de San Luis, que resulten necesarias para garantizar el debido proceso y la revisión judicial en los procedimientos de remoción de magistrados, así como su libertad de expresión.

Asimismo, el Estado argentino se compromete a impulsar, en el marco del Consejo Federal de Derechos Humanos, las acciones necesarias para que en las jurisdicciones provinciales se garanticen el debido proceso y la revisión judicial en los procedimientos de remoción de magistrados.

Publicidad:

El Estado argentino se compromete a dar a publicidad el presente acuerdo, en forma completa, en el Boletín Oficial de la República Argentina, y a instrumentar las medidas necesarias para dar difusión al pedido de disculpas incluido precedentemente, en los medios de comunicación que garanticen su debida difusión en la provincia de San Luis. A su vez, el Estado nacional se compromete a oficiar a los superiores tribunales de provincia, universidades y demás organismos públicos y privados a los que en su oportunidad la Provincia de San Luis haya comunicado las destituciones de las peticionarias.

308. El 8 de agosto de 2016, el Estado informó sobre la conformación del Tribunal Ad Hoc para la determinación de la reparación económica que hubiera lugar. Dicha información fue trasladada a los peticionarios el 9 de agosto de 2016.

309. El 27 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe No. 43/15. El Estado solicitó prórrogas el 27 de octubre y el 2 de diciembre de 2016.

310. Por su parte, el 25 de octubre de 2016, los peticionarios respondieron refiriendo a la Comisión a su escrito de fecha 7 de septiembre de 2016. En dicho escrito, los peticionarios informaron que en relación al punto 1 sobre medidas pecuniarias, el Estado aún no ha culminado el pago efectivo en materia de aportes personales y contribuciones patronales. Los peticionarios resaltaron que la Provincia de San Luis se adhirió a la Ley 24.018 que otorga un aporte para la remuneración de un juez del mismo cargo de 82% a través de la Ley VII-832-2014. Asimismo, los peticionarios indicaron que en relación al punto A de las medidas de no repetición no han recibido información adicional. En relación al punto B, sobre el impulso de acciones antes del Consejo Federal de Derechos Humanos, mencionaron que el 25 de septiembre de 2015, el Estado les extendió una invitación para reunirse para dialogar sobre los puntos del acuerdo pendientes de cumplir ante dicho Consejo Federal. Sin embargo, no habrían podido acudir y manifiestan con preocupación que no han vuelto a ser convocados. Finalmente, los peticionarios mencionan en relación al punto C, que el 26 de diciembre de 2016 se publicaron las disculpas públicas en el Diario La República, periódico de difusión provincial; y que en mayo de 2015, el Estado envió notas a diversos organismos cuyo contenido refleja la

situación que vivieron las juezas y la aceptación de responsabilidad del Estado. Los peticionarios resaltaron como positiva la difusión que algunos organismos receptores le dieron a la nota, como por ejemplo la publicación en la página de fiscales de la Provincia de San Luis. Dicha información fue trasladada al Estado el 4 de noviembre de 2016.

311. El 18 de agosto de 2017, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento.

312. El 10 de octubre de 2017, el Estado informó que el 19 y 20 de abril de 2017, las partes sostuvieron reuniones bilaterales para impulsar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH. El Estado informó que se emitieron las órdenes de pago a favor de las víctimas y se ordenaron las transferencias correspondientes dentro del marco del trámite del expediente No. S040039415/13. El Estado también indicó que se emitieron las resoluciones mediante las cuales se hace lugar a los haberes jubilatorios de las víctimas, cuyo pago se efectivizaría junto con las órdenes de pago de las compensaciones mencionadas.

313. El 20 de octubre de 2017, los peticionarios indicaron que el proceso para constituir el tribunal Ad Hoc ha sido bastante largo y dificultoso, y al mismo tiempo actualizaron que se constituyó el Tribunal Arbitral Ad Hoc el 29 de abril de 2016, y que está conformado por Julio Rivera, Adolfo Gustavo Scrinzi y Veronica Gomez. Los peticionarios estarían a la espera de la decisión arbitral. Asimismo, confirmaron que el Estado se comprometió a efectuar los aportes pensionales y contribuciones patronales que hubieran correspondido de haber continuado en el cargo que desempeñaban las juezas Careaga, Gallo y Maluf, y que han solicitado al Estado que para dicha liquidación se aplique la Ley 24.018 que otorga a los jueces un aporte del 82% de su jubilación, la cual habría sido aceptada por la Secretaria de Derechos Humanos.

314. Por otro lado, los peticionarios indicaron que el Estado no ha emprendido acciones para cumplir con las medidas de no repetición establecidas en el acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Fondo. Finalmente, los peticionarios indicaron que el Estado no ha difundido las disculpas públicas en los organismos oportunamente solicitados sino únicamente en el Diario La República, periódico de difusión provincial.

315. La CIDH toma nota de lo informado, y urge al Estado a avanzar en la implementación de los demás puntos del acuerdo de cumplimiento.

316. Por lo anterior, la CIDH considera que el acuerdo de cumplimiento está en proceso de implementación y que las recomendaciones del Informe No. 43/15 se encuentran pendientes de cumplimiento.

**Casos 12.067, 12.068 y 12.086, Informe No. 48/01, Michael Edwards, Omar Hall, Brian Schroeter y Jerónimo Bowleg (Bahamas)**

317. En el Informe No. 48/01 del 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación de los artículos I, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana por haber sentenciado a los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg a una pena de muerte obligatoria; b) la violación de los derechos de los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg consagrados en el artículo XXIV de la Declaración Americana por no otorgar a los condenados un derecho efectivo de petición de la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) la violación de los derechos de los señores Hall, Schroeter y Bowleg amparados en los artículos XI, XXV y XXVI de la Declaración Americana, en razón de las condiciones inhumanas de detención a que fueron sometidos los condenados; d) la violación de los derechos de los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg amparados en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana por no proporcionar asistencia letrada a los condenados para iniciar acciones constitucionales; y e) la violación de los derechos de los señores Schroeter y Bowleg a ser juzgados sin demora indebida, al amparo del artículo XXV de la Declaración.

318. La CIDH efectuó al Estado las siguientes recomendaciones:

- 1) Otorgue a los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una indemnización;
- 2) Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que la pena de muerte se impone en cumplimiento de los derechos y libertades garantizados en la Declaración Americana, incluyendo, en particular, los artículos I, XXV y XXVI, y garantizar que nadie sea sentenciado a muerte en virtud de una ley de sentencia obligatoria.
- 3) Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas del derecho consagrado en el artículo XXIV de la Declaración Americana a la petición de amnistía, indulto o conmutación de la sentencia.
- 4) Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas del derecho a una audiencia imparcial, consagrado en el artículo XXVI de la Declaración Americana, y el derecho a la protección judicial, protegido por el artículo XVIII de la Convención Americana, en relación con el recurso a acciones constitucionales.
- 5) Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas del derecho consagrado en el artículo XXV de la Declaración Americana a ser juzgado sin dilación injustificada.
- 6) Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas de los derechos amparados en los artículos XXV y XXVI de la Declaración Americana a un tratamiento humano y a no recibir un castigo cruel, infamante o inusitado.

319. El 10 de abril de 2012, el Estado informó que los señores Schroeter, Bowleg y Hall habían sido liberados de la prisión de Su Majestad el 5 de diciembre de 2009 y el 15 de septiembre de 2009 respectivamente. Respecto del señor Edwards, Bahamas informó que el 11 de junio de 2010 había sido sentenciado nuevamente a cadena perpetua por lo que se desconoce la fecha de su liberación.

320. El 7 de octubre de 2013, 4 de diciembre de 2014, 2 de septiembre de 2015, 28 de septiembre de 2016, y el 27 de septiembre de 2017 la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento.

321. A la fecha de cierre del presente informe, las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

322. La Comisión invita a las partes a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las demás recomendaciones por parte del Estado. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de estas recomendaciones.

#### **Caso 12.265, Informe No. 78/07 Chad Roger Goodman (Bahamas)**

323. En el Informe No. 78/07 del 15 de octubre de 2007, la Comisión concluyó que el Estado de Bahamas era responsable de la violación de los artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana al haber impuesto al señor Goodman a una sentencia de pena capital con carácter obligatorio. Con base en sus conclusiones, la CIDH recomendó que el Estado:

1. Otorgue al señor Goodman una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una indemnización por la violación de los artículos I, XI, XVIII, XXIV, XXV y XXVI de la Declaración Americana.

2. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar que la pena de muerte sea impuesta en cumplimiento de los derechos y libertades garantizadas por la Declaración Americana, incluidos y en particular, los artículos I, XXV y XXVI, y asegure que ninguna persona sea sentenciada a muerte por una ley de sentencia obligatoria en Bahamas.

3. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la vigencia en Bahamas del derecho consagrado en el artículo XXV de la Declaración Americana a ser juzgado sin demora injustificada.

4. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la vigencia en Bahamas del derecho a un trato humano y del derecho a no ser objeto de un castigo cruel, degradante o inusual, dispuesto en los artículos XI, XXV y XXVI de la Declaración Americana, en relación con las condiciones de detención.

324. El 10 de abril de 2012, el Estado informó que el 23 de octubre de 2008 el señor Goodman había sido sentenciado nuevamente a una pena carcelaria de cincuenta años, y que la fecha prevista para su liberación es el 24 de noviembre de 2009.

325. El 7 de octubre de 2013, 4 de diciembre de 2014, 2 de septiembre de 2015, 28 de septiembre de 2016, y el 27 de septiembre de 2017 la CIDH solicitó información a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento.

326. A la fecha de cierre del presente informe, las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

327. La Comisión invita a las partes a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las demás recomendaciones por parte del Estado. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

#### **Caso 12.513, Informe No. 79/07 Prince Pinder (Bahamas)**

328. En el Informe No. 79/07 del 15 de octubre de 2007, la Comisión concluyó que al autorizar e imponer una sentencia de castigo corporal judicial al señor Pinder, el Estado de Bahamas es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos I, XXV, y XXVI de la Declaración Americana en perjuicio del señor Pinder. Con base en sus conclusiones, la CIDH recomendó al Estado:

- 1) Que otorgue a Prince Pinder un recurso efectivo que comprenda a) la conmutación de la pena de castigo corporal judicial y b) rehabilitación.
- 2) Que adopte las medidas legales o de otro género que puedan ser necesarias para abolir el castigo de la flagelación previsto en el Estatuto (de Medidas Punitivas) de la Legislación Penal de ese país, de 1991.

329. El 10 de abril de 2012, el Estado informó que la fecha prevista para la liberación del señor Pinder es el 28 de julio de 2017. Sin embargo, el Estado no presentó información respecto a las recomendaciones de la CIDH, las cuales se refieren al castigo corporal judicial impuesto al señor Pinder y el marco legal que autoriza tal forma de castigo.

330. El 7 de octubre de 2013, 4 de diciembre de 2014, 2 de septiembre de 2015, 28 de septiembre de 2016, y el 4 de octubre de 2017 la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento.

331. A la fecha de cierre del presente informe, las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

332. La Comisión invita a las partes a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las demás recomendaciones por parte del Estado. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas sigue estando pendiente. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de estas recomendaciones.

### **Caso 12.231, Informe No. 12/14 Peter Cash (Bahamas)**

333. En el Informe No. 12/14 del 2 de abril de 2014, la Comisión concluyó que el Estado de Bahamas era responsable de: a) la violación de los artículos II, XVIII y XXVI por no otorgar al señor Cash un derecho efectivo a la amnistía, al indulto o a la conmutación de la sentencia; b) la violación de los artículos XVIII y XXVI por no impedir ni reparar el uso de confesiones obtenidas por la fuerza en el proceso penal que se le instruyó; c) la violación de los artículos I, XXV y XXVI por someterlo, o permitir que se le sometiera, a tortura; d) la violación de los artículos XVIII y XXVI por no otorgarle asistencia letrada para iniciar una acción de constitucionalidad; y e) la violación del artículo XXV por violar el derecho del señor Cash a ser juzgado sin demora injustificada. Con base en sus conclusiones, la CIDH recomendó que el Estado:

1. Otorgue una reparación efectiva, que incluya un nuevo juicio al Señor Cash, de acuerdo con las protecciones judiciales de la Declaración Americana, o que, en su defecto, disponga el indulto o la conmutación de la sentencia.
2. Realice una investigación para identificar a los funcionarios judiciales involucrados en el ataque contra el Señor Cash para arrancarle confesiones y les aplique el debido castigo que disponga la ley.
3. Adopte medidas para indemnizar al Señor Cash por el sufrimiento ocasionado por la violación de sus derechos, en particular, el derecho a la seguridad personal, el derecho a un trato humano estando bajo custodia y el derecho a la protección contra un castigo cruel, degradante o inusual.
4. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectiva vigencia en Las Bahamas de los derechos consagrados en los artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana a la seguridad personal y a un trato humano, así como el derecho a no ser objeto de un castigo cruel, degradante o inusual estando bajo custodia.
5. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que la pena de muerte sea impuesta con respeto por los derechos y libertades garantizadas por la Declaración Americana, incluidos, en particular, los consagrados en los artículos I, XXV, y XXVI, y garantice que nadie sea sentenciado a muerte en Las Bahamas mediante una ley de sentencia obligatoria.
6. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesaria para garantizar la efectiva vigencia en Las Bahamas del derecho dispuesto en el artículo XXIV de la Declaración Americana a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
7. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectiva vigencia en Bahamas del derecho a una audiencia imparcial, conforme al artículo XXVI de la Declaración Americana y del derecho a la protección judicial dispuesto en el artículo XVIII de la Convención Americana, en relación con el recurso a acciones constitucionales.

8. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectiva vigencia en Las Bahamas del derecho a una audiencia justa e imparcial consagrado en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana.

9. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesaria para garantizar la plena vigencia en Las Bahamas del derecho consagrado en el artículo XXV de la Declaración Americana a ser juzgado sin demora injustificada.

334. El 2 de septiembre de 2015, el 28 de septiembre de 2016, y el 4 de octubre de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

335. Con base en estas consideraciones, la Comisión encuentra que las recomendaciones arriba mencionadas se encuentran pendientes de cumplimiento. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

### **Caso 12.053, Informe No. 40/04, Comunidad Indígena Maya del Distrito Toledo (Belice)**

336. En el Informe No. 40/04 del 12 de octubre de 2004, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación del derecho a la propiedad consagrado en el artículo XXIII de la Declaración Americana, en perjuicio del pueblo maya, al no adoptar medidas efectivas para reconocer su derecho de propiedad comunal en las tierras que ha ocupado y usado tradicionalmente, sin perjuicio para otras comunidades indígenas, y para delimitar, demarcar y titular o establecer por otra vía los mecanismos necesarios que aclaren y protejan el territorio en el que existe su derecho; b) la violación del derecho de propiedad consagrado en el artículo XXIII de la Declaración Americana, en perjuicio del pueblo maya, al otorgar concesiones madereras y petroleras a terceros, para utilizar los bienes y recursos que podrían quedar comprendidos por las tierras que deben demarcar, delimitar y titular o aclarar y proteger por otra vía, en ausencia de consultas efectivas y del consentimiento informado del pueblo maya; c) la violación del derecho a la igualdad ante la ley, la protección de la ley y la no discriminación, consagrado en el artículo II de la Declaración Americana, en perjuicio del pueblo maya, al no otorgarle las protecciones necesarias para ejercer sus derechos de propiedad plena y equitativamente con los demás miembros de la población de Belice; d) la violación del derecho a la protección judicial consagrado en el artículo XVIII de la Declaración Americana, en perjuicio del pueblo maya, al tornar ineficaces los procedimientos judiciales internos debido a un atraso irrazonable y al no brindarles, por tanto, un acceso efectivo a la justicia para la protección de sus derechos fundamentales.

337. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Adopte en su legislación interna y a través de consultas plenamente informadas con el pueblo maya, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para delimitar, demarcar y titular o aclarar y proteger por otra vía el territorio en el cual el pueblo maya tiene un derecho de propiedad comunal, de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias de uso de la tierra y sin perjuicio para otras comunidades indígenas.

2. Adopte medidas para delimitar, demarcar y titular o aclarar y proteger por otra vía las correspondientes tierras del pueblo maya, sin perjuicio para otras comunidades indígenas y, hasta tanto se adopten tales medidas, se abstenga de todo acto que pueda dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros actuando con aquiescencia o tolerancia de éste, afecte la existencia, el valor, el uso o goce de los bienes ubicados en las zona geográfica ocupada y usada por el pueblo maya.

3. Repare el daño ambiental resultante de las concesiones madereras otorgadas por el Estado respecto del territorio tradicionalmente ocupado y usado por el pueblo maya.

338. El 16 de enero de 2013, los peticionarios en este caso reiteraron su solicitud de que se llevara a cabo una reunión de trabajo durante el 147º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana. Basaron su solicitud en el reciente aumento de las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas mayas, debido a que el Estado permite el desarrollo petrolero y la tala ilegal en territorios mayas sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos mayas en relación con el uso de las tierras de su propiedad. La Comisión convocó a una reunión de trabajo con ambas partes para el 13 de marzo de 2013. El Estado notificó a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 12 de marzo de 2013 que no podría participar en esta reunión de trabajo, pues le sería imposible presentar la información que se requeriría para ello. Por lo tanto, la Secretaría Ejecutiva canceló la reunión. Como seguimiento, la Secretaría Ejecutiva envió una carta al Estado el 21 de marzo de 2013, en la que solicitó sus observaciones sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe 40/04 dentro de un plazo de un mes. La Comisión no recibió respuesta del Estado a esta comunicación.

339. El 15 de marzo de 2013, la Comisión recibió una comunicación de los peticionarios en la que expresaron su preocupación por la cancelación de la participación del Estado en la reunión de trabajo. En su comunicación subrayaron que se trataba de la segunda vez que Belice cancelaba su participación en una reunión de esta naturaleza, poco tiempo antes de su realización. También informaron que el pueblo maya de Toledo y las organizaciones que lo representan, como la Alianza de Líderes Mayas, trabajan con presupuestos muy limitados. Por lo tanto, sienten que la actitud del Estado frente a los esfuerzos y recursos necesarios para enviar a un representante al extranjero representa una falta de respeto hacia su pueblo y hacia las importantes funciones de la Comisión. El incumplimiento por parte de Belice de las recomendaciones de la Comisión en el presente caso y su omisión de presentar informes nacionales a otras instituciones internacionales de derechos humanos da la impresión ante la comunidad internacional de que Belice no está comprometida con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

340. Anteriormente, el 13 de marzo de 2013, los peticionarios entregaron a la Comisión un informe en que se destaca el incumplimiento por el Estado de Belice de las recomendaciones incluidas en el Informe 40/04. Los peticionarios subrayan en dicho documento la violación continua de los derechos de los pueblos mayas por el Estado de Belice; afirman que dicho problema se intensificó recientemente cuando Belice permitió a una corporación transnacional estadounidense, U.S. Capital Energy Ltd. (U.S. Capital), proceder con sus planes para iniciar perforaciones petroleras exploratorias en tierras tradicionales mayas sin haber obtenido su consentimiento libre, previo e informado. Consideran que estas acciones ignoran por completo las recomendaciones de la Comisión y las obligaciones de Belice de acuerdo con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Alegan que Belice también está infringiendo su jurisdicción interna, concretamente dos mandatos judiciales emitidos por la Corte Suprema de Belice en *Re Maya Land Rights*, que prohíbe la interferencia en territorios mayas, y las disposiciones de la Ley Petrolera, que requiere que las empresas petrolera obtengan el consentimiento de los propietarios y ocupantes legítimos de las tierras antes de ingresar en ellas para actividades de exploración y extracción. También resaltan que numerosos organismos internacionales, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico de la ONU y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, han expresado su inquietud por la falta de demarcación y protección por parte de Belice de tierras habitadas por poblaciones mayas y por su interferencia con estas tierras.

341. Los peticionarios también informan que el gobierno ha estado construyendo una carretera pavimentada que atraviesa muchos pueblos mayas, sin consulta ni consentimiento. Esta carretera llegará hasta la frontera entre Belice y Guatemala y aumentará significativamente el tránsito a través de tierras pobladas. Afirman que las experiencias en Belice y en varios otros países han demostrado que las mejoras viales generan una mayor demanda de tierras a los lados de las carreteras por terceros. Sin una confirmación oficial de los derechos tradicionales de las poblaciones, la construcción de esta carretera plantea un mayor riesgo de que dichas poblaciones pierdan el control de sus tierras ante quienes se establezcan en ellas.

342. Con base en estas consideraciones, los peticionarios insisten ante la Comisión Interamericana en la importancia de un diálogo continuo con los líderes y representantes mayas para ayudarle al gobierno a crear un marco adecuado para la implementación de las recomendaciones. En este sentido, los peticionarios le solicitan a la Comisión que condene públicamente las recientes acciones del

Estado de Belice a través de la emisión de un Comunicado de Prensa o por otro medio que considere adecuado, para vigilar meticulosamente los esfuerzos del Estado para cumplir con sus obligaciones internas e internacionales de derechos humanos, suministrarle al gobierno la experiencia y asistencia técnica necesarias y enviar una delegación de la Comisión a Belice para que participe en una conferencia de trabajo con las comunidades mayas.

343. El 4 de diciembre de 2014, la Comisión solicitó información adicional a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en su Informe de Fondos No. 40/04. El 5 de enero de 2015, los peticionarios enviaron una comunicación indicando que el gobierno de Belice continúa sin dar cumplimiento a las recomendaciones. Reiteraron que el mismo asunto presentado ante la Comisión se fue presentado ante la Corte de Justicia del Caribe en apelación de la decisión de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Caribe de julio de 2013, y que una audiencia programada en Trinidad y Tobago para marzo de 2015.

344. El 9 de julio de 2015, los peticionarios informaron que la Corte de Justicia del Caribe, el más alto tribunal para Belice, dictó una decisión el 22 de abril de 2015, ordenando al Estado a abstenerse de interferir con las tierras de propiedad maya mientras se realiza su registro y demarcación. Los peticionarios indicaron que la decisión de la Corte de Justicia del Caribe es un espejo de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual, dicho tribunal reconoció los derechos ancestrales de la comunidad sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado y usado, y solicitaron el apoyo de la Comisión para la implementación del Informe de la CIDH, y para esto solicitaron que se realizara una visita *in situ*.

345. La CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento el 15 de septiembre de 2015. Los peticionarios informaron el 28 de octubre de 2015, que el Estado aún no ha cumplido con las recomendaciones de la CIDH y que no ha creado los mecanismos para demarcar y titularizar formalmente el territorio maya. Los peticionarios manifestaron preocupación por las declaraciones públicas del Primer Ministro indicando que la decisión de la Corte de Justicia del Caribe era vaga o indeterminada y que no reconocía los derechos de propiedad comunal del pueblo maya sobre el territorio ancestral. Según los peticionarios, dichas declaraciones han sido acompañadas por el arresto de varios miembros de la comunidad. Los peticionarios detallaron que el 24 de junio de 2015, oficiales de la policía arrestaron arbitrariamente a varios líderes mayas residentes de la Comunidad de Santa Cruz en un operativo que se adelantó a las 3:30 a.m. y luego del cual habrían trasladado a 13 personas a un centro de detención en ropa interior o a medio vestir y descalzos. Los peticionarios reiteraron la solicitud de una visita de la Comisión al país, para hacer seguimiento a la situación actual y facilitar el dialogo entre las partes para el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe No. 40/04.

346. El Estado por su parte no respondió a la solicitud de información actualizada.

347. El 27 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 14 de octubre de 2016, la parte peticionaria reiteró que el Estado no ha cumplido con las recomendaciones formuladas por la Comisión, e indicaron que en enero de 2016 el gobierno reportó a la Corte de Justicia del Caribe que había creado la Comisión Maya de Toledo de Derechos Territoriales (Comisión TMLR por sus siglas en inglés), bajo la autoridad del Fiscal General de Belice, como un mecanismo gubernamental para implementar la orden de la Corte y tendría como función desarrollar un proyecto de implementación para junio 30 de 2016. Los peticionarios indicaron que han tenido varias reuniones con la TMLR pero que está aún no ha emitido el proyecto de plan de implementación, y que el gobierno ha retrasado la demarcación del territorio Maya, en donde aún continúan las actividades de ocupación y acceso ilegal. En ese sentido, la falta de implementación de la decisión de la CJC ha llevado a la apropiación del territorio maya por parte de terceros, lo que ha resultado en dos nuevos casos de violaciones de esta naturaleza sometidos a la Corte Suprema de Belice, los cuales tuvieron audiencias el 13 de septiembre de 2016, y están programados para juicio el 23 de marzo de 2017.

348. En relación a la recomendación 1 sobre medidas legislativas, los peticionarios reportaron mínimos avances, indicando que en febrero de 2016, sostuvieron una reunión con la Comisión TMLR para la revisión del marco para la consulta que los líderes mayas presentaron al gobierno. El Marco para la Consulta

Maya, según describieron los peticionarios, es un conjunto comprensivo de principios y prácticas que reflejan las costumbres mayas y que son respaldados por los estándares internacionales. Este reciente desarrollo es para los peticionarios un paso positivo del gobierno para la implementación y reconocimiento de los protocolos culturales necesarios para la consulta de buena fe. En las reuniones sostenidas con la Comisión TMLR, las partes habrían llegado a un consenso de que las órdenes de la CJC constituyen una hoja de ruta para lograr el objetivo final del reconocimiento de las tierras ancestrales mayas. En relación a la recomendación 2 sobre la abstención de perpetrar actos en perjuicio del derecho a la propiedad maya, los peticionarios indicaron que las situaciones de vulneración persisten, incluyendo la construcción de una carretera de conexión de Belice con Guatemala, que atraviesa varias villas mayas; operaciones de tala ilegal que han continuado hasta el presente; e incursiones de terceros en el territorio ancestral.

349. El Estado por su parte no respondió a la solicitud de información actualizada.

350. El 8 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. Hasta la fecha de cierre de este informe, no se ha presentado información.

351. La CIDH toma nota de la información suministrada con anterioridad por los peticionarios, y valora positivamente los avances del Estado hacia la implementación de las recomendaciones, y al mismo tiempo, insta al Estado a suministrar información detallada sobre las demás acciones que estará desarrollando para dar cumplimiento integral de las mismas.

352. Con base en información suministrada por los peticionarios, la Comisión Interamericana observa que el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas continúa pendiente, e insta al Estado a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones del Informe de Fondo No. 40/04,. La Comisión seguirá vigilando el cumplimiento de sus recomendaciones.

#### **Caso 12.475, Informe No. 97/05, Alfredo Díaz Bustos (Bolivia)**

353. El 27 de octubre de 2005, mediante Informe No. 97/05, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Alfredo Díaz Bustos. En resumen, el peticionario alegaba que el señor Alfredo Díaz Bustos era un Testigo de Jehová a quien el Estado le había violado el derecho a la objeción de conciencia cuando fue llamado a prestar el servicio militar el 29 de febrero de 2000, afectando directamente su libertad de conciencia y religión. Adicionalmente, el peticionario señaló que el señor Díaz Bustos sufrió discriminación por su condición de Testigo de Jehová dado que la propia Ley del Servicio Nacional de Defensa boliviano establece la desigualdad entre católicos y fieles de otras confesiones religiosas, siendo que para los primeros la exención del servicio militar era posible, no siendo así para los demás. El peticionario también alegó que el Estado boliviano había violado el derecho a la protección judicial de la presunta víctima ya que mediante sentencia definitiva del Tribunal Constitucional, se estableció que los asuntos sobre el derecho a la objeción de conciencia con relación al servicio militar obligatorio no pueden ser sometidos al órgano jurisdiccional.

354. Mediante el acuerdo de solución amistosa, el Estado se comprometió a:

- a) Entregar la Libreta Militar de redención a Alfredo Díaz Bustos, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha en que el interesado presente toda la documentación requerida por el Ministerio de Defensa;
- b) Otorgar la Libreta de redención gratuitamente, sin condicionarse dicha entrega al pago del impuesto militar señalado en la Ley del Servicio Nacional de Defensa, al pago de otro monto por cualquier concepto ni a contraprestaciones de cualquier otra naturaleza, sean pecuniarias o no;
- c) A tiempo de la entrega de la libreta de redención, emitir una Resolución Ministerial que establezca que en caso de conflicto armado el ciudadano Alfredo Díaz Bustos, por su condición de objetor de conciencia, no será destinado al frente de batalla ni llamado como auxiliar;
- d) En concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos, incorporar en los anteproyectos normativos de reforma a la legislación militar actualmente en

- revisión por el Ministerio de Defensa Nacional y las FFAA, el derecho a la objeción de conciencia respecto al servicio militar;
- e) Promover, junto al Viceministerio de Justicia, la aprobación congresal de la legislación militar que incorpore el derecho a la objeción de conciencia respecto al servicio militar;

355. Tras estudiar la información que consta en el expediente, la Comisión había concluido en sus Informe Anuales correspondientes a los años 2006 y 2007, que los puntos a), b) y c) del acuerdo se encontraban cumplidos, mientras que aún quedaba pendiente el cumplimiento de los puntos d) y e). En su Informe Anual de 2015, la CIDH declaró cumplido el punto d) del acuerdo de solución amistosa<sup>78</sup>.

356. El 7 de octubre de 2013, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado boliviano en virtud del acuerdo de solución amistosa. El Estado, mediante comunicación recibida el 6 de noviembre de 2013, informó que con base en la Constitución Política del Estado de 2009, la cual incorpora los principios y derechos establecidos en los instrumentos internacionales y regionales de derechos, y en el principio de reserva legal, no existe limitación alguna para reglamentar el derecho a la objeción de conciencia a través de la ley. Señaló que tal y como informó a la CIDH el 31 de diciembre de 2012, se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional dos proyectos de ley a fin de adecuar la legislación militar a la Constitución Política de 2009: PL 00/2011 “Declárese de Prioridad Nacional el Servicio Militar Obligatorio para Postulantes a Cadetes Policiales y Militares en Territorio Nacional”, y PL 345/12 “Proyecto de Ley del Servicio Militar Obligatorio”. Igualmente, el Estado reiteró en relación al Servicio Militar Alternativo SAR (Search and Rescue), que éste tiene un profundo carácter social, ya que consiste en la búsqueda, asistencia y salvamento aéreo, así como en el auxilio en accidentes de carretera y desastres naturales, entre otros, por lo que muestra que existe en la normativa militar un servicio alternativo al servicio militar obligatorio.

357. El 2 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado boliviano. El 15 de octubre de 2015, el Estado remitió una comunicación en la cual se refirió al cumplimiento del compromiso e), reiterando la información sobre la existencia de la Resolución Ministerial No. 1152 de fecha 25 de agosto de 2000, mediante la cual las Fuerzas Armadas reglamentaron el otorgamiento de la libreta del servicio militar a los jóvenes voluntarios de grupos de búsqueda y salvamento de la Fuerza Aérea; así como sobre la promulgación de la Ley No. 1902 de Aeronáutica Civil de fecha 29 de octubre de 2004, mediante la cual se instituyó el grupo SAR. Menciona que mediante la Resolución No. 0620, publicada en fecha 2 de junio de 2014, las Fuerzas Armadas mantienen como documento militar la Libreta Militar de redención del Servicio Militar Obligatorio para ciudadanos mayores de 23 años de edad en beneficio, de aquellas personas que tengan razones fundadas para objetar la prestación del servicio militar obligatorio.

358. Hasta la fecha, el peticionario no presentó información sobre el estado de cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo.

359. El 12 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento del acuerdo. El 12 de noviembre de 2016, el Estado reiteró la información reportada en años anteriores, en relación al cumplimiento de cada punto del acuerdo de solución amistosa, sin referirse a las acciones específicas de acompañamiento y promoción del Viceministerio de Justicia del cambio legislativo en el periodo transcurrido entre la fecha de aprobación del acuerdo de solución amistosa y el presente.

360. El peticionario no presentó la información actualizada sobre el cumplimiento.

<sup>78</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2015, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 281-282. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/InformeAnual2015-cap2Dseguimiento-ES.pdf>

361. En su Informe Anual 2016, la Comisión solicitó al Estado proporcionar información sobre la participación del Viceministerio de Justicia en los esfuerzos para incorporar la objeción de conciencia en el debate legislativo ante el Congreso, de manera que se pueda valorar el cumplimiento del único punto pendiente de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa.

362. El 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada al Estado sobre el cumplimiento. La parte peticionaria no presentó información actualizada en esta oportunidad.

363. El 13 de octubre de 2017, el Estado informó respecto a la cláusula e), que se conformó una Comisión Técnica Jurídica Militar con el objeto de realizar la adecuación a la Ley del Servicio Nacional de Defensa y realizar los ajustes respectivos en relación a la objeción de conciencia. Indicó que, entre las gestiones 2006 al 2007, el compromiso de promover la aprobación congresal de la legislación militar que incorpore la objeción de conciencia pasó a ser un tema que involucraba a dos instituciones públicas, el Ministerio de Defensa y el Viceministerio de Justicia, y que fue un tema promovido por diferentes instituciones públicas y organización civiles, quienes presentaron sus propuestas normativas para introducir el derecho de objeción de conciencia dentro de la redacción de la nueva Constitución, proponiendo así el Comando Departamental de la Policía de Oruro, los Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas, la Asamblea Permanente de los DDHH de Bolivia y la Organización Indígena Chiquitania sustituir el servicio militar por razones religiosas por el servicio militar alternativo, al considerar que el servicio militar es voluntario.

364. El Estado destacó que fue el mismo poder constituyente quien decidió finalmente mantener la obligatoriedad de la prestación del servicio militar. Igualmente indicó que en el 2007, se elaboró el Proyecto de Ley de Soberanía Nacional, que en su título séptimo establecía las modalidades alternativas al servicio militar, y por otra parte, elaboró y promovió su propuesta al sector de Defensa para la Asamblea Constituyente, que incorporaba la sustitución del Servicio Militar por el Social, por razones de objeción de conciencia. En ese sentido, el 15 de enero de 2008, se puso en consideración del Presidente del Honorable Congreso Nacional, el Proyecto de Ley de Servicio Militar Obligatorio, quien remitió dicho proyecto a la Presidencia de la Cámara de Diputados para su aprobación. El capítulo IV determinaba que se reconocería el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio Alternativo, a los varones que cumplieran servicio voluntario en los Grupos de Búsqueda y Rescate dependientes de las Fuerzas Armadas. Igualmente destacó que, en febrero de 2008 fue presentada por una diputada nacional la Objeción de Conciencia como Proyecto de Ley Complementario a la Ley del Servicio Militar Obligatorio.

365. Según lo indicado por el Estado, en diciembre de 2010, el Ministerio de Defensa dispuso otorgar la Libreta de Oficial de Reserva, al personal que presta el Servicio de Extensión e Integración Social en el marco del Servicio Militar de Compensación, lo cual constituyó un avance importante en la modernización de la Institución Armada, al brindar a los jóvenes la oportunidad para que sirvan a la patria de acuerdo a sus aptitudes, creencias y formación académica.

366. Posteriormente, en las gestiones de 2011 y 2012, se pusieron a consideración de la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Ley referente al Servicio Militar Obligatorio para postulantes a cadetes Policiales y Militares con la incorporación del servicio sustitutivo, y el Proyecto de Ley sobre el Servicio Militar Obligatorio, con el que se demostró que el tema de la objeción de conciencia continuaba siendo objeto de análisis; el Estado indica que el adecuar la legislación militar también se promovió y se puso a consideración en los Proyectos PL 00/2011, PL 345/12 y PL-345-2012-2013, en el que se propuso regular el Servicio Militar Sustitutivo.

367. El Estado destacó como avance más reciente, la pronunciación del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional 0265/2016-S2 de 23 de marzo, que reconoció que el derecho a la objeción de conciencia es asimilable al derecho a la libertad de pensamiento y por lo tanto, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, regular a través de normas específicas todo lo relacionado al derecho a la objeción de conciencia y al medio sustitutivo o alternativo del servicio militar.

368. El Estado solicitó a la Comisión el reconocimiento de los esfuerzos realizados por el Estado para introducir y promover el Derecho a la Objeción de Conciencia en el Servicio Militar, ya que no sólo se han desplegado esfuerzos para introducir el Derecho a la Objeción de Conciencia en el Servicio Militar dentro de la misma normativa, sino que se ha promovido su incorporación dentro de la misma Constitución Política del Estado de 2009, y a pesar de que el Poder Constituyente decidió no introducir este derecho dentro de la redacción de la nueva Constitución Política del Estado, se continuaron las gestiones para impulsar la aprobación de proyectos de ley que consideraron la incorporación del derecho en referencia. En ese sentido, solicitó que, en base a las gestiones desarrolladas a lo largo de estos años, a través de la cual se verifica que el Estado ha demostrado los esfuerzos para incorporar el derecho a la objeción de conciencia, en proyectos de reforma militar y en numerosos proyectos presentados ante la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado, se declare cumplido la cláusula e) del Acuerdo de Solución Amistosa.

369. La Comisión toma nota de la información aportada, y valora los esfuerzos del Estado para dar cumplimiento del punto pendiente del acuerdo de solución amistosa. La Comisión solicitará a la parte peticionaria sus observaciones sobre el recuento de las acciones enunciadas por el Estado antes de pronunciarse sobre el cumplimiento de esta medida.

370. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto e) del acuerdo.

#### **Caso 12.051, Informe No. 54/01, Maria da Penha Maia Fernandes (Brasil)**

371. En el Informe No. 54/01 de 16 de abril de 2001, la Comisión concluyó que: a) la República Federativa de Brasil era responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, garantizados por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1.1 de dicho instrumento, por la dilación injustificada y tramitación negligente del presente caso de violencia doméstica en Brasil; b) el Estado había tomado algunas medidas destinadas a reducir el alcance de la violencia doméstica y la tolerancia estatal de la misma, aunque dichas medidas no han aún conseguido reducir significativamente el patrón de tolerancia estatal, en particular a raíz de la ineffectividad de la acción policial y judicial en el Brasil, respecto a la violencia contra la mujer; y c) el Estado había violado los derechos y el cumplimiento de sus deberes según el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de la señora Fernandes; y en conexión con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y en su relación con el artículo 1.1 de la Convención, por sus propias omisiones y la tolerancia de la violación infligida.

372. La CIDH formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones<sup>79</sup>:

1. Completar rápida y efectivamente el procesamiento penal del responsable de la agresión y tentativa de homicidio en perjuicio de la señora Maria da Penha Fernandes Maia.
2. Llevar igualmente a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad por irregularidades o retardos injustificados que impidieron el procesamiento rápido y efectivo del responsable; y tomar las medidas administrativas, legislativas y judiciales correspondientes.
3. Adoptar, sin perjuicio de las eventuales acciones contra el responsable civil de la agresión, medidas necesarias para que el Estado asigne a la víctima adecuada reparación simbólica y material por las violaciones aquí establecidas, en particular su falla en ofrecer un recurso rápido y efectivo; por mantener el caso en la impunidad por más de quince años; y por evitar con ese retraso la posibilidad oportuna de acción de reparación e indemnización civil.

---

<sup>79</sup> La CIDH observa que anteriormente había considerado que las recomendaciones núms. 1 y 3 habían sido cumplidas en su Informe Anual de 2008 (Informe Anual de la CIDH 2008. Capítulo III.D, párrafos 101 y 103).

4. Continuar y profundizar el proceso de reformas que eviten la tolerancia estatal y el tratamiento discriminatorio respecto a la violencia doméstica contra las mujeres en Brasil. En particular la Comisión recomienda:
- a) Medidas de capacitación y sensibilización de los funcionarios judiciales y policiales especializados para que comprendan la importancia de no tolerar la violencia doméstica;
  - b) Simplificar los procedimientos judiciales penales a fin de que puedan reducirse los tiempos procesales, sin afectar los derechos y garantías de debido proceso;
  - c) El establecimiento de formas alternativas a las judiciales, rápidas y efectivas de solución de conflicto intrafamiliar, así como de sensibilización respecto a su gravedad y las consecuencias penales que genera;
  - d) Multiplicar el número de delegaciones especiales de policía para los derechos de la mujer y dotarlas con los recursos especiales necesarios para la efectiva tramitación e investigación de todas las denuncias de violencia doméstica, así como de recursos y apoyo al Ministerio Público en la preparación de sus informes judiciales;
  - e) Incluir en sus planes pedagógicos unidades curriculares destinadas a la comprensión de la importancia del respeto a la mujer y a sus derechos reconocidos en la Convención de Belém do Pará, así como al manejo de los conflictos intrafamiliares.

373. El Estado presentó una comunicación el 29 de agosto de 2013, en la que resalta los esfuerzos para cumplir con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo No. 54/01. Con respecto a la recomendación 2, el Estado confirmó que existe un proceso judicial en curso relacionado con el caso de Maria Da Penha Maia Fernandes dentro del marco del *Conselho Nacional de Justiça* (CNJ), y que en el futuro le enviará información a la Comisión sobre este proceso. También informó que el 14 de octubre de 2011, la *Secretaria de Políticas para as Mulheres* (SPM) y el CNJ firmaron un acuerdo de colaboración según el cual la SPM formará parte del programa "Justicia Plena". Dentro del contexto de este programa, la SPM estará facultada para seleccionar cinco procesos relacionados con la *Lei Maria da Penha* con repercusiones sociales importantes, que serán monitoreados por dicho programa. Entre otras medidas para garantizar la eficacia de la *Lei Maria da Penha*, el Estado destaca dos sentencias de la Corte Suprema en 2012 que resolvieron dudas relativas a la constitucionalidad de sus disposiciones, la creación de coordinadores estatales para hacer frente a consideraciones de violencia doméstica como órganos permanentes de la presidencia de los tribunales y acuerdos de colaboración técnica entre la SPM y otros órganos del sistema de justicia para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres en casos de violencia. El Estado también informa sobre la campaña informativa titulada "Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha – a Lei é Mais Forte!", para involucrar al poder ejecutivo, así como a los órganos de administración de justicia y seguridad pública, en el abordaje de la impunidad que rodea a los actos de violencia contra las mujeres.

374. En cuanto a la recomendación 4, el Estado informó que desde 2007, la SPM está implementando una ronda de actividades de trabajo relacionadas con la *Lei de Maria da Penha*, con el objetivo de crear un foro de debate y aclaración con respecto a los compromisos contenidos en esta ley, que incluyen cursos de capacitación para los jueces. El Estado también confirmó la creación del Foro Nacional de Jueces de Violencia Doméstica y Familiar contra las Mujeres (FONAVID), con el fin de establecer un foro permanente de discusión sobre la *Lei Maria da Penha* y la violencia doméstica. El Estado también informa sobre la implementación de los programas de capacitación relacionados con la *Lei Maria da Penha* en coordinación con diversas entidades responsables de la administración de justicia; la planeación anual de una cumbre nacional de fiscalías estatales involucradas en la implementación de la *Lei Maria da Penha*; y la creación de una serie de mecanismos estatales para promover la defensa de los derechos de las mujeres, como el *Comissão da Mulher no Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais* (CONDEGE), entre otros.

375. El Estado reportó que con el lanzamiento del *Pacto Nacional de Enfrentamento à Violencia contra a Mulher*, en agosto de 2007, la atención a las mujeres en situaciones de violencia fue seleccionada como uno de los dos ejes de atención del Estado brasileño. Dentro de este eje se ha incluido la creación de una red para mejorar la calidad de la atención que se les ofrece a las mujeres víctimas de violencia. La SPM está aplicando actualmente diversas actividades para monitorear el funcionamiento de esta red. El Estado también menciona los esfuerzos significativos para fortalecer las *delegacias especializadas no atendimento á mulher* e implementar una base de datos nacional de estadísticas relativas a la violencia doméstica y familiar, entre otras medidas. Finalmente, el Estado reitera que la *Lei Maria da Penha* constituye la más importante de las acciones implementadas para hacer frente a la violencia contra las mujeres dentro del Tercer Plan Nacional de Políticas sobre la Mujer (2013-2015). Por estos motivos, el Estado considera que ha implementado todas las recomendaciones formuladas por la Comisión.

376. Los peticionarios presentaron información el 25 de noviembre de 2013, y anteriormente enviaron información pertinente, el 6 de febrero de 2013. En cuanto a la recomendación 2, los peticionarios indican que el proceso judicial emprendido dentro del marco del *Conselho Nacional de Justiça* (CNJ) con respecto a este caso no se pronunció en relación con las responsabilidades relativas a irregularidades y demoras en el curso del proceso penal contra el agresor de Maria da Penha Maia Fernandes. A solicitud de la víctima se inició un nuevo proceso en el ámbito del CNJ en septiembre de 2009, a fin de que se investigaran efectivamente las irregularidades. En su comunicación más reciente, el Estado brasileño informó que se abrió un proceso adicional en el CNJ para determinar las responsabilidades relativas a irregularidades y demoras en el proceso penal, que los peticionarios afirman fue archivado el 11 de junio de 2013, de acuerdo con información disponible electrónicamente. Los peticionarios indican que el acceso a los expedientes relativos a este último proceso requiere que la señora da Penha viaje personalmente a Brasilia, lo cual se le dificulta por las consecuencias de la violencia doméstica que sufrió. Por lo tanto, solicitan que la Comisión le pida al Estado brasileño que envíe la decisión adoptada en relación con dicho proceso. En resumen, consideran que la recomendación 2 aún está pendiente de cumplimiento tras 12 años de la aprobación del Informe de Fondo de la Comisión.

377. En cuanto a la recomendación 4, los peticionarios reiteraron la información que presentaron en la audiencia temática en 2011 ante la CIDH en cuanto a la implementación de la *Lei Maria da Penha*. Resaltan diversos obstáculos para la aplicación correcta de dicha ley para hacer frente a la violencia doméstica en Brasil, que prueban que la recomendación 4 está aún pendiente de cumplimiento por parte del Estado. Destacan los desafíos para la creación de una red para prestar servicios necesarios a las mujeres víctimas de violencia. También subrayan la reducción en el número total de *delegacias especializadas no atendimento á mulher* entre 2007 y 2012, de 397 a 395, y su distribución deficiente en el territorio nacional. También señalan una reducción en la cantidad de tribunales especializados en el país, la ausencia de un mecanismo de vigilancia de la calidad de los servicios especializados y la necesidad pendiente de recopilar datos relacionados con los delitos de violencia doméstica. A pesar de la adopción de esta ley especializada, también se ha dado un incremento persistente en el número de casos de muertes violentas de mujeres. Hacen referencia a un estudio específico publicado por el *Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada* (IPEA) en 2013 que indica que desde la adopción de la *Lei Maria da Penha* no se ha visto una reducción en las tasas anuales de muertes de mujeres; estos resultados indican, según los peticionarios, la falta de aplicación adecuada de esta ley por el Estado.

378. El 9 de diciembre de 2014 y el 2 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Ninguna de las partes presentó información en esa oportunidad.

379. El 19 de enero de 2016, el Estado presentó información sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Dicha información fue trasladada a los peticionarios el 21 de junio de 2016. El Estado indicó en relación a la recomendación 2 sobre investigación, el Estado indicó que en el proceso instaurado ante el CNJ, el 23 de mayo de 2013, se adoptó la decisión de archivo al no haberse podido confirmar la ocurrencia de una infracción disciplinaria. El Estado también se refirió, de manera general, a programas que se estarían implementando para optimizar la celeridad judicial.

380. En relación a la recomendación 4 (a), sobre capacitación de funcionarios estatales, el Estado se refirió al Foro Nacional de Jueces de Violencia Domestica y Familiar contra la Mujer FONAVID, que fue creado para la discusión permanente sobre la Ley María da Penha, en particular sobre los dispositivos previstos en la ley y el intercambio de experiencias e información entre los jueces de varios circuitos del país especializados en violencia doméstica y familiar contra las mujeres. En ese sentido, la sexta edición del FONAVID tuvo lugar entre el 5 y el 7 de noviembre de 2014, y contó con la presencia de aproximadamente 200 participantes, entre los cuales habían magistrados, miembros de equipos técnicos multidisciplinarios, que trabajan en aplicación de la Ley 11.340 de 2006. El foro incluyó conferencias sobre buenas prácticas y espacios de deliberación. Al respecto, el Estado proporcionó el programa de trabajo y otros documentos del evento. El Estado también se refirió al acuerdo de cooperación técnica No. 31 de 2011, entre el CNJ, la Escuela Nacional de Formación de Magistrados (ENFAM por su siglas en portugués), y el Ministerio de Justicia, que tiene como objetivo establecer una cooperación técnica en actividades que contribuyan a la divulgación, consolidación e implementación de los instrumentos previstos en la ley 11.340/2006.

381. En relación a la recomendación 4 b) sobre la simplificación de los procesos judiciales para reducir el atraso procesal, el Estado indicó que la Ley María da Pehna prevé procedimientos para reducir el tiempo procesal y garantizar la protección de las víctimas. Entre las medidas incluidas, el Estado citó la realización de procedimientos en horario nocturno para garantizar la emisión de medidas de protección dentro de menos de 48 horas. Asimismo, el Estado se refirió a la Campaña Nacional “Justicia para la Paz en Casa” que inició en el 2015, para agilizar las audiencias y juzgamientos de proceso relacionados con graves amenazas a la mujer. Dentro del desarrollo de dicha campaña, habrían existido tres grandes movilizaciones en marzo, agosto y noviembre, y contó con la participación de todos los tribunales de justicia del país.

382. En relación a la recomendación 4 c), sobre el establecimiento de formas alternativas a las judiciales, rápidas y efectivas de solución de conflicto intrafamiliar, el Estado indicó que en el marco de la Política Nacional de Mediación y Conciliación desarrollada por la Secretaría de Reforma Judicial, en conjunto con el CNJ y la ENFAM, se estableció el programa de Formación Técnica en Mediación y Conciliación para Magistrados y Profesionales Voluntarios. El Estado indicó que en este momento existen 2.500 magistrados que fueron capacitados en técnicas de mediación y conciliación. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 125/00 del CNJ, que habría incorporado los cursos como principales instrumentos para viabilizar la implantación de núcleos de mediación en los Tribunales de Justicia. Asimismo, el Estado indicó que en junio de 2015 fue sancionada la Ley 13.140 que dispuso la mediación entre particulares como medio de solución de controversias y otras formas de solución de conflictos en el ámbito de la administración de justicia [*autocomposição*].

383. En relación a la recomendación 4 d) sobre la multiplicación del número de delegaciones espaciales de policía para los derechos de la mujer y dotarlas con recursos para su funcionamiento, el Estado informó que a través de recursos del programa Brasil más Seguro, del Ministerio de Justicia, serán reestructuradas las delegaciones especializadas de atención a la mujer de dicho Ministerio, para cubrir las metas del Pacto Nacional de Enfrentamiento de la Violencia Contra las Mujeres; y que para tales efectos se llevó a cabo una investigación, cuyos resultados serán publicados, con el fin de que sirva como guía para la reestructuración que se llevará a cabo.

384. En relación a la recomendación 4 e), sobre la inclusión en sus planes pedagógicos de unidades curriculares destinadas a la comprensión de la importancia del respeto a la mujer, el Estado informó que para la Dirección de Currículos y Educación Integral (DICEI por sus siglas en portugués), del Ministerio de Educación, la temática es considerada de gran relevancia, y a pesar de que en virtud de la Ley No. 9.934 de diciembre de 1996, los establecimientos educativos tienen una autonomía, la Secretaría de Educación Continuada, Alfabetización, Diversidad e Inclusión ha elaborado y desarrollado programas sobre la temática para fortalecer el régimen colaborativo entre los equipos pedagógicos locales, a fin de incorporar la temática de los derechos humanos y derechos de las mujeres entre otros.

385. El 21 de julio de 2016, los peticionarios remitieron un escrito reiterando las observaciones presentadas en el año 2013, sobre la falta de cumplimiento de la recomendación 2 sobre investigación por parte del Estado brasilero. Al respecto, recordaron que el proceso de investigación fue abierto y archivado en

dos oportunidades, y que la mera conclusión de ausencia de infracción disciplinaria es insuficiente para demostrar el cumplimiento de la recomendación 2. Dicha información fue trasladada al Estado el 15 de agosto de 2016.

386. El 10 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. La parte peticionaria no contestó la solicitud de información realizada por la Comisión en esta oportunidad.

387. El 21 de diciembre de 2016, el Estado presentó un escrito en el cual rechaza las conclusiones de la parte peticionaria, y agregó información según la cual la acción sancionatoria fue activada afuera del plazo de los 180 días establecidos en la ley, por lo cual la acción se encontraba prescrita. Dicho escrito se encontraba pendiente de traslado a la parte peticionaria al momento de cierre de este informe.

388. La CIDH observa que el Estado ha presentado información amplia sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Fondo No. 54/01, en particular en relación a las recomendaciones 1, 2 y 4. Al respecto, la CIDH valora como positiva la información suministrada por el Estado sobre las medidas adoptadas para avanzar en la capacitación de funcionarios públicos en materia de derechos humanos y violencia contra la mujer, así como los esfuerzos para abrir espacios de dialogo en la agenda institucional que permita a los funcionarios judiciales intercambiar experiencias y foros de discusión sobre la materia. Asimismo, la CIDH valora los esfuerzos en materia de avances legislativos para simplificar los procedimientos de protección, y las campañas realizadas para impulsar estos cambios institucionales de carácter estructural. La CIDH también valora los esfuerzos adelantados por el Estado en materia de iniciativas para el impulso de formas alternativas de solución de conflictos y conciliación judicial, incluyendo las capacitaciones a los jueces y el marco jurídico necesario para tales efectos. Frente a la ausencia de observaciones de la parte peticionaria, la CIDH considera que la información suministrada da cuenta del cumplimiento de la recomendación 4 en su literal a). Al mismo tiempo, la CIDH considera que no cuenta con suficiente información sobre el cumplimiento de los literales b) y c).

389. Por otro lado, en relación a la recomendación 4 d), la CIDH toma nota de la información presentada por el Estado y la iniciativa de avanzar en el futuro en una línea de reestructuración de las delegaciones, para lo cual quedaría a la espera de la publicación de los resultados de la investigación de diagnóstico y la construcción del plan final de remodelación y su implementación. En relación a la recomendación 4 e), la CIDH también toma nota de la información suministrada por el Estado en esta oportunidad, y quedaría a la espera del detalle sobre los programas que esté impulsado el Estado para que las entidades educativas, dentro del marco de su independencia, tomen en consideración los temas de violencia de genero dentro de sus modelos curriculares. Por lo anterior, la CIDH considera que no cuenta con suficiente información para pronunciarse sobre el cumplimiento de los literales d) y e) de la recomendación 4.

390. En relación a la recomendación 2, la CIDH quedaría a la espera de observaciones de la parte peticionaria sobre el particular.

391. El 21 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado información actualizada sobre el cumplimiento.

392. Por lo anterior, la Comisión aprecia los avances reportados por el Estado y en atención a los puntos que se encuentran pendientes, concluye que las recomendaciones se encuentran parcialmente cumplidas.

**Casos 11.286, 11.406, 11.407, 11.412, 11.413, 11.415, 11.416 y 11.417, Informe No. 55/01, Aluísio Cavalcante y otros (Brasil)**

393. En el Informe No. 55/01 de 16 de abril de 2001, la Comisión concluyó que la República Federativa del Brasil era responsable de la violación del derecho a la vida, la integridad y la seguridad personales (artículo I de la Declaración Americana), del derecho a las garantías y la protección judiciales

(artículo XVIII de la Declaración y artículos 8 y 25 de la Convención), y por la obligación que tiene el Estado de garantizar y respetar los derechos (artículo 1.1) reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el homicidio de Aluísio Cavalcanti, Clarival Xavier Coutrim, Delton Gomes da Mota, Marcos de Assis Ruben, Wanderley Galati, y en relación con las agresiones e intentos de homicidio de Claudio Aparecido de Moraes, Celso Bonfim de Lima, Marcos Almeida Ferreira y Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, practicados todos por agentes de la policía militar del Estado de São Paulo, así como de la falta de investigación y sanción efectiva de los responsables.

394. La CIDH formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:

1. Que el Estado brasileño lleve a cabo una investigación seria, imparcial y eficaz de los hechos y circunstancias en que se produjo la muerte de Aluísio Cavalcanti, Clarival Xavier Coutrim, Delton Gomes da Mota, Marcos de Assis Ruben, Wanderley Galati, y las agresiones y tentativas de homicidio de Claudio Aparecido de Moraes, Celso Bonfim de Lima, Marcos Almeida Ferreira y Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, procese a los responsables y los sancione debidamente.
2. Que dicha investigación incluya las posibles omisiones, negligencias y obstrucciones de la justicia que hayan tenido como consecuencia la falta de condena definitiva de los responsables, incluyendo las posibles negligencias e incorrecciones del Ministerio Público y de los miembros del Poder Judicial que puedan haber determinado la no-aplicación o reducción del carácter de las condenas correspondientes.
3. Que se tomen las medidas necesarias para concluir, con la mayor brevedad posible y en la más absoluta legalidad, los procesos judiciales y administrativos referentes a las personas involucradas en las violaciones indicadas anteriormente.
4. Que el Estado brasileño repare las consecuencias de las violaciones de los derechos de las víctimas y sus familiares o a quienes tengan derecho, por los daños sufridos mencionados en este informe.
5. Que se tomen las medidas necesarias para abolir la competencia de la Justicia Militar sobre delitos cometidos por policías contra civiles, tal como lo proponía el proyecto original presentado oportunamente para la revocación del literal f) del artículo 9 del Código Penal Militar, y se apruebe en cambio el párrafo único allí propuesto.
6. Que el Estado brasileño tome medidas para que se establezca un sistema de supervisión externa e interna de la Policía Militar de Río de Janeiro, independiente, imparcial y efectivo.

395. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Los peticionarios presentaron su respuesta a la solicitud de información de la CIDH el 4 de diciembre de 2013. En cuanto a la recomendación 1, los peticionarios indicaron que en relación con el proceso penal relativo a Aluísio Cavalcanti, después de siete extensiones, se llevó a cabo una audiencia de sentencia para Robson Bianchi y Luiz Fernando Gonçalves, el 25 de abril de 2012, ante el Tribunal Judicial IV de São Paulo. En esa instancia fueron absueltos y se presentó una apelación, actualmente pendiente de resolución.

396. El 9 de diciembre de 2014, el 2 de septiembre de 2015, el 11 de octubre de 2016 y el 21 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Al momento del cierre de este informe no se ha recibido información por parte del Estado ni de los peticionarios. En este sentido, la Comisión invita a las partes a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las demás recomendaciones por parte del Estado.

397. Por lo anterior, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

#### **Caso 11.517, Informe No. 23/02, Diniz Bento da Silva (Brasil)**

398. En el Informe No. 23/02 del 28 de febrero de 2002, la Comisión concluyó que la República Federativa del Brasil era responsable de la violación del derecho a la vida (artículo 4) del señor Diniz Bento da Silva, ocurrida en el Estado de Paraná el 8 de marzo de 1993, y de la violación del derecho a las garantías judiciales (artículo 8), del derecho a la protección judicial (artículo 25) y del derecho a obtener garantías y respeto de los derechos enumerados en la Convención (artículo 1.1).

399. La CIDH formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:

1. Realizar una investigación seria, imparcial y efectiva por medio de la justicia común, a fin de juzgar y castigar a los responsables de la muerte de Diniz Bento da Silva; castigar a los responsables por las irregularidades comprobadas en la investigación de la Policía Militar, así como a los responsables de la demora injustificada en la realización de la investigación civil, de acuerdo con la legislación brasileña.
2. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de la víctima reciban adecuada reparación por las violaciones de derechos aquí establecidas.
3. Adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de hechos semejantes, en especial formas de prevenir la confrontación con trabajadores rurales en los conflictos sobre tierras, negociación y solución pacífica de esos conflictos.

400. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El 12 de junio de 2014, los peticionarios presentaron su respuesta. En relación con la recomendación 1, indicaron que el Estado aún no ha dado cumplimiento porque el Tribunal de Justicia del Estado de Paraná decidió archivar el caso bajo el justificativo de que la Justicia Militar ya había decidido acerca de la inocencia de los acusados. Informaron que el Ministerio Público del Estado apelará la decisión del Tribunal al Superior Tribunal de Justicia debido a las irregularidades en la investigación llevada a cabo por la Justicia Militar. Además, los peticionarios señalaron que el Estado no ha cumplido con las otras dos recomendaciones. En este sentido, reiteraron que el Estado continúa desatendiendo la situación de violencia contra las defensoras y defensores de los derechos de las personas involucradas en el conflicto agrario.

401. El 5 de diciembre de 2014, el 2 de septiembre de 2015, 11 de octubre de 2016 y el 21 de agosto de 2017 la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes.

402. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

#### **Caso 10.301, Informe No. 40/03, Parque São Lucas (Brasil)**

403. En el Informe No. 40/03 del 8 de octubre de 2003 la CIDH concluyó que el Estado brasileño violó los derechos humanos de Arnaldo Alves de Souza, Antonio Permoniam Filho, Amaury Raymundo Bernardo, Tomaz Badovinac, Izac Dias da Silva, Francisco Roberto de Lima, Romualdo de Souza, Wagner Saraiva, Paulo Roberto Jesuino, Jorge Domingues de Paula, Robervaldo Moreira dos Santos, Ednaldo José da Fonseca, Manoel Silvestre da Silva, Roberto Paes da Silva, Antonio Carlos de Souza, Francisco Marlon da Silva Barbosa, Luiz de Matos y Reginaldo Avelino de Araújo, consagrados por los artículos I y XVIII de la Declaración Americana y por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, y que no cumplió las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la misma Convención.

404. La CIDH formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Que adopte las medidas legislativas necesarias para transferir a la justicia penal común el juzgamiento de los crímenes comunes cometidos por policías militares en ejercicio de sus funciones de orden público.
2. Que se desactiven las celdas de aislamiento ("*celas fortes*").
3. Que sancione, de acuerdo con la gravedad de los delitos cometidos, a los policías civiles y militares involucrados en los hechos motivo del Caso *sub judice*.
4. Que, en los Casos en que todavía no lo haya hecho, pague una indemnización compensatoria justa y adecuada a los familiares de las víctimas, por el daño causado como consecuencia del incumplimiento de las referidas disposiciones.

405. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El 17 de diciembre de 2013, los peticionarios presentaron su respuesta. Con respecto a la recomendación 1, notaron que la ley federal 9.299/96 transfirió a la justicia penal común el juzgamiento de los crímenes de homicidio doloso cometidos por policías militares en ejercicio de sus funciones de orden público. Sin embargo, criticaron el hecho de que los crímenes comunes siguen bajo la competencia de la Justicia Militar y también que es la policía militar la competente para investigar homicidios y delitos comunes, y no la policía civil.

406. Los peticionarios señalaron que no habían recibido información sobre la desactivación de celdas de aislamiento. Además, respecto de la obligación de reparación, informaron que algunos familiares de las víctimas aún no fueron identificados ni localizados y por eso no recibieron la indemnización compensatoria por el daño causado. Con relación a la recomendación 3, destacaron que, o bien todos los acusados habían sido absueltos o bien las investigaciones habían sido cerradas.

407. El 5 de diciembre de 2014, el 2 de septiembre de 2015, el 11 de octubre de 2016 y el 21 de agosto de 2017 la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes. Al momento del cierre de este informe no se ha recibido información por parte del Estado ni de los peticionarios. En este sentido, la Comisión invita a las partes a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las demás recomendaciones por parte del Estado.

408. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

#### **Caso 11.289, Informe No. 95/03, José Pereira (Brasil)**

409. El 24 de octubre de 2003, mediante Informe No. 95/03, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso José Pereira. Por medio de este acuerdo, el Estado reconoció su responsabilidad internacional en el Caso, dado que "los órganos estatales no fueron capaces de prevenir la ocurrencia de la grave práctica de trabajo esclavo, ni de castigar los actores individuales de las violaciones denunciadas".

410. De conformidad con dicho acuerdo, el Estado se comprometió a<sup>80</sup>:

### **Reconocimiento de Responsabilidad**

4. El Estado brasileño reconoce su responsabilidad internacional en relación al caso 11.289, aunque la autoría de las violaciones no son atribuidas a los agentes estatales, dado que los órganos estatales no fueron capaces de prevenir la ocurrencia de la grave práctica de trabajo esclavo, ni de castigar los actores individuales de las violaciones denunciadas.

5. El reconocimiento público de la responsabilidad del Estado brasileño con relación a la violación de derechos humanos tendrá lugar con la solemnidad de la creación de la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo-CONATRAE (creada por el Decreto Presidencial del 31 de julio de 2003), que se realizará el 18 de septiembre de 2003.

6. Las partes asumen el compromiso de mantener sigilo sobre la identidad de la víctima al momento de la solemnidad de reconocimiento de responsabilidad del Estado y en declaraciones públicas sobre el caso.

### **II. Juzgamiento y castigo de los responsables individuales**

7. El Estado brasileño asume el compromiso de continuar con los esfuerzos para el cumplimiento de los mandatos judiciales de prisión contra los acusados por los crímenes cometidos contra José Pereira. Para ello se dará traslado del Acuerdo de Solución Amistosa al Director General del Departamento de la Policía Federal.

### **III. Medidas pecuniarias de Reparación**

8. Para la indemnización por los daños materiales y morales a José Pereira, el Estado brasileño encaminó un proyecto de Ley al Congreso Nacional. La Ley N° 10.706 del 30 de julio de 2003 (copia anexa), aprobada en carácter de urgencia determinó el pago R\$ 52.000,00 (cincuenta y dos mil reales) a la víctima. El monto fue pagado a José Pereira mediante una orden bancaria (N° 030B000027), el 25 de agosto de 2003.

9. El pago de la indemnización descrita en el párrafo anterior exime al Estado brasileño de efectuar cualquier otro resarcimiento a José Pereira.

### **IV. Medidas de Prevención**

#### **IV.1 Modificaciones Legislativas**

10. A fin de mejorar la Legislación Nacional que tiene como objetivo prohibir la práctica del trabajo esclavo en el país, el Estado brasileño se compromete a implementar las acciones y las propuestas de cambio legislativos contenidas en el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo, elaborado por la Comisión Especial del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, e iniciado por el Gobierno brasileño el 11 de marzo de 2003.

11. El Estado brasileño se compromete a efectuar todos los esfuerzos para la aprobación legislativa (i) del Proyecto de Ley N° 2130-A, de 1996, que incluye entre las infracciones contra el orden económico la utilización de mecanismos "ilegítimos de la reducción de los costos de producción como el no pago de los impuestos laborales y sociales,

<sup>80</sup> Con respecto a los puntos 1, 2 y 4 del referido acuerdo de solución amistosa, la Comisión ya consideró que esas obligaciones se habían cumplido en su totalidad (Informe anual de la CIDH 2008. Capítulo III.D, párrafo 137).

explotación del trabajo infantil, esclavo o semi-esclavo”; y (ii) el Sustitutivo presentado por la Diputada Zulaiê Cobra al proyecto de Ley N° 5.693 del Diputado Nelson Pellegrino, que modifica el artículo 149 del Código Penal Brasileño.

12. Por último, el Estado brasileño se compromete a defender el establecimiento de la competencia federal para el juzgamiento del crimen de reducción análoga a la de esclavo, con el objeto de evitar la impunidad.

#### **IV.2. Medidas de Fiscalización y Represión al Trabajo Esclavo**

13. Considerando que las propuestas legislativas demandarán un tiempo considerable para ser implementadas en la medida que dependen de la actuación del Congreso Nacional, y que la gravedad del problema de la práctica del trabajo esclavo requiere la toma de medidas inmediatas, el Estado se compromete desde ya a: (i) fortalecer el Ministerio Público del Trabajo; (ii) velar por el cumplimiento inmediato de la legislación existente, por medio de cobranzas de multas administrativas y judiciales, de la investigación y la presentación de denuncias contra los autores de la práctica del trabajo esclavo; (iii) fortalecer el Grupo Móvil del MTE; (iv) realizar gestiones junto al Poder Judicial y a sus entidades representativas, en el sentido de garantizar el castigo de los autores de los crímenes de trabajo esclavo.

14. El Gobierno se compromete a revocar, hasta el final del año, por medio de actos administrativos que le correspondan, el Término de Cooperación firmado entre los propietarios de haciendas y autoridades del Ministerio de Trabajo y del Ministerio Público del trabajo, firmado en febrero de 2001, y que fue denunciado en el presente proceso el 28 de febrero de 2001.

15. El Estado brasileño se compromete a fortalecer gradualmente la División de Represión al Trabajo Esclavo y de Seguridad de los Dignatarios-DTESD, creada en el ámbito del Departamento de la Policía Federal por medio de la Portaria-MJ N° 1.016, del 4 de septiembre de 2002, de manera de dotar a la División con fondos y recursos humanos adecuados para el buen cumplimiento de las funciones de la Policía Federal en las acciones de fiscalización de denuncias del trabajo esclavo.

16. El Estado brasileño se compromete a hacer gestiones junto al Ministerio Público Federal, con el objetivo de resaltar la importancia de que los Procuradores Federales otorguen prioridad a la participación y el acompañamiento de las acciones de fiscalización de trabajo esclavo.

#### **IV.3. Medidas de Sensibilización contra el Trabajo Esclavo**

17. El Estado brasileño realizará una campaña nacional de sensibilización contra la práctica del trabajo esclavo, con fecha prevista para octubre de 2003, y con un enfoque particular en el Estado de Pará. En esta ocasión, mediante la presencia de los peticionarios se dará publicidad a los términos de este Acuerdo de Solución Amistosa. La campaña tendrá de base un plan de comunicación que contemplará la elaboración de material informativo dirigido a los trabajadores, la inserción del tema en la media por la prensa y por difusión de cortos publicitarios. También están previstas visitas de autoridades en las áreas de enfoque.

18. El Estado brasileño se compromete a evaluar la posibilidad de realización de seminarios sobre la erradicación del trabajo esclavo en el Estado de Pará, hasta el primer semestre de 2004, con la presencia del Ministerio Público Federal, garantizando la invitación para la participación de los peticionarios.

## (V) Mecanismo de Seguimiento

19. Para el monitoreo del cumplimiento del presente acuerdo hasta el efectivo cumplimiento de todas sus cláusulas, las partes encaminarán informes anuales sobre los avances alcanzados, la CIDH facilitará audiencias para recibir informaciones y viabilizará los pedidos de visitas *in situ*, en caso de ser necesario.

411. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento del acuerdo arriba mencionado, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Se ha recibido información de ambas partes este año relevante para el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa relativo a este caso.

412. La Comisión observa en primer lugar la información presentada el 2 de enero de 2013 por el Estado sobre el cumplimiento del acuerdo arriba aludido y las disposiciones que el mismo contiene. En los documentos mencionados, el Estado describió las medidas que ha adoptado dirigidas al fortalecimiento del marco jurídico para combatir la práctica de trabajo esclavo, que incluyen la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 458/2001, que está pendiente de votación en la Cámara de Diputados; la decisión de establecer una Comisión Parlamentaria de Averiguaciones (CPI) para investigar la situación de trabajo esclavo en Brasil, el 3 de febrero de 2012; así como varios proyectos de ley relativos al trabajo esclavo actualmente bajo consideración por la legislatura federal (PL 5016/2005, dirigido a reformar el Código Penal sobre las sanciones por el trabajo esclavo; el PL 169/2009, orientado a prohibir que las empresas brasileñas firmen contratos con empresas que explotan trabajo degradante en el extranjero; el PL 603/2011, que se relacionan con las condiciones trabajo en las minas de carbón; y el PL 1515/2011, para impedir que los espacios públicos de cualquier naturaleza reciban el nombre de personas notoriamente involucradas en la explotación de trabajo esclavo).

413. Asimismo, el Estado explicó en su comunicación las medidas adoptadas para vigilar adecuadamente el cumplimiento de la legislación laboral actual. En este sentido, el Estado subrayó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha afirmado que las acciones de inspección de Brasil deben considerarse como prácticas óptimas ejemplares. El Estado también hizo referencia específica a sus logros continuos relacionados con las sanciones administrativas y civiles, la cantidad de trabajadores liberados y el número y alcance de las operaciones efectuadas.

414. Los peticionarios también presentaron información respecto a las disposiciones arriba mencionadas, el 30 de enero de 2013. En cuanto a las medidas relacionadas con la sentencia y sanción de los perpetradores, los peticionarios afirman que no han recibido información alguna relativa a esfuerzos o iniciativas del Estado brasileño en este sentido. En relación con las medidas de prevención, hacen referencia al *Segundo Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo*, lanzado el 10 de septiembre de 2008, y a una evaluación emprendida en 2010 por la *Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo* (CONATRAE), que indica que aproximadamente el 41% de las acciones contenidas en el plan no se han implementado, el 31% se han cumplido parcialmente y apenas alrededor del 27% se han cumplido exhaustivamente. En relación con la reforma legislativa, expresan su preocupación por el retraso y archivo de varios proyectos legislativos relacionados con distintas facetas de la prohibición de la práctica del trabajo esclavo en Brasil. Sobre la creación de los cargos de Agente o Delegado de la Policía Federal, los peticionarios adelantan información que indica que se han creado 500 cargos de Delegados de la Policía Federal y 750 cargos de Agentes de la Policía Federal, mediante la Ley No. 11,890/2008, pero también presentan una evaluación elaborada por la *Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal* de agosto de 2011 que indica que existe un déficit de 3.000 oficiales de la policía federal (incluyendo delegados, expertos y agentes), y que es posible que las vacantes den como resultado la salida de 2.270 oficiales de la policía federal hasta diciembre de 2015.

415. Los peticionarios también se refieren a un conflicto existente entre las competencias federales y estatales como uno de los factores que más prolongan el proceso penal y contribuyen a la prescripción de los delitos y a la perpetuación de la impunidad en el país. Subrayan que este tema se encuentra actualmente ante el *Supremo Tribunal Federal*, mediante recurso extraordinario pendiente de resolución. Afirman también que en Brasil todavía es difícil verificar el número exacto de procedimientos

legales en curso, ante el *Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho* o ante la *Justiça Comun*, lo que impide una evaluación adecuada del cumplimiento del acuerdo celebrado en este caso, y la vigilancia de la ocurrencia del trabajo esclavo en el país, entre otros problemas.

416. En respuesta a la solicitud de información del 9 de octubre de 2013 enviada por la CIDH a ambas partes, los peticionarios presentaron su respuesta, el 18 de diciembre de 2013. Reiteraron que siguen sin tener información sobre el cumplimiento de las recomendaciones 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 por parte del Estado. Adicionalmente, reiteraron las informaciones y preocupaciones respecto de la reforma legislativa presentadas en el año anterior. Asimismo, manifestaron preocupación en relación con el proyecto de ley 3842/2012 que definiría el trabajo esclavo en términos incompatibles con los estándares de la OIT y de derechos humanos en general.

417. El 5 de diciembre de 2014, el 2 de septiembre de 2015, el 11 de octubre de 2016 la CIDH y el 21 de agosto de 2017 la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes. Al momento del cierre de este informe no se ha recibido información por parte del Estado ni de los peticionarios. En este sentido, la Comisión invita a las partes a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las demás recomendaciones por parte del Estado.

418. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente el acuerdo de solución amistosa arriba aludido. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de los puntos pendientes de cumplimiento.

#### **Caso 11.556, Informe No. 32/04, Corumbiara (Brasil)**

419. En el Informe No. 32/04 de fecha 11 de marzo de 2004, la Comisión concluyó que el Estado brasileño era responsable de: a) la violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial y a las garantías judiciales consagrados en los artículos 4, 5, 25 y 8, respectivamente, de la Convención Americana, en perjuicio de los trabajadores sin tierra identificados en el informe, debido a las ejecuciones extrajudiciales, lesiones a la integridad personal, y violaciones de la obligación de investigar, del derecho a un recurso efectivo y de las garantías judiciales cometidas en su perjuicio; b) la violación de su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2 de la Convención Americana, y de las obligaciones que le impone el artículo 1.1 de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención; y c) la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

420. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos por órganos que no sean militares, que determine y sancione la responsabilidad de todos los autores materiales e intelectuales, tanto militares como civiles, respecto a las muertes, lesiones personales y demás hechos ocurridos en la hacienda Santa Elena el 9 de agosto de 1995.
2. Reparar adecuadamente a las víctimas especificadas en este informe, o a sus familiares, de ser el Caso, por las violaciones de derechos humanos determinadas en el presente informe.
3. Adoptar las medidas necesarias para tratar de evitar que se produzcan hechos similares en el futuro.
4. Modificar el artículo 9 del Código Penal Militar, el artículo 82 del Código de Procedimiento Penal Militar y cualquier otra norma interna que requiera modificarse a los efectos de abolir la competencia de la policía militar para investigar violaciones a derechos humanos cometidas por policías militares, y transferir dicha competencia a la policía civil.

421. El 7 de octubre de 2013, 9 de diciembre de 2014, el 2 de septiembre de 2015, el 11 de octubre de 2016 y 21 de agosto de 2017 la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Sin embargo, al

momento del cierre de este informe no se ha recibido información por parte del Estado ni de los peticionarios. En este sentido, la CIDH observa que la última información presentada por el Estado fue en fecha 9 de febrero de 2012, por lo cual insta a las partes a presentar información sobre los aspectos pendientes de cumplimiento.

422. Por lo anterior, la Comisión reitera que las recomendaciones arriba aludidas sigue estando pendiente, por lo que se concluye que el cumplimiento de las recomendaciones es parcial. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

#### **Caso 11.634, Informe No. 33/04, Jailton Neri da Fonseca (Brasil)**

423. En el Informe No. 33/04 del 11 de marzo de 2004, la Comisión concluyó que: a) el Estado brasileño era responsable de la violación al derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida, a medidas especiales de protección de la niñez, a la protección judicial y a garantías judiciales, consagrados, respectivamente, en los artículos 7, 5, 4, 19 en perjuicio de Jailton Neri da Fonseca, y de los artículos 25 y 8 de la Convención Americana en concordancia con el artículo 1.1 en perjuicio de sus familiares; y que b) el Estado violó su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2 de la Convención Americana, y violó también la obligación que le impone el artículo 1.1 de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención.

424. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones<sup>81</sup>:

1. Reparar plenamente a los familiares de Jailton Neri da Fonseca, incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de derechos humanos determinadas en el presente informe, y en particular,
2. Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos, por órganos que no sean militares, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad respecto a los hechos relacionados con la detención y asesinato de Jailton Neri da Fonseca.
3. Indemnizar a los familiares de Jailton Neri da Fonseca tanto por los daños materiales como los daños morales sufridos con ocasión a su asesinato. Dicha reparación a ser pagada por el Estado brasileño, debe ser calculada conforme a los parámetros internacionales, y debe ser por un monto suficiente para resarcir tanto los daños materiales como los daños morales sufridos por los familiares de Jailton Neri da Fonseca con ocasión de su asesinato y demás violaciones a sus derechos humanos a que se refiere este informe.
4. Modificar el artículo 9 del Código Penal Militar, el artículo 82 del Código de Procedimiento Penal Militar y cualquier otra norma interna que requiera modificarse a los efectos de abolir la competencia de la policía militar para investigar violaciones a derechos humanos cometidas por policías militares, y transferir dicha competencia a la policía civil.
5. Adoptar e instrumentar medidas de educación de los funcionarios de justicia y de la policía, al fin de evitar acciones que implique en discriminación racial en los operativos policiales, en las investigaciones, en el proceso o en la condena penal.
6. Adoptar e instrumentar acciones inmediatas para asegurar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención Americana, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las demás normas nacionales e internacionales concernientes al tema, de manera que se haga efectivo el derecho a protección especial de la niñez en Brasil.

---

<sup>81</sup> Con respecto a las recomendaciones Nos. 1 y 3, según lo indicado en el Informe Anual 2009 de la CIDH, ambas partes acordaron que hubo cumplimiento (Informe anual de la CIDH, 2009. Capítulo III.D, párrafo 181).

425. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El 7 de febrero de 2014, los peticionarios presentaron su respuesta. En relación con la recomendación 2, indicaron que el Estado no ha presentado información sobre la investigación de los hechos y que los policías involucrados en el crimen continúan trabajando normalmente.

426. Con relación a la recomendación 4, notaron que la ley federal 9.299/96 transfirió a la justicia penal común el juzgamiento de los crímenes de homicidio doloso cometidos por policías militares en ejercicio de sus funciones de orden público. Sin embargo, criticaron el hecho de que los delitos comunes sigan bajo la competencia de la Justicia Militar y que sea la policía militar la competente para investigar los homicidios y delitos comunes y no la policía civil.

427. Adicionalmente, los peticionarios reportaron que no han recibido información sobre el cumplimiento de las recomendaciones 5 y 6 por parte del Estado. Asimismo, manifestaron preocupación respecto de los altos niveles de abuso policial y racismo institucional. Informaron que en Brasil las personas afrodescendientes son asesinadas en un 150% más que las personas no afrodescendientes.

428. El 24 de noviembre de 2014, el 2 de septiembre de 2015, el 11 de octubre de 2016 y 21 de agosto de 2017 la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Al momento del cierre de este informe no se ha recibido información por parte del Estado ni de los peticionarios. En este sentido, la Comisión invita a las partes a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las demás recomendaciones por parte del Estado.

429. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

#### **Caso 12.001, Informe No. 66/06, Simone André Diniz (Brasil)**

430. En el Informe No. 66/06 de fecha 21 de octubre de 2006, la CIDH concluyó que el Estado brasileño era responsable de la violación de los derechos a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y a las garantías judiciales, consagrados, respectivamente, en los artículos 24, 25 y 8 de la Convención Americana, en perjuicio de Simone André Diniz, víctima de discriminación racial. Asimismo, la Comisión determinó que el Estado había violado el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2 de la Convención, en violación también de la obligación que le impone el artículo 1.1 de respetar y garantizar los derechos consagrados en dicho instrumento.

431. La Comisión formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones<sup>82</sup>:

1. Reparar plenamente a la víctima Simone André Diniz, considerando tanto el aspecto moral como el aspecto material, por las violaciones de los derechos humanos determinadas en el informe de méritos, en especial,
2. Reconocer públicamente la responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos de Simone André Diniz;
3. Conceder apoyo financiero a la víctima para que pueda iniciar y concluir un curso superior;
4. Establecer un valor pecuniario que se pagará a la víctima a título de indemnización por daños morales;

<sup>82</sup> Con respecto a las recomendaciones 1, 2 y 4, como se indica en el informe anual de la CIDH de 2009, ambas partes coincidieron en que se cumplieron (CIDH, Informe anual 2009, Capítulo III.D, párrafo 187). En 2011, los peticionarios especificaron que consideran que la recomendación 12 se cumplió plenamente.

5. Realizar las modificaciones legislativas y administrativas necesarias para que la legislación contra el racismo sea efectiva, con el fin de sanear los obstáculos demostrados en los párrafos 78 y 94 del presente informe;
6. Realizar una investigación completa, imparcial e efectiva de los hechos, con el objetivo de establecer y sancionar la responsabilidad respecto de los hechos relacionados con la discriminación racial sufrida por Simone André Diniz;
7. Adoptar e instrumentar medidas de educación de los funcionarios de justicia y de la policía a fin de evitar acciones que impliquen discriminación en las investigaciones, en el proceso o en la condena civil o penal de las denuncias de discriminación racial y racismo;
8. Promover un encuentro con organismos representantes de la prensa brasileña, con la participación de los peticionarios, a fin de elaborar un compromiso de evitar la publicidad de denuncias de carácter racista, todo de acuerdo con la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión;
9. Organizar Seminarios en los estados, con representantes del Poder Judicial y las Secretarías de Seguridad Pública locales, a efectos de fortalecer la protección contra la discriminación racial y el racismo;
10. Solicitar a los gobiernos de los estados la creación de comisarías especializadas en la investigación de delitos de racismo y discriminación racial;
11. Solicitar a los Ministerios Públicos de los estados la creación de Procuradurías Públicas Especializadas de los estados en la lucha contra el racismo y la discriminación racial;
12. Promover campañas publicitarias contra la discriminación racial y el racismo.

432. El 20 de diciembre de 2013, los peticionarios presentaron su respuesta a la solicitud de información de la CIDH del 7 de octubre de 2013. Los peticionarios indicaron que la situación de Simone André Diniz no había cambiado y que el Estado no había cumplido con las recomendaciones. Además, señalaron que el incumplimiento de la recomendación 3 por parte del Estado había obstruido el acceso a la educación de la víctima. Asimismo, destacaron como una debilidad de la legislación penal brasileña el hecho de que permita que los delitos cometidos con base en la raza puedan ser caracterizados como “injuria racial”. Informaron también que la investigación penal del caso había sido archivada.

433. El 9 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas. El 17 de diciembre de 2014, el Estado presentó su respuesta. Con relación a la recomendación 3, presentó un comprobante de beca integral a nombre de la víctima para cursar estudios en la Universidad Guarulhos (“Ofício da Reitoria nº 15/2014”) conforme lo acordado. En relación con la recomendación 5, destacó la aprobación del “Estatuto da Igualdade Racial”(ley 12.288/2010) y de la Ley 14.187 del Estado de São Paulo contra la discriminación racial. Además, el Estado informó que ha promovido, en la medida de lo posible, la adopción de medidas para desarchivar la investigación policial del caso. Sin embargo, ello no se había logrado hacerlo debido a la imposibilidad de cumplir con el requisito de presentación de nuevas pruebas. Asimismo, reconoció que el abuso policial y la discriminación por parte de los operadores de la justicia hacia las personas afro-descendientes continúan siendo un desafío. Al respecto, en el Informe Anual del 2014 la CIDH tomó nota de los avances en materia de políticas públicas, campañas de concientización y programas de asistencia a nivel federal y estadual, pero instó al Estado a informar acerca del impacto concreto de dichos avances en la aplicación efectiva de la ley anti-racismo. Asimismo la Comisión reiteró su preocupación respecto de la falta de una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos.

434. La CIDH reitera que para la elaboración del Informe Anual de 2009, en relación a las recomendaciones No. 1, 2 y 4, ambas partes coincidieron que la víctima recibió una indemnización de R\$ 36.000 (treinta y seis mil *reais*), por los daños morales y materiales sufridos, el 18 de marzo de 2008; y que el Gobernador de São Paulo reconoció públicamente la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos de la víctima durante ceremonia realizada el 19 de diciembre de 2007. Asimismo, en relación a la recomendación No. 12, el Estado, había señalado en el 2009 que dicha recomendación fue integralmente cumplida mediante el lanzamiento de la campaña “Racismo: si usted no denuncia, quien lo hará” por el Gobierno de São Paulo, el 13 de mayo de 2009; y de 3 campañas publicitarias nacionales promovidas por el

Gobierno Federal en 2008. Asimismo la CIDH observa que en la comunicación de los peticionarios recibida el 23 de diciembre de 2013, éstos reiteraron que la mayoría de recomendaciones aún no se han cumplido en su totalidad, con excepción de las recomendaciones 1, 2, 4 y 12. En este sentido, la CIDH declara el cumplimiento total de las recomendaciones 1, 2, 4 y 12.

435. El 24 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Los peticionarios no suministraron la información solicitada.

436. Por su parte, el Estado presentó su respuesta el 17 de diciembre de 2014. En relación a la recomendación No. 3 el Gobierno del Brasil señaló que, a través de la Oficina del Decano N° 15/2014, de fecha 17 de septiembre de 2014, el Decano Luciane Lucio Pereira de la Universidad de Guarulhos, informó que a solicitud de gobierno de Brasil, concedió beca completa a la Sra. Simone André Diniz para el Curso de Nutrición, elegido por la víctima, después de su aprobación en el proceso de selección; razón por la cual reiteró su solicitud de que la víctima sea informada acerca de la oferta de dicha institución educativa directamente por el peticionario o que sus datos de contacto sean compartidos al Estado para su notificación.

437. En relación a la recomendación No. 5, el Estado reiteró información sobre la aprobación del Estatuto de la Igualdad Racial (Ley 12.288 de 20 de julio de 2010) y la Ley del Estado de Sao Paulo No 14 187 2010, destacando que la creación de la Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial de la Presidencia de la República en 2003 significó una gran avance de adoptar medidas para revertir la situación de desigualdad, como las cuotas en la Educación, cuotas en el Servicio Público, la implementación de la Salud Integral para la Población Negra, y el plan Juventud Viva, entre otros. Vale reiterar que el Estatuto de la Igualdad Racial prevé la institución de programas de acción afirmativa en diversos sectores públicos y privados. Dicho estatuto prevé la Constitución del Sistema Nacional de Promoción de la Igualdad Racial, que tiene como objetivo descentralizar las políticas de igualdad racial. Con el fin de disminuir la violencia contra la juventud negra, el Gobierno Federal ha puesto en marcha en septiembre de 2012 el Plan de Viva la Juventud, que consiste en acciones de prevención para reducir la vulnerabilidad de los jóvenes. En cuanto al tema del trabajo doméstico, se aprobó la Enmienda Constitucional No. 66 que asegura 17 nuevos derechos a los trabajadores, ampliando garantías el sector laboral constituido en su mayoría por mujeres afrodescendientes.

438. En relación a la recomendación No. 6, el Estado reiteró lo indicado en informes presentados con anterioridad a la CIDH en cuanto a que, bajo la ley procesal del Estado, sólo se puede reabrir la investigación si se ponen en conocimiento de las autoridades nuevos hechos o nuevas pruebas; agrega que, el asunto fue remitido a la Fiscalía Quinta, que realizó la revisión correspondiente y determinó que la investigación debía archivar nuevamente, dada la ausencia de nuevas pruebas. En este sentido, el Estado reiteró que ha promovido las medidas y normas aceptables, legales y constitucionales, para desarchivar la investigación, sin embargo, dada la ausencia de nuevas pruebas, sería imposible reabrir la investigación a la luz de las posibilidades legales.

439. En relación a las recomendaciones No. 7 y 9, el Estado reafirmó lo expuesto en los informes del Estado en 2009 y 2010, sobre la formación que se está desarrollando en el marco del Plan de Juventud Viva, ya mencionado anteriormente.

440. En cuanto a la recomendación No. 8, el Estado estableció que dicho cumplimiento está directamente relacionada con la respuesta de la recomendación No. 12, sobre las iniciativas de publicaciones y campañas publicitarias orientadas a la protección y promoción, agregando que está abierto al diálogo con los peticionarios para la creación de nuevas estrategias y otras iniciativas que crean necesarias.

441. En relación a la recomendación No. 10 y 11, el Estado brasileño reiteró la información acerca de la cooperación entre el Fiscal General y el Defensor del Pueblo de Sao Paulo, para establecer un sistema de cooperación en los casos de denuncias en materia de derechos humanos. Aunque no existe un fiscal específico para los casos de racismo, el Estado brasileño destaca el excelente trabajo que ha hecho en la lucha contra todas las formas de discriminación racial contra las personas afrodescendientes.

442. El 2 de septiembre de 2015, el 11 de octubre de 2016 y 21 de agosto de 2017 la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes. Al momento del cierre de este informe no se ha recibido información por parte del Estado ni de los peticionarios. En este sentido, la Comisión invita a las partes a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las demás recomendaciones por parte del Estado.

443. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

#### **Caso 12.019, Informe No. 35/08, Antonio Ferreira Braga (Brasil)**

444. En el Informe No. 35/08 de fecha 18 de julio de 2008, la CIDH concluyó que el Estado brasileño era responsable de la violación, en perjuicio del señor Antonio Ferreira Braga, de los derechos a la integridad física, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, garantizados por los artículos 5, 7, 8(1) y 25 de la Convención Americana, en concordancia con las obligaciones generales que imponen el artículo 1(1) de la misma, e incumplió con la obligación de prevenir y sancionar todo acto de tortura cometido en su territorio, contemplada en los artículos 1, 6, 7 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura.

445. La Comisión formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:

1. Que adopte las medidas necesarias a fin de que se dé efecto legal a la obligación de investigar y sancionar efectivamente a los autores de la detención ilegal y las torturas infligidas a Antonio Ferreira Braga; en este sentido, el Estado debe asegurar un debido proceso penal en aras a evitar que la prescripción se invoque como causal de la extinción de la punibilidad penal respecto de delitos como la tortura, y ocurran demoras injustificadas en el trámite de ésta.
2. Que se investiguen las responsabilidades civiles y administrativas por el retraso irrazonable en el proceso penal respecto a las torturas infligidas a Antonio Ferreira Braga, especialmente de las autoridades judiciales que tuvieron conocimiento del expediente, a los efectos de sancionar adecuadamente a quienes resulten responsables, a fin de establecer si hubo negligencia en el actuar de dichas autoridades.
3. Que repare adecuadamente a Antonio Ferreira Braga por las violaciones a sus derechos humanos establecidas *supra*, incluyendo una indemnización.
4. Que se lleven a cabo capacitaciones a los oficiales de la policía civil a fin de proporcionarles conocimientos básicos sobre el respeto a los derechos fundamentales contemplados en la Convención Americana, especialmente en lo que se refiere al trato debido.

446. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El 3 de febrero de 2014, los peticionarios presentaron su respuesta. En relación con la recomendación 1, reportaron que no han recibido información sobre medidas para investigar y sancionar efectivamente a los autores de la detención ilegal y las torturas infligidas a la víctima. Adicionalmente, informaron que la prescripción sigue siendo invocada como causal de la extinción de la punibilidad penal respecto de delitos como la tortura.

447. Seguidamente, señalan que no han recibido información sobre el cumplimiento de las recomendaciones 2 y 3. Con respecto a la recomendación 4, notaron la aprobación de la ley 12847/2013 que instituyó el Sistema Nacional de Prevención y Combate a la Tortura, pero informaron que no tienen conocimiento sobre la realización de capacitaciones a la policial civil.

448. El 5 de diciembre de 2014, el 2 de septiembre de 2015, el 11 de octubre de 2016 y el 21 de agosto de 2017 la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes. Al momento del cierre de este informe no se ha recibido información por parte del Estado ni de los peticionarios. En este sentido, la Comisión invita a las partes a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las demás recomendaciones por parte del Estado.

449. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas sigue estando pendiente. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de estas recomendaciones.

### **Caso 12.310, Informe No. 25/09, Sebastião Camargo Filho (Brasil)**

450. En el informe No. 15/09 de 19 de marzo de 2009 la CIDH concluyó que el Estado brasileño incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida de Sebastião Camargo Filho, prevista en el artículo 4 de la Convención Americana, al no prevenir la muerte de la víctima el 7 de febrero de 1998, a pesar de conocer el riesgo inminente que corrían los trabajadores asentados en las haciendas *Boa Sorte* y *Santo Ângelo*, así como al dejar de investigar los hechos debidamente y sancionar a los responsables. Asimismo, la CIDH estableció que el Estado brasileño es responsable por la violación de las garantías judiciales y la protección judicial, de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, por la falta de debida diligencia en el proceso de investigación y recolección de evidencia, sin la cual los procesos judiciales no pueden llevarse adelante. Finalmente, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado incumplió la obligación general establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento.

451. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del Informe 25/09, la Comisión Interamericana recomendó al Estado brasileño:

1. Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad material e intelectual por el asesinato de Sebastião Camargo Filho.
2. Reparar plenamente a los familiares de Sebastião Camargo Filho, que incluya tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de derechos humanos determinadas en el presente informe.
3. Adoptar con carácter prioritario una política global de erradicación de la violencia rural, que contemple medidas de prevención y protección de comunidades en riesgo y el fortalecimiento de las medidas de protección destinadas a líderes de movimientos que trabajan por la distribución equitativa de la propiedad rural.
4. Adoptar las medidas efectivas destinadas a dismantelar los grupos armados ilegales que actúan en los conflictos relacionados con la distribución de la tierra.
5. Adoptar una política pública de lucha contra la impunidad de violaciones de derechos humanos de las personas involucradas en conflictos agrarios y que luchan por una distribución equitativa de la tierra.

452. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El Estado ha presentado información el 27 de diciembre de 2013. Señaló que la investigación está siendo llevada a cabo de forma completa, imparcial y efectiva. Informó que los acusados fueron juzgados con la participación popular por medio de jurados y que sus decisiones fueron respetadas. Asimismo, explicó que la reparación aún no había sido cumplimentada, pero que un grupo de trabajo se encontraría a cargo de ello.

453. La CIDH toma nota de las campañas públicas, los programas a nivel federal y nacional y las reformas en la policía con objetivo de proteger a las defensoras y a los defensores de derechos humanos en el contexto de la distribución de propiedad rural y promover sus derechos.

454. Sin embargo, las informaciones presentadas por los peticionarios en 2013, 2014 y 2015 contrastan con las presentadas por el Estado. Alegaron que había diversas fallas en la investigación, como por ejemplo la ausencia de denuncias contra decenas de personas que estarían involucradas en la comisión del delito. En relación a la responsabilidad del Estado respecto de la reparación, por un lado confirmaron la buena voluntad del Estado e informaron que ya habían acordado con el valor propuesto por el grupo de trabajo. Por otro lado, informaron que el pago aún no había sido realizado y que existían problemas con respecto a la forma del pago y derecho a los honorarios legales. Además, reiteraron que no había habido cambios positivos con relación a la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos involucrados en el conflicto agrario.

455. El 13 de julio de 2016, el Estado presentó comunicación mediante la cual destacó los avances en el cumplimiento de las recomendaciones. En relación a la recomendación 1, el Estado presentó información sobre las actuaciones procesales seguidas en los juicios penales en contra las cinco personas acusadas de la muerte de Sebastião Camargo; Augusto Barbosa, Osnir Sanches, Teissin Tina, Marcos Menezes Prochet y Tarcisio Barbosada, como responsables de la muerte del señor Camargo Filho. Por otro lado, el Estado manifestó, que se continuarán con los diálogos y las medidas que sean necesarias con los peticionarios, víctimas, jueces y fiscales, así como otras instituciones (estatales o federales), con el fin de lograr un mejor cumplimiento; y se procederá a nombrar, a través de la autoridad competente, una autoridad policial para continuar las investigaciones relacionadas con la muerte del señor Sebastião Camargo Filho. En relación a la recomendación 2, el Estado informó en lo que respecta a la reparación pecuniaria de la familia de la víctima, que el Fiscal General del Estado de Paraná presentó las conclusiones del Grupo de Trabajo a través del Decreto N° 8084 del Estado de 22 de abril de 2013. Al respecto, el Estado desglosó las acciones y observaciones realizadas con el propósito de calcular los montos a pagar correspondientes a los familiares de la víctima por daños materiales, lucro cesante, y daños morales.

456. En relación a la recomendación 3, el Estado reiteró la información presentada en informes anteriores sobre las políticas públicas implementadas para hacer frente a la violencia en el campo, especialmente en relación con el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia en el campo, la labor de la Comisión Nacional contra la Violencia en el Campo y las acciones de Ministerio Agrario Nacional de Desarrollo Agrario. Entre otras, el Estado destacó dentro de las medidas para proteger a los líderes sindicales que trabajan en situación de conflictos en el campo, el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos, con operaciones en el Estado de Paraná, desarrollado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia República (SDH); así como la labor de la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos de la SDH en el desarrollo e implementación de un sistema telefónico de recepción de quejas relativas a las amenazas contra defensores de derechos humanos.

457. En relación a la recomendación 5, el Estado reiteró la labor de la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia en el Campo, establecida por la Ordenanza Interministerial N° 1053, de 14 julio de 2006, para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos en situaciones de conflicto agrario. Además, reiteró las operaciones realizadas por la Policía Federal de dismantelar los grupos armados que operan en conflictos agrarios. Adicionalmente, en cuanto a la prevención y mediación de conflictos agrarios, el Estado recalzó la implementación de numerosas políticas públicas en manos del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y del Poder Legislativo.

458. El 11 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes. A la fecha de cierre del presente informe el Estado no ha presentado información adicional a la presentada anteriormente durante el 2016.

459. El 11 de noviembre de 2016, los peticionarios presentaron en relación a la recomendación 1, información sobre el estado actual de los procesos penales llevados en contra de las cinco personas acusadas de la muerte de Sebastião Camargo. Con respecto a Tarcisio Barbosa, los peticionarios destacaron que según

fue informado por la Fiscalía en 2013, se está en espera de juicio. Con respecto a Augusto Barbosa Costa, Osnir Sanches, Mark Prochet y Teissin Tina, los peticionarios informaron que cada uno fue presentado ante un jurado popular y condenado penalmente. Sin embargo, con respecto a Mark Prochet, recalcaron que la decisión, aún puede ser objeto de recurso de apelación.

460. En relación a la recomendación 2, los peticionarios informaron que el 26 de octubre de 2016, fue aprobado en segunda votación por la Legislatura Estado de Paraná, un proyecto de ley 450/2016, propuesto el 5 de septiembre de 2016 por los peticionarios, con el fin de permitir la compensación pecuniaria de los familiares de Sebastião Camargo Filho. A la fecha, el proyecto de ley está a la espera de sanción por el Gobernador, el Sr. Carlos Alberto Richa, para que pueda tener un efecto práctico a garantizar la prestación de los valores y una reparación efectiva.

461. En relación a la recomendación 3, los peticionarios indicaron que el año 2016 estuvo marcado por el aumento de la violencia y la represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente los vinculados a la lucha por la tierra. En particular, resaltaron que dicha situación demuestra que las medidas implementadas para reducir y prevenir conflictos de tierra, no han conseguido alcanzar el objetivo para el cual fueron creadas, sino todo lo contrario. Asimismo, resaltaron con preocupación que según los datos presentados por el Comité para el Examen Periódico Universal del Consejo Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 6 de octubre de 2016, entre enero y septiembre de 2015, hubo 35 muertes relacionados con la lucha en el campo. Al respecto, los peticionarios señalaron que, aunque la única manera de resolver definitivamente el conflicto es con la implementación de la reforma agraria, el Estado está reduciendo progresivamente los recursos asignados a los programas de relacionados con la tierra. Entre las medidas estatales que se han desarrollado resaltan la extinción del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), que ahora se fusionó con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), y el desmantelamiento del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) órgano responsable de la aplicación de la reforma agraria en el país. En ese sentido, los peticionarios consideraron que el debilitamiento de estos órganos aumenta la presión sobre los territorios, la intensificación del conflicto y sujeta a los defensores de los derechos humanos a una mayor vulnerabilidad.

462. En relación a la recomendación 4, los peticionarios destacaron que el Estado en su escrito de 2016 no hizo referencia a las medidas adoptadas para frenar, el desarme, el desmantelamiento y poner fin a los grupos armados ilegales que operan en los conflictos relacionados con la distribución de tierra. En ese sentido, manifestaron que no se adoptó ningún avance en el combate efectivo de estos grupos armados. Finalmente, en relación a la recomendación 5, los peticionarios destacaron que con los cambios en las políticas públicas por el nuevo gobierno, no existe seguridad jurídica de que estas medidas para la distribución equitativa de la tierra, y en ese sentido el Estado brasilero aún debe adoptar medidas efectivas destinadas a desmantelar los grupos armados ilegales que actúan en los conflictos relacionados con la distribución de la tierra, según lo recomendado por la Comisión.

463. El 9 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado la información solicitada.

464. La Comisión toma nota la información presentada por las partes y valora los pasos registrados a los efectos de pagar la compensación pecuniaria a las víctimas y espera información detallada al respecto. Asimismo, toma nota de los avances en materia de justicia, e insta al Estado a mantener informada a la CIDH sobre la investigación que sigue curso. Finalmente dada la seriedad de la información suministrada por los peticionarios, la CIDH insta al Estado a redoblar sus esfuerzos para dar cumplimiento y presentar información sobre la recomendación 5; así como a avanzar de manera ágil y expedita hacia el cumplimiento integral de los puntos pendientes. Con base en estas consideraciones, la Comisión concluye que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

**Caso 12.440, Informe No. 26/09, Wallace de Almeida (Brasil)**

465. En el informe No. 26/09 de 20 de marzo de 2009 la CIDH concluyó que el Estado brasileño es responsable por la muerte de Wallace de Almeida, un joven afrodescendiente, pobre y residente de una zona marginal, que fue herido por agentes de la policía y luego falleció desangrado sin haber sido auxiliado por dichos agentes; que la cuestión racial tanto como social, fue un ingrediente en este caso; que la investigación sobre el caso fue paupérrima; que no se cumplió con la diligencia debida, incluso hasta la fecha de aprobación del informe seguía paralizada e inconclusa, sin que se hubiera podido indicar a responsable alguno por la comisión de los hechos.

466. Como consecuencia de tales hechos, la Comisión Interamericana constató la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad y a la protección judicial consagrados, respectivamente, en los artículos 4, 5, 8, 24 y 25 de la Convención Americana. La responsabilidad estatal por violación a los artículos 4, 5 y 24 de la Convención Americana tiene como perjudicado a Wallace de Almeida, mientras que en lo concerniente a las violaciones a los artículos 8 y 25, en concordancia con el artículo 1(1) de la Convención Americana, los perjudicados son sus familiares. La Comisión Interamericana determina igualmente que se violaron las obligaciones impuestas por la Convención Americana en su artículo 1(1) de respetar y garantizar los derechos en ella consagrados; en su artículo 2, que establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno con el objeto de hacer efectivos los derechos contenidos en dicho cuerpo; y en su artículo 28, relativa a la obligación tanto del Estado Federal como del estado de Río de Janeiro, de cumplir las disposiciones contenidas en la Convención Americana.

467. Con fundamento en su análisis y las conclusiones del presente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:

1. Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos, por órganos judiciales independientes del fuero policial civil/militar, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad respecto a los hechos relacionados con el asesinato de Wallace de Almeida, y los impedimentos que vedaron se lleve a cabo tanto una investigación como un juzgamiento efectivos.
2. Reparar plenamente a los familiares de Wallace de Almeida, incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de derechos humanos determinadas en el presente informe, y en particular;
3. Adoptar e instrumentar las medidas necesarias para una efectiva implementación del artículo 10 del Código Procesal Penal Brasileño.
4. Adoptar e instrumentar medidas adecuadas dirigidas a los funcionarios de justicia y de la policía, a fin de evitar acciones que impliquen discriminación racial en los operativos policiales, en las investigaciones, en el proceso o en la condena penal.

468. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Los peticionarios presentaron respuesta a la solicitud de información de la CIDH el 6 de diciembre de 2013. Los peticionarios indican que el contexto de violencia policial y ejecuciones sumarias no ha cambiado en Río de Janeiro desde el homicidio de Wallace de Almeida en 1998. Señalan que las estadísticas muestran que todavía hay 2,4 muertes por día a manos de las fuerzas de seguridad en Brasil. La violencia policial y el uso de fuerza letal como violación sistemática de los derechos humanos es común y prueba la permanencia del sistema de seguridad que se empleaba en la década de los noventa. Por ejemplo, el proyecto lanzado en 2008 para crear *Unidades de Policía Pacificadora* (UPP) en todo el territorio nacional también ha sido tema de múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo la descripción de actos de tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas, en las zonas donde operan las UPP.

469. En relación con los aspectos de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, los peticionarios resaltan que el Estado brasileño solamente ofreció algunas reparaciones a la familia de Wallace de Almeida, en forma de indemnización. El Estado también organizó, el 25 de junio de 2009, una ceremonia en que el Gobernador del estado de Río de Janeiro anunció el pago de la indemnización a los familiares de Wallace de Almeida y ofreció una disculpa formal. No obstante, los peticionarios consideran que estas medidas no constituyen reparaciones suficientes, pues los familiares no pudieron hablar en la ceremonia formal y el pago de indemnización no basta para considerar plenamente cumplido este aspecto de las recomendaciones como. También destacan que tras 15 años del homicidio de Wallace de Almeida, los policías militares que perpetraron estos actos no han sido sancionados judicialmente y todavía prestan sus servicios en las fuerzas policiales. Hacen énfasis en las irregularidades y demoras en las investigaciones de estos tipos de ejecuciones, incluyendo la de Wallace de Almeida, y en el hecho de que la mayoría permanecen en la impunidad. También resaltan un pronunciamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas que describe la influencia de la discriminación racial en el sistema de derecho penal en Brasil, y que la creación y existencia de la *Secretaria Especial de Políticas de Promoção Racial* no es suficiente para resolver el problema del racismo en el país. Por lo tanto, consideran que el Estado brasileño no ha cumplido debidamente las recomendaciones contenidas en el Informe No. 26/09.

470. El 9 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas. El 12 de enero de 2015, los peticionarios presentaron su respuesta, en la que reiteraron que el Estado solamente había ofrecido indemnización a la familia de la víctima y que sigue incumpliendo las recomendaciones de esta Comisión. Específicamente en relación a las recomendaciones 1 y 3, los peticionarios indicaron que durante las investigaciones habían existido varias deficiencias que iban en contra de los estándares internacionales de derechos humanos, tales como: a) el hecho de que la reconstrucción de la escena del crimen solo ocurrió 8 años después de los hechos; b) solo se hizo una denuncia por homicidio en contra de un policía después de 12 años, y; c) los retardos en la programación de la audiencia ante la Corte que fue reprogramada 3 veces. Los peticionarios señalaron que la ausencia de justicia y el hecho que todavía formaran parte de la fuerza policial, policías presuntamente involucrados en los hechos del caso, constituyen un serio problema que permite la impunidad. Según los peticionarios, la impunidad de agentes de la policía ha sido vista como parte de la cultura dominante en Brasil. Alegaron que el presunto líder del grupo que ejecutó a Wallace fue promovido en el 2009, por lo cual ahora es un comandante de la policía. Según los peticionarios, actualmente este oficial es parte de un Escuadrón Elite de la Fuerza Militar, y es el responsable de las operaciones dentro de la comunidad, lo cual llevó a ejecuciones sumarias y brutalidad. En relación a la recomendación sobre la capacitación de los agentes del Estado, los peticionarios alegaron que el racismo sigue constituyendo la razón principal de violaciones a derechos humanos realizadas por la Corte y agentes de la policía en contra de las personas afro descendientes. Los peticionarios consideraron que es fundamental que el Estado continúe creando e implementando políticas públicas para abordar la problemática de la discriminación racial.

471. El 18 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes. Al momento de elaboración de este informe no se ha recibido información de ninguna de las partes.

472. El 11 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes. El 14 de noviembre de 2016, los peticionarios presentaron su respuesta, en la que insistieron que el contexto de violencia y ejecuciones sumarias en manos de la policía no ha cambiado en Río de Janeiro o en el Estado brasileño desde la ejecución de Wallace en 1998. En base a distintos datos, señalaron que aún existe un número de 2 muertos por día a causa de las fuerzas estatales de Seguridad Pública. En dicho contexto, debido a la participación de la policía, los casos de "resistencia", no son vistos como urgentes y se caracterizan por una falta de debida diligencia en la investigación. Los peticionarios informaron que en dichas investigaciones destacan como las principales deficiencias: (a) la falta de un interrogatorio adecuado a los agentes de policía implicados, (b) la falta de obtención de testigos civiles; (c) la no realización de ciertos exámenes forenses; (d) la lentitud de las investigaciones; (e) la falta de separación en la investigación de los agentes de policía implicados; y (f) la inexistencia de un registro de las acciones de investigación de la policía.

473. En relación al cumplimiento de las recomendaciones, los peticionarios manifestaron nuevamente su postura respecto al acto formal de disculpa pública celebrado el 25 de junio de 2009 y la

consecuente indemnización entregada a la familia de Almeida Wallace. En concreto, señalaron que resulta necesario, para considerar el cumplimiento de las reparaciones propuestas por la CIDH, la observación de otras medidas de reparación, como garantías de no repetición. En relación a las recomendaciones 1 y 3, los peticionarios destacaron que 18 años después de la ejecución de Wallace de Almeida, los agentes responsables de su muerte permanecen en el servicio policial. En relación al proceso penal llevado en contra de John Jacques Busnello, Edmar Medos Santos y Roberto Días de Oliveira, destacaron que los procedimientos acusatorios correspondientes se extinguieron sin que haya sido impuesta alguna sanción.

474. En relación a la recomendación 4, los peticionarios manifestaron que el racismo sigue siendo una de las principales razones de violaciones de los derechos humanos por parte del Estado brasileño, lo que demuestra la necesidad de la creación de políticas públicas específicas y eficaces en la materia. Sin embargo, debido al contexto de la inestabilidad política del país, señalaron que las políticas públicas para combatir la desigualdad racial son aún más amenazadas. En particular destacaron que uno de los primeros pasos del nuevo presidente fue extinguir mediante decreto, el Ministerio de la Mujer, Género, Derechos Humanos y Raza, y transferir el presupuesto a la propia Presidencia la República.

475. El 21 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado la información solicitada.

476. La Comisión toma nota y observa con preocupación la información aportada por los peticionarios, en particular la referida a la extinción del proceso penal llevado en contra de los presuntos responsables por la muerte de Wallace de Almeida. También resulta preocupante la información relativa a la recomendación 4, e insta al Estado a redoblar sus esfuerzos para el cabal cumplimiento de la misma. En este sentido, la CIDH insta al Estado a presentar información detallada, específica y actualizada en cuanto a las acciones desplegadas para dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas por la CIDH en el Informe No. 26/09, así como la documentación correspondiente.

477. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

#### **Caso 12.308, Informe No. 37/10, Manoel Leal de Oliveira (Brasil)**

478. En el Informe No. 37/10 de fecha 17 de marzo de 2010, la CIDH concluyó que el Estado brasileño era responsable de la violación, en perjuicio del señor Manoel Leal de Oliveira y sus familiares, de los derechos a la vida, a la libertad de pensamiento y expresión, a las garantías judiciales y a la protección judicial, respectivamente consagrados en los artículos 4, 13, 8 y 25 de la Convención Americana, todos relacionados con la obligación que impone el artículo 1.1 del mismo tratado.

479. La Comisión Interamericana formuló las siguientes recomendaciones al Estado brasileño<sup>83</sup>:

1. Reconozca públicamente su responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos determinadas por la CIDH en este informe.
2. Realice una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos, de forma de determinar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Manoel Leal de Oliveira.
3. Realice una investigación completa, imparcial y efectiva de las irregularidades ocurridas a lo largo de la investigación policial del homicidio de Manoel Leal de Oliveira,

---

<sup>83</sup> En relación con las recomendaciones 1 y 4, según lo indicado por la CIDH en su Informe Anual de 2012, los peticionarios especificaron que consideran que estas recomendaciones fueron cumplidas totalmente. (CIDH, Informe Anual 2012, Capítulo II.D. Párr. 328).

incluidos los actos que procuraron dificultar la identificación de sus autores materiales e intelectuales.

4. Indemnice a la familia de Manoel Leal de Oliveira por los daños sufridos. Dicha indemnización debe ser calculada conforme a los parámetros internacionales y debe ser por un monto suficiente para resarcir, tanto los daños materiales, como los daños morales sufridos por los familiares de la víctima.

5. Adopte, de forma prioritaria, una política global de protección del trabajo de los periodistas y centralice, como política pública, el combate a la impunidad en relación con el asesinato, la agresión y la amenaza a periodistas, a través de investigaciones exhaustivas e independientes de tales hechos, y sancione a sus autores materiales e intelectuales.

480. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Los peticionarios presentaron su respuesta a la solicitud de información de la CIDH el 1º de noviembre de 2013. Consideran que el Estado brasileño aún no ha cumplido la recomendación de reabrir el caso del homicidio de Manoel Leal de Oliveira e identificar y sancionar a sus autores intelectuales. También informaron que el 18 de octubre de 2012, el *Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana* adoptó la resolución número 7, mediante la cual estableció un grupo de trabajo encargado de los derechos humanos y los profesionales de la comunicación en Brasil, con el fin de analizar el contexto actual en la materia y proponer acciones para prevenir la violencia contra estos profesionales. Mediante la resolución número 6, adoptada por la *Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da República*, se recomendó la protección especial de periodistas y profesionales de la comunicación durante su cobertura de protestas e incluyó directrices relativas al uso de armas menos letales por las fuerzas de seguridad pública. La Secretaria también organizó un coloquio en la *Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro* (PUC-RJ), para debatir la seguridad de los profesionales de la comunicación y la importancia de erradicar la impunidad cuando sufren violencia.

481. El 9 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas. El 21 de enero de 2015, los peticionarios presentaron su respuesta, en la que reiteraron que el Estado aún no ha cumplido la recomendación de reabrir el caso del homicidio de la víctima y determinar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales. No se ha recibido información por parte del Estado.

482. El 3 de septiembre de 2015, el 11 de octubre de 2016 y 21 de agosto de 2017, la CIDH solicitó nuevamente información actualizada sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado la información solicitada.

483. Teniendo en cuenta lo anterior, la CIDH recuerda como en su Informe Anual del año 2012, fue valorada la información aportada por los peticionarios el 18 de diciembre de 2012, en la cual reconoció el cumplimiento respecto a las recomendaciones No. 1 y 4, toda vez que el 21 de septiembre de 2009, el Estado había reconocido su responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos establecidas en este informe; y el 7 de abril de 2010, el Estado había efectuado un pago de R\$ 100,000 (mil reales) a la familia de la víctima por los daños sufridos.

484. Por lo anterior, la CIDH considera que el Estado ha dado cumplimiento a las recomendaciones No. 1 y 4. En consecuencia, la CIDH concluye que el nivel de cumplimiento de las recomendaciones es parcial y seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes No. 2, 3 y 5.

#### **Caso 12.213, Informe No. 7/16. Aristeu Guida Da Silva y Familia, (Brasil).**

485. El 23 de septiembre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recibió una petición en representación de la Sociedad Interamericana de Prensa, en la cual alegó la responsabilidad de la República Federativa de Brasil por las violaciones de derechos humanos en perjuicio del periodista Aristeu

Guida Da Silva y sus familiares. Según el peticionario, el señor Guida da Silva fue asesinado en mayo de 1995 por motivos relacionados con el ejercicio del periodismo. Alegó que el Estado no adoptó medidas para proteger la vida de la presunta víctima y que la falta de diligencia del mismo en investigar, juzgar y sancionar a los responsables de dicho crimen ha resultado en la impunidad de los asesinos y ha inhibido la labor de otros periodistas en la región de los hechos.

486. El 22 de octubre de 2003, la CIDH aprobó el informe N° 73/03, mediante el cual declaró la admisibilidad de la petición, y tras analizar los méritos del caso, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8, 13 y 25 de la Convención Americana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el 17 de julio de 2016 el Informe de Fondo de este caso en el que se le realizó al Estado Brasileño las siguientes recomendaciones:

1. Realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable que permita esclarecer las circunstancias del asesinato del Aristeu Guida da Silva y determinar las responsabilidades correspondientes.
2. Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso.
3. Adoptar las medidas necesarias para prevenir los crímenes contra las personas por razón del ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento y expresión y proteger a aquellos periodistas que se encuentran en riesgo especial por el ejercicio de su profesión. En este sentido, la CIDH valora la existencia del Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos y del establecimiento del Grupo de Trabajo “Derechos Humanos de los Profesionales de Comunicación en Brasil”. La CIDH llama al Estado a seguir adoptando medidas para fortalecer el programa nacional de protección y para garantizar la efectiva inclusión de los y las periodistas en este marco. Asimismo, insta al Estado a garantizar que dicho programa tenga la capacidad de articularse con las entidades estatales y municipales para hacerse efectivo para las personas en todo el territorio nacional, incluido el Estado de Rio de Janeiro y el municipio de São Fidélis.
4. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material y moral, así como la reivindicación de la labor del señor Aristeu Guida da Silva como periodista a través de la difusión, especialmente en los municipios del Estado de Rio de Janeiro, en un formato pedagógico de los estándares interamericanos aplicables respecto a los deberes de los Estados en materia de prevención, protección y procuración de justicia en casos de violencia cometida contra periodistas en razón del ejercicio a su derecho a la libertad de expresión.

487. Según lo indicado por la CIDH en su Informe de Fondo, mediante carta de 1 de diciembre de 2014, el Estado de Brasil proporcionó su respuesta sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° 39/14. Con respecto a las recomendaciones específicas, Brasil proporcionó las siguientes respuestas:

Recomendación N° 1: el Estado reiteró la información presentada en la etapa de fondo sobre los procesos penales seguidos y reiteró que cumplió con su obligación de medio de investigar. Asimismo, Brasil invocó el carácter de cosa juzgada de las decisiones adoptadas por los tribunales internos, mediante las cuales se absolvió de toda responsabilidad a tres acusados del asesinato de Aristeu Guida da Silva. Al respecto, explicó que el principio de *ne bis in idem* establecido en el artículo 8.4 de la Convención Americana constituye “un gran desafío” para cumplir con esta recomendación. Adicionalmente, indicó que corresponde en esta etapa evaluar si conforme a la legislación interna aún cabría algún tipo de “recurso procesal”.

Recomendación N° 2: El Estado indicó que compete también averiguar si las fallas procedimentales ocurrieron, “y en caso positivo”, si cabría algún tipo de responsabilidad de los agentes estatales involucrados. Asimismo, indicó que eventuales sospechas respecto de omisiones o negligencia por parte de las autoridades en las investigaciones llevadas a cabo “deben siempre basarse en datos objetivos y suficientemente concretos para configurar violaciones al debido proceso legal”.

El Estado afirmó que necesita “más tiempo de análisis y debida planificación” para evaluar “si y de cual manera puede dar cumplimiento” a las recomendaciones 1 y 2 del informe N° 39/14. Si bien expresó que informaría a la Comisión acerca de sus esfuerzos en su próximo informe, el Estado no aportó información sobre las medidas concretas que adoptaría para avanzar en su cumplimiento.

Recomendación N° 3: El Estado describió el Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos y sus logros en sus 10 años de existencia, los mecanismos utilizados para la identificación de periodistas como defensores de derechos humanos para que puedan acceder al programa, y las medidas adoptadas por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para la protección de periodistas. Indicó que este Programa ya se encontraría implementado en ocho estados brasileños, y en los estados donde todavía no se encontraría implementado, actuaría el equipo federal. Además, informó que en 2014 el Grupo de Trabajo “Derechos Humanos de los Profesionales de Comunicación en Brasil” publicó su informe final, en el cual se incluye la propuesta de creación del Observatorio de la Violencia contra los Comunicadores [*Observatório de Violência contra Comunicadores*]. Igualmente, el Estado hizo referencia a la Resolución No 06 del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH) de 2013, en la cual se expiden recomendaciones para la garantía de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones y eventos públicos. En su artículo 5º, la mencionada Resolución abordaría el libre ejercicio de los periodistas y comunicadores y su rol en este contexto. Según el Estado, se habrían hecho esfuerzos por parte de la Unión para que el estado de Rio de Janeiro adhiriera a dicho instrumento. Asimismo, indicó que el referido estado ya había adherido a la Resolución No 08 del CDDPH de 2012, que prohíbe la utilización de los formularios de resistencia al arresto [*autos de resistência à prisão*], resistencia seguida de muerte [*resistência seguida de morte*], lo que, según el Estado, evitaría la ocurrencia de la violencia institucional.

Recomendación N° 4: el Estado indicó que por la iniciativa de la Secretaría Nacional de Justicia y otros órganos, se había realizado la traducción al portugués de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con un tomo específico sobre el derecho a la libertad de expresión. Respecto de las medidas de reparación pecuniaria y no pecuniaria a favor de los familiares del señor Guida da Silva, el Estado señaló que estudiará “su viabilidad y la mejor manera” de promoverlos, e indicó que presentaría mayor información sobre medidas de reparación en su próximo informe. El Estado no aportó información concreta sobre las medidas adoptadas a reivindicar la labor de la víctima en el caso.

488. Al respecto, la Comisión indicó en su Informe de Fondo que con relación a la primera recomendación consistente en realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable que permita esclarecer las circunstancias del asesinato del Aristeu Guida da Silva y determinar las responsabilidades correspondientes; así como con respecto a la recomendación relativa a disposición de medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso, el Estado indicó que necesitaría de “más tiempo de análisis y debida planificación” para evaluar “si y de cual manera puede dar cumplimiento” a dichas recomendaciones. Sin embargo, no aportó información sobre las medidas concretas que adoptaría para avanzar en su cumplimiento.

489. En su tercera recomendación, la CIDH solicitó al Estado adoptar medidas necesarias para prevenir los crímenes contra las personas por razón del ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento y

expresión y proteger a aquellos periodistas que se encuentran en riesgo especial por el ejercicio de su profesión. Al respecto, el Estado informó de manera genérica que ha tomado una serie de medidas para prevenir crímenes contra personas como consecuencia del ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, así como proteger a aquellos periodistas que se encuentran en riesgo especial por el ejercicio de su profesión. En particular, informó acerca del Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos.

490. La Comisión tomó nota de la información aportada por el Estado, sin embargo, destacó que hasta la fecha del presente informe no cuenta con información detallada sobre medidas para fortalecer dicho programa y garantizar la efectiva inclusión de los y las periodistas en este marco. Asimismo, el Estado brasileño no aportó información sobre las medidas a fin de garantizar que dicho programa tenga la capacidad de articularse con las entidades estatales y municipales para hacerse efectivo para las personas en todo el territorio nacional, incluido el Estado de Rio de Janeiro y el municipio de São Fidélis.

491. Finalmente, la CIDH recomendó al Estado reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material y moral, así como la reivindicación de la labor del señor Aristeu Guida da Silva como periodista a través de la difusión, especialmente en los municipios del Estado de Rio de Janeiro, en un formato pedagógico de los estándares interamericanos aplicables respecto a los deberes de los Estados en materia de prevención, protección y procuración de justicia en casos de violencia cometida contra periodistas en razón del ejercicio a su derecho a la libertad de expresión. Con respecto a dicha recomendación, el Estado informó que estudiará la “viabilidad y la mejor manera” de promover dichas reparaciones a favor de las víctimas. Sin embargo, no proporcionó información concreta sobre medidas tendientes a la reivindicación de la labor del señor Aristeu Guida da Silva como periodista.

492. Por lo anterior, la Comisión concluyó en su Informe de Fondo No. 7/16 que el Estado de Brasil es responsable por la violación de los derechos a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión, consagrados en los artículos 4 y 13 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1, en perjuicio del señor Guida da Silva y de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 5, 8 y 25 del mismo instrumento, en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de sus familiares. En ese sentido la Comisión reiteró las recomendaciones *supra*.

#### **Caso 12.586, Informe No. 78/11, John Doe y otros (Canadá)**

493. En el Informe 78/11 fechado el 21 de julio de 2011, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de las violaciones de los Artículos XVII y XXVII de la Declaración Americana. Por consiguiente, la CIDH formuló las siguientes recomendaciones a Canadá:

1. Adopte medias para identificar a los John Does y verifique su situación y condición, a fin de procesar cualquier pedido pendiente de asilo que éstos deseen tramitar.
2. Haga una total reparación a los John Does por las violaciones establecidas, incluyendo los perjuicios materiales pero no limitándose únicamente a los mismos.
3. Adopte las medidas legislativas necesarias o cambios administrativos para asegurar que los solicitantes de refugio reciben el debido proceso al presentar sus solicitudes de asilo. Si se continúa con la aplicación de la política de devolución directa, esto requerirá que se deberán obtener las garantías necesarias de las autoridades de inmigración del tercer Estado, de que las personas que sean devueltas directamente podrán retornar al Canadá para asistir a sus entrevistas de determinación de la condición de refugiado. A su vez, el Estado deberá realizar análisis individualizados basados en la legislación de inmigración del tercer Estado para determinar si las personas que son devueltas directamente tendrían acceso a solicitar asilo en dicho Estado y que no se enfrentarán con impedimentos legales automáticos. En aquellos casos en que hubiere un impedimento para solicitar asilo, éstos no podrán ser devueltos en forma directa. Finalmente, cualquier política de “devolución directa”

deberá incluir un análisis individualizado para determinar si hay un riesgo de una posterior devolución (*refoulement*) de algún solicitante de asilo que ha sido devuelto al tercer Estado.

4. Adopte las medidas legislativas o de otro tipo, necesarias para asegurar que los solicitantes de asilo tiene acceso a recursos internos adecuados y eficaces para impugnar las devoluciones directas antes que ocurran.

494. El 20 de diciembre de 2012, el Estado reportó en relación con las recomendaciones No. 1 y 2 *supra*, que era imposible identificar a los John Does primero y segundo porque siempre han sido, y siguen siendo, anónimos. Respecto del John Doe tercero, Canadá observó que todavía no tiene certeza de su identidad. En cuanto a la recomendación 3 *supra*, Canadá explicó que ya había dado cumplimiento a ella, ya que la política de usar la devolución directa fue revisada, y ahora sólo se permiten las devoluciones directas en limitadas circunstancias. Desde dicha revisión, el Estado alegó que ninguna persona que llegara a Canadá en busca de asilo había sido o sería encaminada de vuelta a los Estados Unidos para esperar a que se le haga entrevista en Canadá a no ser que los Estados Unidos garantice que a las personas devueltas directamente se les permita regresar a Canadá para su entrevista. Por último, en relación a la recomendación No. 4 *supra*, el Estado reiteró que sus recursos legales vigentes son adecuados y efectivos, por lo que no se requerían otras medidas para la implementación de esta recomendación.

495. El 19 de abril de 2013, los peticionarios manifestaron que con posterioridad a la información presentada en las comunicaciones de 29 de septiembre de 2010, 9 de mayo de 2011 y 20 de diciembre de 2012, el Estado no había aportado nueva información.

496. El 7 de octubre de 2013, 4 de diciembre de 2014, el 2 de septiembre de 2015, el 27 de septiembre de 2016, y el 9 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas en los últimos tres años.

497. La Comisión recuerda al Estado de Canadá que es su obligación adoptar todas las medidas para localizar a los John Does y lo invita a presentar información sobre las acciones adoptadas para localizarlos e identificarlos. Con base en estas consideraciones, la Comisión concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones arriba aludidas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

**Caso 11.661, Informe No. 8/16. Manickavasagam Suresh, (Canadá).**

498. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición fechada el 26 de julio de 1996, a través de la cual se alega que el Gobierno de Canadá es internacionalmente responsable de la detención arbitraria de Manickavasagam Suresh, así como por la negación de su derecho a un juicio imparcial y la violación de su derecho a un igual tratamiento ante la ley.

499. El 13 de abril de 2016, la Comisión aprobó el informe No. 8/16 sobre el fondo de este caso, con las siguientes recomendaciones al Estado:

1. Que otorgue al señor Suresh una reparación integral que incluya una indemnización y medidas de satisfacción.
2. Que adopte medidas legislativas y de otra índole para asegurar que las personas sometidas a la certificación de seguridad tengan acceso sin demora a una rápida supervisión judicial de su detención, no sean sometidas a una detención obligatoria indefinida y obtengan igual acceso a la revisión judicial de su detención a intervalos razonables.

500. Según lo indicado por la Comisión en el Informe de Fondo, el estado Canadiense presentó el 13 de marzo de 2015, respuesta al Informe 113/14, en la cual señaló que “aunque la Declaración Americana describe obligaciones vinculantes, las opiniones y recomendaciones de la Comisión en sí no son vinculantes”.

501. El Estado afirmó que el señor Suresh no tiene derecho a ningún tipo de reparación, sea pecuniaria o de otro tipo, porque a) es un extranjero que se había determinado que era inadmisibles en Canadá debido a que constituía un riesgo para la seguridad nacional en razón de su calidad de integrante del órgano ejecutivo de una organización terrorista y a sus actividades de recaudación de fondos para una organización terrorista; b) el derecho interno no prevé el pago de una indemnización pecuniaria; c) el señor Suresh fue detenido a fin de ser deportado de conformidad con una ley que era constitucional en el momento de su detención, ya que parte de la misma fue declarada inconstitucional en 2007. El Estado argumentó que no hay ninguna base en el derecho o en las normas de equidad para que pudiera considerarse que tiene derecho a una indemnización pecuniaria.

502. Igualmente reiteró que, las disposiciones del certificado de seguridad de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados (IRPA) fueron modificadas sustancialmente en 2007 y 2008 (proyecto de ley C- 3). El Estado señaló que se eliminó la detención obligatoria de extranjeros nombrados en certificados de seguridad y explicó que la detención puede efectuarse solo con una orden de arresto y si el Ministro de Seguridad Pública y el Ministro de Ciudadanía e Inmigración están convencidos de que hay motivos razonables para creer que la persona constituye un peligro para la seguridad nacional. El Estado argumentó que, como consecuencia de las enmiendas, los extranjeros ahora reciben el mismo trato que los residentes permanentes que no son ciudadanos.

503. Asimismo, el Estado informó que por medio del proyecto de ley C-3 también se modificó la IRPA a fin de disponer el nombramiento de un defensor especial para que represente los intereses de una persona designada en un certificado de seguridad durante las partes de la audiencia realizadas a puerta cerrada. El Estado señaló que los defensores especiales son abogados con acreditación de seguridad que actúan con independencia del gobierno y de los tribunales, a los cuales se les otorgó acceso a información confidencial de seguridad con la condición de que no la divulguen a nadie más, ni siquiera a la persona designada en el certificado y a su abogado. Además, informó que las enmiendas introdujeron el derecho de apelar ante la Corte Federal de Apelación el fallo definitivo de la Corte Federal sobre la revisión de la detención o su razonabilidad.

504. Afirmó que, al igual que las apelaciones de revisiones judiciales relacionadas con otros asuntos de inmigraciones, el derecho de apelación está supeditado a que la Corte Federal plantee una cuestión certificada de importancia general para la apelación, y las apelaciones pueden continuar hasta llegar a la Corte Suprema de Canadá si se las acepta.

505. A su vez señaló que, en mayo de 2014, la Corte Suprema de Canadá afirmó que el proceso de certificación de seguridad, en su forma actual es constitucional y acorde con la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. La Corte sostuvo que las disposiciones no infringen el derecho de la persona afectada a un proceso imparcial. Asimismo, el Estado informó que el uso de certificados de seguridad sigue siendo excepcional en el régimen de inmigraciones de Canadá, que actualmente hay tres casos activos y que ninguna de esas tres personas está detenida.

506. El Estado informó asimismo que el señor Suresh ya no está sometido al proceso de certificación de seguridad y que actualmente es sujeto de un procedimiento ante la Junta de Inmigración y Refugiados a fin de determinar si puede ser admitido en Canadá.

507. Concluyó así que han tomado medidas adecuadas para abordar la situación del señor Suresh para prevenir violaciones de los derechos de otras personas que estén sometidas al proceso de certificación de seguridad o vayan a estarlo; y por tanto, solicitó que la Comisión cerrara el caso.

508. El 18 de septiembre de 2015, los peticionarios presentaron sus observaciones.

509. Con respecto a la primera recomendación y a la información proporcionada por el Estado, los peticionarios confirmaron que el derecho canadiense no proporcionaba una base en la legislación interna para otorgar el pago de reparaciones al señor Suresh por sus años de detención sin revisión porque el régimen jurídico que se le aplicó estuvo en vigor hasta que la Corte Suprema lo derogó por medio de su resolución de 2007 en el caso Charkaoui vs. MCI. Los peticionarios alegaron que ello no niega la obligación de Canadá de proporcionar reparaciones justas a la luz de sus obligaciones en el marco de la Declaración Americana. Agregan que, de acuerdo con la Declaración Americana, Canadá no puede denegarle reparaciones por el hecho de ser extranjero.

510. Con respecto a la segunda recomendación, los peticionarios informaron que, como la Corte Suprema determinó en 2008 que la detención obligatoria era inconstitucional, ahora se realiza una audiencia dentro de las 48 horas siguientes a la detención y cada seis meses con posterioridad si la detención continúa. Es decir, la detención obligatoria, en términos absolutos, ya no existe. Una Corte Federal determinó que, aunque la carga de la justificación de la detención recae en el gobierno, una persona que no es puesta en libertad tras una revisión de su detención debe probar que hay razones imperiosas para dejar sin efecto la decisión anterior de detenerla.

511. Los peticionarios agregaron que sigue habiendo diferencias en el trato con respecto a las detenciones. Los extranjeros y residentes permanentes que están sujetos a certificados de seguridad son objeto de una revisión dentro de las 48 horas siguientes a la detención y cada seis meses con posterioridad. Los demás extranjeros y residentes permanentes contra quienes se formulan las mismas acusaciones pero ante la División de Inmigración de la Junta de Inmigración y Refugiados son objeto de una revisión dentro de los plazos de 48 horas, 7 días y 30 días. Argumentaron que no hay una justificación evidente de la diferencia en la frecuencia de la revisión.

512. Igualmente afirmaron que, contrariamente a lo que dice el Estado, no hay derecho a apelar ante la Corte de Apelación la decisión definitiva de la Corte Federal con respecto a las revisiones de la detención o su razonabilidad, porque el juez debe afirmar que hay una cuestión certificada de importancia general para que la persona pueda apelar la decisión. Los peticionarios sostuvieron que, en ese sentido, el acceso a una Corte de Apelación es discrecional.

513. Los peticionarios informaron que la División de Inmigración ordenó la deportación del señor Suresh el 16 de septiembre de 2015 sobre la base de que había motivos razonables para creer que era miembro del LTTE. Indicaron que fue hallado culpable de complicidad en delitos de guerra y delitos de lesa humanidad debido a las actividades ilícitas que llevó a cabo en Canadá en apoyo al LTTE, con cuyos dirigentes se mantenía en contacto por teléfono. Los peticionarios afirmaron que el caso del señor Suresh no ha concluido en Canadá y que es probable que sea objeto de otro procedimiento de deportación a Sri Lanka, a pesar del peligro que ello representa para su vida, su libertad y la integridad de su persona.

514. En su Informe de Fondo No 8/16, la Comisión tomó nota de la información por el Estado, sin embargo con base en los hechos y la información proporcionada, la CIDH concluyó que a la fecha el Estado no había cumplido a cabalidad con recomendaciones realizadas. Es por tanto que, la CIDH continuará evaluando el cumplimiento con las recomendaciones reiteradas en este informe hasta que las mismas sean implementadas en forma total.

#### **Caso 11.771, Informe No. 61/01, Samuel Alfonso Catalán Lincoleo (Chile)**

515. En el Informe No. 61/01 de fecha 16 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado chileno había violado, respecto a Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, los derechos a la libertad personal, a la vida, y a la seguridad personal, consagrados en el artículo I de la Declaración Americana y en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana. Igualmente, la CIDH concluyó que el Estado chileno violó en perjuicio de los familiares del señor Catalán Lincoleo los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Asimismo, la CIDH reiteró que el Decreto-Ley No. 2.191 de auto amnistía, dictado en 1978 por el pasado régimen militar de Chile, es incompatible con los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana. Lo anterior, como consecuencia de la

desaparición forzada de Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, de 29 años de edad, quien era un técnico agrícola con vinculaciones al Partido Comunista cuando fue detenido el 27 de agosto de 1974 en su domicilio de la ciudad de Lautaro, Chile, por integrantes de Carabineros, militares y civiles. Los familiares acudieron a la justicia chilena en 1979 con una denuncia de los hechos, pero el trámite fue archivado en octubre de 1981 por aplicación del Decreto-Ley 2.191 de 1978, que dispuso la amnistía por las violaciones cometidas desde el golpe de Estado de septiembre de 1973 en Chile. En 1992 se intentó una nueva acción judicial, que culminó en noviembre de 1995 con el sobreseimiento definitivo por aplicación del Decreto-Ley de auto amnistía citado. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Chile decidió un recurso de casación sobre el fondo del Caso con su fallo de 16 de enero de 1997, que declaró la prescripción de la acción legal.

516. La CIDH formuló al Estado chileno las siguientes recomendaciones:

1. Establecer la responsabilidad por el asesinato de Samuel Alfonso Catalán Lincoleo mediante un debido proceso judicial, a fin de que sean efectivamente sancionados los culpables.
2. Adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana, para lo cual deberá dejar sin efecto el Decreto-Ley N° 2.191 de 1978.
3. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de la víctima reciban una adecuada y oportuna reparación, que comprenda la plena satisfacción por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas, así como el pago de una justa indemnización compensatoria por los daños patrimoniales y extra patrimoniales, incluyendo el daño moral.

517. En su Informe Anual de 2010, la CIDH dio por cumplida la recomendación 3 del Informe No. 61/01<sup>84</sup>.

518. Mediante nota del 13 de marzo de 2009, el Estado chileno informó con respecto a la primera recomendación, que con fecha 29 de enero de 2001, se presentó, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, querrela contra el Sr. Augusto Pinochet Ugarte y otros, por los delitos de secuestro calificado, asociación ilícita e inhumación ilegal de personas, entre ellas, Samuel Catalán Lincoleo, cuya causa quedó registrada bajo el rol No. 2182-98. El 25 de agosto de 2003 se sobreseyó total y definitivamente la causa, con el fundamento de que el 4º Juzgado Militar de Valdivia ya había declarado anteriormente la cosa juzgada por esos mismos hechos. El 31 de agosto de 2005, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, aprobó el sobreseimiento definitivo de la causa.

519. Mediante nota del 30 de diciembre de 2010, el Estado refirió que el Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Temuco, sustanció la causa Rol N° 113.958 (Catalán Lincoleo), la cual se encontraría en estado procesal de sumario, sin que nadie se encuentre sometido a proceso o en calidad de procesado. El Estado reportó que estarían aún pendientes diligencias de investigación a ser realizadas. Aclaró que en dicha causa procesal, el Programa Continuación Ley N° 19.123 del Ministerio del Interior es parte coadyuvante. En subsiguientes comunicaciones de fechas 17 de enero de 2012, 10 de enero de 2013, y 9 de enero de 2014 el Estado reiteró la información anterior, indicando que el proceso aún se encontraría en etapa sumarial, subsistiendo las diligencias pendientes de ser realizadas y sin que se haya imputado a las personas presuntamente responsables por los hechos. Al respecto, la CIDH invita al Estado a brindar información específica sobre los avances de las diligencias pendientes en esta investigación

520. En relación con la segunda recomendación, relativa a la adecuación de la legislación interna, el Estado informó que había sido presentada una moción parlamentaria destinada a interpretar el artículo 93 del Código Penal, con el objeto de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Almonacid Arellano vs. Chile". Dicha sentencia de la Corte Interamericana le ordenó al Estado chileno adecuar su legislación, de tal manera que el decreto en cuestión no constituya un obstáculo para la

<sup>84</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2010, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 270. Disponible en: <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/cap3.D.4sp.htm>

investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el periodo 1973-1978. Para la fecha de su comunicación, el Estado informó que el proyecto legislativo, por medio del cual se busca excluir de la extinción de responsabilidad penal a los crímenes de lesa humanidad y de guerra contemplados en los instrumentos internacionales ratificados por Chile, se encontraba en primer trámite constitucional en el Senado y que se encontraba en tablas para ser analizado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

521. En su comunicación del 30 de diciembre de 2010, el Estado informó que el proyecto legislativo se encontraba en segundo trámite constitucional en el Senado, al que fue remitido el 6 de mayo de 2009. Informó que se habría presentado otro proyecto de ley tendente a establecer un nuevo canal de revisión en caso de violaciones a los derechos humanos, el cual se encontraría en primer trámite constitucional. El Estado no ha reportado avances en cuanto a esta recomendación en sus reportes de 17 de enero de 2012 y 9 de enero de 2014. Si bien hasta el momento ha brindado detalles sobre el contenido de los dos proyectos de ley, sólo ha reiterado que estos continúan en las mismas etapas mencionadas en el 2010.

522. En vista de lo anterior, la CIDH reitera con preocupación que su recomendación de establecer la responsabilidad por el asesinato de Samuel Alfonso Catalán Lincoleo no ha sido atendida, y que a pesar del tiempo transcurrido la causa Rol N° 113.958 permanece en la etapa del sumario sin que haya persona alguna procesada. Finalmente, la Comisión reitera que a pesar de los esfuerzos realizados para adecuar su legislación a la Convención Americana, la cual constituye una obligación internacional del Estado pendiente de cumplimiento, durante el 2011 y 2012 no se registraron avances en los tramites constitucionales de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo al Congreso desde 2009. Dado que la adecuación de la legislación interna a la Convención Americana requiere del concurso de todos Poderes Públicos del Estado chileno, se insta al poder legislativo a dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH y a brindar información específica sobre las diligencias pendientes en la causa Rol 113.958 y las acciones que ha realizado para impulsar el avance de esta investigación.

523. El 1 de diciembre de 2014, el 15 de septiembre de 2015, el 27 de septiembre de 2016 y el 10 de agosto de 2017, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento. Las partes no suministraron la información solicitada.

524. La Comisión concluye que el Estado chileno ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 11.725, Informe No. 139/99, Carmelo Soria Espinoza (Chile)**

525. En el Informe No. 139/99 de fecha 19 de noviembre de 1999, la CIDH concluyó que el Estado violó el derecho a la libertad e integridad personal y a la vida de Carmelo Soria consagrado en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión también concluyó que el sobreseimiento definitivo de las causas criminales abiertas por la detención y desaparición de Carmelo Soria Espinoza afecta el derecho a la justicia de los peticionarios y que como consecuencia, el Estado chileno ha violado sus obligaciones internacionales consagradas en los artículos 8 y 25, 1(1) y 2 de la Convención Americana; que el Decreto Ley 2.191 de 1978 de auto amnistía es incompatible con la Convención Americana, ratificada por Chile el 21 de agosto de 1990; que la sentencia de la Corte Suprema de Chile que declara constitucional y de aplicación obligatoria el citado Decreto Ley N° 2.191, cuando ya había entrado en vigor para Chile la Convención Americana, viola los artículos 1(1) y 2 de aquélla; que el Estado chileno no ha dado cumplimiento al artículo 2 de la Convención Americana por no haber adaptado su legislación a las disposiciones de la Convención; que ha dejado de cumplir con el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas por haber adoptado el Decreto Ley 2.191 y porque sus órganos de administración de justicia no han sancionado a los autores de los delitos cometidos contra Carmelo Soria. El señor Carmelo Soria Espinoza, de 54 años de edad, y de doble nacionalidad española y chilena, se desempeñaba como Jefe de la sección Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) en Chile, organismo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), perteneciente al sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que el señor Soria tenía el estatus de funcionario internacional.

526. El 19 de noviembre de 1999, la Comisión Interamericana formuló al Estado chileno las siguientes recomendaciones:

1. Establecer las responsabilidades de las personas identificadas como culpables del asesinato de Carmelo Soria Espinoza mediante un debido proceso judicial, a fin de que sean efectivamente sancionados los responsables y se garantice eficazmente a los familiares de la víctima el derecho a la justicia consagrado en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.
2. Dar cumplimiento a las disposiciones del Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, de modo que las violaciones de derechos humanos de los funcionarios internacionales sujetos a protección internacional, como el asesinato del señor Carmelo Soria Espinoza en su condición de funcionario de CEPAL, sean debidamente investigadas y los culpables efectivamente sancionados. En el Caso que el Estado chileno considere que no puede cumplir con su obligación de sancionar a los responsables, debe en consecuencia aceptar la habilitación de la jurisdicción universal para tales fines.
3. Adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de manera que se deje sin efecto el Decreto Ley No. 2.191 dictado en el año 1978, de modo que las violaciones de derechos humanos del gobierno militar *de facto* contra Carmelo Soria Espinoza puedan ser investigadas y sancionadas.
4. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de la víctima reciban una adecuada y oportuna reparación que comprenda una plena satisfacción por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas, así como el pago de una justa indemnización compensatoria por los daños patrimoniales y extra patrimoniales, incluyendo el daño moral.

527. Con fecha 6 de marzo de 2003, la CIDH publicó el Informe No. 19/03 que contiene el acuerdo de cumplimiento al que llegaron las partes respecto al Caso 11.725.

528. De conformidad con el acuerdo de cumplimiento el Estado se comprometió a:

- a) Efectuar una declaración pública reconociendo la responsabilidad del Estado, por la acción de sus agentes, en la muerte de don Carmelo Soria Espinoza.
- b) Levantar una obra que recuerde la memoria de don Carmelo Soria Espinoza, en un lugar de Santiago designado por su familia.
- c) Pagar la suma de un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América a la familia de don Carmelo Soria Espinoza, en concepto de indemnización.
- d) El Gobierno de Chile afirmó que don Carmelo Soria Espinoza tenía la calidad de funcionario internacional de las Naciones Unidas, asignado a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, como personal superior de ésta última, revistiendo el carácter de funcionario internacional superior de planta.
- e) Presentar ante los Tribunales de Justicia de Chile una solicitud para reabrir el proceso criminal incoado para perseguir la responsabilidad de quienes dieron muerte a don Carmelo Soria Espinoza.

529. Asimismo, los peticionarios se comprometieron a:

- a) Poner término definitivo a la gestión que realiza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y señalando que da por cumplidas todas las recomendaciones contenidas en el Informe 133/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

- b) Desistir de la demanda presentada ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago por responsabilidad extracontractual del Estado, caratulada “Soria con Fisco”, bajo el Rol N° C-2219-2000, señalando en lo principal que acepta poner término al proceso judicial incoado y que las reparaciones acordadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos serán las únicas exigibles al Estado y que, en consecuencia, no perseguirá ulteriores acciones judiciales por responsabilidad del Estado, sean vinculadas a la acción de sus agentes o por perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales, incluyendo daño moral. Copia auténtica de la resolución judicial que apruebe el desistimiento deberá ser presentada ante la Comisión por la parte peticionaria, para efectos de acreditar el cumplimiento de lo acordado.

530. Con base en la información suministrada por las partes la Comisión concluyó que todos los compromisos asumidos por las partes en el Informe No. 19/03 fueron debidamente cumplidos<sup>85</sup>. En su Informe Anual 2008, la Comisión valoró los esfuerzos efectuados por el Estado de Chile para dar cumplimiento a dichos compromisos. Al mismo tiempo, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión en el Informe No. 139/99, la Comisión consideró que el Estado había dado cumplimiento parcial, estando pendientes de cumplimiento los puntos 1, 2 y 3 del dicho informe.

531. Mediante comunicación recibida el 8 de junio de 2010, los peticionarios informaron que con fecha 5 de marzo de 2010 los peticionarios y representantes del Programa de Derechos Humanos del Gobierno de Chile, solicitaron en escritos separados a la Corte Suprema la reapertura de la causa sobre el homicidio de don Carmelo Soria. Con fecha 29 de marzo de 2010, el Sr. Ministro Especial de la Corte Suprema don Héctor Carreño Seaman, no dio lugar a dicha solicitud. Agregaron que con fecha 1° de abril de 2010 tanto el programa de Derechos Humanos del Gobierno como los peticionarios, apelaron de dicha resolución. Con fecha 28 de abril de 2010, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la resolución. Los peticionarios lamentaron que la Corte Suprema se negara a reabrir el sumario dejando en la práctica sin sanción penal a los autores del crimen de Carmelo Soria Espinoza, esto es, en la total y absoluta impunidad.

532. Mediante nota del 30 de diciembre de 2010, el Estado reafirmó lo señalado sobre las actuaciones y estado actual de la causa seguida por el homicidio de Carmelo Soria. Respecto de la Causa Rol N° 7.981, seguida por los delitos de asociación ilícita y obstrucción de justicia en la causa que investigó el homicidio de Carmelo Soria, el Estado indicó que se encontraba en plenario desde el 7 de septiembre de 2009, existiendo 7 sujetos acusados.

533. En relación a la recomendación segunda del Informe N° 139/99, el Estado manifestó que se encontraba recabando información suficiente que le permitiera dar debido cumplimiento al Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas. Respecto de la recomendación tercera, el Estado indicó que se habrían estudiado diversas alternativas, siendo la más viable la emisión de una ley interpretativa del artículo 93 del Código Penal, habiéndose buscado armonizar la no aplicación del DL 2191, de Amnistía, con las instituciones de cosa juzgada y el principio *non bis in ídem*, en virtud de lo cual se habrían presentado dos proyectos de leyes: a) ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, iniciativa legal que en la actualidad se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, b) modificación que establece un nuevo canal de revisión en caso de violaciones de derechos humanos, proyecto que se encuentra en primer trámite constitucional.

534. Mediante nota del 18 de enero de 2012 el Estado informó en relación con la primera recomendación sobre el establecimiento de la responsabilidad penal por el asesinato de Carmelo Soria que ante negativa de la Corte Suprema de Justicia de reabrir el sumario, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior se encuentra ejerciendo todas las acciones legales disponibles para dar cumplimiento a la recomendación formulada por la CIDH, sin indicar cuales. En relación con la Causa Rol N° 7.981, seguida

---

<sup>85</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2008, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 189-190.

por los delitos de asociación ilícita y obstrucción de justicia en la causa que investigó el homicidio de Carmelo Soria, el Estado indicó que se encuentra en estado de ser notificada la sentencia definitiva.

535. En relación con la segunda recomendación, el Estado reiteró que se encuentra recabando información para dar cumplimiento al Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas. Asimismo, reiteró la información relativa a la tercera recomendación sobre el proyecto de ley interpretativa del artículo 93 del Código Penal, el cual sigue en trámite parlamentario.

536. El 3 de diciembre de 2012, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe No. 139/99. Mediante nota de fecha 10 de enero de 2013, El Estado brindó información, reiterando en cuanto a la primera recomendación, que a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, había instado la reapertura del sumario de la causa seguida por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Carmelo Soria Espinoza, siendo dicha petición rechazada en primera instancia por el Ministro instructor de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, en relación con la Causa Rol N° 7.981, seguida por los delitos de asociación ilícita y obstrucción de justicia en la causa que investigó el homicidio de Carmelo Soria, el Estado reiteró en su presentación del año 2013, que se encuentra en estado de ser notificada la sentencia definitiva.

537. Con respecto a la segunda recomendación, el Estado reiteró que se encuentra recabando información para dar cumplimiento al Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas. Asimismo, informó que el Proyecto de Ley referido a la interpretación del artículo 93 del Código Penal continúa en el segundo trámite constitucional en el Senado; y el relativo al nuevo canal de revisión en caso de violaciones a los derechos humanos, en el primer trámite constitucional.

538. El 9 de enero de 2014, el Estado informó que la Causa Rol No. 1-93, seguida ante la Corte Suprema por el delito de homicidio calificado en perjuicio de la víctima, no obstante se había cerrado inicialmente, fue reabierto a motivación del instructor, y que el proceso se encontraría en etapa sumaria, practicándose varias diligencias de investigación, pero que “no podían obtenerse más detalles de la misma”. En relación a la Causa Rol No. 7.981, el Estado reiteró lo señalado en sus informes de años anteriores, indicando que aún se encuentra a la espera de sentencia en grado de apelación, toda vez que el Tribunal de Segunda Instancia ordenó la verificación de nuevas diligencias que estarían siendo practicadas.

539. En el mismo escrito el Estado indicó que no ha habido mayores avances en relación con el proyecto de ley sobre la interpretación del artículo 93 del Código Penal, que continúa ante el Senado, donde fue remitido desde el 6 de mayo de 2009. Asimismo, en relación al nuevo canal de revisión en caso de violaciones de derechos humanos tampoco reportó avances.

540. El 4 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe No. 139/99.

541. El 11 de diciembre de 2014, el peticionario informó respecto a la causa Rol No. 1-93 que continuaban practicándose las diligencias ordenadas luego de la reapertura del sumario, y reportó que el 25 de julio de 2013 se había denegado un pedido de extradición de España (Rol 624-2013) de varios de los procesados en virtud del principio de territorialidad. Por otro lado, en relación a la causa Rol No. 7.981, aún se encuentra a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol No. 1233-2012). El Estado por su parte no presentó información actualizada.

542. El 15 de septiembre de 2015, el 27 de septiembre de 2016 y el 21 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado la información solicitada.

543. En vista de lo anterior, la Comisión reitera que las recomendaciones dirigidas tanto a la investigación y sanción de los responsables del asesinato de Carmelo Soria, como a la adecuación legislativa a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentran pendientes de cumplimiento.

544. Por lo tanto, la Comisión concluye que el Estado chileno ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones del Informe N° 139/99. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

**Petición 4617/02, Informe No. 30/04, Mercedes Julia Huenteao Beroiza y Otras (Chile)**

545. El 11 de marzo de 2004, mediante Informe No. 30/04, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en la petición Mercedes Julia Huenteao Beroiza y Otras. En resumen, los peticionarios, quienes son miembros del pueblo Mapuche Pehuenche, del sector Alto del Bío Bío, VIII Región de Chile, habían planteado alegatos referentes a la responsabilidad del Estado por el desarrollo del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, llevado adelante por la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA), en la zona en la que vivían.

546. A continuación se detalla el estado que para 2016 tenía cada uno de los compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo de solución amistosa, seguido de un resumen de la información proporcionada por las partes y el respectivo análisis de la Comisión sobre el cumplimiento de las mismas:

Compromisos establecidos en el acuerdo de solución amistosa aprobado en el informe No. 30/04	Estado del cumplimiento
<b><u>1. Efectuar medidas de perfeccionamiento de la institucionalidad jurídica protectora de los derechos de los Pueblos Indígenas y sus comunidades. Entre ellas:</u></b>	
a) Reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas existentes en Chile; Para estos efectos, el Gobierno arbitrará las siguientes medidas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proceso de diálogo con las organizaciones y comunidades indígenas, consistentes en seminarios y/o congresos regionales, respecto del contenido del reconocimiento constitucional.</li> <li>2. Proceso de diálogo con todos los partidos políticos, de gobierno y oposición así como con las bancadas parlamentarias, antes y durante la discusión legislativa del proyecto de reforma.</li> <li>3. Promover la toma de conciencia nacional sobre la importancia del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos Indígenas.</li> </ol>	<b>Cumplimiento pendiente</b>
b) Ratificar el Convenio N° 169 de la OIT; Para estos efectos, el Gobierno realizará las siguientes medidas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diálogo con los partidos políticos y bancadas parlamentarias.</li> <li>2. Diálogo con autoridades de la OIT, vía seminario u otra, que permita precisar los contenidos y alcances de este instrumento internacional.</li> <li>3. Seminarios nacionales y regionales, que aborden los contenidos del Convenio N° 169 de la OIT así como su aplicación en países que han ratificado el mismo.</li> </ol>	<b>Cumplido totalmente</b>
<b><u>2. Adoptar medidas para fortalecer la identidad territorial y cultural mapuche pehuenche y mecanismos de participación para su propio desarrollo. Entre ellas:</u></b>	
a) Crear una comuna en el sector del Alto Bío Bío;	<b>Cumplido totalmente</b>
b) Acordar los mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras que afectan a las comunidades Indígenas del sector del Alto Bío Bío; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se dispondrá la contratación de un equipo jurídico externo, cuya labor consistirá en impulsar las acciones que correspondan, a objeto de solucionar los conflictos jurídicos existentes en las tierras pehuenches.</li> </ol>	<b>Cumplido parcialmente</b>

<p>2. Se mantendrán los procedimientos de recuperación de tierras Indígenas, a través de los mecanismos establecidos por la ley Indígena.</p>	
<p>c) Fortalecer la participación indígena en el Área de Desarrollo Indígena (ADI) del Alto Bío Bío;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se creará un Directorio para el Área de Desarrollo Indígena.</li> <li>2. Este Directorio será el interlocutor del Gobierno.</li> <li>3. Mideplan apoyará la instalación de una Institucionalidad Indígena Participativa.</li> <li>4. Mideplan ejecutará la "Capacitación de Comunidades y Dirigentes Indígenas".</li> </ol>	<b>Cumplido parcialmente</b>
<p>d) Acordar los mecanismos que aseguren la participación de las comunidades Indígenas en la administración de la Reserva Forestal Ralco.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Estado suscribirá un Convenio entre CONAF VIII y las familias ocupantes ancestrales.</li> <li>2. El Convenio considerará, reconocimiento de derechos, determinación de responsabilidades y un plan de desarrollo e inversión, de la comunidad pehuenche.</li> </ol>	<b>Cumplido totalmente</b>
<b><u>3. Disponer medidas tendientes al desarrollo y preservación ambiental del sector del Alto Bío Bío. Entre ellas:</u></b>	
<p>a) Acordar mecanismos para asegurar que las comunidades indígenas sean informadas, escuchadas y consideradas en el seguimiento y control de las obligaciones ambientales del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se arbitrarán medidas para que los resultados de las auditorías sean informados a través de diferentes medios.</li> <li>2. Se dará la participación de un vecino representante de las partes y de la comunidad mapuche pehuenche durante las visitas de los equipos de autores.</li> <li>3. Se incluirán consultas a vecinos y comuneros durante las visitas de CONAMA, a fin de recoger sus apreciaciones.</li> </ol>	<b>Cumplido parcialmente</b>
<p>b) Fortalecer el desarrollo económico del sector del Alto Bío Bío y, en particular, de sus comunidades indígenas, mediante mecanismos que sean aceptables para la parte denunciante;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se generará un programa de desarrollo productivo integral.</li> <li>2. Junto con ENDESA se verificarán las compensaciones pecuniarias ofrecidas para el desarrollo de las comunidades afectadas por el Proyecto de Ralco.</li> </ol>	<b>Cumplido parcialmente</b>
<p>c) Acordar mecanismos que faciliten y mejoren el aprovechamiento turístico de los embalses del Alto Bío Bío, en beneficio de las comunidades indígenas;</p>	<b>Cumplido parcialmente</b>
<p>d) Acordar mecanismos vinculantes para todos los órganos del Estado que aseguren la no instalación de futuros megaproyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del Alto Bío Bío.</p>	<b>Cumplimiento pendiente</b>
<p><b>4. Acordar, dentro de un plazo breve y urgente, medidas respecto de las causas judiciales que afectan a dirigentes indígenas que han sido procesados por acciones relacionadas con la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco.</b></p>	<b>Cumplido totalmente</b>
<p><b>5. Medidas para satisfacer las demandas particulares de las familias mapuche pehuenche afectadas.</b></p>	<b>Cumplido parcialmente</b>

547. La CIDH ha dado por cumplidos los puntos 1 (b) y 2 (a) y (d) en el Informe Anual 2008<sup>86</sup>. Asimismo, en su Informe Anual de 2016, la Comisión declaró el cumplimiento del punto 4 del acuerdo sobre medidas respecto a causas judiciales que afectaban a dirigentes indígenas<sup>87</sup>.

548. En relación al compromiso 1 (a) sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas existentes en Chile el Estado informó en 5 de enero de 2011 y 21 de diciembre de 2011, que el texto de reforma que se estaba siendo discutido ante la Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento del Senado. Además expresó que el Gobierno de Chile mantiene su compromiso de insistir en una reforma constitucional ante el Congreso Nacional, para lo cual el 8 de marzo de 2011 anunció la realización de la “Consulta sobre la Institucionalidad Indígena”, en siete etapas y sobre tres ejes temáticos: i) la definición del procedimiento de consulta y participación, incluido el reglamento de participación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); ii) el proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas; y iii) la creación de una Agencia de Desarrollo Indígena y la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas. Asimismo, informó que entre marzo y agosto de 2011 se realizaron las dos primeras etapas en forma exitosa, esto es, la de difusión e información. El Estado destacó que la segunda se concretó con el desarrollo de 124 talleres a nivel nacional en los que participaron un total de 5.582 dirigentes indígenas. Según la información suministrada por el Estado, de septiembre a noviembre de 2011 se detuvo el proceso de consulta y se constituyó una comisión *ad hoc* con el fin de proponer un mecanismo e itinerario para realizar sobre el primer eje temático. Las conclusiones preliminares de dicha Comisión fueron presentadas a la CONADI el 23 de noviembre de 2011.

549. Añadió el Estado que el 15 de enero de 2012 se procedió a realizar la elección de los Consejeros Indígenas de la CONADI, los cuales asumieron sus cargos el 9 de mayo de 2012, dando inicio inmediato al trabajo con la Comisión de Consulta del Consejo de CONADI para avanzar en el proceso de consulta “de la normativa que regularía la Consulta Indígena establecida en el Convenio N° 169. Indica, que en consecuencia, el 08 de agosto de 2012 el Ministro de Desarrollo Social, en la sede de la (OIT), hizo entrega oficial a representantes de los pueblos indígenas y diversas organizaciones de la propuesta de “Nueva Normativa de Consulta Indígena”, con el objetivo que esta pudiese ser estudiada y discutida por los pueblos indígenas del país de manera autónoma y luego así comenzar un proceso de diálogo en búsqueda de una normativa definitiva que sea consensuada con el Gobierno. El Estado informó que desde el 8 de agosto de 2012 las diversas organizaciones de los Pueblos Indígenas comenzaron a discutir la Nueva Propuesta Normativa de Consulta Indígena, mediante reuniones auto-convocadas y autónomas que han sido apoyadas y financiadas por el Gobierno. Precisa que entre agosto y noviembre de 2012, se efectuaron más de 74 talleres informativos y reuniones, además de que los Pueblos Indígenas de todo el país se reunieron en un Gran Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas, que se realizó en Santiago de Chile del 30 de noviembre de 2011, con la participación de más de 250 representantes de los pueblos indígenas.

550. El 16 de enero de 2014, el Estado informó que durante el 2013 se había creado una “Mesa de Consenso” entre representantes indígenas que elaboraron contrapropuestas o expresaron su interés de participar en el proceso. Esa dinámica, en la que habían participado representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Instituto Nacional de Derechos humanos, se habría desarrollado en 9 sesiones, revisando las propuestas recibidas y plasmando una normativa final. Con posterioridad, el 22 de noviembre de 2013, el Presidente de la República aprobó el Decreto Supremo No. 66 regulador del proceso de consulta indígena que se encontraba en proceso de revisión y aprobación por parte de la Contraloría General de la República.

551. En relación al compromiso 2 (b), el Estado informó en el 2011 que se habían comprado tierras a casi la totalidad de las comunidades Pehuenche pertenecientes a la Comuna del Alto Bío Bío y que en el trienio 2008-2010 se adquirió para la comunidad indígena Butalénbún un predio de 180 hectáreas y para

---

86 Ver CIDH, Informe Anual 2008, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 209 y 213. Disponible en: <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/cap3.D.4sp.htm>

87 Ver CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones Amistosas en casos individuales, párr. 192.

la comunidad Newen Mapu de Malla Malla se adquirió un predio de 353,7 hectáreas. Agregó que en el futuro, cada entrega irá acompañada de un convenio de apoyo productivo y asistencia técnica. En su comunicación de enero de 2012 indicó que durante 2011 la CONADI licitó el estudio de pre inversión para la adquisición de tierras en el sector cajón de Queuco, comuna Alto Bío Bío.

552. Con posterioridad, el Estado informó respecto a este punto que se había efectuado la compra del denominado Fundo Trapa, con una extensión de 8.000 hectáreas a las comunidades Pewenche de Butalebún y Kiñe Leche Coyan, ubicadas en el Cajón del Queuco, Alto Bío Bío; y que dicha compra representó una inversión de \$1.556.772.000 de pesos chilenos. Asimismo, en comunicación del 16 de enero de 2014, el Estado informó que CONADI adjudicó subsidio a 33 familias del Alto Bío Bío por un monto total de \$660.000.000 pesos.

553. Respecto del compromiso 2 (c), el Estado indicó que en junio de 2009 se realizó el lanzamiento de la mesa técnica de seguimiento de inversión pública en el Área de Desarrollo Indígena del Alto Bío Bío, y en nota del 12 de enero de 2012, el Estado hizo mención al proceso de consulta que está llevando a cabo sobre institucionalidad indígena y las actividades realizadas por la CONADI para asegurar la participación de las familias del sector en dicha consulta. Los peticionarios informaron el 26 de diciembre de 2013, que no se había constituido aun el directorio del Área de Desarrollo indígena, por lo cual no consideraban que se hubiera cumplido con este punto.

554. El Estado informó el 16 de enero de 2014, que se habían reactivado las actividades del Área de Desarrollo Indígena de Alto Bío Bío, a través de 4 reuniones, en las que participaron autoridades regionales y nacionales, en fechas 22 de mayo, 11 de junio, 8 de julio y 4 de octubre de 2013; y que se estaban conformando legalmente el directorio de la entidad en conjunto con la municipalidad.

555. En lo que se refiere al compromiso 3(a) del acuerdo de solución amistosa, el Estado indicó que se habían tomado las medidas necesarias para que los resultados de las auditorías fueran enviados, entre otros, a la Municipalidad de Santa Bárbara y Alto Bío Bío para consulta pública y, publicados en la página web de la CONAMA, sin que se hubiera recibido observación alguna de dichas municipalidades. Además señala que la Dirección Ejecutiva de CONAMA y los servicios públicos han dado seguimiento y han fiscalizado el proyecto, según lo establecido en la resolución de calificación ambiental. En relación con los impactos del embalse Ralco en el sector del Alto Bío Bío, el Estado informa que realizará una auditoría independiente cuando se cumplan tres años de haberse puesto en marcha la Central Hidroeléctrica, que tendrá como objetivo proponer las medidas necesarias para corregir eventuales efectos imprevistos, en especial, en el desarrollo turístico de las riberas del embalse. Al respecto, en su nota de enero de 2012, el Estado informa que el “Informe de Auditoría Ambiental independiente del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco” correspondiente al segundo semestre de 2011 fue enviado por el Servicio de Evaluación Ambiental a la empresa Edensa Chile, la que presentó sus observaciones el 14 de diciembre de 2011.

556. El Estado informó el 16 de enero de 2014 que el informe final de la auditoría fue enviado a la municipalidad de Alto Bío Bío mediante documento No. 120278 del 2 de febrero de 2012. Asimismo, el Estado informó que el Servicio de Evaluación Ambiental ha realizado dos reuniones convocadas por la Unidad Coordinadora de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, en la cual se expuso a representantes de las familias afectadas los avances en el seguimiento de las medidas por la inundación del sitio 53 Panteón Quepuca, establecidas en resolución sancionatoria No. 133-06 de CONAMA. Adicionalmente, el Estado señaló que dichos informes fueron enviados a la Dirección Nacional de CONADI para su consideración y pronunciamiento. Finalmente, el Estado indicó, respecto a este punto, que el 5 de marzo de 2013, a petición las comunidades afectadas por la inundación del Cementerio Quepuca Ralco, la UCAI-MDS se reunió con los representantes de las comunidades afectadas para trabajar en un petitorio de medidas compensatorias.

557. Respecto del compromiso 3(b), el Estado informó que la CONADI elaboró el “Plan de desarrollo productivo para familias relocalizadas en el fundo El Porvenir, comuna de Quilaco, provincia de Bío Bío”, en conjunto con las familias relocalizadas y el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) está elaborando un plan de trabajo para las comunidades del sector del Alto Bío Bío. Según la información suministrada por el Estado, durante el 2011 se celebraron dos reuniones con los peticionarios para revisar

los compromisos del acuerdo de solución amistoso; una en la ciudad de Los Ángeles el 10 de mayo y la otra en Santiago el 15. Asimismo, mediante carta No. 477 del 9 de septiembre de 2011, el Director Nacional de CONADI comunicó a los peticionarios la decisión del Ministro de Planificación de asignarle la responsabilidad de dar cumplimiento y seguimiento de los compromisos del acuerdo de solución amistosa.

558. Con posterioridad el Estado informó que se ha incorporado a la comuna de Alto Bío Bío en la planificación del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT) del Gobierno regional del Bío Bío. Indicó que dicho programa permite fortalecer el concepto de planificación territorial, potenciar el fomento productivo y desarrollar nuevas metodologías de planificación. Además señaló que dicha planificación contempla un proceso participativo, que será realizado por el Gobierno Regional del Bío Bío y que paralelamente, el Gobierno Regional del Bío Bío y CONADI, han aprobado una suma de \$458.000.000 de pesos para la ejecución de Proyectos de Emprendimiento Extra-Agropecuario de Comunidades Pewenche de la Provincia de Bío Bío. Concretamente, el Estado precisó que estos proyectos están destinados al reforzamiento y diversificación de la economía de las familias Pewenche, en rubros como el comercio, artesanía, actividad apícola, ecoturismo, entre otros y que mediante dicho programa se contempla apoyar en un periodo de ejecución de 18 meses, en proyectos de emprendimiento a 300 familias Pewenche de la provincia, 200 de las cuales pertenecen a la comuna de Alto Bío Bío.

559. El Estado indicó en su nota del 16 enero de 2014 que el 17 de octubre de 2013 se publicó la licitación Estudio Básico Código BIP 3012590 “Diagnostico Plan Marco de Desarrollo Territorial, Subterritorios Indígenas”, cuyo diagnóstico permitiría en el futuro determinar la cartera de proyectos que beneficia a la comuna de Bío Bío. El Estado informó que durante el 2013 el programa de Desarrollo Territorial Indígena invirtió un total de \$347.000.000 en la zona, que se destinaron principalmente a estructura predial, adquisición de maquinaria agrícola, tecnificación de riego y servicios veterinarios, así como se ha entregado asesoría técnica a pequeños productores indígenas de la comuna.

560. En lo que se refiere al compromiso 3(c) el Estado informó con anterioridad que se han financiado proyectos turísticos en las riberas del lago Ralco, que se han promocionado y financiado obras para fortalecer el turismo con fines especiales en la alta cordillera. El Estado informó que en 2011 se llevó a cabo una auditoría independiente sobre la Central Hidroeléctrica Ralco, cuyos resultados fueron entregados el 6 de octubre para ser analizados por la CONADI y la Unidad Coordinadora de Asuntos Indígenas de la Secretaría General de la Presidencia. El Estado informó el 16 de enero de 2014 que el programa “Concurso Público para la Implementación de Iniciativas Turísticas año 2013” apoyó tres iniciativas que están aprovechando de manera turística los embalses del Alto Bío Bío en beneficio de comunidades indígenas.

561. Respecto del compromiso 3 (d) el Estado indicó que se está a lo establecido en la legislación nacional, por lo que su satisfacción debe encausarse dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. El Estado reiteró en comunicación de enero de 2014 que considera que este punto se encuentra cumplido.

562. Sin embargo, el 15 de diciembre de 2008, los peticionarios enviaron una comunicación denunciando que el Estado había incumplido el compromiso 3(d) del acuerdo de solución amistosa al haber dado trámite al estudio de impacto ambiental de un megaproyecto hidroeléctrico en territorio Mapuche Pehuenche, conocido como Proyecto Angostura. Según los peticionarios, este proyecto afectaría tierras indígenas del Alto Bío Bío en las que se encuentran por lo menos cuatro lugares sagrados Mapuche Pehuenche y en las que viven actualmente algunas familias Mapuche Pehuenche. Los peticionarios señalaron que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) emitió un informe el 31 de julio de 2008 (Oficio 578), en el que confirma la importancia patrimonial del sector para las comunidades Mapuche Pehuenche. Los peticionarios indicaron con base en lo señalado anteriormente, que el Estado ha incumplido su compromiso de adoptar medidas de ordenamiento territorial para que las tierras indígenas en el Alto Bío Bío sean “calificadas como área de protección de recursos de valor natural o patrimonial cultural, y en consecuencia, sean declaradas zonas no edificables o de condiciones restringidas de edificación”. Adicionalmente, los peticionarios enfatizaron en su última comunicación de 26 de diciembre de 2013, que persiste el incumplimiento de este punto, toda vez que el Estado aprobó un megaproyecto de central hidroeléctrica, en el sector del Alto Bío Bío, denominado Central Angostura.

563. En cuanto al compromiso 5, referente a las medidas dirigidas a satisfacer las demandas particulares de las familias mapuche pehuenche afectadas, el Estado informó que a fines de 2006 se entregaron los lotes a cada una de las personas, a través de sorteo. Cada persona recibió terrenos en la zona destinada a uso habitacional, agropecuario, desarrollo turístico y manejo forestal; aclaró que aún faltan tres lotes por entregar, por problemas de delimitación. Informó que las pensiones de gracia ya han sido entregadas y se entregaron becas de estudio en junio de 2009. El Estado actualizó la información anterior, indicando que en febrero de 2011 se realizó la transferencia a título gratuito de los inmuebles pendientes del lote A del fundo Porvenir a tres beneficiarios. Asimismo, informó sobre la ejecución de un proyecto para el mejoramiento de las vías de acceso a los predios del fundo Porvenir.

564. El Estado indicó que en el año 2012 la Secretaría Regional del Ministerio de Bienes Nacionales del Bío Bío llevó a cabo un trabajo en el terreno destinado a generar las rectificaciones técnicas y un trabajo de gabinete destinado a resolver jurídicamente estos cambios y que tiene como premisa respetar las superficies de cada beneficiario y facilitar la identificación de los deslindes. Preciso que se estima que las rectificaciones técnicas y jurídicas que harán posible el traspaso de hijuelas del Lote B y C estarán concluidas en el primer semestre de 2013. Además señaló que dicho procedimiento requiere de la anuencia de las familias involucradas, a quienes se les informó del procedimiento y sus alcances en reunión en terreno de fecha 10 de diciembre de 2012.

565. Los peticionarios enfatizaron en comunicación de 26 de diciembre de 2013 que persiste el incumplimiento de este punto, toda vez que si bien las tierras se entregaron, tienen graves problemas de disposición de agua, tanto en el Sector Santa Inés, como en La Suerte, hasta el punto que la señora Mercedes Huentao no había podido hacer uso del terreno, y que a pesar de los múltiples informes efectuados por funcionarios del gobierno continua esta situación. En el mismo sentido se expresaron en relación a la falta de acceso al sector La Suerte, en donde no hay un camino adecuado que facilite la entrada de vehículos. Según los peticionarios, el Estado tampoco ha hecho entrega de las casas, y los 18 beneficiarios han sido informados que deben acudir al sistema de subsidio regular del Estado, lo que estaría por fuera de los términos inicialmente dialogados entre las partes. Los peticionarios indicaron además que se les estaría exigiendo una ficha de protección social, con la cual se identificaría el grado de vulnerabilidad de los postulantes, lo cual consideran que es también un requisito adicional que está siendo exigido por fuera de lo pactado inicialmente. En cuanto a las pensiones, los peticionarios reportaron que el señor Fermín Beroiza habría dejado de recibir la pensión de ENDESA desde marzo de 2012. Finalmente, frente al tema de asistencia productiva, los peticionarios indicaron en esa comunicación, que si bien el Estado había garantizado la disponibilidad de 1500 unidades de fomento, la prestación había sido inadecuada, y solicitan la entrega directa de los recursos.

566. El Estado indicó en su informe del 16 de enero 2014 que se firmó un Convenio de Colaboración entre la Corporación Nacional e Desarrollo Indígena Regio del Bío Bío y la Secretaria Regional Ministerial para la ejecución del Proyecto "Replanteo Fundo Provenir", respaldado por la Resolución No. 1505 de 6 de noviembre de 2013. Según el Estado, este proyecto contempla el replanteo de 24 lotes, provenientes del lote B, dada la subdivisión del Fundo Porvenir de la comuna Quilaco. Según el Estado en diciembre de 2013 se llevaron a cabo actividades en terreno para determinar los deslindes.

567. Los peticionarios indicaron de manera general en su última comunicación de fecha 26 de diciembre de 2013, que consideran que el Estado no ha cumplido con los puntos 1 (a), 2 (b) y (c), 3 en su totalidad, y 5 del acuerdo.

568. La CIDH, solicitó información actualizada a las partes en nota de fecha 2 de diciembre de 2014, el 15 de septiembre de 2015, el 27 de septiembre de 2016 y el 21 de agosto de 2017, sin embargo a la fecha de cierre de este informe, ninguna de las partes se ha manifestado en relación a los puntos pendientes.

569. La Comisión aprecia las medidas adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante el acuerdo de solución amistosa. Al mismo tiempo observa que si bien una serie de compromisos han sido cumplidos, existen medidas que se encuentran en proceso de implementación, por lo cual insta al Estado a continuar avanzado hacia el cumplimiento total de dichos compromisos. Por lo

expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

### **Caso 12.469, Informe No. 56/10, Margarita Cecilia Barbería Miranda (Chile)**

570. En el Informe No. 56/10 de fecha 18 de marzo de 2010, la Comisión concluyó que el Estado chileno es responsable por la violación del derecho a la igualdad ante la ley en perjuicio de Margarita Barbería Miranda, contenida en el artículo 24 de la Convención Americana, como consecuencia de la aplicación a su caso de la disposición discriminatoria que le impidió ejercer la profesión de abogada en Chile por la exclusiva razón de ser extranjera. Como consecuencia de esta situación, la CIDH concluyó que el Estado violó igualmente en perjuicio de la víctima las obligaciones generales de respeto y garantía de todos los derechos humanos, sin discriminación alguna, contenidas en el artículo 1(1) de la Convención Americana, así como el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para adecuar su legislación a sus compromisos internacionales en esta materia, consagrado en el artículo 2 del mencionado instrumento.

571. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Que tome las medidas para la modificación de las normas de la legislación chilena que impiden a las personas el ejercicio de la profesión de abogado exclusivamente por su condición de extranjeras, en particular las contenidas en el Código Orgánico de Tribunales de Chile.
2. Que se permita a Margarita Barbería Miranda ejercer como abogada en Chile en igualdad de condiciones con los demás abogados de dicho país.
3. Que repare adecuadamente a Margarita Barbería Miranda por las violaciones establecidas en el presente informe.

572. En el Informe No. 56/10 la Comisión valoró muy positivamente las acciones desplegadas por el Estado de Chile relativas al cumplimiento de la primera y la segunda recomendación, esto es, la promulgación de la Ley 20.211, con lo que se había modificado el artículo 526 del Código Orgánico de los Tribunales; y la juramentación de Margarita Barbería Miranda como abogada, el 16 de mayo de 2008, ante la Corte Suprema de Chile, por lo cual estas dos medidas se dieron por cumplidas en dicho informe, quedando pendiente únicamente la reparación integral de la víctima.

573. Mediante comunicación de 29 de diciembre de 2010, el Estado informó que a finales de 2008 se sostuvo una reunión con la Sra. Margarita Barbería en la que se le planteó la posibilidad de recurrir a los procedimientos internos que reconoce el ordenamiento jurídico chileno para hacer valer sus pretensiones pecuniarias. Asimismo, indicó que dicha propuesta fue rechazada por la peticionaria, quien reitero su pretensión de ser resarcida por el daño material y moral que sufrió a raíz del impedimento legal que había imposibilitado su juramento como abogada. Adicionalmente el Estado de Chile hizo presente que la Sra. Barbería no ha presentado antecedentes que acrediten los perjuicios alegados para sustentar las siguientes peticiones: una beca de estudios superiores para cada uno de sus tres hijos; una beca completa de estudios superiores de doctorado, maestría o diplomado en algún tema de derecho de interés de la peticionaria; una oficina amoblada; un automóvil; y la suma de US\$90,000.00.

574. Mediante nota del 16 de noviembre de 2011 la peticionaria informó a la CIDH que el Estado de Chile no le ha proporcionado reparación adecuada por la violación a la que fue objeto. Por su parte, el 21 de diciembre de 2011, el Estado chileno remitió una comunicación en la que reiteró en todos sus términos la información suministrada en su nota del 29 de noviembre de 2010.

575. Mediante comunicación recibida el 15 de enero de 2013, la peticionaria informó que durante el año 2012, no habría tenido ningún acercamiento con representantes del Estado de Chile, con el objeto de proceder en el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana. Por su parte, el 4 de enero de 2013, el Estado remitió una comunicación en la que reiteró lo indicado anteriormente, en particular, que

se había planteado a la peticionaria la posibilidad de recurrir a los procedimientos internos que reconoce el ordenamiento jurídico, para hacer valer sus peticiones de orden pecuniario, pero que la señora Barbería no había aceptado dicha opción.

576. Mediante comunicación de fecha 1 de marzo de 2013, la peticionaria indicó que no podría recurrir a las acciones de la jurisdicción interna dado que de acuerdo a la normativa nacional que regula la prescripción, las cuales se encuentran previstas en el Libro IV Título XLII Código Civil, el tiempo general para la prescripción de las acciones ordinarias es de cinco años. Por lo que señaló que en ese escenario los hechos que servirían de fundamento para la hipotética acción a emprender, ocurrieron hace doce años. Además, indicó que carece de otro de los requisitos: un título al que la ley dote de fuerza ejecutiva, hipótesis que no incluye los informes de la Comisión Interamericana. Finalmente, la peticionaria señaló que sus pretensiones en materia de reparación obedecen a resarcir el daño ocasionado por los siete años en que se le excluyó del ejercicio de la abogacía arbitrariamente.

577. Mediante comunicación de fecha 9 de enero de 2014, el Estado indicó que el Consejo de Defensa del Estado, ha ofrecido en casos como el presente, en los cuales la CIDH ha emitido un informe de fondo, la alternativa de que la parte peticionaria inicie un Juicio de Hacienda que persiga la responsabilidad del Estado por los hechos investigados por la Comisión, y en el cual el Consejo de Defensa del Estado podría transigir, si se reúne el quorum exigido por la ley. El Estado citó un antecedente como el de la peticionaria que habría culminado exitosamente con una reparación. El Estado indica que se encuentra a la espera de que la peticionaria active dicho mecanismo o replantee sus pretensiones de reparación. Dicha información fue trasladada a la peticionaria el 21 de abril de 2014, sin que a la fecha se haya recibido información sobre su decisión.

578. Mediante comunicación de fecha 4 de diciembre de 2014, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento.

579. El 18 de enero de 2015, la peticionaria informó que no haber ninguna variación en cuanto a la intención del Estado de Chile de dar cumplimiento a la recomendación. Asimismo, hizo presente que en los últimos tres años, no ha habido ningún acercamiento, ni intención de llegar a acuerdo en ese sentido por parte del Estado.

580. El 15 de septiembre de 2015 y el 26 de septiembre de 2016 la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

581. El 18 de octubre de 2017, el Estado reiteró información suministrada en años anteriores sobre la negativa de la peticionaria a colaborar en el proceso para hacer efectivas las reparaciones.

582. El 19 de abril de 2017, la peticionaria reiteró la información indicada en años anteriores sobre la falta de contacto con el Estado.

583. El 3 de agosto de 2017, la peticionaria indicó su apertura para avanzar en una mesa de diálogo con el Estado chileno con la facilitación de la Comisión.

584. El 21 de agosto de 2017, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. A la fecha de cierre de este informe el Estado no ha presentado información adicional.

585. El 12 y 29 de septiembre de 2017, la peticionaria informó a la Comisión de múltiples solicitudes que ha presentado al Estado para agendar una reunión de trabajo bilateral, sin obtener una respuesta. Dicha información fue trasladada al Estado para que presentara sus observaciones.

586. La Comisión toma nota de los obstáculos para el cumplimiento de la recomendación referida a la reparación adecuada a favor de Margarita Barbería Miranda, e insta a las partes a trabajar conjuntamente para el cumplimiento de esta cláusula. La Comisión concluye que el Estado chileno ha dado cumplimiento

parcial a las recomendaciones reseñadas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

**Caso 12.799, Informe No. 48/16. Miguel Ángel Millar Silva y otros (Radio Estrella del Mar de Melinka), (Chile)**

587. El 4 de agosto de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición por parte del señor Miguel Millar Silva, en contra de la República de Chile por la exclusión de Radio Estrella del Mar de Melinka de la provisión del servicio de energía eléctrica en su modalidad de horario amplio, del que se sirve el resto de los medios de comunicación presentes en su localidad.

588. El 31 de marzo de 2014, la Comisión adoptó el informe de fondo No. 2/14 a través del cual presentó las siguientes recomendaciones:

1. De mantenerse la situación, permitir el acceso a Radio Estrella del Mar de Melinka al suministro de energía eléctrica en horario amplio del que gozan el resto de los medios de comunicación en la localidad.
2. Reparar adecuadamente los perjuicios causados a las víctimas.
3. Adoptar toda medida que resulte necesaria para garantizar que hechos como los establecidos en el presente caso no vuelvan a repetirse.

589. El día 15 de junio de 2015, los peticionarios y el Estado Chileno informaron que habían firmado un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones, en cuyo texto se estableció lo siguiente:

**1. Reparación económica:** “Las quince víctimas expresan que se considerarán reparadas por este concepto con el pago de un monto –que estiman simbólico– de 3.000 dólares americanos a cada una. Que se pagará mediante cheque nominativo a cada víctima, en el plazo máximo de 3 meses, contados desde la firma de presente acuerdo.”

**2. Garantías de no repetición:** “(...)Las víctimas y peticionarios del Caso, entienden que el actual escenario que ofrece la implementación de la Ley 20.433 de Creación de los Servicios de Radiodifusión Comunitaria constituye una oportunidad para el diseño e implementación de mecanismos y espacios institucionales que contribuyan en ese sentido. Para ello proponen la realización de las siguientes medidas:

a. Programa de fomento de la radiodifusión ciudadana en las Regiones X y XI (con énfasis en Chiloé y las Guaitecas) con participación de los peticionarios. El Programa a implementar deberá incluir medidas de acción positiva para garantizar el funcionamiento efectivo de las radios que promueve la sociedad civil. El Programa sería elaborado de manera conjunta y para ello se propone realizar previamente un plan de trabajo específico.

b. El Estado, en el marco de las actividades habituales de difusión que realiza la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, asumirá los costos para la realización de un evento de discusión -con formato de Seminario- organizado en conjunto con una Universidad Regional y con la participación de las organizaciones peticionarias, sobre aspectos de la implementación de la ley a la luz de los estándares internacionales en materia de acceso a una radiodifusión libre e incluyente, las partes realizarán gestiones destinadas a que la referida actividad cuente con la participación de la Subsecretaría de Comunicaciones del Gobierno de Chile (SUBTEL), el Instituto Nacional de DDHH, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, la Universidad de Chile, y la radio Estrella del Mar, entre otras instituciones.

El Estado compromete la difusión del mismo -incluyendo sus Memorias- por medio de publicación en un sitio web del Estado.

c. Establecimiento de una Mesa de Trabajo para asegurar la superación de prácticas discriminatorias en el proceso de implementación de la Ley. Las partes harán esfuerzos para que la misma cuente con la participación del Ministerio Secretaría General de Gobierno,

SUBTEL, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (ANARCICH), Universidades, el Colegio de Periodistas de Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Al respecto, la mesa de trabajo impulsará un estudio para analizar la pertinencia de introducir modificaciones al artículo 36 b de la Ley N O 18, 168 General de Telecomunicaciones.

A efectos de facilitar la ejecución de las medidas propuestas en el marco de las políticas públicas en ejecución, se propone una reunión de trabajo entre el Estado y los peticionarios.”

**3. Publicidad del Informe de la CIDH:** “El Estado expresa su conformidad para que la CIDH haga público el contenido del Informe No 2/14, junto con la homologación del presente Acuerdo de Cumplimiento. (...).”

590. El 9 de mayo de 2016, los peticionarios informaron que en cuanto a la reparación económica, el Estado había realizado el pago de la indemnización a las víctimas de manera satisfactoria. Al mismo tiempo, anotaron que no había sido posible para los hijos de Genaro Barría realizar el cobro de la indemnización por problemas internos con los trámites sucesorales. En relación a las garantías de no repetición, los peticionarios indicaron que para esa fecha aún no se había iniciado la ejecución de los compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo de cumplimiento sobre el particular. Sin embargo, indicaron que el 8 de abril de 2016, el peticionario Miguel Millar sostuvo una reunión con la Cancillería en la cual el Estado reiteró su voluntad para avanzar en el cumplimiento del acuerdo.

591. El 11 de junio de 2016, las partes sostuvieron una reunión de trabajo en Chile con el acompañamiento del Comisionado Enrique Gil Botero, Relator de la CIDH para el país, en la que las partes acordaron un plazo para la instalación de la Mesa de Trabajo.

592. El 28 de octubre de 2016, el Estado informó que el 17 de agosto de 2015, se dictó el Decreto Presidencial No. 111, a través del cual se ordenó el pago de tres mil dólares a cada una de las víctimas. Según lo informado, dicho pago se efectuó con un cheque nominativo a todas las víctimas con la excepción de Genaro Barría, toda vez que es necesario que los herederos designen un mandatario para proceder con el cobro.

593. En relación a las medidas de no repetición, el Estado indicó que el 27 de septiembre de 2016, se constituyó la Mesa de Trabajo según lo establecido en el acuerdo, para impulsar el estudio de la pertinencia de la introducción de modificaciones al artículo 36 b de la Ley No. 18.168 General de Telecomunicaciones.

594. Según lo acordado, antes de llevarse a cabo una segunda reunión programada para noviembre de 2016, los participantes de la Mesa trabajarán en propuestas sobre el marco legal que rige actualmente a las radios comunitarias; las medidas destinadas a mejorar la actual infraestructura de las radios comunitarias; y los objetivos, contenido y financiamiento del Programa de Fomento de la Radiodifusión Ciudadana en las Regiones X y XI. En relación a la realización de un evento de discusión, incluido en el literal b del numeral 2 del acuerdo, el Estado informó que en la próxima reunión de trabajo las partes decidirán su contenido, y anunció la propuesta presentada por parte de los peticionarios, que incluye el nombre del evento, lugar tentativo, duración, objetivos y su metodología.

595. Finalmente, la CIDH consideró en su Informe de Fondo No. 2/14 que el Estado estaba dando cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe de Fondo 2/14. Es de indicar que la Comisión continuará haciendo un seguimiento de la consecución del acuerdo, para salvaguardar el cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a reparar adecuadamente a las víctimas, como usuarios de la radio, por las violaciones establecidas en el anterior informe.

596. El 3 de agosto de 2017, los peticionarios informaron que con posterioridad a la emisión del Informe de Fondo, las partes han continuado las reuniones de la Mesa de Trabajo, pero que no ha sido posible

lograr acuerdos que permitan avanzar en la implementación del acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.

597. Al respecto, la Comisión toma nota de los retos en la implementación del acuerdo de cumplimiento e insta a las partes a continuar en las negociaciones bilaterales de la Mesa de Trabajo para lograr el cumplimiento total de las recomendaciones de la CIDH emitidas en el Informe de Fondo No. 48/16, según lo pactado en el acuerdo de cumplimiento. Al mismo tiempo, la Comisión insta al Estado chileno a avanzar de la manera más expedita posible en la implementación de las medidas correspondientes.

### **Caso 11.654, Informe No. 62/01, Masacre de Riofrío (Colombia)**

598. En el Informe No. 62/01 de fecha 6 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación del derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, en la masacre perpetrada por agentes del Estado y miembros de grupos paramilitares de las siguientes personas: Miguel Enrique Ladino Largo, Miguel Antonio Ladino Ramírez, María Cenaida Ladino Ramírez, Carmen Emilia Ladino Ramírez, Julio Cesar Ladino Ramírez, Lucely Colorado, Dora Estela Gaviria Ladino, Celso Mario Molina, Rita Edelia de Molina, Ricardo Molina, Freddy Molina, Luz Edelsy Tusarma Salazar y Hugo Cedeño Lozano. Asimismo, concluyó que el Estado era responsable por haber incumplido con su deber especial de protección en perjuicio de las menores Dora Estela Gaviria Ladino y Luz Edelsy Tusarma Salazar conforme al artículo 19 de la Convención Americana. La Comisión también concluyó que el Estado colombiano era responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención en perjuicio de Hugo Cerdeño Lozano, Miguel Ladino, Cenaida Ladino, Ricardo Molina Solarte y Celso Mario Molina Sauza, así como de incumplir su obligación de brindar la debida protección judicial a las víctimas del presente Caso conforme a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en conjunción con el artículo 1(1) del Tratado.

599. La CIDH formuló al Estado colombiano las siguientes recomendaciones:

1. Realizar una investigación imparcial y efectiva ante la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
2. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas sean debidamente indemnizados.
3. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, así como adoptar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por la propia Comisión en la investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria.

600. La CIDH declaró cumplida la segunda recomendación en su informe anual 2015<sup>88</sup>.

601. En relación con la recomendación 1, el Estado ha reiterado entre 2007 y 2015 que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de fecha 6 de marzo de 2003 decretó la nulidad de todo lo actuado por la justicia penal militar y ordenó la remisión de las actuaciones a la justicia ordinaria; en consecuencia la investigación penal fue reasignada mediante resolución de 2 de septiembre de 2005 a la Fiscalía 48 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación la cual continúa en etapa de instrucción. Asimismo, ha reiterado que desde octubre de 1998 se confirmó la decisión de absolver a los miembros de las fuerzas militares en el proceso

<sup>88</sup> Ver CIDH, Ver CIDH, Informe Anual 2008, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 209 y 213. Disponible en: <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/cap3.D.4sp.htm>

disciplinario que se les siguió y que se modificaron algunas sanciones impuestas por otras decisiones menos lesivas para los investigados (de destitución a reprensión y de suspensión de funciones a absolución).

602. Respecto de la tercera recomendación, el Estado ha informado sobre la incorporación de manera permanente, por parte del Ministerio de Defensa Nacional, de políticas sobre Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) dirigidas a todos los miembros de la Fuerza Pública y el desarrollo de principios rectores de liderazgo, promoción y respeto de los DDHH y DIH; así como de prevención, disuasión, control, integración y reconocimiento. Adicionalmente, informó que mediante la Directiva No. 003 de 8 de enero de 2013, el Comando General de las FF.MM., se ajustó la organización y funcionamiento de las Inspecciones Delegadas, incluyéndose dentro de sus funciones temas relacionados con DDHH, DIH y otros. Igualmente reiteró información relativa a las medidas adoptadas a nivel interno para evitar homicidios en personas protegidas, dentro de las que destacaron los avances alcanzados en cuanto a los procedimientos de inteligencia, operaciones y logística, con el establecimiento de un Manual Operacional para ser utilizado por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; así como la expedición de la Ley 1621 del 17 de abril de 2013, que tiene como objeto fortalecer el marco jurídico de los organismos que cumplen actividades de inteligencia y establece límites y mecanismos de control y supervisión para dichas actividades, que deberán adecuarse “al cumplimiento estricto de la Constitución, la Ley, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

603. El Estado ha informado sobre la lista de los diferentes cursos, talleres, seminarios y diplomados mencionados en notas de años anteriores diseñados e impartidos con el fin de ampliar y reforzar los conocimientos jurídicos y operacionales de las fuerzas armadas, dentro de los cuales se resaltan temas coyunturales como violencia sexual, derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho operacional, misión médica, formación de instructores, uso de la fuerza por el mantenimiento del orden. Dentro de los avances, el Estado mencionó la implementación por parte de la Fuerza Aérea desde el año 2004 la figura del Asesor Jurídico Operacional la cual fue consolidada con la Directiva Permanente No. 208; el Diseño del Plan de carrera por parte de las Fuerzas para los Abogados; el Avance normativo a partir de las Directivas No. 208 y 40 de 2009, así como la No. 20 de 2011; la adecuación de los contenidos y procesos tanto de enseñanza como aprendizaje a cada nivel de responsabilidad en escalas del mando; la Creación de la Escuela de DDHH y DIH del Ejército Nacional, como mecanismo útil y especializado en la formación y capacitación en DDHH y DIH en las FF.MM. y Policía Nacional; los talleres de capacitación coyunturales extracurriculares para la integración de los DDHH y DIH organizados por las unidades militares; la Creación de los Grupos Operativos Especiales de Investigación Criminal como apoyo en la lucha contra la criminalidad; el Diseño de procedimientos para la activación y desarrollo de la Comisión Inspección Inmediata -CII- a cargo de la Inspección General del Comando General; y el proceso de revisión de las reglas de encuentro en el contexto de la actualización del Manual de Derecho Operacional.

604. Asimismo informó que se pusieron en marcha varias estrategias. Entre ellas, la figura de Asesores Jurídicos Operacionales como una estrategia dentro de la Política Integral de Derechos Humanos y DIH; los Inspectores Delegados con una función principal de mantener observancia de la normatividad de los DDHH y del DIH; y el Sistema de Recepción de Quejas por presunta violación a los Derechos Humanos e infracción al DIH, atribuidas a integrantes de las Fuerzas Militares. En cuanto a la Revisión de la Instrucción, el Estado agregó que se elaboró un Plan Estratégico del Sistema Educativo-PESE por el cual actualmente se están desarrollando las actividades previstas para la implementación del sistema, y en base a un proceso de revisión del PESE, que se llevó a cabo en el año 2010 donde se evidenció la necesidad de fortalecer la transversalización del DIDH y del DICA en el Sistema Educativo de las FFMM, se proyectaron tareas hasta el año 2019, entre las cuales estaría incluida la capacitación de los docentes, instructores y multiplicadores. Adicionalmente, un Modelo Único Pedagógico-MUP desde el año 2003; un Grupo de Entrenamiento por Escenarios Regionales-GEPER desde el año 2009; la creación de un “Sistema Conjunto, Coordinado, Combinado y de Fuerza de Lecciones Aprendidas” para la Fuerza Pública desde el año 2010 a través del cual se busca socializar la metodología, para desarrollar ejercicios prácticos de aplicación del DIH, con énfasis en las normas aplicables al conflicto armado no internacional; implementación de Talleres de capacitación coyuntural a través de actividades de capacitación extracurricular, coyuntural y complementaria del MUP en todos los niveles del mando; la aplicación del Acompañamiento Policía Judicial cada vez que se producen ciertos resultados operacionales en desarrollo de las operaciones militares, para adelantar las diligencias

judiciales en el lugar de los hechos; y por último la creación y funcionamiento de la Comisión de Inspección Inmediata con el fin de determinar la ocurrencia de hechos constitutivos de presunta violación a los DDHH e infracciones al DIH atribuidos a miembros de las Fuerzas Militares.

605. En relación a la tercera recomendación, la CIDH ha valorado los esfuerzos del Estado en cuanto a las acciones realizadas para prevenir hechos similares a los del presente caso y a garantizar los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, principalmente a través de la enseñanza e instrucción en materia de DDHH y DIH a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ha reiterado en años anteriores que de la información aportada por el Estado, no se desprende las posibles medidas adoptadas para “dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por la propia Comisión en la investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria”.

606. El 27 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Los peticionarios no presentaron información actualizada sobre el cumplimiento.

607. El 8 de noviembre de 2016, el Estado informó en relación a la recomendación 1 que aún sigue pendiente de resolverse la situación jurídica de tres militares quienes se encuentran actualmente bajo investigación de la Fiscalía, y de manera general indicó que se estaría contemplando la posibilidad de declarar el caso como crimen de lesa humanidad para evitar su prescripción. Al respecto, la CIDH toma nota de la información suministrada y queda a la espera de la actualización del Estado sobre el particular.

608. En relación a la tercera recomendación, el Estado se refirió al Acto Legislativo No. 1 del 25 de julio de 2015 que modificó el artículo 221 de la Constitución Política, al permitir que ciertas conductas cometidas por miembros de la fuerza pública en servicio activo y con relación al mismo, sean conocidas por la jurisdicción penal militar. Al respecto, se instauró una demanda de inconstitucionalidad, que habría sido resuelta a través de la Sentencia C-084-162 del 24 de febrero de 2016 de la Corte Constitucional, que habría encontrado, según lo indicado por el Estado, la norma exequible. Asimismo, el Estado se refirió a la restructuración de la Justicia Penal Militar a la Ley 1765 de 2015, sobre la cual, la Corte Constitucional habría decretado la inexecutable de cierto articulado relacionado con el principio de oportunidad, a través de Sentencia C 326/165 de 22 de junio de 2016. Al respecto, la CIDH toma nota de la información suministrada por el Estado, y dado el conjunto de elementos descritos por el Estado en esta oportunidad, así como en años anteriores, la CIDH considera que existe un cumplimiento parcial de la recomendación 3, en lo que se refiere a capacitaciones de funcionarios estatales como medidas de no repetición. En cuanto al marco normativo presentado por el Estado, la CIDH toma nota de la información expuesta por el Estado y continuará dando seguimiento a su ajuste a los estándares internacionales que han sido reiterados por la CIDH, respecto a la necesidad de asegurar que las violaciones a los derechos humanos sean debidamente investigadas y sancionadas dentro del fuero competente, independiente e imparcial.

609. El 6 de mayo de 2017, los peticionarios informaron a la CIDH que, en relación a la recomendación No. 2, que las víctimas han sido indemnizadas de conformidad con los criterios establecidos por la jurisdicción contencioso administrativa para la época de los hechos; y destacan que incluso otras personas que no representan también fueron beneficiados de dichos procesos, y que, “hasta la fecha no han tenido conocimiento de personas que no hubieran podido acceder al derecho a la reparación”.

610. Al respecto, la Comisión valora la información aportada por los peticionarios y aprovecha la oportunidad para declarar el cumplimiento total de la recomendación número 2.

611. En relación a la acción penal contenida en la recomendación No. 1, los peticionarios indicaron que hace 14 años la Corte Suprema de Justicia declaró nulas las actuaciones en sede militar; para que los hechos fueran investigados por la jurisdicción ordinaria. Igualmente, resaltan que, de acuerdo con el informe estatal, no se ha resuelto la situación jurídica de tres miembros de la fuerza pública, que de conformidad con los informes presentados a la CIDH, fueron vinculados mediante indagatoria hace más de 3 años, decisión que no debería extenderse en el tiempo.

612. Finalmente, sobre la recomendación No. 3, referida a la adopción de garantías de no repetición, los peticionarios indicaron que, han sido de público conocimiento las diferentes iniciativas gubernamentales para ampliar la competencia de la jurisdicción penal militar, se refirieron así a 10 iniciativas legislativas presentadas entre 2010 y 2015 que no tuvieron éxito, pero cuyo propósito era sustraer a agentes estatales responsables de violaciones de derechos humanos de la acción de la Fiscalía, bajo la consigna de que las acciones penales frente a ejecuciones extrajudiciales afectaban la moral de la tropa y la seguridad jurídica de los miembros de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, los peticionarios destacaron que el Ministerio de Defensa ha venido impulsando una interpretación distorsionada del DIH, que concibe el marco normativo como una licencia al Estado para, a) usar la máxima fuerza disponible, b) privilegiar la fuerza letal en las operaciones y, c) considerar las muertes de civiles como hechos incidentales en pos de la ventaja militar.

613. Por último, los peticionarios señalaron la importancia de la Ley 1765, aprobada por el Congreso de la República en 2015, mediante la cual se reestructuró la justicia penal militar y policial, se ampliaron delitos que son puestos bajo la competencia de la justicia penal militar, se dio el establecimiento del principio de oportunidad para militares, concedido por la Fiscalía Militar, y se vulneró la independencia judicial y los derechos de víctimas, puesto que la mayoría de los funcionarios de la justicia penal militar deberán ser militares. En ese sentido, los peticionarios consideran que existe una ausencia de representación mediante la figura de la parte civil, como consecuencia del paso a un sistema penal acusatorio, e indicaron que el 13 de julio de 2016, la Corte Constitucional anunció el sentido del fallo de la sentencia C-372 de 2016 que resuelve la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por organizaciones de derechos humanos, declarando ajustada a Derecho que, la Justicia Penal Militar tendrá la competencia de conocer del homicidio en todas sus modalidades, con lo cual se ocuparían de crímenes como los falsos positivos y los delitos contra la protección de la información y de datos, así como que podrían ser de su competencia todo tipo de infracciones al derecho humanitario.

614. Igualmente los peticionarios mencionaron que, la Corte no avaló el principio de oportunidad para los delitos de los militares, pero sí avaló la celebración de preacuerdos y negociaciones de los militares implicados en estos delitos con sus pares de la justicia castrense, sin la exigencia que se hace para estos preacuerdos en la justicia ordinaria de requerir para acceder a los beneficios, una contribución eficaz del imputado o acusado para dismantelar la estructura delictiva implicada en los crímenes, a su vez, concede la creación de un Cuerpo Técnico de Investigaciones dentro de la justicia militar y policial.

615. Los peticionarios indicaron que con las reformas del Acto L. 01 de 2015 y la Ley 1765 de 2015, se ha producido un marcado retroceso en la limitación de la jurisdicción penal militar en relación con violaciones a derechos humanos, y se retrocedió en materia de garantías de no repetición.

616. El 26 de mayo de 2017 el Estado presentó información a través de la cual reiteró lo expuesto con anterioridad en fecha 8 de noviembre de 2016.

617. El 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el avance en el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe, no se ha presentado la información requerida.

618. A la luz de lo anterior, la Comisión concluye que el Estado el nivel de cumplimiento de las recomendaciones es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 11.710, Informe No. 63/01, Carlos Manuel Prada González y Evelio Antonio Bolaño Castro (Colombia)**

619. En el Informe No. 63/01 de fecha 6 de abril de 2001, la Comisión estableció que el Estado era responsable por la violación de la Convención Americana en sus artículos 4, en perjuicio de Evelio Antonio Bolaño Castro, 4 y 5 en perjuicio de Carlos Manuel Prada González, y 8(1), 25 y 1(1) en perjuicio de ambas víctimas y sus familias. Lo anterior, como resultado de la ejecución extrajudicial a manos de agentes estatales de Carlos Manuel Prada González y Evelio Antonio Bolaño Castro y su falta de debido esclarecimiento judicial.

620. En el Informe 63/01, la CIDH formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de Carlos Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaño Castro.
2. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban adecuada y oportuna reparación por las violaciones establecidas en el Informe.
3. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, así como adoptar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por la propia Comisión en la investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria.

621. La CIDH ha venido dando seguimiento al cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones efectuadas. El 2 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información actualizada sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. La respuesta del Estado se recibió el 27 de noviembre siguiente. Los peticionarios no respondieron a la solicitud de información.

622. En relación con la primera recomendación, el Estado ha reiterado que el proceso ha sido reasignado a la Fiscalía 16 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, reiteró que se han emitido decisiones judiciales de condena en contra de 9 personas por el delito de encubrimiento por favorecimiento. Asimismo, indicó que el 2 de mayo de 2012 se dictó sentencia condenatoria en contra de tres personas por los delitos de homicidio agravado en perjuicio de Carlos Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaño, y que estaría pendiente resolver un recurso de apelación interpuesto por la defensa de los sindicados. En vista de ello, el Estado solicitó que la CIDH declare el pleno cumplimiento de la primera recomendación de su Informe 63/01.

623. En relación con la segunda recomendación, el Estado reiteró que desde el año 2009 se le dio cumplimiento con el pago de los perjuicios morales a los familiares de Carlos Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaño y solicitó que la CIDH declare el cumplimiento de la obligación contenida en la segunda recomendación del Informe 63/01.

624. Respecto de la tercera recomendación, el Estado reiteró la información presentada desde el año 2010 sobre la implementación de políticas y líneas de acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dirigidas a todos los miembros de la Fuerza Pública. El Estado solicitó nuevamente que, por la importancia del tema y su profundo impacto frente a la evaluación del deber de garantía y protección de los derechos humanos, así como por el permanente acompañamiento que sobre esa problemática viene ejerciendo desde todas las ramas del poder público, declare el pleno cumplimiento de la tercera recomendación.

625. Por su parte, los peticionarios reconocieron que se han dado importantes avances en relación con el cumplimiento de la primera recomendación, reconociendo en ese sentido las sentencias condenatorias que se han emitido por los hechos del presente caso. No obstante, consideran que las investigaciones deben permanecer abiertas “hasta que se individualicen, juzguen y sancionen la totalidad de responsables implicados”, y que se examine la figura del “encubrimiento” como forma de imputación penal ya que podría constituir un “mecanismo de impunidad frente a ejecuciones extrajudiciales”. En relación con la segunda recomendación, los peticionarios reconocieron como un avance significativo la indemnización pecuniaria a las víctimas de conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Estado en el presente caso, y consideran que la misma debería estar acompañada de otras acciones o mecanismos que contribuyan a la reparación integral de los familiares de las víctimas.

626. En relación con la tercera recomendación, los peticionarios señalaron con anterioridad, como un aspecto grave en relación con su cumplimiento, la reforma a la Constitución Política aprobada por el Congreso de la República mediante el Acto Legislativo 02 de 2012, relativa al fuero penal militar, considerando que la misma ampliaba de manera sustancial el alcance de la competencia de la justicia penal militar para conocer infracciones al derecho internacional humanitario, y por esta vía, violaciones de derechos humanos como las cometidas en el presente caso<sup>89</sup>.

627. El 1 de diciembre de 2014, la CIDH volvió a solicitar información sobre el cumplimiento de las recomendaciones a ambas partes. El 4 de febrero de 2015, el Estado reiteró la información presentada en relación al proceso penal e informó que en la actualidad, desde el 22 de julio de 2014, el proceso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia para el trámite de un Recurso Extraordinario de Casación presentado por el apoderado de los sindicatos contra la sentencia del Tribunal Superior de Antioquía. Adicionalmente, el Estado indicó nuevamente lo establecido en notas enviadas entre el 2008 al 2013 en relación al proceso disciplinario. Al respecto manifestó que desde el año 1995 el Comandante del Ejército Nacional, en cumplimiento del fallo disciplinario emitido por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares en el año 1994, resolvió separar en forma absoluta de las Fuerzas Militares a varios militares, así como anotar en la hoja de vida la sanción de los funcionarios retirados. En relación a la segunda recomendación, el Estado reiteró su cumplimiento desde el 27 de octubre de 2009, fecha en la cual el Ministro de Defensa ordenó pagar el monto establecido en sentencia de fecha 26 de marzo de 2009 por la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por concepto de perjuicios morales sufridos por los familiares de las víctimas.

628. En cuanto a la tercera recomendación, el Estado indicó nuevamente la incorporación permanente a través del Ministerio de Defensa Nacional de políticas en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario – DIH, dirigidas a todos los miembros de la Fuerza Pública incluidas aquellas medidas para el Fortalecimiento personal especializado en las Fuerzas y en Policía en derechos humanos y DIH; para la Capacitación a miembros de la Fuerza Pública en temas de derechos humanos y DIH; los Seminarios y diplomados en la materia; la Publicación de cartillas e impresiones sobre DIH y otros aspectos relacionados a los DDHH; las Pistas de DDHH y DIH para la capacitación de unidades militares; y la Implementación de buenas prácticas operacionales.

629. El 3 de septiembre de 2015, la CIDH volvió a solicitar información sobre el cumplimiento de las recomendaciones a ambas partes. El 16 de noviembre de 2015, el Estado reiteró la información presentada en febrero del mismo año, en cuanto al cumplimiento de las tres recomendaciones.

630. Hasta la fecha no se cuenta con la respuesta de la parte peticionaria.

631. En vista de todo lo anterior, la CIDH observa y valora los esfuerzos del Estado para cumplir con la primera recomendación y al mismo tiempo, insta al Estado a seguir avanzando de manera eficaz con la investigación y juicio de los hechos. Por otro lado, la Comisión observa que ambas partes reconocen el pago por parte del Ministerio de Defensa de las sumas establecidas por el Consejo de Estado en sentencia de 26 de marzo de 2009 a los familiares de Carlos Manuel Prada y Evelio Bolaños. Sin embargo, la CIDH toma nota que el 21 de marzo de 2013 los peticionarios manifestaron que dicha sentencia contribuía a la reparación de los familiares pero consideraban que “debe estar acompañada de otras acciones de reparación que dignifiquen la memoria de las víctimas, protejan a su familia (...)”. En este sentido, la CIDH observa que de comunicaciones posteriores no se desprende la posición del Estado en cuanto a la observación realizada por los peticionarios. Al respecto, la Comisión no cuenta con suficientes elementos para valorar el cumplimiento de una adecuada y oportuna reparación.

632. En relación a la tercera recomendación, la CIDH toma nota de las medidas creadas e implementadas por el Estado y valora los esfuerzos en cuanto a las acciones realizadas para prevenir hechos similares a los del presente caso y a garantizar los derechos fundamentales reconocidos en la Convención

---

<sup>89</sup> Nota de Secretaría: Para la fecha de la aprobación del presente Informe Anual, y de acuerdo a información de público conocimiento, mediante decisión de la Corte Constitucional se había declarado inexecutable el Acto Legislativo 02 de 2012. Ver: Comunicado de prensa No. 41 de la Corte Constitucional, 25 de octubre de 2013. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/>

Americana, principalmente a través de la enseñanza e instrucción en materia de DDHH y DIH a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, de la información aportada por el Estado, no se desprende las posibles medidas adoptadas para “dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por la propia Comisión en la investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria”. En este sentido, la CIDH invita al Estado a proporcionar a esta Comisión y a los peticionarios, información detallada y específica al respecto.

633. El 27 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

634. El 9 de febrero de 2017, los peticionarios presentaron información actualizada sobre el cumplimiento, indicando que, con relación a la recomendación No. 2, las víctimas que representan han sido efectivamente beneficiadas de los procesos contenciosos administrativos en el orden nacional, sin embargo, los familiares de las víctimas no han sido beneficiarios de otro tipo de reparación adicional a la indemnización. Señalaron frente a la recomendación No. 1 que, desde el 2 de febrero de 2017, se remitió un nuevo derecho de petición a la Fiscalía 16 Especializada, tal y como se había realizado anteriormente en fecha 23 de noviembre de 2015, a través del cual se solicitó información sobre las actuaciones realizadas en el marco de la investigación en contra del Coronel Becerra, sin obtener una respuesta.

635. Finalmente, respecto a la recomendación No. 3, los peticionarios indicaron que en los últimos años se han realizado reformas constitucionales y legislativas, las cuales tienen como objetivo ampliar la competencia de la Justicia Penal Militar para que esta pueda conocer de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, lo cual es preocupante debido a que de esta manera se institucionaliza una visión distorsionada del Derecho Internacional Humanitario, y se ven limitados los avances en garantías de no repetición frente a graves crímenes cometidos por agentes estatales. Igualmente, mencionaron que, dado el contexto actual de negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y los grupos guerrilleros FARC-EP y ELN, y su relación con este caso, resulta de vital importancia que se adopten todos los mecanismos necesarios para brindar protección a quienes conforman los equipos negociadores y los exintegrantes de grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida civil.

636. El 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre los avances en el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha suministrado información adicional.

637. Por lo expuesto la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 11.712, Informe No. 64/01, Leonel de Jesús Isaza Echeverry (Colombia)**

638. En el Informe No. 64/01 del 6 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación del derecho a la vida de Leonel de Jesús Isaza Echeverry, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana; el derecho a la integridad personal de la señora María Fredesvinda Echeverry consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana; el derecho a la integridad personal y el incumplimiento de la obligación de adoptar medidas especiales de protección con relación a la niña Lady Andrea Isaza Pinzón, establecidos en los artículos 5 y 19 de la Convención Americana; así como del incumplimiento con la obligación de brindar la debida protección judicial a las víctimas del presente Caso conforme a los artículos 8 y 25, en conjunción con el artículo 1(1) del Tratado. El presente Caso versa sobre la responsabilidad de agentes del Estado en la muerte del señor Leonel de Jesús Isaza Echeverry, los perjuicios a la integridad personal de la señora María Fredesvinda Echeverry y la niña Lady Andrea Isaza Pinzón, y la falta de debido esclarecimiento judicial.

639. La CIDH formuló al Estado colombiano las siguientes recomendaciones:

1. Realizar una investigación imparcial y efectiva ante la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables por la ejecución extrajudicial del señor Leonel de Jesús Isaza Echeverry.
2. Adoptar las medidas necesarias para reparar las consecuencias de las violaciones a la Convención Americana cometidas en perjuicio de María Fredesvinda Echeverry y Lady Andrea Isaza Pinzón e indemnizar debidamente a los familiares de Leonel de Jesús Isaza Echeverry.
3. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, así como adoptar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por la propia Comisión en la investigación y juzgamiento de Casos similares por la justicia penal ordinaria.

640. La CIDH ha venido dando seguimiento al cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones efectuadas. Así, el 3 de noviembre de 2012 se realizó una reunión de trabajo entre las partes en la que se abordó las medidas adoptadas para el cumplimiento de la primera y tercera recomendación, en particular, sobre la posibilidad de que este tipo de casos no sean investigados por la jurisdicción militar. El 2 de enero de 2013 el Estado presentó información respecto de las medidas adoptadas para el cumplimiento de las tres recomendaciones. El 5 de febrero de 2013, el Estado remitió información adicional sobre el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo de noviembre de 2012.

641. Sobre la primera recomendación, el Estado ha reiterado la información sobre la decisión dictada en noviembre de 2004 que absolvió a los acusados en aplicación del principio *in dubio pro reo*. Sin embargo, agregó que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de revisión del fallo con el propósito de garantizar la correcta observancia de las formas propias del debido proceso y la garantía del juez natural<sup>90</sup>.

642. Sobre la segunda recomendación, el Estado ha reiterado que mediante Resolución de Pago No. 2512 se dio cumplimiento al acuerdo conciliatorio, habiéndose efectuado el pago de indemnización a favor de María Fredesvinda Echeverry de Isaza y Lady Andrea Isaza Pinzón y solicitó que la CIDH declare el cumplimiento de la obligación contenida en la segunda recomendación del Informe 64/01.

643. Respecto de la tercera recomendación, el Estado reiteró la información presentada en los años 2010 y 2011 sobre la incorporación de manera permanente, por parte del Ministerio de Defensa Nacional, de políticas sobre Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) dirigidas a todos los miembros de la Fuerza Pública y el desarrollo de principios rectores de liderazgo, promoción y respeto de los DDHH y DIH; así como de prevención, disuasión, control, integración y reconocimiento. Refirió a la Política Integral de DDHH y DIH que fue expedida en enero de 2008, al funcionamiento de la Escuela de DDHH y DIH de las Fuerzas Militares a partir del año 2009 y al avance permanente de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la definición de los límites del fuero penal militar. En vista de ello, el Estado solicitó que la CIDH declare el pleno cumplimiento de la tercera recomendación de su Informe 64/01.

644. El 02 de octubre de 2013 y el 26 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó a ambas partes información actualizada sobre el cumplimiento de los puntos pendientes.

<sup>90</sup> La remisión de la fecha de presentación del auto de revisión y una copia del mismo fue realizada por el Estado en su comunicación de 5 de febrero de 2013, sin embargo, a la fecha de aprobación del presente Informe Anual, la Comisión no recibió información de las partes sobre el trámite de dicha acción.

645. Los peticionarios respondieron el 12 de febrero de 2015 indicando en relación a la investigación, que no ha habido mayores avances desde la reunión de trabajo de 2012. Según los peticionarios la Procuraduría General de la Nación había informado el 6 de noviembre de 2012 que se había radicado una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la decisión que absolvió a los implicados ante la Justicia Penal Militar. Los peticionarios indicaron que el 12 de junio de 2014 radicaron una petición ante la PGN solicitando información sobre esta revisión. Sin embargo, hasta ese momento, no habían recibido respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia ni de la PGN.

646. En relación a la recomendación 3, los peticionarios indicaron que actualmente en el Congreso colombiano se adelantan tres iniciativas legislativas referidas al sistema acusatorio en la justicia penal militar; investigación, sanción y juzgamiento de las fuerzas militares conforme al DIH; y reforma constitucional de juzgamiento de las fuerzas militares por delitos cometidos en servicio activo y con ocasión del servicio. Según los peticionarios el objetivo de las iniciativas es ampliar el alcance de la justicia penal militar al juzgamiento de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Los peticionarios consideraron que lo anterior pone en riesgo los avances en materia de los estándares establecidos por la CIDH en los distintos casos relacionados con el tema y en los informes de país respectivos, así como los avances de la Corte Constitucional en sus sentencias sobre esta temática.

647. El 12 de marzo de 2015, se recibió la respuesta del Estado. En dicha comunicación, en cuanto a la primera recomendación reiteró la información presentada el 2 de enero y el 5 de febrero de 2013. Sobre el proceso penal, el Estado indicó que la acción de revisión presentada por la Procuraduría General de la Nación contra la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado Segundo de División adscrito a la Justicia Penal Militar, y confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior Militar, se mantiene en trámite; asimismo sobre el proceso disciplinario indicó que el 14 de abril de 1998 el Procurador General de la Nación modificó la sanción de suspensión por el término de 90 días sin remuneración proferida por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares en contra de un Teniente investigado por los hechos ocurridos en el marco del presente caso, con la sanción de represión severa. Agregó que la Procuraduría General de la Nación consideró que se había configurado la responsabilidad disciplinaria mas no la penal por lo que consideró que el proceso penal militar había estado ajustado a derecho, compartiendo la decisión de absolver penalmente a los uniformados investigados.

648. En relación a la segunda recomendación, el Estado reiteró que el Ministerio de la Defensa por medio de la Resolución No. 2512 de 27 de junio de 2007 dio cumplimiento al acuerdo conciliatorio aprobado por el Consejo de Estado el 28 de septiembre de 2006 y se realizaron los pagos indemnizatorios a los familiares de las tres víctimas. Y en cuanto a la tercera recomendación, Estado reiteró la información presentada en los años 2010, 2011 y 2013 sobre la incorporación de manera permanente, por parte del Ministerio de Defensa Nacional, de políticas sobre Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) dirigidas a todos los miembros de la Fuerza Pública y el desarrollo de principios rectores de liderazgo, promoción y respeto de los DDHH y DIH; así como de prevención, disuasión, control, integración y reconocimiento, destacando del mismo modo la labor voluntaria que han tenido los jueces penales militares para enviar a la justicia ordinaria las investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos y al DIH por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, indicando que del año 2008 al 2010 se han remitido de forma voluntaria 744 casos a la justicia ordinaria. Y en este sentido reiteró su solicitud para que se declare el pleno cumplimiento de esta recomendación.

649. Igualmente indicó que, debido a la labor voluntaria que han tenido los jueces penales militares para enviar a la justicia ordinaria las investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos y al DIH por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, se han remitido a la Justicia Ordinaria desde el año 2008 a 27 de enero del 2015, un total de 1.298 investigaciones. Al mismo tiempo, hizo referencia a lo informado por el Estado en diferentes comunicaciones respecto al mecanismo del artículo 41 de la Convención Americana y a observaciones presentadas ante la Comisión en relación al Capítulo IV del Informe de País emitido en el 2015. En específico, informó que el Acto Legislativo No. 1 del 2015 aunque ya fue aprobado, aún puede ser evaluado por la Corte Constitucional mediante la acción de constitucionalidad, lo cual se encuentra en curso.

650. El 27 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 7 de noviembre de 2016, el Estado informó que mediante sentencia de 2 de diciembre de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de analizar los hechos, decidió dejar sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal Militar el 7 de junio de 2005, así como la decisión del Juzgado Segundo de 23 de noviembre de 2004, así como todo lo actuado en el proceso; y ordenó remitir el expediente a la Fiscalía General de la Nación para que continúe con la investigación de los hechos, para lo cual se le habría remitido dicho proceso en febrero de 2016.

651. En relación a la recomendación No. 2 sobre reparación, el Estado proporcionó en esta oportunidad copia de la Resolución No. 2512 de 27 de junio de 2007, en la cual se da cumplimiento al acuerdo conciliatorio, así como copia de la orden de pago 3592 expedida por la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional con la constancia de estatus “pagada”. Finalmente, en relación a la recomendación 3, el Estado se refirió al Acto Legislativo No. 1 del 25 de julio de 2015 que modificó el artículo 221 de la Constitución Política, al permitir que ciertas conductas cometidas por miembros de la fuerza pública en servicio activo y con relación al mismo, sean conocidas por la jurisdicción penal militar. Al respecto, se instauró una demanda de inconstitucionalidad, que habría sido resuelta a través de la Sentencia C-084-162 del 24 de febrero de 2016 de la Corte Constitucional, que habría encontrado, según lo indicado por el Estado, la norma exequible. Asimismo, el Estado se refirió a la reestructuración de la Justicia Penal Militar a la Ley 1765 de 2015, sobre la cual, la Corte Constitucional habría decretado la inexequibilidad de cierto articulado relacionado con el principio de oportunidad, a través de Sentencia C 326/165 de 22 de junio de 2016.

652. La CIDH valora la información suministrada por el Estado en relación al cumplimiento de la recomendación 1, y continuará a la espera de información adicional sobre los avances en la investigación. En relación a la recomendación 2, la CIDH valora los elementos proporcionados por el Estado, y considera que la recomendación No. 2 se encuentra cumplida totalmente. Finalmente, en relación a la recomendación 3, la CIDH toma nota de la información suministrada por el Estado, y dado el conjunto de elementos descritos por el Estado en esta oportunidad, así como en años anteriores, la CIDH considera que existe un cumplimiento parcial de la recomendación 3. La CIDH toma nota de la información proporcionada por el Estado y continuará dando seguimiento a su ajuste a los estándares internacionales que han sido reiterados la CIDH, respecto a la necesidad de asegurar que las violaciones a los derechos humanos sean debidamente investigadas y sancionadas dentro del fuero competente, independiente e imparcial.

653. El 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes acerca de los avances en el cumplimiento.

654. El 20 de octubre de 2017, el Estado presentó información acerca del cumplimiento señalando que, en cuanto a la recomendación No. 1 la hipótesis explorada por la Fiscalía sobre los hechos investigados es que fueron cometidos por miembros del Batallón de Artillería No 2. Nueva Granada del Ejército Nacional y presuntamente, la muerte del señor Leonel de Jesús Isaza y las heridas causadas a Aria Fredesvinda Echeverry Isaza, Lady Andrea Isaza y Herencia Pinzón Cala fueron consecuencia de un ataque de la fuerza pública haciéndolos pasar por miembros de grupos armadas ilegales.

655. Respecto a la recomendación No. 3 indicó que, el Estado Colombiano ha precisado que en la legislación penal colombiana no está contemplado el delito de ejecución extrajudicial, pero se han investigado estos casos de acuerdo con los tipos penales de homicidio agravado (violación a los DDHH) y homicidio en persona protegida (infracción al DDHH), los cuales conllevan penas severas para los responsables. El Estado indicó en la actualidad, la Fiscalía General de la Nación despliega las actuaciones necesarias para revelar la realidad de los homicidios presentados como bajas en combate por parte de los miembros de la Fuerza Pública, y que, con corte al mes de abril de 2017 la Dirección Nacional Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación informó que tenía activadas un total de 2.104 investigaciones, las cuales se surten bajo dos regímenes procedimentales, la Ley 600 de 2000, sobre el sistema penal inquisitivo y la Ley 906 de 2004 sobre el sistema penal acusatorio.

656. En vista de todo lo anterior, la CIDH insta al Estado a seguir avanzando de manera eficaz con la investigación y juicio de los hechos y sanción de los responsables. Por otro lado, la Comisión toma nota que,

si bien el Estado proporcionó copia de la Resolución No. 2512 de 27 de junio de 2007 emanada del Ministerio de la Defensa la cual ordena la liquidación de las sumas correspondientes, los peticionarios en su última comunicación del 12 de febrero de 2015 manifestaron no tener conocimiento de que los familiares de las víctimas efectivamente hayan sido reparadas. Al respecto, la CIDH reitera la solicitud al Estado de presentar constancia de pago del monto económico a los familiares y el cumplimiento total de esta recomendación.

657. En relación a la tercera recomendación, la CIDH observa que no cuenta con suficientes elementos para valorar el cumplimiento de esta recomendación en su totalidad.

658. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

### **Caso 11.141, Informe No. 105/05, Masacre de Villatina (Colombia)**

659. El 27 de octubre de 2005, mediante el Informe No. 105/05<sup>91</sup>, la Comisión aprobó y reconoció el cumplimiento parcial de un acuerdo de solución amistosa suscrito el 29 de julio de 2002 en el caso conocido como la “Masacre de Villatina”. En resumen, la petición alegaba la responsabilidad de agentes del Estado en la masacre de los niños y niñas Johana Mazo Ramírez, Johny Alexander Cardona Ramírez, Ricardo Alexander Hernández, Giovanni Alberto Vallejo Restrepo, Oscar Andrés Ortiz Toro, Ángel Alberto Barón Miranda, Marlon Alberto Álvarez, Nelson Dubán Flórez Villa y el joven Mauricio Antonio Higueta Ramírez perpetrada el 15 de noviembre de 1992 en el barrio de Villatina de la ciudad de Medellín.

660. El referido acuerdo de solución amistosa recoge los términos de un acuerdo originalmente firmado el 27 de mayo de 1998, en el curso de un primer intento de alcanzar una solución amistosa del asunto. En el acuerdo, el Estado reconoce la responsabilidad internacional por la violación de la Convención Americana, el derecho a la justicia y la reparación individual de los familiares de las víctimas, así como un elemento de reparación social con componentes referidos a salud, educación, y proyecto productivo. Asimismo, prevé la instalación de un monumento en un parque de la ciudad de Medellín a los fines de la recuperación de la memoria histórica de las víctimas. La Comisión observa que la parte dispositiva del acuerdo refleja las recomendaciones del Comité de Impulso para la Administración de Justicia creado en el marco del acuerdo originalmente firmado el 27 de mayo de 1998.

661. En el Informe No. 105/05 la Comisión resaltó el cumplimiento por parte del Estado de gran parte de los compromisos asumidos en el acuerdo, específicamente: i) los pagos correspondientes a los montos indemnizatorios conciliados por las partes en beneficio de los familiares de las víctimas; ii) en cuanto a las medidas de reparación vinculadas a la salud en las cuales el Estado se comprometió al desarrollo de un proyecto tendiente a mejorar la asistencia básica en salud para los habitantes de Villatina y la instalación de una placa conmemorativa en el Centro de Salud, la CIDH verificó que se concretó en la construcción del Centro de Salud que funciona en el barrio y asimismo, la Comisión tomó conocimiento de que las placas en conmemoración de la memoria de las víctimas ya habían sido instaladas en el centro de salud; iii) En relación con las medidas de reparación colectivas vinculadas a la educación en base a la cual el Estado se comprometió a adecuar la Escuela primaria “San Francisco de Asís” para que también preste el servicio de educación básica secundaria, la CIDH verificó que la planta física había sido reformada satisfactoriamente y los cursos habían abierto gradualmente; iv) En relación con las medidas de reparación colectivas vinculadas a la puesta en marcha de un proyecto productivo, la CIDH confirmó mediante un informe que presentaron las partes en conjunto de fecha 17 de febrero de 2005 como el Estado cumplió con los términos de cumplimiento de los compromisos relativos al apoyo al proyecto productivo, incluyendo el pago de perjuicios por el paro forzoso; y finalmente en relación a la construcción de una obra artística, con el fin de recuperar la memoria de los niños y desagraviar y reparar moralmente a los familiares de las víctimas, la CIDH observó que el 13 de julio de 2004 se celebró el acto de inauguración del parque monumento en la plaza del periodista en la ciudad de Medellín, el cual contó con la asistencia de las madres de las víctimas, el Vicepresidente de la República, el Ministro de Defensa, el Vicecanciller, el Director de la Policía Nacional, autoridades de la Alcaldía de Medellín,

<sup>91</sup> Informe No. 105/05, Caso 11.141, Masacre de Villatina, Colombia, 27 de octubre de 2005, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/Colombia11141.sp.htm>.

autoridades de la Iglesia, los peticionarios en el caso 11.141 y la CIDH, representada por la Comisionada Susana Villarán y el Secretario Ejecutivo, Santiago Cantón.

662. De la misma forma, la CIDH en el mencionado informe llamó al Estado a continuar cumpliendo con el resto de los compromisos asumidos, en particular el de brindar las debidas garantías y la protección judicial a las víctimas y sus familiares conforme a lo prescrito en los artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana mediante la continuación con la investigación de los hechos que permita la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables. Asimismo, la CIDH indicó que continuaría con la supervisión del punto relacionado con la difusión el contenido del acuerdo de solución amistosa, por el cual según lo acordado por las partes, el Estado debe publicar y difundir, en coordinación con los peticionarios, quinientos ejemplares del texto completo del mismo, incluyendo los documentos que hacen parte de él y sus anexos.

663. En el año 2012, el Estado reiteró que actualmente se adelanta una investigación en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y que el despacho a cargo ordenó una serie de diligencias con el fin de avanzar en la determinación de los posibles autores y cómplices de los hechos materia del caso. Asimismo, informó que el despacho de conocimiento se encuentra estudiando la posibilidad de presentar, en un futuro, un recurso extraordinario de revisión de la sentencia absolutoria y las preclusiones proferidas. En cuanto a la publicación y divulgación del acuerdo de solución amistosa, el Estado informó que no se pudo llegar a una concertación con los representantes de las víctimas por lo que “procederá a realizar la publicación y divulgación del acuerdo de solución amistosa”.

664. El 02 de octubre 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. Mediante comunicación de fecha 25 de marzo de 2014, el Estado colombiano remitió dicha información. En materia de justicia, el Estado señaló que los hechos continúan siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y que por el momento no se cuenta con los elementos de juicios necesarios para impetrar la acción de revisión, por lo que seguirá informando a la CIDH sobre este punto. Sobre la publicación y divulgación del acuerdo de solución amistosa, el Estado comunicó que el 13 de marzo de 2014 se sostuvo una reunión entre las partes en la ciudad de Medellín con el fin de trabajar de manera conjunta en la revisión de los documentos y en la elaboración del contenido de la publicación. El Estado informa que una vez se cuente con la versión final del documento se procederá a adelantar las gestiones pertinentes para su impresión.

665. El 25 de noviembre de 2014, la CIDH volvió a solicitar información sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 24 de marzo de 2015, el Estado reiteró en cuanto al compromiso relacionado con la justicia, lo establecido en la comunicación de marzo de 2014 en cuanto a que los hechos continúan siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y al respecto indicó que se ha propendido por allegar medios de prueba que permitan tomar determinaciones relacionadas con la individualización e identificación de los responsables de los hechos, sin embargo que por el momento no se cuenta con los elementos de juicio necesarios para impetrar la acción de revisión. En relación al compromiso de publicación y divulgación del acuerdo de solución amistosa, el Estado informó que se adelanta un proceso de concertación con el Grupo Interdisciplinario para los Derechos Humanos (GIDH), cuyos resultados y acciones el Estado informará a la Comisión. En el mismo sentido el Estado agregó que la Policía Nacional publicó el Informe No. 105/05 a través de su portal, y asimismo divulgó mediante el instructivo No. 43 del 6 de mayo de 2014, el mismo Informe y solicitó a los Comandantes de Distrito, Estaciones, Subestaciones y CAI a socializar dicho instructivo.

666. El 3 de septiembre de 2015, el 27 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. Hasta la fecha de cierre de este informe los peticionarios no han presentado información actualizada.

667. El 23 de noviembre de 2016, el Estado indicó en cuanto al compromiso relacionado con la justicia, que a esa fecha no se había promovido acción de revisión por cuanto no se han presentado ninguna de las causales de las que se derive su procedencia. Seguidamente, el Estado reiteró su compromiso de informar oportunamente a los peticionarios y a la CIDH sobre los avances de la investigación, así como sobre la

viabilidad de dar inicio a la acción de revisión en el presente caso. En relación al compromiso de publicación y divulgación del acuerdo, el Estado indicó que desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos han venido trabajando de manera conjunta con la representante de las víctimas con el fin de concertar los diferentes aspectos relativos al contenido y diseño de la publicación y en que informará a la CIDH sobre las resultas de dicho proceso.

668. El 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes acerca de los avances en el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado la información requerida.

669. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

### **Petición 401-05, Informe No. 83/08, Jorge Antonio Barbosa Tarazona (Colombia)**

670. El 30 de octubre de 2008, mediante el Informe No. 83/08<sup>92</sup>, la Comisión aprobó y reconoció el cumplimiento parcial de un acuerdo de solución amistosa suscrito el 22 de septiembre de 2006 en la petición 401-05 Jorge Antonio Barbosa Tarazona. En resumen, la petición alegaba la responsabilidad de agentes del Estado en la desaparición de Jorge Antonio Barbosa Tarazona el 13 de octubre de 1992 en el departamento de Magdalena y el retardo injustificado por parte de las autoridades judiciales en investigar, juzgar y sancionar a los presuntos responsables.

671. El referido acuerdo de solución amistosa recoge los términos del acuerdo firmado el 22 de septiembre de 2006. En relación a las medidas detalladas en el texto del acuerdo las partes pactaron respecto de la reparación, los siguientes puntos:

#### **1. EN MATERIA DE REPARACIONES:**

##### **1.1 Reparaciones de carácter pecuniario:**

1.1.1. Una vez homologado el presente acuerdo de solución amistosa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Estado, se compromete a presentar ante el Consejo de Estado una propuesta de conciliación hasta por el cien por ciento (100 %) de la sentencia proferida por el Tribunal Contenciosos Administrativo de Santa Marta, por los daños morales reconocidos a los familiares de Jorge Antonio Barbosa Tarazona; así mismo en dicha diligencia el Estado reconocerá los perjuicios materiales originados por la muerte de Jorge Antonio Barbosa Tarazona con base en el salario mínimo legal vigente.

1.1.2. El Estado se compromete a dar aplicación a la Ley 288 de 1996, con el propósito de reparar en beneficio de la madre, la esposa y la hija, los siguientes perjuicios: el daño inmaterial ocasionado a Jorge Antonio Barbosa Tarazona, por los sufrimientos padecidos desde el momento de su retención hasta la declaración judicial de su muerte por presunción y los gastos en que hayan incurridos los familiares de la víctima anteriormente mencionados, en la búsqueda de sus restos, siempre y cuando aporten las pruebas que así lo demuestren.

##### **1.2 Reparaciones no pecuniarias o medidas de satisfacción:**

1.2.1. En el espacio de suscripción del acuerdo de solución amistosa acordado para el 22 de septiembre de 2006, en la ciudad de Barranquilla, que se realizará con la presencia de los familiares de la víctima, el Estado representado por funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional, solicitará perdón por los hechos que originaron la muerte de Jorge Antonio Barbosa Tarazona; igualmente se entregará a los familiares de la víctima una

---

<sup>92</sup> Informe No. 83/08, Petición 421-05, Jorge Antonio Barbosa Tarazona, Colombia, 30 de octubre de 2009, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/Colombia401-05.sp.htm>

Placa para recordar la memoria de Jorge Antonio Barbosa Tarazona y una Nota de Estilo con un mensaje en el mismo sentido, suscrita por un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional.

1.2.2. El Estado se compromete a valorar al estado de salud y psicológico de la madre, señora e hija de Jorge Antonio Barbosa Tarazona, y les brindará los tratamientos a los que haya lugar.

1.2.3. El Estado se compromete a incluir el presenta caso en el proceso pedagógico del Ejército Nacional, mediante la metodología de “lecciones aprendidas”.

## **2. EN MATERIA DE JUSTICIA:**

El Estado, en el marco del impulso oficioso que le corresponde en materia de investigación, fortalecerá y adelantará gestiones y diligencias especiales que conduzcan a la identificación e individualización de los responsables de la desaparición y posterior muerte de Jorge Antonio Barbosa Tarazona. Asimismo, realizará sus mejores esfuerzos técnicos y científicos en la búsqueda de los restos mortales de la víctima. Cuando se encuentren e identifiquen los restos mortales, el Estado los entregará a la brevedad posible a sus familiares, para que puedan ser honrados, según sus creencias.

672. En el Informe No. 83/08 la Comisión valoró las acciones adelantadas por el Estado para cumplir con los compromisos asumidos en el acuerdo en cuanto a: i) las medidas de reparación de carácter pecuniario por el pago efectivo de \$377.781.470,99 millones de pesos colombianos, en concepto de indemnización, a los familiares de la víctima a través de la Resolución N.º 0062 de 9 de enero de 2007, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional; ii) las medidas de reparación no pecuniarias por cuanto el Estado celebró el 22 de septiembre de 2006, en presencia de altos mandos militares, un acto en el cual el Viceministro de Defensa reconoció en nombre del Estado de Colombia su responsabilidad por la desaparición de Jorge Antonio Barbosa Tarazona, pidió perdón a sus familiares e hizo entrega a los familiares de una placa recordatoria y una nota de estilo; iii) la valoración del estado de salud de los familiares, toda vez que el Ministerio de Protección Social inició la valoración psicológica correspondiente a la madre, esposa e hija de Jorge Antonio Barbosa, y; iv) la medida de recuperación de la memoria, en tanto que informó que la oficina de Educación y Doctrina del Ejército Nacional incluyó el caso de Jorge Antonio Barbosa Tarazona en el proceso pedagógico del Ejército mediante la metodología de “Lección Aprendida” el cual fue difundido al interior de la institución, a las Escuelas de Formación (Escuela Militar de Cadetes y Escuela Militar de Suboficiales de Ejército) y Escuelas de Capacitación. Finalmente, la CIDH concluyó en el informe de solución amistosa que daría seguimiento a los puntos pendientes de cumplimiento relacionados con el esclarecimiento de los hechos, recuperación de los restos de la víctima, y juzgamiento y sanción de los responsables. La CIDH reiteró que existe un cumplimiento total de los compromisos en materia pecuniaria y no pecuniaria como fue indicado en su Informe Anual 2015<sup>93</sup>. En ese sentido, es objeto de seguimiento únicamente la cláusula 5 referida a la justicia.

673. En el 2012, el Estado informó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió la acción de revisión promovida por la Procuraduría General de la Nación contra la providencia de 15 de febrero de 1993 (que cesó el procedimiento contra una persona por delito de homicidio) y la resolución de 15 de abril de 2002 (precluyó la investigación contra tres personas por el delito de secuestro simple). En su sentencia de 26 de septiembre de 2012 la Corte Suprema de Justicia invalidó ambas decisiones y ordenó la remisión del diligenciamiento a la Fiscalía General de la Nación. El Estado indicó que en razón de lo anterior, se reabrirán y continuarán las investigaciones para determinar lo sucedido y las responsabilidades correspondientes.

<sup>93</sup> Ver CIDH, Ver CIDH, Informe Anual 2015, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 525.

674. En cuanto a la búsqueda de los restos mortales del señor Jorge Antonio Barboza Tarazona, el Estado informó que el caso se incluyó en el Centro Único Virtual de Identificación (CUVI) y se radicó en la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, para que se incluya en la relación de personas pendientes por identificar dentro de aquellas que se llegaren a encontrar en las exhumaciones de esa Unidad. Finalmente, el Estado solicitó que la CIDH declare el cumplimiento total de las obligaciones adquiridas por el Estado con la suscripción del acuerdo de solución amistosa.

675. Por su parte, el 11 de abril de 2013, los peticionarios indicaron que “tienen el derecho de las víctimas a saber los esfuerzos técnicos y científicos realizados por el Estado colombiano en la búsqueda de los restos mortales de la víctimas.” Específicamente, indicaron que el Estado debe presentar información sobre: i) “si es cierto que los militares confesaron que el cadáver fue dejado en calidad de N.N. en el cementerio de Ciénega – Magdalena”; ii) qué diligencias han realizado las autoridades encargadas y durante cuánto tiempo con el fin de localizar los restos; y iii) “cuáles han sido las razones o circunstancias que a sabiendas de que los restos están en determinado cementerio se ha hecho posible su localización”. Esta información fue trasladada al Estado mediante comunicación de la CIDH de 30 de abril de 2013, solicitando sus observaciones en el plazo de un mes.

676. El 08 de octubre de 2013 y el 25 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 16 de marzo de 2015, el Estado indicó, en relación a la búsqueda de los restos mortales de la víctima, que el caso de Jorge Antonio Barbosa Tarazona se radicó en la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, para que se incluya en la relación de personas pendientes por identificar dentro de aquellas que se llegaren a encontrar en las exhumaciones y se incluyó en el Centro Único Virtual de Identificación – CUIV, sin embargo agregó que ha sido imposible el hallazgo de los restos mortales de los occisos atendiendo que la funeraria que los inhumo cambió de administración y no se ha obtenido archivos de la fecha de los hechos.

677. En relación al proceso penal, el Estado indicó las actuaciones sobresalientes en el caso así como presentó una lista de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial. Dentro de las actuaciones, el Estado informó sobre las sentencias condenatorias emitidas en contra de varios acusados y expresó que las mismas demuestran su compromiso por dar cumplimiento a la obligación de adelantar “*gestiones y diligencias especiales que conduzcan a la identificación e individualización de los responsables de la desaparición y posterior muerte de Jorge Antonio Barbosa Tarazona*”. En razón de lo anterior, el Estado solicitó que se declare el cumplimiento total de las obligaciones adquiridas por el Estado al suscribir el acuerdo de solución amistosa.

678. El 3 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes.

679. El 28 de octubre de 2015, el Estado reiteró la información presentada en marzo del mismo año en cuanto al cumplimiento de los compromisos asumidos y agregó en relación al compromiso en materia de justicia que según información allegada por Fiscalía a octubre del 2015, no hay nuevas actuaciones adicionales a las reportadas en la nota anterior, aclarando que eso no signifique que “el Estado no esté realizando los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a esta obligación, para poder identificar e individualizar a los responsables de la desaparición y posterior muerte de Jorge Antonio Barbosa Tarazona”.

680. La CIDH ha reconocido los avances realizados para la identificación e individualización de los responsables de la desaparición y posterior muerte de Jorge Antonio Barbosa Tarazona, y en la búsqueda de los restos mortales de la víctima. Asimismo, la CIDH ha instado al Estado a aportar información detallada y específica en relación a los resultados de las sentencias definitivas dictadas en contra de los condenados por Tribunales Superiores, y a continuar desplegando las acciones tendientes al cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa.

681. El 27 de septiembre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento.

682. El 5 de septiembre de 2017, los peticionarios presentaron observaciones respecto al cumplimiento indicando que tal y como han manifestado con anterioridad, al Estado Colombiano es imposible la ubicación exacta de los restos mortales de la víctima aun cuando la investigación esclareció que el cadáver fue inhumado como N.N en el Cementerio Central.

683. El 3 de octubre de 2017, la información fue transmitida al Estado a los fines de que presente las observaciones que considere oportunas. A la fecha de cierre de este informe, no se ha presentado información adicional.

684. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 10.916, Informe No. 79/11, James Zapata Valencia y José Heriberto Ramírez (Colombia)**

685. El 21 de octubre de 2010 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 113/10, conforme al artículo 50 de la Convención Americana. En dicho informe la Comisión concluyó que la República de Colombia violó en perjuicio de James Zapata Valencia y José Heriberto Ramírez Llanos el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal, consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, en concordancia con las disposiciones del artículo 1.1 del citado instrumento internacional. Igualmente, concluyó que el Estado violó los derechos del niño de José Heriberto Ramírez Llanos, quien tenía 16 años para el momento de los hechos. Finalmente, la CIDH concluyó que el Estado era responsable de la violación del derecho a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención en perjuicio de los familiares de las víctimas y en relación con la obligación general de respeto y garantía del artículo 1.1 de la Convención.

686. Con la aprobación del referido informe, la Comisión estableció una serie de plazos para que el Estado adelantara el cumplimiento de las recomendaciones allí formuladas. Tras considerar la información provista por ambas partes y las acciones adelantadas por el Estado en cumplimiento de las recomendaciones la Comisión decidió emitir el Informe No. 79/11 conforme al artículo 51 de la Convención Americana y hacerlo público. En dicho informe, la CIDH recomendó al Estado lo siguiente:

1. Que realice una investigación completa, imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable de las circunstancias en la que murieron James Zapata Valencia y el niño José Heriberto Ramírez Llanos.
2. Que adopte las medidas necesarias que tiendan a asegurar la debida investigación de los casos de ejecuciones perpetradas por agentes de seguridad del Estado.
3. Que repare adecuadamente a los familiares de James Zapata y José Heriberto Ramírez, teniendo en cuenta la especial condición de niño de este último, en el momento en que ocurrieron los hechos.

687. La CIDH ha venido dando seguimiento al cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones efectuadas. Así, el 13 de marzo de 2013, se realizó una reunión de trabajo entre las partes sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones. El 04 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

688. El 5 de abril de 2013, los peticionarios presentaron información sobre la tercera recomendación. Al respecto, señalaron que si bien en julio de 2012, se habría aprobado la Resolución No. 3937 por los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia y del Derecho resolviendo “emitir concepto favorable para el cumplimiento del Informe No. 71 de 2011 [...] en los términos y para los efectos de la Ley 288 de 1996 [...]”, indicaron que a la fecha no se habría convocado la audiencia de conciliación prevista en el procedimiento de la Ley 288, existiendo una demora de 15 meses en dicho trámite. Al respecto, indicaron que la información recibida por parte de las autoridades de Gobierno indica que aún no se habría designado al Ministerio que deberá asumir el pago de la indemnización, ni se habría presentado una solicitud

de conciliación ante el Ministerio Público. En respuesta a la solicitud de información de la CIDH, el 31 de octubre de 2013, los peticionarios reiteraron que no se ha cumplido con el trámite de convocatoria para la audiencia de conciliación pese a las diversas solicitudes y derechos de petición que habrían presentado ante las autoridades internas. Dicha información fue trasladada al Estado para sus observaciones.

689. Por su parte, el 30 de mayo de 2013, el Estado informó de una nueva reunión que sería llevada a cabo el 23 de mayo del 2013, en el marco del Grupo de Trabajo de “Implementación y seguimiento al cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras órdenes y recomendaciones proferidas por órganos internacionales de derechos humanos en casos individuales” para establecer un cronograma de actividades para el cumplimiento a lo ordenado en el informe No. 71 del 31 de marzo de 2011 de la Comisión, y por consiguiente a la resolución del Comité de Ministros No. 3937 del 6 de julio de 2012. La CIDH requirió al Estado colombiano la presentación de información sobre la reunión de 23 de mayo de 2013.

690. El 11 de julio de 2013, el Estado indicó que en la reunión “se analizaron las alternativas para que, de acuerdo a las competencias legales de las distintas instituciones relacionadas con el tema, se viabilice el cumplimiento ordenado por la Honorable Comisión en su informe No. 71 del 31 de marzo de 2011, y por consiguiente a la resolución del Comité de Ministros No. 3937 del 6 de julio de 2012”. Dicha información fue transmitida a los peticionarios para su conocimiento.

691. En respuesta a la solicitud de información de la CIDH, el Estado presentó información sobre el cumplimiento de las tres recomendaciones el 2 de diciembre de 2013.

692. Respecto de la primera recomendación el Estado reiteró que la Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación adelanta investigación penal radicada bajo el número 169. El Estado presentó una lista de actividades ejercidas en la investigación desde 1998 hasta 2013.

693. En relación con la segunda recomendación, el Estado reiteró numerosas medidas adoptadas con el fin de prevenir las ejecuciones perpetradas por agentes de seguridad del Estado, así como impulsar las respectivas investigaciones y, de ser el caso, reparar a las víctimas de estas conductas delictivas. En ese sentido, el Estado refirió a la política estatal de cero tolerancia con violaciones de Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, al marco normativo para sancionar las privaciones arbitrarias de la vida y las muertes en personas protegidas, al marco administrativo para prevenir y garantizar la no repetición de privaciones arbitrarias de la vida u homicidios en personas protegidas, al marco judicial para garantizar la investigación, juzgamiento y sanción de los presuntos responsables de las conductas punibles que puedan constituir privaciones arbitrarias de la vida u homicidios en persona protegida y al marco judicial para garantizar la reparación integral por los daños causados.

694. Sobre la tercera recomendación, el Estado indicó que si bien se ha avanzado respecto a los trámites administrativos y legales de consulta para dar cumplimiento a las medidas de reparación, “infortunadamente no se ha logrado un consenso definitivo en materia interinstitucional que permita la adopción de una decisión fundamentada, de acuerdo con el marco normativo constitucional y legal, de cuál sería la entidad estatal a la cual le correspondería la representación del Estado Colombiano en la audiencia de conciliación a convocarse ante el Ministerio Público [...]”.

695. El 26 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes.

696. Los peticionarios respondieron el 12 de febrero de 2015 indicando en relación a la recomendación 1 que no ha habido avances significativos en el proceso penal, y que habían esperado infructuosamente la realización de varias diligencias investigativas por parte de la Fiscalía 17 de la Unidad Especializada de DDHH y DIH. En relación a la recomendación 3, los peticionarios indicaron que interpusieron una acción de cumplimiento para que el Estado colombiano acatara las recomendaciones de la CIDH en el informe 79/11, y el 26 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia declarando el incumplimiento del Estado por parte de la Presidencia de la Republica y el Ministerio

de Relaciones Exteriores. Ante esta decisión, la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores habrían interpuesto un recurso de apelación por falta de legitimación, que habría sido resuelto por el Consejo de Estado el 12 de junio de 2014 confirmando la sentencia de primera instancia. Los peticionarios indicaron que con posterioridad al fallo del Consejo de Estado, se habría organizado una reunión con el Estado para acordar el monto de la indemnización, sin embargo a pesar de haber llegado a un acuerdo sobre esta cifra, aun el Estado no ha realizado el desembolso correspondiente.

697. El 17 de marzo de 2015 el Estado indicó en relación a la primera recomendación que por la fase en la que se encuentra la investigación (etapa preliminar), no era posible el suministro en detalle de información relativa a las diligencias realizadas por el ente investigador y reafirmó que se había adelantado un trabajo en el fortalecimiento de las hipótesis relacionadas con los móviles y los posibles autores, con el propósito de lograr el esclarecimiento de los hechos. En relación a la segunda recomendación, manifestó que el Ministerio de Defensa Nacional ha implementado medidas para la prevención e investigación de casos de homicidios presuntamente atribuidos a agentes del Estado y junto con el Presidente de la República y los altos mandos militares; agregó que se han creado mecanismos para garantizar la transparencia y cooperación con las autoridades judiciales y disciplinarias en sus investigaciones, adoptando medidas desde la expedición de políticas hasta el fortalecimiento, con base en éstas, de la doctrina operacional de la Fuerza Pública y del sistema educativo; y que el Ministerio de Defensa Nacional implementó la Política Integral de Derechos Humanos y DIH, respondiendo a la necesidad de garantizar una integración plena de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la instrucción táctica y en la lógica operacional.

698. En relación a la tercera recomendación, el Estado explicó que se continúan adelantando los trámites administrativos y legales respectivos, con el fin de indemnizar adecuadamente a los familiares de las víctimas, y en este sentido informó que el Estado solicitó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la audiencia de conciliación de que trata la Ley 288, siendo convocados la Comisión Colombiana de Juristas, en representación de las familias de las víctimas. El 14 de noviembre de 2014, se celebró dicha audiencia en la cual se llegó a un acuerdo conciliatorio sobre las sumas económicas como forma de indemnizar a los familiares de las dos víctimas, reconociendo el daño material y moral. El Estado aclaró que para el momento dicho acuerdo se encuentra ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para efectos de control de legalidad y una vez se cuente con la aprobación por parte del Tribunal, se daría ejecución al pago.

699. El 22 de julio y el 4 de agosto de 2015 los peticionarios enviaron información adicional. En estas comunicaciones, los peticionarios indicaron que no han habido avances significativos en el proceso penal, y que habían esperado infructuosamente la realización de varias diligencias investigativas por parte de la Fiscalía 17 de la Unidad Especializada de DDHH y DIH; enunciaron su preocupación por no haberse logrado el cabal cumplimiento de la recomendación en materia de indemnización, e indicaron que el 6 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca improbió la conciliación alcanzada argumentando que el rubro destinado a la indemnización por “violación de bienes constitucionales o convencionales”, lesionaba el “patrimonio público y los intereses del Estado”, pues a su criterio no procedía reparación económica por dicho concepto al poderse emplear otra serie de acciones en materia de satisfacción. Por último, los peticionarios resaltaron su preocupación por la situación actual de Blanca Oliva Llanos y Mariscela Valencia de Zapata, ambas adultas mayores, y la deteriorada condición de salud de ambas; señalando un grave riesgo de que el informe 79/11 sea irrelevante en la reparación de los derechos conculcados a los familiares de José Heriberto Ramírez Llanos Ramírez y James Zapata Valencia.

700. El 3 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. Hasta la fecha los peticionarios no han presentado información adicional.

701. Las partes sostuvieron una reunión de trabajo el 21 de octubre de 2015 con el acompañamiento de la CIDH, dentro del marco de su 156 periodo de sesiones. En dicha reunión las partes dialogaron sobre los retos que se han presentado para efectivizar el pago de la indemnización, y acordaron que los peticionarios prepararían una nueva propuesta de conciliación que tendrá en cuenta las consideraciones hechas por el magistrado del Tribunal que improbió la anterior propuesta.

702. El 28 de octubre de 2015, el Estado presentó su respuesta a la solicitud de información de la CIDH. En relación a la primera recomendación, el Estado reiteró que el proceso continúa en la misma etapa y que a pesar de las complejidades de la investigación, se han adelantado gestiones y actuaciones para llevar a determinar los móviles y autores del crimen. Agregando que igualmente la Fiscalía General de la Nación dispuso la digitalización del proceso para facilitar la consulta, así como designar un analista del Grupo de Derechos Humanos del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI. Asimismo, en relación a la segunda recomendación, el Estado indicó como ha establecido en notas anteriores los esfuerzos realizados en cuanto a las medidas para la prevención e investigación de casos de homicidios cometidos presuntamente por agentes del Estado y en la implementación de mecanismos de cooperación y transparencia para permitir un trabajo más eficiente y eficaz de las autoridades judiciales y disciplinarias que investigan estos hechos. Adicionalmente, en julio del 2015, la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Fiscalías Nacionales Especializadas en Derechos Humanos y DIH, adelantó la investigación y judicialización de 2.653 procesos, la mayoría de los cuales correspondían a hechos ocurridos en años anteriores.

703. Finalmente, en relación a la tercera recomendación, el Estado reiteró lo informado en la reunión de trabajo del 21 de octubre de 2015, esto es, que ante la postura del Tribunal al improbar el acuerdo conciliatorio alcanzado por las partes mediante fallo del 6 de febrero del 2015, los representantes de las víctimas interpusieron una acción de tutela contra este fallo, vinculando a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores. En este sentido, el Estado informó que la Presidencia de la República coadyuvó con la acción de tutela presentada, y por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha colaborado en todo momento para atender el compromiso de reparar a las víctimas del caso en el marco de la Ley 288 de 1996. El Estado informó que esta acción está en curso ante el Consejo de Estado y a la fecha, según se consultó ante este Tribunal, había registro de proyecto para fallo. Recalcó que en virtud del principio de división de poderes, es deber del Ejecutivo acatar lo ordenado por la Rama Judicial, sin embargo no impide que se puedan presentar las acciones o recursos contra estas decisiones judiciales.

704. La Comisión destaca los esfuerzos realizados de manera conjunta por las partes con el fin de que se repare adecuadamente a los familiares de James Zapata y José Heriberto Ramírez y dar cumplimiento a la tercera recomendación. La CIDH continúa a la espera de la información sobre los resultados del recurso pendiente ante el Consejo de Estado, o de las vías alternas exploradas en la reunión de trabajo celebrada el 21 de octubre de 2015.

705. El 27 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento.

706. El 4 de noviembre de 2016, los peticionarios informaron de la muerte de José Heriberto Ramirez Bernal y Blanca Olivia Llanos, padres de una de las víctimas, quienes esperaron durante 28 años una respuesta del Estado en materia de investigación de la desaparición de su hijo José Heriberto Ramirez Llanos, y 6 años para obtener una decisión en materia de reparación. Los peticionarios lamentaron que la decisión de la CIDH en este caso ha perdido su efecto útil en relación a dos personas por el retardo injustificado del engranaje estatal en la implementación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Fondo No. 79/11.

707. El 8 de noviembre de 2016, el Estado informó que el 18 de julio de 2016 se presentó a los peticionarios una propuesta de reformulación de la conciliación que ya fue aprobada por los Comités de conciliación de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Estado informó que se encontraría pendiente la firma de un acuerdo para convocar al Procurador Delegado, como requisito procesal, para luego presentarlo ante el Tribunal Administrativo. En materia de justicia, el Estado no reportó avances.

708. Las partes sostuvieron una reunión de trabajo con el acompañamiento de la Comisión el 5 de diciembre de 2016 en Panamá.

709. La CIDH lamenta que el procedimiento de conciliación para el establecimiento de la reparación económica se haya atrasado, pese a la advertencia reiterada de los peticionarios del delicado Estado de salud de los familiares de las víctimas. La CIDH insta al Estado a continuar avanzado de manera

más expedita de manera que la recomendación sobre reparación no pierda su efecto útil en relación a los padres de James Zapata y los familiares de Jose Heriberto Ramirez Llanos.

710. El 29 de agosto de 2017, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento. La parte peticionaria no presentó información actualizada en esta oportunidad.

711. El 29 de septiembre de 2017, el Estado colombiano indicó en relación a la recomendación No. 1 que, la investigación No. 169, se encuentra aún en etapa de indagación por el delito de homicidio agravado, e indicó a su vez que, la Fiscalía 17 especializada profirió decisiones orientadas a obtener evidencia física y elementos materiales probatorios que permitan el esclarecimiento de los hechos. Igualmente se refirió a la reunión sostenida el 15 de diciembre de 2016 a instancia del despacho de la Vice Fiscal General de la Nación, en la cual se expuso la necesidad de identificar plenamente a las 2 víctimas, toda vez que, revisados los registros dactilares no habría plena certeza de su identificación.

712. Acerca de la recomendación No. 2, el Estado sostuvo que se han desplegado todos los medios para revelar la realidad de los homicidios, presentados como bajas en combate por parte de los miembros de la Fuerza Pública; destacó las investigaciones penales adelantadas y la interpretación efectuada por la Corte Constitucional en la sentencia mediante la cual se modificó el artículo 221 de la Constitución Política, relativo a la justicia penal militar y a la sanción de las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública.

713. Respecto a la recomendación No. 3, se informó del proceso adelantado para preparar y presentar la reformulación del acuerdo conciliatorio y poder continuar así con el trámite establecido por la Ley 288 de 1996; mencionó que dicha reformulación se presentó el 2 de diciembre de 2016 y resolvió aprobar determinada cantidad de dinero para tramitar de la manera más expedita posible el pago aprobado por el Tribunal, acordando que, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República, cada entidad asumiría el trámite del pago a sufragar a cada familia. Por último, el Estado señaló que se está a la espera del respectivo traslado presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para proceder a pagar los montos correspondientes.

714. El 3 de noviembre de 2017, la CIDH transmitió la información presentada por el Estado a los peticionarios y solicitó presentaran sus observaciones. A la fecha de cierre de este informe no se ha recibido información adicional por parte de los peticionarios.

715. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento.

#### **Caso 12.376, Informe No. 59/14, Alba Lucía Rodríguez Cardona (Colombia)**

716. El 24 de julio de 2013, mediante Informe No. 59/14 la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el caso de Alba Lucía Rodríguez. En resumen, las peticionarias alegaron la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violaciones a los derechos establecidos en el Artículo 5, 8, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al artículo 7 de la Convención de Belem do Para, en perjuicio de Alba Lucía Rodríguez Cardona, quien fue sometida a un proceso judicial discriminatorio por razón de género y condición social.

717. El 28 de marzo de 2011, durante el 143° Período de Sesiones de la Comisión, las partes suscribieron un “Acta de Entendimiento de Solución Amistosa” en la cual el Estado se comprometió a implementar medidas de reparación a favor de Alba Lucía Rodríguez por los daños ocasionados en su contra.

718. A continuación se detalla el estado que para el año 2016 tenía cada uno de los compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo de solución amistosa suscrito el 28 de marzo de 2011, seguido de un resumen de la información proporcionada por las partes y el respectivo análisis de la Comisión sobre el cumplimiento de las mismas.

<b>Compromisos establecidos en el acuerdo de solución amistosa aprobado en el informe No. 59/14</b>	<b>Estado del cumplimiento</b>
1. El Estado se compromete a realizar un reconocimiento expreso de responsabilidad, en consulta y contando con el consentimiento de la víctima;	<b>Cumplido totalmente</b>
2. El Estado se compromete a indemnizar a la víctima por los perjuicios morales y materiales ocasionados con las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se produjeron en el presente caso. Para el efecto, el Estado y los representantes de las víctimas le solicitan respetuosamente a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fije el monto que corresponda a dicha indemnización. (Se adjuntara una comunicación conjunta a la CIDH al respecto). En todo caso, de llegarse a una conciliación extrajudicial o de producirse un fallo en la jurisdicción interna, los montos que sean cancelados a la víctima en virtud de estos actos legales, serán descontados de la indemnización que fije la Honorable Comisión. En caso de que los montos internos excedan el monto fijado por la Honorable Comisión, el Estado pagará el excedente interno.	<b>Cumplido parcialmente</b>
3. Dentro del compromiso del Estado de otorgar medidas de reparación integral adecuadas en relación con las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se produjeron en el presente caso, el Estado se compromete a diseñar e implementar capacitaciones con alcance nacional en escuelas de formación de funcionarios judiciales y administrativos, así como para el personal médico, psicológico y psiquiátrico en perspectiva de género y el alcance del secreto profesional; Las capacitaciones deben tener un especial énfasis en temas como:	<b>Cumplido parcialmente</b>
i) derechos humanos y género;	<b>Cumplido parcialmente</b>
ii) perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y	<b>Cumplido parcialmente</b>
iii) superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres instrumentos internacionales de derechos humanos, específicamente a los relativos a violencia por razones de género, tomando en cuenta que ciertas normas y prácticas en el derecho interno tienen efectos discriminatorios en la vida cotidiana de las mujeres. Asimismo, el Estado se compromete a solicitar al Ministerio de Educación Nacional información sobre las gestiones y los lineamientos que se han adelantado y se adelantarán para que se dé cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1257 de 2008. Dentro de dichos programas deberá hacerse mención a los instrumentos internacionales de derechos humanos, específicamente a los relativos a violencia por razones de género, tomando en cuenta que ciertas normas y prácticas en el derecho interno tienen efectos discriminatorios en la vida cotidiana de las mujeres.	<b>Cumplido parcialmente</b>
4. El Estado se compromete a proporcionar atención médica, psicológica y en salud sexual y reproductiva a la señora Alba Lucía Rodríguez y su compañero permanente, con el fin de evaluar los daños o traumas causados con ocasión de los hechos. La atención psicológica se extenderá a sus familiares, como acompañantes en el proceso de rehabilitación de Alba Lucía, si así lo determina el diagnóstico que elabore el especialista, y en ese orden de ideas, el Estado se compromete a cubrir los gastos de su desplazamiento. Se diseñará un programa de rehabilitación y recuperación integral en salud, que incluirá prestaciones médicas integrales y gratuitas durante el tiempo que se estime necesario para Alba Lucía y su compañero permanente, de acuerdo con el diagnóstico de los	<b>Cumplido parcialmente</b>

respectivos profesionales médicos y psicológicos.	
5. En caso de que Alba Lucía Rodríguez decida adelantar estudios, el Estado se compromete a gestionar a través de la Secretaría de Educación de Medellín y/o la Gobernación de Antioquia, el acceso al plan educativo de su preferencia. Su ingreso y permanencia en el programa educativo estará sujeta a los requisitos que para ello establezca la entidad educativa elegida. La oferta educativa comprende el inicio de estudios secundarios básicos, medios, formación técnica, tecnológica y/o en artes y oficios. La oferta de estudios podrá tener sede en la ciudad de Medellín o en cualquier otro municipio. En todo caso, las condiciones estipuladas en el numeral estarán sujetas a variaciones propias de las necesidades comprobadas de la ciudadana.	<b>Cumplido parcialmente</b>
6. En caso de que Alba Lucía decida dedicarse a una actividad laboral, el Estado la apoyará mediante capacitación laboral adecuada con sede en la ciudad de Medellín o en cualquier otro municipio del departamento de Antioquia, con el suministro de bienes o mercancía por una sola vez, o de cualquier otro modo que contribuya de manera eficaz a que Alba Lucía pueda rehacer su proyecto de vida.	<b>Cumplido parcialmente</b>
7. Dado que tanto las prestaciones de salud como las educativas y la capacitación laboral no pueden implementarse en la localidad en la que reside actualmente Alba Lucía, por carecer de las mismas, el Estado asistirá en el traslado, instalación y permanencia de Alba Lucía y su compañero permanente a la ciudad de Medellín u otro municipio del departamento de Antioquia, mediante el desembolso de una cuota de sostenimiento. Esta será desembolsada con una periodicidad semestral durante el tiempo que dure el programa educativo o de capacitación laboral escogido por Alba Lucía, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del presente acuerdo.	<b>Cumplido parcialmente</b>

719. En concordancia con lo decidido por la Comisión durante su 148 Período Ordinario de Sesiones, en julio de 2013, y en atención al común acuerdo entre las partes, la CIDH de manera excepcional determinó en el Informe No. 59/14 el monto indemnizatorio por los perjuicios morales y materiales ocasionados con las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se produjeron en el presente caso. En este sentido, la Comisión fijó en equidad, la cantidad de US\$ 60.000 como indemnización por concepto de daño inmaterial; la suma de US\$ 10.740 por concepto de lucro cesante a favor de la señora Alba Lucía Rodríguez por los 6 años que estuvo privada de libertad (1996-2002); la cantidad de US\$ 5.557 por concepto de daño emergente; y por concepto de costas y gastos la cantidad de US\$ 2.136 a favor de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Medellín y la cantidad de US\$ 10.000 a favor de la abogada Castilla.

720. Asimismo, en el mencionado Informe, la CIDH consideró el cumplimiento total del compromiso asumido por el Estado en la cláusula 1 y acordó continuar con la supervisión de los compromisos pendientes de cumplimiento por parte del Estado de Colombia.

721. El 3 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 16 de noviembre de 2015, el Estado presentó información actualizada sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. En cuanto al compromiso expresado en la cláusula segunda, indicó que el 10 de diciembre de 2014, el Consejo de Estado, mediante providencia proferida en el marco del proceso radicado bajo el número 05001-23-31-000- 2004-04210-01, resolvió declarar patrimonialmente y solidariamente responsables a la Nación - Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura - por los daños causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad que padeció Alba Lucía Rodríguez Cardona. En este sentido, condenó a dichos órganos a indemnizar a la víctima y sus familiares, retomando al Informe No. 59/14 y a los parámetros fijados en el mismo, por daños materiales, morales y los daños causados a bienes constitucionales, es decir a la honra y el buen nombre y a la integridad espiritual y emocional como mujer de la víctima.

722. El Estado informó que se han adelantado las gestiones encaminadas a ejecutar los pagos pecuniarios de manera solidaria, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Consejo de Estado, por lo cual se solicitó a los representantes de Alba Lucía Rodríguez Cardona aportar la documentación requerida conforme a los requisitos y las disposiciones contenidas en los Decretos 768 de 1993, 818 y 1328 de 1994, así como copia de la escritura o sentencia judicial de adjudicación de los derechos sucesorales a sus herederos teniendo en cuenta el fallecimiento de la señora Etelvina Cardona Rodríguez, madre de Alba Lucía Rodríguez Cardona y beneficiaria de la sentencia del Consejo de Estado. Al respecto, agregó que no ha sido posible asignar turno de pago debido a que ni el apoderado ni los beneficiarios han allegado la documentación requerida.

723. En relación al compromiso expresado en la cláusula 3, el Estado reiteró que se había lanzado el “Plan Nacional de Formación para Garantizar el Acceso a la Justicia de las Mujeres Víctimas de la Violencia”, dirigido a funcionarios judiciales con énfasis en la aplicación de la Ley 1257 de 2008. Indicó que para el año 2014 la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer implementó acciones y estrategias con el fin de fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente en sectores fundamentales como lo son justicia, seguridad y salud; afirmando que los talleres y jornadas de capacitación habían resultado en un avance por parte de los funcionario/as, representantes de los diferentes sectores, en la sensibilización y conocimiento de los derechos humanos de las mujeres y que existía un mayor dominio por parte de la institucionalidad en el conocimiento de la normativa nacional e internacional de los derechos humanos de las mujeres.

724. En el mismo sentido, el Estado aportó información detallada sobre la realización de diversas acciones y estrategias por el Ministerio de Salud y Protección Social dirigidos a distintos funcionarios y sociedad civil en temas de salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de equidad de género, salud materna y salud pública. Explicó cómo se llevaron a cabo distintos procesos de capacitación; foros; documentos técnicos elaborados; jornadas de asistencia técnica; talleres de formación, seguimiento y evaluación de modelos de servicio de salud.

725. El 27 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 7 de noviembre y el 6 de diciembre de 2016, el Estado presentó información actualizada sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. A la fecha de cierre del presente informe, la parte peticionaria no había presentado información.

726. El 7 de noviembre de 2016, el Estado reiteró en relación al compromiso expresado en la cláusula segunda, que se dictó la sentencia del 10 de diciembre del 2014 en la que el Consejo de Estado declaró patrimonialmente y solidariamente responsables a la Nación por los daños causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad que padeció Alba Lucía Rodríguez Cardona, y al respecto agregó que el expediente administrativo de pago a favor de la señora Alba Lucía Rodríguez Cardona a la fecha ya se encuentra en turno para pago, por lo cual sería desembolsado próximamente desde la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

727. En cuanto al compromiso expresado en la cláusula cuarta, el Estado presentó información suministrada por el Ministerio de Salud. Al respecto el Ministerio informó sobre la celebración de una reunión el día 3 de diciembre de 2015 entre la representante de la víctima, la Dirección Seccional de Antioquia, la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Antioquia y la nueva Entidad Promotora de Salud- EPS con el fin de hacer un seguimiento y establecer acuerdos necesarios para impulsar esta medida. En cumplimiento a lo acordado en dicha reunión, recalca la asignación de la Institución Prestadora de Salud para atención ambulatoria desde el 3 de diciembre en UT Viva 1 Sede Medellín, institución donde ha recibido atención general por un grupo interdisciplinario único compuesto por médico, enferma y psicóloga. Por último, menciona los servicios que se le han prestado a la señora Alba Rodríguez a través de la nueva EPS durante los meses de enero y febrero de 2016.

728. En cuanto al compromiso expresado en la cláusula tercera, el Estado reiteró información presentada en noviembre del 2015 sobre las acciones y estrategias que ha implementado para fortalecer la

institucionalidad a cargo de la prevención, sanción y atención de todas las formas violencia contra las mujeres. Al respecto recalcó que el Estado colombiano es parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención De Belem Do Para), razón por la que todas las acciones del Estado no solo se ajustan a los parámetros establecidos por estos instrumentos internacionales, sino que están sometidas a revisión por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

729. Con el objetivo de complementar la información aportada, el Estado mediante comunicación del 6 de diciembre de 2016, presentó información detallada sobre las medidas implementadas por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Salud, relacionadas con las capacitaciones a funcionarios judiciales y personal médico en perspectiva de género y el alcance del secreto profesional; así como sobre las acciones ejecutadas por el Ministerio de Educación, para dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1257 de 2008. Con base a la información presentada en materia de superación de los estereotipos sobre el rol social de las mujeres, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, promovió la realización en marzo de 2015 de un estudio denominado “II Medición del Estudio de Tolerancia Social e Institucional a la Violencia contra las Mujeres”. Asimismo, ha venido implementando desde el año 2013 una línea de orientación psicosocial y jurídica para mujeres que se atiende 24 horas al día, durante toda la semana por personal de la Policía Nacional. Adicionalmente, ha prestado apoyo a nivel territorial en departamentos y alcaldías de las ciudades capitales, para la formulación de medidas y acciones concretas dentro de los planes de desarrollo territoriales sobre equidad de género, reducción de las brechas, atención de casos de violencia de género y participación de la mujer. De la misma forma, la Consejería junto al Ministerio de Justicia y del Derecho han desarrollado 5 herramientas técnicas para estandarizar y homogenizar los servicios prestados por las Comisarias de Familia con el fin de fortalecer a las mismas, y a la fecha se han realizado 10 encuentros regionales con comisarios de familia locales y sus equipos de trabajo.

730. Por su parte, el Ministerio de Salud en materia de secreto profesional e interrupción voluntaria del embarazo, ha adelantado un total de 15 talleres con prestadores primarios de servicios de salud en 15 departamentos, capacitando un total de 73 profesionales del sector salud entre personal asistencial y administrativo. El Ministerio de Salud ha dado acompañamiento técnico a la Fiscalía General de la Nación en la formulación de la Directiva 06 del 2016 mediante la cual se establecen los criterios a seguir por parte de fiscales para la investigación de la posible comisión del delito de aborto, tipificado en el artículo 122 del Código Penal; y ha realizado capacitaciones en 9 departamentos priorizados por su baja conectividad a profesionales del sector de la salud y del sector protección y justicia en temas de género, violencia de género y violencia sexual, enfoques de derechos, género y diferencial, derechos sexuales y derechos reproductivos, normatividad nacional e internacional sobre violencia de género y violencia sexuales. Adicionalmente, en el año 2016 a través del Curso Atención integral en salud para víctimas de violencia sexual desarrollado en la plataforma virtual del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se ha logrado certificar 1251 profesionales del talento humano en salud.

731. El Ministerio de Educación en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1257 de 2008, desde el año 2013, ha impulsado la implementación de la Ley 1620 mediante la que se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar y el Decreto 1965 del mismo año que la reglamenta. En concreto, estos instrumentos normativos facilitan el cumplimiento de las obligaciones que tienen las secretarías de educación municipales y departamentales, las instituciones educativas y los cuerpos docentes frente a la vinculación de toda la comunidad educativa en la promoción y protección de los derechos de niñas, adolescentes y jóvenes. Por último, el Ministerio de Educación directamente, ha apoyado algunos procesos de formación con representantes de las Secretarías de Educación como aporte a la prevención de las violencias contra las mujeres. Al respecto, en los años 2013 y 2014, se adelantaron varias jornadas de sensibilización e información con representantes de centros educativos de varias partes del país para facilitar la apropiación de los lineamientos desarrollados por el Ministerio para promover la convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia en la escuela incluida la violencia basada en género.

732. El 6 de diciembre de 2016, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con el acompañamiento de la CIDH, dentro del marco de su 159 período de sesiones. En dicha reunión las partes llegaron a determinados acuerdos en los cuales el Estado se comprometió a gestionar distintas medidas relativas: a la capacitación a la que podría acceder Alba Lucía Rodríguez en Abejorral, Medellín o municipios de la subregión; a las condiciones de contratación con la Gobernación de Antioquia; la evaluación de la hoja de ruta para el cumplimiento de las medidas de reparación; a gestionar un equipo de atención psicosocial que garantice a Alba Lucía Rodríguez en su localidad atención psicológica especializada y de calidad; y, por último, a hacer gestiones con la Consejería Nacional de la Mujer para evaluar las vías posibles para proteger a Alba Lucía Rodríguez de situaciones de vulnerabilidad.

733. El 29 de diciembre de 2016, el Estado Colombiano presentó información que se había comprometido a suministrar en el marco de la reunión de trabajo sostenida el 6 de diciembre de 2016, relacionada con la oferta de capacitación a la cual podría acceder la beneficiaria del acuerdo de solución amistosa. Dicha información fue trasladada a la parte peticionaria para que presentara sus observaciones.

734. El 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre los avances en el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado información adicional.

735. La Comisión valora altamente la información proporcionada y observa que el Estado ha avanzado en la implementación de los compromisos asumidos en el acuerdo de solución amistosa. En particular la CIDH valora los acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo e insta al Estado a realizar las gestiones requeridas. En este sentido y por todo lo expuesto, la CIDH concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial a los demás compromisos asumidos y, en consecuencia, seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 12.756, Informe No. 10/15, Masacre Estadero El Aracatazzo (Colombia)**

736. El 30 de enero de 2015, mediante Informe No. 10/15 la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el caso de la Masacre Estadero El Aracatazzo. El caso se refiere a los hechos sucedidos el día 12 de agosto de 1995, cuando miembros de grupos paramilitares asesinaron a 18 personas en el estadero "El Aracatazzo", municipio de Chigorodó, Antioquia, con la aquiescencia de agentes de la fuerza pública que se encontraban en un retén del Batallón de Infantería No. 46 del Ejército Nacional. En ese sentido, los agentes omitieron el deber de adoptar medidas de protección frente a los disparos que se produjeron y socorrer a la población civil, a pesar de su cercanía al estadero y de haber escuchado los disparos. Con posterioridad a los hechos, no hubo una investigación penal ni disciplinaria de los involucrados, habiendo transcurrido más de 10 años sin que se sancionara a los presuntos responsables de los hechos mencionados.

737. El 12 de diciembre de 2014, el Estado de Colombia y los peticionarios suscribieron un acuerdo de solución amistosa el cual estableció las siguientes medidas:

#### **PRIMERO: RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD**

En atención a los hechos ocurridos el día 12 de agosto de 1995 en el estadero "El Aracatazzo" (Sic), ubicado en el barrio El Bosque del municipio de Chigorodó - Antioquia, en los cuales un grupo al margen de la ley asesinó los señores Jorge Luis Julio Cárdenas, Luis Alberto Guisao Ríos, Mélida María Jiménez Borja, Leonardo Minota Mosquera, Francisco Leonardo Panesso Castañeda, Willinton de Jesús Tascón Duque, Héctor Alonso Tascón Duque, Libia Úsuga Úsuga y Jorge Iván Zúñiga Becerra; el Estado colombiano reconoce la responsabilidad internacional por omisión en su deber de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 4 (derecho a la vida) y 5 (derecho a la integridad personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento. Asimismo, el Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la integridad personal (art. 5) en relación a los familiares de las víctimas.

**SEGUNDO: EN MATERIA DE JUSTICIA**

Las partes reconocen los avances que han existido en materia de justicia en el presente caso. Sin embargo, el Estado se compromete a continuar con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos.

**TERCERO: MEDIDAS DE SATISFACCION Y REHABILITACION**

El Estado se compromete a realizar un acompañamiento a las víctimas del presente caso, con el fin de que logren acceso a los planes, programas y proyectos en materia de reparación que ofrece el Estado colombiano mediante el modelo de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas implementado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.

**CUARTO: GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN**

El Estado colombiano se compromete a continuar con los programas de educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario dentro de las fuerzas armadas colombianas. Asimismo, se compromete a incluir el caso 12.756 Masacre Estadero "El Aracatazzo" como tema de estudio y análisis en los eventos de capacitación extracurricular en materia de derechos humanos en las diferentes escuelas de formación y capacitación.

**QUINTO: REPARACIÓN PECUNIARIA**

El Estado se compromete a dar aplicación a la Ley 288 de 1996 una vez se homologue el presente acuerdo de solución amistosa mediante la expedición del informe de artículo 49 de la CADH, con el propósito de reparar los siguientes perjuicios:

- El daño moral ocasionado directamente a las víctimas Jorge Luis Julio Cárdenas, Luis Alberto Guisao Ríos, Mélida María Jiménez Borja, Leonardo Minota Mosquera, Francisco Leonardo Panesso Castañeda, Willinton de Jesús Tascón Duque, Héctor Alonso Tascón Duque, Libia Úsuga Úsuga y Jorge Iván Zúñiga Becerra, por los hechos ocurridos en el estadero "El Aracatazzo" en el barrio El Bosque del municipio de Chigorodó - Antioquia.
- El daño moral que llegara a probarse sufrido a favor de Jorge Eliecer Julio Gutierrez, Luis Alfonso Julio Gutierrez, Ana Paola Julio Amaya, en calidad de hijos de la víctima Jorge Luis Julio Cárdenas. Asimismo, el daño moral que llegara a probarse en favor de Arleiber de Jesús Barrientos Usuga, Jorge Andrés Barrientos Úsuga, Adolfo Enrique Gómez Usuga y Daniel Jose Gómez Usuga, hijos de la víctima Libia Úsuga Úsuga.

738. De conformidad a lo establecido en el acuerdo de solución amistosa y con base a la solicitud conjunta de las partes, la CIDH adoptó el informe contemplado en el artículo 49 de la Convención Americana, a fin de dar inicio con los trámites para la ejecución de varios puntos contenidos en el acuerdo, incluyendo los trámites para otorgarle a las víctimas las medidas de reparación siguiendo lo referido a la aplicación de la Ley 288 de 1996. La CIDH en dicha oportunidad valoró el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la omisión de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a las víctimas fallecidas durante los hechos sucedidos en la masacre, así como en relación a los familiares de las mismas. En el informe, la CIDH acogió el reconocimiento conjunto de ambas partes sobre los diferentes avances en materia de justicia, en particular las acciones de investigación, juzgamiento y condena de 12 de los involucrados en la masacre que tuvo lugar en el estadero El Aracatazzo, y en el mismo sentido, instó al Estado a actuar con la mayor celeridad para cumplir con las medidas de reparación dispuestas en el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes.

Asimismo, la Comisión declaró en su Informe Anual de 2016 el cumplimiento total del punto 4 del acuerdo de solución amistosa, relacionado con capacitaciones<sup>94</sup>.

739. Mediante comunicación de fecha 7 de noviembre de 2016, en materia de justicia, el Estado presentó información sobre las diversas actuaciones realizadas desde la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, el Estado informó que mediante resolución de fecha 16 de octubre de 2014 dicha autoridad dispuso que la investigación se enmarque dentro de la categoría “crímenes de sistema representados en los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.” En este sentido, la Fiscalía General mediante resoluciones de fecha 8 de mayo y 3 de noviembre de 2015 resolvió la situación jurídica de cinco miembros del Ejército Nacional por la presunta ejecución, en calidad de coautores, del delito de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y sucesivo de 18 personas, y una más en grado de tentativa, imponiéndoles detención preventiva en centro carcelario. Tras la aprehensión de tres de los sindicados, la Fiscalía General mediante resolución de fecha 16 de marzo de 2016, decretó con respecto a los mismos el cierre parcial de la investigación.

740. En cuanto a las medidas de satisfacción, el Estado señaló que el día 17 de septiembre de 2015 se sostuvo una reunión en la ciudad de Medellín con los representantes de las víctimas en la cual la Unidad para las Víctimas presentó el modelo de atención, asistencia y reparación integral; y les fue solicitado a los representantes los datos de las víctimas para incluirlos en el Plan de Atención Psicosocial y de Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVI) como parte de las medidas de asistencia y rehabilitación de la Ley 1448 del 2011. El Estado afirmó que desde el Ministerio de Salud y Protección Social se están realizando gestiones para lograr la afiliación de manera prioritaria y la inclusión en el PAPSIVI, con el fin de implementar distintas acciones. Finalmente, el Estado concluyó que se han realizado diferentes reuniones de concertación con los representantes de las víctimas en lo referente a las medidas de satisfacción y rehabilitación en las cuales se ha reiterado que la implementación de las medidas se realizará una vez se termine el proceso de pago de indemnización a las víctimas.

741. En relación a las garantías de no repetición, el Estado presentó información sobre la programación y metodología de distintos eventos de capacitación en materia de derechos humanos en los cuales se ha incluido el presente caso como tema de estudio y análisis. En este sentido el Estado indicó que el día 9 de junio del 2015, la Coordinación del Grupo de Defensa ante Organismos Internacionales del Ministerio de Defensa Nacional, realizó en la Escuela Militar de Suboficiales (EMSUB) y en la Escuela de Soldados Profesionales (ESPRO), el estudio de los casos “Masacre Aracatazzo”, “Masacre Segovia” y “Alcides Torres Arias”; y que se realizaron cinco (5) capacitaciones en las ciudades de Buenaventura (13 de febrero), Yopal (10 de marzo), Quibdó (4 de mayo), Puerto Carreño (18 de junio) y Popayán (11 de agosto), en las que se dio enseñanza sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Caso “Masacre Estadero El Aracatazzo” de conformidad con la Directiva No. 13 del 2015 “Capacitación Coyuntural y Extracurricular 2015 para la Fuerza Pública”. En particular, el Estado destacó la programación y planificación de 8 capacitaciones a Unidades Militares y Policiacas ubicadas en determinadas ciudades, como consecuencia de la directiva No. 2016-1 expedida por el Ministro de Defensa Nacional en fecha 21 de enero de 2016, en la cual se trazaron como finalidades, entre otras, actualizar a los integrantes de la Fuerza Pública a través de la educación, capacitación e instrucción en diversos temas que actualmente son de exigencia nacional e internacional, como los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y brindar un conocimiento eficaz que permita proteger, respetar los derechos humanos y propender por la aplicación del derecho internacional humanitario en cada actuación militar y policial.

742. Por último, en cuanto a la medida de reparación pecuniaria, el Estado señaló que en fecha 9 de febrero del 2016 los Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia y del Derecho, y de Defensa Nacional, en su calidad de miembros del Comité de Ministros, expidieron la resolución N° 0578 del 2016 con el un concepto favorable y para los efectos de la Ley 288 de 1996 respecto a las víctimas que no hubiesen sido indemnizadas por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. En este sentido, el Estado agregó que como resultado de diferentes reuniones con los representantes de las víctimas, en las que fueron definidos los montos por perjuicios inmateriales para cada una de las víctimas, el Comité de Conciliación y

<sup>94</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones Amistosas en casos individuales, párrs. 682.

Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional adoptó decisión, la cual fue aceptada por los representantes de las víctimas. A la fecha, la solicitud de conciliación conjunta en el marco de la Ley 288 de 1996 se encuentra radicada ante la Procuraduría General de la Nación y a la espera del trámite de ley.

743. El 13 de febrero de 2017, el Estado colombiano informó que el 16 de diciembre de 2016 en el Municipio de Apartado se realizó el acto de disculpas por parte del Estado, el cual fue concertado con las víctimas y sus representantes y contó con la asistencia de los familiares de las víctimas y representantes de éstas, destacando la intención de restablecer la confianza entre la ciudadanía y el Estado, en el marco del reconocimiento de la injerencia que el conflicto armado alcanzó tanto en el nivel central del ejercicio de la función pública civil militar como en los niveles regional y municipal. El Estado aportó documentación a través de la cual se pudo corroborar la publicación del acto en las páginas de internet oficiales de la Cancillería y de la Unidad de Protección de Víctimas.

744. El 12 de abril y 8 de junio de 2017, el Estado presentó información, relacionada con la capacitación de miembros de las Fuerzas Militares, establecida en el punto 4 del acuerdo de solución amistosa, que ya fue declarado cumplido por esta Comisión.

745. El 21 de julio de 2017, los peticionarios reiteraron información presentada con anterioridad, indicando que, en materia de justicia, observan con beneplácito la resolución mediante la cual el Fiscal General de la Nación ordenó remitir la investigación penal adelantada por la Fiscalía 91 de la UNDH y DIH, a la Dirección Nacional de Análisis y Contexto, toda vez que en razón de dicha decisión, el Fiscal 33 Especializado de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto asumió el conocimiento de la investigación, y calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad y de guerra. Los peticionarios confirmaron la información presentada por el Estado en materia de avances en la investigación y agregaron que se ha ordenado la captura y detención preventiva de 18 personas por delitos en personas protegidas, y asimismo se dictó el auto de acusación el 26 de abril de 2016, el cual se encuentra en firme.

746. A pesar de los avances mencionados, los peticionarios resaltaron que han transcurrido catorce (14) meses desde la resolución de acusación de los señores José Liborio Bermúdez Sarmiento, Nofar Fabián Motta Bastidas y Jhon Fredy Moncada Carmona (radicado No. 081), sin que a la fecha los Juzgados Penales Especializados de Antioquia competentes hayan fijado audiencia para dar inicio a la etapa de juicio. Situación que sin duda representa un atraso significativo en los procesos penales que se adelantan en contra de éstos como agentes del Estado que contribuyeron de manera activa en el ataque sistemático dirigido en contra de una población civil y, que menoscaba la determinación de la verdad y justicia pretendida por las víctimas luego de 20 años de impunidad.

747. Respecto a las medidas de satisfacción y rehabilitación, confirmaron el cumplimiento del Estado en cuanto al reconocimiento de responsabilidad y el acto de disculpas por los hechos ocurridos el 12 de agosto de 1995. Sin embargo indicaron que en cuanto a la inclusión de las víctimas al PAPSIVI, en diciembre de 2016, la Unidad para las Víctimas les informó de manera verbal sobre las dificultades que tenía el Ministerio de Salud para efectuar la afiliación de algunas de las víctimas, y hasta la actualidad, no han recibido información nueva. Los peticionarios indicaron que no han recibido información del Estado acerca de la afiliación definitiva de los familiares al PAPSIVI.

748. En cuanto a las garantías de no repetición, los peticionarios reiteraron que se encuentran conformes con los programas de capacitación extracurricular desarrollados en múltiples jornadas entre 2015 y 2017, coordinados por la Jefatura de Educación Continuada y Doctrina Conjunta, abarcado diferentes unidades militares y policiales dentro del territorio nacional. Asimismo, observaron que las capacitaciones tuvieron como metodología el estudio de casos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y el mecanismo de solución amistosa como alternativa de resolución eficaz de las denuncias ante la CIDH. Por último, en cuanto a la reparación pecuniaria, reiteraron la información presentada con anterioridad. Dicha información fue trasladada al Estado para que presentara sus observaciones.

749. El 6 de julio de 2017, las partes sostuvieron una reunión de trabajo en la ciudad de Lima, Perú, con la facilitación del Comisionado José de Jesús Orozco, Relator de la CIDH para Colombia. En dicha reunión, los peticionarios indicaron que en julio de 2016 se decretó la nulidad parcial de la investigación penal por parte del Tribunal Superior de Bogotá, y que fue presentado un recurso de revisión por parte de la Fiscalía General de la Nación en agosto de 2016 que todavía no había sido resuelto, y que en consecuencia se dio el cierre parcial de la investigación. Los peticionarios destacaron igualmente que hace 14 meses se inició la etapa de juicio y juzgamiento contra algunos de los acusados, incluyendo a un capitán y un sargento que continúan prófugos de la justicia después de 22 años.

750. Respecto a las medidas de rehabilitación, destacaron que han tenido problemas para incorporar a los familiares de algunas víctimas al Programa del Estado de Tratamiento Psicosocial (PAPSIVI), por ende, solicitaron al Estado que indique por qué no se han podido registrar.

751. El Estado, por su parte, expresó tener todo el interés en implementar las medidas acordadas, e indicó que han venido fortaleciendo la implementación de acuerdos a través de la creación de un grupo especial de la Cancillería sobre este tema. Igualmente indicó que el 16 de diciembre de 2016, se solicitó a la CIDH que se declarara cumplida una de las medidas establecidas con el reconocimiento de responsabilidad.

752. El 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado dicha información.

753. Tomando en consideración la información suministrada por las partes en el año 2016 y 2017, la Comisión considera que el punto 1 del acuerdo de solución amistosa es declarativo, y valora las acciones del Estado para materializar el reconocimiento de responsabilidad incluido en el texto del acuerdo de solución amistosa en una medida adicional de satisfacción en beneficio de las víctimas del presente caso. Al mismo tiempo, la Comisión reitera que el punto 4 del acuerdo de solución amistosa se encuentra cumplido totalmente.

754. En cuanto a las medidas de satisfacción y rehabilitación, la Comisión debe señalar que no cuenta con información sobre la inclusión de todas las víctimas en el PAPSIVI, por lo cual solicita al Estado presentar información detallada sobre las gestiones para extender la afiliación a las demás víctimas, así como sobre los avances en las demás gestiones realizadas en el marco del acompañamiento, con el fin de que logren acceso a los planes, programas y proyectos en materia de reparación, de conformidad con la cláusula segunda del acuerdo de solución amistosa. En particular, la CIDH toma nota de lo señalado por el Estado en cuanto al requisito de concluir con el proceso de pago de indemnización a las víctimas para iniciar la implementación de las medidas de satisfacción y rehabilitación. En este sentido, la CIDH insta al Estado a actuar con la mayor celeridad para dar una plena reparación a las víctimas.

755. A la luz de lo anterior, y tomando en cuenta la información presentada por las partes, la CIDH declara que los extremos 1 y 4 del acuerdo de solución amistosa, referidos al reconocimiento de responsabilidad y capacitaciones de funcionarios, respectivamente, se encuentran cumplidos totalmente. En ese sentido, el acuerdo de solución amistosa cuenta con un cumplimiento parcial, y la Comisión continuará supervisando la implementación de los puntos 2, 3 y 5 del mismo.

#### **Petición 108-00, Informe No. 38/15, Masacre de Segovia (Colombia)**

756. El 24 de julio de 2015, mediante Informe No. 38/15 la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el caso de la Masacre de Segovia. El caso se refiere a los hechos sucedidos el día 11 de noviembre de 1988, cuando un grupo de hombres fuertemente armado habría llegado en camiones al centro del municipio de Segovia, Antioquia, abriendo fuego y arrojando granadas, lo cual habría resultado en la muerte de 43 personas, entre ellas tres niños, y otras 50 personas habrían resultado heridas. Según lo indicado en la petición, la masacre fue perpetrada por paramilitares con la aquiescencia del Ejército Nacional, y el sistema judicial colombiano habría condenado a cinco militares y cuatro civiles a penas de prisión y multas por el delito de terrorismo y otros, por los hechos narrados en la petición; sin embargo, no se habría investigado y sancionado a todos los responsables. La petición se presentó a favor de 29 personas que

perdieron la vida y 4 personas lesionadas por los hechos y sus respectivos grupos familiares, y posteriormente se amplió este grupo incluyendo a 5 presuntas víctimas adicionales y sus familiares.

757. El 6 de mayo de 2015, la representación de las víctimas y el Estado colombiano suscribieron un acuerdo de solución amistosa en cuyo texto se estableció lo siguiente:

#### **PRIMERO: RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD**

El Estado colombiano reconoce la responsabilidad internacional por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida) Carlos Enrique Restrepo Pérez (fallecido), Carlos Enrique Restrepo Cadavid (fallecido), Gildardo Antonio Restrepo Cadavid (fallecido), Pablo Emilio Gómez Chaverra (fallecido), María del Carmen Idarraga Orrego (fallecida), Alberto Lozano Ruiz (fallecido), Luis Eduardo Sierra (fallecido), Jesús Emilio Calle Guerra (fallecido), Diana María Vélez (fallecida), Regina del Socorro Muñoz Giraldo (fallecida), Jairo de Jesús Rodríguez Pardo (fallecido), Erika Milena Marulanda (fallecida), Guillermo Darío Escudero (fallecido), Jesús Antonio García Quintero (fallecido), Henry Albeiro Castrillón (fallecido), Francisco William Gómez Monsalve (fallecido), Guillermo de Jesús Viana (fallecido), Jesús Aníbal Gómez García (fallecido), José Abelardo Osorno Betancur (fallecido), Orlando de Jesús Vásquez Zapata (fallecido), Shirley Cataño Patino (fallecida), Robinson de Jesús Mejía Arenas (fallecido), Roberto Antonio Marín Osorio (fallecido), Rosa Angélica Mazo Arango (Fallecida), Luz Evidalia Orozco Saldarriaga (fallecida), Oscar de Jesús Agudelo López (fallecido), Libardo Antonio Cataño Atehortúa (fallecido), Jesús Danilo Amariles Ceballos (fallecido), Carlos Enrique Mazo López (fallecido), Juan de Dios Palacio (fallecido), Jesús Antonio Benítez (fallecido), Manuel Fernández (fallecido). Artículo 5 (Derecho a la integridad Personal) en Perjuicio de Simplicio Yepez (lesionado), María Emilse Restrepo Cadavid (lesionada), Jairo Alonso Gil (lesionado), Leonel Vahos Villa (Lesionado), Joaquín Emilio Montoya Monsalve (Lesionado), José Alberto Marulanda Valencia (lesionado) por los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1988, en el municipio de Segovia Antioquia, que dieron origen a la petición P-108-00 Masacre Segovia 1988.

#### **SEGUNDO: EN MATERIA DE JUSTICIA**

Las partes reconocen los avances que han existido en materia de justicia en el presente caso. Sin embargo, el Estado se compromete a continuar con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos.

#### **TERCERO: MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y REHABILITACIÓN**

El Estado se compromete a implementar las siguientes medidas de satisfacción:

- Un acto de disculpas públicas en el municipio de Segovia, Departamento de Antioquia, encabezado por un alto funcionario del Gobierno, con la participación de autoridades públicas y los familiares de las víctimas. En el mismo se reconocerá la responsabilidad estatal en los términos establecidos en el presente acuerdo. La presente medida se cumplirá dentro del término de un año contado desde la firma del presente Acuerdo y estará a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
- El Estado se compromete a realizar un acompañamiento a las víctimas del presente caso, con el fin de que logren acceso a los planes, programas y proyectos en materia de reparación que ofrece el Estado colombiano mediante el modelo de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas implementado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Dentro de las acciones implementadas en el marco de esta ruta de reparación integral se brindarán: i) medidas de rehabilitación física, mental, psicosocial, social y ii) medidas de reparación simbólica como acciones en materia de memoria histórica y conmemoraciones que serán concertadas con las víctimas y sus representantes.

#### **CUARTO: GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN**

El Estado colombiano se compromete continuar con los programas de educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario dentro de las fuerzas armadas colombianas. Asimismo, se compromete a incluir los hechos de la presente petición como tema de estudio y análisis en los eventos de capacitación extracurricular en materia de derechos humanos en las diferentes escuelas de formación y capacitación.

#### **QUINTO: REPARACIÓN PECUNIARIA**

El Estado se compromete a dar aplicación a la Ley 288 de 1996 una vez se homologue el presente acuerdo de solución amistosa mediante la expedición del informe de artículo 49 de la CADH, con el propósito de reparar los perjuicios morales o materiales que llegaran a probarse a favor de los familiares directos de las víctimas, que acrediten su legitimidad y que no hayan sido indemnizados a través de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

#### **SEXTO. HOMOLOGACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Las partes le solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la homologación del presente acuerdo y prelación en la emisión del informe de artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el mismo se hace necesario para la ejecución de varios de los puntos contenidos en el acuerdo de solución amistosa.

758. El 20 de julio de 2015, las partes presentaron una comunicación conjunta por medio de la cual presentaron una aclaración sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa: “[E]n relación con las medidas de satisfacción y rehabilitación, puntualmente frente a las medidas de rehabilitación física, mental y psicosocial, estas se implementaran a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), el cual se encuentra a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social”

759. De conformidad a lo establecido en el acuerdo de solución amistosa y con base a la solicitud conjunta de las partes, la CIDH adoptó el informe contemplado en el artículo 49 de la Convención Americana, a fin de dar inicio los trámites para otorgarle a las víctimas algunas de las medidas de reparación del acuerdo de solución amistosa, y en particular las referidas a la aplicación por partes del Estado de la Ley 288 de 1996. En el informe No. 38/15 la CIDH valoró el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la omisión de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a las víctimas fallecidas durante los hechos sucedidos en la masacre, así como en relación a las víctimas que resultaron lesionadas y en el mismo sentido, acogió el reconocimiento conjunto de ambas partes sobre los diferentes avances en materia de justicia; en particular, las acciones de investigación, juzgamiento y condena de 5 militares y 4 civiles a penas de entre 18 y 26 años de privación de la libertad y multas de entre 98 y 140 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), como responsables penales de la misma. Asimismo, la CIDH tomó nota del informe presentado conjuntamente por las partes el 21 de julio de 2015 en el cual se da cuenta del principio de ejecución de la reparación individual de las víctimas, en particular, de las jornadas de orientación a los beneficiarios el 1 y 3 de julio de 2015 en Segovia y Medellín; y del acuerdo entre las partes sobre el contenido; y la fecha del acto de reconocimiento de responsabilidad así como de las fechas y contenidos de las capacitaciones a funcionarios de la Fuerza Pública. Asimismo, la Comisión declaró en su Informe Anual de 2016 el cumplimiento total del punto 3.1 y 4 del acuerdo de solución amistosa, relacionados con el acto de disculpas públicas y con las capacitaciones de agentes estatales<sup>95</sup>.

760. El 7 de noviembre de 2016, el Estado reiteró que la investigación por los hechos acaecidos el 11 de noviembre de 1988 se encuentra en curso en la Fiscalía 46 Especializada. Al respecto, precisó que se

<sup>95</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones Amistosas en casos individuales, párrs. 694.

han vinculado a 22 personas, de las cuales 7 son miembros de la fuerza pública, 14 son civiles y un aforado; y se han proferido un total de 11 fallos condenatorios, incluyendo aquel en contra del ex congresista César Pérez García, emitida el 14 de marzo de 2011 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

761. En cuanto a la medida de reparación pecuniaria, el Estado señaló que en fecha 9 de febrero del 2016 los Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia y del Derecho, y de Defensa Nacional, en su calidad de miembros del Comité de Ministros, expidieron la resolución N° 0579 del 2016 con el concepto favorable y para los efectos de la Ley 288 de 1996 respecto a las víctimas que no hubiesen sido indemnizadas por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. En este sentido, el Estado informó a la CIDH sobre la celebración de diferentes reuniones con los representantes de las víctimas; con el objetivo de llegar a acuerdos frente a la tipología de perjuicios, los topes que se van utilizar para la tasación como también la legitimación en la causa de cada uno de los beneficiarios y la verificación de registros civiles.

762. El 4 de julio de 2017, las partes sostuvieron una reunión de trabajo en la ciudad de Lima, Perú, con la facilitación del Comisionado José de Jesús Orozco, Relator de la CIDH para Colombia. En dicha reunión, los peticionarios indicaron que hasta el momento no se tenía información acerca del cumplimiento de la medida sobre la memoria de las víctimas. Asimismo, se indicó que en relación con la compensación económica, a pesar de que el 9 de febrero de 2016 se profirió la resolución según lo dispuesto por la Ley 288 de 1996, no se ha presentado el escrito de conciliación por parte de la Procuraduría General de la Nación. Agregaron que se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para determinar el monto de la indemnización. En relación al punto 2 de la Cláusula 3 del acuerdo, los peticionarios indicaron que aún no se le ha dado inicio a su implementación, razón por la cual las víctimas se sienten burladas, en este sentido, exigen que en un periodo no superior a 2 meses, se coordine con la directora del Museo de Medellín, con el objeto de que ésta abra al acceso público a las memorias filmicas, conmemoración acordada por las partes.

763. El Estado por su lado, manifestó que ha asumido con responsabilidad y compromiso el cumplimiento del ASA, lo cual se ve representado por la creación de un grupo de trabajo al interior de la Dirección de DDHH de la Cancillería, para el cumplimiento de las decisiones de los órganos especializados en la materia.

764. Igualmente señaló que en lo que concierne a las medidas que versan sobre la memoria de las víctimas, se cuenta con la disposición de la Unidad de Víctimas para visibilizar el tema, y que se coordinaría una reunión con la alcaldía de Medellín y con el Museo Casa de la Memoria para tales efectos. El Estado destacó que ha venido trabajando en la reconstrucción de la memoria en Segovia y se tiene contemplado llevar a cabo una jornada o sesiones en Segovia. Por último, respecto a la indemnización económica, indicó que el Ministerio de Defensa, es la entidad encargada de hacer entrega de la misma, y que ha avanzado en un 90% del proceso, por lo que se encuentra en este momento determinando la forma de pago y los intereses.

765. El 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó a las partes presentaran información actualizada sobre los avances en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado la información solicitada.

766. En vista de lo anterior, la CIDH continuará la supervisión de los puntos 2, 3.2 y 5 pendientes de cumplimiento.

#### **P-577-06, Informe No. 82/15, Gloria González y Familia, (Colombia)**

767. El 28 de octubre de 2016, la CIDH aprobó el Informe de Solución Amistosa No. 82/15 sobre la petición 577-06, Gloria González y Familia. El asunto se refiere a los hechos sucedidos el 7 de mayo de 2002, cuando miembros del Ejército Nacional habrían irrumpido en el Sector Juan XXIII, del Barrio La Divisa, en la ciudad de Medellín, para adelantar un operativo en la casa vecina a la de Gloria González. Los agentes habrían realizado disparos y una bala perdida habría alcanzado el pecho de la víctima mientras amamantaba a su hija D, consecuencia de lo cual Gloria González falleció y la niña D perdió el ojo derecho, como resultado de una perforación en la córnea provocada por una esquirla de bala. Sobre los hechos se inició una

investigación en el fuero penal militar en la cual, al momento de aprobación del acuerdo de solución amistosa, aun no se había sancionado a los responsables.

768. El acuerdo de solución amistosa contiene la siguientes medidas de reparación:

1. Realizar un acto de dignificación, acompañado de una ceremonia privada en la cual de acuerdo al deseo expresado por los familiares de las víctimas, se arrojarán las cenizas de los restos mortales de la señora Gloria González al mar. Este acto simbólico, contará con un acompañamiento psicosocial, por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quien se encargará de la ejecución de esta medida.
2. Realizar un acompañamiento a las víctimas del presente caso, con el fin de que logren acceso a los planes, programas y proyectos en materia de reparación que ofrece el Estado colombiano mediante el modelo de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas, implementado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
3. El Estado gestionará un auxilio por \$50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M C/TE) para la menor D, con el objetivo de financiar la educación técnica o tecnológica y solventar los gastos de manutención. El valor del auxilio se aumentará a \$70.000.000 (SETENTA MILLONES DE PESOS MC/TE) si la beneficiaria escoge una carrera profesional. La beneficiaria de la medida debe realizar los trámites pertinentes para ser admitida en el centro de estudios respectivos y realizará los programas que ofrezca la institución universitaria que permitan garantizar su adecuado rendimiento académico. [...]
4. Se brindará atención integral en salud desde una perspectiva psicosocial y con enfoque reparador en virtud de las afectaciones sufridas como consecuencia de los hechos a D, Jennifer Johanna, Luisa Fernanda, Carlos Josué Londoño González (hijos de la señora Gloria González) y al señor Carlos Enrique Londoño Zapata (cónyuge de la señora Gloria González) (sic). Los beneficiarios de esta medida tendrán atención integral en salud desde una perspectiva psicosocial y con enfoque reparador en virtud de las afectaciones sufridas. Es por ello, que el Ministerio de Salud y Protección Social implementará las medidas de rehabilitación en salud constitutivas de una atención médica, psicológica y psicosocial a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas (PAPSIVI). Se garantizará un tratamiento adecuado, oportuno y prioritario a las personas que lo requieran, previa manifestación de su voluntad, y por el tiempo que sea necesario. [...]

Se brindará atención especial a la niña D quien además del daño psicológico, sufrió lesiones físicas al momento de la muerte de su madre, es por ello que contará con una cobertura integral por la EPS del régimen en el que está afiliada y se le realizará un cambio periódico de la prótesis, así como la entrega de los elementos necesarios de consumo diario y de higiene y los medicamentos para la lubricación de la prótesis.

5. El Estado dará aplicación a la Ley 288 de 1996, una vez se homologue el presente acuerdo de solución amistosa mediante la expedición del informe de artículo 49 de la CADH, con el propósito de reparar los perjuicios de orden moral derivados de la lesión padecida por D, exclusivamente para el señor Carlos Enrique Londoño Zapata (padre) y para Luisa Fernanda, Jennifer Johana y Carlos Josué Londoño González (hermanos), quienes no fueron indemnizados por estos perjuicios en el proceso de reparación directa adelantado ante el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín, en los términos y bajo los parámetros establecidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre y cuando se acrediten los perjuicios en la forma establecida por el ordenamiento jurídico interno.

6. En materia de justicia, el Estado se compromete a continuar con el avance del proceso penal en curso, con el fin de esclarecer los hechos y proferida la decisión que en derecho corresponda, sancionar a los responsables que resultare de ella.

769. En el informe de aprobación del acuerdo de solución amistosa, la CIDH declaró el cumplimiento total del punto 1 del acuerdo y consideró que los demás puntos se encontraban en proceso de cumplimiento, por lo que decidió continuar supervisando el cumplimiento de los compromisos 2, 3, 4, 5 y 6.

770. El 27 de septiembre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado información sobre el cumplimiento.

771. Por lo anterior, la CIDH considera que el acuerdo de solución amistosa se encuentra cumplido parcialmente.

**Caso 11.538, Informe No. 43/16. Herson Javier Caro (Javier Apache), (Colombia).**

772. El 7 de octubre de 2016, la CIDH aprobó el informe de Solución Amistosa No. 43/16 sobre el Caso Herson Javier Caro (Javier Apache). El asunto se refiere la ejecución extrajudicial de Herson Javier Caro, en el municipio de El Castillo, jurisdicción de Medellín del Ariari, Colombia el 15 de noviembre de 1992, quien tenía entonces 15 años de edad y habría fallecido a causa de heridas recibidas por los integrantes de una patrulla militar del Ejército Nacional de Colombia.

773. El 2 de marzo de 2016, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa, en cuyo texto el Estado Colombiano se comprometió a lo siguiente:

**PRIMERO: RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD**

El Estado colombiano reconoce la responsabilidad internacional por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4° (derecho a la vida), 14 (derecho a la honra), 19 (derecho del niño) (sic) en perjuicio del niño Herson Javier Caro (Javier Apache), así como de los artículos 5° (derecho a la integridad personal), 8 (derecho a las garantías judiciales), y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "en adelante la CADH", en perjuicio de la víctima y sus familiares, por los hechos ocurridos el día 15 de noviembre de 1992 en el caserío Puerto Unión, jurisdicción de Medellín del Ariari en el departamento del Meta, en los cuales murió el niño Herson Javier Caro, como consecuencia de los disparos recibidos en los retenes de control que se estaban realizando en la zona por el Ejército Nacional.

**SEGUNDO: MEDIDAS DE JUSTICIA**

La Procuraduría General de la Nación, dentro del marco de sus competencias, interpondrá la acción de revisión de la sentencia de fecha 29 de mayo de 2003, proferida por el Juzgado Cuarto Penal Militar de Brigada de Villavicencio Meta, confirmada por el Tribunal Superior Militar el 3 de septiembre de 2003, una vez se emita el Informe de artículo 49 de la CADH.

**TERCERO: MEDIDAS DE SATISFACCION Y DE REHABILITACIÓN**

El Estado de Colombia se compromete a realizar las siguientes medidas:

1. Un acto de reconocimiento de responsabilidad y de disculpas públicas encabezado por un alto funcionario del Estado, con participación de autoridades públicas, los familiares de víctimas y sus representantes, con difusión a través de los medios masivos de comunicación. El apoyo logístico y técnico de esta medida estará a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas.

2. Otorgar un auxilio por \$50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M C/TE) para Cielo Yamile Apache Caro y otro por el mismo valor para William Alfonso Apache Caro, hermanos de la víctima, con el objetivo de financiar la educación técnica o tecnológica o profesional que escojan y solventar los gastos de manutención. Los beneficiarios de la medida deben realizar los trámites pertinentes para ser admitidos en el centro de estudios respectivos y realizarán los programas que ofrezca la institución universitaria que permitan garantizar su adecuado rendimiento académico.

(...)

3. Se exonerará a William Alfonso Apache (hermano de la víctima) de prestar el servicio militar obligatorio una vez cumpla 18 años y se le expedirá su libreta militar sin costo alguno. Esta medida estará a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Ministerio de Defensa Nacional.

4. Mediante el modelo de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas implementado por la Unidad, el Estado se compromete a realizar un acompañamiento a las víctimas del presente caso, con el fin de que logren acceso a los planes, programas y proyectos en materia de reparación que ofrece el Estado colombiano. Se tendrá en cuenta un enfoque diferencial con la madre del señor Herson Javier Caro, teniendo en cuenta su condición de adulto mayor.

5. El Ministerio de Salud y Protección Social implementará las medidas de rehabilitación en salud constitutivas de una atención médica, psicológica y psicosocial a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas (PAPSIVI). Se garantizará un tratamiento adecuado, oportuno y prioritario a las personas que lo requieran, previa manifestación de su voluntad, y por el tiempo que sea necesario. Al proveer el tratamiento psicológico y brindar la atención psicosocial se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual.

6. Para el acceso a la atención en salud integral, se garantiza el otorgamiento de cualquier tipo de medicamentos, así como los tratamientos que se requieran (que comprenden salud física, mental y psicológica) a los beneficiarios de las medidas, al tiempo que tendrán una atención preferencial y diferencial en virtud de su condición de víctimas.

#### **CUARTO: REPARACIÓN PECUNIARIA**

El Estado se compromete a dar aplicación a la Ley 288 de 1996 una vez se homologue el presente acuerdo de solución amistosa mediante la expedición del informe de artículo 49 de la CADH, con el propósito de reparar los perjuicios inmateriales o materiales que llegaran a probarse a favor de los familiares directos de Herson Javier Caro que no han sido indemnizados a través de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esta medida estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.

774. En el informe de aprobación del acuerdo de solución amistosa, la CIDH valoró el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado colombiano, consagrado dentro del acuerdo de solución amistosa, por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida), 11 (derecho a la honra), 19 (derechos del niño) en perjuicio del niño Herson Javier Caro (Javier Apache), así

como de los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 8 (derecho a las garantías judiciales), y 25 (derecho a la protección judicial) de la CADH, en perjuicio de la víctima y sus familiares<sup>96</sup>.

775. Igualmente, la CIDH tomó nota de los compromisos asumidos por el Estado colombiano para reparar integralmente a los familiares de Javier Apache, con medidas de satisfacción y de rehabilitación social y en salud; y en especial del compromiso asumido por el Estado relacionado con la Cláusula de Justicia, de interponer una acción de revisión contra la decisión que permitió que los hechos sucedidos permanecieran en la impunidad.

776. La Comisión declaró pendientes de cumplimiento las Cláusulas Segunda, Tercera y Cuarta del acuerdo de solución amistosa suscrito entre las partes, y se decidió continuar con la supervisión de todos los compromisos pendientes de cumplimiento por parte del Estado colombiano.

777. El 13 de febrero de 2017, el Estado informó que el 11 de diciembre de 2016, en el Municipio el Dorado, se realizó el acto de disculpas por parte del Estado por los hechos ocurridos el 15 de noviembre de 1992, que fue concertado el mismo con las víctimas y sus representantes, y que contó con la asistencia de los familiares de las mismas y delegados del Estado. El Estado indicó en su informe las actividades desarrolladas a lo largo del acto, entre las cuales se incluyó la develación de una placa y siembra de un jardín de memoria. Asimismo, el Estado proporcionó registro fotográfico del acto y los enlaces de las páginas de internet de la Unidad de Protección de Víctimas y de la Cancillería del Estado colombiano.

778. Posteriormente, el 16 de mayo de 2017, el Estado informó respecto a las medidas de justicia, que la Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal, declaró mediante auto de sustanciación de 25 de abril de 2017, que la acción de revisión de la sentencia de fecha 29 de mayo de 2003, proferida por el Juzgado Cuarto Penal Militar de Brigada de Villavicencio Meta, se encuentra ajustada a derecho y admitió el recurso extraordinario de revisión.

779. El 16 de junio de 2017, el Estado Colombiano, informó en relación a las medidas de salud, establecidas en el punto 5 de la Cláusula Tercera del acuerdo, que los beneficiarios del acuerdo se encuentran asegurados por instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que el señor William Alfonso, presentó solicitud de traslado del régimen contributivo al régimen subsidiado, y que actualmente, dicho procedimiento administrativo se encuentra en proceso.

780. Igualmente, en el mismo informe el Estado comunicó que, la “NUEVA EPS” y “CAFESALUD”, encargadas de prestar la atención integral en salud a los beneficiarios han presentado reportes mediante los cuales se puede verificar el uso que se la ha dado a la medida.

781. Por último, respecto a la atención psicosocial, el Estado indicó la relación de las personas atendidas en la vigencia del año 2016 en el marco de la atención psicosocial del Programa de Atención Psicosocial y en Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), así como el número de sesiones adelantadas con los beneficiarios del ASA. Finalmente, destacó su compromiso en dar cumplimiento a las medidas acordadas en el marco del caso en referencia.

782. La Comisión trasladó la información presentada por el Estado a los peticionarios para que presentaran sus observaciones.

783. El 6 de julio de 2017, los peticionarios indicaron que, no ha habido avances en cuanto al cumplimiento del acuerdo; que, con respecto a Cielo Apache, su cupo en la universidad reservado para la inscripción se encuentra vencido sin que el Estado haya realizado el desembolso acordado. Igualmente señalaron que, no han habido avances en cuanto a la expedición y entrega de la libreta miliar a William Alfonso Apache; y que no han sido notificados aún de la fecha en la que se daría la reunión con el Ministerio

---

<sup>96</sup> CIDH, Informe No. 43/16, Caso 11.538. Solución Amistosa. Herson Javier Caro (Javier Apache). Colombia. 7 de octubre de 2016.

de Defensa para iniciar el proceso de reparación integral de las víctimas. La CIDH trasladó la información presentada por los peticionarios al Estado para que presentara sus observaciones.

784. El 27 de octubre de 2017, el Estado indicó sobre las medidas de satisfacción y de rehabilitación, que el Ministerio de Educación Nacional, mediante nota de 22 de agosto de 2017, informó sobre las actividades realizadas en lo que se refiere al otorgamiento de auxilio educativo, indicando que, el Ministerio en cuestión y el ICETEX, constituyeron un fondo de administración y manejo de los recursos financieros, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 1450 de 2011; por lo anterior, se suscribió el convenio interadministrativo 1280 de 2017, mediante el cual se han de administrar los recursos para la beneficiaria Cielo Apache, por un valor de \$ 50.000.000 de pesos; indica el Estado así que, en base a comunicaciones realizadas con la beneficiaria, se encuentran en la espera de los documentos que aporte la misma para empezar nuevamente el trámite ante el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX, por cambio de domicilio y residencia.

785. En cuanto a las medidas de satisfacción y de rehabilitación, el Estado indicó que el Ministerio de Defensa Nacional, informó que había sido comunicado ya a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el trámite a seguir para que el joven William Alfonso Apache solicitara la libreta militar provisional. Igualmente indicó que en fecha 16 de agosto de 2016, los datos de identificación del joven habían sido recibidos y se transmitieron a la Dirección de Reclutamiento, que ya había sido iniciado el proceso de inscripción y formulación de solicitud de exención como víctima del conflicto armado y que, había sido inscrito como víctima en el Registro Único de Víctimas para poder definir y expedir sin costo su libreta militar.

786. Respecto a la reparación pecuniaria, el Estado indicó que el Ministerio de Defensa solicitó a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la identificación del apoderado, dirección, número telefónico y la identificación de las víctimas a indemnizar y hasta el momento no se ha recibido respuesta, solicitud reiterada nuevamente el 14 de agosto de 2017, y que hasta el momento no se ha recibido respuesta por parte de los representantes de las víctimas. Dicha información fue trasladada a los peticionarios para que presentaran sus observaciones.

787. A la fecha de cierre de este informe, la Comisión no ha recibido información suficiente para valorar el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. Por lo anterior, reitera que se encuentran pendientes de cumplimiento las Cláusulas segunda, tercera y cuarta del acuerdo, y por tanto, continuará supervisando los avances respecto a los mismos.

**Caso 12.541, Informe No. 67/16. Omar Zúñiga Vásquez y Amira Isabel Vásquez de Zúñiga, (Colombia)**

788. El 30 de noviembre de 2016, la CIDH aprobó el informe de Solución Amistosa No. 67/16 sobre el caso Omar Zúñiga Vásquez y Amira Isabel Vásquez de Zúñiga. El asunto se refiere a los hechos sucedidos el día 1 de junio de 1991, en la finca “El Cerrito”, en el municipio de San Cristóbal, departamento de Bolívar de la República de Colombia, fecha en la que un grupo de hombres armados, pertenecientes al Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 3, habrían llegado a la casa de la señora Amira Vásquez de Zúñiga y se habrían llevado su hijo Omar Zúñiga Vásquez de su residencia para posteriormente conducirlo a un colegio y torturarlo por su presunta colaboración o pertenencia con un grupo de la guerrilla.

789. Dado que Amira Vásquez de Zúñiga habría corrido detrás de su hijo al ser arbitrariamente detenido por los agentes estatales, ésta habría sido detenida en el baño de dicho colegio, por 3 días durante los cuales fue testigo de las torturas y malos tratos infringidos a su hijo. Posteriormente, nueve días más tarde, apareció el cuerpo de Omar Zúñiga con un impacto de arma de fuego en la cabeza.

790. Las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa el 6 de abril de 2016, dentro del marco de una reunión de trabajo celebrada en el 157 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, en cuyo texto se dejó establecido lo siguiente:

**PRIMERO: RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD**

El Estado colombiano reconoce la responsabilidad internacional por la violación de:

- El artículo 4º (derecho a la vida) de la CADH en perjuicio de Omar Zúñiga;
- Los artículos 5º (derecho a la integridad personal) y 7º (derecho a la libertad personal) de la CADH en perjuicio del señor Omar Zúñiga Vásquez y la señora Amira Vásquez de Zúñiga;
- Los artículos 8º (derecho a las garantías judiciales), 22º (derecho de circulación y de residencia) y 25º o (derecho a la protección judicial) de la CADH, en perjuicio de los familiares de Omar Zúñiga.

**SEGUNDO: MEDIDAS DE JUSTICIA**

La Procuraduría General de la Nación, dentro del marco de sus competencias, interpondrá la acción de revisión contra la resolución de fecha 28 de mayo de 2014, proferida por la Fiscalía 73 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, una vez se emita el Informe de artículo 49 de la CADH.

Asimismo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se compromete a estudiar la viabilidad de presentar la acción de repetición de acuerdo a las funciones que le otorga el artículo 6, numeral 3, literal ix del decreto ley 4085 de 2011.

**TERCERO: MEDIDAS DE SATISFACCION Y DE REHABILITACIÓN**

El Estado de Colombia se compromete a realizar las siguientes medidas:

1. Entrega en condiciones de respeto y dignidad del cadáver de Omar Zúñiga Vásquez a su familia para ser inhumado en la ciudad de Barranquilla, este acto será concertado con las víctimas y sus representantes.
2. Un acto de reconocimiento de responsabilidad y de disculpas públicas encabezado por un alto funcionario del Estado, con participación de autoridades públicas, los familiares de víctimas y sus representantes, con difusión a través de los medios masivos de comunicación. El apoyo logístico y técnico de esta medida estará a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y será concertado con las víctimas y sus representantes.
3. Otorgar un auxilio por \$50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M C/TE) para Julio Miguel Zúñiga Villalba y otro por el mismo valor para Julieth Zúñiga Villalba, hijos de la víctima, con el objetivo de financiar la educación técnica, tecnológica o profesional que escojan y solventar los gastos de manutención. Los beneficiarios de la medida deben realizar los trámites pertinentes para ser admitidos en el centro de estudios respectivos y realizarán los programas que ofrezca la institución universitaria que permitan garantizar su adecuado rendimiento académico.

En todo caso, el auxilio debe empezar a utilizarse en un término no mayor de diez (10) años contados desde la firma del presente acuerdo, o de lo contrario se declarará cumplida la gestión del Estado en su consecución. Si la falta de ejecución de la medida en el término señalado es atribuible al Estado no se extinguirá la obligación de otorgar el auxilio educativo. La ejecución de esta medida estará a cargo del Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX).

4. Mediante el modelo de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas implementado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Estado se compromete a realizar un acompañamiento a las víctimas del presente caso, con el fin de que logren acceso a los planes, programas y proyectos en materia de reparación y asistencia que ofrece el Estado colombiano.

5. El Ministerio de Salud y Protección Social implementará las medidas de rehabilitación en salud constitutivas de una atención médica, psicológica y psicosocial a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas (PAPSIVI). Se garantizará un tratamiento adecuado, oportuno y prioritario a las personas que lo requieran, previa manifestación de su voluntad, y por el tiempo que sea necesario. Al proveer el tratamiento psicológico y brindar la atención psicosocial se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual.

6. Para el acceso a la atención en salud integral, se garantiza el otorgamiento de cualquier tipo de medicamentos, así como los tratamientos que se requieran (que comprenden salud física, mental y psicológica) a los beneficiarios de las medidas, al tiempo que tendrán una atención preferencial y diferencial en virtud de su condición de víctimas. Así mismo, se tendrá en cuenta un enfoque diferencial para los señores Miguel Antonio Zúñiga Buelvas y Amira Vásquez de Zúñiga, teniendo en cuenta su condición de adultos mayor.

7. Respecto a Julio Miguel Zúñiga Villalba, hijo del señor Omar Zúñiga, el Estado se compromete a realizar gestiones encaminadas a ofrecer un tratamiento de rehabilitación [...], a través de las entidades especializadas en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

*(Numeración por fuera del texto del documento).*

#### **CUARTO: REPARACIÓN PECUNIARIA**

El Estado se compromete a dar aplicación a la Ley 288 de 1996 una vez se homologue el presente acuerdo de solución amistosa mediante la expedición del informe de artículo 49 de la CADH, con el propósito de reparar los perjuicios inmateriales y materiales que llegaron a probarse a favor de los familiares directos de Omar Zúñiga Vásquez y Amira Vásquez de Zúñiga que no han sido indemnizados a través de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esta medida estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.

791. En el Informe de Solución Amistosa No. 67/16, la CIDH concluyó en cuanto al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano, que los puntos 1 y 2 de la Cláusula Tercera del acuerdo de solución amistosa suscrito entre las partes se encuentran cumplidos totalmente<sup>97</sup>.

792. Asimismo, señaló que los demás puntos se encuentran en proceso de cumplimiento, por lo que continuará supervisando el cumplimiento de la Cláusula Segunda, los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Cláusula Tercera y de la Cláusula Cuarta.

793. El 16 de mayo de 2017, el Estado informó a la Comisión acerca de los avances en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, señalando respecto a las medidas de satisfacción y de rehabilitación, específicamente sobre los puntos 3 y 7 de la referida cláusula, que el Estado de Colombia ha desplegado acciones para avanzar en su implementación pero que, no obstante, existen dificultades de facto ajenas a la voluntad estatal, que obstaculizan la actuación de las entidades. El Estado se refirió al caso de Julio

<sup>97</sup> CIDH, Informe No. 67/16, Caso 12.541. Solución Amistosa. Omar Zúñiga Vásquez y Amira Isabel Vásquez de Zúñiga. Colombia. 30 noviembre 2016.

Miguel Zúñiga Villalba toda vez que en el año 2016 se inició un proceso de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas y socialización callejera, para lo cual fue evaluado, diagnosticado y se desarrolló un plan integral de rehabilitación e salud, bajo su propia voluntad y en colaboración con su familia, y recibió servicios de medicina general, nutrición, exámenes de laboratorio, psiquiatría, entre otros servicios, incluyendo terapia de movilización. Sin embargo, el paciente salió del centro de rehabilitación y no retornó al centro de rehabilitación para tratamiento.

794. Ante esta situación, indica el Estado que, tras evaluar las acciones adelantadas para ese momento, se acordó que la familia Zúñiga se comprometía a realizar la búsqueda de Julio Miguel y a brindar el soporte familiar pertinente para que él retomara de forma voluntaria el proceso de rehabilitación; mientras que por su parte, la Entidad Promotora de Salud (EPS), se comprometió a gestionar de manera prioritaria la vinculación del señor Julio Miguel al centro de rehabilitación, tan pronto como la familia informara de su ubicación, para lo cual se entregaron a la familia los datos de la persona que actuaría como enlace directo.

795. Se señaló por último que, el Estado a la fecha de la presentación de la referida información desconoce el paradero del señor Julio Zúñiga; ante ello, el Estado manifestó su preocupación respecto al cumplimiento de los compromisos referentes a ofrecer un tratamiento de rehabilitación y al otorgamiento de auxilio educativo, para lo cual, como mínimo se requiere que el beneficiario finalice su proceso de rehabilitación y retome y finalice sus estudios de educación básica secundaria con la obtención del respectivo título de bachiller, todo lo anterior, dentro del rango temporal de 10 años.

796. El 30 de mayo de 2017, los peticionarios informaron que el 16 de enero de 2017, sostuvieron una reunión bilateral, en la cual la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, se comprometió a dar trámite a la convocatoria del Comité de Ministros y expedición de resoluciones pertinentes para avanzar en la ejecución de la medida de compensación económica; a nombrar un responsable a efectos de garantizar seguimiento al informe; y a convocar a una reunión con representantes de víctimas a efectos de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados.

797. Los peticionarios indicaron que el 7 de marzo de 2017 remitieron un oficio a la Dirección de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando información sobre la resolución del Comité de Ministros; la cual fue contestada el 26 de mayo del mismo año, señalando que el Comité de Ministros el 10 de febrero de 2017, revisó los mencionados casos y dio concepto favorable para indemnizar a las víctimas de acuerdo con el trámite establecido en la Ley 288/96. Finalmente, señalaron que, el término establecido en la Ley 288 de 1996 se encuentra claramente vencido, y expresaron ya que a pesar de existir un acuerdo de solución amistosa, el Estado Colombiano no ha dado un trámite oportuno a los compromisos, lo que deriva en pérdida de credibilidad de las víctimas en el mecanismo y voluntad de cumplimiento.

798. El 4 de julio de 2017, las partes sostuvieron una reunión de trabajo en la ciudad de Lima, Perú, con la facilitación del Comisionado José de Jesús Orozco, Relator de la CIDH para Colombia. En dicha reunión, los peticionarios informaron sobre el incumplimiento de las medidas acordadas junto con el Estado Colombiano, lo cual ha provocado una ruptura de la confianza legítima entre las partes. Los peticionarios indicaron que el auxilio dirigido a apoyar la educación de la hija de la víctima, no fue desembolsado, por lo cual solicitaron que el Ministerio de Educación haga un acompañamiento para que los mismos puedan decidir sobre los programas educativos. Asimismo, indicaron que, se elevó una petición en el mes de diciembre del año de 2016, a través de la cual se solicitó la acción de revisión por parte de la Procuraduría General. En cuanto al compromiso del Estado Colombiano de dar aplicación a la Ley 288 de 1996, los peticionarios indicaron que no se ha dado trámite oportuno a la indemnización de las víctimas. Por último destacaron con preocupación que, los familiares beneficiarios del acuerdo no han sido registrados en la Unidad de Víctimas; ante ello solicitan se aclare qué víctimas han sido incluidas en el referido registro y cuales no han sido incorporadas.

799. El Estado de Colombia por su parte indicó que, en relación a las medidas pecuniarias, el Consejo de Ministros ya dio el visto favorable, lo cual se hizo constar en la Resolución No. 4872 del 27 de junio de 2017, para el pago de la indemnización. Igualmente, reconoce la situación de calle en la que continúa el señor Julio Miguel Zúñiga Villalba y manifiesta su disposición a que se continúe con los esfuerzos para el

cumplimiento de los acuerdos. Asimismo, señaló que algunas de las víctimas ya han sido indemnizadas y que la idea es llegar a una ruta priorizada con todo el grupo familiar. Por último, aseguró que gran parte del grupo familiar se encuentra en el registro, por lo que el Estado tiene la intención de revisar la ruta de atención y reparación en lo que dice relación con las medidas de rehabilitación. Finalmente, el Estado indicó que transmitiría al Ministerio de Educación lo planteado por los peticionarios, a los fines de buscar una ruta para buscar la carrera académica pertinente para Julieth.

800. El 25 de octubre de 2017, la CIDH se dirigió al Estado de Colombia, solicitando información sobre los resultados de la acción de revisión sobre la cual se comprometió a informar a la Comisión en el marco de la reunión de trabajo sostenida entre las partes, en la ciudad de Lima, Perú, el 4 de julio de 2017.

801. A la fecha de cierre de este informe, la CIDH no ha recibido información actualizada, por tanto, la misma continuará dando seguimiento el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa.

### **Caso 11.007, Informe No. 68/16. Masacre de Trujillo, (Colombia).**

802. El 30 de noviembre de 2016, la CIDH aprobó el informe de Solución Amistosa No. 68/16 sobre el caso de Masacre de Trujillo. El caso hace referencia a los hechos acontecidos en el municipio de Trujillo y territorios aledaños, Departamento del Valle del Cauca, entre 1988 y 1990, relacionados con una pluralidad de conductas que incluyeron ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos, a través de “una cadena de acciones criminales de amplio alcance, en la cual participaron miembros de la fuerza pública con poder de mando, en alianza estrecha con traficantes de droga y cuerpos armados civiles a su servicio”.

803. El 6 de abril de 2016, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa, dentro del marco de una reunión de trabajo sostenida entre las partes con el acompañamiento de la Comisión durante el 157 Período Ordinario de Sesiones, en el cual se dejó establecido lo siguiente:

### **ACUERDO FINAL DE SOLUCIÓN AMISTOSA**

#### **PRIMERO: RECONOCIMIENTO DE VÍCTIMAS**

El Estado reconoce como víctimas del Caso 11.007 Masacre de Trujillo, tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las víctimas que se acrediten como tal en la investigación No. 040 que adelanta por los hechos del caso el Despacho 17 de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hasta la fecha dentro la investigación penal se han acreditado las siguientes víctimas<sup>98</sup>:

1) Ramiro Velásquez Vargas, 2) Arnoldo De Jesús Cardona Moreno, 3) Everth Prado, 4) Rigoberto Prado, 5) Fernando Arias Prado, 6) Arnulfo Arias Prado, 7) José Vicente Gómez, 8) Esther Cayapu Trochez, 9) Fernando Fernández Toro, 10) Ricardo Alberto Mejía, 11) Wilmer Sandoval, 12) José Agustín Lozano Calderón, 13) José Alirio Granada Vélez, 14) Hervey Vargas Londoño, 15) Orlando Vargas Londoño, 16) José Erlein Vargas Londoño, 17) Juan Gregorio Giraldo Molina, 18) Freddy Rodríguez Giraldo, 19) José Porfirio Ruíz Cano, 20) Jairo Antonio Ortiz Sánchez, 21) Albeiro de Jesús Sánchez, 22) Tiberio de Jesús Fernández Mafla, 23) Alba Isabel Giraldo Fernández, 24) José Norbey Galeano Cuartas, 25) Oscar Pulido Rozo, 26) Fernando Londoño Montoya, 27) José Abundio Espinosa quintero, 28) Teofilo Gamboa Moreno, 29) José Alberto Laverde Suarez, 30) Luis Dado Estrada, 31) Gilberto Hernández López, 32) José William Mayorga Vargas, 33) Francisco Luis López Rojas, 34) Salvador Augusto López Rojas, 35) Pedro Pablo Duque Aguirre, 36) Jesús Alberto Arias Ramírez, 37) José Luis Rodríguez, 38) Joaquín Ángel Ramírez Ospina, 39) Pedro Antonio Guzmán De Jesús,

<sup>98</sup> Listado brindado por la Fiscalía General de la Nación mediante oficio 20151700079271 de 30/11/15.

40) Julián Restrepo Sánchez, 41) Fabio De Jesús Berrio Marroquín, 42) Arcenio De Jesús Berrio Marroquín, 43) Enoc Giraldo Santa, 44) Marco Antonio Peña 45) José Noel Giraldo Molina, 46) Carlos Alberto Bermúdez, 47) José Horacio Bermúdez, 48) Gilberto Berrio Osorio, 49) Ordoniel Ospina Vélez, 50) Fabio Elías Cardona Vélez, 51) Luis Antonio Ortiz Vega, 52) José Omar Infante, 53) Orlando Cabrera Rodríguez, 54) Luis Albeiro Salinas Ospina, 55) Luis Alberto Ríos Zapata, 56) Miguel Arturo Téllez Garay, 57) Raúl Emiro Erazo, 58) Jesús María Barón, 59) Luis Alfonso Giraldo Rojas, 60) Miguel Vicente Rodríguez Matallana, 61) Rubén Darío González Agudelo, 62) Ricardo Burbano Delgado, 63) Rubiel Ider Cano Valencia, 64) José Alben Cano Valencia, 65) José Dorniel Cano Valencia, 66) José Albeiro Bedoya Buitrago, 67) Genaro Antonio Serna Pabón, 68) José Orlando Orozco Londoño, 69) Raúl Peñaloza, 70) Arnulfo Peñaloza, 71) Alba Lucía Martínez, 72) Juan de Jesús Restrepo Valencia, 73) José Gildardo Giraldo Molina, 74) Daniel Arcila Cardona, 75) Mauricio Castañeda Giraldo, 76) Reinel Pineda García.

En caso que la Investigación No. 040 que adelanta por los hechos del caso, el Despacho 17 de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, reconozca nuevas víctimas, estas serán beneficiarias de las acciones descritas en los numerales 1 y 2 de la cláusula cuarta del presente acuerdo.

## **SEGUNDO: MEDIDAS RELACIONADAS CON LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A LA JUSTICIA**

Las partes reconocen los avances que han existido en materia de justicia en el presente caso, así como la persistencia de algunas dificultades. En razón de ello, con el fin de continuar con la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos y búsqueda e identificación de los desaparecidos, así como la entrega digna de los cuerpos a sus familiares; la Fiscalía General de la Nación, conformará un Grupo de Trabajo integrado por el Fiscal 17 Especializado adscrito a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y DIH, un fiscal local, dos investigadores y un analista, con el fin de que adelanten con criterio de priorización las actividades investigativas dentro del radicado No. 040 que cursa por la Masacre de Trujillo.

## **TERCERO: MEDIDAS RELACIONADAS CON EL DERECHO A LA VERDAD Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA**

El Estado se compromete a realizar las siguientes medidas conmemorativas:

1. Un Acto de conmemoración encabezado por un alto funcionario del Estado, con participación de autoridades públicas, los familiares de las víctimas y sus representantes en el Municipio de Trujillo-Valle en el mes de abril del año 2016. Esta medida estará a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
2. Un documental audiovisual sobre los esfuerzos realizados por los familiares de las víctimas en la búsqueda de verdad y justicia a lo largo de los años. Adicionalmente, este documental deberá reivindicar la memoria de las víctimas y de sus familiares. El documental tendrá una duración de 45 minutos y su realización comprende la producción, presentación y proyección en un canal público nacional. Esta medida estará a cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
3. Otorgar un apoyo económico por sesenta y cinco millones de pesos (\$65.000.000) a la Asociación Familiares Víctimas de Trujillo (AFAVIT) para que sea invertido en el desarrollo de una agenda cultural que aporte al mejoramiento del parque Monumento de Trujillo Valle del Cauca, como medida de reparación simbólica que reivindique y dignifique la memoria de las víctimas y sus familiares. Esta medida estará a cargo del Ministerio de Cultura, entidad que realizará seguimiento a la inversión de los recursos. Adicionalmente el

Ministerio de Cultura se compromete a gestionar con la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle del Cauca, un monto por veinticinco millones de pesos (\$25.000.000) para apoyar a AFAVIT en actividades de memoria.

Estas medidas tendrán en cuenta a los familiares de las víctimas que fallecieron por pena moral y su implementación será concertada con los familiares de las víctimas y sus representantes.

**CUARTO: MEDIDAS ENCAMINADAS A LA REALIZACIÓN DEL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A UNA REPARACIÓN INTEGRAL**

1. Reparación pecuniaria: El Estado se compromete a indemnizar mediante el procedimiento establecido en la Ley 288 de 1996, los perjuicios inmateriales y materiales a que haya lugar a favor de los familiares directos de las víctimas que se reconozcan en la investigación No. 040 que cursa por los hechos en la Fiscalía 17 Especializada de la Dirección de DDHH y DIH, que aún no han sido indemnizados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esta medida se hará efectiva una vez se homologue el presente acuerdo de solución amistosa mediante la expedición del informe de artículo 49 de la CADH y estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.

El pago de la indemnización se realizará en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la sentencia o auto aprobatorio de la conciliación.

2. El Estado se compromete a realizar un acompañamiento a las víctimas del presente caso, con el fin de que logren acceso a los planes, programas y proyectos en materia de asistencia y reparación que ofrece el Estado colombiano, mediante el modelo de atención, asistencia y reparación integral implementado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Se incluirá en el Registro Único de Víctimas a los familiares directos de las víctimas reconocidas en el marco de la solución amistosa.

Parágrafo: En la eventualidad de que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deje de existir, esta medida será cubierta por la entidad que asuma sus funciones.

3. Se realizarán las gestiones administrativas necesarias con el objeto de lograr la titulación de las viviendas construidas. Esta medida estará a cargo de la Alcaldía del municipio de Trujillo-Valle y se cumplirá en el término de seis meses a partir de la firma del presente acuerdo de solución amistosa. El seguimiento al cumplimiento de este compromiso estará a cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

**QUINTO: GARANTÍA DE NO REPETICION:**

El Estado a través del Ministerio del Interior se compromete a continuar brindando acompañamiento y asistencia técnica al Municipio de Trujillo-Valle en la construcción, actualización y seguimiento al plan integral de prevención a violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH realizado en el Municipio de Trujillo-Valle.

804. En el informe No. 68/16, la CIDH concluyó que se encontraba cumplido en su totalidad el punto 1 de la cláusula tercera del acuerdo, relacionado con un acto conmemorativo de los hechos. La CIDH concluyó además que existía un cumplimiento parcial de la cláusula segunda sobre la creación de un Grupo de Trabajo integrado por el Fiscal 17 Especializado adscrito a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y DIH. En el mismo sentido, la CIDH concluyó que había un cumplimiento parcial del punto 3 de la cláusula tercera, referido al otorgamiento de un apoyo económico por sesenta y cinco millones de pesos (\$65.000.000) a la Asociación Familiares Víctimas de Trujillo (AFAVIT); así como del punto 1 de cláusula cuarta referido a indemnizaciones económicas y del punto 3 de la cláusula cuarta, referido a la

titulación de las viviendas construidas. Finalmente, la CIDH consideró que existía un cumplimiento parcial de la medida de no repetición establecida en la cláusula quinta del acuerdo<sup>99</sup>.

805. El 10 de abril de 2017, el Estado informó en relación al punto 3 de la cláusula 3, que el Ministerio de Cultura realizó las gestiones administrativas correspondientes para incorporar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda mediante Resolución 3257 de 2016, por el monto de sesenta y cinco millones de pesos (\$65.000.000), a partir de ese proceso y una vez incorporados los respectivos recursos, tanto el Ministerio en referencia como la Dirección de Poblaciones de esa entidad suscribió el Convenio de Asociación No. 2690/16 del 2016 con AFAVIT, con el propósito de aunar esfuerzos técnicos, financieros y humanos para el desarrollo de una agenda cultural que aporte al mejoramiento del parque Monumento de Trujillo, Valle del Cauca, como medida de reparación simbólica que reivindique y dignifique la memoria de las víctimas y sus familiares. El Estado indicó que se realizaron diversas actividades para la consolidación de la agenda cultural para el mejoramiento del parque, en la cual se incluyó el apoyo de actividades comunitarias de memoria del conflicto y construcción de paz con sociedad civil; igualmente se llevaron a cabo talleres comunitarios de diseño, conceptualización, entre otros, dándole protagonismo a la memoria de las comunidades; y por último, en lo referente al monto de los veinticinco millones de pesos M/CTE (\$25.000.000), el Estado señaló que dicho monto fue debidamente desembolsado y destinado a la realización de los talleres culturales con el grupo infantil “Jimmy García Peña”, el grupo juvenil y el grupo de matriarcas de Trujillo. Por lo anterior, el Estado solicitó a la Comisión, se declarase el cumplimiento del numeral 3 de la cláusula tercera.

806. Respecto a la Cláusula 5, indicó que de conformidad con las competencias del Ministerio del Interior en materia de asistencia técnica a entes territoriales para la formulación y puesta en marcha de los Planes Integrales de Prevención y Protección, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior realizó una jornada interinstitucional para la socialización y retroalimentación del Plan Integral de Prevención y Protección del municipio de Trujillo el 29 de junio del 2016, con la participación de diferentes entidades de orden nacional y territorial, con el fin de analizar y acordar compromisos frente a las acciones específicas para la puesta en marcha del Plan. Igualmente, se pactó la realización de un Consejo de Seguridad Ampliado, presidido por la Gobernadora del Valle del Cauca, con el objeto de impulsar las acciones acordadas. Adicionalmente señaló que, para el 2017, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a través del Grupo de Gestión Preventiva del Riesgo, priorizó al municipio de Trujillo para desarrollar un trabajo permanente e impulsar las acciones definidas en el PIPP, actualizado para el año 2015. Por lo anterior, el Estado solicitó a la Comisión que declare el cumplimiento de la cláusula 5 del acuerdo de solución amistosa. Dicha información fue trasladada a los peticionarios para que presentaran sus observaciones.

807. El 30 de mayo de 2017, los peticionarios indicaron que el 16 de enero de 2017 se sostuvo una reunión en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la cual la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se comprometió a dar trámite a la convocatoria del Comité de Ministros y expedición de resoluciones pertinentes; a nombrar un responsable a efectos de garantizar seguimiento al informe; y a convocar a una reunión con representantes de víctimas a efectos de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados. Asimismo, indicaron que el Comité de Ministros revisó el 10 de febrero de 2017 los mencionados casos y dio concepto favorable para indemnizar a las víctimas de acuerdo con el trámite establecido en la Ley 288/96. Finalmente señalaron que el término establecido en la Ley 288 de 1996 se encuentra claramente vencido, y expresan su preocupación en virtud de que, a pesar de existir un acuerdo de solución amistosa, el Estado Colombiano no ha dado un trámite oportuno a los compromisos, lo que deriva en pérdida de credibilidad de las víctimas en el mecanismo y voluntad de cumplimiento.

808. El 29 de junio de 2017, el Estado colombiano indicó que el lapso de 45 días para dar cumplimiento a la Ley 288 de 1996, comienza a contar a partir de la notificación oficial del pronunciamiento del órgano internacional. Asimismo, el Estado indicó que en el mes de mayo se dio un cambio de Ministro del Interior, lo cual demoró el proceso de elaboración y aprobación de la resolución.

<sup>99</sup> CIDH, Informe No. 68/16. Caso 11.007. Solución Amistosa. Masacre de Trujillo. Colombia. 30 de noviembre de 2016.

809. El 14 de julio de 2017, se celebró una reunión de trabajo en la ciudad de Lima, Perú, con la facilitación del Comisionado José de Jesús Orozco, Relator de la CIDH para Colombia. En dicha reunión de trabajo, los peticionarios expresaron que no se han implementado debidamente las medidas contenidas en el acuerdo de solución amistosa. En cuanto a la investigación penal, los peticionarios indicaron que no ha dado resultado fructífero para las víctimas, por lo cual se han desarrollado nuevas estrategias de criminalidad en la zona rural, relacionadas principalmente con el micro tráfico, que anteriormente se realizaban en el caso urbano. Señalaron igualmente que hay elementos del acuerdo de solución amistosa que se han llevado a cabo y que son muy positivos, tales como la prevención y asistencia a las víctimas; también se efectuó un diagnóstico de Trujillo, estableciéndose un plan concertado entre el Alcalde y la Gobernación, el cual está dirigido a prevenir la comisión de nuevos hechos atroces por parte del paramilitarismo. Asimismo, reconocen algunos avances respecto de la realización del documental audiovisual, medida de satisfacción también establecida. En cuanto a la compensación económica, sostuvieron que el trámite se encuentra suspendido y no se conoce la expedición de la resolución acorde a lo dispuesto en la Ley 288 de 1996. A su vez indicaron que sigue pendiente la titulación de las viviendas y, a su vez, exigen un canal expedito de comunicación, entre ellos y el Estado de Colombia.

810. El Estado por su parte indicó que el Comité de Ministros ya dio el concepto favorable, por medio de la Resolución 4871 del 27 de junio de 2017, conforme la cual se aprobó la aplicación de la Ley 288 de 1996. Asimismo, expresó que la titulación de las viviendas no era un trámite sencillo, toda vez que el lote le pertenecía a un privado y actualmente se está negociando la compra de un predio. Sobre el apoyo económico, el Estado señaló que ya se encuentran asignados los \$65.000.000 a la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo (AFAVIT), para la inversión de ese dinero en el desarrollo de una agenda cultural que aporte al mejoramiento del parque Monumento de Trujillo Valle del Cauca. A su vez, constató que, en lo que respecta al documental audiovisual, actualmente se está trabajando en la contratación de la cadena RTVC.

811. El 29 de septiembre de 2017, los peticionarios indicaron que existe un retraso injustificado en los procesos penales encaminados a juzgar y sancionar a los responsables, toda vez que las audiencias han sido suspendidas. Con respecto a los procesos en etapa de juzgamiento, resaltaron que se ha avanzado en el proceso judicial contra Diego Montoya y Alirio Urueña, que, en marzo de 2016, fue confirmada y ejecutoriada la sentencia en contra del señor José Fernando Berrio, quien fue condenado a 28 años de prisión por su participación en los hechos de la Masacre, y finalmente, el proceso en contra del paramilitar Rigoberto Tabares Henao se encuentra desde hace 2 años en el despacho para fallo, sin que exista pronunciamiento alguno.

812. Por otro lado, indicaron que las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación respecto a Daniel Arcila y Mauricio Castañeda, se encuentran en el despacho y pendientes aún de ser resueltos; que respecto a Paola Galvis, la Fiscalía calificó el mérito sumario y procedió a decretar la cesación del procedimiento; respecto a las investigaciones contra otros paramilitares, no han habido avances; igualmente hicieron mención a que en las investigaciones en contra de los militares, se ha probado la participación de otros Batallones de la zona en los hechos de la masacre de Trujillo. Por último, respecto a este punto resaltaron que aún se encuentran pendientes las exhumaciones de las personas inhumadas como NN en el cementerio de Marsella durante los años 90, 91 y 92.

813. Respecto a las medidas relacionadas con el derecho a la verdad y la reconstrucción de memoria, indicaron que en cuanto al documental audiovisual, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos se encuentra en proceso de contratación con RTVC, entidad que se encargará de la producción y realización del documental. Señalaron que el 17 de junio de 2017, se inició la grabación del documental durante la perenigración anual de las víctimas al municipio de Trujillo. En relación a la reparación pecuniaria, los peticionarios indicaron que en aplicación de la Ley 288 de 1996, el 26 de mayo de 2017 fueron informados por el Comité de Ministros que el 10 de febrero de 2017, se dio concepto favorable para indemnizar a las víctimas. En relación al resto de los puntos, los peticionarios reiteraron la información presentada con anterioridad. Finalmente, solicitaron a la Comisión declarar cumplida la cláusula tercera del acuerdo, relativa al apoyo económico a AFAVIT.

814. El 17 de octubre de 2017, el Estado indicó que en cuanto a las medidas relacionadas con la satisfacción del derecho a la justicia, la investigación del caso es adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la cual el 29 de junio de 2017, destacó que luego de la convocatoria a juicio de las cabezas visibles de la organización criminal, la investigación se priorizó en la vinculación de particulares y demás integrantes de la Fuerza Pública, respecto de los cuales elementos de juicio dan cuenta de su responsabilidad. Sobre la búsqueda e identificación de desaparecidos señaló que el Grupo de Trabajo establecido en la cláusula segunda del acuerdo de solución amistosa, inició desde el mes de marzo de 2016, el desplazamiento por los municipios ribereños del río Cauca, con el fin de ubicar cuerpos inhumados sin identificar entre los años de 1989 a 1994; así en distintos municipios se desarrollaron diligencias como resultado del escaneo de 2,539 documentos, correspondientes a las necropsias y defunciones de cuerpos no identificados de los corregimientos y veredas de municipio de Tuluá y Trujillo, y al escaneo de 3,463 documentos correspondientes a las actas de levantamiento a cadáver, necropsias, defunciones de cuerpos no identificados y libros radiadores de Fiscalías de los corregimientos y veredas de municipios ribereños al río Cauca.

815. En relación a la cláusula 3, en lo referente al documental audiovisual, el Estado señaló que dicha medida está a cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, entidad que comunicó el 2 de octubre de 2017, que la Presidencia de la República habría suscrito el Convenio Interadministrativo 083-17 con Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, y que por tanto se han venido adelantando acercamientos con las víctimas y sus representantes para el cumplimiento de esta medida. Sobre la cláusula cuarta, referente a la reparación pecuniaria, el 29 de junio de 2017, se informó sobre las gestiones adelantadas para emitir el correspondiente concepto favorable por parte del Comité de Ministros del que trata la Ley 288 de 1996 y proceder así a la indemnización. Se realizó una reunión, y se acordó continuar con el procedimiento referente a remitir información que acredite parentesco de los eventuales beneficiarios con las víctimas, unas consultas internas que debe efectuar el Ministerio de Defensa en lo atinente a algunas inquietudes formuladas por los representantes, y la reunión del respectivo comité de conciliación del Ministerio de Defensa.

816. En cuanto al acompañamiento para que las víctimas logren el acceso a los planes, programas y proyectos en materia de reparación y asistencia, en una reunión celebrada el 5 de septiembre de 2017, la representante de la UARIV explicó el procedimiento que dicha entidad implementó para inscribir automáticamente dentro del Registro de Víctimas a víctimas y beneficiarios, remitiendo a los representantes un formato que debe ser diligenciado por cada núcleo familiar para proceder a este registro y se indicó que, se continuará con la evaluación de viabilidad de acuerdo con las competencias de la UARIV y lo convenido en el acuerdo de solución amistosa, una vez se haya completado el trámite de inscripción en el RUV.

817. Finalmente, sobre las gestiones administrativas necesarias para la titulación de las viviendas construidas y sobre las garantías de no repetición, el Estado indicó que informaría oportunamente a la Comisión de los respectivos avances una vez disponga de información actualizada.

818. La Comisión ha tomado atenta nota de la información suministrada por las partes, y de acuerdo lo reportado por el Estado y la solicitud de la parte peticionaria, declara el cumplimiento total del punto 3 de la cláusula tercera del acuerdo de solución amistosa.

819. En vista de lo anterior, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido y continuará con la supervisión de los puntos pendientes de cumplimiento.

#### **Caso 12.476, Informe No. 67/06, Oscar Elias Biscet y otros (Cuba)**

820. En el Informe No. 67/06 de fecha 21 de octubre de 2006, la CIDH concluyó que el Estado de Cuba era responsable de la violación de los artículos I (Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona), II (Derecho de igualdad ante la ley), IV (Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión), V (Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar), VI (Derecho a la constitución y a la protección de la familia), IX (Derecho a la inviolabilidad de domicilio), X (Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia) XI (Derecho a la preservación de la salud y al bienestar), XVIII (Derecho de justicia), XX, (Derecho de sufragio y de participación en el

Gobierno), XXI (Derecho de reunión), XXII (Derecho de asociación), XXV (Derecho de protección contra la detención arbitraria) y XXVI (Derecho a proceso regular) de la Declaración Americana, en perjuicio de los señores Nelson Alberto Aguiar Ramírez, Osvaldo Alfonso Valdés, Pedro Pablo Álvarez Ramo, Pedro Argüelles Morán, Víctor Rolando Arroyo Carmona, Mijail Bárzaga Lugo, Oscar Elías Biscet González, Margarito Broche Espinosa, Marcelo Cano Rodríguez, Juan Roberto de Miranda Hernández, Carmelo Agustín Díaz Fernández, Eduardo Díaz Fleitas, Antonio Ramón Díaz Sánchez, Alfredo Rodolfo Domínguez Batista, Oscar Manuel Espinosa Chepe, Alfredo Felipe Fuentes, Efrén Fernández Fernández, Juan Adolfo Fernández Saínez, José Daniel Ferrer García, Luís Enrique Ferrer García, Orlando Fundora Álvarez, Próspero Gaínza Agüero, Miguel Galbán Gutiérrez, Julio César Gálvez Rodríguez, Edel José García Díaz, José Luís García Paneque, Ricardo Severino González Alfonso, Diosdado González Marrero, Léster González Pentón, Alejandro González Raga, Jorge Luís González Tanquero, Leonel Grave de Peralta, Iván Hernández Carrillo, Normando Hernández González, Juan Carlos Herrera Acosta, Regis Iglesias Ramírez, José Ubaldo Izquierdo Hernández, Reynaldo Miguel Labrada Peña, Librado Ricardo Linares García, Marcelo Manuel López Bañobre, José Miguel Martínez Hernández, Héctor Maseda Gutiérrez, Mario Enrique Mayo Hernández, Luís Milán Fernández, Rafael Millet Leyva, Nelson Moline Espino, Ángel Moya Acosta, Jesús Mustafá Felipe, Félix Navarro Rodríguez, Jorge Olivera Castillo, Pablo Pacheco Ávila, Héctor Palacios Ruiz, Arturo Pérez de Alejo Rodríguez, Omar Pernet Hernández, Horacio Julio Piña Borrego, Fabio Prieto Llorente, Alfredo Manuel Pulido López, José Gabriel Ramón Castillo, Arnaldo Ramos Lauzurique, Blas Giraldo Reyes Rodríguez, Raúl Ramón Rivero Castañeda, Alexis Rodríguez Fernández, Omar Rodríguez Saludes, Martha Beatriz Roque Cabello, Omar Moisés Ruiz Hernández, Claro Sánchez Altarriba, Ariel Sigler Amaya, Guido Sigler Amaya, Miguel Sigler Amaya, Ricardo Enrique Silva Gual, Fidel Suárez Cruz, Manuel Ubals González, Julio Antonio Valdés Guevara, Miguel Valdés Tamayo, Héctor Raúl Valle Hernández, Manuel Vázquez Portal, Antonio Augusto Villareal Acosta y Orlando Zapata Tamayo.

821. La responsabilidad internacional del Estado cubano derivó de los hechos acaecidos durante el mes de marzo de 2003, cuando se realizaron masivas detenciones de activistas de derechos humanos y periodistas independientes, en virtud del argumento de que habían desarrollado actividades subversivas, contrarrevolucionarias, en contra del Estado y de diseminación de propaganda e información ilícita. Posteriormente, todos ellos fueron juzgados a través de juicios sumarísimos, en los cuales sus derechos de defensa se vieron vulnerados, siendo condenados con penas de privación de libertad que variaron entre 6 meses y 28 años.

822. La Comisión formuló al Estado de Cuba las siguientes recomendaciones:

1. Ordenar la liberación inmediata e incondicional de las víctimas de este Caso, declarando nulas las condenas en su contra por haberse basado en leyes que imponen restricciones ilegítimas a sus derechos humanos.
2. Adoptar las medidas necesarias para adecuar sus leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos. En particular, la Comisión recomienda al Estado de Cuba derogar la Ley No. 88 y el artículo 91 del Código Penal, así como iniciar un proceso de reforma a su Constitución Política con miras a asegurar la independencia del Poder Judicial y el derecho a la participación en el gobierno.
3. Reparar a las víctimas y sus familiares por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Declaración Americana aquí establecidas (sic).
4. Adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de conformidad con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos.

823. Como se observó en el Informe Anual de 2011, el Gobierno cubano excarceló a las víctimas del Caso 12.476 que continuaban privadas de libertad a ese año, las que en su mayoría se trasladaron a España y aquellas que se negaron a abandonar Cuba se les concedió una “licencia extrapenal”.

824. Sin embargo, las sentencias condenatorias dictadas en su contra no fueron declaradas nulas, a pesar de basarse en leyes que les impusieron restricciones ilegítimas a sus derechos humanos. En relación con la segunda, tercera y cuarta recomendación de la CIDH, el Estado cubano hasta la fecha no ha adoptado medidas para su cumplimiento.

825. El 4 de octubre de 2013, el 8 de diciembre de 2014, el 25 de septiembre de 2015, 25 de septiembre de 2016, y 18 de agosto de 2017, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el presente caso. Ninguna de las partes presentó dicha información.

826. La Comisión valora que el Estado haya liberado a todas las víctimas del Caso 12.476. Sin embargo, al no contar con información actualizada sobre el cumplimiento de las demás recomendaciones, la CIDH concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las mismas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

### **Caso 12.477, Informe No. 68/06, Lorenzo Enrique Copello Castillo y otros (Cuba)**

827. En el Informe No. 68/06 de fecha de 21 de octubre de 2006, la CIDH concluyó que el Estado de Cuba era responsable de: 1) las violaciones a los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana en perjuicio de los señores Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac; 2) las violaciones al artículo I de la Declaración Americana, en perjuicio de los señores Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac. Dicha responsabilidad del Estado cubano deriva del sometimiento de las víctimas a juicios sumarísimos que no garantizaron el respeto de las garantías procesales de un juicio justo y la posterior ejecución de las víctimas el 11 de abril de 2003, en virtud de una sentencia dictada dentro de un procedimiento que no contó con las debidas garantías de protección.

828. La Comisión formuló al Estado de Cuba las siguientes recomendaciones:

1. Adoptar las medidas necesarias para adecuar las leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos. En particular, la Comisión recomienda al Estado de Cuba reformar la legislación penal con el objeto de asegurar el derecho de justicia y el derecho de proceso regular, así como iniciar un proceso de reforma a su Constitución Política con miras a asegurar la independencia del Poder Judicial.
2. Reparar a los familiares de las víctimas por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Declaración Americana aquí establecidas.
3. Adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de conformidad con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos.

829. El 4 de octubre de 2013, el 8 de diciembre de 2014, el 25 de septiembre de 2015, 27 de septiembre de 2016, y el 18 de agosto de 2017, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el presente caso. La CIDH toma nota que el 16 de octubre de 2013, el 19 de diciembre de 2014, y el 6 de octubre de 2017, los peticionarios informaron que no existía evidencia de que el Estado cubano haya cumplido con las recomendaciones de la CIDH y solicitaron que la Comisión continuara dando seguimiento al caso hasta lograr que el Estado cumpla plenamente con las recomendaciones.

830. Hasta la fecha, las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

831. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el Estado no ha dado cumplimiento a las recomendaciones. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

### **Caso 11.421, Informe No. 93/00, Edison Patricio Quishpe Alcívar (Ecuador)**

832. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, la libertad personal, las garantías judiciales, y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. Los hechos que motivaron la celebración del acuerdo versan sobre la muerte de Edison Patricio Quishpe en un recinto policial el 7 de septiembre de 1992 tras ser arrestado y sometido torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes.

833. El 5 de octubre de 2000, la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 93/00<sup>100</sup> en el cual reconoció al Estado el cumplimiento del pago de la medida de reparación económica por US\$ 30,000, y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de las cláusulas pendientes de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos relacionados con justicia y pago de los intereses moratorios. La CIDH tomó nota de la solicitud del peticionario en cuanto al pago de interés moratorio, y declaró cumplida la cláusula VII del acuerdo de solución amistosa en su Informe Anual de 2016<sup>101</sup>. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento la cláusula:

#### **V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

El Estado Ecuatoriano se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de las sanciones de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la función judicial como a los organismos públicos o privados para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

834. El 4 de octubre de 2013 la CIDH solicitó información sobre el cumplimiento a ambas partes. El 19 de noviembre de 2013 los peticionarios indicaron que el Estado aún no ha iniciado alguna acción judicial tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables del asesinato de la víctima y tampoco ha sancionado a aquellos jueces que, con su conducta, han permitido que el caso quede en la impunidad, al no resolver la causa de manera adecuada, permitiendo que por transcurso del tiempo la causa prescriba.

835. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”. En la misma comunicación, el Estado reconoció que continuaba

<sup>100</sup> Informe No. 93/00, Caso 11.421, Edison Patricio Quishpe Alcívar, Ecuador, 5 de octubre de 2000, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Sol.Ami/Ecuador11.421.htm>

<sup>101</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones Amistosas en casos individuales, párrs. 721.

pendiente de cumplimiento la cancelación del valor por concepto de intereses debido a la mora para hacer entrega a la indemnización establecida en el acuerdo de solución amistosa.

836. El 25 de noviembre de 2014 la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior sobre la impunidad de los hechos. El Estado por su parte, no respondió la solicitud de información hecha por la CIDH.

837. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

838. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que en relación a la investigación, el peticionario informó que a la fecha no se ha realizado ninguna acción para sancionar a los responsables de los hechos violatorios, y solicitó a la CIDH que continúe con la supervisión de la medida de justicia para dar con los responsables de la muerte de Patricio Quishpe.

839. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El Estado no presentó información actualizada sobre el cumplimiento en esta oportunidad.

840. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios indicaron que el Estado se comprometió a iniciar las acciones civiles, penales e incluso administrativas tendientes a la sanción de los responsables, y que hasta la fecha, el Estado no ha iniciado las acciones respectivas.

841. La CIDH observa con preocupación que transcurridos 17 años desde la aprobación del informe de solución amistosa, el Estado no ha mostrado avances en el cumplimiento del compromiso referido a la investigación de los hechos y que se ha limitado a reiterar textualmente la misma información proporcionada con anterioridad, sin indicar ninguna actividad judicial concreta destinada a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la muerte de Edison Patricio Quishpe. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

#### **Caso 11.439, Informe No. 94/00, Byron Roberto Cañaverl (Ecuador)**

842. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El presente Caso versa sobre la detención del señor Byron Roberto Cañaverl el 26 de mayo de 1993 por agentes del Estado quienes lo sometieron a torturas y tratos crueles e inhumanos.

843. El 5 de octubre de 2000 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 94/00<sup>102</sup> en el cual reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$ 7,000 por concepto de indemnización, y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de las cláusulas pendientes de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con el compromiso pendiente relativo a las medidas para enjuiciar civil, penal y administrativamente a las personas que bajo funciones estatales tuvieron participación en las violaciones alegadas, y el pago de los intereses por mora. La CIDH tomó nota de la solicitud del peticionario en cuanto al pago de interés moratorio, y declaró cumplida la cláusula VII del acuerdo de solución amistosa en su Informe Anual de 2016<sup>103</sup>. En ese sentido, se encuentran pendientes de cumplimiento de dos cláusulas:

#### IV. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES

El Estado Ecuatoriano, se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de las sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, los organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

844. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”. En la misma comunicación, el Estado reconoció que continuaba pendiente de cumplimiento la cancelación del valor por concepto de intereses debido a la mora para hacer entrega a la indemnización establecida en el acuerdo de solución amistosa.

845. El 26 de noviembre de 2014 la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior. El Estado, por su parte, no respondió a la solicitud de información.

846. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga

<sup>102</sup> Informe No. 94/00, Caso 11.439, Byron Roberto Cañaverl, Ecuador, 5 de octubre de 2000, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Sol.Ami/Ecuador11.439.htm>

<sup>103</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones Amistosas en casos individuales, párrs. 731.

“información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

847. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que a la fecha no se ha realizado ninguna acción para sancionar a los responsables de los hechos violatorios, y solicitó a la CIDH que continúe con la supervisión de la medida de justicia para dar con los responsables de las torturas contra la víctima.

848. El 7 de octubre de 2016, y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El Estado no presentó información actualizada sobre el cumplimiento en esta oportunidad.

849. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios indicaron a la Comisión que, desde la fecha en que se firmó el acuerdo entre la víctima y el Estado, no se ha iniciado ninguna acción judicial civil, penal o administrativa, tendiente a sancionar a los responsables, por lo cual la tortura que sufrió la víctima permanece en la impunidad.

850. La CIDH observa con preocupación que transcurridos 17 años desde la aprobación del informe de solución amistosa, el Estado no ha mostrado avances en el cumplimiento del compromiso referido a la investigación de los hechos y que se ha limitado a reiterar textualmente la misma información proporcionada con anterioridad, sin indicar ninguna actividad judicial concreta destinada a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la detención y torturas de Byron Roberto Cañaverl. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

#### **Caso 11.466, Informe No. 96/00, Manuel Inocencio Lalvay Guamán (Ecuador)**

851. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre una serie de detenciones contra el señor Manuel Inocencio Lalvay Guamán entre 1993 y 1994 por agentes del Estado quienes lo sometieron a torturas y tratos crueles e inhumanos.

852. El 5 de octubre de 2000 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 96/00<sup>104</sup> en el cual reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$ 25,000 por concepto de indemnización, y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con el compromiso pendiente relativo al enjuiciamiento de las personas que se presumen responsables de los hechos alegados. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación.

#### **V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

El Estado Ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto al Ministro Fiscal General de la Nación y a los organismos competentes de la Función Judicial, el enjuiciamiento tanto civil como penal y administrativo de las personas que en cumplimiento de sus funciones estatales o privilegiados del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

<sup>104</sup> Informe No. 96/00, Caso 11.466, Manuel Inocencio Lalvay Guzmán, Ecuador, 5 de octubre de 2000, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Sol.Ami/Ecuador11.466.htm>.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita el juzgamiento de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano, y por consiguiente no procederá contra las personas que han sido objeto de juzgamiento definitivo por los tribunales y juzgados del país, en relación con el hecho o violación alegados.

853. El 4 de octubre de 2013 CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 21 de noviembre de 2013 los peticionarios reiteraron que desde 1999 el fuero policial declaró prescrita la acción penal, sin que el Estado ha efectuado acción alguna para dejar sin efecto dicha resolución, que, según los peticionarios, es violatoria del derecho, ya que los jueces policiales actuaron sin tener competencia para juzgar violaciones a derechos humanos. El Estado por su parte reconoció en los subsiguientes escritos que el 28 de abril de 1999 el Juez Segundo del Primer Distrito, dictó auto de prescripción de la acción penal, que fue confirmado por la Corte Distrital de la Policía el 23 de junio de 1999, y que los acusados continuaban en servicio activo para el año 2014.

854. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”.

855. El 26 de noviembre de 2014 la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios señalaron que el Estado sigue sin realizar alguna acción tendiente a dejar sin efecto la decisión de los tribunales policiales de declarar prescrita la acción e informaron que el Estado tampoco ha desarrollado acciones tendientes a sancionar a los jueces policiales que se atribuyeron competencias para conocer y juzgar delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, por lo que a la fecha dichos actos continúan en la impunidad. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

856. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

857. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que a la fecha no se ha realizado ninguna acción para sancionar a los responsables de los hechos violatorios.

858. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El Estado no presentó información actualizada sobre el cumplimiento en esta oportunidad.

859. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios indicaron a la Comisión que, desde la fecha en que se firmó el acuerdo entre la víctima y el Estado, no se ha iniciado ninguna acción judicial civil, penal o administrativa, tendiente a sancionar a los responsables, por lo cual la tortura que sufrió la víctima permanece en la impunidad.

860. La CIDH observa con preocupación que transcurridos 17 años desde la aprobación del informe de solución amistosa, el Estado no ha mostrado avances en el cumplimiento del compromiso referido a la investigación de los hechos. Por lo contrario, operó la prescripción de la acción de los responsables de las torturas contra Manuel Inocencio Lavay Guamán. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

#### **Caso 11.584, Informe No. 97/00, Carlos Juela Molina (Ecuador)**

861. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención del niño Carlos Juela Molina el 21 de diciembre de 1989 por parte de un agente del Estado quien lo sometió a torturas y tratos crueles e inhumanos. La investigación contra el agente de policía involucrado en los hechos fue asumida por la justicia penal policial la cual archivó la causa.

862. El 5 de octubre de 2000 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 97/00<sup>105</sup> en el cual reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$ 15,000 por concepto de indemnización, y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes de sancionar a las personas responsables de la violación alegada. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

#### **V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

El Estado Ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General de la Nación y a los organismos competentes de la Función Judicial, el enjuiciamiento tanto civil como penal y administrativo de las personas que en cumplimiento de sus funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita el juzgamiento de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano, y por consiguiente no procederá contra las personas que han sido objeto de juzgamiento definitivo por los tribunales y juzgados del país, en relación con el hecho o violación alegados.

863. El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 19 de noviembre de 2013 los peticionarios informaron que el Estado no había iniciado acción judicial alguna tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los jueces de policía que asumieron una competencia que no tenían para investigar violaciones a derechos humanos y que bajo esa competencia atribuida, declararon prescrita la causa, archivándola en 1995.

---

<sup>105</sup> Informe No. 97/00, Caso 11.584, Carlos Juela Molina, Ecuador, 5 de octubre de 2000, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Sol.Ami/Ecuador11.584.htm>.

864. El 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios volvieron a señalar que el Estado no ha iniciado ninguna acción en contra de dichos jueces policiales y agregaron que el Estado tampoco ha iniciado alguna acción tendiente a la sanción de los responsables directos de las violaciones cometidas en contra de la víctima. El Estado por su parte, no respondió ninguna de las solicitudes de información hechas por la CIDH.

865. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

866. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que a la fecha no se ha realizado ninguna acción para sancionar a los responsables de los hechos violatorios.

867. El 7 de octubre de 2016 y el 11 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 5 de diciembre de 2016, el peticionario reiteró que no se han adelantado acciones tendientes a sancionar al policía responsable de los hechos.

868. El Estado no presentó información actualizada en esta oportunidad.

869. El 1 de septiembre de 2017 los peticionarios indicaron a la Comisión que, desde la fecha en que se firmó el acuerdo entre la víctima y el Estado, no se ha iniciado ninguna acción judicial civil, penal o administrativa, tendiente a sancionar a los responsables, por lo cual la tortura que sufrió la víctima permanece en la impunidad.

870. La CIDH observa con preocupación que transcurridos 17 años desde la aprobación del informe de solución amistosa, el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las torturas contra Carlos Juela Molina. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

#### **Caso 11.783, Informe No. 98/00, Marcia Irene Clavijo Tapia (Ecuador)**

871. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se compromete al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Marcia Irene Clavijo Tapia el 17 de mayo de 1993. La víctima fue sometida a torturas y tratos crueles e inhumanos al momento de la detención, mantenida en prisión preventiva por cuatro años y luego sobreeséda.

872. El 5 de octubre de 2000 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 98/00<sup>106</sup> en el cual reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$ 63,000 por concepto de indemnización, y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de las cláusulas pendientes de cumplimiento. En el mismo

<sup>106</sup> Informe No. 98/00, Caso 11.783, Marcia Irene Clavijo Tapia, Ecuador, 5 de octubre de 2000, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Sol.Ami/Ecuador11.783.htm>

informe la CIDH instó al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con el compromiso pendiente relativo al enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones alegadas y el pago de intereses por mora. La CIDH tomó nota de la solicitud del peticionario en cuanto al pago de interés moratorio, y declaró cumplida la cláusula VII del acuerdo de solución amistosa en su Informe Anual de 2016<sup>107</sup>. En ese sentido, se encuentran pendientes de cumplimiento dos cláusulas:

#### V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES

El Estado Ecuatoriano, se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de las sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de sus funciones estatales o privilegiadas del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

873. El 4 de octubre de 2013 y el 26 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. Ninguna de las partes presentó información.

874. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O del 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

875. La parte peticionaria no presentó información actualizada sobre el cumplimiento.

876. El 7 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 5 de diciembre de 2016, el peticionario informó que se realizó el pago de la indemnización correspondiente, luego de lo cual perdió contacto con la víctima. Asimismo, el peticionario informó que la privación arbitraria de la libertad no podría ser investigada en virtud del tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, por lo cual las acciones administrativas y penales contra los operadores de justicia responsables de la lentitud judicial y contra agentes de la policía responsables de la detención ilegal habrían prescrito. Por lo anterior, y en vista de la imposibilidad manifestada por el peticionario de contactar a la víctima y la operación de la prescripción de las acciones correspondientes, el peticionario solicitó el cese y archivo de las actuaciones de seguimiento del acuerdo de solución amistosa.

877. El 17 de marzo de 2017, el Estado solicitó a la Comisión se proceda a archivar el asunto, en virtud de lo manifestado por los peticionarios el 5 de diciembre de 2016.

878. En atención a la información suministrada por las partes, la CIDH declara que el acuerdo de solución amistosa se encuentra cumplido parcialmente, y que se encontraría pendiente de cumplimiento únicamente la cláusula V sobre investigación y sanción de los responsables. Al respecto, la CIDH reitera la necesidad de investigar y enjuiciar los hechos de tortura denunciadas en la petición, Al mismo tiempo, la CIDH toma nota y acepta el desistimiento presentado por el peticionario. Así mismo, toma nota de la solicitud

<sup>107</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones Amistosas en casos individuales, párrs. 758.

del cierre del seguimiento. La Comisión la evaluará y se pronunciará al respecto en una próxima oportunidad. En consecuencia, continuará dando seguimiento a la cláusula V del acuerdo de solución amistosa.

### **Caso 11.868, Informe No. 99/00, Carlos Santiago y Pedro Restrepo Arismendy (Ecuador)**

879. El 14 de mayo de 1998 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció que “el proceso judicial interno estuvo caracterizado por demoras injustificadas, tecnicismo a ultranza, ineficiencia y denegación de justicia. El Estado ecuatoriano no pudo demostrar que no fueron sus agentes oficiales quienes detuvieron ilegal y arbitrariamente a los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy, hasta torturarlos y terminar con su vida, ni desmentir que dichas acciones estaban reñidas con la Constitución Política, con el marco legal de nuestro país y con el respeto a los convenios internacionales que garantizan los derechos humanos.” Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, a la búsqueda de los cuerpos y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención y posterior desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo el 8 de enero de 1988 por parte de miembros de la Policía Nacional.

880. El 5 de octubre de 2000 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 99/00<sup>108</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$2,000,000 por concepto de indemnización y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de las cláusulas pendientes de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes de la búsqueda, total, definitiva y completa de los cuerpos de los menores, y el enjuiciamiento penal de las personas que se presume tuvieron participación en la tortura, desaparición y muerte de los hermanos Restrepo Arismendy, así como en el encubrimiento de tales hechos. En ese sentido, se encuentran pendientes de cumplimiento dos cláusulas que se enuncian a continuación:

#### **SEXTA.-NUEVA BÚSQUEDA DE LOS HERMANOS RESTREPO**

[...] El Estado ecuatoriano, representado por el Procurador General del Estado, se compromete a ejecutar una completa, total y definitiva búsqueda en la laguna de Yambo, de los cuerpos de los hermanos Restrepo, que se presume podían haber sido arrojados allí en 1998 o en los años subsiguientes, y a recuperarlos, de ser localizados. Para este efecto, el Ministerio de Defensa Nacional pondrá a disposición de la Procuraduría un equipo de buzos de la Armada Nacional, al que se unirán el o los equipos de organizaciones particulares especializadas, que serán gestionados por la Procuraduría o que voluntariamente proporcionen instituciones de derechos humanos nacionales o internacionales. El Ministerio de Gobierno, por su parte, prestará toda la colaboración que se le requiera para la consecución de este objetivo.

[...]

#### **NOVENA.- SANCIÓN A PERSONAS NO JUZGADAS**

El Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, se compromete a solicitar al Fiscal General del Estado y a los organismos competentes de la función judicial, el enjuiciamiento penal de las personas que, en cumplimiento de funciones policiales, se presume que tuvieron participación en la muerte de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy. La Procuraduría se compromete a excitar a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita el juzgamiento de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado ecuatoriano y, por consiguiente, no procederá contra las personas que han sido objeto de juzgamiento

<sup>108</sup> Informe No. 99/00, Caso 11.868, Carlos Santiago y Pedro Restrepo Arismendy, Ecuador, 5 de octubre de 2000, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Sol.Ami/Ecuador11.868.htm>.

definitivo por la Corte Suprema de Justicia del Ecuador o en el evento de que los delitos que les son imputables han legalmente prescrito.

881. El 15 de marzo de 2013, el Estado presentó información respecto de los avances de las medidas adoptadas para el cumplimiento. Al respecto, informó sobre la constitución el Equipo Operativo denominado "POR LA VERDAD Y JUSTICIA" dentro del Ministerio de interior, con el fin de facilitar la búsqueda y localización de los restos de las víctimas. Asimismo, informó que el Ministerio del Interior había iniciado una "amplia campaña de comunicación" para obtener información sobre el paradero de los restos de las víctimas. El Estado también señaló que dentro del proceso de investigación se ha contado con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense. Asimismo, informó que "desde que el Equipo Operativo inició sus funciones se ha contado con la participación de la familia Restrepo dentro de la investigación", principalmente mediante la celebración de reuniones periódicas para informarles de los avances y escuchar sus solicitudes.

882. En relación con la investigación penal, el Estado informó que el asunto se encuentra a cargo de un fiscal de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado y que el proceso se encuentra en etapa de indagación previa. Al respecto, el Estado señaló que "existe completa reserva respecto de las actuaciones investigativas que está realizando el fiscal", y que informará oportunamente cuando exista una instrucción fiscal. Esta información fue trasladada a los peticionarios para sus observaciones, sin que hasta la fecha de aprobación del presente Informe Anual los peticionarios han presentado su respuesta.

883. El 4 de octubre de 2013 y el 26 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes, sin recibir respuesta.

884. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado reiteró que el asunto aún se encuentra a cargo de un Fiscal de la Comisión de la Verdad de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado y que continúa en etapa de indagación previa. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga "información pertinente" que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

885. La parte peticionaria no proporcionó información adicional sobre el cumplimiento.

886. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. Ninguna de las partes presentó información actualizada en esta oportunidad.

887. La CIDH observa con preocupación que transcurridos 17 años desde la aprobación del informe de solución amistosa, el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la desaparición y tortura de Carlos Santiago y Pedro Restrepo Arismendy. El Estado tampoco ha logrado avances en la búsqueda total, definitiva y completa de los cuerpos de los menores. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

#### **Caso 11.991, Informe No. 100/00, Kelvin Vicente Torres Cueva (Ecuador)**

888. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad

ante la ley y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se compromete al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Kelvin Vicente Torres Cueva el 22 de junio de 1992. La víctima fue sometida a torturas y tratos crueles e inhumanos, incomunicada por 33 días y mantenida en prisión preventiva por más de seis años, tras lo cual fue sobreseído.

889. El 5 de octubre de 2000 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 100/00<sup>109</sup> en el cual reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$ 50,000 por concepto de indemnización, y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de las cláusulas pendientes de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes relativos al enjuiciamiento de las personas que se presumen responsables de los hechos alegados y al pago de los intereses por mora. En ese sentido, se encuentran pendientes de cumplimiento dos cláusulas que se enuncian a continuación:

#### V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES

El Estado Ecuatoriano, se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de las sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de sus funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General de la Nación, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano. [...]

890. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”. En la misma comunicación, el Estado reconoció que continuaba pendiente de cumplimiento la cancelación del valor por concepto de intereses debido a la mora para hacer entrega a la indemnización establecida en el acuerdo de solución amistosa.

891. El 26 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron que el Estado no ha iniciado ninguna acción en contra de los responsables de los hechos, así como ninguna acción tendiente a revocar la sentencia mencionada. El Estado por su parte, no respondió la solicitud de información.

892. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del

<sup>109</sup> Informe No. 100/00, Caso 11.991, Kelvin Vicente Torres Cueva, Ecuador, 5 de octubre de 2000, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Sol.Ami/Ecuador11.991.htm>.

16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

893. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que se habría cancelado la totalidad del pago del monto de compensación económica, luego de lo cual perdió contacto con la víctima, por lo cual solicitó a la CIDH que diera por cumplido lo relacionado con el pago de interés moratorio.

894. Asimismo, en relación a la investigación, el peticionario informó que a la fecha no se ha realizado ninguna acción para sancionar a los responsables de los hechos violatorios, y solicitó a la CIDH que continúe con la supervisión de la medida de justicia.

895. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento.

896. El 7 de septiembre de 2017, los peticionarios indicaron a la Comisión que, desde la fecha en que se firmó el acuerdo entre la víctima y el Estado, no se ha iniciado ninguna investigación tendiente a sancionar a los responsables.

897. Por lo anterior, la CIDH toma nota de la solicitud del peticionario en cuanto al pago de interés moratorio, y declara cumplida la cláusula VII del acuerdo de solución amistosa.

898. La CIDH observa con preocupación que transcurridos 17 años desde la aprobación del informe de solución amistosa, el Estado no ha mostrado avances en el cumplimiento del compromiso referido a la investigación de los hechos y que se ha limitado a reiterar textualmente la misma información proporcionada con anterioridad, sin indicar ninguna actividad judicial concreta destinada a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las torturas contra Kelvin Vicente Torres Cueva. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

#### **Caso 11.478, Informe No. 19/01, Juan Clímaco Cuellar y otros (Ecuador)**

899. El 25 de junio de 1998 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Froilán Cuéllar, José Otilio Chicangana, Juan Clímaco Cuéllar, Henry Machoa, Alejandro Aguinda, Demetrio Pianda, Leonel Aguinda, Carlos Enrique Cuéllar, Carmen Bolaños, Josué Bastidas y Harold Paz entre el 18 y el 21 de diciembre de 1993 por miembros del ejército encapuchados. Las víctimas fueron incomunicadas y sometidas a torturas y tratos crueles e inhumanos y luego mantenidos en prisión preventiva entre uno y cuatro años, tras lo cual fueron sobreeseadas.

900. El 20 de febrero de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 19/01<sup>110</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$100,000 por concepto de indemnización a cada una de las víctimas y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con el compromiso relativo al enjuiciamiento de las personas que se presumen responsables de los hechos alegados. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento:

<sup>110</sup> Informe No. 19/01, Caso 11.478, Juan Clímaco Cuellar y otros, Ecuador, 20 de febrero de 2001, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Sol.Ami/Ecuador11.478.htm>.

## SÉPTIMA. – SANCIONES

El Estado Ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, se compromete a solicitar al Fiscal General del Estado y a los organismos competentes de la Función Judicial, el enjuiciamiento penal de las personas que se presumen tuvieron participación en los hechos denunciados, y a excitar a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita el juzgamiento de dichas personas.

Este juzgamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado ecuatoriano y en el evento de que los delitos que les son imputables a los presuntos responsables no han legalmente prescrito.

901. El 7 de octubre de 2013 y el 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. Ni el Estado ni los peticionarios respondieron a la solicitud de información.

902. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

903. La parte peticionaria no presentó información actualizada sobre el cumplimiento.

904. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. Ninguna de las partes presentó información actualizada en esta oportunidad.

905. La CIDH observa que el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la detención y tortura contra las víctimas de este caso. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

**Caso 11.512, Informe No. 20/01, Lida Ángela Riera Rodríguez (Ecuador)**

906. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la duración de la detención preventiva de Lida Ángela Riera Rodríguez en un proceso sobre peculado en grado de complicidad. La víctima fue privada de la libertad el 7 de enero de 1992 y el 26 de junio de 1995 se le impuso sentencia de dos años de prisión por encubrimiento, cuando llevaba ya detenida tres años y seis meses.

907. El 20 de febrero de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 20/01<sup>111</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$ 20,000 por concepto de indemnización a la víctima

<sup>111</sup> Informe No. 20/01, Caso 11.512, Lida Ángela Riera Rodríguez, Ecuador, 20 de febrero de 2001, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Sol.Ami/Ecuador11.512.htm>.

y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a tomar las medidas necesarias para concluir el cumplimiento del compromiso relativo al enjuiciamiento de las personas implicadas en los hechos alegados. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

#### V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES

El Estado Ecuatoriano se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de las sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidas del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

908. El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios informaron el 19 de noviembre siguiente, que el Estado no había iniciado acción judicial alguna tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima, lo cual habría permitido la prescripción de la acción, dejando a los jueces que retardaron la causa, en la impunidad.

909. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”. En la misma comunicación, el Estado reconoció que continuaba pendiente de cumplimiento la cancelación del valor por concepto de intereses debido a la mora para hacer entrega a la indemnización establecida en el acuerdo de solución amistosa.

910. El 25 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior en el sentido de que los hechos permanecen en la impunidad. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

911. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

912. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que se realizó el pago de la indemnización correspondiente, luego de lo cual perdió contacto con la víctima. Asimismo, el peticionario informó que la privación arbitraria de la libertad no podría ser investigada en virtud del tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, por lo cual las acciones administrativas y penales contra los operadores de justicia responsables de la lentitud judicial habrían prescrito. Por lo anterior, y en vista de la imposibilidad manifestada por el peticionario de contactar a la víctima y la operación de la prescripción de las acciones correspondientes, el peticionario solicitó el cese y archivo de las actuaciones de seguimiento del acuerdo de solución amistosa.

913. Al respecto, la Comisión estima, a la luz de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos en materia de seguimiento y cumplimiento de los Estados con las medidas reparatorias, en casos en los cuales no ha habido contacto con la persona beneficiaria, que es deber del Estado establecer al menos la posibilidad para que el interesado pueda acceder a esta medida.<sup>112</sup>

914. El 7 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. Ninguna de las partes presentó información actualizada en esa oportunidad.

915. En atención a la información suministrada por el peticionario, la CIDH declara que el acuerdo de solución amistosa se encuentra cumplido parcialmente, y que se encontraría pendiente de cumplimiento únicamente la cláusula V sobre investigación y sanción de los responsables. Al respecto, la CIDH toma nota y acepta el desistimiento presentado por el peticionario. Asimismo, toma nota de la solicitud del cierre del seguimiento, la CIDH la evaluará y se pronunciará al respecto en una próxima oportunidad. En consecuencia, la CIDH continuará dando seguimiento a la cláusula V del acuerdo de solución amistosa.

#### **Caso 11.605, Informe No. 21/01, René Gonzalo Cruz Pazmiño (Ecuador)**

916. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. Lo anterior, como resultado de la muerte de René Gonzalo Cruz Pazmiño el 20 de junio de 1987 por parte de un miembro del Ejército.

917. El 20 de febrero de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 21/01<sup>113</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$ 30,000 por concepto de indemnización a la víctima y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a tomar las medidas necesarias para concluir el cumplimiento del compromiso relativo al enjuiciamiento de las personas implicadas en los hechos alegados. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

##### **V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

El Estado Ecuatoriano, se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos

<sup>112</sup> Ver Corte IDH, Caso Gomes Lund y Otros (Guerrilla do Araguaia) Vs. Brasil, Sentencia de 24 de Noviembre de 2010. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas

<sup>113</sup> Informe No. 21/01, Caso 11.605, René Gonzalo Cruz Pazmiño, Ecuador, 20 de febrero de 2001, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Sol.Ami/Ecuador11.605.htm>.

públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

918. El 4 de octubre de 2013, CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios informaron el 19 de noviembre de 2013, que el Estado no ha iniciado acción judicial alguna tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima. Por el contrario, dado el tiempo transcurrido hasta la fecha, la causa habría prescrito por cumplirse el plazo de 10 años previsto en el Código Penal desde la fecha del hecho o desde el inicio del juicio, sin que ha decisión judicial, en aquellos casos sancionados con pena de reclusión como es el delito de asesinato.

919. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”. En la misma comunicación, el Estado reconoció que continuaba pendiente de cumplimiento la cancelación del valor por concepto de intereses debido a la mora para hacer entrega a la indemnización establecida en el acuerdo de solución amistosa.

920. El 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

921. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

922. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que a la fecha no se ha realizado ninguna acción para sancionar a los responsables de los hechos violatorios.

923. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 5 de diciembre de 2016, el peticionario reiteró que no se han adelantado acciones tendientes a sancionar al policía responsable de los hechos.

924. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios indicaron a la Comisión que, desde la fecha en que se firmó el acuerdo entre la víctima y el Estado, no se ha iniciado ninguna acción judicial civil, penal o administrativa, tendiente a sancionar a los responsables, por lo cual la tortura que sufrió la víctima permanece en la impunidad.

925. La CIDH observa que el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la muerte de René Gonzalo Cruz Pazmiño. La CIDH considera que el Estado ha suministrado información limitada y repetitiva sobre el Estado actual de la investigación, sin indicar acciones encaminadas a lograr un resultado. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

#### **Caso 11.779, Informe No. 22/01, José Patricio Reascos (Ecuador)**

926. El 11 de junio de 1999 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. Lo anterior, como resultado de la duración de la detención preventiva de José Patricio Reascos en un proceso sobre consumo de estupefacientes. La víctima fue privada de la libertad el 12 de septiembre de 1993 y el 16 de septiembre de 1997 se le impuso sentencia de 18 meses de prisión, cuando llevaba ya detenido cuatro años.

927. El 20 de febrero de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 22/01<sup>114</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$ 20,000 por concepto de indemnización a la víctima y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a tomar las medidas necesarias para concluir el cumplimiento del compromiso relativo al enjuiciamiento de las personas implicadas en los hechos alegados. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

#### **V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

El Estado Ecuatoriano, se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de sus funciones estatales o prevalidas del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

928. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, el 21 de noviembre siguiente los peticionarios informaron que el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial o administrativo destinado a la investigación y sanción de los responsables de los hechos alegados y que la demora habría llevado a la prescripción del asunto en el ámbito interno.

929. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía

<sup>114</sup> Informe No. 22/01, Caso 11.779, José Patricio Reascos, Ecuador, 20 de febrero de 2001, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Sol.Ami/Ecuador11.779.htm>.

General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”.

930. El 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

931. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habrían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

932. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que la privación arbitraria de la libertad no podría ser investigada en virtud del tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, por lo cual las acciones administrativas y penales contra los operadores de justicia responsables de la lentitud judicial habrían prescrito. Por lo anterior, el peticionario solicitó el cese y archivo de las actuaciones de seguimiento del acuerdo de solución amistosa.

933. El 7 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 5 de diciembre de 2016, el peticionario reiteró lo informado en la comunicación de fecha 3 de diciembre de 2015.

934. El Estado no presentó información actualizada en esa oportunidad.

935. El 13 de abril de 2017, el Estado solicitó a la CIDH el cese del seguimiento del acuerdo de solución amistosa y el archivo del mismo, en virtud de la solicitud realizada por los peticionarios en fecha 5 de diciembre de 2016.

936. En atención a la información suministrada por las partes, la CIDH declara que el acuerdo de solución amistosa se encuentra cumplido parcialmente, y que se encontraría pendiente de cumplimiento únicamente la cláusula V sobre investigación y sanción de los responsables. Al respecto, la CIDH toma nota y acepta el desistimiento presentado por el peticionario. Asimismo, toma nota de la solicitud del cierre del seguimiento, la CIDH la evaluará y se pronunciará al respecto en una próxima oportunidad. En consecuencia, la Comisión continuará dando seguimiento a la cláusula V del acuerdo de solución amistosa.

#### **Caso 11.992, Informe No. 66/01, Dayra María Levoyer Jiménez (Ecuador)**

937. En el Informe No. 66/01 de fecha 14 de junio de 2001, la CIDH concluyó que el Estado ecuatoriano había violado en perjuicio de la señora Dayra María Levoyer Jiménez los siguientes derechos consagrados en la Convención Americana: el derecho a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en su artículo 1(1). Lo anterior, como consecuencia de las lesiones a la integridad personal y la privación de la libertad de la señora Levoyer Jiménez, quien fue detenida el 21 de junio de 1992, sin orden judicial y mantenida incomunicada por un plazo de 39 días, durante los cuales fue sometida a

torturas psicológicas. Permaneció detenida sin condena por un plazo de más de cinco años y fue finalmente sobreseída en todas las causas que se abrieron en su contra.

938. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Proceda a otorgar una reparación plena, lo que implica otorgar la correspondiente indemnización a la señora Dayra María Levoyer Jiménez.
2. Se ordene una investigación para determinar quiénes fueron los responsables de las violaciones que la Comisión ha encontrado, y eventualmente sancionarlos.
3. Se tomen las medidas necesarias para la reforma de la legislación sobre *habeas corpus*, en los términos que ha quedado dicho en el presente informe, así como también las medidas necesarias para su inmediata vigencia.

939. El 8 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 19 de noviembre de 2013, los peticionarios indicaron que el Estado aún no ha iniciado una investigación judicial o administrativa destinada a la investigación y sanción de los responsables de los hechos, así como ninguna acción tendiente a reparar los daños causados a la víctima. Sobre el cumplimiento de la tercera recomendación, reiteraron la información relativa a la entrada en vigencia de la Constitución de 2008 que establece que el recurso de *habeas corpus* debe ser conocido por autoridad judicial.

940. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”.

941. El 26 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron que el Estado no ha iniciado ninguna acción en contra de los responsables de los hechos o tendiente a la reparación de la víctima. De igual forma, agregaron que los bienes de la víctima continúan confiscados en poder del Estado. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

942. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

943. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que el Estado solo cumplió con la recomendación 3, y que continúa pendiente de cumplimiento la recomendación 1 sobre reparaciones y la

recomendación 2 sobre investigación y sanción de los responsables. El peticionario aseguró que los bienes incautados a la víctima continúan en cabeza del Estado.

944. El 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El Estado no presentó información en esta oportunidad.

945. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios presentaron información ante la CIDH, indicando que, el Estado ha cumplido sólo con la tercera recomendación de reformar la Constitución y disponer que sean jueces quienes conozcan y tramiten los recursos habeas corpus, y que los extremos relacionados con reparar los daños causados a la víctima y sancionar a los responsables hasta el momento no se han cumplido. Señalaron que en todos los procesos judiciales, después de 6 años de permanecer en prisión preventiva, la señora Dayra Levoyer fue declarada inocente de los cargos formulados en su contra, pero a pesar de ello, los bienes que le fueron confiscados continúan en poder de agencias del Estado, y ella continúa con medidas cautelares en el Registro de la Propiedad y en el sistema financiero.

946. La CIDH observa que el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en contra Dayra María Levoyer Jiménez. La CIDH considera que el Estado ha suministrado información limitada y repetitiva sobre el Estado actual de la investigación, sin indicar acciones encaminadas a lograr un resultado. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento de las recomendaciones es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 11.441, Informe No. 104/01, Rodrigo Elicio Muñoz Arcos y otros (Ecuador)**

947. El 15 de agosto de 2001 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de los ciudadanos colombianos Rodrigo Elicio Muñoz Arcos, Luis Artemio Muñoz Arcos, José Morales Rivera y Segundo Morales Bolaños el 26 de agosto de 1993 por miembros de la Policía Nacional. Las víctimas fueron incomunicadas, y sometidas a torturas y tratos crueles e inhumanos.

948. El 11 de octubre de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 104/01<sup>115</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$10,000 por concepto de indemnización a cada una de las víctimas y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

#### **V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

El Estado Ecuatoriano, se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidas del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este

<sup>115</sup> Informe No. 104/01, Caso 11.441, Rodrigo Elicio Muñoz Arcos y otros, 11 de octubre de 2001, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/Ecuador11441.htm>.

enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

949. El 8 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, el 19 de noviembre de 2013 los peticionarios reiteraron que el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial o administrativo para investigar, identificar y sancionar a los policías responsables de los hechos alegados ante la Comisión.

950. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”.

951. El 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios volvieron a señalar lo ya mencionado en su comunicación anterior. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

952. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

953. La parte peticionaria no proporcionó información adicional sobre el cumplimiento.

954. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento.

955. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios presentaron información ante la CIDH, indicando que, aun cuando el Estado se comprometió a iniciar las acciones civiles, penales y administrativas tendientes a sancionar a los responsables, hasta el momento no ha desarrollado ninguna acción referida al cumplimiento de aquel compromiso, por el contrario, dado el transcurso del tiempo desde que ocurrieron los hechos, a la fecha se habría producido la prescripción de las respectivas acciones judiciales.

956. La CIDH observa que el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en contra de las víctimas de este caso. La CIDH considera que el Estado ha suministrado información limitada y repetitiva sobre el Estado actual de la investigación, sin indicar acciones encaminadas a lograr un resultado. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

**Caso 11.443, Informe No. 105/01, Washington Ayora Rodríguez (Ecuador)**

957. El 15 de agosto de 2001 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Washington Ayora Rodríguez el 14 de febrero de 1994. La víctima fue sometida a incomunicación, torturas y tratos crueles e inhumanos, tras lo cual fue liberado por no existir motivos que justificaran su detención.

958. El 11 de octubre de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 105/01<sup>116</sup> en el que certificó el cumplimiento del pago de US\$30,000 por concepto de indemnización a la víctima y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

**V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

El Estado Ecuatoriano, se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

959. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios informaron el 19 de noviembre de 2013 que el Estado no ha iniciado acción judicial alguna tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima.

960. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”.

961. El 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios volvieron a señalar lo ya mencionado en su comunicación anterior. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

---

<sup>116</sup> Informe No. 105/01, Caso 11.443, Washington Ayora Rodríguez, 11 de octubre de 2001, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/Ecuador11443.htm>.

962. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

963. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que a la fecha no se ha realizado ninguna acción para sancionar a los responsables de los hechos violatorios.

964. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento.

965. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios presentaron información ante la CIDH, indicando que aun cuando el Estado reconoció la violación de los derechos a la integridad personal, libertad, garantías judiciales y protección judicial, comprometiéndose a sancionar a los responsables, hasta el momento no se habían iniciado las acciones penales, civiles o administrativas a que se había comprometido para sancionar a los responsables.

966. La CIDH observa que el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las torturas en contra de Washington Ayora Rodríguez. La CIDH considera que el Estado ha suministrado información limitada y repetitiva sobre el Estado actual de la investigación, sin indicar acciones encaminadas a lograr un resultado. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

#### **Caso 11.450, Informe No. 106/01, Marco Vinicio Almeida Calispa (Ecuador)**

967. El 15 de agosto de 2001 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El presente Caso versa sobre la muerte de Marco Vinicio Almeida Calispa el 2 de febrero de 1988 mientras se encontraba bajo la custodia de agentes de la Policía, y su falta de esclarecimiento judicial.

968. El 11 de octubre de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 106/01<sup>117</sup> en el que certificó el cumplimiento del pago de US\$30,000 por concepto de indemnización a los familiares de la víctima y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes relativo al enjuiciamiento de las personas que se presumen responsables de los hechos alegados. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

---

<sup>117</sup> Informe No. 106/01, Caso 11.450, Marco Vinicio Almeida Calispa, 11 de octubre de 2001, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/Ecuador11450.htm>.

## V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES

El Estado Ecuatoriano, se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

969. El 8 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios informaron el 19 de noviembre siguiente, que el Estado no ha iniciado ninguna acción judicial tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima. Por el contrario, dado el tiempo transcurrido hasta la presente fecha, la causa habría prescrito por cumplirse los 10 años de plazo previstos en el Código Penal.

970. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”. En ese sentido, el Estado se comprometió a remitir dicha información por escrito, misma que a la fecha, no ha sido recibida por esta Comisión.

971. El 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior y agregaron que tampoco existiría ninguna investigación, ni sanción en contra de los jueces policiales que se arrogaron una competencia que no tenían al juzgar violaciones de derechos humanos. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

972. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

973. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que a la fecha no se ha realizado ninguna acción para sancionar a los responsables de los hechos violatorios.

974. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento.

975. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios presentaron información ante la CIDH, indicando que, aun cuando el Estado reconoció la violación de los derechos a la integridad personal, libertad, garantías judiciales y protección judicial, comprometiéndose a sancionar a los responsables, hasta el momento no se habían iniciado las acciones penales, civiles o administrativas a que se había comprometido para sancionar a los responsables.

976. La CIDH observa que el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la muerte de Marco Vinicio Almeida Calispa. La CIDH considera que el Estado ha suministrado información limitada y repetitiva sobre el Estado actual de la investigación, sin indicar acciones encaminadas a lograr un resultado. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

#### **Caso 11.542, Informe No. 107/01, Ángel Reiniero Vega Jiménez (Ecuador)**

977. El 15 de agosto de 2001 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El presente Caso versa sobre la detención sin orden judicial de Ángel Reiniero Vega Jiménez que fue efectuada en su hogar, con violencia, por agentes del Estado el 5 de mayo de 1994. Tras ser sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos, la víctima falleció en un hospital. Los efectivos implicados fueron sobreesidos por la justicia penal policial.

978. El 11 de octubre de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 107/01<sup>118</sup> en el que certificó el cumplimiento del pago de US\$30,000 por concepto de indemnización a los familiares de la víctima y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de las cláusulas pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

#### **IV. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

El Estado Ecuatoriano, se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

979. El 4 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 19 de noviembre siguiente, los peticionarios reiteraron que la jurisdicción policial, misma que no tenía competencia sobre los hechos del caso puesto que versaban sobre violaciones de

<sup>118</sup> Informe No. 107/01, Caso 11.542, Ángel Reiniero Vega Jiménez, 11 de octubre de 2001, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/Ecuador11542.htm>.

derechos humanos, sobreseyó a los responsables archivando la causa. En dicha oportunidad, los peticionarios agregaron que el Estado no había ejercido acción alguna tendiente a dejar sin efecto dicha decisión por ser dictada por jueces policiales sin competencia en la materia, así como tampoco había adelantado ninguna acción con el fin de sancionar tanto a los mencionados jueces, como a los responsables de los hechos del presente caso.

980. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”.

981. El 26 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior y agregaron que los hechos continúan en la impunidad. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

982. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

983. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que a la fecha no se ha realizado ninguna acción para sancionar a los responsables de los hechos violatorios.

984. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 5 de diciembre de 2016, el peticionario reiteró lo informado en la comunicación de fecha 3 de diciembre de 2015.

985. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios presentaron información ante la Comisión, indicando que, aun cuando el Estado reconoció la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad, garantías judiciales y protección judicial, comprometiéndose a sancionar a los responsables, hasta el momento no se había desarrollado ninguna acción dirigida a sancionar penal, civil o administrativamente a los responsables directos del asesinato y que tampoco se han sancionado a los jueces policiales que se arrogaron una competencia que no tenían al juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de la víctima.

986. La CIDH observa que el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos de Ángel Reiniero Vega Jiménez. La CIDH considera que el Estado ha suministrado información limitada y repetitiva sobre el Estado actual de la investigación, sin indicar acciones encaminadas a lograr un

resultado. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

### **Caso 11.574, Informe No. 108/01, Wilberto Samuel Manzano (Ecuador)**

987. El 15 de agosto de 2001 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El presente Caso versa sobre la muerte de Wilberto Samuel Manzano consecuencia de acciones perpetradas por agentes del Estado el 11 de mayo de 1991. La víctima fue herida con arma de fuego y luego detenido ilegalmente por policías de civil, tras lo cual falleció en un hospital. Los efectivos implicados fueron sobreesidos por la justicia penal policial.

988. El 11 de octubre de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 107/01<sup>119</sup> en el que certificó el cumplimiento del pago de US\$30,000 por concepto de indemnización a los familiares de la víctima y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

#### **V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

El Estado Ecuatoriano, se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidas del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

989. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 19 de noviembre siguiente, los peticionarios reiteraron que el Estado no había iniciado alguna acción judicial tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima. Por el contrario, dado el tiempo transcurrido hasta la presente fecha, la causa habría prescrito por cumplirse el plazo de 10 años previsto en el Código Penal.

990. El 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior. El Estado por su parte, no respondió ninguna de las solicitudes de información hechas por la CIDH.

991. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O del 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se

---

<sup>119</sup> Informe No. 108/01, Caso 11.574, Wilberto Samuel Manzano, 11 de octubre de 2001, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/Ecuador11574.htm>.

haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

992. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que a la fecha no se ha realizado ninguna acción para sancionar a los responsables de los hechos violatorios.

993. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 5 de diciembre de 2016, el peticionario reiteró lo informado en la comunicación de fecha 3 de diciembre de 2015.

994. El 3 de mayo de 2017, el Estado presentó información a la Comisión, indicando que la investigación sobre la muerte del señor Manzano se encuentra a cargo del Ab. Oscar Bura, Fiscal No. 2 de la DCVDH y conforme al artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal, la investigación se mantiene en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten.

995. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios presentaron información ante la Comisión, indicando que, aun cuando el Estado reconoció la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad, garantías judiciales y protección judicial, comprometiéndose a sancionar a los responsables, hasta el momento no se había desarrollado ninguna acción dirigida a sancionar penal, civil o administrativamente a los responsables directos del asesinato y que tampoco se han sancionado a los jueces policiales que se arrogaron una competencia que no tenían al juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de la víctima.

996. La CIDH observa que el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la muerte de Wilberto Samuel Manzano. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

#### **Caso 11.632, Informe No. 109/01, Vidal Segura Hurtado (Ecuador)**

997. El 15 de agosto de 2001 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El presente Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Vidal Segura Hurtado el 8 de abril de 1993 por agentes de la Policía Nacional vestidos de civil. La víctima fue sometida a torturas y tratos crueles e inhumanos, luego fue ejecutada y su cadáver encontrado el 8 de mayo de 1993 en la vía perimetral de la ciudad de Guayaquil.

998. El 11 de octubre de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 109/01<sup>120</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$30,000.00 por concepto de indemnización a los familiares de la víctima y continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

---

<sup>120</sup> Informe No. 109/01, Caso 11.632, Vidal Segura Hurtado, 11 de octubre de 2001, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/Ecuador11632.htm>.

## VI. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES

El Estado Ecuatoriano, se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

999. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios informaron el 19 de noviembre de 2013, que el Estado no ha iniciado ninguna acción judicial tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima. Por el contrario, dado el tiempo transcurrido hasta la presente fecha, la causa habría prescrito por cumplirse los 10 años de plazo previstos en el Código Penal.

1000. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”.

1001. El 26 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

1002. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

1003. La parte peticionaria no proporcionó información adicional sobre el cumplimiento.

1004. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 5 de diciembre de 2016, el peticionario informó que no han existido avances en cuanto a la investigación y sanción de los responsables.

1005. El 5 de abril de 2017, el Estado indicó que en febrero de 2017 se realizó el impulso fiscal, solicitando información a la Dirección General de Personal de la Policía Nacional. Indicó que como parte de la investigación se habían receptado varias versiones libres y sin juramento de personas que han conocido del caso o que tienen información sobre el mismo.

1006. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios presentaron información ante la Comisión, indicando que, aun cuando el Estado reconoció la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad, garantías judiciales y protección judicial, comprometiéndose a sancionar a los responsables, hasta el momento no se había desarrollado ninguna acción dirigida a sancionar penal, civil o administrativamente a los responsables directos de los hechos, por lo que los mismos continúan en la impunidad.

1007. La CIDH observa que el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las torturas y la muerte de Vidal Segura Hurtado. La CIDH reitera que el Estado ha suministrado información limitada y repetitiva sobre el Estado actual de la investigación, sin indicar acciones encaminadas a lograr un resultado. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

### **Caso 12.007, Informe No. 110/01, Pompeyo Carlos Andrade Benítez (Ecuador)**

1008. El 15 de agosto de 2001 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Pompeyo Carlos Andrade Benítez el 18 de septiembre de 1996. Luego de diez meses de detención se revocó el auto de prisión preventiva y luego se dictó auto de sobreseimiento, sin embargo la víctima permaneció detenida.

1009. El 11 de octubre de 2001 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 110/01<sup>121</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$20,000.00 por concepto de indemnización a la víctima y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

#### **V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

El Estado Ecuatoriano, se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

<sup>121</sup> Informe No. 110/01, Caso 12.007, Pompeyo Carlos Andrade Benítez, 11 de octubre de 2001, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/Ecuador12007.htm>.

1010. El 8 de octubre de 2013 y el 26 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. Ninguna de las partes presentó la información solicitada.

1011. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

1012. La parte peticionaria no proporcionó información adicional sobre el cumplimiento.

1013. El 7 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. Ninguna de las partes presentó información actualizada en esta oportunidad.

1014. La CIDH observa que el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Pompeyo Carlos Andrade Benítez. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

#### **Caso 11.515, Informe No. 63/03, Bolívar Franco Camacho Arboleda (Ecuador)**

1015. El 17 de julio de 2002 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la duración de la detención preventiva de Bolívar Franco Camacho Arboleda en un proceso por posesión ilícita de cocaína. La víctima fue privada de la libertad el 7 de octubre de 1989. El 24 de enero de 1995 se le impuso sentencia absolutoria y en febrero de 1995 fue puesto en libertad, cuando llevaba ya detenido más de cinco años (63 meses).

1016. El 10 de octubre de 2003 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 63/03<sup>122</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$30,000.00 por concepto de indemnización a la víctima y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

#### **V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

El Estado Ecuatoriano, se compromete, en la medida de sus posibilidades, al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de las sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

<sup>122</sup> Informe No. 63/03, Caso 11.515, Bolívar Franco Camacho Arboleda, 10 de octubre de 2003, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Ecuador.11515.htm>.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

1017. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, el 21 de noviembre de 2013, los peticionarios reiteraron que el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial o administrativo para investigar, identificar y sancionar a los policías, jueces y fiscales responsables de los hechos alegados ante la CIDH.

1018. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”.

1019. El 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior, además de precisar que dado el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, la causa habría prescrito en el ámbito interno. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

1020. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

1021. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que dado el trascurso del tiempo transcurrido desde 1995 al presente, las acciones para perseguir a los responsables se encuentran prescritas. Por lo anterior, el peticionario solicitó el cese y archivo de las actuaciones de seguimiento del acuerdo de solución amistosa.

1022. El 7 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 5 de diciembre de 2016, el peticionario reiteró lo informado en la comunicación de fecha 3 de diciembre de 2015.

1023. El 31 de marzo de 2017, el Estado solicitó mediante escrito, se declarase el cierre del caso y el cese del seguimiento del presente caso, en virtud de lo requerido por los peticionarios en fecha 3 de diciembre de 2015.

1024. En atención a la información suministrada por el peticionario, la CIDH declara que el acuerdo de solución amistosa se encuentra cumplido parcialmente, y que se encontraría pendiente de cumplimiento únicamente la cláusula V sobre investigación y sanción de los responsables. Al respecto, la CIDH toma nota y acepta el desistimiento presentado por el peticionario. Asimismo, toma nota de la solicitud del cierre del seguimiento, la CIDH la evaluará y se pronunciará al respecto en una próxima oportunidad. En consecuencia, la CIDH continuará dando seguimiento a la cláusula V del acuerdo de solución amistosa.

**Caso 12.188, Informe No. 64/03, Joffre José Valencia Mero, Priscila Zoreida Valencia Sánchez, Rocío Valencia Sánchez (Ecuador)**

1025. El 12 de noviembre de 2002 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales, y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Joffre José Valencia Mero, Priscila Zoreida Valencia Sánchez y Rocío Valencia Sánchez el 19 de marzo de 1993 por miembros de la policía. El 28 de marzo de 1993 se decretó detención preventiva a las víctimas en juicios por tráfico de drogas y conversión de bienes. Las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva más de cinco años, tras lo cual fueron absueltas.

1026. El 10 de octubre de 2003 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 64/03<sup>123</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$25,000 por concepto de indemnización a cada una de las víctimas y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a dar pleno cumplimiento al acuerdo de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

**V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

El Estado Ecuatoriano, se compromete, en la medida de sus posibilidades, al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de las sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

1027. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios informaron el 19 de noviembre de 2013 que el Estado no había iniciado acciones civiles, penales o administrativas para sancionar a los policías, jueces y fiscales responsables de los hechos alegados.

1028. El 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior. El Estado por su parte, no respondió ninguna de las solicitudes de información hechas por la CIDH.

<sup>123</sup> Informe No. 64/03, Caso 12.188, Joffre José Valencia Mero, Priscila Zoreida Valencia Sánchez, Rocío Valencia Sánchez, 10 de octubre de 2003, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Ecuador.12188.htm>

1029. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

1030. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que dado el transcurso del tiempo transcurrido desde 1993 al presente, las acciones para perseguir a los responsables se encuentran prescritas. Por lo anterior, el peticionario solicitó el cese y archivo de las actuaciones de seguimiento del acuerdo de solución amistosa.

1031. El 7 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 5 de diciembre de 2016, el peticionario reiteró lo indicado en su escrito de 3 de diciembre de 2015.

1032. El Estado no presentó información adicional en esta oportunidad.

1033. En atención a la información suministrada por el peticionario, la CIDH declara que el acuerdo de solución amistosa se encuentra cumplido parcialmente, y que se encontraría pendiente de cumplimiento únicamente la cláusula V sobre investigación y sanción de los responsables. Al respecto, la CIDH toma nota y acepta el desistimiento presentado por el peticionario. Asimismo, toma nota de la solicitud del cierre del seguimiento, la CIDH la evaluará y se pronunciará al respecto en una próxima oportunidad. En consecuencia, la CIDH continuará dando seguimiento a la cláusula V del acuerdo de solución amistosa.

**Caso 12.394, Informe No. 65/03, Joaquín Hernández Alvarado, Marlon Loor Argote y Hugo Lara Pinos (Ecuador)**

1034. El 26 de noviembre y el 16 de diciembre de 2002 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El presente Caso versa sobre el ataque con armas de fuego contra el vehículo en el que se transportaban Joaquín Hernández Alvarado, Marlon Loor Argote y Hugo Lara Pinos el 22 de mayo de 1999 por agentes de la Policía Nacional. Luego del ataque las víctimas fueron detenidas sin orden de arresto y sometidas a torturas y tratos crueles e inhumanos, tras lo cual fueron puestas en libertad, debido a que el ataque y la detención se debió a un “error policial”.

1035. El 10 de octubre de 2003 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 65/03<sup>124</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$100,000.00 al señor Hernández, US\$300,000.00 al señor Loor y US\$50,000.00 al señor Lara por concepto de indemnización a las víctimas y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En el mismo informe la CIDH instó al Estado a dar pleno cumplimiento a los acuerdos de solución amistosa iniciando los procesos judiciales contra las personas implicadas en las violaciones alegadas. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

<sup>124</sup> Informe No. 65/03, Caso 12.394, Joaquín Hernández Alvarado, Marlon Loor Argote y Hugo Lara Pinos, 10 de octubre de 2003, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Ecuador.12394.htm>.

## V. SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES

El Estado Ecuatoriano, se compromete, en la medida de sus posibilidades, al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de las sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General del Estado, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.

1036. El 8 de octubre de 2013 y el 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes, sin recibir respuesta.

1037. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

1038. La parte peticionaria no proporcionó información adicional sobre el cumplimiento.

1039. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. Ninguna de las partes presentó información actualizada en esta oportunidad.

1040. La CIDH observa que el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las víctimas de este caso. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

### **Caso 12.205, Informe No. 44/06, José René Castro Galarza (Ecuador)**

1041. El 10 de octubre de 2005 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de la obligación general de respeto y garantía y de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la protección judicial y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. En dicho acuerdo, el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables.

1042. El presente Caso versa sobre la duración de la detención preventiva de José René Castro Galarza en procesos sobre tráfico de drogas, testaferrismo y enriquecimiento ilícito. La víctima fue privada de la libertad sin orden de arresto el 26 de junio de 1992. La víctima fue incomunicada por 34 días. El 22 de noviembre de 1996 la víctima fue sobreseída en la causa por enriquecimiento ilícito, el 23 de marzo de 1998 fue sobreseída en la causa por testaferrismo y se le impuso sentencia de ocho años de prisión por tráfico de

drogas, la cual fue reducida a seis años el 15 de septiembre de 1997. La víctima fue mantenida en prisión a pesar de haber cumplido los seis años de detención y salió en libertad el 16 de junio de 1998.

1043. El 15 de marzo de 2006 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 44/06<sup>125</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$80.000,00 por concepto de indemnización a la víctima y decidió continuar con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

#### QUINTA: SANCION DE LOS RESPONSABLES

El Estado ecuatoriano realizará sus mejores esfuerzos para el enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidas del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado entregará al Ministerio Público, toda la documentación necesaria a fin de que se inicien las investigaciones tendientes a sancionar a los responsables que resulten de dicha violación. De igual manera solicitará tanto a los organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado ecuatoriano.

1044. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios indicaron el 19 de noviembre siguiente que el Estado no ha iniciado acciones a fin de sancionar a los policías, jueces y fiscales responsables de los hechos, así como tampoco ha realizado todas las medidas reparatorias necesarias y no ha procedido al levantamiento de la prohibición de enajenar que recae sobre la propiedad del señor José René Castro Galarza.

1045. Al respecto, los peticionarios señalaron que la medida cautelar de prohibición de enajenar los bienes de la víctima fue emitida en 1992, y que han transcurrido 20 años sin que la víctima pueda gozar de su propiedad lo cual sería un incumplimiento del acuerdo de solución amistosa y una violación a su derecho de propiedad basada en una arbitrariedad de los agentes estatales. Por ello, solicitó a la CIDH que inste al Estado a cesar las violaciones en contra de la víctima y proceda a levantar las medidas cautelares referidas.

1046. El 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

1047. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

<sup>125</sup> Informe No. 44/06, Caso 12.205, José René Castro Galarza, 15 de marzo de 2006, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Ecuador12205sp.htm>.

1048. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que a la fecha no se ha realizado ninguna acción para sancionar a los responsables de los hechos violatorios.

1049. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 5 de diciembre de 2016, el peticionario reiteró lo informado en la comunicación de fecha 3 de diciembre de 2015.

1050. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios presentaron información a la CIDH indicando que, resulta preocupante que han transcurrido más de 24 años desde la fecha en que los jueces dispusieron como medida cautelar la prohibición de enajenar una propiedad en la Ciudad de Quito, propiedad que fue adquirida mediante una hipoteca contraída con el Seguro Social. Señalaron que es evidente que privarle de disponer libremente de sus bienes, es un daño que causa injustamente y constituye una violación al derecho a la propiedad; reiteraron que a pesar del tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos y desde la firma del acuerdo de solución amistosa, el Estado a la fecha no ha levantado la prohibición de enajenar sus bienes y tampoco ha sancionado a los responsables de los hechos denunciados.

1051. La CIDH observa que el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de la víctima en el presente este caso. La CIDH considera que el Estado ha suministrado información limitada y repetitiva sobre el Estado actual de la investigación, sin indicar acciones encaminadas a lograr un resultado. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

#### **Caso 12.207, Informe No. 45/06, Lizandro Ramiro Montero Masache (Ecuador)**

1052. El 20 de septiembre de 2005 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de la obligación general de respeto y garantía y de los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo, el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Lizandro Ramiro Montero Masache el 19 de junio de 1992. La víctima fue mantenida en prisión preventiva por más de cinco años, tras lo cual fue sobreesida.

1053. El 15 de marzo de 2006 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 45/06<sup>126</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$60.000,00 por concepto de indemnización a la víctima e indicó que continuaría con el seguimiento y la supervisión de la cláusula pendiente de cumplimiento. En ese sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento una cláusula que se enuncia a continuación:

#### **V. SANCION DE LOS RESPONSABLES**

El Estado ecuatoriano realizará sus mejores esfuerzos para el enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de las sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidas del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado entregará al Ministerio Público toda la documentación necesaria a fin de que se inicien las investigaciones tendientes a sancionar a los responsables que resulten de dicha violación. De igual manera, solicitará tanto a los organismos competentes de la Función Judicial como a los organismos públicos o privados para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de

<sup>126</sup> Informe No. 45/06, Caso 12.207, Lizandro Ramiro Montero Masache, 15 de marzo de 2006, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Ecuador12207sp.htm>.

dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado ecuatoriano.

1054. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios indicaron el 19 de noviembre de 2013 que el Estado no ha iniciado ninguna acción judicial (civil, penal o administrativa) tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima.

1055. El 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior. Por su parte, el Estado no respondió a ninguna de las solicitudes de información.

1056. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O del 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

1057. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que dado el transcurso del tiempo transcurrido desde 1992 al presente, las acciones para perseguir a los responsables se encuentran prescritas. Por lo anterior, el peticionario solicitó el cese y archivo de las actuaciones de seguimiento del acuerdo de solución amistosa.

1058. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 5 de diciembre de 2016, el peticionario reiteró lo indicado en su escrito de 3 de diciembre de 2015.

1059. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios presentaron información ante la CIDH, indicando que en el acuerdo de solución amistosa, a pesar de que el Estado reconoció la violación de los derechos a la libertad, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de la víctima y se comprometió a iniciar las acciones civiles y penales y si correspondía, las administrativas a las que hubiere lugar, a la fecha no ha cumplido con dichos compromisos.

1060. En atención a la información suministrada por el peticionario, la CIDH declara que el acuerdo de solución amistosa se encuentra cumplido parcialmente, y que se encontraría pendiente de cumplimiento únicamente la cláusula V sobre investigación y sanción de los responsables. Al respecto, la CIDH toma nota y acepta el desistimiento presentado por el peticionario. Asimismo, toma nota de la solicitud del cierre del seguimiento, la CIDH la evaluará y se pronunciará al respecto en una próxima oportunidad. En consecuencia, la CIDH continuará dando seguimiento a la cláusula V del acuerdo de solución amistosa.

#### **Caso 12.238, Informe No. 46/06, Myriam Larrea Pintado (Ecuador)**

1061. Tras la adopción del Informe de Admisibilidad No. 8/05, el 23 de febrero de 2005 las partes alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de la obligación general de respeto y garantía y de los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, a la eliminación de su nombre de los registros públicos de antecedentes, a la publicidad del reconocimiento de responsabilidad y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la duración de la detención preventiva de Myriam Larrea Pintado en un proceso sobre

presunta transferencia fraudulenta de bienes. La víctima fue privada de la libertad entre el 11 de noviembre de 1992 y el 6 de mayo de 1994 y fue absuelta el 31 de octubre de 1994.

1062. El 15 de marzo de 2006 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 46/06<sup>127</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$275.000,00 por concepto de indemnización a la víctima e indicó que continuaría con el seguimiento y la supervisión de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto recordó a las partes, su compromiso de informar a la CIDH del cumplimiento del presente arreglo amistoso. En ese sentido, se encuentran pendientes de cumplimiento las cláusulas que se enuncia a continuación:

#### V. SANCION DE LOS RESPONSABLES

El Estado ecuatoriano iniciará las acciones necesarias tendientes al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de las sanciones administrativas de las personas que, en cumplimiento de funciones estatales o prevalidas del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado entregará al Ministerio Público toda la documentación necesaria a fin de que se inicien las investigaciones tendientes a sancionar a los responsables que resulten de dicha violación. De igual manera, solicitará tanto a los organismos competentes de la Función Judicial como a los organismos públicos o privados para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado ecuatoriano.

#### VI. OTRAS REPARACIONES

El Estado ecuatoriano se compromete a eliminar del Registro de Antecedentes Penales y de cualquier otro tipo de Registro Público o reservado el nombre de Myrian [sic] Genoveva Larrea Pintado.

De igual manera, el Estado ecuatoriano se compromete a publicar en el diario de mayor circulación el texto de la cláusula III del presente acuerdo de solución amistosa. En dicha publicación se dejará constancia de un agradecimiento por parte de la señora Myrian [sic] Genoveva Larrea Pintado a los doctores Germánico Maya y Alejandro Ponce Villacís, abogados y consejeros de la señora Myrian [sic] Genoveva Larrea Pintado.

Asimismo, el Estado ecuatoriano se compromete, a través de la Procuraduría General del Estado, a elaborar una placa con el nombre de Myrian [sic] Genoveva Larrea Pintado en la cual constará la responsabilidad del Estado ecuatoriano de conformidad con lo establecido en el numeral tercero del presente acuerdo, la misma que será develada en un Auditorium u otra sala semejante de la Superintendencia de Bancos.

1063. Las partes no presentaron información durante 4 años. El 26 de octubre de 2011, la peticionaria indicó que el Estado solo habría cumplido con el pago de la indemnización económica. El 8 de febrero de 2013, los peticionarios reiteraron que el Estado no ha iniciado acción judicial alguna tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima, y señalaron que sólo se cumplió con el punto de la indemnización económica.

1064. El 8 de octubre de 2013 y el 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes, sin recibir respuesta.

<sup>127</sup> Informe No. 46/06, Caso 12.238, Myriam Larrea Pintado, 15 de marzo de 2006, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Ecuador12238sp.htm>.

1065. El 5 de octubre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

1066. La parte peticionaria no presentó información actualizada sobre el cumplimiento.

1067. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. Ninguna de las partes presentó información actualizada en esta oportunidad.

1068. La CIDH observa que el Estado no ha cumplido aún con las medidas de reparación relacionadas con la eliminación de los antecedentes penales, la publicación en diario de amplia circulación, y la elaboración de la placa, así como con las acciones encaminadas a la investigación, juicio y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de la víctima en este caso. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 12.558, Informe No. 47/06, Fausto Mendoza Giler y Diógenes Mendoza Bravo (Ecuador)**

1069. El 20 de septiembre de 2005 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de la obligación general de respeto y garantía y de los derechos a la vida, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables.

1070. El presente caso versa sobre la detención de Fausto Mendoza Giler y Diógenes Mendoza Bravo el 19 de marzo de 2000 por miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía. Las víctimas fueron sometidas a golpizas, a consecuencia de las cuales Fausto Fabricio Mendoza falleció. Diógenes Mendoza Bravo presentó una acusación particular contra los agentes de policía que participaron en la detención y el 20 de julio de 2000 se dictó auto cabeza de proceso de manera general sin sindicar a ninguno de los agentes.

1071. El 15 de marzo de 2006 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 47/06<sup>128</sup> en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US\$300.000,00 por concepto de indemnización a la víctima e indicó que continuaría con el seguimiento y la supervisión del compromiso pendiente de cumplimiento, que se enuncia a continuación:

##### **QUINTA: SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

El Estado ecuatoriano realizará sus mejores esfuerzos para el enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidas del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

La Procuraduría General del Estado entregará al Ministerio Público, toda la documentación necesaria a fin de que se inicien las investigaciones tendientes a sancionar a los responsables

<sup>128</sup> Informe No. 47/06, Petición 533-01, Fausto Mendoza Giler y otro, 15 de marzo de 2006, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Ecuador533.01sp.htm>.

que resulten de dicha violación. De igual manera solicitará tanto a los organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado ecuatoriano.

1072. El 4 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios informaron el 19 de noviembre de 2013 que el Estado no ha iniciado ninguna acción judicial tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de las víctimas, ni contra los jueces policiales que se arrogaron una competencia que no la tenían para juzgar violaciones a los derechos humanos.

1073. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”. En ese sentido, el Estado se comprometió a remitir dicha información por escrito, misma que a la fecha, no ha sido recibida por esta Comisión.

1074. El 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

1075. El 5 de octubre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

1076. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que a la fecha no se ha realizado ninguna acción para sancionar a los responsables de los hechos violatorios.

1077. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento.

1078. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios presentaron información reiterando lo expuesto el 3 de diciembre de 2015.

1079. La CIDH observa que el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de la víctima en el presente este caso. La CIDH considera que el Estado ha suministrado información limitada y repetitiva sobre el Estado actual de la investigación, sin indicar acciones encaminadas

a lograr un resultado. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

### **Caso 12.487, Informe No. 17/08 Rafael Ignacio Cuesta Caputi (Ecuador)**

1080. En el Informe No. 17/08<sup>129</sup> de fecha 14 de marzo de 2008, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la libertad de expresión de Rafael Ignacio Cuesta Caputi, consagrados en los artículos 8(1), 25 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conjuntamente con la obligación general de garantizar los derechos consagrada en el artículo 1(1) de dicho Tratado. El presente caso versa sobre la responsabilidad del Estado ecuatoriano por falta de investigación apropiada de los hechos relacionados con la explosión de una bomba en las manos del señor Cuesta Caputi como consecuencia de sus actividades periodísticas.

1081. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Que reconozca públicamente responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos determinadas por la CIDH en el presente informe.
2. Que efectúe una investigación completa, imparcial y efectiva en torno al atentado sufrido por Rafael Ignacio Cuesta Caputi.
3. Que otorgue una reparación adecuada al señor Rafael Ignacio Cuesta Caputi por las violaciones de su derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la libertad de pensamiento y expresión.

1082. El 8 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes.

1083. El 25 de octubre de 2013, el peticionario reiteró que el cumplimiento de las recomendaciones “no ha variado y la situación se mantiene igual desde finales del año 2010”. En ese sentido, indicó que solo existiría un cumplimiento parcial de las recomendaciones en lo referente a la publicación de las disculpas públicas y la colocación de una placa conmemorativa. En relación con la reparación indicó que no ha existido ningún tipo de acercamiento por parte del Estado para el cumplimiento de esta recomendación. En ese sentido, en una comunicación posterior, del 20 de enero de 2014, el peticionario informó a la CIDH que sigue existiendo un desacuerdo sobre el monto indemnizatorio, por lo que el establecimiento de dicho monto deberá ser nuevamente evaluado y estudiado para poder determinar un valor justo y congruente a los principios que rigen esta materia respecto al daño material e inmaterial.

1084. El 1 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. El peticionario indicó en comunicación de 26 de enero de 2015 que no se habían presentado avances desde finales de 2010. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

1085. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 7 de enero de 2016, el peticionario informó que el 26 de noviembre de 2015, fue convocado a una reunión con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la ciudad de Quito, para tratar el cumplimiento de las recomendaciones. En la reunión se le explicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos era la entidad a cargo de la implementación de las recomendaciones y que la misma Presidencia de la República había enviado una comunicación indicando que debían agotarse las acciones necesarias para cumplir con las recomendaciones formuladas en el Informe No. 17/08. El peticionario indicó que a pesar de haber dialogado sobre el monto de la compensación económica, a la fecha no había recibido información adicional sobre las acciones adelantadas con miras a un desembolso. El peticionario afirmó que “dentro del

---

<sup>129</sup> Informe No. 17/08, Caso 12.497, Rafael Ignacio Cuesta Caputi, 14 de marzo de 2008, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/Ecuador12487.sp.htm>.

proceso ante la CIDH ya se había acordado con el Estado previamente la cantidad de \$300.000 USD (trescientos mil dólares)", por concepto de reparación pecuniaria.

1086. El 18 de julio de 2016, el Estado informó que a la fecha no contaba con un documento en el cual se acreditara una suma acordada con el peticionario, por lo que no existiría un respaldo de la pretensión del peticionario y los diálogos con las autoridades gubernamentales correspondientes sobre el particular. Asimismo, el Estado solicitó a la CIDH el 16 de noviembre de 2016 copia de lo actuado en el expediente de la referencia a partir de la emisión del informe de fondo.

1087. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento.

1088. El 5 de diciembre de 2016, las partes sostuvieron una reunión de trabajo en ciudad de Panamá, con el acompañamiento de la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora de la CIDH para Ecuador, dentro del marco del 159 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión. En dicha reunión de trabajo el Estado reiteró su aceptación de las recomendaciones y voluntad para cumplir con las mismas, y al mismo tiempo expuso el procedimiento que debe agotarse para avanzar en el cumplimiento de la cláusula de compensación económica. Según dicho procedimiento, el Ministerio de Justicia convocará próximamente una reunión para avanzar en la determinación de los daños y los parámetros aplicables del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

1089. La CIDH no ha recibido información actualizada sobre los diálogos sostenidos entre las partes a efectos de continuar con la implementación de las recomendaciones, por lo que queda a la espera de la información actualizada sobre la reunión de trabajo con el Ministerio de Justicia para avanzar en la implementación de la medida de compensación económica, según lo expuesto por el Estado ecuatoriano en la reunión de trabajo mencionada.

1090. Por lo expuesto, la CIDH concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones realizadas en el informe 17/08. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las mismas.

#### **Caso 12.525, Informe No. 84/09 Nelson Iván Serrano Sáenz (Ecuador)**

1091. En el Informe No. 84/09<sup>130</sup> de fecha 6 de agosto de 2009, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, nacionalidad, circulación y residencia, y protección judicial previstos, respectivamente, en los artículos 5, 7, 8, 20, 22 y 25 de la Convención Americana en conexión con los artículos 1.1 y 2 del mismo Tratado por la detención ilegal de Nelson Iván Serrano Sáenz, ciudadano que ostentaba la doble nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, y su inmediata deportación a los Estados Unidos para enfrentar un juicio por el asesinato de cuatro personas en el estado de Florida, donde fue posteriormente condenado a muerte.

1092. La CIDH formuló al Estado ecuatoriano las siguientes recomendaciones:

1. Que continúe brindando asistencia jurídica a Nelson Iván Serrano Sáenz de acuerdo al derecho internacional.
2. Que adecue su ordenamiento jurídico interno de conformidad al artículo 25 de la Convención Americana, a fin de brindar un recurso sencillo y efectivo en el ámbito judicial para las personas sometidas a procesos de deportación.

<sup>130</sup> Informe No. 84/09, Caso 12.535, Nelson Iván Serrano Sáenz, 6 de agosto de 2009, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Ecuador12535.sp.htm>

3. Que repare adecuadamente a Nelson Iván Serrano Sáenz por las violaciones de sus derechos humanos establecidas en el presente informe.

1093. El 4 de octubre de 2013 y el 25 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes, sin recibir repuesta.

1094. El Estado informó en fecha 4 de febrero de 2015 sobre la asesoría técnica jurídica brindada al señor Nelson Serrano Sáenz, a través de la contratación de una abogada de una firma ubicada en el estado de Florida, por un valor de USD 258,000, quien le asistió durante el proceso de apelación de la sentencia que le impuso la pena de muerte. Esta firma presentó en el 2011 un recurso de *certiorari*, que fue denegado por la Corte Suprema de la Florida el 5 de diciembre de 2011.

1095. Adicionalmente, el 28 de julio de 2012, se contrató a otro abogado, en una consultoría de USD 844.155,85 para interponer una moción bajo la Regla 3.851 del Procedimiento Criminal de Florida. Dicha acción controvertiría la eficiencia de los abogados que representaron al señor Serrano durante la primera instancia. También se contrató a una firma de investigadores privados que recolectaran elementos probatorios adicionales y una compañía que sistematizara 90.000 folios que integraban el proceso.

1096. El 24 de marzo de 2014, los abogados contratados sostuvieron una teleconferencia con 7 personas incluyendo un familiar de la víctima, con el objetivo de identificar posibles testigos y otras posibles pruebas. Del 12 al 20 de mayo de 2014 se desarrolló una audiencia para la presentación de evidencias, y el 2 de septiembre de 2014, los abogados del señor Serrano presentaron sus argumentos de cierre sobre la ineficiencia de la representación del abogado defensor asignado por el Estado de Florida.

1097. Adicionalmente, bajo la Regla 3.853 del Procedimiento Criminal de la Florida, la representación interpuso una moción para que se efectuara una prueba de ADN a ciertos elementos recolectados en la escena del crimen. El 14 de marzo de 2014, la Corte Suprema de Florida ordenó la nueva prueba de ADN, con aplicación de la última tecnología disponible. Dicha prueba fue realizada por una persona profesional experta en este campo. El Estado no indicó cual habría sido el impacto de dicho diagnóstico.

1098. El Estado informó adicionalmente sobre algunas gestiones diplomáticas adelantadas a favor del señor Serrano, en ese sentido el 23 de septiembre de 2014, el Cónsul de Ecuador en Miami, visitó al señor Serrano en la Prisión Estatal de la Florida, para verificar su estado actual de salud. Seguidamente, el 24 de septiembre, se realizó una reunión con Thomas Winokur, Juez de la Corte de Apelaciones del Primer Distrito, para exponer la urgencia de que el señor Serrano reciba el tratamiento médico necesario para la diabetes, toda vez que ha perdido la visión del ojo derecho, se le han caído los dientes y está perdiendo el sentido auditivo. Dicha solicitud fue formalizada a través del Oficio MJDHC-SDHC-2014-0178-O del 24 de octubre de 2014.

1099. En relación a la recomendación No. 2, el Estado informó que se está trabajando en el anteproyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana desarrollado por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y otras instituciones públicas. Se habrían adelantado además varias reuniones de trabajo y talleres dentro de este marco, con la participación de la sociedad civil. En ese sentido se llevó a cabo el Taller Construcción de la Ley Orgánica de Movilidad Humana el 23 de noviembre de 2013 y el Encuentro sobre Retorno y Refugio en el Marco de la Movilidad Humana, organizado el 12 y 13 de junio de 2014.

1100. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El Estado informó el 30 de octubre de 2015, que la Corte Suprema del Circuito de Florida denegó la moción accionada bajo la Regla 3.851, y que los abogados contratados había presentado un aviso de apelación. De lo anterior se puede deducir que dicho recurso estaría siendo fundamentado próximamente.

1101. La parte peticionaria no presentó información actualizada sobre el cumplimiento.

1102. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento.

1103. El 13 de diciembre de 2016, el Estado ecuatoriano informó que el 12 de mayo de 2016 la abogada Silvers presentó un escrito ante la Corte Suprema de Florida solicitando la incorporación de un informe suplementario a la apelación presentada previamente en el caso. Según el Estado, dicho informe se basaba en una resolución reciente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, a través de la cual se declaró inconstitucional el esquema de la Ley de Pena de Muerte del Estado de Florida. Asimismo, el Estado informó que el 8 de junio de 2016, se sostuvo la audiencia de apelación ante Corte Suprema de Florida, a la cual acudió la agencia de representación asignada por el Estado y la familia de Nelson Iván Serrano Sáenz. El Estado detalló los extremos principales de la defensa alegada por la abogada Silvers para la sustanciación de un nuevo juicio en contra del señor Serrano. El Estado informó que la Corte Suprema de Justicia de Florida tendría que tomar una decisión dentro del caso próximamente. Finalmente, en relación con la recomendación 2, el Estado reiteró lo ya indicado en años anteriores, sin actualizar avances para la aprobación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

1104. La Comisión reitera que toma nota de las acciones adelantadas por el Estado ecuatoriano para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe No. 84/09, y valora positivamente los esfuerzos del Estado para brindar una representación legal a la víctima, lo cual hace parte de la reparación integral. Asimismo, la Comisión toma nota del proyecto legislativo para el establecimiento de un marco jurídico en el tema de movilidad humana, e insta al Estado a brindar información más detallada sobre los avances en esta materia.

1105. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones realizadas en el Informe No. 84/09. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las mismas.

#### **Petición 533-05, Informe No. 122/12, Julio Rubén Robles Eras (Ecuador)**

1106. El 10 de octubre de 2006, las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial y obligación de respeto y garantía de los derechos humanos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento tanto civil como penal de las personas que participaron en el acto violatorio.

1107. El caso se relaciona con la muerte del joven Julio Rubén Robles Eras, Subteniente del Ejército, de 22 años de edad, quien falleció en la noche del 22 de agosto de 2001, presuntamente durante un “bautizo” para los subtenientes recién llegados al batallón, en circunstancias no esclarecidas. Dichos hechos dieron inicio a dos procesos penales, uno en fuero militar a cargo del Juez Primero de lo Penal de la Tercera Zona Militar y otro en el fuero ordinario sustanciado por el Agente Fiscal de Macará y el Juez Séptimo de lo Penal de Loja. Lo anterior provocó un conflicto de competencia que fue resuelto por la Corte de Justicia Militar que mediante sentencia resolvió que la competencia del caso le correspondía al fuero militar. En consecuencia, el proceso iniciado en fuero ordinario se acumuló al proceso penal existente en el fuero militar.

1108. El 13 de noviembre de 2012, la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 122/12<sup>131</sup> en el que consideró el cumplimiento por parte del Estado del pago de US\$300.000,00 por concepto de reparación pecuniaria, y los avances sobre el cumplimiento de las medidas de reparación no pecuniarias, incluyendo la prohibición de la práctica de “bautizos” al interior de la institución de las fuerzas armadas, y el cumplimiento por parte de la PGE de velar por la aplicación del principio de unidad jurisdiccional. En el

<sup>131</sup> Informe No. 122/12, Petición 533-05, Julio Rubén Robles Eras, Noviembre 13, 2012, disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/amistosas.asp>

mismo informe, la CIDH decidió continuar con la supervisión de los compromisos pendientes de cumplimiento. En ese sentido, estaría pendiente de cumplimiento la cláusula que se enuncia a continuación.

#### VII. DERECHO A LA VERDAD DE LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA Y DERECHO DE REPETICIÓN EN CONTRA DE LOS RESPONSABLES

El Estado ecuatoriano realizará sus mejores esfuerzos para el enjuiciamiento tanto civil como penal de las personas que participaron en el acto violatorio por el cual se imputa la responsabilidad internacional del Estado.

El Estado se reserva el ejercicio del derecho de repetición en contra de los ex oficiales que han sido condenados por los jueces militares por violación al derecho a la vida del señor Robles Eras. Este derecho lo ejercerá conforme al artículo 22 de la Constitución Política.

La Procuraduría General del Estado presentará toda la documentación necesaria para que el Ministerio Público y la Función Judicial investiguen las violaciones a la integridad personal en contra del señor Robles Eras. Una vez esclarecidas las circunstancias de la muerte del Subteniente Robles Eras, es decir que se establezcan los grados de responsabilidad de los culpables y se les imponga las penas que correspondan, será la sentencia firme fundamento suficiente para que el Estado repita lo pagado en contra de los responsables.

1109. El 4 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 20 de noviembre de 2013 los peticionarios reiteraron que el Estado cumplió con el pago del valor de la indemnización fijada en el acuerdo suscrito e impulsó la iniciativa de que los juzgados policiales y militares pasaran a formar parte de la Función Judicial Ordinaria. Asimismo, indicaron que desconocían si el Estado habría iniciado los juicios civiles y penales para determinar adecuadamente las circunstancias de la muerte de la víctima y el grado de responsabilidad de las personas involucradas.

1110. Mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, remitió a la CIDH un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, sobre la situación de algunos casos que se encuentran en cumplimiento de solución amistosa o de recomendaciones de un informe de fondo. Con respecto al caso en concreto, el Estado resalta el cumplimiento de la reparación económica, así como el cumplimiento del compromiso de la Procuraduría General del Estado de velar por la aplicación del principio de unidad jurisdiccional, a fin de que la jurisdicción militar y policial se incorpore a la función judicial. De igual forma, hizo mención a la eliminación de la práctica de bautizos al interior de la institución armada.

1111. En dicha comunicación se precisó por parte del Estado que se habrían girado oficios a la Fiscalía desde la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el fin de que ésta realizase las investigaciones pertinentes. Asimismo, el Estado indicó que se habría mantenido una reunión con la Fiscalía General del Estado, quien habría informado de manera verbal que se habrían realizado “actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la Instrucción Fiscal”.

1112. El 25 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, los peticionarios reiteraron lo ya mencionado en su comunicación anterior. El Estado por su parte, no respondió dicha solicitud de información.

1113. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado indicó que en una reunión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado, sobre la que no aportó la fecha, esta “informó de manera verbal que se habrían realizado actividades investigativas como el reconocimiento de lugares, toma de versiones, con la finalidad de reunir evidencias previo al inicio de la investigación fiscal”. El Estado indicó en relación a este y otros asuntos, que a través de los oficios No. MJDHC-SDHC-DDH-2015-0017-O del 10 de

febrero de 2015; No. MJDHC-SDHC-2015-0094-O de 29 de abril de 2015 y No. MJDHC-SDHC-2015-0253-O del 16 de octubre de 2015, se solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre 26 casos en etapa de seguimiento de solución amistosa, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que contenga “información pertinente” que se pueda brindar a la Comisión. Según lo informado por el Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se encontraría realizando un proceso de sistematización, consolidación y actualización de lo requerido.

1114. El 3 de diciembre de 2015, el peticionario informó que a la fecha no se ha realizado ninguna acción para sancionar a los responsables de los hechos violatorios.

1115. El 7 de octubre de 2016 y el 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 5 de diciembre de 2016, el peticionario reiteró lo informado en la comunicación de fecha 3 de diciembre de 2015.

1116. El 1 de septiembre de 2017, los peticionarios presentaron información ante la Comisión indicando que, aun cuando el Estado reconoció la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de la víctima y se comprometió a investigar en fuero civil el grado de responsabilidad de los militares acusados en la causa, hasta el momento no se ha iniciado proceso penal en el fuero civil tendiente a sancionar a los militares responsables del señor Julio Robles y a los jueces militares que se arrogaron funciones al juzgar en fuero militar violaciones a derechos humanos.

1117. La CIDH observa que el Estado no ha mostrado avances concretos en el cumplimiento del compromiso referido a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de la víctima en el presente este caso. La CIDH considera que el Estado ha suministrado información limitada y repetitiva sobre el Estado actual de la investigación, sin indicar acciones encaminadas a lograr un resultado. Por lo anterior, se concluye que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 12.631, Informe No. 61/13, Karina Montenegro y otras (Ecuador)**

1118. El 18 de diciembre de 2008, fue firmado un acuerdo de solución amistosa entre el Estado ecuatoriano y las señoras Tania Shasira Cerón Paredes, Karina Montenegro, Leonor Briones, Martha Cecilia Cadena y Nancy Quiroga. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección judicial, a los derechos del niño y a la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento tanto civil como penal de las personas que participaron en el acto violatorio.

1119. El caso versa sobre la detención ilegal de estas 5 mujeres, ya que a la fecha de su detención, 4 de ellas se encontraban en estado de gestación y la señora Martha Cecilia Cadena tenía 68 años de edad, incumpléndose así lo establecido por la legislación ecuatoriana que dispone que las mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años de edad, no pueden ser privadas de libertad, debiéndose sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario. La petición presenta de igual forma alegatos por las condiciones en las que estas mujeres tuvieron que llevar su embarazo y dar a luz, así como por las condiciones carcelarias en las que viven hasta la fecha con sus menores hijos.

1120. El 16 de julio de 2013, la Comisión aprobó el Informe No. 61/13 homologando de esta manera el acuerdo de solución amistosa entre las partes. A continuación se detalla el estado que para febrero de 2017 tenía cada uno de los compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo de solución amistosa suscrito el 18 de diciembre de 2008, seguido de un resumen de la información proporcionada por las partes y el respectivo análisis de la Comisión sobre el cumplimiento de las mismas:

<b>Compromisos establecidos en el acuerdo de solución amistosa aprobado en el informe No. 61/13</b>	<b>Estado del cumplimiento</b>
1. Medidas de reparación pecuniaria.	<b>Cumplido totalmente</b>
2. Atención médica inmediata a Martha Cadena y traslado a una casa de prisión o prisión correccional.	<b>Cumplido parcialmente</b>
3. Medidas de no repetición:	<b>Cumplido parcialmente</b>
a) Capacitación a los funcionarios de la Policía Nacional, Fiscalía, Rehabilitación Social, Tribunal Constitucional, Unidad de Habeas Corpus de la Alcaldía, Función Judicial y demás operadores de justicia que corresponda.	<b>Cumplido totalmente</b>
b) Dotación de personal e insumos para el cumplimiento de la garantía del arresto domiciliario.	<b>Cumplido parcialmente</b>
c) Creación de una casa de prisión o prisión correccional.	<b>Cumplido parcialmente</b>
d) Dotación de material a las guarderías existentes en los Centros de Rehabilitación del país y creación de guarderías en los centros que ya existan.	<b>Cumplido parcialmente</b>
e) Creación de un programa especial de atención médica a las mujeres embarazadas, sus hijos/as y las personas de la tercera edad.	<b>Cumplido totalmente</b>
4. La Procuraduría General del Estado y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia presentarán denuncias a la Comandancia General de la Policía, al Consejo Nacional de la Judicatura y a la Fiscalía General del Estado, en búsqueda de sanciones a los responsables de la inejecución del arresto domiciliario, para lo cual se iniciarán los respectivos procesos de investigación de los funcionarios de la policía, judiciales y otros que han desatado o no han ejecutado las resoluciones judiciales que ordenaron el arresto domiciliario.	<b>Cumplido parcialmente</b>
5. La Procuraduría General del Estado iniciara procesos administrativos y civiles para ejercitar el derecho del Estado de repetición en contra de los funcionarios que comprometieron la responsabilidad internacional del Estado en el presente caso.	<b>Cumplido parcialmente</b>

1121. En su Informe Anual 2016, la CIDH declaró el cumplimiento de los puntos 1 y 3 a) del acuerdo de solución amistosa.

1122. Con respecto a las otras cláusulas, pese a que los peticionarios reconocieron los avances en algunas de ellas, como por ejemplo la dotación de material a guarderías existentes, los mismos insisten en que no han sido cumplidas en su totalidad por parte del Estado y que la CIDH debe seguir supervisando el cumplimiento.

1123. Mediante comunicación del 12 de mayo de 2014, recibida en esta Secretaría el 3 de julio de 2014, el Estado informó sobre el cumplimiento. En relación a la cláusula 3 b) sobre dotación de personal e insumos para el cumplimiento de la garantía del arresto domiciliario, el Estado informó que el 28 de enero de 2014, la Asamblea Nacional ratificó el texto de los artículos 537 y 624 del Código Orgánico Integral Penal, en los que se prevé la sustitución de la pena preventiva por arresto domiciliario con el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. El Estado dio cuenta de los fundamentos legales y reglamentarios del empleo de dicho

dispositivo, sin embargo, no incluyó información sobre la implementación de dicho supuesto normativo, es decir, la obtención y distribución del dispositivo, el número de personas que lo estarían usando y en particular el número de mujeres embarazadas que al tener acceso a este dispositivo estarían en situación de detención domiciliaria monitoreada y no en una prisión estatal.

1124. En relación a la cláusula 3 c) sobre la creación de una casa o prisión correccional, el Estado informó sobre el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario que tiene como objetivo crear nuevos centros regionales de rehabilitación social bajo un esquema de gestión propio, se da como ejemplo el Centro de Rehabilitación Social de Guayas que abrió en agosto de 2013 y que se ha posicionado como un plan piloto de este nuevo modelo de gestión. El Estado indicó que en noviembre de 2013 se trasladaron 4300 personas a este Centro de Rehabilitación Social Regional de Guayas; y que para marzo de 2014 se tenía previsto inaugurar los Centros de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte y Sierra Centro Sur. La Comisión continúa a la espera de la información sobre estos nuevos centros para poder valorar el cumplimiento de esta cláusula.

1125. En relación a la cláusula 3 d) sobre dotación de material a las guarderías existentes en los Centros de Rehabilitación del país y creación de guarderías en los centros que ya existan, el Estado informó de la existencia de dos guarderías en funcionamiento en los Centros de Rehabilitación Social Femenino de Quito y Guayaquil, que serían los centros con mayor número de mujeres embarazadas. El Estado indicó información general sobre su administración y funcionamiento sin embargo, no incluyó la información relacionada con la dotación de material, que sería el objeto del acuerdo. Por lo anterior, la CIDH no puede valorar en este momento el cumplimiento de este compromiso.

1126. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. El 23 de octubre de 2015, el Estado reiteró información que había sido proporcionada en mayo de 2014 sobre el funcionamiento de las guarderías, los dispositivos de vigilancia electrónica, y la apertura y funcionamiento del Centro de Rehabilitación Social de Guayas.

1127. Posteriormente, el 29 de marzo de 2017, los peticionarios presentaron información actualizada a la Comisión en relación al cumplimiento. Respecto a la cláusula 2, referida a la atención médica inmediata a Martha Cadena y su traslado indicaron que, el Estado en su contestación sólo detalla que todo el tiempo que se encontraba en el Centro de Rehabilitación Social Femenino, se le prestó atención médica constante a la señora Martha Cadena, pero no se establece si se le proveyó de los medicamentos y de un tratamiento propio de su enfermedad. Los medicamentos deberían ser proporcionados por el Estado de forma oportuna y periódica, sin embargo fueron asumidos por la señora Cadena. También recalcaron que no se ha cumplido con la creación de la Casa de Prisión para aquellas personas que no tengan un domicilio óptimo donde cumplir el arresto domiciliario y el hecho de que el Estado manifieste que está construyendo celdas individuales, dotadas de baterías sanitarias y duchas unipersonales en los Centros de Rehabilitación, en nada muestran el cumplimiento del compromiso que adquirió.

1128. En relación a la obligación de no repetición, los peticionarios indicaron que en atención a la especialidad de Ginecología y Obstetricia dentro del Centro de Rehabilitación Social Femenino no se ha cubierto integralmente debido a que, según el informe presentado por el Ministerio de Justicia, el Estado les provee de un médico ginecológico dos veces al mes para la atención de las mujeres privadas de libertad y el promedio es de 12 atenciones ginecológicas cada 15 días, por lo que se demuestra que la atención es insuficiente, especialmente al tomar en cuenta que existe un promedio de 450 mujeres privadas de libertad, por lo que, no se cubren las necesidades reales del centro.

1129. Con respecto a las sanciones en contra de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, indicaron que desde el 12 de noviembre de 2009 hasta marzo de 2017, han transcurrido más de 8 años y no se ha cumplido con el acuerdo de convocar a una reunión para tratar el tema, lo cual denota el poco interés por parte del Estado en cumplir y asumir sus responsabilidades.

1130. Sobre el suministro de medicinas y la inclusión al sistema de salud general, sostienen que el Estado manifiesta que los casos han sido atendidos de manera particular pero no indica que todos los gastos

que implican la movilización y tratamiento han estado a cargo de los familiares, lo que evidencia que la provisión de medicamentos que realiza el Estado de Ecuador no es suficiente y tampoco especializada para la demanda de enfermedades de las mujeres privadas de libertad.

1131. En relación a la creación de nuevos Centro de Rehabilitación Social y la capacitación brindada al cuerpo policial, los peticionarios señalaron que, el Estado manifiesta que se han creado dos centros de rehabilitación con enfoque de Derechos Humanos, en los cuales se busca una rehabilitación integral y aduce que los protocolos internos responden a ese nivel de seguridad pero sin impedir el ejercicio de los Derechos Humanos. De igual manera indicaron que el Estado ha señalado que se ha procedido a capacitar a los funcionarios administrativos y guías penitenciarios, sin embargo en torno a ciertos Centro de Rehabilitación Social existen denuncias de los familiares sobre la situación real de los mismos, y se evidencia la forma como el personal trata a las personas privadas de libertad.

1132. El 29 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. A la fecha de cierre de este informe, no se ha recibido la información requerida.

1133. En virtud de las consideraciones anteriores, la CIDH considera que el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa es parcial y, por lo tanto, seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 12.249, Informe No. 27/09, Jorge Odir Miranda Cortez y otros (El Salvador)**

1134. En el Informe de Fondo No. 42/04, de 12 de octubre de 2004 (Artículo 51), la CIDH declaró que el Estado salvadoreño era responsable por: i) la violación del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Jorge Odir Miranda Cortez y de otras 26 personas identificadas en el trámite de la petición, debido a que el trámite de un recurso de amparo por ellas intentado, no reunió los parámetros de sencillez y efectividad que imponen las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos libremente asumidas por El Salvador; ii) la violación del artículo 2 de la Convención, toda vez que el procedimiento de amparo en la Ley de Procedimientos Constitucionales de El Salvador no reunía los requisitos establecidos en el artículo 25 del mencionado instrumento, por no constituir un recurso sencillo, rápido ni efectivo, y al constituir la vigencia de dicha ley interna un incumplimiento del deber de adecuar su legislación interna a la Convención Americana; iii) la violación del artículo 1.1 de la Convención por haber faltado a su obligación de respetar y garantizar el derecho a la protección judicial de Jorge Odir Miranda Cortez y las 26 personas comprendidas en este caso; y por iv) la violación del artículo 24 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Jorge Odir Miranda Cortez. Por otra parte, la CIDH no encontró una violación del artículo 26 de la Convención, y determinó que carecía de elementos para imputar responsabilidad al Estado con base a los artículos 4 y 5 de la Convención.

1135. En este sentido, la CIDH reiteró al Estado salvadoreño las recomendaciones ya formuladas en el Informe No. 47/03 de 8 de octubre de 2003:

- a) Impulsar las medidas conducentes para la modificación por vía legislativa de las disposiciones en materia de amparo, a fin de dotar al recurso de la sencillez, rapidez y efectividad que requiere la Convención Americana.
- b) Reparar adecuadamente a Jorge Odir Miranda Cortez y las demás 26 víctimas individualizadas en el expediente del Caso 12.249 -o en su caso, a sus derechohabientes- por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas.

1136. El 30 de noviembre de 2007, en la ciudad de San Salvador, el Estado, representado por el señor Eduardo Calix López, Viceministro de Relaciones Exteriores y el señor Jorge Odir Miranda Cortez en representación de la Asociación Atlacatl "Vivo Positivo" y de las demás víctimas del presente caso, suscribieron un Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones, en el cual establecieron los siguientes puntos:

1. Las Partes en el presente acto hacen constar su deseo de dar por finalizado el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de los referidos avances que en materia de prevención y tratamiento del VIH-SIDA que el Estado salvadoreño ha logrado; sin embargo, a pesar de las diferentes convocatorias que la Asociación Atlacatl "Vivo Positivo", ha cursado –a través de medio escrito y vía telefónica – a los peticionarios que concurrieron en el presente caso, para efecto de incluirlos en la toma de decisiones relacionadas con el diálogo que se ha venido sosteniendo entre el señor Jorge Odir Miranda Cortez y funcionarios del Estado salvadoreño, ha sido imposible el contacto con la mayoría de ellos, razón por la cual esto ha sido puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se incluye como parte integrante de la presente Acta Notarial copia certificada de los avisos que aparecieron publicados en el rotativo "La Prensa Gráfica", con fecha 22 y 23 de septiembre del año 2006. Es en tal virtud que siendo imposible contactar a la mayoría de las personas parte del proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los comparecientes han llegado a acuerdos de beneficio general que serán puestos en conocimiento igualmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

2. El Estado de El Salvador, por intermedio del Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, entregará una indemnización compensatoria por una sola vez, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la presente Acta Notarial, por la cantidad de dos mil dólares (\$ 2.000,00) de los Estados Unidos de América, a veintitrés personas partes del proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace un total de cuarenta y seis mil dólares (\$ 46.000,00) de los Estados Unidos de América, con cargo al Presupuesto General del Estado, en el Ramo del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales serán consignados en cuentas bancarias aperturadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en beneficio de cada uno de los denunciados por un periodo de dos años. Sí pasado este tiempo los denunciados beneficiarios de las cuentas, o bien sus familiares más cercanos, de conformidad con las leyes vigentes aplicables, no reclaman los fondos, dichas reparaciones serán destinados a la Comisión Nacional contra el SIDA para que conjuntamente con la Asociación Atlacatl sean utilizados para desarrollar acciones encaminadas a la prevención del VIH, así como a la contribución de la disminución del estigma y la discriminación; por este medio las partes igualmente hacen constar que tanto el señor Jorge Odir Miranda Cortez, como tres personas partes en el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han decidido renunciar a la indemnización compensatoria antes referida, lo cual así lo harán saber a la referida Comisión Interamericana. Asimismo entregará la Asociación Atlacatl "Vivo Positivo", en concepto de desembolsos realizados en relación con el caso por un sola vez, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la presente acta notarial, la cantidad de cincuenta y cinco mil dólares (\$ 55.000,00) de los Estados Unidos de América;

3. Que de conformidad con la vasta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, el pago que el Estado de El Salvador realiza a las personas objeto de esta Acta Notarial no está sujeto a impuestos actualmente existentes o que puedan decretarse en el futuro.

4. Asimismo, las Partes expresan que estos acuerdos constituyen una muestra de solidaridad y de reconocimiento por parte del Estado Salvadoreño al resarcimiento de los daños ocasionados;

5. Que a consecuencia de dichos acuerdos el señor Jorge Odir Miranda Cortez en la calidad antes indicada, expresa que se tiene por satisfecho del agravio que esta situación pudo haberles causado; y asimismo manifiesta que en esa misma calidad libera al Estado salvadoreño de cualquier reclamo o responsabilidad presente o futura que pueda derivar del proceso a que se ha hecho referencia;

6. Asimismo, el Estado de El Salvador en fiel cumplimiento del deber de adoptar las disposiciones del Derecho Interno a la Convención Americana de Derechos Humanos, se compromete a realizar las gestiones necesarias para la pronta vigencia de la nueva Ley de Procedimientos Constitucionales;

7. De igual forma las Partes acuerdan realizar un Acto Público de reconocimiento y solidaridad sobre los hechos acaecidos en el presente caso, en el que se contará con la presencia de funcionarios del Estado de las Instituciones relacionadas con el caso, y con la presencia de entidades dedicadas a la prevención y atención integral en la lucha contra el VIH-SIDA, así como con presencia de medios de comunicación, como partes de la promoción a los derechos humanos y el compromiso para continuar con las medidas de prevención y atención a la personas que viven con el VIH-SIDA;

8. Las Partes igualmente acuerdan la construcción de un jardín conmemorativo dedicado a las personas fallecidas a consecuencia de SIDA durante este proceso, ubicado en el Kilómetro diez de la carretera que de San Salvador de dirige a Comalapa;

9. Tanto la celebración del acto público como la inauguración del jardín conmemorativo se realizaran el 1° de diciembre del presente año en forma conjunta;

10. Finalmente, el Estado de El Salvador y el señor Jorge Odir Miranda Cortez en la calidad en que comparece, con el fin de contribuir en la consolidación en el país del clima de reconciliación social y ventilar el tema del respeto de los derechos humanos, específicamente en materia de VIH-SIDA, han llegado a un arreglo de reparaciones adicionales, las cuales de detallan a continuación:

En el marco del diálogo amistoso, las Partes consideran:

1. El establecimiento de programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de no discriminación de las personas con VIH-SIDA, por lo que en razón del presente acto las Partes reconocen la efectiva existencia de este tipo de programas impartidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social;

2. El permitir el monitoreo de las Instituciones Hospitalarias bajo la administración estatal por organizaciones no gubernamentales reconocidas en el trabajo con personas que viven con VIH-SIDA, y en este acto las Partes hacen notar que las Organizaciones No Gubernamentales, como la Asociación Atlacatl “Vivo Positivo”, ciertamente ya realiza este tipo de monitoreo;

3. La capacitación de personal médico dedicado a la atención de personas con VIH-SIDA; de igual forma las Partes expresan que efectivamente por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dichas capacitaciones ya se realizan; y

4. El Fortalecimiento de la Asociación Atlacatl en su calidad de institución dedicada al trabajo en derechos humanos y VIH-SIDA, por lo que las partes reconocen que ciertamente la mencionada institución es beneficiaria de subsidios auspiciados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al igual que otras organizaciones no gubernamentales que trabajan con el tema de VIH-SIDA.

1137. En el Informe de Fondo No. 27/09 (Artículo 51- Publicación), la CIDH decidió reiterar nuevamente la primera recomendación y concluyó que el Estado de El Salvador había dado cumplimiento total a la segunda recomendación establecida en el Informe No. 47/03 y a los compromisos adquiridos en el acuerdo de cumplimiento de recomendaciones, suscrito por las partes el 30 de noviembre de 2007<sup>132</sup>.

<sup>132</sup> Ver Informe de Fondo No. 27/09 de 20 de marzo de 2009, párrafos 156 y 157.

1138. Por consiguiente, la CIDH continua realizando el seguimiento solamente de la primera recomendación, referida al impulso de las medidas conducentes para la modificación vía legislativa de las disposiciones en materia de amparo, como único punto pendiente de cumplimiento por el Estado.

1139. En el año 2011, sobre la primera recomendación de la CIDH, el Estado salvadoreño informó que el proyecto de la Ley Procesal Constitucional, -introducido ante la Asamblea Legislativa en el año 2002-, continuaba en estudio en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

1140. El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de la recomendación pendiente. El Estado manifestó que el proyecto de la Ley Procesal Constitucional continúa en estudio en la Corte Suprema de Justicia, y que una vez que se apruebe, sería enviado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Por su parte, los peticionarios señalaron que aún no conocen los avances del referido proyecto a pesar de que fue presentado hace años, y que éste cuenta con el mismo vacío que el anterior debido a que no establece el plazo de admisibilidad del proceso de amparo, lo que constituye un obstáculo para poder acceder a la justicia.

1141. El 30 de octubre de 2013 las partes sostuvieron una reunión de trabajo durante el 149 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, en la cual reiteraron las posturas referidas.

1142. El 8 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó nuevamente información actualizada sobre el cumplimiento del punto pendiente. El 30 de enero de 2015, los peticionarios informaron que continúan realizando los impulsos de seguimiento debido a que esto no ha sido posible por iniciativa de las autoridades.

1143. Los peticionarios afirmaron que han solicitado audiencias ante la Cancillería, la CONASIDA y ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa para discutir sobre los avances que se ha sostenido por parte de la última en materia de amparo así como para hacer del conocimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH, solicitar el Anteproyecto que la mencionada Comisión de Legislación está revisando y manifestar el interés de ser involucrados en posteriores reuniones de seguimiento. Al respecto, los peticionarios agregaron que, si bien la Presidenta de dicha Comisión Legislativa les entregó copia del Anteproyecto que está revisando, no ha sido posible hacer un seguimiento debido a la resistencia que han manifestado dentro del órgano legislativo a dar seguimiento a estos acuerdos aduciendo que la firma de Acuerdos Amistosos es vinculante para el Estado. Por último, señalaron que han transcurrido 12 años desde que se inició el proceso de reforma con la presentación del Anteproyecto de la Ley Procesal Constitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia sin que a la fecha se haya obtenido mayores resultados.

1144. Por su parte, el 26 de febrero de 2015, el Estado comunicó que a esa fecha no se ha reformado la Ley de Procedimientos Constitucionales agregando que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reformuló la sustanciación del referido proceso y concentró algunos traslados regulados por la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual ha permitido que la tramitación del proceso de amparo sea más corto. Asimismo, el Estado informó que el 24 de noviembre de 2014 la Asamblea Legislativa de El Salvador firmó un Convenio con la Asociación Atlacatl con el objetivo de fortalecer y formalizar las relaciones entre ambas instituciones y promover acciones encaminadas a mejorar las condiciones de las personas que viven con el VIH por medio de un marco legal que responda a la realidad del país.

1145. El 25 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó nuevamente información actualizada sobre el cumplimiento. El Estado indicó el 17 de noviembre de 2015, que existe actualmente una propuesta de reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales, que se encuentra en etapa de estudio ante la Asamblea Legislativa, y que modificaría la tramitación de los procesos constitucionales en su conjunto, incluyendo el diligenciamiento del proceso de Amparo, a fin de ajustarlo a los estándares establecidos por la Convención. Adicionalmente, el Estado indicó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en atención a los principios de concentración y celeridad, ha optado por mantener su línea jurisprudencial en relación a la concentración de actos procesales respecto a la tramitación de dicho proceso, así lo ha dejado expresado en sus autos del 24 de abril de 2013, en el Amparo 310-20132; del 26 de noviembre de 2014, en el Amparo 814-

2014 y del 12 de diciembre de 2014, en el Amparo 938-2014. En ese sentido, el Estado considera que no obstante la falta de una reforma legislativa del proceso de amparo, el máximo tribunal constitucional ha suplido esta deficiencia en la norma, vía jurisprudencia, asegurando que la tramitación del amparo cuenta con celeridad en función de los derechos fundamentales en riesgo y de las características propias de cada caso, para asegurar una pronta respuesta de la jurisdicción constitucional.

1146. La parte peticionaria no presentó la información solicitada.

1147. El 6 de abril de 2016, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con el acompañamiento de la Comisión, dentro del marco del 157 período ordinario de sesiones. En dicha reunión, las partes dialogaron sobre los retos en la implementación de la recomendación objeto de seguimiento. Los peticionarios indicaron que si bien los avances en materia jurisprudencial son relevantes, no son suficientes, y que están a la espera de la aprobación de la ley de procedimientos constitucionales. El Estado, por su parte, reconoció el incumplimiento y expresó su voluntad de continuar avanzando en la aprobación de la reforma constitucional, que se encontraría pendiente ante la Asamblea Legislativa.

1148. El 12 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento.

1149. El 5 de diciembre de 2016, el Estado informó que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa continua estudiando la propuesta de reforma de Ley de Procedimientos Constitucionales.

1150. El 15 de agosto y el 4 de septiembre de 2017, los peticionarios indicaron que, en relación al punto referido a “impulsar las medidas conducentes para la modificación por vía legislativa de las disposiciones en materia de amparo” el Estado de El Salvador ha mostrado durante todo el proceso un pasivo interés en el cumplimiento del acuerdo, reiteraron la información señalada con anterioridad sobre la propuesta de reforma a la Ley de Procedimientos Constitucional. Por otro lado, respecto al monitoreo de las instituciones hospitalarias bajo la administración estatal por organizaciones no gubernamentales reconocidas en el trabajo con personas que viven con VIH-SIDA, indican que a ellos como institución se les imponen numerosas restricciones y requisitos para poder ingresar y realizar el trabajo de monitoreo de los servicios, igualmente, en relación con el fortalecimiento de la Asociación Atlacatl en su calidad de institución dedicada al trabajo en Derechos Humanos y VIH-SIDA, señalaron que se encuentran en proceso de retroceso ya que les han sido reducidos los fondos, asimismo aprovecharon para hacer notar que desde hace 3 años el Estado suspendió el día nacional para la toma de la Prueba de VIH en El Salvador, lo cual ha causado desinterés en la población para someterse a esta prueba de manera temprana.

1151. El 17 de octubre de 2017, el Estado de El Salvador presentó información comunicando que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa continúa estudiando la propuesta de reformar la Ley de Procedimientos Constitucionales, con la que se pretende modificar los procesos constitucionales incluyendo el proceso de Amparo, a fin de ajustarlo a los estándares requeridos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

1152. En virtud de lo anteriormente narrado, la CIDH toma nota de la información proporcionada por el Estado, y considera un avance positivo el criterio jurisprudencial mencionado. Sin embargo, recuerda al Estado que la recomendación formulada por esta Comisión va encaminada a “impulsar las medidas conducentes para la modificación por vía legislativa”, y en ese sentido no se limitan únicamente a la aplicación judicial del estándar. La CIDH aprovecha para reiterar que ésta es la única recomendación que se encuentra pendiente para que el Estado alcance el cumplimiento total del único caso que se encuentra actualmente en seguimiento a través del mecanismo del Informe Anual a la Asamblea General de los Estados Americanos sobre El Salvador. Por lo anterior, la CIDH invita al Estado a desplegar todas las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de esta recomendación, y a brindar información sobre las medidas concretas que ha llevado a cabo para impulsar el cambio legislativo.

1153. Por lo expuesto, la Comisión reitera que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

**Caso 9.903, Informe No. 51/01, Rafael Ferrer Mazorra y otros (Estados Unidos)**

1154. En el Informe No. 51/01, fechado el 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de haber violado los artículos I, II, XVII, XVIII y XXV de la Declaración con respecto a la privación de libertad de los peticionarios.

1155. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Que, tan pronto sea posible, convoque revisiones con respecto de todos los peticionarios que permanecen bajo la custodia del Estado, a fin de determinar la legalidad de su detención de acuerdo con las normas aplicables de la Declaración Americana, en particular los artículos I, II, XVII, XVIII y XXV de la Declaración, según se informa en el análisis de la Comisión que consta en el presente informe.
2. Que revise las leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que a todos los extranjeros que son detenidos bajo la autoridad y control del Estado, incluidos los extranjeros que las leyes de inmigración del Estado consideren “excluíbles”, se les otorgue la plena protección de todos sus derechos establecidos en la Declaración Americana, incluidos en particular los consagrados en los artículos I, II, XVII, XVIII y XXV de la Declaración, según se informa en el análisis de la Comisión que consta en el presente informe.

1156. En comunicación de 15 de diciembre de 2005, el Estado informó a la Comisión que no compartía y rechazaba las recomendaciones de la Comisión, y que negaba la existencia de una violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en base a sus anteriores respuestas en el caso. El Estado ha mantenido la misma posición en los últimos años, sin citar ningún esfuerzo emprendido a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1157. El 5 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1158. El 3 de febrero de 2015, el Estado reiteró que la Comisión debe referirse a lo manifestado por el Estado en el 2005.

1159. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas. A la fecha de elaboración del presente informe las partes no han presentado la información solicitada.

1160. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas sigue estando pendiente. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de estas recomendaciones.

**Caso 12.243, Informe No. 52/01, Juan Raúl Garza (Estados Unidos)**

1161. En el Informe No. 52/01, fechado el 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de la violación de los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana por condenar a Juan Raúl Garza a la pena de muerte. Asimismo, la Comisión también señaló que Estados Unidos cometería una grave e irreparable violación del derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo I de la Declaración Americana, si procediera a la ejecución del señor Garza sobre la base de las actuaciones penales en consideración.

1162. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Otorgar al señor Garza una reparación efectiva, que incluya la conmutación de la sentencia.
2. Revisar las leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que las personas acusadas de delitos punibles con la pena capital sean juzgadas y, de ser condenadas, sean sentenciadas de acuerdo con los derechos establecidos en la Declaración Americana, incluidos los artículos I, XVIII y XXVI de la misma y, en particular, mediante la prohibición de que se introduzcan pruebas de delitos no juzgados durante la etapa de formulación de la sentencia en juicios por delitos punibles con la pena capital.

1163. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Los peticionarios no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1164. Por otra parte, el Estado entregó su último reporte a la Comisión el 3 de febrero de 2015. En su reporte, el Estado simplemente reiteró sus comunicaciones anteriores sobre el informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado también informó que el señor Garza fue ejecutado el 19 de junio de 2001.

1165. Por lo tanto, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones continúa pendiente. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando el cumplimiento de estas recomendaciones.

**Caso 11.753, Informe No. 52/02, Ramón Martínez Villarreal, (Estados Unidos)**

1166. En el Informe No. 52/02, fechado el 10 de octubre de 2002, la CIDH concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación de los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana en el juicio, condena e imposición de sentencia a pena de muerte de Ramón Martínez Villarreal; y b) ejecutar el Estado al señor Martínez Villarreal de conformidad con el proceso penal del que se trata en este Caso, el Estado perpetrará una violación grave e irreparable del derecho fundamental a la vida en virtud del artículo I de la Declaración Americana.

1167. La Comisión se encuentra supervisando el cumplimiento de la siguiente recomendación:

2. Examine sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que todo nacional extranjero arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva en los Estados Unidos, es informado sin retraso alguno de su derecho a asistencia consular y que, con su coincidencia, el consulado adecuado es informado sin dilación de las circunstancias del nacional extranjero, de conformidad con las garantías judiciales de debido proceso y un juicio imparcial consagradas en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana.

1168. La CIDH declaró cumplida la recomendación No. 1 en su Informe Anual de 2013<sup>133</sup>, toda vez que la sentencia de muerte quedó sin efecto y la víctima fue liberada el 4 de octubre de 2006.

1169. La CIDH verificó la información contenida en la totalidad de los informes anuales emitidos con posterioridad al Informe 52/02. Al respecto, entre el año 2005 y 2014, la CIDH ha considerado que se ha dado cumplimiento parcial la recomendación No. 2. La CIDH ha valorado positivamente el que el Estado informara sobre medidas tomadas en la Nación, en implementación de las obligaciones de los Estados Unidos

<sup>133</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 653. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap2-D.pdf>

bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC) y la documentación proporcionada sobre iniciativas que incluyen información, asesoramiento y entrenamiento en notificaciones y acceso consulares, para agentes de policía, fiscales y jueces a nivel federal, estatal y local. Asimismo, ha tomado nota de la publicación y distribución masiva de un manual preparado por el Departamento de Estado con instrucciones e información completa y útil para agentes que detengan o arresten a nacionales extranjeros, y otros medios utilizados por el Estado para distribuir esta información incluyendo fichas de bolsillo para agencias de policía, prisiones y otras entidades a lo largo del país, así como páginas web sociales y sesiones de información y entrenamiento, todos encaminados a llamar la atención e incrementar el cumplimiento con las obligaciones de notificaciones y acceso consulares y sobre como las violaciones alegadas son remediadas y resueltas.

1170. El 26 de octubre de 2015, los peticionarios informaron que el 25 de marzo de 2015, el señor Villareal fue ingresado a un hospital por un período inicial de 180 días, y luego de manera permanente por custodia y tratamiento, y que en la misma fecha los cargos penales fueron eliminados en el Condado de Santa Cruz. Asimismo, los peticionarios informaron que el 9 de septiembre de 2015, una segunda audiencia fue llevada a cabo para determinar la condición y cuidado futuro de Martinez Villareal. Los peticionarios informaron que dada su discapacidad, está recibiendo atención en salud en un centro hospitalario y que esta es la mejor opción posible para el en este momento. En relación a la segunda recomendación, los peticionarios indicaron que en la práctica, la garantía del derecho de asistencia consular continua siendo un asunto sin resolver en el derecho domestico de EEUU.

1171. El 2 de diciembre de 2015, el Estado indicó que está comprometido para cumplir sus obligaciones bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

1172. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1173. El 25 de octubre de 2016 y el 18 de septiembre de 2017, los peticionarios reiteraron la información presentada con anterioridad.

1174. El 24 de octubre de 2017, el Estado reiteró la información presentada con anterioridad.

1175. La Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente la recomendación 2. Por lo tanto, la CIDH seguirá supervisando el punto pendiente de cumplimiento.

#### **Caso 11.140, Informe No. 75/02, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos)**

1176. En el Informe No. 75/02, fechado el 27 de diciembre de 2002, la CIDH concluyó que el Estado no había garantizado el derecho de las Dann a la propiedad, en condiciones de igualdad, en contravención de los artículos II, XVIII y XXIII de la Declaración Americana, en relación con sus reivindicaciones de los derechos de propiedad por las tierras ancestrales Western Shoshone.

1177. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Otorgue a Mary y Carrie Dann una reparación efectiva que incluya la adopción de las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar el respeto del derecho de las Dann a la propiedad, de acuerdo con los artículos II, XVIII y XXIII de la Declaración Americana, en relación con sus reivindicaciones del derecho de propiedad por las tierras Western Shoshone.
2. Revise su legislación, procedimientos y prácticas para garantizar que los derechos de propiedad de los indígenas se determinan de acuerdo con los derechos establecidos en la Declaración Americana, incluidos sus artículos II, XVIII y XXIII.

1178. Los peticionarios reportaron a la Comisión el 23 de noviembre de 2013, que el Estado no ha hecho esfuerzos para cumplir con las recomendaciones. También subrayaron que Estados Unidos ha seguido permitiendo actividades de extracción de recursos destructivas en las tierras ancestrales de los Western Shoshone, sin intentos de sentarse a resolver las violaciones de derechos humanos existentes y continuas identificadas en el Informe de Fondo. Solicitan la intervención adicional de la Comisión para que lleve a cabo una visita *in loco* y que recomiende un taller de capacitación para funcionarios públicos sobre los derechos humanos internacionales de los pueblos indígenas.

1179. Por su parte, el Estado reiteró el 2 de febrero de 2015 sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado también reiteró que rechaza las recomendaciones de la Comisión.

1180. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento.

1181. El 2 de noviembre de 2016, los peticionarios informaron que el Estado no ha avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones, y pidió que la Comisión realizara una visita *in loco* y una capacitación a funcionarios públicos sobre el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

1182. Por lo tanto, la Comisión reitera que el cumplimiento de sus recomendaciones contenidas en el Informe No. 75/02 continúa pendiente. En consecuencia, seguirá supervisando el cumplimiento de sus recomendaciones.

#### **Caso 11.193, Informe No. 97/03, Shaka Sankofa (Estados Unidos)**

1183. En el Informe No. 97/03 del 29 de diciembre de 2003, la Comisión concluyó que el Estado: a) era responsable de las violaciones de los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana, cometidas en el juicio, declaración de culpabilidad y condena a muerte de Shaka Sankofa; b) era responsable de la violación del derecho fundamental a la vida del señor Sankofa, infringiendo el artículo I de la Declaración Americana, al ejecutar al señor Sankofa basándose en esas actuaciones; y que c) transgredió una norma internacional de *jus cogens* enmarcada en el derecho a la vida previsto en el artículo I de la Declaración Americana al ejecutar al señor Sankofa por un delito que se concluyó que había cometido a los 17 años de edad.

1184. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Proporcione un recurso efectivo al pariente más próximo de Shaka Sankofa, incluida una indemnización.
2. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas, a fin de evitar violaciones de derechos similares a las cometidas en el Caso del señor Sankofa en futuras actuaciones referentes a la imposición de la pena capital.
3. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas de modo que no se imponga la pena de muerte a personas que, a la fecha en que se haya cometido el delito del que hayan sido declaradas culpables, no hubieran cumplido los 18 años de edad.

1185. El 28 de septiembre de 2015, el 26 de septiembre de 2016 y el 4 de octubre de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1186. Por su parte, el Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1187. El 24 de octubre de 2017, el Estado reiteró la información presentada con anterioridad.

1188. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 97/03 sigue siendo parcial. Por lo tanto, la CIDH seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.

**Caso 11.204, Informe No. 98/03, Statehood Solidarity Committee (Estados Unidos)**

1189. En el Informe No. 98/03, fechado el 29 de diciembre de 2003, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de la violación de los derechos de los peticionarios consagrados en los artículos II y XX de la Declaración Americana, por negarles una oportunidad efectiva de participar en el parlamento federal.

1190. La Comisión formuló al Estado la siguiente recomendación:

Otorgar a los peticionarios una reparación efectiva, que incluya la adopción de las medidas legislativas y de otra índole necesaria para garantizar a los peticionarios el derecho efectivo a participar en su parlamento nacional, directamente o a través de representantes libremente elegidos y en condiciones de igualdad.

1191. El 28 de septiembre de 2015, 12 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El Estado no presentó información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1192. La parte peticionaria informó el 28 de septiembre de 2015, que el Estado aún no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y garantizar el derecho a la participación política de los residentes del Distrito de Columbia en el parlamento federal. Los peticionarios indicaron que el Estado no ha proporcionado el derecho fundamental a los ciudadanos americanos que habitan en el Distrito de Columbia a una representación igualitaria en la Cámara de Representantes y el Senado, cámaras del cuerpo legislativo bicameral de los Estados Unidos de América.

1193. Por su parte, el Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado también reiteró que rechaza las recomendaciones de la Comisión.

1194. Por lo tanto, la Comisión reitera que el cumplimiento de su recomendación continúa pendiente. En consecuencia, seguirá supervisando el cumplimiento de su recomendación.

**Caso 11.331, Informe No. 99/03, Cesar Fierro (Estados Unidos)**

1195. En el Informe No. 99/03, del 29 de diciembre de 2003, la Comisión concluyó que: a) el Estado era responsable de violaciones de los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana en el juicio, condena e imposición de la sentencia a pena de muerte de Cesar Fierro; y b) que, de ejecutar el Estado al señor Fierro, de conformidad con el proceso penal del que se trata en este Caso, el Estado perpetrará una violación grave e irreparable del derecho fundamental a la vida en virtud del artículo I de la Declaración Americana.

1196. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Otorgue al señor Fierro una reparación efectiva que incluya un nuevo juicio de conformidad con las garantías del debido proceso y un juicio imparcial que le confieren los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana, de no poderse celebrar un nuevo juicio en cumplimiento de estas garantías, la puesta en libertad del señor Fierro.

2. Examine sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que todo nacional extranjero arrestado de cualquier forma, detenido, o puesto en prisión preventiva en los Estados Unidos, es informado sin retraso de su derecho a asistencia consular y que, con su coincidencia, el consulado adecuado es informado sin dilación de las circunstancias del nacional extranjero, de conformidad con las garantías judiciales del debido proceso y un juicio imparcial consagradas en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana.

1197. Los peticionarios presentaron información pertinente al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo el 9 de enero de 2015. Los peticionarios indicaron que el señor Fierro no había sido liberado ni se le ha hecho un nuevo juicio, y que no se habían adoptado medidas ejecutivas, legislativas ni judiciales conducentes a alguna de estas acciones. El señor Fierro permanece en el pabellón de la muerte en Texas sin fecha programada para su ejecución, y no se ha presentado acción judicial alguna este último año a su nombre. En cuanto a la recomendación de que Estados Unidos revisara sus leyes, procedimientos y prácticas para mejorar el cumplimiento de sus obligaciones de acceso consular, informaron que el gobierno estatal aún no había iniciado tal revisión. Afirmaron que en muchos casos las autoridades no proporcionan información sobre el derecho de asistencia consular cuando un nacional extranjero es arrestado en Estados Unidos, lo cual es visible en los casos ante las cortes a nivel federal y estatal. Los peticionarios indicaron que en los últimos 12 meses, no han proporcionado el acceso a la asistencia consular, y que continúan aplicando criterios jurisprudenciales del 2006. Los peticionarios citaron jurisprudencia de varios casos resueltos en el 2014, en los cuales consideran que se configuraron violaciones al derecho de asistencia consular efectiva.

1198. El Estado reiteró 3 de febrero de 2015 sus comunicaciones anteriores en relación con este informe de fondo, en especial la que envió el 17 de diciembre de 2012, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir las recomendaciones de la CIDH. Con respecto a la segunda recomendación de la Comisión, el Estado reiteró que es parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y está plenamente comprometido a cumplir sus obligaciones con base en dicho instrumento de suministrar notificación y acceso consular en los casos de ciudadanos extranjeros detenidos.

1199. El 28 de septiembre de 2015, el 11 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El Estado no presentó información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1200. Los peticionarios reiteraron el 27 de noviembre de 2016 que el Sr. Fierro permanece en espera de la ejecución pena de muerte, sin que el Estado haya adoptado ninguna acción para cumplir con las recomendaciones de la CIDH. En ese sentido, si bien indicaron que no se habría agendado su ejecución, sin embargo el Estado no ha adelantado gestiones para su liberación.

1201. Por su parte, el Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin indicar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1202. El 24 de octubre de 2017, los peticionarios remitieron información reiterando lo indicado con anterioridad, señalando que no ha habido avances en el cumplimiento de las recomendaciones señaladas por la comisión.

1203. Por lo tanto, la Comisión reitera que su segunda recomendación se ha cumplido parcialmente. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.

**Caso 12.240, Informe No. 100/03, Douglas Christopher Thomas (Estados Unidos)**

1204. En el Informe No. 100/03, del 29 de diciembre de 2003, la Comisión concluyó que el Estado había actuado en contravención de una norma de *jus cogens* internacional reflejada en el artículo I de la Declaración Americana al sentenciar a Douglas Christopher Thomas a la pena de muerte por delitos que había cometido cuando tenía 17 años, y al ejecutarlo en conformidad con esa sentencia.

1205. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Otorgue a los familiares más cercanos de Douglas Christopher Thomas una reparación efectiva que incluya una indemnización.
2. Examine sus leyes, procedimientos y prácticas para garantizar que no se imponga la pena capital a quienes en momentos de cometer el delito tengan menos de 18 años de edad.

1206. El Estado presentó su informe a la Comisión el 3 de febrero de 2015. En su reporte, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1207. El peticionario indicó el 16 de diciembre de 2014 que no se ha reparado a los familiares de la víctima. En relación con la segunda recomendación, el peticionario informó que el Estado no ha realizado una revisión de las leyes, procedimientos y prácticas relacionadas con la ejecución de menores.

1208. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1209. El Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin indicar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1210. Por lo tanto, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 100/03 sigue siendo parcial. Así pues, la CIDH seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.

**Caso 12.412, Informe No. 101/03, Napoleon Beazley (Estados Unidos)**

1211. En el Informe No. 101/03, del 29 de diciembre de 2003, la Comisión concluyó que el Estado había actuado en contravención de una norma internacional de *jus cogens* reflejada en el artículo I de la Declaración Americana, al sentenciar a Napoleón Beazley a la pena de muerte por un delito que cometió cuando tenía 17 años de edad, y al ejecutarlo en virtud de esa sentencia.

1212. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Otorgue a los familiares cercanos de Napoleón Beazley una reparación efectiva, que incluya una indemnización.
2. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que no se imponga la pena capital a personas que, en momentos de cometer el delito, tengan menos de 18 años de edad.

1213. Los peticionarios informaron a la CIDH que el 17 de diciembre de 2014 los Estados Unidos había dado cumplimiento a la segunda recomendación desde 2005 mediante la prohibición de ejecutar a niños transgresores como el Sr. Beazley. Sin embargo, los EEUU no ha hecho esfuerzos para cumplir la primera recomendación de brindar una reparación efectiva, incluyendo indemnización, por los daños causados a la familia del Sr. Beazley mediante su condena a muerte y su ejecución.

1214. El Estado presentó su informe a la Comisión el 3 de febrero de 2015. En su reporte, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin indicar los esfuerzos realizados para indemnizar a la familia del Sr. Beazly, único punto pendiente para el cumplimiento total de las recomendaciones en este caso.

1215. El 28 de septiembre de 2015, el 11 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información actualizada sobre el cumplimiento.

1216. El Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin indicar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1217. Por lo tanto, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 101/03 sigue siendo parcial. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando el punto pendiente de cumplimiento.

#### **Caso 12.430, Informe No. 1/05 Roberto Moreno Ramos, (Estados Unidos)**

1218. En el Informe No. 1/05, fechado el 28 de enero de 2005, la CIDH concluyó que el Estado: a) era responsable de las violaciones a los artículos II, XVIII y XXVI de la Declaración Americana en relación con actuaciones penales seguidas contra el señor Moreno Ramos; y b) que si procedía a la ejecución del señor Moreno Ramos en virtud de las actuaciones penales de que se trata en el Caso, cometería una grave e irreparable violación del derecho fundamental a la vida previsto en el artículo I de la Declaración Americana.

1219. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Proporcione al señor Moreno Ramos un recurso efectivo, que comprenda una nueva audiencia de determinación de la pena conforme con los principios de igualdad y debido proceso y los mecanismos de protección de un juicio justo preceptuados por los artículos II, XVIII y XXVI de la Declaración Americana, incluido el derecho a un patrocinio letrado competente.
2. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas como garantía de que a las personas de nacionalidad extranjera arrestadas o remitidas a prisión o en custodia hasta la realización del juicio, o detenidas de cualquier otra manera en los Estados Unidos, se les dé a conocer sin demora su derecho a obtener asistencia consular y que, con su concurrencia, se informe sin demora al consulado pertinente sobre las circunstancias de la persona en cuestión, en observancia de las normas del debido proceso y los mecanismos de protección del juicio justo previstos en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana.
3. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas para garantizar que a los acusados en procesos que puedan dar lugar a la aplicación de la pena capital no se les prive del derecho de interponer un recurso efectivo ante una corte o tribunal competente para cuestionar la capacidad de su patrocinante letrado, por el hecho de que la cuestión no haya sido planteada en una etapa anterior del proceso seguido contra ellos.

1220. Por su parte, el Estado presentó su informe a la Comisión el 3 de febrero de 2015. En su reporte, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. Con respecto a la segunda recomendación de la Comisión, el Estado reitera que es parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y está plenamente comprometido a cumplir sus obligaciones con base en dicho instrumento de suministrar notificación y acceso consular en los casos de ciudadanos extranjeros detenidos.

1221. El 28 de septiembre de 2015, el 11 de octubre de 2016 y el 4 de octubre de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1222. El Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin indicar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1223. El 24 de octubre de 2017, el Estado reiteró sus escritos anteriores.

1224. Por lo tanto, la Comisión reitera que sus recomendaciones se han cumplido parcialmente. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.

**Caso 12.439, Informe No. 25/05, Toronto Markkey Patterson (Estados Unidos)**

1225. En el Informe No. 25/05, fechado el 7 de marzo de 2005, la Comisión concluyó que el Estado había actuado en contravención de una norma internacional de *jus cogens* reflejada en el artículo I de la Declaración Americana al sentenciar a Toronto Markkey Patterson a muerte por delitos que había cometido cuando tenía 17 años de edad y por ejecutarlo de acuerdo con esa sentencia.

1226. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Otorgue a los familiares directos de Toronto Markkey Patterson una reparación efectiva que incluya una indemnización.
2. Examine sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que no se imponga la pena capital a personas que en el momento de cometer el delito sean menores de 18 años.

1227. Por su parte, el Estado presentó su informe a la Comisión el 3 de febrero de 2015. En su reporte, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1228. El 28 de septiembre de 2015, el 11 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1229. El Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin indicar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1230. Por lo tanto, la Comisión reitera que sus recomendaciones se han cumplido parcialmente. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.

**Caso 12.421, Informe No. 91/05, Javier Suárez Medina (Estados Unidos)**

1231. En el Informe No. 91/05, emitido el 24 de octubre de 2005, la Comisión concluyó que el Estado era responsable: a) por las violaciones de los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana en el juicio, condena y sentencia a muerte del señor Javier Suárez Medina, al permitir la presentación de pruebas de un delito no adjudicado durante la audiencia de la sentencia capital del señor Suárez Medina y al no informar al señor Suárez Medina sobre su derecho a notificación y asistencia consular; y b) por las violaciones de los artículos I, XXIV y XXVI de la Declaración Americana, al fijar la fecha de ejecución del señor Suárez Medina en catorce ocasiones de conformidad con una sentencia de muerte que fue impuesta en contravención de los derechos del señor Suárez Medina a un debido proceso y a un juicio justo de conformidad con los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana, y por ejecutar al señor Suárez de acuerdo a esa sentencia el 14 de agosto de 2002, a pesar de la existencia de medidas cautelares otorgadas en su favor por esta Comisión.

1232. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Que proporcione un recurso efectivo al pariente más próximo del señor Medina, incluida una indemnización.
2. Que revise sus leyes, procedimientos y prácticas de modo que los acusados de delitos capitales sean juzgados y, si son declarados culpables, condenados en observancia de los derechos consagrados en la Declaración Americana, incluidos los artículos I, XVIII y XXVI de la misma y, en especial, que se prohíba la introducción de pruebas de delitos no juzgados durante la fase de determinación de la pena de juicios que puedan dar lugar a la imposición de la pena capital.
3. Que revise sus leyes, procedimientos y prácticas de modo que a los nacionales de países extranjeros que sean arrestados o remitidos a prisión, puestos en custodia a la espera del juicio, o detenidos de cualquier otro modo en los Estados Unidos, se les dé a conocer sin demora su derecho a la asistencia consular y que, con o sin su concurso, se ponga sin demora en conocimiento del personal consular pertinente las circunstancias de esa persona, en observancia de los mecanismos de protección del debido proceso y el juicio justo previstos en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana.
4. Que revise sus leyes, procedimientos y prácticas de modo que se apliquen las solicitudes de medidas cautelares dispuestas por la Comisión, en forma de preservar la integridad de las funciones y del mandato de la Comisión y prevenir daños irreparables a las personas.

1233. Los peticionarios presentaron información pertinente al cumplimiento de las recomendaciones en este caso por última vez el 22 de noviembre de 2012. En sus observaciones, indicaron que Estados Unidos ha cumplido parcialmente las recomendaciones de la Comisión y que ha ignorado repetidamente dos de las cuatro recomendaciones contenidas en el informe final de la Comisión. Concretamente, Estados Unidos no ha asegurado que no se introduzcan delitos no adjudicados como pruebas en procesos que puedan dar lugar a la imposición de la pena capital, y no ha dispuesto reparaciones para la familia del señor Suárez Medina. Asimismo, aunque Estados Unidos fortaleció recientemente el lenguaje en sus cartas a las autoridades estatales sobre la emisión de medidas cautelares, no ha adoptado suficientes acciones para asegurar que se implementen tales medidas. Por ejemplo, Estados Unidos podría impartir talleres de capacitación sobre la Comisión Interamericana a funcionarios estatales y locales en los que se explique el funcionamiento de la Comisión y se haga hincapié en la importancia de cumplir con las medidas cautelares de la Comisión. Estados Unidos también podría apoyar las solicitudes de los peticionarios de suspender las ejecuciones para permitir que la Comisión cumpla su mandato. Como mínimo, Estados Unidos podría adoptar la postura en los trámites judiciales de que las medidas cautelares de Comisión merecen deferencia y “consideración respetuosa”. Según su punto de vista, esto les daría mayor peso a los esfuerzos de los peticionarios para convencer a los tribunales estatales y a quienes toman decisiones políticas de que la

labor de la Comisión es de importancia crítica para evaluar la justicia de las sentencias de pena de muerte y el cumplimiento por parte de los estados de las normas fundamentales de derechos humanos. Estados Unidos ha adoptado medidas para mejorar el cumplimiento del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y ha presentado observaciones *amicus curiae* en apoyo de ciudadanos mexicanos que solicitan la revisión y reconsideración de sus condenas y sentencias de conformidad con la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso *Avena y otros ciudadanos mexicanos*. No obstante, Estados Unidos no ha promulgado legislación para implementar la sentencia en el caso *Avena*, y dos ciudadanos mexicanos han sido ejecutados sin recibir la revisión judicial ordenada por la decisión de la CIJ en el caso *Avena*.

1234. Por su parte, el Estado presentó su informe a la Comisión el 3 de febrero de 2015. En su reporte, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores en relación con dicho informe de fondo, en especial la que envió el 17 de diciembre de 2012, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir las recomendaciones de la CIDH. El Estado también informó que el señor Medina fue ejecutado en 2002.

1235. Con respecto a la tercera recomendación de la Comisión, el Estado reiteró que es parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y está plenamente comprometido a cumplir sus obligaciones con base en dicho instrumento de suministrar notificación y acceso consular en los casos de ciudadanos extranjeros detenidos.

1236. El 1 de febrero de 2016, los peticionarios informaron que el Estado ha ignorado dos de las cuatro recomendaciones de la Comisión. Específicamente indicaron que el Estado no ha cumplido con la recomendación de prevenir introducción de pruebas de delitos no juzgados durante la fase de determinación de la pena en juicios que puedan dar lugar a la imposición de la pena capital. Asimismo, los peticionarios informaron que el Estado no ha cumplido con el otorgamiento de reparaciones a la familia de Suárez. Los peticionarios solicitaron a la CIDH una capacitación para funcionarios estatales sobre medidas cautelares y Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

1237. El 28 de septiembre de 2015, el 11 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1238. El Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin indicar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1239. Por lo tanto, la Comisión reitera que sus recomendaciones se han cumplido parcialmente. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.

#### **Caso 12.534, Informe No. 63/08, Andrea Mortlock (Estados Unidos)**

1240. En el Informe N° 63/08 de 25 de julio de 2008, la Comisión Interamericana concluye que Estados Unidos es responsable de la violación del artículo XXVI de la Declaración Americana en detrimento de Andrea Mortlock, ciudadana de Jamaica que se encontraba amenazada de deportación de Estados Unidos a su país, como resultado de lo cual le sería negado un medicamento fundamental para su tratamiento del VIH/SIDA.

1241. Como consecuencia de esta conclusión, la Comisión Interamericana recomendó a Estados Unidos que se “abstuviera de expulsar a la señora Andrea Mortlock de su jurisdicción en virtud de la orden de deportación en cuestión en este caso”.

1242. Los peticionarios presentaron su última comunicación a la Comisión el 19 de diciembre de 2014. En dicha comunicación, informan nuevamente que no saben de plan alguno por parte de Estados Unidos para retirar a la Sra. Mortlock de su jurisdicción en cumplimiento de la orden de deportación expedida

en este caso. Subrayan, empero, que siguen sumamente preocupados por la vida de la Sra. Mortlock si las autoridades de inmigración estadounidenses deciden no cumplir con la recomendación de la CIDH e informarán a la Comisión sobre cualquier cambio.

1243. Por otra parte, el Estado entregó su reporte a la Comisión el 2 de febrero de 2015. En ella, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este Informe de Fondo, sin citar ningún esfuerzo emprendido este año a fin de cumplir con la recomendación de la CIDH.

1244. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 4 de octubre de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1245. El Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin indicar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1246. El 24 de octubre de 2017, el Estado reiteró sus escritos anteriores.

1247. Por lo tanto, la Comisión reitera que se ha cumplido su recomendación parcialmente hasta este momento. Sin embargo, a la luz de la postura adoptada previamente por el Estado con respecto a la recomendación contenida en el informe de fondo, la Comisión Interamericana no puede emitir una determinación sobre el cumplimiento en tanto no reciba información concluyente. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando el cumplimiento de esta recomendación.

**Caso 12.644, Informe No. 90/09, José Ernesto Medellín, Rubén Ramírez Cárdenas y Humberto Leal García (Estados Unidos)**

1248. En su Informe No. 90/09 aprobado el 7 de agosto de 2009, la CIDH concluyó que los Estados Unidos es responsable por la violación de los derechos de José Ernesto Medellín, Rubén Ramírez Cárdenas y Humberto Leal García protegidos en los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana, en relación de los procedimientos criminales que terminaron con la imposición de la pena de muerte contra ellos. Respecto al señor Medellín, que fue ejecutado el 5 de agosto de 2008, cuando era beneficiario de medidas cautelares, la Comisión Interamericana concluyó adicionalmente que “Estados Unidos no ha actuado de conformidad con sus obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos como Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos”. En su Informe 90/09 la CIDH también concluyó que si el Estado ejecutaba a los señores Medellín, Ramírez Cárdenas y Leal García, cometería una violación irreparable de su derecho a la vida, garantizado en el artículo I de la Declaración Americana.

1249. En consecuencia, la CIDH realizó las siguientes recomendaciones al Estado:

1. Deje sin efecto las condenas a muerte impuestas a los señores Ramírez Cárdenas y Leal García, y otorgue a las víctimas un recurso efectivo, que incluya un nuevo juicio acorde con las protecciones de igualdad, debido proceso y juicio justo previstas en los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana, incluido el derecho de representación legal competente.
2. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que a los ciudadanos extranjeros arrestados, encarcelados o puestos en custodia en espera de juicio, o detenidos de alguna otra manera por los Estados Unidos se les informe sin demora sobre su derecho de asistencia consular y que, con su aprobación, se informe sin demora al consulado correspondiente sobre la situación de dichos ciudadanos extranjeros, de conformidad con las protecciones de debido proceso y juicio justo consagradas en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana.

3. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que las personas acusadas de delitos punibles con la pena capital sean juzgadas y, de ser condenadas, sean sentenciadas de acuerdo con los derechos establecidos en la Declaración Americana, incluidos sus artículos I, XVIII y XXVI y, en particular, mediante la prohibición de que se introduzcan pruebas de delitos no juzgados durante la etapa de determinación de la sentencia en juicios por delitos punibles con la pena capital.
4. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que las personas acusadas de delitos punibles con la pena capital puedan solicitar amnistía, indulto o conmutación de sentencia con garantías mínimas de justicia, incluido el derecho a una audiencia imparcial.
5. Otorgue reparaciones a la familia del señor Medellín como consecuencia de las violaciones establecidas en el presente informe.

1250. El Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado también confirmó que el señor Medellín fue ejecutado el 5 de agosto de 2008 y que el señor Leal García fue ejecutado el 7 de julio de 2011. El Estado subrayó asimismo que es parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y está plenamente comprometido a cumplir sus obligaciones con base en dicho instrumento de suministrar notificación y acceso consular en los casos de ciudadanos extranjeros detenidos, y reiteró su solicitud de que la Comisión analice su comunicación del 23 de junio de 2010, en la que se detallan los esfuerzos continuos de Estados Unidos para mejorar el cumplimiento de las disposiciones de notificación y acceso consular de esta Convención.

1251. Los peticionarios presentaron su última comunicación a la Comisión el 22 de noviembre de 2012. Los peticionarios destacan que Estados Unidos ejecutó a dos de las víctimas en violación del informe de fondo y de las recomendaciones de la Comisión, así como de las reiteradas medidas cautelares. Aunque los peticionarios reconocen y aprecian los esfuerzos del poder ejecutivo del Gobierno de Estados Unidos para implementar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso *Avena*, el hecho es que hasta ahora el Congreso no ha promulgado legislación que daría efecto a la sentencia de la CIJ. El peticionario Rubén Ramírez Cárdenas sigue vivo, pero podría ser ejecutado en 2013. No ha recibido revisión o reconsideración de su condena y sentencia de conformidad con el mandato de la CIJ en el caso *Avena*. Además, Estados Unidos ha ignorado completamente tres de las cuatro recomendaciones contenidas en el informe final de la Comisión. Concretamente, Estados Unidos no ha dejado sin efecto las sentencias de muerte de todos los peticionarios, no ha asegurado que no se introduzcan delitos no adjudicados como pruebas en procesos que puedan dar lugar a la imposición de la pena capital y no ha revisado sus procedimientos de clemencia. Aunque Estados Unidos sin duda señalaría que los estados individuales controlan las normas y procedimientos relacionados con la clemencia ejecutiva de los prisioneros estatales, Estados Unidos no ha adoptado medidas para alentar dicha revisión por parte de los estados. Por último, Estados Unidos no ha dispuesto reparaciones para la familia del señor Medellín.

1252. El 28 de septiembre de 2015, el 11 de octubre de 2016 y el 4 de octubre de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento.

1253. El 28 y 29 de agosto de 2017, los peticionarios informaron que el 8 de noviembre de 2017 se había establecido como fecha de ejecución para el señor Rubén Cárdenas Ramírez. La Comisión trasladó dicho escrito al Estado para que presentara sus observaciones. En dicha comunicación, los peticionarios reiteraron la solicitud de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal del señor Cárdenas. La solicitud de medida cautelares alega que Estados Unidos no ha cumplido con las recomendaciones del informe de fondo y admisibilidad que la Comisión publicó en agosto de 2009, en el que declaró a Estados Unidos responsable por violaciones en perjuicio de Rubén Ramírez Cárdenas, ciudadano mexicano, con respecto al proceso penal que derivó en la imposición de la pena de muerte en su contra.

1254. El 18 de octubre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares en favor de Rubén Ramírez Cárdenas, en Estados Unidos<sup>134</sup>. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Estados Unidos que adoptara las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del beneficiario; se abstuviera de aplicar la pena de muerte contra el Sr. Rubén Ramírez Cárdenas; asegurara que las condiciones de detención se ajustaran a los estándares internacionales aplicables; proporcionara atención médica adecuada a Rubén Ramírez Cárdenas ante su situación de salud; y concertara las medidas a adoptar con el beneficiario y sus representantes.

1255. El 24 de octubre de 2017, el Estado presentó información a la Comisión reiterando sus escritos anteriores. El Estado no informó a la Comisión sobre la ejecución de la víctima de este caso.

1256. La Comisión tomó conocimiento a través de los medios de comunicación de que el señor Rubén Ramírez Cardenas fue ejecutado a través de la inyección letal en la fecha indicada.

1257. La Comisión Interamericana deplora la falta de cumplimiento de Estados Unidos con las recomendaciones emitidas por la CIDH en un informe de fondo. El hecho que Estados Unidos no haya preservado la vida del señor Rubén Ramírez Cárdenas estando pendiente una solicitud de la CIDH de revisión de su juicio y condena, contraviene sus obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Declaración Americana en vigor desde que Estados Unidos se incorporó a las OEA en 1951. La falta de cumplimiento con las recomendaciones de la Comisión resultó en un grave e irreparable daño al derecho más fundamental del señor Ramirez Cardenas, el derecho a la vida.

1258. La Comisión Interamericana ha abordado durante décadas la cuestión de la pena de muerte como un desafío crucial en materia de derechos humanos. A pesar de que la mayoría de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos ha abolido la pena capital, una minoría considerable la mantiene. Al respecto, la Comisión destaca que Estados Unidos es actualmente el único país del hemisferio occidental en aplicar ejecuciones a la pena de muerte.

1259. La Comisión reitera la recomendación formulada en su informe “La pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: de restricciones a abolición” publicado en 2012, de que los Estados apliquen una moratoria a las ejecuciones como paso hacia la gradual supresión de este tipo de pena<sup>135</sup>.

1260. La Comisión reitera la falta de cumplimiento del Estado de las recomendaciones de fondo formuladas por la Comisión en este caso, y la completa falta de implementación de las medidas cautelares ordenadas.

1261. Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado incumplió la recomendación formulada por la Comisión con respecto a los señores Medellín, Leal García y Ramírez Cárdenas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.

**Caso 12.561 y 12.562, Informe No. 81/10, Wayne Smith, Hugo Armendáriz y otros (Estados Unidos)**

1262. En su Informe No. 81/10, aprobado el 12 de julio de 2010, la CIDH concluyó que en virtud de la deportación de Wayne Smith y Hugo Armendáriz de Estados Unidos, dicho Estado es responsable por la violación de los derechos de los señores Wayne Smith y Hugo Armendáriz consagrados en los artículos V, VI, VII, XVIII, y XXVI de la Declaración Americana. La CIDH destacó además que el derecho internacional indudablemente reconoce que un Estado Miembro debe ofrecer a los residentes no ciudadanos la

<sup>134</sup> Ver, Resolución de la CIDH No. 41/17, MC 736/17- Ruben Ramirez Cardenas, Estados Unidos. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/41-17MC736-17US.pdf>

<sup>135</sup> IACHR, The death penalty in the Inter-American Human Rights System: from restrictions to abolition. Available at: <http://www.oas.org/en/iachr/docs/pdf/deathpenalty.pdf>

oportunidad de presentar una defensa contra una orden de deportación con base en consideraciones humanitarias y de otro orden, tales como los derechos protegidos bajo los Artículos V, VI, y VII de la Declaración Americana. Los órganos administrativos o judiciales encargados de revisar las órdenes de deportación en cada Estado Miembro, deben tener la posibilidad de considerar en forma significativa la defensa de un residente no ciudadano; examinarla y sopesarla con respecto al derecho de un Estado soberano de hacer cumplir una política de inmigración razonable y objetiva; y ofrecer reparación efectiva por la deportación si hubiere méritos. En el Caso 12.562 Estados Unidos no cumplió con estas normas internacionales.

1263. En consecuencia, la CIDH realizó las siguientes recomendaciones al Estado:

1. Permita a Wayne Smith y Hugo Armendáriz regresar a los Estados Unidos a expensas del Estado.
2. Reabra los procedimientos de inmigración respectivos, de los señores Wayne Smith y Hugo Armendáriz y les permita presentar sus defensas por razones humanitarias con respecto a su expulsión de los Estados Unidos.
3. Permita que un juez de inmigración competente e independiente aplique una prueba de equilibrio a los casos individuales de Wayne Smith y Hugo Armendáriz, que considere debidamente sus defensas por razones humanitarias y pueda proveer una reparación significativa.
4. Implemente leyes para asegurar que los derechos a la vida familiar de los residentes no ciudadanos consagrados bajo los artículos V, VI, y VII de la Declaración Americana, están debidamente protegidos y gozan del debido proceso en una base de caso por caso en los procedimientos de inmigración que tratan sobre expulsión.

1264. Los peticionarios presentaron información pertinente al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de fondo en relación con este caso el 7 de noviembre de 2013 y el 14 de diciembre de 2012. En sus comunicaciones, destacaron que el Estado no ha cumplido las recomendaciones contenidas en el informe de fondo y subrayaron la importancia de la adhesión de buena fe por parte del Estado de sus obligaciones internacionales respetando el principio de *pacta sunt servanda*. En cuanto a las recomendaciones 1, 2 y 3, los peticionarios indican que presentaron solicitudes de libertad condicional humanitaria a nombre de los señores Smith y Armendariz, que fueron denegadas por las autoridades de inmigración de Estados Unidos sin explicación. El señor Smith falleció en Trinidad el 15 de julio de 2011, sin que se le hubiera otorgado permiso para volver a Estados Unidos, con lo que permanente e irreversiblemente se incumplieron en este sentido las recomendaciones Nos. 1, 2 y 3. El Estado tampoco ha adoptado medidas para disponer restitución significativa a la familia del señor Smith. Actualmente, el señor Armendariz permanece todavía en México, lejos de sus hermanos y sus padres de edad avanzada, que se encuentran en Estados Unidos. El Estado no le ha permitido volver a ingresar a Estados Unidos libre de cargos, no ha reabierto sus procedimientos de inmigración ni ha permitido que un juez de inmigración competente e independiente aplique a su caso una prueba de ponderación con la consideración debida de factores humanitarios, todo ello a pesar de repetidas solicitudes.

1265. En cuanto a la recomendación 4, los peticionarios indican que su cumplimiento está pendiente, pues Estados Unidos no ha emprendido reformas a la legislación aplicable ni cambios notables en su implementación. Informan que la legislación de Estados Unidos todavía establece que quienes son declarados culpables de un delito agravado —un término amplio que comprende incluso delitos menores— están sujetos a deportación obligatoria sin discreción judicial para considerar defensas humanitarias o de otro tipo legítimo contra la deportación, consideradas caso por caso y sin tomar en cuenta los intereses superiores de los menores de edad afectados. Los peticionarios observan que las propuestas de reforma legislativa integral en curso ofrecen al Estado una oportunidad histórica para adoptar las medidas legislativas necesarias para cumplir con las recomendaciones, y para alinear finalmente sus leyes de inmigración con sus obligaciones internacionales implementando la recomendación 4 contenida en el Informe No. 81/10, así

como las recomendaciones similares expedidas en otros casos relativos al sistema de inmigración estadounidense.

1266. Los peticionarios informaron a la CIDH el 31 de diciembre de 2014 que el Estado no ha adoptado medidas para cumplir las recomendaciones 1, 2 y 3, y reiteraron que los Estados Unidos no han tomado ninguna medida para brindar a la familia del Sr. Smith una compensación con posterioridad a su muerte en julio de 11. En relación con el Sr. Amendariz, los peticionarios reiteraron que él permanece en México y que no se le ha permitido su reingreso a los Estados Unidos para reunirse con su familia. En ese sentido, los peticionarios mencionaron que sus procedimientos de inmigración no se habían reabierto. En relación con la recomendación 4, los peticionarios informaron que a pesar de las medidas administrativas anunciadas por el Presidente Obama el 20 de noviembre de 2014, las recomendaciones de la Comisión no han sido cumplidas en su integridad, y solicitaron a la Comisión urgir al Poder Ejecutivo a adoptar determinadas medidas para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado.

1267. Por su parte, el Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado simplemente reiteró sus comunicaciones anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado también reiteró su posición el 26 de marzo de 2011 durante la reunión de trabajo relativa a este caso, y siguió rechazando la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de fondo.

1268. El 26 de octubre de 2015, los peticionarios informaron que el Estado no ha cumplido con las recomendaciones formuladas por la Comisión. En relación a las primeras 3 recomendaciones, los peticionarios informaron que el Estado no ha adoptado acciones para su implementación. Asimismo, reiteraron que Hugo Armendariz continua en México, separado de sus hermanos y padres que aún viven en los Estados Unidos, porque no se le ha permitido el reingreso a territorio estadounidense y no se ha revisado su proceso migratorio. En relación con la cuarta recomendación, los peticionarios informaron que si bien se habían aprobado dos cambios administrativos que beneficiaban a dos grupos específicos o categorías de migrantes, la orden ejecutiva que tenía el potencial de avanzar en el cumplimiento de esta recomendación, ha sido bloqueada por las cortes distritales sobre la base de una demanda planteada por Texas y otros 25 Estados.

1269. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento.

1270. El 16 de noviembre de 2016 y el 27 de septiembre de 2017, los peticionarios reiteraron la información suministrada el 26 de octubre de 2015, y agregaron en relación a la cuarta recomendación, que en noviembre de 2015, el quinto circuito mantuvo la decisión de la Corte Distrital de bloquear la expansión del DACA [por sus siglas en inglés *Deferred Action for Childhood Arrivals*] y la creación del DAPA [por sus siglas en inglés *Deferred Action for Unauthorized Immigrant Parents*]. El 23 de junio de 2016, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la revisión de este tema confirmando la decisión de las cortes inferiores. Por lo cual, los peticionarios consideran que Estados Unidos no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión.

1271. El 6 de octubre de 2017, los peticionarios presentaron notas de prensa sobre las nuevas medidas de Estados Unidos en cuanto a la seguridad fronteriza y a los casos de inmigración.

1272. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha incumplido las recomendaciones formuladas. La Comisión exhorta a Estados Unidos a cumplir cabalmente y sin demora sus recomendaciones con respecto al señor Armendariz, así como a disponer reparaciones plenas para los familiares del señor Smith. La Comisión seguirá supervisando las recomendaciones de este caso.

**Caso 12.626, Informe No. 80/11, Jessica Lenahan (Gonzales) (Estados Unidos)**

1273. En su informe No. 80/11, aprobado el 21 de julio de 2011, la CIDH concluyó que el Estado no actuaba con debida diligencia para proteger a Jessica Lenahan y Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales de la violencia doméstica, lo cual incumplía la obligación del Estado de no discriminar y de proteger la igualdad ante la ley de conformidad con el artículo II de la Declaración Americana. El Estado también falló en su obligación de adoptar medidas razonables para proteger la vida de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales en contravención de su derecho a la vida, de conformidad con el artículo I de la Declaración Americana, en relación con su derecho a la protección especial como menores de acuerdo con el artículo VII de la Declaración Americana. Por último, la Comisión concluye que el Estado violó el derecho a la protección judicial de Jessica Lenahan y sus familiares, conforme al artículo XVIII de la Declaración Americana.

1274. Por consiguiente, la CIDH formuló las siguientes recomendaciones al Estado:

1. Emprenda una investigación seria, imparcial y exhaustiva con el objetivo de determinar la causa, hora y lugar de las muertes de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales, e informar debidamente a sus familiares del curso de la investigación.
2. Realice una investigación seria, imparcial y exhaustiva de las fallas sistémicas que ocurrieron en relación con la ejecución de la orden de protección de Jessica Lenahan como garantía de no repetición, incluyendo una investigación para determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos por violar la legislación del estado y/o federal, y sancionar a los responsables.
3. Ofrezca una plena reparación a Jessica Lenahan y a sus familiares, considerando su perspectiva y necesidades específicas.
4. Adopte una legislación con medidas integrales a nivel federal y de los estados, o reformar la legislación vigente, para reforzar el carácter obligatorio de las órdenes de protección y otras medidas de seguridad para proteger a las mujeres de actos de violencia inminentes y crear mecanismos de implementación efectivos. Estas medidas deben ir acompañadas de suficientes recursos destinados a fomentar su implementación, de una reglamentación adecuada para garantizar su aplicación, de programas de capacitación para los funcionarios policiales y judiciales involucrados, y del diseño de protocolos y directivas modelo que los departamentos de policía de todo el país puedan usar como guía.
5. Adopte una legislación con medidas integrales a nivel federal y de los estados, o reformar la legislación vigente, para efectos de incluir medidas de protección de las niñas y los niños en el contexto de la violencia doméstica. Estas medidas deben ir acompañadas de suficientes recursos destinados a fomentar su implementación; de una reglamentación adecuada para garantizar su implementación; de programas de capacitación para los funcionarios policiales y judiciales involucrados; y del diseño de protocolos y directivas modelo que los departamentos de policía de todo el país puedan usar como guía.
6. Continúe adoptando políticas públicas y programas institucionales encaminados a reestructurar los estereotipos de las víctimas de la violencia doméstica, y de promover la erradicación de los patrones socioculturales discriminatorios que impiden que las mujeres y las niñas y los niños cuenten con una plena protección frente a actos de violencia doméstica, incluyendo programas para capacitar a los funcionarios públicos de todas las ramas de la administración de justicia y de la policía, y programas comprensivos de prevención.
7. Diseñe protocolos, a nivel federal y estatal, en los que se especifiquen los componentes adecuados de la investigación que debe realizar la policía en respuesta a un informe de niñas o niños desaparecidos en el contexto de una denuncia de violación de una orden de protección.

1275. Los peticionarios presentaron información a la Comisión el 12 de noviembre de 2013; anteriormente habían presentado observaciones pertinentes al cumplimiento el 23 de octubre y el 7 de febrero de 2013. Subrayan en sus comunicaciones que a más de dos años de la expedición del Informe de Fondo, el Estado ha adoptado pocas medidas concretas para implementar las recomendaciones formuladas por la Comisión. Reiteraron además su preocupación dado que el Estado no mantiene comunicación adecuada con los peticionarios ni les suministra respuestas regulares y significativas a sus solicitudes y sugerencias relacionadas con el cumplimiento. Resaltan como prioridades inmediatas en el cumplimiento la extensión de reparaciones plenas a Jessica Lenahan y la investigación adecuada y eficaz de la muerte de sus hijas en Colorado, la investigación y sanción de las fallas policiales en este caso y la necesidad de que el Departamento de Justicia adopte orientación relativa a la tendenciosidad de género en las actividades policiales y organice una mesa redonda de discusión sobre los derechos humanos y la violencia doméstica.

1276. El 30 de octubre de 2013, los peticionarios participaron en una reunión de trabajo con el Estado en relación con caso durante el 149º período de sesiones de la CIDH, en la cual estuvo presente Jessica Lenahan. En esta reunión, los peticionarios subrayaron la necesidad de que Estados Unidos disponga de parámetros de referencia concretos para facilitar la implementación de la decisión en el caso Lenahan a través de iniciativas de política y educación a nivel nacional así como la importancia de que el Estado responda por escrito a la correspondencia que le envían los peticionarios. Los representantes del Estado presentes no pudieron suministrar información nueva ni adquirir compromiso alguno, e indicaron que no pudieron prepararse adecuadamente debido a la paralización de los servicios gubernamentales ocurrida en las semanas anteriores a la reunión de trabajo.

1277. En cuanto a la recomendación 2, los peticionarios informaron en sus comunicaciones que la Oficina sobre Violencia contra las Mujeres se ha comunicado con el Departamento de Policía de Castle Rock para ofrecer apoyo y asistencia técnica para cambios de política y capacitación. Ellos creen que se impartió este tipo de capacitación en la primavera de 2013 para las fuerzas policiales en el distrito judicial que cubre Castle Rock, y desean que se les informe sobre los siguientes pasos. Los peticionarios también conversaron con funcionarios locales en Colorado sobre la posibilidad de una investigación forense de la muerte de las hijas de Jessica Lenahan y desean recibir actualizaciones al respecto. En cuanto a la recomendación 3, solicitan que el Estado explique detalladamente por qué no hay posibilidad de pagar reparaciones en los ámbitos federal, estatal ni local.

1278. Con respecto a la recomendación 6, los peticionarios también informaron que el 20 de junio de 2013, la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad, la Oficina de Víctimas y Delincuencia, y la Oficina sobre Violencia contra las Mujeres del Departamento de Justicia expidieron una declaración conjunta sobre discriminación de género en las actividades policiales. En esta declaración se anunció que la prevención de la discriminación basada en género por parte de las fuerzas policiales es una alta prioridad de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia debido al papel negativo de la tendenciosidad de género en la respuesta de la policía a los delitos contra las mujeres. Por lo tanto, consideraron que son esenciales varios pasos adicionales para convertir esta declaración en una herramienta significativa de cambio, entre ellos, que el Departamento de Justicia informe a los defensores y otros sobre su jurisdicción para investigar quejas y sobre sus protocolos para la conducción de investigaciones sobre las actividades policiales con tendenciosidad de género; y que el Departamento de Justicia debe completar las actualizaciones de su información públicamente disponible para reflejar que las investigaciones de violencia doméstica y sexual y la falta de aplicación de las leyes referentes a estos temas recaen en la jurisdicción del Departamento de Justicia.

1279. La Comisión convocó una audiencia vinculada con el informe de fondo adoptado por la CIDH en el caso de Jessica Lenahan y el grado de implementación de sus recomendaciones el 27 de octubre de 2014. La audiencia tomó lugar en el marco del 153 período de sesiones de la CIDH y contó con la participación del Estado y los peticionarios en este asunto. Después de concluir, la Comisión indicó lo siguiente en un comunicado de prensa adoptado el 29 de diciembre de 2014: “Las partes presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en la decisión de méritos de la Comisión de 21 de julio de 2011. Los peticionarios, entre ellos Jessica Lenahan, brindaron información

relativa a los desafíos pendientes, incluyendo el fracaso continuo, en los 15 años desde los acontecimientos que llevaron a este caso, para investigar la muerte de Leslie, Katherine, y Rebecca Gonzales y conceder reparaciones, implementar reformas de políticas que aborden las causas fundamentales de la violencia contra las mujeres, y comprometerse de manera significativa con los peticionarios. La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Rashida Manjoo, también participó en la audiencia como parte de la delegación de peticionarios. En su declaración, hizo hincapié en que la violencia contra las mujeres es una violación generalizada de los derechos humanos enraizada en múltiples formas de intersección de discriminación, y debe ser abordada de manera holística. El Estado destacó los esfuerzos para abordar la violencia contra las mujeres en el ámbito federal, incluyendo la aprobación de la Ley de Violencia contra la Mujer. También reiteró las limitaciones en el sistema federal de Estados Unidos en relación con la provisión de reparaciones y la investigación de la muerte de las hijas de Jessica Lenahan.[...] La Comisión expresó su preocupación por el número de recomendaciones pendientes que no han sido aplicadas por el Estado, en particular la falta de investigación de las muertes de Leslie, Katherine, y Rebecca Gonzales. La CIDH recordó al Estado el Derecho de la señora Lenahan al esclarecimiento de lo sucedido a sus tres hijas, y la determinación de responsabilidad por sus muertes”.

1280. Por su parte, el Estado presentó su informe a la Comisión el 3 de febrero de 2015. En su reporte, el Estado simplemente reiteró su comunicación anterior, del 1º de noviembre de 2012, sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado también hizo referencia a su participación en varias reuniones de trabajo con el Relator de País de la CIDH y los peticionarios para discutir sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión.

1281. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1282. El Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin indicar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1283. Con base en estas consideraciones, la Comisión concluye que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. La Comisión exhorta a las partes a seguir dialogando sobre formas para implementar las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo No. 80/11. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

#### **Caso 12.776, Informe No. 81/11, Jeffrey Timothy Landrigan (Estados Unidos)**

1284. En Informe No. 81/11, la Comisión concluyó que los Estados Unidos era responsable de violar los artículos II, XVIII, y XXVI de la Declaración Americana respecto a Jeffrey Timothy Landrigan, y que su ejecución el 6 de octubre de 2010, constituía una violación grave e irreparable del derecho básico a la vida consagrado en el artículo I de la Declaración Americana.

1285. Por consiguiente, la CIDH formuló las siguientes recomendaciones al Estado:

1. Que otorgue reparaciones a la familia del señor Landrigan como consecuencia de las violaciones establecidas en este informe.
2. Que revise sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que las personas acusadas de delitos punibles con la pena capital sean juzgadas y, de ser condenadas, sean sentenciadas de acuerdo con los derechos establecidos en la Declaración Americana, incluidos sus artículos I, II, XVIII y XXVI.

1286. El Estado presentó su informe a la Comisión el 3 de febrero de 2015. En su reporte, el Estado simplemente reiteró su comunicación anterior, del 17 de diciembre de 2012, sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1287. Los peticionarios presentaron información el 29 de octubre de 2013 observando que Estados Unidos no había dispuesto reparaciones para la familia del señor Landrigan. También afirmaron que la ejecución de Timothy Landrigan se llevó a cabo utilizando una sustancia importada ilegalmente, según se determinó mediante acciones subsiguientes de agencias y decisiones de tribunales federales. Afirmaron que en nueve de las últimas trece ejecuciones por parte del estado de Arizona, a partir de la ejecución de Timothy Landrigan el 23 de octubre de 2013, los verdugos sujetaron a los prisioneros a un procedimiento quirúrgicamente doloroso e invasivo para colocar las vías intravenosas letales.

1288. El 13 de agosto de 2015, los peticionarios indicaron que el Estado no ha reparado a los familiares del Sr. Landrigan. Por lo tanto, los peticionarios solicitaron que la Comisión tome nota del incumplimiento por parte de Estados Unidos de la mayoría de sus recomendaciones contenidas en el Informe 81/11, y que la Comisión inste a Estados Unidos a disponer reparaciones para su familia por su ejecución ilegal.

1289. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1290. El 14 de diciembre de 2016, los peticionarios presentaron información reiterando lo expuesto con anterioridad.

1291. El Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin indicar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1292. Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado incumplió las recomendaciones formuladas por la Comisión. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

**Casos 11.575, 12.333 y 12.341, Informe No. 52/13, Clarence Allen Jackey y otros; Miguel Ángel Flores, James Wilson Chambers (Estados Unidos)**

1293. El informe No. 52/13 se refiere a los casos 11.575, 12.333 y 12.341, relacionado con la violación de los derechos reconocidos en los artículos I, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en perjuicio de Clarence Allen Lackey, David Leisure, Anthony Green, James Brown, Larry Eugene Moon, Edward Hartman, Robert Karl Hicks, Troy Albert Kunkle, Stephen Anthony Mobley, Jaime Elizalde Jr., Ángel Maturino Resendiz, Heliberto Chi Aceituno, David Powell, y Ronnie Gardner (Caso 11.575); Miguel Ángel Flores (Caso 12.333); y James Wilson Chambers (Caso 12.341) por parte de Estados Unidos. Las 16 presuntas víctimas fueron condenadas a pena de muerte en seis estados de los Estados Unidos (Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Missouri, Texas y Utah) y posteriormente ejecutadas, mientras eran beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión recomendó las siguientes medidas en el Informe 52/13:

1. Otorgar reparaciones a la familia de Clarence Allen Lackey, David Leisure, Anthony Green, James Brown, Larry Eugene Moon, Edward Hartman, Robert Karl Hicks, Troy Albert Kunkle, Stephen Anthony Mobley, Jaime Elizalde Jr., Ángel Maturino Resendiz, Heliberto Chi Aceituno, David Powell, Ronnie Gardner, Miguel Ángel Flores y James Wilson Chambers como consecuencia de las violaciones establecidas en este informe;

2. Asegurar que toda persona extranjera privada de libertad sea informada, sin demora y antes de rendir su primera declaración, de su derecho a la asistencia consular y a solicitar que se notifique a las autoridades diplomáticas de manera inmediata su privación de libertad;
3. Impulsar la aprobación urgente del proyecto de “Ley para el Cumplimiento de la Notificación Consular” (“CNCA” por sus siglas en inglés) que se encuentra pendiente ante el Congreso de los Estados Unidos desde 2011;
4. Proporcionar a toda persona indigente acusada de un delito punible con la pena capital la asistencia letrada necesaria;
5. Asegurar que la asistencia letrada brindada por el Estado en casos de pena de muerte sea eficaz, esté capacitada para actuar en casos de pena de muerte, e investigue en forma exhaustiva y diligente toda prueba atenuante;
6. Revisar sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que ninguna persona que, al momento de la comisión del delito o de la ejecución de la pena de muerte, tenga una discapacidad mental, se le aplique la pena capital o sea ejecutada. El Estado debe asegurar asimismo que toda persona acusada de un delito punible con la pena capital que invoque la necesidad de contar con una evaluación independiente de su estado de salud mental, y que no cuente con los medios para ello, tenga acceso a dicha evaluación;
7. Revisar sus leyes, procedimientos y prácticas para que el confinamiento solitario no sea utilizado como una condena judicial en el caso de las personas condenadas a pena de muerte. Asegurar que dicho régimen sea utilizado en forma excepcional de acuerdo a los estándares internacionales;
8. Asegurar que las personas condenadas a pena de muerte tengan la posibilidad de tener contacto con sus familiares y acceso a diferentes programas y actividades; y
9. Asegurar, como medida de no repetición, el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de personas condenadas a pena de muerte.

1294. El 5 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas ese año.

1295. El Estado por su parte informó el 3 de febrero de 2015, que está en desacuerdo con las conclusiones de la Comisión establecidas en el Informe de Fondo No. 69/12, y sostiene que no hubo violación de los derechos consagrados en la Declaración Americana Sobre los Derechos y Deberes del Hombre. El Estado reiteró que todas las personas relacionadas con esta petición han sido ejecutadas.

1296. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1297. El Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin indicar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1298. Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado incumplió las recomendaciones formuladas por la Comisión. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

**Caso 12.864, Informe No. 53/13, Iván Teleguz (Estados Unidos)**

1299. En el informe No. 53/13 la CIDH concluyó que Estados Unidos es responsable de la violación del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona (artículo I), el derecho de justicia (artículo XVIII), el derecho de petición (artículo XXIV), el derecho de protección contra la detención arbitraria (artículo XXV) y el derecho a proceso regular (artículo XXVI), garantizados en la Declaración Americana, con respecto a Iván Teleguz, quien se encuentra privado de la libertad en espera de pena de muerte en el estado de Virginia. En este informe la Comisión recomendó a Estados Unidos las siguientes medidas:

1. Otorgue a Iván Teleguz una reparación efectiva, incluida una revisión de su juicio de conformidad con las garantías del debido proceso y de un juicio justo consagradas en los artículos I, XVIII, XXIV y XXVI de la Declaración Americana;
2. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas a fin de que las personas acusadas de delitos punibles con la pena de muerte sean juzgadas y, de ser declaradas culpables, sentenciadas de conformidad con los derechos establecidos en la Declaración Americana, incluidos sus artículos I, XVIII, XXIV, XXV y XXVI;
3. Asegurar que toda persona extranjera privada de libertad sea informada, sin demora y antes de rendir su primera declaración, de su derecho a la asistencia consular y a solicitar que se notifique a las autoridades diplomáticas de manera inmediata su privación de libertad; e
4. Impulsar la aprobación urgente del proyecto de “Ley para el Cumplimiento de la Notificación Consular” (“CNCA” por sus siglas en inglés) que se encuentra pendiente ante el Congreso de los Estados Unidos desde 2011.

1300. El 5 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1301. El Estado informó el 3 de febrero de 2015, que se enviaron las recomendaciones de la Comisión al Estado de Virginia que no ha respondido a la solicitud de información.

1302. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1303. El 11 de marzo de 2016, los peticionarios informaron que el señor Teleguz había sido agendado para ejecución el 13 de abril de 2016.

1304. El 1 de abril de 2016, la CIDH emitió un comunicado de prensa en el cual urgió a Estados Unidos a cumplir con las recomendaciones formuladas en este caso, y a respetar completa y correctamente sus obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente aquellas derivadas de la Declaración Americana y la Carta de la OEA<sup>136</sup>.

---

<sup>136</sup> CIDH, Comunicado de Prensa, CIDH urge a Estados Unidos a cumplir con recomendaciones en caso de pena de muerte. 1 de abril de 2016. Disponible electrónicamente en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/045.asp>

1305. El 5 de abril de 2016, el Estado informó que el 29 de marzo de 2016, la Corte de Apelaciones del 4to Circuito decidió conceder la espera de la ejecución mientras se decide un recurso de *certiorari* ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

1306. El 18 de marzo de 2017, los peticionarios indicaron a la Comisión que, la sentencia de muerte del señor Teleguz había sido conmutada a prisión sin posibilidad de libertad condicional, evitando que fuera ejecutado.

1307. El 26 y 29 de septiembre y el 25 de octubre de 2017, el Estado presentó información a la Comisión reiterando lo presentado por los peticionarios, sin indicar acciones que permitan observar que se hayan desarrollado nuevas acciones para continuar con el cumplimiento del informe.

1308. Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado incumplió las recomendaciones formuladas por la Comisión. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

**Caso 12.422, Informe No. 13/14, Abu-Ali Abdur' Rahman (Estados Unidos)**

1309. El 2 de abril de 2014, la CIDH aprobó el Informe de Fondo No. 13/14, en el cual declaró que Estados Unidos es responsable de la violación del derecho de justicia (artículo XVIII) y el derecho a proceso regular (artículo XXVI), garantizados en la Declaración Americana, con respecto a Abu-Ali Abdur' Rahman, ciudadano de los Estados Unidos confinado en el pabellón de la muerte en el Estado de Tennessee. El 13 de julio de 1987 el señor Abdur' Rahman fue declarado culpable de homicidio en primer grado, agresión con intención de cometer homicidio en primer grado y lesiones corporales y robo a mano armada, y fue sentenciado a muerte el 15 de julio de 1987. La ejecución del señor Abdur' Rahman fue postergada ulteriormente en varias ocasiones en virtud de actuaciones internas llevadas a cabo en su favor. Actualmente el Sr. Rahman es beneficiario de medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de acuerdo con el artículo 25 de su Reglamento.

1310. La Comisión recomendó las siguientes medidas en el Informe 13/14:

1. Proporcione al señor Abdur' Rahman un recurso efectivo, incluido un nuevo juicio diligenciado conforme a los principios fundamentales del debido proceso o, si ello no fuera posible, que ponga en libertad a dicha persona.
2. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas a fin de que las personas acusadas de delitos que puedan dar lugar a la pena capital sean juzgadas y, si son declaradas culpables, sean sentenciadas conforme a los derechos establecidos en la Declaración Americana, en cuyo contexto debe proporcionárseles patrocinio letrado competente y eficaz.
3. La Comisión reitera asimismo la solicitud que formuló conforme al Artículo 25 de su Reglamento, de que Estados Unidos adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad física del señor Abdur' Rahman mientras se cumplen las actuaciones del caso de autos, incluida la aplicación de las recomendaciones finales de la Comisión.

1311. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 4 de octubre de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1312. El Estado presentó su informe a la Comisión el 2 de diciembre de 2015. En su reporte, el Estado reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin indicar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado indicó que el 13 de abril de 2015, la Corte Suprema de Tennessee suspendió la ejecución del señor Rahman que estaba agendada para el 6 de octubre de 2015 mientras las cortes deciden la constitucionalidad del uso de la inyección letal y la silla eléctrica.

1313. El 24 de octubre de 2017, el Estado reiteró sus escritos anteriores.

1314. Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado no ha cumplido las recomendaciones formuladas por la Comisión. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

**Caso 12.873, Informe No. 44/14, Edgar Tamayo Arias (Estados Unidos)**

1315. El 17 de julio de 2014, la CIDH aprobó el Informe de Fondo No. 44/14 en el cual declaró que los Estados Unidos son responsables de la violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad personales (artículo I), derecho a las garantías judiciales (artículo XVIII), el derecho de protección contra la detención arbitraria (Art. XXV) y el derecho al debido proceso legal (artículo XXVI) garantizados en la Declaración Americana, en relación con Edgar Tamayo Arias, quien fue condenado a pena de muerte y posteriormente ejecutado mientras era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

1316. La Comisión recomendó las siguientes medidas en el Informe 44/14:

1. Otorgue reparaciones a la familia de Edgar Tamayo Arias como consecuencia de las violaciones establecidas en este informe; y
2. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas a fin de asegurar que las personas acusadas de crímenes capitales sean juzgadas y --en caso de ser encontradas culpables-- condenado de conformidad con los derechos establecidos en la Declaración Americana , incluidos los artículos I, XVIII, XXV y XXVI;
3. Asegure de que todo ciudadano extranjero privado de su libertad sea informado sin demora y antes de su primera declaración, de su derecho a la asistencia consular, y se solicite que las autoridades diplomáticas sean notificados inmediatamente de su arresto o detención;
4. Impulse la adopción urgente de la "Ley de Cumplimiento de la Notificación Consular" ("CNCA"), que ha estado pendiente en el Congreso de los Estados Unidos desde 2011;
5. Asegure que el asesoramiento legal proporcionado por el Estado en los casos de pena de muerte sea eficaz, debidamente capacitado para los casos de pena de muerte, y con capacidad de investigar a fondo y con diligencia todos los factores atenuantes;
6. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que ninguna persona con una discapacidad mental o intelectual en el momento de la comisión del delito o de ejecución de la pena de muerte, sea condenada a muerte o ejecutada. El Estado debe también garantizar que toda persona acusada de un delito capital que solicite una evaluación independiente de su salud mental y que no tenga los medios para contratar los servicios de un experto independiente, pueda acceder a una evaluación de este tipo ;
7. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que la incomunicación no se utilice como una forma de castigo impuesta por los tribunales en el caso de las personas condenadas a muerte. Asegurar que el aislamiento esté reservado sólo para las circunstancias más excepcionales, de conformidad con las normas internacionales;
8. Asegurar que las personas condenadas a muerte tengan la oportunidad de tener contacto con sus familiares y acceso a programas y actividades;

9. Asegurar que las personas condenadas a muerte tengan acceso a información, en tiempo y forma, en relación con los procedimientos precisos que han de seguirse para su ejecución, las drogas y las dosis que se utilizarán, y la composición del equipo de ejecución, así como la capacitación de su miembros. El Estado debe también garantizar que las personas condenadas a muerte tengan la oportunidad de cuestionar ante los tribunales todos los aspectos del procedimiento de ejecución.

10. Dadas las violaciones a la Declaración Americana de que la CIDH ha encontrado en el presente caso y en otros relacionados con la aplicación de la pena de muerte, la Comisión Interamericana también recomienda a los Estados Unidos adoptar una moratoria a las ejecuciones de personas condenadas a muerte.

1317. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 14 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1318. El 20 de octubre de 2017, el Estado presentó información sin indicar acciones que permitan observar que se hayan desarrollado nuevas acciones para continuar con el cumplimiento del informe.

1319. Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado incumplió las recomendaciones formuladas por la Comisión. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

#### **Caso 12.833, Informe No. 11/15, Felix Rocha Díaz (Estados Unidos)**

1320. En el informe No. 11/15 de 23 de marzo de 2015, la CIDH concluyó que el Estado era responsable por la violación de los artículos I (Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona), XVIII (Derecho de justicia), XXV (Derecho de protección contra la detención arbitraria) y XXVI (Derecho a proceso regular) de la Declaración Americana, en perjuicio de Félix Rocha Díaz. Consecuentemente, si el señor Rocha fuese ejecutado, también se estaría cometiendo una violación grave e irreparable al derecho a la vida reconocido en el Artículo I de la Declaración Americana. El caso se refiere a violaciones al debido proceso penal en contra de Félix Rocha Díaz, un ciudadano mexicano, quien se encuentra privado de su libertad en el corredor de la muerte del Estado de Texas.

1321. La CIDH recomendó al Estado lo siguiente:

5. Garantice al señor Félix Rocha Díaz un recurso efectivo, que incluya la revisión de su juicio de conformidad con las garantías del debido proceso consagradas en los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana;

2. Revise sus normas, procedimientos y prácticas a fin de garantizar que las personas acusadas de delitos que puedan dar lugar a la pena capital sean juzgadas y, si son declaradas culpables, sean sancionadas conforme a los derechos establecidos en la Declaración Americana, incluyendo los artículos I, XVIII, XXV y XXVI de la misma;

3. Garantice que cada ciudadano extranjero privado de su libertad sea informado, sin demora y de manera previa a su primera declaración, sobre su derecho a la asistencia consular y a requerir que las autoridades diplomáticas sean notificadas inmediatamente sobre el arresto o la detención.

4. Impulsar la aprobación urgente del proyecto de “Ley para el Cumplimiento de la Notificación Consular” (“CNCA” por sus siglas en inglés), que se encuentra pendiente ante el Congreso de los Estados Unidos desde 2011.

5. Garantice que la asistencia letrada provista por el Estado en los casos de pena de muerte sea efectiva, esté entrenada para actuar en casos de pena de muerte, y sea capaz de investigar de manera completa y diligente toda la evidencia atenuante;
6. Garantice que las sustancias utilizadas en la inyección letal sean sometidas a aprobación y regulación gubernamental, que el personal a cargo de la ejecución obtenga capacitación médica adecuada y que los protocolos de la inyección letal estén disponibles al público;
7. Garantice que las personas sentenciadas a pena de muerte tengan acceso a información, de manera oportuna, relativa a los procedimientos precisos que se seguirán durante su ejecución, las sustancias y dosis a ser utilizadas, y la composición del equipo de ejecución así como la capacitación de sus miembros. El Estado también debe garantizar que las personas sentenciadas a pena de muerte tengan la oportunidad de reclamar judicialmente cada aspecto del procedimiento de ejecución;
8. Revise sus normas, procedimientos y prácticas para garantizar que el régimen de aislamiento no sea utilizado como una sanción impuesta por la corte en los casos de personas condenadas a pena de muerte. Garantice que el régimen de aislamiento se limite a las circunstancias más excepcionales, de conformidad con los estándares internacionales;
9. Garantice que las personas sentenciadas a pena de muerte tengan la oportunidad de estar en contacto con los miembros de sus familias y tengan acceso a diversos programas y actividades; y,
10. En consideración de las violaciones a la Declaración Americana que la CIDH ha establecido en el presente caso y en otros relacionados con la aplicación de la pena de muerte, la Comisión Interamericana recomienda a Estados Unidos adoptar una moratoria de las ejecuciones de personas condenadas a pena de muerte.

1322. El 12 de octubre de 2016 y el 4 de octubre de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1323. El 26 de enero y el 24 de octubre de 2017, el Estado el Estado presentó información de la cual no se observa que se hayan desarrollado nuevas acciones para continuar con el cumplimiento del informe.

1324. Por lo anterior, la CIDH concluye que las recomendaciones emitidas en el presente caso se encuentran pendientes de cumplimiento.

#### **Caso 12.831, Informe No. 78/15 Kevin Cooper (Estados Unidos)**

1325. En el Informe No. 78/15 de 28 de octubre de 2015, la CIDH concluyó que Estados Unidos es responsable de la violación de los artículos I (Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona), II, (Derecho a la igualdad ante la ley), XVIII (Derecho de justicia), y XXVI (Derecho a proceso regular) de la Declaración Americana en perjuicio de Kevin Cooper. Consecuentemente, de llevarse a cabo la ejecución del señor Cooper, el Estado sería también responsable por una seria e irreparable violación del derecho fundamental a la vida, protegido en el artículo I de la Declaración Americana. El caso se refiere a violaciones al debido proceso penal en contra de Kevin Cooper, quien se encuentra privado de su libertad en el corredor de la muerte en el estado de California desde 1985.

1326. La CIDH recomendó al Estado lo siguiente:

6. Otorgue a Kevin Cooper una reparación efectiva, incluida una revisión de su juicio y sentencia, de conformidad con las garantías del debido proceso y de un juicio justo, consagradas en los artículos I, II, XVIII y XXVI de la Declaración Americana;

2. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas a fin de garantizar que las personas acusadas de delitos capitales sean juzgadas y, de ser declaradas culpables, sean sentenciadas de conformidad con los derechos consagrados en la Declaración Americana, incluidos los artículos I, II, XVIII y XXVI de la misma;

3. Garantice que la asistencia letrada provista por el Estado en casos de pena de muerte sea eficaz, esté capacitada para desempeñarse en casos de pena capital y sea capaz de investigar cuidadosa y diligentemente todas las pruebas atenuantes; y

4. En consideración de las violaciones a la Declaración Americana declaradas por la CIDH en el presente caso y en otros casos relativos a la aplicación de la pena capital, la Comisión Interamericana recomienda a Estados Unidos adoptar una moratoria de las ejecuciones de personas condenadas a la pena de muerte.

1327. El 12 de octubre de 2016 y el 4 de octubre de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento.

1328. El 10 de noviembre de 2016, los peticionarios informaron que desde la decisión del Informe de Fondo, el Estado no ha desarrollado acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones formulada por la Comisión. Los peticionarios indicaron que Kevin Cooper ha solicitado clemencia del Gobernador del Estado de California Jerry Brown, sin recibir hasta el momento ninguna respuesta.

1329. El 23 y el 25 de octubre de 2017, los peticionarios presentaron información ante la Comisión, reiterando lo expuesto en fecha 10 de noviembre de 2016, e indicando que no existe siquiera constancia por parte del Estado de California de haber recibido o leído el Informe del caso en cuestión. Junto a ello, presentaron anexos judiciales del caso.

1330. Por lo anterior, la CIDH concluye que las recomendaciones emitidas en el presente caso se encuentran pendientes de cumplimiento.

#### **Caso 12.994 Bernardo Alban Tercero (Estados Unidos)**

1331. En el Informe No. 79/15 de 28 de octubre de 2015, la CIDH concluyó que los Estados Unidos es responsable de la violación de los artículos XVIII (Derecho de justicia), y XXVI (Derecho a proceso regular) de la Declaración Americana en perjuicio de Bernardo Aban Tercero. Consecuentemente, de llevarse a cabo la ejecución del señor Tercero, el Estado sería también responsable por una seria e irreparable violación del derecho fundamental a la vida, protegido en el artículo I de la Declaración Americana. El caso se refiere a violaciones al debido proceso penal en contra de Bernardo Aban Tercero, quien se encuentra privado de su libertad en el corredor de la muerte en el estado de Texas.

1332. La CIDH recomendó al Estado lo siguiente:

7. Otorgue a Bernardo Aban Tercero una reparación efectiva, incluida una revisión de su juicio y sentencia, de conformidad con las garantías del debido proceso y de un juicio justo, consagradas en los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana;

8. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas a fin de garantizar que las personas acusadas de delitos capitales sean juzgadas y, de ser declaradas culpables, sean sentenciadas

de conformidad con los derechos consagrados en la Declaración Americana, incluidos los artículos I, XVIII y XXVI de la misma;

9. Garantice que la asistencia letrada provista por el Estado en casos de pena de muerte sea eficaz, esté capacitada para desempeñarse en casos de pena capital y sea capaz de investigar cuidadosa y diligentemente todas las pruebas atenuantes;

10. Garantice que cada ciudadano extranjero privado de su libertad sea informado, sin demora y de manera previa a su primera declaración, sobre su derecho a la asistencia consular y a requerir que las autoridades diplomáticas sean notificadas inmediatamente sobre el arresto o la detención;

11. Impulsar la aprobación urgente del proyecto de “Ley para el Cumplimiento de la Notificación Consular” (“CNCA” por sus siglas en inglés), que se encuentra pendiente ante el Congreso de los Estados Unidos desde 2011;

12. En consideración de las violaciones a la Declaración Americana declaradas por la CIDH en el presente caso y en otros casos relativos a la aplicación de la pena capital, la Comisión Interamericana recomienda a Estados Unidos adoptar una moratoria de las ejecuciones de personas condenadas a la pena de muerte.

1333. El 25 de enero de 2016, el peticionario informó que se había concedido una espera en la Corte de Apelaciones de Texas en agosto de 2016. Asimismo, el peticionario informó que existe una audiencia agendada ante la Corte del Condado Harris para diciembre de 2016, por haberse encontrado nuevas evidencias en el caso.

1334. El 12 de octubre de 2016 y el 5 de octubre de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.

1335. El 26 de enero de 2017, el Estado remitió un informe de fecha 25 de agosto de 2015.

1336. El 14 de febrero de 2017, los peticionarios remitieron a la CIDH, los antecedentes judiciales del caso del señor Aban, indicando que hasta el momento, no sabían cuando la Corte se pronunciaría respecto del mismo.

1337. El 22 de mayo de 2017, los peticionarios informaron que en el caso del señor Bernardo Alban, la Corte había emitido veredicto a través del cual había negado el recurso de apelación y por tanto, había levantado la suspensión de la ejecución, por tanto, se encontraban a la espera de una nueva fecha de ejecución.

1338. El 20 de octubre de 2017, el Estado remitió información sin indicar acciones que permitan observar que se hayan desarrollado nuevas acciones para continuar con el cumplimiento del informe.

1339. En atención a lo anterior, la CIDH hace un llamado a las partes a suministrar información sobre el cumplimiento de las recomendaciones e insta al Estado a dar cumplimiento a las mismas.

**Caso 12.834, Informe No. 50/16. Trabajadores Indocumentados, (Estados Unidos de América).**

1340. El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el Informe de Fondo No. 50/16, en el cual encontró que Estados Unidos era internacionalmente responsable por la violación de los artículos II y XVI de la Declaración Americana en lo que respecta a Leopoldo Zumaya y Francisco Berumen Lizalde, así como los derechos del señor Lizalde amparados por los artículos XVII y XVIII. Por consiguiente, recomienda al Estado que:

1. Otorgue a los señores Zumaya y Lizalde una compensación pecuniaria adecuada para reparar las violaciones que se confirman en el presente informe;
2. Asegure que todas las leyes y políticas federales y estatales, en sí mismas y en la práctica, prohíban toda distinción en el empleo y los derechos laborales basada en la situación migratoria y la autorización para trabajar después que una persona comienza a trabajar como empleado;
3. Prohíba que el empleador haga averiguaciones sobre la situación migratoria de un trabajador que esté haciendo valer sus derechos de empleo y sus derechos laborales en un litigio o en reclamos administrativos;
4. Asegure que a los trabajadores indocumentados se les otorguen los mismos derechos y recursos que a los trabajadores documentados frente a violaciones de sus derechos en el lugar de trabajo;
5. Establezca un procedimiento para que los trabajadores indocumentados que participen en procedimientos para pedir indemnización por accidentes de trabajo, o sus representantes, puedan solicitar la suspensión de su deportación hasta que se resuelva el procedimiento y los trabajadores hayan recibido el tratamiento médico apropiado ordenado por los jueces ante los cuales tramiten los casos;
6. Mejore y refuerce la detección de empleadores que exploten a los trabajadores indocumentados y violen sus derechos laborales y les imponga sanciones adecuadas.

1341. El 21 de enero de 2016, el informe fue transmitido al Estado y se le dio un plazo de dos meses para que informara a la Comisión Interamericana sobre las medidas tomadas para cumplir sus recomendaciones. En esa misma fecha se notificó a los peticionarios sobre la adopción del informe.

1342. El 18 de marzo de 2016, Estados Unidos presentó su respuesta. En primer lugar, el Estado afirmó que “varias” de las recomendaciones de la Comisión “ya reflejan las leyes, la política y la acción de Estados Unidos en esta área”, tal como señalara en los escritos que presentó durante la etapa de fondo.

1343. Por otra parte, el Estado indicó que el cumplimiento de “otras recomendaciones” del Informe 83/15 “no parece ser factible en el plano federal, ya que implican cuestiones abarcadas por las leyes, cuya implementación está comprendida en el ámbito de las autoridades o que requieren un cambio en la jurisprudencia federal o estatal”.

1344. El Estado agregó que las recomendaciones de la Comisión “no son requisitos de conformidad con el derecho internacional”. Por último, el Estado reiteró su desacuerdo con la afirmación de la Comisión de que ha violado sus obligaciones jurídicas internacionales. El Estado no proporcionó información con respecto a las medidas implementadas respecto de las recomendaciones específicas.

1345. El Estado no presentó información sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones. La CIDH tampoco recibió información de los peticionarios desde la publicación del Informe de Fondo.

1346. La Comisión, en cumplimiento de su mandato, continuará haciendo seguimiento al cumplimiento de Estados Unidos con las recomendaciones reiteradas en este informe hasta que las mismas sean implementadas en forma total.

#### **Caso 12.028, Informe No. 47/01, Donnason Knights (Granada)**

1347. En el Informe No. 47/01, de fecha 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación de los derechos del señor Knights consagrados en los artículos 4(1), 5(1), 5(2)

y 8(1), en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, al sentenciar al señor Knights a una pena de muerte obligatoria; b) la violación de los derechos del señor Knights en virtud del artículo 4(6) de la Convención, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, al no otorgar al señor Knights un derecho efectivo a solicitar una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) la violación de los derechos del señor Knights consagrados en los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención Americana, en conjunción con una violación del artículo 1(1) de la Convención, en razón de las condiciones de detención a que ha sido sometido; y d) la violación de los derechos del señor Knights consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención, al no poner a su disposición asistencia letrada para recorrer la vía constitucional.

1348. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Otorgue al señor Knights una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una compensación.
2. Adopte las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para asegurar que la pena de muerte no se imponga en violación de los derechos y libertades garantizados conforme a la Convención, incluidos los artículos 4, 5 y 8 y, en particular, para asegurar que ninguna persona sea sentenciada a muerte de conformidad con una ley de sentencia obligatoria.
3. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho consagrado en el artículo 4(6) de la Convención Americana a solicitar una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
4. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho a un juicio imparcial consagrado en el artículo 8(1) de la Convención Americana y el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana, en relación con los recursos de carácter constitucional.
5. Adopte las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para asegurar que el derecho al trato humano conforme a los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención Americana en lo que se refiere a las condiciones de arresto de la víctima tenga plena vigencia en Granada.

1349. El 3 de marzo de 2015, el peticionario informó a la CIDH que en el 2002 el Comité Judicial del Consejo Privado en sentencias de los casos *R v Hughes*, *R v Reyes* y *Fox v The Queen*, declaró la imposición de la pena de muerte en países del Caribe Oriental como inconstitucional. En ese sentido, informa que, como para el año 2008 el Estado de Granada no había reconsiderado la sentencia del Sr. Knights, se habrían interpuesto varias peticiones ante el mencionado Comité en favor del Sr. Knights y de otros 9 prisioneros; razón por la cual las sentencias fueron anuladas y los casos fueron remitidos a la Corte Suprema para obtener nueva sentencia. Como resultado, el Sr. Knights fue sentenciado a cadena perpetua, por lo cual actualmente, según establece el peticionario, lo están asistiendo en el proceso de apelación.

1350. Asimismo el peticionario indica que para la fecha, sección 230 del Código penal todavía contiene la imposición obligatoria de la pena de muerte en los casos de homicidios y manifiesta que, aunque ya los tribunales no aplican la pena de muerte, aún no se ha tomado ninguna iniciativa legislativa por parte del Estado para eliminar esta norma. De la misma manera, comunica que no ha habido ningún avance en relación a las recomendaciones sobre las demás medidas legislativas que el Estado debe adoptar, y aclara que para el momento, el Sr. Donnason Knights no ha sido compensado por las violaciones sufridas.

1351. El 18 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 23 de agosto de 2017, la Comisión solicitó información sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Hasta la fecha, ninguna de las partes ha presentado información. La CIDH observa que el Estado no ha presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas desde el año 2009.

1352. La Comisión valora la información presentada sobre el Estado sobre la revisión de la sentencia e invita a las partes a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las demás recomendaciones por parte del Estado. En particular, la CIDH Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

#### **Caso 11.765, Informe No. 55/02, Paul Lallion (Granada)**

1353. En el Informe No. 55/02, del 21 de octubre de 2002, la CIDH concluyó que el Estado de Granada era responsable de: a) la violación de los derechos del señor Lallion consagrados en los artículos 4(1), 5(1) 5(2) y 8(1), conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, por sentenciar al señor Lallion a una pena de muerte obligatoria; b) la violación de los derechos del señor Lallion consagrados en el artículo 4(6) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no brindar al señor Lallion un derecho efectivo de solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) la violación de los derechos del señor Lallion consagrados en el artículo 5(1) de la Convención Americana, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no respetar el derecho del señor Lallion a la integridad física, mental y moral, por confinarlo en condiciones de detención inhumanas; y d) la violación de los derechos del señor Lallion consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no otorgar asistencia letrada para iniciar una acción constitucional, y e) la violación del derecho del señor Lallion a la libertad personal, dispuesto en el artículo 7(2), 7(4) y 7(5) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no proteger su derecho a la libertad personal y no ser llevado sin demora ante un funcionario judicial.

1354. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Otorgue al señor Lallion una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una indemnización.
2. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que considere necesarias para garantizar que no se imponga la pena de muerte en violación de los derechos y libertades garantizados por la Convención, incluidos los artículos 4, 5 y 8, y, en particular, garantice que ninguna persona sea sentenciada a muerte por sentencia obligatoria en Granada.
3. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho consagrado en el artículo 4(6) de la Convención Americana a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
4. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho a un juicio imparcial consagrado en el artículo 8(1) de la Convención Americana y el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana tengan efecto en Granada en relación con el recurso a acciones constitucionales.
5. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho a un trato humano, consagrado en el artículo 5(1) de la Convención Americana, en relación con las condiciones de detención del señor Lallion.
6. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7(2), 7(4) y 7(5) de la Convención Americana respecto del señor Lallion.

1355. El 11 de marzo de 2015, el peticionario informó a la CIDH que en el 2002 el Comité Judicial del Consejo Privado en sentencias de los casos *R v Hughes*, *R v Reyes* y *Fox v The Queen*, declaró la imposición

de la pena de muerte en países del Caribe Oriental como inconstitucional. En ese sentido, informa que, como para el año 2008 el Estado de Granada no había reconsiderado la sentencia del señor Lallion, se habrían interpuesto varias peticiones ante el mencionado Comité en favor del señor Lallion y de otros 9 prisioneros; razón por la cual las sentencias fueron anuladas y los casos fueron remitidos a la Corte Suprema para obtener nueva sentencia. Como resultado, el señor Lallion fue sentenciado a 25 años de prisión en diciembre de 2009. En consecuencia, debido al tiempo que ya había cumplido en prisión y a la remisión de un tercio de su sentencia, según establece el peticionario, el señor Lallion fue puesto en libertad. Sin embargo, el señor Lallion no ha recibido una compensación por las violaciones sufridas. De la misma manera, comunica que no ha habido ningún avance en relación a las recomendaciones sobre las demás medidas legislativas que el Estado debe adoptar.

1356. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 23 de agosto de 2017, solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Hasta la fecha, ninguna de las partes ha presentado información.

1357. La Comisión valora que la conmutación de la pena por medio de la cual el señor Lallion fue puesto en libertad. Asimismo, invita a las partes a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las demás recomendaciones por parte del Estado. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

#### **Caso 12.158, Informe No. 56/02 Benedict Jacob (Granada)**

1358. En el Informe No. 56/02 de 21 de octubre de 2002, la Comisión concluyó que el Estado era responsable: a) de la violación de los derechos del señor Jacob consagrados en los artículos 4(1), 5(1) 5(2) y 8(1), conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, por sentenciar al señor Jacob a una pena de muerte obligatoria; b) de la violación de los derechos del señor Jacob consagrados en el artículo 4(6) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no brindar al señor Jacob un derecho efectivo de solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) de la violación de los derechos del señor Jacob consagrados en el artículo 5(1) de la Convención Americana, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no respetar el derecho del señor Jacob a la integridad física, mental y moral, por confinarlo en condiciones de detención inhumanas, y d) de la violación de los derechos del señor Jacob consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no otorgarle asistencia letrada para iniciar una acción constitucional.

1359. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Otorgue al señor Jacob una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una indemnización.
2. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que considere necesarias para garantizar que no se imponga la pena de muerte en violación de los derechos y libertades garantizados por la Convención, incluidos los artículos 4, 5 y 8, y, en particular, garantice que ninguna persona sea sentenciada a muerte por sentencia obligatoria en Granada.
3. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho consagrado en el artículo 4(6) de la Convención Americana a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
4. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho a un juicio imparcial consagrado en el artículo 8(1) de la Convención Americana y el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana tengan efecto en Granada en relación con el recurso a acciones constitucionales.

5. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho a un trato humano, consagrado en el artículo 5(1) de la Convención Americana, en relación con las condiciones de detención del señor Jacob.

1360. El 4 de marzo de 2015, el peticionario informó a la CIDH que en el 2002 el Comité Judicial del Consejo Privado en sentencias de los casos *R v Hughes*, *R v Reyes* y *Fox v The Queen*, declaró la imposición de la pena de muerte en países del Caribe Oriental como inconstitucional. En ese sentido, informa que, como para el año 2008 el Estado de Granada no había reconsiderado la sentencia del señor Jacob, se habrían interpuesto varias peticiones ante el mencionado Comité en favor del señor Jacob y de otros 9 prisioneros; razón por la cual las sentencias fueron anuladas y los casos fueron remitidos a la Corte Suprema para obtener nueva sentencia. Como resultado, el señor Jacob fue sentenciado a varios años de prisión. En este sentido, debido al tiempo que ya había cumplido en prisión y a la remisión de un tercio de su sentencia, según establece el peticionario, el señor Jacob fue puesto en libertad. Sin embargo, el señor Jacob no ha recibido una compensación por las violaciones sufridas. De la misma manera, comunica que no ha habido ningún avance en relación a las recomendaciones sobre las demás medidas legislativas que el Estado debe adoptar.

1361. El 28 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 23 de agosto de 2017, solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Hasta la fecha, ninguna de las partes ha presentado información. La CIDH observa que el Estado no ha presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas desde el año 2009.

1362. La Comisión valora que la conmutación de la pena por medio de la cual el señor Jacob fue puesto en libertad. Asimismo, invita a las partes a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las demás recomendaciones por parte del Estado. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

#### **Caso 11.625, Informe No. 4/01, María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala)**

1363. En el Informe No. 4/01 de fecha 19 de enero de 2001, la CIDH indicó que “reconoce plenamente y valora las reformas efectuadas por el Estado de Guatemala en respuesta a las recomendaciones expuestas en el Informe 86/98. Según ha sido reconocido por las partes, éstas constituyen un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales de la víctima y de la mujer en general en Guatemala. Estas reformas representan una medida de cumplimiento sustancial con las recomendaciones de la Comisión, y son congruentes con las obligaciones del Estado como Parte en la Convención Americana”. Por lo anterior concluyó que el Estado había cumplido en parte importante con las recomendaciones emitidas en el Informe 86/98.

1364. En el mismo Informe indicó la Comisión que no estaba en posición de concluir que el Estado había cumplido plenamente con las recomendaciones y reiteró que el Estado de Guatemala era responsable por haber violado los derechos de María Eugenia Morales de Sierra a igual protección, al respeto por su vida familiar y al respeto por su vida privada establecidos en los artículos 24, 17 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el título y el inciso 1 del artículo 110 y el inciso 4 del artículo 317, y que por ello, el Estado era responsable del incumplimiento de la obligación que le impone el artículo 1 de respetar y garantizar esos derechos consagrados en la Convención, así como de la obligación que le impone el artículo 2 de adoptar la legislación y demás medidas necesarias para hacer efectivos esos derechos de la víctima.

1365. En el Informe No. 4/01, la Comisión formuló al Estado de Guatemala las siguientes recomendaciones:

1. Adecuar las disposiciones pertinentes del Código Civil para equilibrar el reconocimiento jurídico de los deberes recíprocos de la mujer y del hombre dentro del matrimonio, y adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para reformar el artículo 317 del Código Civil, para hacer congruente la legislación nacional con las normas de

la Convención Americana y dar efecto pleno a los derechos y libertades que la misma garantiza a María Eugenia Morales de Sierra.

2. Reparar e indemnizar adecuadamente a María Eugenia Morales de Sierra por los daños ocasionados por las violaciones establecidas en el presente Informe.

1366. El 3 de marzo de 2006, los peticionarios y el Estado de Guatemala suscribieron un “Acuerdo de Cumplimiento Específico de Recomendaciones” con el objeto de formalizar las obligaciones del Estado. En dicho acuerdo, María Eugenia Morales de Sierra renunció expresamente a la reparación económica que la CIDH recomendaba en su condición de víctima porque “su lucha consiste en la dignificación de la mujer”.

1367. De igual manera, la CIDH recalca que dentro de los compromisos asumidos por el Estado y acordados entre las partes, se incluyen: 1.- Gestionar e impulsar la iniciativa de ley que tiene por objeto modificar el artículo 317 inciso 42 del Decreto Ley No 106 (Código Civil); y 2.- Reparar e indemnizar adecuadamente a María Eugenia Morales de Sierra por los daños ocasionados por las violaciones establecidas. En virtud del compromiso relacionado a la reparación e indemnización, se acordaron el desarrollo de múltiples medidas bajo la responsabilidad de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH-, que se enuncian a continuación:

- A) La creación de una fundación que llevará por nombre Fundación para la Dignidad María Eugenia Morales Aceña de Sierra “FUNDADIG”, y para tal efecto asume el Estado las gestiones y gastos para su constitución, inscripción y reconocimiento de su personalidad jurídica así como el fondo para su funcionamiento;*
- B) Gestionar y colaborar con la realización de una investigación que permita identificar las leyes o normas discriminatorias a la mujer, aun existentes, con el objeto de planificar acciones;*
- C) Gestionar los fondos y los recursos necesarios para que la FUNDADIG realice tres investigaciones sobre la problemática de la mujer en Guatemala desde i.- el campo de la sociología, ii.- el campo de la antropología, iii.- el campo del Derecho;*
- D) Gestionar becas para el Programa Eduquemos a la Niña u otros programas existentes que otorguen becas en establecimientos públicos;*
- E) Gestionar conjuntamente con la FUNDADIG ante las instituciones correspondientes los aspectos necesarios para trabajar por los derechos de las mujeres;*
- F) Gestionar ante la CIDH para que se presente el informe de violencia contra la mujer guatemalteca correspondiente al periodo 2004-2005;*
- G) Gestionar recursos ante organismos internacionales y de cooperación durante el período 2006-2007 para capacitación y especialización en temas vinculados al género;*
- H) Gestionar ante las instancias del Ejecutivo la realización de un diagnóstico sobre la situación de la violencia contra la mujer;*
- I) Gestionar con la FUNDADIG, la elaboración de un diagnóstico en la región central de la República de Guatemala, que permita conocer la situación nutricional de las mujeres y niñas con el objeto de buscar una solución;*
- J) Desarrollar campañas de sensibilización sobre aspectos de vulnerabilidad de las mujeres en la sociedad guatemalteca;*
- K) Difusión de una campaña de sensibilización nacional, específicamente en los idiomas mayenses del país sobre las reformas realizadas al Código Civil;*
- L) Gestionar ante los Ministros respectivos en coordinación con la FUNDADIG, la publicación de un texto académico relacionada al tema “Dignidad de la Mujer”;*
- M) Gestionar la organización de un certamen académico específico para mujeres a nivel nacional;*
- N) Revisar del material educativo con la finalidad de eliminar cualquier indicio de discriminación y sexismo que afecte la dignidad de la mujer;*
- O) Gestionar la realización de una investigación sobre la posible vinculación entre la explotación sexual y las adopciones, en niñas.*

1368. Según información suministrada por los peticionarios el 20 de mayo de 2009 y reiterada el 16 de noviembre del mismo año, hay un cumplimiento total de las medidas establecidas en los literales A) y L). Por lo anterior, la CIDH da por cumplidos en su totalidad los literales A y L del acuerdo de cumplimiento.

1369. Asimismo, la CIDH retoma la información suministrada por las partes en el año 2008, en el cual se informó que el Estado había elaborado las mantas y afiches publicitarios, así como la transmisión de tres cuñas radiales que fueron difundidas. Por lo anterior, la CIDH considera que el Estado ha dado cumplimiento al punto J. Sin embargo, dado que el Estado no ha proporcionado información que permita valorar la difusión de una “campana de sensibilización, específicamente en el idioma mayense”, la CIDH considera que el Estado aún debe adelantar esfuerzos para cumplir con el punto K.

1370. En relación al literal M, la CIDH retoma la información suministrada en el año 2009, en que se informó que la convocatoria para el certamen académico específico para mujeres a nivel nacional se realizó el 6 de abril de 2009 mediante la publicación del Acuerdo Ministerial No. 240-2009 en el Diario Oficial, y que para difundir la convocatoria del certamen, el 9 de junio de 2009, se realizó una conferencia de prensa y se distribuyó material publicitario a las 334 municipalidades del país y a las universidades. De acuerdo a la información suministrada, la convocatoria se amplió el 10 de noviembre de 2009 a solicitud de la peticionaria, a través de la Resolución No. 847-2009.

1371. En el 2010, el Estado informó que el 22 de noviembre de 2010 el Jurado Calificador emitió una resolución sobre el trabajo de investigación ganador del Certamen Académico para Mujeres mayas, garífunas, xincas y mestizas, el cual fue remitido a la peticionaria para proceder a la fase de premiación. Al respecto, la peticionaria indicó en comunicación de 9 de junio de 2010, que no estaba de acuerdo con el modo de cumplimiento de este compromiso por haberse realizado únicamente en idioma español. El 4 de julio de 2011, la peticionaria agregó que no estaba satisfecha con la ejecución de la medida porque no consideraba que existía una representatividad de las mujeres indígenas en el certamen al haberse recibido únicamente dos postulaciones. La CIDH observa también que la convocatoria fue repetida y ampliada a solicitud de la peticionaria. Adicionalmente, la CIDH observó que el artículo *“El Derecho de las Mujeres a una Vida Digna: Discurso y realidad en Guatemala. Una Lectura crítica a la aplicación de la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer”* de autoría del Grupo Académico del Centro de Estudios de Género fue reconocido como estudio de investigación ganador del certamen académico, y verificó que copias del libro se encuentran disponibles en distintas universidades y librerías públicas de los Estados Unidos y Canadá, y que se han realizado conversatorios sobre el mismo con las autoras del libro en México y Guatemala. Por lo anterior, la CIDH da por cumplido en su totalidad el literal M del acuerdo.

1372. El 8 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a las partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 7 de enero de 2015, los peticionarios indicaron que las dos recomendaciones siguen sin ser cumplidas: el artículo 317 del Código Civil sigue sin ser modificado y no se han reparado adecuadamente los daños causados por las violaciones establecidas. Al respecto, los peticionarios informaron que “se han cerrado todas las vías de comunicación posible con las autoridades de la Comisión Presidencial responsable de la Política de Derechos Humanos- COPREDEH”.

1373. El 8 de enero de 2015, el Estado respondió que se han adoptado medidas legislativas para reformar dicho artículo. En ese sentido, señaló que la iniciativa de Ley 3688 que habría sido presentada el 2 octubre de 2007 ante el Congreso no habría sido aprobada, por lo que el 1 de diciembre de 2010, la Comisión de la Mujer del Congreso habría ingresado un nuevo proyecto de Ley con el fin de modificar dicho artículo, que a la fecha no contaba con la aprobación del pleno.

1374. Con respecto a la segunda recomendación, el Estado reiteró que la peticionaria había renunciado a una indemnización económica. De igual forma, dejó establecido que existen otros puntos del acuerdo de cumplimiento de recomendaciones como los establecidos en los literales B, C, D, E, F, G, H, I, K, N, y O, que no habrían sido cumplidos por el Estado debido a la dificultad de coordinar acciones con la peticionaria, razón por la cual “no se continuó coordinando con ella ninguna acción”.

1375. El 11 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó a las partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 15 de octubre de 2015, los peticionarios reiteraron, como lo han hecho en múltiples ocasiones, que no se ha reformado el artículo 317 inciso 42 del Decreto Ley No 106 (Código Civil) y que el Estado de Guatemala no ha cumplido con las recomendaciones. El Estado por su parte, no ha suministrado información adicional.

1376. El 13 de octubre de 2016, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

1377. El 11 de noviembre de 2016, el Estado indicó en relación a las reformas legislativas, que a través de COPREDEH ha gestionado ante el Congreso de la República la modificación del artículo 317 del Código Civil, no obstante, las propuestas formuladas directa e indirectamente a dicho órgano no han sido aprobadas. Aun así, la COPREDEH en el año 2016 ha mantenido estrecha comunicación con los miembros del Congreso con el objetivo de contar con su apoyo para el seguimiento e impulso de todas las reformas legislativas, incluidos los compromisos ante el SIDH, razón por la cual el listado de todas las reformas e iniciativas derivadas de ellos fue entregado al Congreso.

1378. Con respecto a la segunda recomendación, el Estado sostuvo nuevamente que ha tenido cierta dificultad en el cumplimiento de los puntos pendientes debido a la imposibilidad de coordinar con la peticionaria su ejecución. Sin embargo, manifestó su intención de retomar el diálogo y las reuniones con la parte peticionaria para seguir impulsando las acciones necesarias para alcanzar el efectivo cumplimiento de los compromisos pendientes.

1379. El 14 de noviembre de 2016, la peticionaria reiteró lo indicado en escritos anteriores, en particular, que no se han adoptado las medidas legislativas, y de otra índole, necesarias para reformar el artículo 317 del Código Civil; y que el Estado de Guatemala no ha procedido a reparar e indemnizar los daños ocasionados por las violaciones en el presente caso. Asimismo, señaló su desacuerdo con el argumento presentado por el Estado de tener dificultades para coordinar acciones con ella y agregó que no ha recibido comunicación oficial de la COPREDEH desde el nombramiento de su nuevo Presidente, para poder avanzar en las recomendaciones pendientes. Así, la peticionaria manifestó haber contactado mediante nota de fecha 9 de noviembre de 2016 a la COPREDEH con el objeto de coordinar una reunión de trabajo.

1380. El 17 de marzo de 2017, el Estado presentó información sobre el estado de cumplimiento de los compromisos. En relación con las reformas legislativas, reiteró lo indicado en la información suministrada el 11 de noviembre de 2016. Con respecto a la reparación e indemnización adecuada, el Estado manifestó que debido a la renuncia expresa de la peticionaria a la reparación económica, se han acordado nuevas medidas de reparación y se ha coordinado una reunión con la peticionaria, para replantear los compromisos y las recomendaciones con el fin de proponer medidas de reparación más factibles de cumplimiento.

1381. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento.

1382. El 23 y 24 de agosto de 2017, los peticionarios reiteraron la información presentada en el año 2016, indicando que hasta la fecha no se han cumplido las recomendaciones del informe 4/01. Asimismo, el 28 de agosto, la señora Morales de Sierra informó que no han habido avances en el cumplimiento de las recomendaciones debido a que el Presidente de COPREDEH renunció al cargo.

1383. El 6 de noviembre de 2017, el Estado presentó la información que ya había presentado con anterioridad sobre los extremos del acuerdo que la Comisión ya declaró cumplidos totalmente.

1384. Al respecto, la Comisión valora la información suministrada por las partes y reitera que el acuerdo se ha cumplido parcialmente al haberse finalizado los literales A, L, J y M. Asimismo, la CIDH valora que las partes han reafirmado individualmente su intención de mantener un diálogo y de coordinar reuniones de trabajo, por lo que las invita a trabajar conjuntamente para avanzar en el cumplimiento de las

recomendaciones y mantener informada a la CIDH sobre los avances que resulten de dichos encuentros. La CIDH continuará la supervisión de los puntos pendientes de cumplimiento B, C, D, E, F, G, H, I, K, N, y O.

**Caso 9.207, Informe No. 58/01, Oscar Manuel Gramajo López (Guatemala)**

1385. En el Informe No. 58/01 de fecha 4 de abril de 2001, la CIDH concluyó que el Estado de Guatemala había violado los derechos del señor Oscar Manuel Gramajo López a la vida (artículo 4), la integridad personal (artículo 5), la libertad personal (artículo 7) y la protección judicial (artículos 8 y 25), en conjunción con la obligación de garantizar los derechos protegidos en la Convención, según se establece en el artículo 1(1) de la misma. De acuerdo a los antecedentes del Caso, el 17 de noviembre de 1980 Oscar Manuel Gramajo López y tres compañeros fueron detenidos y posteriormente desaparecidos por efectivos de la Policía Nacional, la cual contaba con la ayuda de miembros de la Policía de Hacienda y algunos efectivos militares. La detención se produjo cuando la víctima y sus amigos se encontraban en la casa de habitación de uno de estos últimos, escuchando radio a todo volumen, tomándose unas copas y un vecino los denunció a la policía como consecuencia del bullicio que producían.

1386. En el Informe No. 58/01 la Comisión formuló al Estado de Guatemala las siguientes recomendaciones:

1. Desarrolle una imparcial y efectiva investigación de los hechos denunciados que determine las circunstancias y destino del señor Oscar Manuel Gramajo López, que se establezca la identidad de los responsables de su desaparición y se les sancione conforme a las normas del debido proceso legal.
2. Adopte medidas de reparación plena de las violaciones constatadas, que incluyen: medidas para localizar los restos del señor Oscar Manuel Gramajo López; los arreglos necesarios para facilitar los deseos de su familia con respecto al lugar de descanso final de sus restos; y una reparación adecuada y oportuna para los familiares de la víctima.

1387. El 7 de octubre de 2013, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el presente caso. Los peticionarios no aportaron información.

1388. El Estado informó respecto de la primera recomendación que la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público había elaborado un plan de investigación pero que estaba bajo reserva de conformidad con el artículo 314 del Código Procesal Penal y por ello no podía entregar detalles específicos de la investigación. Sin embargo, mencionó que el Ministerio Público estaba investigando el presente caso, y que en cuanto se tengan avances, se estarían enviando a la CIDH.

1389. En relación con la segunda recomendación de la CIDH, el Estado informó lo siguiente:

5. En cuanto a la búsqueda de los restos del señor Oscar Manuel Gramajo López expresó que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) -organización no gubernamental, autónoma, técnico-científica-, entrevistó y tomó muestras de ADN a los familiares del señor Gramajo López. Dichas muestras y las obtenidas de las osamentas recuperadas en los trabajos de exhumación realizados por la FAFG en diferentes lugares de Guatemala, se habrían comparado en su banco de datos genético (BDD), sin que a la fecha se haya obtenido identificación de Oscar Manuel Gramajo López.

6. Sobre los arreglos necesarios para facilitar los deseos de su familia con respecto al lugar de descanso final de los restos de Oscar Manuel Gramajo, indicó que en el momento que se localicen e identifiquen sus restos, realizará -con aprobación de su familia- las coordinaciones relacionadas con el lugar de su descanso final.

7. En relación con la recomendación de otorgar una reparación adecuada y oportuna a los familiares de la víctima, expresó que el 5 de diciembre de 2008 el Programa Nacional de Resarcimiento otorgó una reparación económica de veinticuatro mil quetzales a la señora Edelia López Escobar por la desaparición forzada de su hijo Oscar Manuel Gramajo, por lo que este compromiso ya fue cumplido.

1390. El 5 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a las partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado respondió el 5 de enero de 2015 reiterando la información presentada anteriormente.

1391. El 28 de septiembre de 2015, la Comisión solicitó información a las partes. El 21 de octubre de 2015, el Estado presentó información actualizada sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones. En este sentido sobre la primera recomendación, informó que en fecha 16 de julio de 2014 fue recibida la información solicitada a la sección de AFIS del Gabinete de Criminalística de la Policía Nacional Civil el 31 de enero de 2013, sobre uno de los posibles testigos presenciales de los hechos, por lo cual, luego de varias diligencias, se logró obtener una declaración testimonial. Asimismo, señalaron las distintas diligencias pendientes de realizar en torno a la investigación de los hechos acaecidos, y reiteraron que el Ministerio Público estaba investigando el presente caso.

1392. En relación a la segunda recomendación, comunicaron que los familiares de la víctima facilitaron muestras de ADN, por lo cual se ha podido llevar a cabo investigaciones para identificar posibles coincidencias entre el perfil genético de los familiares de Oscar Manuel Gramajo López, así como exhumaciones por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Sin embargo, al no haberse obtenido coincidencias entre las muestras de ADN para realizar una identificación, el Estado manifiesta que continúa en el proceso de identificación y localización de los restos del señor Gramajo López.

1393. El 13 de octubre de 2016, la CIDH solicitó a las partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 11 de noviembre de 2016, el Estado informó que el Ministerio Público continúa investigando el caso. Al respecto, comunicó que, a través de la COPREDEH, está trabajando en un mecanismo de coordinación y apoyo con el Ministerio Público, por medio de la conformación de una mesa de trabajo que contempla la prioridad de atender los casos presentados ante los órganos del Sistema Interamericano, siendo el caso del señor Oscar Manuel Gramajo López, uno de ellos. El 10 de noviembre de 2016, las autoridades que conforman este mecanismo sostuvieron una reunión de coordinación con el personal de la Fiscalía de Derechos Humanos.

1394. En relación a las medidas de reparación, el Estado manifestó que continúa el proceso de identificación y localización de los restos del señor Oscar Gramajo por cuanto aún no se han tenido coincidencias con las muestras de ADN, para realizar una identificación. En este sentido, reafirma que, al momento de ser localizados los restos, se realizará las diligencias pertinentes a fin de entregárselos a los familiares. En particular, el Estado sostuvo que está trabajando en la conformación de una mesa de trabajo integrada por el COPREDEH, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Sociedad Civil, con el propósito de dar seguimiento a la realización de exhumaciones para la búsqueda, identificación y entrega de restos de las personas desaparecidas.

1395. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. A la fecha de cierre de este informe, ninguna de las partes ha presentado información.

1396. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

**Caso 10.626 Remigio Domingo Morales y Rafael Sánchez; Caso 10.627 Pedro Tau Cac; Caso 11.198(A) José María Ixcaya Pixtay y otros; Caso 10.799 Catalino Chochoy y otros; Caso 10.751 Juan Galicia Hernández y otros y Caso 10.901 Antulio Delgado, Informe No. 59/01 Remigio Domingo Morales y otros (Guatemala)**

1397. En el Informe No. 59/01 de fecha 7 de abril de 2001, la CIDH concluyó que el Estado de Guatemala era responsable de la violación a los siguientes derechos: a) derecho a la vida en perjuicio de los señores Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac, José María Ixcaya Pixtay, José Vicente García, Mateo Sarat Ixcoy, Celestino Julaj Vicente, Miguel Calel, Pedro Raguez, Pablo Ajiataz, Manuel Ajiataz Chivalán, Catrino Chanchavac Larios, Miguel Tiu Imul, Camilo Ajquí Gimon y Juan Tzunux Us, según lo establecido en el artículo 4 de la Convención Americana. b) derecho a la libertad personal en perjuicio de los señores Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac y Camilo Ajqui Gimon, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Convención Americana. c) derecho a la integridad personal en perjuicio de los señores Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac y Camilo Ajqui Gimon, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, en virtud de las tentativas de ejecución extrajudicial en contra de los señores Catalino Chochoy, José Corino, Abelino Baycaj, Antulio Delgado, Juan Galicia Hernández, Andrés Abelino Galicia Gutiérrez y Orlando Adeldo Galicia Gutiérrez, la Comisión concluyó que el Estado guatemalteco era responsable por la violación del derecho a la integridad física, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana. d) derechos del niño en perjuicio de los niños Rafael Sánchez y Andrés Abelicio Galicia Gutiérrez, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Convención Americana. e) Garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de todas las víctimas, tanto aquellas que fueron ejecutadas extrajudicialmente como aquellas que fueron objeto de tentativa de ejecución extrajudicial, conforme a lo establecido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Además, la CIDH consideró responsable al Estado guatemalteco en todos los casos por no haber cumplido con su obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según se establece en el artículo 1 de la misma.

1398. De acuerdo a los antecedentes, la CIDH determinó que cada uno de los Casos 10.626; 10.627; 11.198(A); 10.799; 10.751 y 10.901 se referían a denuncias donde se indicaba que los presuntos autores materiales de las diversas violaciones de los derechos humanos eran las Patrullas de Autodefensa Civil o los Comisionados Militares, y tras considerar el carácter con que éstos operaban, el marco cronológico de las diferentes denuncias y el *modus operandi* en cada uno de los hechos denunciados, la Comisión decidió, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de su Reglamento vigente a la época, acumular los casos y referirse a ellos en un mismo informe.

1399. En el Informe de Fondo No. 59/01, la formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Lleve a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar las circunstancias de las ejecuciones extrajudiciales y las tentativas de ejecución extrajudicial de cada una de las víctimas, las violaciones relacionadas y para sancionar a los responsables.
2. Adopte las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales reciban una adecuada y oportuna reparación por las violaciones aquí establecidas.
3. Adopte las medidas necesarias para que las víctimas de las tentativas de ejecución extrajudicial reciban una adecuada y oportuna reparación por las violaciones aquí establecidas.
4. Evite efectivamente el resurgimiento y reorganización de las Patrullas de Autodefensa Civil.
5. Que se promuevan en Guatemala los principios establecidos en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones, de promover y

proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos" adoptada por Naciones Unidas, y se tomen las medidas necesarias para que se respete la libertad de expresión de quienes han asumido la tarea de trabajar por el respeto de los derechos fundamentales, y para que se proteja su vida e integridad personal.

1400. Informe No. 59/01, el 24 de abril de 2006, la CIDH por Resolución 1/06, resolvió rectificar el Informe citado, en el sentido de declarar que el 28 de junio de 1990 los señores Remigio Domingo Morales y Rafael Sánchez, fueron detenidos por miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil siendo el mismo día conducidos al Hospital de Huehuetenango para ser atendidos por heridas múltiples corto contundentes que presentaban, egresando ambos del hospital el día 3 de julio de 1990. La citada Resolución fue notificada al Estado de Guatemala y a los peticionarios y publicada a continuación del Informe N° 59/01.

1401. El 8 de octubre de 2013, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 59/01. Los peticionarios no aportaron información.

1402. El Estado en su respuesta se refirió al Caso 10.626 (Remigio Domingo Morales y Rafael Sánchez) y expresó que si los peticionarios consideraban que sus derechos habían sido violados por parte del Estado durante el conflicto armado interno, estaba establecido y funcionando el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), cuyo fin era resarcir a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante dicho conflicto, siempre y cuando cualifiquen para la reparación de conformidad con los criterios del Programa.

1403. En relación con la recomendación cuarta del Informe 59/01, el Estado reiteró que las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron disueltas por el Decreto 143-96 del Congreso de la República de Guatemala de fecha 28 de noviembre de 1996 y que el proceso de desarme de las PAC había sido verificado por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, (MINUGUA).

1404. Respecto a la quinta recomendación, el Estado manifestó "que está organizado para garantizar a todos sus habitantes el goce de sus derechos y libertades, preceptuados en la Constitución Política de Guatemala [y], que constituyen el imperativo ético-jurídico del ordenamiento jurídico interno". En este sentido, señaló que "garantiza el derecho de libertad de expresión de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional".

1405. El 5 de diciembre de 2014 y el 28 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

1406. El 28 de octubre de 2015, el Estado reiteró la información presentada en el año 2013 ante la CIDH referente al Caso 10.626 (Remigio Domingo Morales y Rafael Sánchez) en cuanto a la cuarta y quinta recomendación. Asimismo, el Estado reafirmó que, según los resultados obtenidos de investigaciones realizadas, el señor Domingo Morales y el entonces menor Rafael Sánchez no fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o tentativas de ejecuciones extrajudiciales y, por consiguiente no habría causa alguna para otorgar una reparación a los familiares de dichas personas.

1407. El 13 de octubre de 2016, la CIDH solicitó nuevamente información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 11 de noviembre de 2016, el Estado señaló nuevamente lo expuesto por la CIDH en la Resolución No. 1/06 de fecha 24 de abril de 2006. Al respecto, el Estado solicitó a la Comisión corregir Informe No. 59/01 toda vez que considera que las recomendaciones formuladas en el mismo quedan sin efecto, y que la CIDH debió formular las recomendaciones que fuesen idóneas en concordancia con la supuesta violación al derecho a la integridad física de las víctimas. Así, el Estado mantiene su oposición a las solicitudes por parte de la CIDH sobre las recomendaciones formuladas respecto a los señores Remigio Morales y Rafael Sánchez, toda vez que ha sido demostrado que dichas personas no fueron víctimas de ejecución extrajudicial. En particular, el Estado solicitó a la CIDH que considere la inactividad procesal por parte de los peticionarios y declare el archivo del caso.

1408. Hasta la fecha, los peticionarios no han presentado información actualizada.

1409. La CIDH toma nota de la información proporcionada por el Estado, y al respecto, reitera lo rectificado por la Comisión a través de Resolución 1/06 de fecha 24 de abril de 2006 en relación al Informe No. 59/01 publicado y aprobado el 7 de abril de 2001, en cuanto al error material cometido sobre los hechos del caso 10.626, así como las conclusiones enunciadas. Por otro lado, la Comisión recuerda lo establecido en el Informe No. 59/01 en cuanto a la decisión de acumular estos casos y referirse a ellos en un mismo informe y en concreto observa que no cuenta con suficiente información por parte del Estado sobre el cumplimiento de las recomendaciones en relación a los casos 10.627; 11.198(A); 10.799; 10.751 y 10.901. En este sentido, en ejercicio de su competencia, la Comisión insta al Estado a proporcionar información detallada sobre el cumplimiento de estos puntos.

1410. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. A la fecha de cierre de este informe, ninguna de las partes ha presentado información.

1411. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

**Caso 9.111, Informe No. 60/01, Ileana del Rosario Solares Castillo, Ana María López Rodríguez<sup>137</sup> y Luz Leticia Hernández (Guatemala)**

1412. En el Informe de fondo No. 60/01 de fecha 4 de abril de 2001, la CIDH concluyó que el Estado de Guatemala había violado los derechos de Ileana del Rosario Solares Castillo, Ana María López Rodríguez y Luz Leticia Hernández a la vida (artículo 4), la integridad personal (artículo 5), la libertad personal (artículo 7), las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo y 25) en conjunción con la obligación de garantizar los derechos protegidos en la Convención, según se establece en el artículo 1(1) de la misma. Lo anterior como resultado de la captura y posterior desaparición forzada de Ileana del Rosario Solares Castillo, Ana María López Rodríguez y Luz Leticia Hernández a manos de agentes del Estado guatemalteco, los días 25 de septiembre de 1982 la primera y 21 de noviembre de 1982 las segundas.

1413. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Desarrolle una imparcial y efectiva investigación de los hechos denunciados que determine las circunstancias y destino de las señoritas Ileana del Rosario Solares Castillo, Ana María López Rodríguez y Luz Leticia Hernández, que se establezca la identidad de los responsables de su desaparición y se les sancione conforme a las normas del debido proceso legal.

2. Adopte medidas de reparación plena de las violaciones constatadas, que incluyen: medidas para localizar los restos de las señoritas Ileana del Rosario Solares Castillo, Ana María López Rodríguez y Luz Leticia Hernández; los arreglos necesarios para facilitar los deseos de su familia con respecto al lugar de descanso final de sus restos; y una reparación adecuada y oportuna para los familiares de la víctima.

1414. En el presente caso, el Estado suscribió el 19 de diciembre de 2007 un acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH en su Informe de Fondo No. 60/01 con los familiares de la víctima Ileana del Rosario Solares Castillo, y el 14 de octubre de 2010 con los familiares de la víctima Ana María López Rodríguez.

<sup>137</sup> El Estado informó en nota de fecha 18 de diciembre de 2012 que el nombre correcto de la víctima es Ana María López Rodríguez y no María Ana como estaba consignado en el Informe de la CIDH.

1415. Los familiares de la víctima Luz Leticia Hernández Agustín han informado al Estado que previo a consensuar una reparación económica o medidas de reparación moral, el Estado debe entregar los restos de Luz Leticia.

1416. El 8 de octubre de 2013, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 60/01.

1417. Respecto de la primera recomendación, esto es, investigar los hechos denunciados sobre la desaparición forzada de Ileana del Rosario Solares Castillo, Ana María López Rodríguez y Luz Leticia Hernández ocurridas en 1982, determinar los responsables y sancionarlos, el Estado informó que ante el Ministerio Público se encontraban dos expedientes de investigación (Expediente MP001/2006/12842 por la desaparición forzada de Ileana del Rosario Solares Castillo y Expediente MP001/2006/67766 por la desaparición forzada de Ana María López Rodríguez y de Luz Leticia Hernández) y que las investigaciones continuaban abiertas. Los peticionarios informaron que tienen conocimiento de que el Ministerio Público continúa con la investigación pero que aún no se ha iniciado proceso penal en contra de ninguno de los responsables.

1418. En relación con la segunda recomendación, respecto a adoptar medidas de reparación, que incluyen: medidas para localizar los restos de las tres mujeres detenidas desaparecidas en 1982 y facilitar los deseos de sus familias sobre el lugar de descanso final de sus restos, el Estado ha informado anteriormente que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) -organización no gubernamental, autónoma, técnico-científica-, habría realizado diligencias de exhumación y que al concluir los estudios correspondientes la FAFG proporcionaría el resultado de las exhumaciones. Los peticionarios refirieron que a la fecha no han sido localizados los restos de Ana María López Rodríguez.

1419. El 5 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a las partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 9 de enero de 2014, el Estado informó a la CIDH con respecto al componente de reparación adecuada y oportuna para los familiares de las víctimas Ileana del Rosario Solares Castillo y Ana María López Rodríguez, lo siguiente (basándose en el grado de cumplimiento de los acuerdos suscritos):

<b>Compromisos derivados de los acuerdo de cumplimiento de recomendaciones contenidos en el Informe No. 60/01</b>	<b>Familiares de Ileana del Rosario Solares Castillo</b>	<b>Familiares de Ana María López Rodríguez</b>
Reconocimiento de la responsabilidad Internacional y petición de perdón	Cumplido	Cumplido
Develación de placa conmemorativa en memoria de la víctima	Cumplido	En proceso
Pago de reparación económica	Cumplido	Cumplido
Capital semilla constitución de una fundación	Cumplido	Cumplido
Reproducción de CD con biografía de la víctima y resumen del caso	Cumplido	No aplica
Reproducción de folleto educativo	No aplica	En proceso
Bolsas de estudio	No aplica	Cumplido
Impulsar aprobación de Ley 3.590 (Que Crea Comisión de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos)	En proceso	En proceso
Impulsar juicio y sanción de los responsables de las desapariciones forzadas	En proceso	En proceso
Construcción de un muro en la plaza de la USAC	En proceso	No aplica

1420. Con respecto a Luz Leticia Hernández, el Estado establece que los familiares decidieron no suscribir una negociación.

1421. La familia de Ana María López Rodríguez estuvo de acuerdo con lo señalado por el Estado en cuanto a las reparaciones relacionadas con ésta.

1422. El 5 de enero de 2015, la CIDH recibió una comunicación por parte de los peticionarios en la que informan que la situación de impunidad continúa, debido a que continúa el retardo injustificado en el inicio del proceso judicial en contra de los responsables de la desaparición forzada de Luz Leticia Hernández y Ana María López Rodríguez.

1423. El 11 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Los peticionarios no presentaron información. Por su parte, el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2015, el Estado reiteró la información suministrada en su última comunicación e informó que, a pesar de las diligencias efectuadas para identificar y sancionar a los responsables, no se ha logrado esclarecer los hechos del presente caso.

1424. El 13 de octubre de 2016, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 11 de noviembre de 2016, el Estado afirmó su interés desde la COPREDEH de retomar los compromisos adoptados tal como lo es en el caso: a) develación de placa conmemorativa; b) reproducción de folletos educativos; c) impulsar la aprobación de Ley 3.590; y d) investigar y sancionar.

1425. En relación a la develación de placa conmemorativa en memoria de Ana María López, el Estado manifestó estar consciente que las medidas adoptadas han sido escasas y su seguimiento no ha sido constante, sin embargo, informa su intención de coordinar a la brevedad posible una reunión con las víctimas y sus representantes con el objeto de establecer la logística para la ejecución del presente compromiso. En cuanto a la reproducción de folletos educativos, el Estado señaló que por medio de la Dirección General de Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional solicitó a los peticionarios presentar una propuesta de la publicación a realizarse, sin embargo, ésta no ha sido presentada. Al respecto, el Estado manifestó que retomará durante el año 2017 las conversaciones con los peticionarios, a efecto de acordar estrategias pertinentes.

1426. En cuanto al compromiso relacionado con el impulso para la aprobación de la Ley 3.590, el Estado señaló que actualmente dicha iniciativa de ley se encuentra con los dictámenes favorables de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Así, ambos dictámenes se encuentran en la etapa de ser conocidos por el Pleno del Congreso de la República para su revisión y aprobación.

1427. Por último, en cuanto al compromiso de investigar y sancionar, el Estado informó que continúa con las acciones para identificar y sancionar a los responsables conforme a la legislación vigente, sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio Público, no se ha podido individualizar y sancionar a los responsables. Como consecuencia, la COPREDEH ha hecho distintos acercamientos con representantes del Ministerio Público con el objetivo de generar un mecanismo de coordinación constante para el seguimiento de los casos del sistema. Asimismo, el Estado sostuvo que se encuentra trabajando en la conformación de mecanismos de coordinación integrados por el COPREDEH, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Sociedad Civil, con el propósito de acordar reuniones periódicas para dar seguimiento a la realización de exhumaciones para la búsqueda, identificación y entrega de restos de las personas desaparecidas.

1428. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. A la fecha de cierre de este informe, ninguna de las partes ha presentado información.

1429. Al respecto, la Comisión valora las acciones del Estado en un esfuerzo de avanzar con el cumplimiento de las recomendaciones y concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas anteriormente. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

**Caso 11.382, Informe No. 57/02, Trabajadores de la Hacienda San Juan, Finca “La Exacta” (Guatemala)**

1430. En el Informe No. 57/02 de fecha 21 de octubre de 2002, la CIDH concluyó que el Estado guatemalteco había faltado al cumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 1(1) de la Convención, y había violado, en conjunción con el artículo 1(1) de la Convención: el derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención, en lo referente a Efraín Recinos Gómez, Basilio Guzmán Juárez y Diego Orozco; el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 4 de la Convención, en cuanto a Diego Orozco, a todo el grupo de trabajadores ocupantes y sus familias, que sufrieron el ataque del 24 de agosto de 1994, y especialmente a las once personas que sufrieron graves lesiones: Pedro Carreto Loayes, Efraín Guzmán Lucero, Ignacio Carreto Loayes, Daniel Pérez Guzmán, Marcelino López, José Juárez Quinil, Hugo René Jiménez López, Luciano Lorenzo Pérez, Felix Orozco Huinil, Pedro García Guzmán y Genaro López Rodas; el derecho a la libertad de asociación consagrado por el artículo 16 de la Convención, en cuanto a los trabajadores de la finca La Exacta que organizaron una asociación laboral para exponer sus demandas laborales a los propietarios y administradores de la finca La Exacta y a los tribunales guatemaltecos y que sufrieron represalias por ese motivo; el derecho del niño a la protección especial estipulada en el artículo 19 de la Convención, en lo que se refiere a los menores que estuvieron presentes durante la incursión del 24 de agosto de 1994; el derecho a un debido proceso y a la protección judicial protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención, en cuanto a los trabajadores organizados que procuraron acceso a recursos judiciales en relación con sus demandas laborales, y en cuanto a las víctimas de los sucesos del 24 de agosto de 1994 y sus parientes que procuraron justicia en relación con esos sucesos. Asimismo, concluyó que el Estado de Guatemala había violado los artículos 1, 2 y 6 de la Convención sobre la Tortura en relación con la tortura sufrida por Diego Orozco.

1431. La Comisión formuló al Estado de Guatemala las siguientes recomendaciones:

1. Que inicie una investigación rápida, imparcial y eficaz en relación con los hechos ocurridos el 24 de agosto de 1994 para poder detallar, en una versión oficial, las circunstancias y la responsabilidad del uso de fuerza excesiva en dicha fecha.
2. Que adopte las medidas necesarias para someter a las personas responsables de los hechos del 24 de agosto de 1994 a los procesos judiciales apropiados, que deben basarse en una plena y efectiva investigación del Caso.
3. Que repare las consecuencias de las violaciones de los derechos enunciados, incluido el pago de una justa indemnización a las víctimas o sus familias.
4. Que adopte las medidas necesarias para garantizar que no se produzcan futuras violaciones del tipo de las que tuvieron lugar en el presente Caso.

1432. El 9 de junio de 2003 las partes suscribieron un “Convenio de bases para el Cumplimiento del Estado de Guatemala de las Recomendaciones de la CIDH” y el 24 de octubre de 2003 suscribieron un Convenio de Reparación Económica: Además suscribieron un *addendum* donde el Gobierno se comprometió a erogar 950,000.00 quetzales por concepto de reparación económica.

1433. El 12 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 9 de enero de 2015, el Estado reiteró la información suministrada en su comunicación anterior del año 2013 y especificó que el compromiso referente a la construcción de un monumento que dignifique la memoria de las víctimas y el mejoramiento de la infraestructura escolar en las comunidades del presente caso, no ha podido cumplirse debido al cierre del Fondo Nacional para la Paz, entidad que estaba a cargo del cumplimiento de dicho punto. Debido a lo anterior, el Estado afirmó que las funciones de dicho Fondo serán asumidas por el Ministerio de Desarrollo Social, entidad que retomará a la brevedad los compromisos referidos.

1434. El 28 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Al respecto, los peticionarios respondieron el 21 de octubre de 2015 informando en relación a la investigación, juicio y sanción de los responsables, que a la fecha se desconoce si el juez ordenó la detención o si han sido capturados los sindicatos identificados según información suministrada por el Estado en años anteriores, debido a la falta de información proporcionada por el Estado.

1435. En relación al compromiso de otorgamiento de 96 viviendas, los peticionarios reconocen los esfuerzos y diligencias realizadas por COPREDH, ya que representan avances y resultados importantes, sin embargo señalan que actualmente, de las 52 viviendas cuyos subsidios fueron aprobados por el Fondo para la Vivienda FOPAVI en el 2013, se empezaron a construir 19 en su primera fase y para finalizarlas se está a la espera que FOPAVI realice un segundo desembolso de fondos. Así mismo, agregan que para el momento, 40 expedientes están pendientes de aprobación por la Junta Directiva de FOPAVI y 4 no fueron recibidos por esta entidad argumentando la necesidad de realizar un nuevo trámite. Por lo que se estaría a la espera de la construcción de las 44 viviendas.

1436. En relación a los compromisos referentes a la construcción de un monumento en memoria de las víctimas y el mejoramiento de la infraestructura escolar, los peticionarios informan que, a pesar que el Ministerio de Desarrollo Social asumió la construcción del monumento e infraestructura escolar luego de haberse cumplido el cierre del Fondo Nacional para la Paz, este compromiso sigue sin cumplirse debido a que COPREDEH no ha realizado las diligencias necesarias. Finalmente, en cuanto al compromiso sobre el acceso a los servicios de agua potable, señalan que el Estado no ha brindado información sobre las gestiones realizadas a pesar de haber transcurrido 2 años y medio desde la fecha que el Instituto de Fomento Municipal INFOM estableció para el inicio del proyecto.

1437. El 28 de octubre de 2015, el Estado comunicó a la CIDH sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones. Al respecto informa que se ha logrado individualizar de forma certera la identidad de varios de los sindicatos, como Hary Omar Hernández Chan, Pedro Castro Acabal, Luis Fernando Tobar Mejía, Evitter Orellana Fajardo y Armando Rodolfo Orellana Flores; razón por la cual la Fiscalía Distrital de Coatepeque ha solicitado informes a distintas entidades para determinar el paradero o dirección actual de dichas personas, sin embargo agrega que no se ha obtenido oportuna respuesta por lo que la Fiscalía reiterará los requerimientos. Asimismo, el Estado informa que dentro de las diligencias a practicar, se solicitará ante el Juez contralor la reiteración de la orden de aprehensión en contra de los sindicatos ya plenamente individualizados, se requerirá órdenes de allanamiento, inspección y registro con el objetivo de hacer efectivas las órdenes de aprehensión, y se realizará una revisión del expediente de mérito para que en su momento se realice una desconexión de causas, debido a que en el mismo proceso de investigación se tuvo como hecho inicial una supuesta Usurpación, en la cual se podría tener como sindicatos a personas que podrían ser testigos presenciales o víctimas de lesiones graves de los hechos violentos en contra de campesinos en la Hacienda San Juan. En referencia al compromiso de construcción de las viviendas, el Estado recalca que el FOPAVI realizó el primer desembolso correspondiente al 30% del valor del proyecto de construcción de las primeras 52 viviendas, y se iniciaron con la construcción el 6 de mayo de 2015; respecto a los 32 expedientes restantes, señala que por razones de presupuesto, los estudios socioeconómicos concluyeron en febrero de este año declarándose los mismos como elegibles y actualmente la COPREDEH se encuentra realizando las gestiones pertinentes.

1438. En relación a los otros compromisos de construcción el Estado participa que se encuentran pendientes de ser retomados, y que la COPREDEH llevará a cabo una reunión con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social con el objeto de coordinar las acciones por realizar en relación a estos compromisos. De la misma forma, en cuanto al compromiso de acceso al agua potable, el Estado señala que dicho proyecto se encuentra programado para ser ejecutado en un mediano plazo por la Dirección de Aguas Subterráneas del INFOM.

1439. El 13 de octubre de 2016, la Comisión solicitó información sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 11 de noviembre de 2016, los peticionarios y el Estado presentaron respectivamente información actualizada.

1440. Los peticionarios indicaron que por parte de los representantes de las víctimas desde mayo hasta agosto de 2016 se ha solicitado en varias oportunidades a la COPREDEH que convoque una reunión a FOPAVI, con altas autoridades, a efecto de darle seguimiento al convenio específico, informar a FOPAVI sobre la obligación que tiene el Estado de cumplir con el compromiso de vivienda y agilizar el trámite para que se proceda a realizar el segundo desembolso de fondos para continuar y concluir la construcción de las 52 viviendas aprobadas, así como la aprobación de los restantes 44 subsidios habitacionales. Sin embargo, según informaron los peticionarios, hasta el momento no ha obtenido una respuesta por parte de la COPREDEH. Finalmente, los peticionarios señalaron que durante el año 2016 el Estado no ha brindado ninguna información sobre acciones llevadas a cabo para cumplir con el compromiso de investigación, juicio y sanción de los responsables.

1441. El Estado en relación a las recomendaciones establecidas en los literales 1) y 2), informó que dentro del expediente MP132-1994-200 se ha solicitado al Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Coatepeque, orden de detención contra 6 supuestos responsables, que no ha sido ejecutada debido a la imposibilidad de ubicar a los responsables. Asimismo, indicó que se han realizado una serie de diligencias para determinar que estas personas laboraban en la Policía Nacional con el objeto de lograr su identificación en calidad de sindicados.

1442. Por otro lado, en relación a las recomendaciones establecidas en los literales 3) y 4), el Estado presentó información sobre las acciones realizadas para avanzar en su cumplimiento. En este sentido, respecto al compromiso de construir viviendas, el Estado especificó que se han presentado 53 expedientes de familias para el subsidio gubernamental ante el Fondo para la Vivienda-FOPAVI, los cuales han sido aprobados y a la presente fecha se han entregado a las familias 19 viviendas. Así, el Estado designó a un consultor externo para darle seguimiento al presente compromiso ante el FOPAVI, esperando lograr la construcción de las demás viviendas. Respecto al compromiso de la construcción para un monumento que dignifique la memoria de las víctimas y estructura escolar, el Estado a través del COPREDEH aclaró que gestionará estos compromisos durante el año 2017 ante las instancias correspondientes.

1443. El 21 de abril de 2017, los peticionarios presentaron información sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones. En relación a las recomendaciones 1) y 2), informaron que a pesar de que el Estado cuenta con la información exacta de los supuestos responsables de los hechos, hasta la fecha no han ejecutado la orden de detención. Asimismo, indicaron que el Ministerio Público aún no ha reiterado al Juez contralor la orden de detención, lo que, según los peticionarios, manifiesta la falta de compromiso del Estado con la investigación. Adicionalmente, valoraron positivamente que COPREDEH se encuentra impulsando un nuevo mecanismo de coordinación con el Ministerio Público para proporcionar atención prioritaria al presente caso.

1444. En relación a los compromisos de vivienda, los peticionarios informaron que el FOPAVI aprobó la construcción de 52 viviendas, y que para la primera semana del año 2017, se habían terminado 16 de las 19 viviendas que comenzaron a construir en agosto de 2015. Sin embargo, a pesar de que no se ha realizado la entrega oficial de las mismas, 17 viviendas ya se encuentran habitadas por las familias beneficiarias. Indicaron además, que COPREDEH ha entregado 171.500 quetzales correspondientes a 49 viviendas y quedó pendiente que se realice otro aporte previo de 10.500 quetzales de las 3 viviendas restantes. Asimismo, los peticionarios informaron que falta que FOPAVI desembolse 1.274.000 quetzales correspondientes a la construcción de las 33 viviendas restantes. Reconocieron que COPREDEH y FOPAVI han desembolsado hasta la fecha 717.000 quetzales para la construcción de las 19 viviendas y manifestaron que no es cierto que el Estado haya desembolsado 250.000 quetzales. Señalaron que solicitaron en varias ocasiones conversar con el Presidente de COPREDEH para que realice una reunión con FOPAVI, para que éste agilice el desembolso de los fondos faltantes y se aprueben los 44 expedientes restantes. Los peticionarios consideraron que el compromiso de vivienda ha sido cumplido parcialmente.

1445. Al respecto de las otras medidas de reparación, los peticionarios valoraron positivamente la comunicación del Estado, mediante la cual expresaron que durante el año 2017 se realizarían las gestiones necesarias para la construcción del monumento que dignifique la memoria de las víctimas y el mejoramiento de la infraestructura escolar en las comunidades del presente caso. Adicionalmente, observaron que el Estado

no hizo referencia, en la información suministrada, a la medida de reparación sobre el acceso al agua potable. Recordaron que desde el año 2013 se había anunciado que el Instituto de Fomento Municipal INFOM, sería el ente encargado de comenzar con las labores de perforación de los pozos, pero transcurridos más de tres años, no se han comenzado dichas labores; por lo que estiman que el Estado no ha realizado las gestiones ni el seguimiento correspondiente a este proyecto. Por todo lo anterior, los peticionarios consideran que las otras medidas de reparación siguen sin cumplirse.

1446. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

1447. El 21 de septiembre de 2017, el Estado presentó información sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones. En relación al compromiso de vivienda, el Estado informó reiteró información presentada con anterioridad e indicó que el 10 de abril de 2017, se llevó a cabo una reunión entre COPREDEH y FONAVI, en la cual se informó que la empresa encargada de construir las 19 casas se encuentra inactiva por ejecución de fianza, debido al incumplimiento de este proyecto. Asimismo, indicó que dicha constructora debía finalizar el proyecto, por lo que FOPAVI tiene que revisar la fianza y activar la empresa, de lo contrario, los peticionarios tendrían que seleccionar a otra constructora. El Estado señaló que según la evaluación externa realizada por FONAVI, la primera fase de ejecución del proyecto se encuentra cumplido en un 11%. Lo anterior fue informado a los peticionarios, los cuales se comprometieron con el personal de COPREDEH a dar seguimiento del proyecto y a presentar un acta en la cual se haga constar el cumplimiento total de la primera fase del proyecto.

1448. Respecto con la construcción del monumento, el Estado informó que COPREDEH continúa coordinando con el Fondo de Desarrollo Social, MIDES dicha construcción. Por otro lado, en relación con las recomendaciones establecidas en los literales 1) y 2), el Estado informó que la Dirección de Investigaciones Criminalistas, DICRI, cuenta con mayor información para la individualización de los presuntos responsables, e incluso con la dirección de algunos de los sindicatos, por lo que procederá a solicitarle al Juez Contralor que reitere la orden de aprehensión y las órdenes de allanamiento, inspección y registro de sus viviendas. Además indicó que se realizará una revisión del expediente para clarificar la viabilidad de la “desconexión” de la causa que dio origen a los hechos violentos. Por otro lado, en relación al compromiso de acceso al agua potable, el Estado expresó que COPREDEH continúa dando seguimiento al proyecto con el apoyo de INFOM.

1449. El 20 de septiembre, los peticionarios informaron que en relación a la investigación, juicio y sanción de los responsables, el Ministerio Público no ha realizado las diligencias pertinentes, ni ha solicitado al Juez Contralor reiterar la orden de aprehensión en contra de los sindicatos, y resaltaron que el Estado ha indicado que ejecutará las ordenes de aprehensión y allanamiento desde el año 2015, sin que a la fecha las haya hecho efectivas. En relación al compromiso de vivienda, reiteraron la información suministrada con anterioridad e indicaron no tener observaciones adicionales. En relación con la construcción de un monumento que dignifique la memoria de las víctimas y acceso al agua potable, los peticionarios manifestaron su descontento y preocupación por la falta de avances concretos en el cumplimiento de estas medidas. Adicionalmente, manifestaron su insatisfacción por la falta de información en referencia a la medida de reparación sobre infraestructura escolar.

1450. Los peticionarios también indicaron que el Estado no ha señalado el resultado de las gestiones para el impulso del mecanismo anunciado el año pasado para la coordinación de COPREDEH con el Ministerio público para darle atención prioritaria y seguimiento al presente caso.

1451. Al respecto, la Comisión observa que no han existido avances sustanciales recientes en la ejecución de las recomendaciones formuladas hace más de diez años, e insta al Estado a avanzar de manera más ágil en la finalización de la implementación de las medidas recomendadas. Al mismo tiempo, la Comisión insta al Estado a aportar información sobre la constitución y funcionamiento del mecanismo de coordinación entre COPREDEH y el Ministerio Público para la atención prioritaria de los asuntos en etapa de seguimiento, a dar atención prioritaria al avance en la construcción de las viviendas y acceso al agua potable.

1452. Por lo expuesto, la CIDH toma nota de la información presentada por las partes e insta al Estado a avanzar de manera ágil hacia el cumplimiento integral de las recomendaciones. En consecuencia, la Comisión concluye que se han cumplido en forma parcial las recomendaciones reseñadas y seguirá supervisando los puntos pendientes.

### **Caso 11.312, Informe de solución amistosa No. 66/03, Emilio Tec Pop (Guatemala)**

1453. El 10 de octubre de 2003, mediante Informe No. 66/03, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Emilio Tec Pop. En resumen, los peticionarios habían denunciado que el 31 de enero de 1994, Emilio Tec Pop, de 16 años de edad, se dirigía del municipio del Estor, departamento de Izabal, hacia la cabecera departamental de Cobán, Alta Verapaz, y en horas de la madrugada fue detenido por individuos desconocidos. Treinta y dos días después, el 3 de marzo del mismo año, las autoridades del destacamento militar del Estor entregaron a Emilio Tec Pop a sus familiares. Los peticionarios en este Caso afirmaron que el menor fue detenido contra su voluntad y maltratado física y psíquicamente, denunciando que los soldados amenazaron de muerte a Emilio, lo golpearon y le picaron las manos con un cuchillo.

1454. En el acuerdo de solución amistosa, el Estado se comprometió a 1) Reconocer la responsabilidad del Estado; 2) Otorgar reparación y asistencia a la víctima consistente en el pago de una indemnización de US\$ 2,000.00 y dotar un capital semilla de granos básicos al señor Emilio Tec Pop a fin de mejorar su nivel de vida y, 3) Investigar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados. De acuerdo a la información aportada por las partes, consta que el Estado dio cumplimiento a los compromisos relacionados con el reconocimiento de responsabilidad internacional, la reparación y la asistencia, quedando pendiente únicamente la cláusula de justicia. En ese sentido, únicamente se encuentra pendiente de cumplimiento lo siguiente:

#### **V. INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

Con sujeción al ordenamiento interno guatemalteco y de conformidad con sus obligaciones internacionales, el Estado de Guatemala se compromete a promover la investigación de los hechos y con los resultados obtenidos, a enjuiciar tanto civil como penal y administrativamente a las personas que, en cumplimiento de funciones estatales o prevalecidos de poder público, resulten responsables de los hechos reconocidos en este acuerdo y/o en caso que de las investigaciones no resulte probada la participación de elementos o agentes del Estado en estas violaciones, deducir las responsabilidades penales y civiles de aquellas personas particulares que hayan participado y ejecutado los ilícitos respectivos.

La COPREDEH, se reserva el derecho de repetir en contra de las personas o agentes del Estado que resultaren responsables los daños y perjuicios ocasionados a dicha persona.

1455. El 4 de octubre de 2013, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa.

1456. Respecto al compromiso de investigación y sanción de los responsables, los peticionarios plantearon que la información aportada por el Estado no permite establecer avances concretos y significativos en la investigación, juicio y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos de Emilio Tec Pop. El Estado por su parte indicó que continúa dando seguimiento a las investigaciones penales orientadas a enjuiciar a los responsables de la detención arbitraria de Emilio Tec Pop.

1457. El 10 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento del punto pendiente del acuerdo. El 9 de enero de 2015, el Estado presentó información en la que establece que hasta la fecha no se ha podido individualizar a ninguna persona como responsable de los hechos ocurridos y que tan pronto se tenga avances sobre la investigación, la misma será entregada a la CIDH. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta por parte de los peticionarios.

1458. El 1 de octubre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada sobre el cumplimiento del punto pendiente del acuerdo. El 14 de octubre de 2015, en respuesta a dicha solicitud, los peticionarios declaran que según los informes presentados en los últimos años, el Estado no ha presentado información que muestre avances significativos y en la investigación de los hechos. Asimismo manifiestan que el Estado “no ha realizado acciones y diligencias en la investigación, identificación y sanción de los responsables”.

1459. Por su parte, el 21 de octubre de 2015, el Estado informó que no se ha podido lograr un avance en las investigaciones penales e individualizar a los responsables de los hechos del presente caso, ya que según las diligencias realizadas, hasta la fecha no han sido denunciados en el Ministerio Público, ni en otro órgano jurisdiccional competente. Por lo anterior, el Estado manifiesta que considera necesario que la víctima presente la denuncia correspondiente.

1460. El 13 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada sobre el cumplimiento del punto pendiente del acuerdo. El 11 de noviembre de 2016, ambas partes presentaron la información solicitada.

1461. Los peticionarios manifestaron no tener información toda vez que el Estado no ha proporcionado información alguna en relación al compromiso pendiente de investigación, juicio y sanción de los responsables. Igualmente manifestaron su preocupación por la total impunidad en la que sigue el caso a pesar de los 22 años transcurridos desde los hechos denunciados y los más de 13 años de la suscripción del acuerdo de solución amistosa.

1462. Por su parte, el Estado indicó haber sostenido una serie de reuniones con las instituciones involucradas, con el objeto de llegar a diversas soluciones que permitan el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. En particular, el Estado señaló no haber localizado dentro de los registros del Departamento del Sistema Informático de la Gestión de Casos del Ministerio Público, la denuncia por los hechos expuestos, por lo cual, con el propósito de establecer los acontecimientos denunciados por el señor Manuel Tec, solicitó al Ministerio Público; a la Corte Suprema de Justicia y al Juzgado de Paz del Municipio del Estor, información respecto a dicha denuncia. Sin embargo, estas instituciones indicaron no contar dentro de sus registros con denuncia alguna que haya dado lugar a la persecución penal.

1463. Igualmente, como parte del seguimiento al compromiso pendiente, la COPREDEH sostuvo reunión en agosto de 2016 con la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, durante la cual se mostró interés en la creación de una Fiscalía que dé seguimiento a los casos tramitados ante el Sistema Interamericano la cual se espera pueda operar a corto plazo para avanzar las investigaciones en los casos de violaciones de derechos humanos.

1464. Al respecto, la CIDH manifiesta su preocupación por la información presentada por las partes y recuerda nuevamente al Estado tiene el deber de impulsar de oficio este tipo de investigaciones. En este sentido, el Estado no puede alegar desconocimiento de los hechos, especialmente cuando firmó un acuerdo con la parte peticionaria que en su sección de antecedentes recuenta que “el 31 de enero de ese año cuando Emilio Tec Pop se dirigía del municipio del Estor, departamento de Izabal, hacia la cabecera departamental de Cobán, Alta Verapaz, en horas de la madrugada fue detenido por individuos desconocidos, treinta y dos días después, el 3 de marzo del mismo año, las autoridades del destacamento militar del Estor, municipio del departamento de Izabal, entregaron al menor Emilio Tec Pop a sus familiares”. Asimismo, en la sección III del acuerdo, el Estado reconoció que su responsabilidad institucional devino por el incumplimiento del deber impuesto por el Artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana, además de la violación a los artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño) y 25 (garantías de protección judicial) de dicha Convención<sup>138</sup>.

<sup>138</sup> Ver, CIDH Informe de Solución Amistosa No. 66/03, Caso 11.312, Emilio Tec Pop, Guatemala, 10 de octubre de 2003.

1465. El 17 de abril de 2017, los peticionarios informaron que hasta la fecha el Estado no ha mostrado avances en lo referente a la investigación, juicio y sanción de los responsables. Enfatizaron que las investigaciones realizadas por el Estado se han enfocado en verificar si existe una denuncia de los hechos en los registros de la Corte Suprema de Justicia, el Juzgado de Paz de Izabal y el Ministerio Público, y no en la debida identificación, juicio y sanción de los responsables. Los peticionarios valoraron positivamente que el Estado haya compartido la jurisprudencia en lo referente al deber de impulsar de oficio este tipo de investigación, por lo cual observan un cambio de criterio y posición del Estado y consideraron que es una muestra la voluntad política del Estado de avanzar en la investigación, mediante la creación de mecanismos interinstitucionales entre el Ministerio Público y COPREDEH.

1466. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento.

1467. El 11 de septiembre de 2017, los peticionarios indicaron que no cuentan con información actualizada, toda vez que durante el presente año, el Estado no ha brindado información sobre las diligencias realizadas para la captura, juicio y sanción del responsable, quien cuenta con una Sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos desde el 30 de julio de 1997. Los peticionarios también indicaron que el Estado no ha señalado el resultado de las gestiones para el impulso del mecanismo anunciado el año pasado para la coordinación de COPREDEH con el Ministerio público para darle atención prioritaria y seguimiento al presente caso.

1468. Hasta la fecha, el Estado no ha presentado información actualizada.

1469. Derivado de lo anterior, la CIDH hace un llamado al Estado guatemalteco a realizar todas las acciones necesarias para investigar penal y disciplinariamente a las personas que cometieron las violaciones contra Emilio Tec Pop y queda a la espera de información detallada sobre los avances en este compromiso. Al mismo tiempo, la Comisión insta al Estado a aportar información sobre la constitución y funcionamiento del mecanismo de coordinación entre COPREDEH y el Ministerio Público para la atención prioritaria de los asuntos en etapa de seguimiento.

1470. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente relativo a la investigación y sanción de los responsables.

#### **Caso 11.766, Informe de solución amistosa No. 67/03, Irma Flaquer (Guatemala)**

1471. El 10 de octubre de 2003, mediante Informe No. 67/03, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Irma Flaquer. De acuerdo a los antecedentes del mismo, el 16 de octubre de 1980 la periodista Irma Flaquer Azurdia fue secuestrada mientras se conducía en un vehículo acompañada de su hijo Fernando Valle Flaquer en la Ciudad de Guatemala. En el hecho resultó herido Fernando Valle Flaquer, muriendo posteriormente en el Hospital General San Juan de Dios. Desde esa misma fecha se ignora el paradero de Irma Flaquer. Asimismo, argumentan los peticionarios que durante el proceso de investigación del caso por las autoridades guatemaltecas se destacó que si bien el Gobierno de aquella época lamentó formalmente la presunta muerte de Flaquer, hubo pocos esfuerzos oficiales para investigar el hecho. Además, los mínimos esfuerzos de investigación oficial fueron excusados por una ley de amnistía que en 1985 otorgó un indulto general, diluyendo tanto la responsabilidad como la participación que le correspondería a algún sector del aparato estatal.

1472. El 2 de marzo de 2001, las partes acordaron una solución amistosa del caso. Por medio del acuerdo de solución amistosa, el Estado reconoció su responsabilidad institucional por los hechos del Caso y reconoció la necesidad de “proseguir y reforzar firmemente las acciones administrativas y legales orientadas a establecer la identidad de los responsables, establecer la localización de la víctima, así como la aplicación de las correspondientes sanciones penales y civiles”.

1473. A continuación, se detalla el estado que para el Informe Anual de 2015 tenía cada uno de los compromisos asumidos para el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, seguido de un resumen de la

información actualizada proporcionada por las partes y el respectivo análisis de la Comisión sobre el cumplimiento de las mismas.

<b>Compromisos establecidos en el acuerdo de solución amistosa suscrito entre las partes el 2 de marzo de 2001.</b>	<b>Estado de Cumplimiento</b>
1. Proseguir y reforzar firmemente las acciones administrativas y legales orientadas a establecer la identidad de los responsables, establecer la localización de la víctima, así como la aplicación de las correspondientes sanciones penales y civiles.	En proceso de cumplimiento.
3.a. Crear una "Comisión de Impulso" del proceso judicial, compuesta por dos representantes de COPREDEH y dos de la Sociedad Interamericana de Prensa.	Cumplido.
3.b. Crear una beca de estudio para periodismo.	En proceso de cumplimiento.
3.c. Erigir un monumento al periodista sacrificado por el derecho a la libre expresión, simbolizado por la personalidad de Irma Marina Flaquer Azurdia.	Cumplido.
3.d. Nombrar una sala de una biblioteca pública que incorpore todo el material relacionado a la obra de dicha periodista.	Cumplido.
3.e. Designar el nombre de una vía pública.	Cumplido.
3.f. Crear una cátedra universitaria sobre Historia del Periodismo.	Cumplido.
3.g. Remitir cartas a los familiares pidiendo perdón.	Cumplido.
3.h. Desarrollar un curso de capacitación y reinserción a la sociedad para las reclusas del Centro de Orientación Femenina (COF).	Cumplido.
3.i. Recopilar y publicar un volumen con columnas, escritos y reportajes, que representen el mejor sentido periodístico de la desaparecida periodista.	Cumplido.
3.j. Realizar un documental.	Cumplido.
3.k. Realizar un acto público de dignificación.	Cumplido.

1474. En el Informe No. 67/03, la Comisión expresó que había sido informada sobre la satisfacción de los peticionarios -SIP- por el cumplimiento de la gran mayoría de los puntos del acuerdo. Asimismo, de acuerdo a la información aportada por las partes durante el seguimiento del Informe, se estableció que el Estado dio cumplimiento a la entrega de la carta de perdón a los familiares de la víctima en un acto público realizado el 15 de enero de 2009. En su Informe Anual 2015, la CIDH declaró cumplido el punto 3 f. del acuerdo de solución amistosa<sup>139</sup>.

1475. En ese sentido, el Estado continúa pendiente el cumplimiento de lo siguiente: a) Creación de una beca de estudio para periodismo.

1476. El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo. Los peticionarios no presentaron información. Por su parte, el Estado sólo se refirió a la reparación consistente en la creación de una beca de estudios para periodismo, e informó que no ha sido posible cumplir con este compromiso debido a que los procedimientos del Fideicomiso Nacional de Becas y Créditos del Estado (FINABECE) exigen que se indique el tipo de beca y las condiciones en que será entregada. Por lo anterior, señaló que sería necesario realizar la respectiva modificación al acuerdo de solución amistosa entre las partes.

1477. El 5 de octubre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada sobre el cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo. La parte peticionaria respondió el 2 de noviembre de 2015, indicando que

<sup>139</sup> Ver CIDH, Ver CIDH, Informe Anual 2015, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 1047.

29 de octubre de 2015 se realizó una conferencia telefónica con los representantes de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) de Guatemala, en la que se conversó sobre la creación de una beca de estudio para periodismo y de una cátedra universitaria sobre Periodismo. Asimismo, advirtieron que estarían a la espera de los resultados del Estado sobre las consultas de los representantes de COPREDEH con organismos locales de educación y planificación para poner en marcha las recomendaciones aún pendientes.

1478. El 6 de noviembre de 2015, el Estado informó que a fin de cumplir con el compromiso del establecimiento de la beca, había sostenido una videoconferencia con los representantes de la víctima, en la cual se exploraron otras alternativas para llevar a cabo el cumplimiento. Adicionalmente, se celebró una reunión con el Fideicomiso Nacional de Becas y Créditos Educativos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia a fin de identificar los requisitos para su creación.

1479. En relación a la investigación, el Estado reiteró su voluntad de continuar adelantando las acciones necesarias para la averiguación de la verdad. En ese sentido, el Estado informó que la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, solicitó información al archivo histórico de la Policía Nacional con el objetivo de fortalecer la hipótesis de los hechos. El Estado informó que ha realizado otras averiguaciones, y que de acuerdo al registro migratorio de la Dirección General de Migración, no aparecen movimiento migratorios de la víctima, y de acuerdo al Administrador de Cementerios Nacionales, no existe registro de haber sido inhumados los restos de la víctima en ningún cementerio dentro del territorio guatemalteco a octubre de 2015. El Estado indicó que tiene planificado realizar una inspección ocular y planimetría del lugar de los hechos, citar a declarar a un testigo, y realizar una investigación hemerográfica sobre la labor periodística de la señora Flaquer y un peritaje del contexto político de la época.

1480. El 13 de octubre de 2016, la CIDH solicitó a las partes información sobre el cumplimiento de los compromisos pendientes. El 11 de noviembre de 2016, el Estado presentó la información solicitada. Los peticionarios, por su parte, no presentaron dicha información.

1481. En relación al compromiso referente a la creación de la beca de estudio para periodismo, el Estado señaló su intención de convocar una reunión con los peticionarios y representantes del Fideicomiso, para lograr determinar lo relacionado a las condiciones y requisitos para poder otorgar dicha beca, en vista de la necesidad de cumplir con los requerimientos de la entidad encargada de ejecutar el compromiso. Asimismo, el Estado indicó que facilitará las acciones necesarias ante el programa FINACEBE, para que con recursos de este fondo se pueda proporcionar la beca.

1482. El 9 de mayo de 2017, los peticionarios informaron que han avanzado en los diálogos con COPREDEH para realizar seguimiento a los compromisos pendientes. Asimismo, los peticionarios indicaron que consideran cumplido el compromiso de la creación de una beca universitaria para periodismo, y finalmente, destacaron positivamente la voluntad del Estado de dar cumplimiento a los compromisos faltantes.

1483. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa.

1484. El 19 de septiembre de 2017, el Estado reiteró información sobre extremos del acuerdo que la CIDH ya ha considerado cumplidos. En su comunicación, el Estado reiteró su compromiso en el cumplimiento de los puntos pendientes e indicó que está avanzando en lograr un acercamiento con los peticionarios para avanzar en ese sentido.

1485. Tomando en consideración la información suministrada por los peticionarios, la CIDH declara el cumplimiento total del punto 3.b) del acuerdo de solución amistosa, referido a la creación de la beca de periodismo.

1486. Por lo expuesto, la Comisión observa que de los doce compromisos asumidos por el Estado, ha dado cumplimiento a once, quedando pendiente el relativo a la justicia. En ese sentido, la Comisión toma nota de la información presentada por el Estado e invita a las partes a presentar información detallada y actualizada en relación a las acciones administrativas y legales realizadas por el Estado orientadas a establecer la identidad de los responsables, establecer la localización de la víctima, así como la aplicación de las correspondientes sanciones penales y civiles.

1487. En este sentido, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los dos puntos pendientes.

**Caso 11.197, Informe de solución amistosa No. 68/03, Comunidad San Vicente de los Cimientos (Guatemala)**

1488. El 10 de octubre de 2003, mediante el Informe No. 68/03, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso “Comunidad San Vicente de los Cimientos”. En resumen, el 24 de agosto de 1993 el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), en representación de 233 familias indígenas presentaron una denuncia ante la CIDH donde alegaron que durante el conflicto armado, el sector denominado Los Cimientos, ubicado en el Chajul, departamento Quiché, donde vivían 672 familias indígenas propietarias del sector, fue invadido en el año 1981 por el Ejército de Guatemala, estableciendo un cuartel en la zona. Luego de amenazas de bombardeo a la comunidad y ante el asesinato de dos comuneros, la comunidad Los Cimientos fue obligada a abandonar sus tierras en febrero de 1982, dejando sus cosechas de maíz, frijoles, café y sus animales. Un mes después de la huida, algunas familias retornaron al lugar encontrando que sus viviendas habían sido quemadas y sus pertenencias robadas. Posteriormente, la comunidad Los Cimientos fue expulsada nuevamente en 1994. El 25 de junio de 2001, la comunidad fue despojada violentamente de sus tierras, de las cuales era legalmente propietaria, por vecinos y otras personas, aparentemente apoyados por el Gobierno.

1489. El 11 de septiembre de 2002, las partes acordaron una solución amistosa del caso y establecieron los siguientes compromisos:

1. El Estado se comprometió a comprar a favor de todos los integrantes de la comunidad Los Cimientos Quiché, conformada en la asociación civil “Asociación Comunitaria de Vecinos Los Cimientos Xetzununchaj”, la finca San Vicente Osuna y su anexo la finca Las Delicias, colindantes y ubicadas en el municipio de Siquinalá, departamento de Escuintla.
2. La comunidad Los Cimientos, por conducto de la Asociación civil “Asociación Comunitaria de Vecinos Los Cimientos Xetzununchaj”, y el Gobierno identificarán, negociarán dentro de los sesenta días posteriores al asentamiento de la comunidad, proyectos de carácter urgente que reactiven su capacidad productiva y de carácter económico y social, con el propósito de contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad y teniendo presente los resultados del estudio agrológico realizado y el reconocimiento de los linderos y mojones de las fincas San Vicente Osuna y su anexo la finca las Delicias.
3. Los propietarios individuales, poseedores y causahabientes de las fincas que conforman la comunidad de Los Cimientos como parte de los compromisos que se derivan de la adquisición que el Gobierno hará a su favor de las fincas denominadas San Vicente Osuna y su anexo la finca Las Delicias, cederán sus actuales derechos de propiedad, posesión y hereditarios al Fondo de Tierras, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 inciso h de la Ley del Fondo de Tierras, Decreto No. 24-99.
4. El Estado será responsable del traslado de las 233 familias de la comunidad Los Cimientos, Quiché, así como de sus bienes, desde la Aldea Batzulá Churranchó, municipio de Santa María Cunén, departamento Quiché, hasta la finca San Vicente Osuna y su anexo la finca las Delicias, ubicadas en el municipio de Siquinalá, departamento de Escuintla.

5. El Gobierno proporcionará los recursos necesarios para dotar de alimentación a las 233 familias durante el tiempo que dure su traslado y ubicación en su nuevo asentamiento, así como el acompañamiento de una unidad móvil, debidamente equipada durante el tiempo que dure el traslado y durante el tiempo en que no exista una instalación formal de salud en su nuevo asentamiento, con el fin de atender cualquier emergencia.

6. Para la ubicación y asentamiento de la comunidad, el Gobierno de la República otorgará ayuda humanitaria, techo mínimo y servicios básicos.

7. El Gobierno de Guatemala se comprometió a gestionar la creación de una comisión de impulso que se encargará de verificar el estado del proceso legal seguido en contra de las personas involucradas en los hechos del 25 de junio del 2001 contra los propietarios de las fincas Los Cimientos y Xetzununchaj.

1490. En su Informe Anual de 2016, la CIDH declaró el cumplimiento de los puntos 1 y 4 del acuerdo de solución amistosa<sup>140</sup>.

1491. En relación con el punto número 7 sobre la gestión para la creación de una comisión de impulso que verifique el estado del proceso legal seguido en contra de las personas involucradas en los hechos del 25 de junio del 2001 contra los propietarios de las fincas Los Cimientos y Xetzununchaj, el Estado manifestó que el hecho de que no se haya condenado a nadie en el presente caso, no implica que no se haya gestionado el avance respectivo; de hecho, refirió que se capturó e investigó a Mateo Hernández Sánchez (única persona condenada en el presente caso). Por su parte, los peticionarios señalaron que el Estado sigue sin cumplir con su compromiso de investigación, juicio y sanción de los responsables, ya que este caso está en total impunidad desde hace más de 12 años. Asimismo, lamentaron que la única persona sometida a juicio en el presente caso haya quedado libre por la indebida diligencia del Ministerio Público en este caso.

1492. Sobre la cesión de los actuales derechos de propiedad, posesión y hereditarios al Fondo de Tierras (punto 3 del acuerdo), los peticionarios señalaron que la información comunicada por el Estado en 2013, es la misma a la informada desde 2010, por lo que concluyen que el Estado no ha avanzado en el cumplimiento de este compromiso. Asimismo, refirieron que se encuentran a la espera de que la COPREDEH los convoque para continuar y concluir con este proceso.

1493. Sobre el otorgamiento de viviendas, contenido en el compromiso “Para la ubicación y asentamiento de la comunidad, el Gobierno de la República otorgará ayuda humanitaria, techo mínimo y servicios básicos” (punto 6 del acuerdo), los peticionarios informaron que para octubre de 2013, de un total de 103 expedientes de beneficiarios de vivienda, se habían aprobado 64 estudios socioeconómicos, y que quedaba pendiente la aprobación de los restantes 38. Manifestaron también que están a la espera de que el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUA VI) declare y apruebe las 103 viviendas.

1494. Por otra parte, los peticionarios informaron que el “Convenio Específico” planteado al Estado para la implementación y cumplimiento de algunas medidas de reparación continuaba sin suscribirse.

1495. El 10 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Al respecto, el Estado respondió el 9 de enero de 2015, informando que el punto 4 relacionado con el traslado de las 233 familias hacia la finca San Vicente Osuna y su anexo Las Delicias en el municipio de Siquinela, ya ha sido cumplido por el Estado. De igual forma, el Estado manifestó que el 29 de diciembre de 2014 el FOPAVI (Fondo para la Vivienda) emitió orden de pago mediante la cual se transfiere la cantidad de dos millones doscientos cuarenta mil quetzales en concepto de subsidio a la entidad que llevará a cabo las primeras 64 viviendas de los beneficiarios. El Estado informó de igual forma que la aprobación de los 38 restantes se dará en la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva a realizarse en el mes de

<sup>140</sup> Ver CIDH, Ver CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 1322.

enero de 2015. Con respecto al punto 7, el Estado reiteró la información suministrada en oportunidades anteriores.

1496. El 5 de octubre de 2015, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo. El 22 de octubre de 2015, los peticionarios aportaron información en la cual señalan que en relación al compromiso referente a la investigación, juicio y sanción de los responsables, el Estado no ha continuado con una efectiva investigación de otros posibles responsables de los hechos del presente caso, y no ha presentado información detallada y actualizada sobre el estado actual del proceso penal y situación legal de los otros sindicados, reiterando que la única persona llevada a juicio ha quedado en libertad. Sobre la cesión de los derechos de propiedad, indican que no cuentan con información actualizada toda vez que el Estado no ha convocado reuniones ni informado nada al respecto.

1497. En relación al otorgamiento de 103 viviendas, concuerdan con lo indicado por el Estado en el informe de 9 de enero de 2015 sobre la orden de pago y transferencia de fondos por la FOPAVI para la construcción de 64 viviendas de los beneficiarios. En este sentido señalan que de las 64 viviendas aprobadas, se empezaron a construir 23 en abril de 2015 y fueron entregadas en septiembre de 2015. Por lo cual, falta la construcción de 41 de las viviendas aprobadas, así como están pendientes de aprobación 39 expedientes a pesar de lo indicado por el Estado en su informe del 9 de enero de 2015. Finalmente, los peticionarios recalcaron su preocupación en cuanto al Convenio Específico ya que, a la fecha, la COPREDEH no ha presentado una contrapropuesta con sus observaciones finales a pesar de haberse comprometido en mayo de 2012.

1498. Por su parte, el Estado presentó información el 30 de octubre de 2015. En la comunicación, el Estado menciona, en concordancia con lo expuesto por los peticionarios, los avances realizados en relación a la transferencia de fondos para la construcción de las 64 viviendas, así como la terminación de la primera fase de la construcción. Igualmente, el Estado menciona que, en la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de FOPAVI, serán aprobados los aportes previos para iniciar la construcción de las viviendas para los 38 beneficiarios restantes.

1499. El 13 de octubre de 2016, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo.

1500. El 11 de noviembre de 2016, el Estado informó sobre la compra de la Comunidad Los Cimientos Quiche, de la Finca San Vicente Osuna y su anexo, así como las Fincas Las Delicias, colindantes y ubicadas en el Municipio de Siquinalá, a favor de los integrantes. En este sentido, solicita se tenga por cumplido dicho compromiso.

1501. En cuanto al compromiso relacionado con el traslado de las 233 familias hasta la Finca San Vicente Osuna, el Estado señaló que en su momento se procedió al traslado de la totalidad de las familias a las Fincas San Vicente de Osuna y su anexo Las Delicias. Por lo cual considera que se debe tener por cumplido dicho punto. En cuanto al compromiso relacionado con la ayuda humanitaria, techo mínimo y servicios básicos, el Estado indicó que se han realizado gestiones encaminadas a dotar de vivienda a las víctimas del presente caso recalcando información aportada el 30 de octubre de 2015. Asimismo, el Estado explicó que la crisis política vivida por el Gobierno en el año 2015 desestabilizó entidades como el FOPAVI, razón por la cual no se ha logrado avanzar en la construcción de las viviendas.

1502. En cuanto al compromiso en materia de justicia, el Estado indicó que espera que con la creación del mecanismo de coordinación COPREDEH- Ministerio Público para la investigación de casos ante el Sistema Interamericano, se avance en este tema.

1503. El 14 de noviembre de 2016, los peticionarios sostuvieron que el 3 de mayo de 2016 se llevó a cabo una reunión con representante de la COPREDEH en la cual manifestaron su preocupación por el estado de cumplimiento del compromiso de vivienda, el cual se mantiene igual desde septiembre de 2015, y solicitaron que dicha institución convocara a una reunión a FOPAVI con presencia de los representantes de las víctimas a efecto de requerir agilizar el trámite para que se procediera a hacer el segundo desembolso

para continuar y concluir con la construcción de las 41 viviendas que hacen falta, así como la aprobación de los restantes 39 subsidios habitacionales. En esa oportunidad los peticionarios solicitaron, de la misma forma, a la COPREDEH a dar seguimiento al convenio específico pendiente de suscripción el cual contiene las medidas de reparación sobre servicios de agua, traslado del basurero, servicios de salud, reactivación del lavadero comunal, servicio de luz eléctrica para las viviendas, infraestructura escolar y, proyectos de reactivación económica.

1504. En concreto, los peticionarios indicaron que, desde mayo a septiembre de 2016, solicitaron la convocatoria a una reunión a FOPAVI; sin embargo, hasta el momento no se ha tenido respuesta por parte de la COPREDEH. Finalmente, los peticionarios indicaron no tener información sobre las acciones y diligencias llevadas a cabo para cumplir con el compromiso de investigación, juicio y sanción de los responsables de los hechos del presente caso.

1505. El 17 de marzo de 2017, el Estado informó sobre las 38 viviendas pendientes, que espera que en la próxima junta directiva se apruebe su construcción. Adicionalmente, el Estado informó que el 3 y 6 de marzo de 2017, COPREDEH se reunió con CALDH y FOPAVI; en dicha reunión FONAVI les indicó a las partes, que la empresa constructora se encuentra inactiva desde junio de 2016, debido al incumplimiento de la obra en la comunidad Finca la Exacta. Por lo anterior, FONAVI no puede realizar el desembolso de la segunda parte del monto acordado. En tal sentido, FONAVI actualmente se encuentra realizando una evaluación de empresas constructoras activas, para presentar nuevas alternativas a los beneficiarios. El Estado indicó que continuará dando seguimiento con FONAVI al presente punto, para lograr que la constructora cumpla con sus obligaciones. En referencia a las otras medidas de reparación, el Estado informó que los peticionarios habían priorizado la medida de vivienda, por lo que el luego de la construcción de las viviendas, el Estado le dará seguimiento con las empresas estatales que se encargan los servicios de agua, electricidad, basura, entre otros.

1506. El 20 de marzo de 2017, los peticionarios presentaron información adicional sobre el cumplimiento. En relación a la medida de reparación de vivienda, indicaron que está pendiente el desembolso de 1.568.000 quetzales para la construcción de las 41 viviendas restantes. Asimismo, los peticionarios recordaron que a la fecha está pendiente la aprobación de 39 expedientes de subsidios habitacionales. Por lo que le solicitaron a COPREDEH que realice las gestiones necesarias para que FOPAVI cumpla con la construcción de las 103 viviendas acordadas.

1507. El 17 de abril de 2017, el Estado reiteró la información suministrada el 17 de marzo de 2017.

1508. El 27 de abril de 2017, los peticionarios indicaron que en relación a la selección de la constructora, en su momento, FOPAVI les proporcionó un listado de empresas que cumplieran con los requisitos para que los peticionarios eligieran, por lo que no se les permitió elegir una empresa que no estuviera dentro del listado proporcionado. En relación a la reunión del 3 y 6 de marzo de 2017, informada por el Estado, indicaron que el asesor de CALDH fue convocado únicamente a la reunión del 6 de marzo y en dicha reunión se le informó debidamente de la inactividad de la constructora y el procedimiento a seguir. Asimismo, los peticionarios valoraron positivamente el compromiso de COPREDEH de mantener el contacto con FOPAVI para lograr que la constructora cumpla con sus obligaciones. Por todo lo anterior, los peticionarios observaron que el Estado ha cumplido parcialmente la medida de vivienda.

1509. En relación a las otras medidas de reparación pendientes, los peticionarios indicaron que ellos no habían priorizado las medidas de reparación, como menciona el Estado guatemalteco, y resaltaron que “para ellos todas e integralmente son prioritarias y necesarias”. Asimismo, los peticionarios le recordaron a la CIDH la importancia y prioridad de las medidas de reparación contenidas en el Convenio Específico propuesto. Adicionalmente, manifestaron que hasta la fecha no han logrado suscribir el mencionado Convenio y que se encuentran a la espera de una contrapuesta por parte de COPREDEH. Por todo lo anterior, los peticionarios indicaron que éstas medidas se encuentran pendiente de cumplimiento.

1510. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa. El 21 de septiembre de 2017, los peticionarios ratificaron la información suministrada el 27 de abril de 2017.

1511. Al respecto, la Comisión observa que no han existido avances sustanciales recientes en la implementación del acuerdo de solución amistosa, e insta al Estado a avanzar de manera más ágil en la implementación de la medida de vivienda, al mismo tiempo que en los demás compromisos pendientes, de manera que la ejecución de las cláusulas contenidas en el acuerdo se de manera paralela e integral.

1512. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

### **Caso 9.168, Informe de solución amistosa No. 29/04, Jorge Alberto Rosal Paz (Guatemala)**

1513. El 11 de marzo de 2004, mediante Informe No. 29/04, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en la petición “Jorge Alberto Rosal Paz”. De acuerdo a los antecedentes de la petición, el 12 de agosto de 1983 el señor Jorge Alberto Rosal Paz fue detenido mientras manejaba entre Teculután y la ciudad de Guatemala, a la fecha se desconoce el paradero de la víctima. El 18 de agosto de 1983 la CIDH recibió una petición presentada por la señora Blanca Vargas de Rosal denunciando al Estado de Guatemala por la desaparición forzada de su esposo.

1514. El 9 de enero de 2004, las partes acordaron una solución amistosa del caso. En el acuerdo el Estado reconoció su responsabilidad institucional por el incumplimiento impuesto por el artículo 1(1) de la Convención Americana de Derechos Humanos de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana además de los artículos 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19 y 25 de dicha Convención. Asimismo, manifestó el arribo de una solución amistosa tiene como fundamento principal la búsqueda de la verdad y la administración de justicia, la dignificación de la víctima; la reparación resultante de la violación a los derechos humanos de la víctima, y el fortalecimiento del Sistema Regional de Derechos Humanos.

1515. El 15 de febrero de 2006, la señora Blanca Vargas de Rosal informó que el único compromiso cumplido por el Estado era el referente a reparación económica, quedando pendientes los compromisos relativos a educación, acciones para dignificar el nombre de la víctima, vivienda, investigación y justicia.

1516. El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo. El Estado indicó en relación a la Beca de María Luisa Rosal Paz: que aprobó un presupuesto para que María Luisa Rosal Paz realizara estudios de Maestría en la Universidad Mc Gill en Canadá, pero que ella ya había realizado con otros fondos, una maestría en Argentina. En relación a la beca de Jorge Alberto Rosal Vargas, el 18 de abril de 2012 el beneficiario solicitó una ampliación adicional de la beca para que se extendiera un año más su beca de estudio. Sin embargo, en audiencia ante la CIDH realizada el 3 de noviembre de 2012, el Estado indicó que no puede modificar nuevamente el compromiso adquirido y que se limitará a cumplir con lo aprobado en el contrato de financiamiento de fecha 17 de febrero de 2012. En relación al terreno para vivienda familiar: el Estado reiteró que ha propuesto a la peticionaria entregarle el monto en dinero del valor del inmueble conforme al avalúo realizado por el Registro de Información Catastral, propuesta que ha sido rechazada por la peticionaria por considerar que el dinero ofrecido no es suficiente. Finalmente, en relación al proceso de investigación, indicó que la investigación del caso sigue abierta.

1517. Los peticionarios informaron que María Luisa Rosal y Jorge Alberto Rosal han recibido parte de las becas. En el caso de María Luisa indicaron que queda pendiente otorgar el resto de la beca respecto de los estudios universitarios, y solicitaron que quede abierta la posibilidad de realizar los estudios universitarios en cualquier universidad y país<sup>141</sup>.

---

<sup>141</sup> El 2 de diciembre de 2011, el Estado informó que se había otorgado un financiamiento a través del FINABECE a María Luisa Rosal Vargas para recibir cursos preparatorios de francés previos a ingresar a una maestría en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Sin embargo, la beneficiaria informó el 26 de octubre de 2011 que no fue aceptada en el programa de maestría y solicitó se

1518. En cuanto al pago de la beca de Jorge Alberto Rosal, con respecto al cual se habría suscrito un contrato de financiamiento no reembolsable por US\$ 48,382.70<sup>142</sup>, los peticionarios agregaron que está pendiente el pago de US\$5,327.05 de los dos primeros años de nivel intermedio y por el atraso de los pagos efectuados no pudo dedicarse a su estudio a tiempo completo, provocando un retraso en los estudios. Señalaron que faltarían dos años de universidad para terminar la licenciatura y dos años de maestría.

1519. Respecto de la vivienda familiar, los peticionarios solicitaron que el Estado realice un nuevo avalúo comercial para que el valor del inmueble se ajuste a su valor real. Asimismo indicaron que la investigación sigue pendiente, y que no hay resultados concretos que respalden el cumplimiento del Estado al respecto.

1520. El 10 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 9 de enero de 2015, el Estado remitió información similar a la mencionada *supra* con respecto a la beca de estudios otorgada a Maria Luisa Rosal Vargas y con respecto a las investigaciones, que seguirían abiertas a nivel interno. Con respecto a Jorge Alberto Rosal Vargas, el Estado informó que en el año 2014 se gestionó y se aprobó el financiamiento de la beca de estudios, con hospedaje y alimentación, en una universidad en el exterior.

1521. El 28 de Septiembre de 2015, la Comisión solicitó información a las partes. El 21 de octubre de 2015, el Estado reiteró la información presentada anteriormente. En relación a las becas de estudio, indicó que no ha sido posible comunicarse con los hermanos Rosal Vargas. Asimismo informó que Maria Luisa Rosal Vargas no ha presentado este año ninguna solicitud para continuar sus estudios que pudiera ser analizada para su otorgamiento, y que actualmente se está a la espera que José Alberto Rosal Vargas concluya sus estudios en la Universidad donde cursa sus estudios. En relación al punto acordado sobre la vivienda familiar, el Estado insiste en lo mencionado en comunicación presentada el 14 de diciembre de 2012, en tanto no puede ofrecer una cantidad distinta a la que resultó del avalúo realizado el 13 de enero de 2007.

1522. El 13 de octubre de 2016, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El 11 de noviembre de 2016, el Estado presentó información referente a los avances llevados a cabo.

1523. En relación a las becas de estudio de los hijos del señor Jorge Alberto Rosal Paz, el Estado expresó que desde el 2010 se le solicitó a María Luisa Rosal que comunicara formalmente a la COPREDEH con copia a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala-SEGEPLAN, sobre su planificación de estudios visto que no logró realizar estudios en una universidad en Canadá; pero a la presente fecha no ha presentado el informe requerido. Igualmente, indica que la beneficiaria debía presentar solicitud para que se le otorgue financiamiento de estudios en Argentina y adjuntar constancia que no fue admitida en la universidad, información que a la fecha todavía no ha sido remitida. En base a lo anterior, el Estado solicitó que, por la falta de interés de la beneficiaria, se dé por cumplido el presente compromiso.

1524. En cuanto a Jorge Alberto Rosal, destacó que, en atención a lo acordado sobre este punto en el Acta de Compromiso y sus posteriores ampliaciones, el Estado ha cumplido con los desembolsos para la realización de los estudios intermedios en el bachillerato en Psicología en el Northern Virginia Community College equivalente a U.S.D. \$ 93,000. En relación a la petición presentada por el beneficiario para que se le cubra un año de estudios adicional, para llevar cursos preparatorios para ingresar a las siguientes Universidades en lugar de ingresar a la George Mason University como lo había solicitado originalmente; el Estado indicó que dichos montos y años de estudios no estaban contemplados en la solicitud original y en la

---

mantenga la beca y se cambie el lugar de estudios, hacia la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina. Sobre el particular, el Estado indicó que no era posible trasladar los fondos aprobados porque habría que realizar un nuevo contrato de becas con el FINABECE. Indicó que para resolver esta situación, se están programando varias reuniones con los peticionarios.

<sup>142</sup> Asimismo, atendiendo a una solicitud de los peticionarios, el 18 de julio de 2011, se realizó una ampliación de la beca, agregando un rubro no reembolsable en concepto de alimentación y hospedaje para el período abril - diciembre de 2011, por US\$ 857.50.

aprobación del financiamiento. Asimismo, el Estado reiteró que adicionalmente ha desembolsado a favor del beneficiario el monto total de la beca para estudios avanzados de cuatrocientos dieciséis mil seiscientos catorce quetzales (Q. 416,614.18), para estudiar Contabilidad en la George Mason University. En base a lo anterior, el Estado requiere que se dé por cumplido el presente compromiso.

1525. En relación a la vivienda familiar, el Estado reiteró información presentada en octubre de 2015 en cuanto al rechazo por parte de los peticionarios de la oferta realizada sobre la cantidad que resultó del avalúo del inmueble realizado el 13 de enero de 2007. En este sentido, propuso restablecer las reuniones de diálogo con los peticionarios para retomar las condiciones para darle cumplimiento a este compromiso. Finalmente, en relación a la investigación del presente caso, el Estado indicó que espera que con la creación del mecanismo de coordinación COPREDEH- Ministerio Público para la investigación de casos ante el Sistema Interamericano, se avance en este tema.

1526. El 29 de diciembre de 2016, la peticionaria informó que la beca de Maria Luisa Rosal sigue pendiente de cumplimiento. En relación a la beca de Jorge Alberto Rosal Vargas, la peticionaria informó que haría falta el pago de \$5, 327 dólares, que el beneficiario ya logró finalizar la carrera en la Universidad George Mason, y que estaría interesado en continuar sus estudios con una maestría. Con respecto a la vivienda familiar reconoció estar de acuerdo a lo informado por el Estado.

1527. El 27 de abril de 2017, el Estado reiteró que a la fecha la peticionaria no ha proporcionado el expediente de solicitud financiera requerido. Debido a la falta de interés mostrada, el Estado le solicitó a la CIDH dar por cumplido dicho compromiso. Respecto a la beca para Jorge Alberto Rosal Vargas, el Estado informó que el aludido se graduó de la Universidad de George Mason y está pendiente el pago de 5.327,05 dólares y la maestría. Adicionalmente informó que ha financiado los estudios por un monto total de 93.000 dólares. El Estado estimó improcedente las solicitudes posteriores, por lo que le solicitó a la CIDH dar por cumplido el presente compromiso. En cuanto a la vivienda familiar, el Estado informó que los peticionarios solicitaron la realización de un nuevo avalúo comercial, por lo que reiteró su disposición para retomar el diálogo con los peticionarios.

1528. Al respecto, la Comisión valora la información suministrada por las partes, y al mismo tiempo, insta a las partes a dialogar sobre los extremos faltantes para la finalización de la implementación del acuerdo de solución amistosa. En particular, la Comisión queda a la espera de información por parte del Estado sobre la posibilidad de cubrir el costo de una maestría para el beneficiario Jorge Alberó Rosal Vargas. En relación a Maria Luisa Rosal, la Comisión solicita que la parte peticionaria aporte a la Comisión la información pertinente antes de su próximo informe sobre el estado de cumplimiento con el fin de evaluar la implementación de la beca de estudios.

1529. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa. Hasta la fecha, ninguna de las partes ha presentado información.

1530. En virtud de lo expuesto, la CIDH saluda la voluntad del Estado de coordinar con los peticionarios reuniones de trabajo con el objeto de avanzar en el cumplimiento del compromiso relativo a la vivienda familiar. Por otro lado, la CIDH toma nota de la información presentada por las partes y al respecto, invita al Estado a avanzar de manera más ágil y expedita hacia el cumplimiento integral de los compromisos pendientes. En este sentido queda a la espera de información detallada y específica sobre los avances que resulten del mecanismo de coordinación COPREDEH- Ministerio Público en el presente caso.

1531. La CIDH valora los esfuerzos del Estado para dar cumplimiento al acuerdo y concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

**Petición 133-04, Informe de solución amistosa No. 99/05, José Miguel Mérida Escobar (Guatemala)**

1532. El 27 de octubre de 2005, mediante Informe No. 99/05, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en la petición “José Mérida Escobar”. En resumen, el 19 de febrero de 2004 la CIDH recibió una petición presentada por Amanda Gertrudis Escobar Ruiz, Fernando Nicolás Mérida Fernández, Amparo Antonieta Mérida Escobar, Rosmel Omar Mérida Escobar, Ever Obdulio Mérida Escobar, William Ramírez Fernández, Nadezhda Vásquez Cucho y Helen Mack Chan, denunciando al Estado de Guatemala por la ejecución extrajudicial de José Miguel Mérida Escobar el 5 de agosto de 1991. De acuerdo a la petición, el señor Mérida Escobar se desempeñaba como Jefe de la Sección de Homicidios del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional y estaba a cargo de la investigación criminal por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang. En el contexto de esta investigación criminal, el 29 de septiembre de 1990 concluyó que el principal sospechoso por el asesinato de Myrna Mack Chang, era miembro del Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial del Ejército de Guatemala. El 5 de agosto de 1991, el señor Mérida Escobar fue asesinado con disparos en la cabeza, cuello, torso izquierdo y brazo izquierdo, muriendo instantáneamente.

1533. El 22 de julio de 2005, las partes acordaron una solución amistosa del caso. En el acuerdo de solución amistosa, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 la Convención Americana. Entre los principales compromisos asumidos mediante el acuerdo de solución amistosa No. 99/05 se encuentra:

1. *Impulsar la investigación seria y efectiva de los hechos del Caso.*
2. *Instituir una beca para estudios policiales en el extranjero.*
3. *Elaborar una carta de reconocimiento de la responsabilidad internacional por parte del Estado de Guatemala de la ejecución extrajudicial de José Miguel Mérida Escobar se hará circular en el Diario Oficial y por Internet a las Agencias Internacionales.*
4. *Realizar las gestiones pertinentes para colocar una plaqueta en memoria del investigador policial José Miguel Mérida Escobar en las instalaciones del Palacio de la Policía Nacional Civil.*
5. *Promover las gestiones necesarias para determinar la viabilidad del cambio de nombre de la colonia Santa Luisa en el Municipio de San José del Golfo en el departamento de Guatemala por el nombre de José Miguel Mérida Escobar, lugar donde residió con su familia.*
6. *Realizar las gestiones para que se proporcione una pensión vitalicia a los padres de José Miguel Mérida Escobar, la señora Amanda Gertrudis Escobar Ruiz y el señor Fernando Nicolás Mérida Hernández, y una pensión a favor de su hijo menor Edilsar Omar Mérida Alvarado hasta que culmine sus estudios técnicos superiores.*
7. *Realizar las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Salud Pública, para que se le proporcione tratamiento psicológico a la señora Rosa Amalia López viuda de la víctima y el menor de los hijos Edilsar Omar Mérida Alvarado.*
8. *Llevar a cabo las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Educación, para que se le otorgue una beca de estudios de conformidad con el nivel educativo correspondiente, a favor del hijo mejor de la víctima Edilsar Omar Mérida Alvarado.*

1534. En su Informe Anual del 2013<sup>143</sup>, la CIDH valoró el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 la Convención Americana en el presente caso. Asimismo, valoró el cumplimiento de una serie de compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo de solución amistosa suscrito con los peticionarios. De igual forma, señaló que estaría pendiente de cumplimiento la investigación de los hechos del caso; la reglamentación de la beca “José Miguel Mérida Escobar” y; la publicación en agencias internacionales de la carta de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado.

<sup>143</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 829-834. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/annual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap2-D.pdf>

1535. El 10 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento. El 9 de enero de 2015, el Estado respondió con respecto a la beca de estudios policiales que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN) sugirió ampliar el acuerdo de solución amistosa para definir los detalles de la beca, por lo que, al momento de contar con la elaboración del proyecto, se trasladaría a la CIDH. Por otra parte, el Estado estableció que sigue pendiente la publicación en agencias internacionales de la carta de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado.

1536. El 16 de enero de 2015, el Estado presentó mayor información respecto a las investigaciones, señalando avances por parte del Ministerio Público y especificando que se señalará fecha y hora para el juicio oral en contra de los procesados, mismas que se estarían informando a la CIDH a la brevedad.

1537. El 5 de octubre de 2015, la CIDH volvió a solicitar a ambas partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 6 de noviembre de 2015, el Estado presentó su respuesta. En el comunicado el Estado reiteró que actualmente se encuentra pendiente el inicio del juicio oral y público en contra de los sindicatos, y agregó en relación al compromiso establecido en el inciso 1), que el día 16 de junio del presente año se hizo efectiva una orden de aprehensión de un sindicato tras haberse determinado su posible participación en el asesinato del señor Mérida Escobar. En este sentido, el Estado indicó que el último acusado fue ligado al proceso por delitos de asesinato y delitos contra los deberes y humanidad, estando pendiente la celebración de la Audiencia Intermedia, para posteriormente solicitar su acumulación con el expediente de los otros acusados. En relación a la publicación en agencias internacionales de la carta de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado, se manifestó en la comunicación que el Estado solicitó en octubre del presente año, a la agencia internacional de noticias Agence France Presse su colaboración para que circule en su página web la carta de disculpas y reconocimiento de responsabilidad otorgada por el Estado a los familiares de la víctima.

1538. El 13 de octubre de 2016, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de los compromisos pendientes. El 11 de noviembre de 2016, el Estado presentó información referente a los avances llevados a cabo. A la fecha de cierre del presente informe los peticionarios no han presentado la información solicitada.

1539. En relación a la investigación, el Estado presentó información respecto a las acciones realizadas por la Fiscalía Especial del Ministerio Público. Al respecto, recordó que en junio de 2014 se hicieron efectivas las órdenes de captura en contra de los 3 sindicatos, restando solo aquella emitida en contra del señor Edgar Lucas Martínez García. Con el fin de determinar el paradero de este último, el 15 de mayo de 2015 la Fiscalía Especial solicitó a la Policía Internacional -INTERPOL- la difusión de la notificación roja de orden de localización y aprehensión del sindicato. Por otro lado, el 13 de septiembre la misma Fiscalía solicitó al Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que los sindicatos aprehendidos sean juzgados por los delitos de asesinato, y delitos contra los deberes de la humanidad. En consecuencia, se tiene programado llevar a cabo la audiencia oral ante este Tribunal en contra de los sindicatos el día 28 de febrero de 2017.

1540. En relación a la beca para estudios policiales en el extranjero, el Estado reiteró información presentada respecto a las reuniones mantenidas con el Ministerio de la Gobernación, Policía Nacional Civil y la SEGEPLAN, en vista de las cuales esta última institución sugirió ampliar el acuerdo de solución amistosa con el propósito de buscar los mecanismos adecuados para dar cumplimiento a este compromiso. En este sentido, el Estado manifestó su disposición de retomar las reuniones de trabajo con las instituciones involucradas y los peticionarios para definir los detalles de la beca.

1541. Finalmente, en relación a la elaboración de una carta de reconocimiento de responsabilidad internacional, el Estado manifestó que no se pudo concretar los servicios de la agencia AFP Agence France Press, ya que en ese momento la COPREDEH no contaba con los recursos económicos que permitieran la publicación de dicha carta. En virtud de dicha situación, el Estado reiteró su voluntad de retomar las reuniones de trabajo con los peticionarios con el objeto de cumplir con este compromiso.

1542. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Los peticionarios presentaron información el 19 septiembre de 2017. Por su parte, el Estado presentó información actualizada el 12 de octubre de 2017.

1543. En relación al inciso 1) del acuerdo, los peticionarios informaron que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial, ha dado seguimiento al presente caso. Asimismo, reconocieron que se capturó y enjuició a un grupo de ex integrantes de la Policía Nacional, y con posterioridad se condenó a algunos procesados y se absolvió a otros implicados. Indicaron además, que dicho fallo fue apelado por los querellantes y el Ministerio Público por motivos de forma. A la fecha de cierre del presente informe, los peticionarios se encuentran esperando la resolución de la Sala de la Corte de Apelaciones.

1544. Con respecto a los incisos 2), 3), 4) ,5), 6) y 7) los peticionarios manifestaron que el Estado sigue sin llevar a cabo las acciones necesarias para su cumplimiento, y resaltaron que el Estado se limita simplemente a informar sobre la falta de cumplimiento. En cuanto al inciso 6) informaron además el fallecimiento de Amanda Gertrudis Escobar, madre de la víctima, por lo que estimaron burlado el acuerdo y manifestaron su preocupación sobre la falta de cumplimiento de la pensión con respecto al padre e hijo de la víctima.

1545. La CIDH reitera la falta de implementación de la medida de pensión en relación a Amanda Escobar y lamenta su fallecimiento, e insta al Estado a continuar avanzado de manera más expedita de manera que la esta medida de reparación no pierda su efecto útil en relación al padre e hijo de la víctima, de lo contrario no se podría tener por cumplido totalmente el acuerdo de solución amistosa.

1546. En lo que respecta al inciso 1) el Estado reiteró lo indicado en el informe presentado a la CIDH el 11 de noviembre de 2016, e indicó que el 28 de febrero de 2017 el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente inició el debate oral y público contra los sindicatos, y le solicitó al Ministerio Público mantenga informado al Estado sobre los avances en el proceso penal. En ese sentido, el Estado se comprometió a mantener informada a la CIDH sobre los avances que le sean proporcionados en el presente caso.

1547. En relación con el inciso 2) del acuerdo, el Estado reiteró lo indicado en escritos anteriores, informaron además, que a través de COPREDEH se solicitó que se formara un equipo de trabajo para que realice reuniones con los peticionarios con la finalidad de promover la realización de un proyecto para que se tomen las acciones necesarias para avanzar en el cumplimiento del presente punto. En cuanto al inciso 3) el Estado reiteró la información proporcionada en los informes anteriores y resaltó que cuando COPREDEH tenga los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento al presente punto, se le proporcionará la información a la CIDH.

1548. Al respecto, la CIDH saluda la iniciativa del Estado, y toma nota de los esfuerzos desplegados por el Estado para el comparecimiento de las personas sindicadas ante las autoridades judiciales para su procesamiento y queda a la espera de información adicional sobre los resultados de dichas actuaciones. Asimismo, la CIDH valora altamente los esfuerzos realizados para dar cumplimiento total a los compromisos pendientes establecidos en los incisos 1), 2) y 3), e insta Estado a seguir avanzando de manera eficaz con el cumplimiento de los puntos pendientes.

1549. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 10.855, Informe No. 100/05, Pedro García Chuc (Guatemala)**

1550. En el Informe No. 5/00 de fecha 24 de febrero de 2000, la Comisión concluyó que el Estado de Guatemala había incurrido en responsabilidad internacional por la ejecución arbitraria del señor Pedro García Chuc y la correspondiente violación de los derechos a la vida y protección y garantías judiciales, así como los otros derechos correspondientes consagrados en la Convención Americana. Consta de los antecedentes del caso, que el 5 de marzo de 1991, en el kilómetro 135 de la ruta a Occidente, Departamento

de Sololá, varios miembros de las fuerzas de seguridad del Estado capturaron al señor García Chuc en horas de la madrugada. Dos días después, el cadáver de la víctima fue localizado en el mismo lugar donde fue capturado, presentando varias perforaciones de bala. Se presume que la ejecución extrajudicial se debió a sus labores como Presidente de la Cooperativa San Juan Argueta R.L., así como su participación activa en la obtención de beneficios para su comunidad. La petición fue presentada por los familiares de la víctima y se enmarcó dentro de un total de cuarenta y seis peticiones recibidas por la Comisión entre los años 1990 y 1991 en las que se denunciaba al Estado por la ejecución extrajudicial de un total de 71 hombres, mujeres y niños, entre quienes se encontraba el señor García Chuc. Luego de la tramitación de los casos ante la CIDH, la Comisión decidió, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de su Reglamento, acumular dichos casos y proceder a resolverlos en forma conjunta.

1551. En el referido informe, la CIDH recomendó al Estado de Guatemala:

1. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar las circunstancias de las ejecuciones extrajudiciales y violaciones relacionadas en los Casos de las víctimas nombradas en la sección VII y para sancionar a los responsables de acuerdo con la legislación guatemalteca;

2. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas identificadas en el párrafo 289 reciban una adecuada y oportuna reparación por las violaciones aquí establecidas.

1552. El 18 de febrero de 2005 el Estado y los peticionarios suscribieron un “Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones. Caso 10.855. Pedro José García Chuc” y el 19 de julio de 2005 suscribieron un acuerdo sobre indemnización. El 27 de octubre de 2005, la CIDH publicó el Informe N° 100/05, sobre “Acuerdo de Cumplimiento”, del presente caso. Los compromisos asumidos por el Estado fueron los siguientes:

#### IV. CUMPLIMIENTO CON EL INFORME 39/00

##### A. Investigación, juicio y sanción de los responsables

-El Estado se compromete a desarrollar una inmediata, imparcial y efectiva investigación que establezca la identidad de los autores de las violaciones de los derechos humanos de la Víctima, incluyendo la de los miembros de los organismos judiciales que no hubieran cumplido con sus obligaciones, y que se impongan las sanciones que corresponden, cuando de conformidad con nuestro ordenamiento legal sea procedente.

-Dentro de este marco, COPREDEH impulsará las acciones necesarias ante el Ministerio Público a efecto de que se realice una investigación responsable por parte del Estado.

-El Estado se compromete a proveer a CALDH y a la Comisión, informes sobre el proceso de la investigación arriba detallada, en forma periódica.

##### B. Reparaciones

###### 1. Indemnización económica

a. El Estado reconoce que tiene una responsabilidad de reparar y de pagar una justa indemnización a los Peticionarios, bajo los parámetros establecidos por el derecho nacional e internacional.

b. El Estado se compromete a lograr un acuerdo con los Peticionarios, que definirá el monto y el plazo del pago de la indemnización económica, antes de finalizar el primer trimestre del año 2005.

c. Las Partes se comprometen a reunirse dentro de un mes de la firma del presente acuerdo en Guatemala, para discutir el tema de la indemnización económica y fijar un cronograma para asegurar cumplimiento del inciso (b) arriba indicado.

###### 2. Disculpas públicas

a. El Estado se compromete a hacer público su reconocimiento de responsabilidad institucional por las violaciones de los derechos humanos de la Víctima, y presentar disculpas públicas a sus familiares, a través de una declaración del Presidente de la

República, o en su defecto del Vicepresidente de la República o del Presidente de COPREDEH, en un acto público que se celebrará en la Ciudad de Guatemala (el “Acto Público”);

b. Las partes acuerdan que el Acto Público se celebrará dentro de un plazo de seis meses de la fecha de este acuerdo;

c. Las partes se comprometen lograr un acuerdo sobre el lugar, fecha y hora del Acto Público dentro de dos meses a partir de la fecha de este acuerdo;

d. El Estado se compromete a dar publicidad sobre el Acto Público a través de los esfuerzos del Departamento de Divulgación y Prensa de COPREDEH ante los medios de comunicación.

### 3. Recuperación de la memoria de la Víctima

Como reconocimiento a las diversas labores realizadas por el señor García Chuc en beneficio de su comunidad, el Estado se compromete a elaborar y colocar una plaqueta en memoria de la Víctima cuyo contenido y lugar en que será colocada serán definidos con los beneficiarios.

[...]

### ACUERDO SOBRE INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA. CASO 10.855 PEDRO JOSÉ GARCÍA CHUC

[...]

#### IV. CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LAS FAMILIAS GARCÍA YAX Y GARCÍA CHUC

El Estado, a través de COPREDEH, se compromete a brindar capacitación técnica a los beneficiarios sobre la creación y funcionamiento de una asociación para la inversión del fondo que se cancelará en concepto de indemnización económica. Dicha capacitación será impartida en la fecha y lugar que se acuerde con los peticionarios y será orientada idealmente en el funcionamiento de la micro y pequeña empresa.

#### V. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

El Estado, a través de COPREDEH, se compromete a otorgar los fondos necesarios para cubrir los honorarios profesionales que se generen en la constitución de la asociación anteriormente mencionada mediante escritura pública hasta su efectiva inscripción en el Registro Civil, así como la de su representante legal.

El Estado, a través de COPREDEH, se compromete a gestionar, preferentemente en el Departamento de Quetzaltenango, la ubicación y otorgamiento de un inmueble propiedad del Estado, en calidad de usufructo, para el funcionamiento de la asociación antes indicada, sin embargo de no existir bienes del Estado en dicho departamento, se realizarán las mismas gestiones para la ubicación y otorgamiento de un inmueble propiedad del Estado en el Departamento de Sololá. El usufructo será otorgado por un plazo de veinticinco años, de acuerdo a la legislación aplicable.

1553. En el Informe No. 100/05 la CIDH concluyó que el Estado cumplió con el acto público de reconocimiento de responsabilidad, y la instalación de una placa de recuperación de la memoria. Ambos eventos tuvieron lugar el 15 de julio de 2005. Asimismo, la CIDH en su Informe Anual de 2007 declaró el cumplimiento parcial del acuerdo, tomando en consideración la comunicación de los peticionarios de fecha 29 de noviembre de 2007, según la cual el Estado avanzó significativamente en el cumplimiento de los compromisos asumidos quedando pendiente de cumplimiento únicamente los compromisos relacionados con a) Otorgar en usufructo un bien inmueble; b) Capacitación técnica a las familias García Yax y García Chic; c) Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de Pedro José García Chuc.

1554. Respecto a los compromisos pendientes, el Estado ha manifestado que la mayor dificultad para cumplirlos es la ausencia y desinterés manifestado por los peticionarios en asistir a las reuniones convocadas y presentar la documentación requerida para agilizar los trámites y hacer efectivos los compromisos. Por ejemplo, el Estado especificó que la modificación del Acta de Constitución de ASINDE (Asociación Indígena para el Desarrollo Empresarial) para el nombramiento del nuevo representante, no ha sido posible debido a que el peticionario no habría presentado la misma para su modificación. Respecto de la entrega de un inmueble donde se constituya la sede de ASINDE, el Estado especificó que los peticionarios no habrían hecho la solicitud formal al Concejo Municipal para la debida aprobación de la entrega del terreno. Asimismo señaló que los familiares del señor Pedro García Chuc han manifestado su negativa en querer continuar con el caso en referencia.

1555. Por su parte, los peticionarios señalaron que el Estado no ha emprendido acciones para cumplir con sus compromisos consistentes en el otorgamiento del inmueble a la ASINDE y en la capacitación técnica a las familias García Yax y García Chuc. Asimismo manifestaron que la falta de avances concretos y significativos en el cumplimiento de los compromisos pendientes, se constata con el hecho de que el Estado sigue reiterando la información enviada a la Comisión desde 2011.

1556. El 12 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información actualizada sobre el cumplimiento. Los peticionarios por su parte, no han presentado información actualizada. El 9 de enero de 2015, el Estado manifestó que la investigación sigue abierta a nivel interno. Con respecto a la ASINDE, el Estado afirmó que además de no haberse presentado el Acta de consolidación para su modificación como explicado *supra*, tampoco se habría gestionado la inscripción de la misma ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), lo que ha dado como resultado que se incurra en cobros de pagos moratorios, los cuales siguen aumentando, por no haber sido cancelados. Frente a este punto, el Estado informó que los peticionarios han pedido que el Estado asuma dichos pagos moratorios con el fin de poder cancelar la Asociación. Al respecto, el Estado precisó que si bien su compromiso era la constitución y financiamiento de la ASINDE, el incremento de dichos pagos se debería a la inactividad de los peticionarios de no cumplir con los requisitos legales y que la misma no debe ser atribuida al Estado.

1557. Con respecto a la entrega del inmueble para el funcionamiento de la Asociación, el Estado reiteró que los peticionarios siguen sin dar cumplimiento al requerimiento formulado por el Ministerio de Finanzas Públicas mencionado *supra*.

1558. Sobre la capacitación técnica a las familias García Yax y García Chuc, el Estado afirmó que giró solicitud al Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) solicitando apoyo en la facilitación gratuita de capacitación para el personal de la Asociación, quien manifestó su anuencia para brindar dichas capacitaciones. Sin embargo, las mismas no pudieron llevarse a cabo según lo informado por el Estado, ya que tanto el representante legal, como otros integrantes de la Asociación y miembros de las familias, se habrían visto imposibilitados de asumir el funcionamiento de la Asociación por tener otras responsabilidades profesionales o familiares en distintos departamentos del país. El Estado señaló además que los peticionarios no habrían entregado reportes en relación al manejo de los recursos económicos y de las actividades emprendidas en la Asociación y que también habrían comunicado que no pueden continuar con la misma y que quisieran solicitar su cancelación.

1559. Finalmente el Estado señaló que ha convocado a los peticionarios para dar seguimiento a los compromisos pendientes de cumplimiento y que no habría sido posible contar con su asistencia.

1560. El 1 de octubre de 2015, la Comisión solicitó información actualizada sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. El 4 de noviembre de 2015, el Estado presentó información en relación al compromiso relativo a la investigación, juicio y sanción de los responsables, indicando que el caso continúa en investigación y que no cuenta con la colaboración de los familiares de la víctima, informando que ningún familiar fue testigo presencial del hecho y que no han querido participar en el proceso aportando información que contribuya a individualizar a los responsables.

1561. En cuanto a los compromisos relacionados con la Asociación ASINDE, el Estado manifiesta que la Asociación no ha funcionado como se esperaba debido a la inactividad de los peticionarios y que siguen pendientes e incrementándose por mora, los pagos de los impuestos adeudados ante la SAT y los honorarios de los profesionales contratados, adicionalmente el Estado recalca que los peticionarios han expresado en diversas ocasiones ante la COPREDEH no estar interesados en continuar con el proceso. Asimismo, informó que la COPREDEH ha realizado visitas y convocado a los peticionarios para dar cumplimiento a los compromisos pendientes, sin embargo no ha sido viable. Por otro lado, en relación al compromiso referente al inmueble para el funcionamiento de la Asociación ASINDE en calidad de usufructo, el Estado indicó que los peticionarios no han proporcionado la información solicitada por el Ministerio de Finanzas Públicas ni a la solicitada por la Corporación Municipal de Quetzaltenango en cuanto al manejo de los recursos económicos y financieros, y de las actividades emprendidas por la asociación relacionada con los fines y objetivos para los cuales fueron creados. Al respecto, la CIDH no cuenta con suficiente información sobre los esfuerzos

desplegados y los obstáculos pendientes de superación, que permitan analizar el cumplimiento de este punto, por lo cual queda a la espera de información más detallada de las partes sobre los avances en este compromiso.

1562. Finalmente, en cuanto a la capacitación técnica a las familias García Yax y García Chuc, el Estado señaló que los beneficiarios no cumplen con los requisitos solicitados por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP para brindarles la capacitación correspondiente, por no contar al menos con 15 participantes. Al respecto, la CIDH considera que el Estado debe explorar otras posibilidades para brindar la capacitación técnica a los beneficiarios toda vez que la cláusula del acuerdo no estableció una limitación específica del número de personas que tomarían la capacitación, y no podría el Estado obligar a las víctimas y sus familiares a cumplir con un mínimo de 15 participantes. El Estado debe consultar con los beneficiarios, y preferiblemente levantar actas de dicha consulta, sobre otras alternativas para cumplir con lo acordado. Por otro lado, si los beneficiarios deciden que ya no están interesados en tomar la capacitación, deberá dejarse constancia por escrito de esta decisión para que la Comisión pueda valorar el cumplimiento de la medida.

1563. El 13 de octubre de 2016, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de los compromisos pendientes. El 14 de noviembre de 2016, ambas partes presentaron la información solicitada.

1564. Mediante su comunicación, el Estado informó que continúa realizando de oficio las investigaciones para poder identificar e individualizar a los responsables para llevarlos a juicio y aplicarles la sanción correspondiente. En este sentido, anunció que a través de la COPREDEH está trabajando en un mecanismo de coordinación y apoyo con el Ministerio Público por medio del cual contempla la prioridad de atender los casos presentados antes el Sistema Interamericano.

1565. En relación a la constitución y funcionamiento de la Asociación -ASINDE-, el Estado reafirmó que la Asociación a pesar de estar constituida y registrada ante la Superintendencia de Administración Tributaria, no ha funcionado como se esperaba, lo cual es atribuible única y exclusivamente a la inactividad por parte de los peticionarios. El Estado indicó que el compromiso asumido en la suscripción del acuerdo de solución amistosa fue la constitución y funcionamiento de ASINDE, lo cual ya da por cumplido. En relación al inmueble para el funcionamiento de la Asociación, el Estado señaló que ha hecho diversas gestiones ante la Dirección del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas con el propósito de solicitar un inmueble en calidad de usufructo para el funcionamiento de ASINDE. Sin embargo, para continuar con el trámite correspondiente ante el mencionado Ministerio, es necesario contar con a) un Informe relacionado con el manejo de los recursos económicos y financieros; y b) actividades de la asociación relacionadas con los fines y objetivos para los cuales fue creada. Al respecto, el Estado indicó que, hasta la fecha, dichos documentos no han sido presentados. En cuanto a las gestiones relacionadas con el inmueble para el funcionamiento de ASINDE en el departamento Quetzaltenango, el Estado señaló que sigue pendiente la solicitud formal de los beneficiarios ante el Alcalde Municipal para la debida aprobación. A pesar de haber citado en varias ocasiones a los peticionarios, hasta la fecha no han respondido a dicho llamado.

1566. En relación a la capacitación técnica a las familias García Yax y García Chuc, el Estado recaló que los peticionarios frente a la propuesta de capacitación gratuita a los integrantes de ASINDE en temas de micro, pequeña y mediana empresa por el INTECAP, expresaron que todos los integrantes de ASINDE son miembros de la familia Chuc García y que se encuentran asumiendo responsabilidades laborales y familiares en distintos departamentos del país lo que les dificulta y/o impide asumir la dirección y funcionamiento de la Asociación. En conclusión, el Estado informó que ha realizado distintos acercamientos para dar seguimiento, sin embargo, no ha habido interés para recibir la capacitación técnica.

1567. Los peticionarios, por su parte, observaron que el Estado desde el año 2011 a la fecha no ha brindado información sobre las diligencias que ha llevado a cabo en materia de investigación, juicio y sanción de los responsables, lo cual resulta sumamente preocupante debido a que han transcurrido más de 25 años de sucedidos los hechos y más de 11 años de la suscripción del acuerdo. Asimismo, los peticionarios indicaron que sostuvieron reunión el día 7 de julio de 2016 con la familia de la víctima, quienes manifestaron su

posición respecto a lo expuesto por el Estado en comunicación de noviembre de 2015 e indicaron, que debido a todos los requisitos que impone el Estado para cumplir con los compromisos pendientes, la familia va a estudiar y proponer a la COPREDEH un cambio en las medidas de reparación relacionadas al otorgamiento del inmueble para el funcionamiento de la Asociación, y a la capacitación técnica de las familias García Yax y García Chuc. Hasta la fecha, los peticionarios mencionaron no haber recibido información por parte de la familia, por lo cual se encuentra a la espera.

1568. El 29 de marzo de 2017, el Estado reiteró la información suministrada el 1 de octubre de 2015. El Estado agregó en referencia a la capacitación técnica a las familias García Yax y García Chuc, que se realizaría con la colaboración de INTECAP, sin embargo los peticionarios indicaron nuevamente que todos los miembros de ASINDE se encuentran cumpliendo con compromisos personales en diferentes departamentos del país, por lo que no han podido coordinar su participación en la formación. Adicionalmente, el Estado resaltó que ha intentado hacer seguimiento con los peticionarios en varias ocasiones para lograr cumplir este compromiso sin éxito, por lo que no se ha logrado dar cumplimiento a este punto.

1569. Los días 4 y 28 de abril de 2017, los peticionarios informaron que el Estado ha cumplido con los compromisos referentes a la reparación económica, disculpas públicas, recuperación de la memoria de la víctima y constitución legal de la ASINDE. Respecto a los compromisos pendientes, informaron que en lo correspondiente al compromiso de investigación, juicio y sanción de los responsables, el Estado tiene conocimiento que los peticionarios no cuentan con testigos presenciales que puedan contribuir con la investigación, por lo que consideran se pone de manifiesto la carencia de un plan y una metodología adecuada que dirija la investigación y posterior sanción de los responsables. Sin embargo, los peticionarios valoraron positivamente la cooperación entre COPREDEH y el Ministerio Público para priorizar “los casos presentados ante el Sistema Interamericano”.

1570. En cuanto al funcionamiento de ASINDE y la capacitación técnica a las familias, recordaron que el 2 de marzo de 2011 enviaron una carta a COPREDEH informando sobre los obstáculos y limitaciones que imposibilitan a los peticionarios tanto a poner en funcionamiento la asociación, como a atender a la capacitación de INTECAP. Asimismo, en dicha carta se le solicitó al Estado discutir dichos obstáculos para lograr establecer un plan de acción efectivo que permita culminar la capacitación, para que el Estado finalmente les otorgue el usufructo del inmueble. Sin embargo, hasta la fecha de la presente comunicación, los peticionarios no cuentan con una respuesta de COPREDEH. Para finalizar, los peticionarios manifestaron que no es cierto lo manifestado por el Estado en referencia a la falta de interés e inactividad procesal por parte de los peticionarios y que esto imposibilite el cumplimiento de los compromisos pendientes, ya que hasta la fecha han remitido a la CIDH las observaciones y avances de los compromisos del presente acuerdo.

1571. El 11 de agosto de 2017, el Estado informó que el 17 de agosto de 2017 se llevará a cabo una reunión entre los peticionarios y COPREDEH, para revisar los compromisos pendientes de cumplimiento y las acciones que deben ser implementadas para dar cumplimiento a dichos compromisos.

1572. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento.

1573. El 31 de agosto de 2017, el Estado informó que el 17 de agosto de 2017 se llevó a cabo la reunión previamente mencionada, entre los peticionarios y COPREDEH. En dicha reunión los peticionarios manifestaron que se les imposibilitaba la participación en las actividades requeridas en el acuerdo de solución amistosa, por lo que propusieron sustituir los compromisos con la creación de un polideportivo. Asimismo, los peticionarios se comprometieron a entregar una propuesta a COPRODEH para que realice las gestiones pertinentes con el Estado.

1574. Con respecto a la capacitación, el Estado mencionó que en dicha reunión los peticionarios ratificaron los inconvenientes y limitaciones que presentan, debido a la desintegración familiar, ya que los miembros de la familia se han mudado a diferentes departamentos del país. Por lo anterior, los peticionarios habrían indicado que no han podido remitir el informe solicitado por el Ministerio de Finanzas Públicas y tampoco habrían podido elaborar el oficio que debían entregar al Consejo Municipal de Sololá para designar el inmueble en calidad de usufructo para el debido funcionamiento de ASINDE.

1575. En relación al compromiso de justicia, el Estado informó su disposición de continuar con la investigación para sancionar a los responsables del hecho. Adicionalmente, el Estado indicó que COPREDEH brindó asesoría a los peticionarios en los trámites requeridos por SAT para que la ASINDE regularice sus obligaciones fiscales.

1576. El 25 de septiembre de 2017, los peticionarios informaron que el 30 de julio de 2017 una delegación de COPREDEH en Quetzaltenango visitó a los peticionarios para recordarles los pagos moratorios pendientes que tiene ASINDE con la SAT, por lo que los peticionarios confirmaron que propusieron sustituir las dos medidas pendientes por un proyecto de infraestructura en la comunidad Colonia María de Tecún Argueta, lugar de origen de la víctima. Asimismo, los peticionarios informaron a la CIDH sobre la reunión realizada el 17 de agosto del presente año con COPREDEH; destacaron que lograron exponer sus dificultades e inconvenientes para dar cumplimiento a los requisitos de INTECAP y la Dirección de Bienes del Estado, y ratificaron lo mencionado en los párrafos anteriores con respecto a la sustitución de las medidas pendientes por la construcción de una cancha polideportiva. Asimismo, los peticionarios informaron que no han cumplido con la obligación de entregar el proyecto de sustitución de medidas a COPREDEH, debido a que el director de dicha institución renunció, por lo que consideraron pertinente remitirle dicha comunicación al nuevo director. En relación al pago de los impuestos pendientes, los peticionarios indicaron que el 18 de agosto de 2017 realizaron el pago total de dicha deuda a la SAT, por un monto de 6.100 quetzales.

1577. El 26 de octubre de 2017, los representantes de los peticionarios informaron que efectivamente los peticionarios solicitaron la sustitución de los compromisos pendientes por la construcción de un polideportivo, debido a las dificultades que presentaban los peticionarios para participar activamente en el desarrollo de las actividades requeridas y también por inconvenientes, requisitos y condiciones impuestas por INTECAP y la Dirección de Bienes del Estado para cumplir con los beneficios pendientes. Adicionalmente, informaron que no han podido entregar la propuesta y solicitud de cambio de las medidas pendientes, según lo pactado, debido a que el señor Walter René García Yax, hijo de la víctima y encargado de darle seguimiento al caso, falleció el 14 de septiembre de 2017, por lo que los demás miembros de la familia tomarán las decisiones pertinentes y presentarán la solicitud a COPREDEH.

1578. Finalmente, la Comisión observa que el Estado ha avanzado en la implementación de los compromisos asumidos en el acuerdo de cumplimiento. Específicamente, la Comisión considera que se encuentran cumplidos en su totalidad los puntos B1, 2 (a, b, c y d) y 3 del acuerdo de cumplimiento. La CIDH considera que se encuentran pendientes de cumplimiento la cláusula IV y la cláusula V del acuerdo de indemnización del acuerdo de indemnización, y se encuentra a la espera de que las partes proporcionen información referente a la sustitución de las medidas pendientes de cumplimiento. En ese sentido, la Comisión insta a las partes a buscar fórmulas que permitan avanzar con la finalización de la implementación del acuerdo. En definitiva, la CIDH valora la información presentada por las partes y concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 11.171, Informe No. 69/06, Tomas Lares Cipriano (Guatemala)**

1579. En el Informe No. 69/06 de fecha 21 de octubre de 2006, la CIDH concluyó que el Estado de Guatemala era responsable de: a) la violación del derecho humano a la vida de conformidad con el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1(1) de dicho instrumento, por la ejecución extrajudicial realizada por agentes del Estado el día 3 de abril de 1993, en perjuicio de Tomas Lares Cipriano; b) La violación de los derechos humanos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, de conformidad con los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1(1) de dicho instrumento, por los hechos ocurridos el 3 de abril de 1993 y sus consecuencias de impunidad, en perjuicio de Tomas Lares Cipriano y sus familiares; y c) En consecuencia, por el incumplimiento de las obligaciones de respeto de los derechos humanos y garantías impuestas por el artículo 1(1) de la Convención Americana. La víctima, Tomás Lares Cipriano, era agricultor de 55 años de edad, miembro del Consejo de Comunidades Étnicas "Runujel Junam" (CERJ), y del Comité de Unidad Campesina (CUC). Como activo dirigente comunitario en su pueblo, Chorraxá Joyabaj, El Quiché, había organizado numerosas

manifestaciones contra la presencia del ejército en su zona y contra el servicio aparentemente voluntario, pero de hecho obligatorio, que los campesinos cumplían en las denominadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Asimismo, había formulado numerosas denuncias en relación con las amenazas contra la población local por parte de los Comisionados Militares que actuaban como agentes civiles del ejército, jefes de patrulla y, en ocasiones, como soldados. El 30 de abril del mismo año, Tomas Lares Cipriano fue emboscado y asesinado por Santos Chich Us, Leonel Olgadez, Catarino Juárez, Diego Granillo Juárez, Santos Tzit y Gaspar López Chiquiaj, integrantes de las PAC.

1580. La CIDH formuló al Estado de Guatemala las siguientes recomendaciones:

1. Realizar una investigación de manera completa, imparcial y efectiva de los hechos denunciados a fin de juzgar y sancionar a todos los responsables, materiales e intelectuales, de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Tomas Lares Cipriano y sus familiares.
2. Reparar las consecuencias de la violación de los derechos enunciados conforme a lo establecido en el párrafo 128 del presente informe.
3. Evitar el resurgimiento de las Patrullas de Autodefensa Civil.
4. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana.

1581. El 8 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones. Los peticionarios no presentaron información.

1582. El Estado indicó que considera que ha cumplido de manera parcial con la primera recomendación ya que ha sancionado desde 1996 a Santos Chich Us por la muerte de Tomas Lares Cipriano. Sin embargo, queda pendiente la captura de dos sindicados.

1583. En cuanto a la reparación, el Estado nuevamente hizo referencia al desinterés que los familiares de la víctima han manifestado respecto del presente caso, a pesar de los constantes intentos del Estado, siendo el último realizado en diciembre de 2010. Por ello solicita a la CIDH que dé por cumplida dicha recomendación ya que son los familiares de las víctimas quienes se oponen.

1584. En cuanto a la recomendación dirigida a evitar el resurgimiento de las PAC, informó que a través del Decreto No. 143-96 de 28 de noviembre de 1996, se derogó el Decreto 19-86 de 17 de enero de 1986, mediante el cual se dio vida a dichas patrullas.

1585. Sobre la recomendación referida a la adopción de medidas de reparación, el Estado indicó que ha implementado medidas de prevención en lo que se refiere a Seguridad y Justicia entre las que destaca: el Decreto 40-2010 de fecha 2 de noviembre de 2010 del Congreso de la República de Guatemala mediante el cual se crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el acuerdo gubernativo 197-2012 por el cual se crea el "Gabinete Específico por la Seguridad, la Justicia y la Paz" como parte del Organismo Ejecutivo, que tiene por objetivo coadyuvar en la implementación de propuestas y de políticas públicas, encaminadas a alcanzar mayores niveles de gobernabilidad, seguridad y protección frente a la violencia e impunidad en el país. Asimismo mencionó la aprobación del Decreto 17-2009, Ley de Fortalecimiento a la Persecución Penal, que incluye reformas al Código Penal, Código Procesal Penal, Ley contra la Delincuencia Organizada y Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición. En materia de fortalecimiento de la investigación de delitos, el Ministerio Público implementó la persecución estratégica en el seguimiento de delitos cometidos por organizaciones criminales para lograr desarticulación.

1586. El 5 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a las partes información adicional sobre el cumplimiento de las recomendaciones, específicamente sobre el punto pendiente en materia de juzgar y

sancionar a los sindicatos en la muerte de Tomas Lares Cipriano cuyas órdenes de captura se mantienen sin ejecutar. En comunicación enviada por el Estado el 5 de enero de 2015, el Estado señaló que el Ministerio Público continúa monitoreando e investigando sobre el paradero de los dos sindicatos con el fin de hacer efectivas las órdenes de captura. Por su parte, los peticionarios no presentaron información.

1587. El 11 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones. El 28 de octubre de 2015, el Estado en el cual reiteró la información sobre la sentencia impuesta en noviembre de 1996 en contra del señor Santo Chich por la muerte de Tomás Lares e indicó que se continúa monitoreando e investigando el paradero de los señores Diego Granillo Juárez, Santos Tzit y Gaspar López Chichaj para hacer efectivas las órdenes de captura pendientes. El Estado reafirmó igualmente su postura de negociar y suscribir un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones con los peticionarios. Hasta la fecha los peticionarios no han proporcionado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

1588. El 13 de octubre de 2016, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 11 de noviembre de 2016, el Estado reiteró que se encuentra pendiente de hacer efectivas las órdenes de captura emitidas el 30 de julio de 1993 y el 6 de mayo de 1995, en contra de los señores Diego Granillo Juárez, Santos Tzit y Gaspar López Chichaj por la supuesta participación en la muerte de la víctima. En este sentido estableció que continúa monitoreando e investigando el paradero de los sindicatos para efectivizar las ordenes de captura que se encuentran pendientes y poder dilucidar las responsabilidades penales ante los tribunales competentes. Asimismo, el Estado informó que en agosto de 2016 el presidente del COPREDEH sostuvo una reunión con la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público y que actualmente se está diseñando un mecanismo de coordinación entre estas dos instituciones, en el cual se podrá incluir la investigación del presente caso.

1589. En su comunicación el Estado reitera su voluntad a tener un acercamiento con los familiares del señor Lares Cipriano para iniciar el proceso de un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones, sin embargo, no ha sido posible por la negativa de los interesados de llegar a una negociación.

1590. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. Los peticionarios no presentaron información actualizada en esta oportunidad.

1591. El 12 de octubre de 2017, el Estado informó en relación a la obligación de investigar, que los litigantes hicieron uso de su derecho al debido proceso y de su derecho a la legítima defensa, y que el 5 de noviembre de 1996 el Tribunal de Sentencia de Quiché condenó al señor Santos a 28 años de prisión. Adicionalmente, informó que se encuentra pendiente de ejecución las órdenes de captura emitidas por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, el 30 de julio de 1993 y el 6 de mayo de 1995, en contra de Diego Granillo Juárez, Santos Tzit y Gaspar López, quienes se encuentran prófugos de la justicia desde hace años. En este sentido, el Estado indicó que según el movimiento migratorio de estas personas, se pudo observar que los mismos se encuentran dentro del territorio guatemalteco. Asimismo, manifestó que solicitó el apoyo de INTERPOL para que sean incluidos en la lista de prófugos de la justicia. El Estado indicó que actualmente la investigación del presente caso se encuentra a cargo de la Fiscalía Distrital de Quiché del Ministerio Público con el No. MP226-2005-1671. Igualmente, informó que el 14 de octubre de 2015, la Fiscalía de Quiché localizó y entrevistó a Juan Lares Ambrocio, hijo mayor de la víctima, quien manifestó su desconocimiento sobre la situación actual del caso. En la misma fecha entrevistó a Manuel Hernández Gutiérrez, quien es el presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo del Cantón de Chorraxaj, del municipio Joyabaj, el Quiché, se le preguntó sobre el paradero de los sindicatos y entrevistado respondió que dichas personas no eran conocidas en dicha comunidad.

1592. Al respecto, la Comisión considera que el Estado tiene la obligación de avanzar en la localización de la persona condenada para su correspondiente sanción.

1593. En relación al inciso 2), el Estado nuevamente hizo referencia al desinterés manifestado por los familiares de la víctima respecto al presente caso y recordó que a pesar de los constantes intentos del Estado, a través de visitas a los familiares de la víctima, los mismos insistieron en solicitar el cierre definitivo

del caso. Por lo anterior, solicita a la CIDH que dé por cumplida dicha recomendación ya que son los familiares de las víctimas quienes se oponen. Sobre el inciso 3), el Estado reiteró que la información suministrada en informes anteriores.

1594. En relación al inciso 4), el Estado indicó en relación a las medidas de prevención, la implementación de medidas de seguridad y justicia, incluyendo los siguientes actos administrativos: Decreto 21-2006 Ley Contra la Delincuencia Organizada; Ley del Fortalecimiento a la Persecución Penal mediante Decreto 17-2009; Decreto 40-2010, que permite la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; Acuerdo Gubernativo 197-2012, que crea el Gabinete Específico por la Seguridad, la Justicia y la Paz; Decreto 3-2012, que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; Decreto 5-2012, que aprueba Reformas al Decreto 28-2010 Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth; Decreto 15-2012, Ley de la Dirección General de Investigación Criminal; Decreto 31-2012 Ley Contra la Corrupción; Decreto 9-2016 Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas.

1595. En virtud de lo expuesto, la CIDH toma nota de la información aportada por el Estado sobre las acciones realizadas por el Estado orientadas a hacer efectivas las órdenes de aprehensión en contra de los demás sindicados para dar cumplimiento a la recomendación 1; así como de su predisposición para suscribir con los peticionarios un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones. Sin embargo, la CIDH observa que no cuenta con información actualizada sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los literales 2, 3 y 4 por lo cual invita al Estado a brindar información específica a los peticionarios y a la CIDH sobre el cumplimiento de dichos puntos.

1596. Por lo anterior, la CIDH considera que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones y seguirá supervisando su cumplimiento.

#### **Caso 11.658, Informe No. 80/07, Martín Pelicó Coxic (Guatemala)**

1597. En el Informe No. 48/03 de fecha 8 de octubre de 2003, la CIDH concluyó que la República de Guatemala era responsable de: 1) la violación al artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Martín Pelicó Coxic, en relación con el artículo 1(1) de dicho instrumento; 2) las violaciones a los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1(1) de dicho instrumento, en perjuicio de Martín Pelicó Coxic y sus familiares. La Comisión determinó que la responsabilidad del Estado guatemalteco emanaba de la ejecución extrajudicial realizada el 27 de junio de 1995 por agentes del Estado del señor Martín Pelicó Coxic, indígena maya miembro de una organización de defensa de derechos humanos del pueblo maya, como así también de los agravios consumados en perjuicio de la víctima y sus familiares en virtud de los hechos mencionados y la ulterior impunidad del crimen.

1598. La Comisión formuló al Estado de Guatemala las siguientes recomendaciones:

1. Realizar una investigación de manera completa, imparcial y efectiva de los hechos denunciados a fin de juzgar y sancionar a los responsables, materiales e intelectuales, de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Martín Pelicó Coxic y sus familiares.
2. Reparar las consecuencias de la violación de los derechos enunciados.
3. Evitar efectivamente el resurgimiento y reorganización de las Patrullas de Autodefensa Civil.
4. Promover en Guatemala los principios establecidos en la "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos" adoptada por Naciones Unidas, y se tomen las medidas necesarias para que se respete la

libertad de expresión de quienes han asumido la tarea de trabajar por el respeto de los derechos fundamentales, y para que se proteja su vida e integridad personal.

5. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana.

1599. El 15 de octubre de 2007, la CIDH aprobó el Informe No. 80/07, a través del cual la Comisión expresó su beneplácito por el cumplimiento de la mayoría de los compromisos adquiridos en el “Acuerdo de cumplimiento de recomendaciones del Informe No. 48/03”, pero asimismo reiteró al Estado de Guatemala las recomendaciones dos y tres establecidas en el Informe No. 12/07 y le recomendó que complete la investigación de manera imparcial y efectiva de los hechos denunciados, a fin de juzgar y sancionar a los responsables, materiales e intelectuales, de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Martín Pelicó Coxic y sus familiares.

1600. El 8 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada acerca del estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas para el presente caso.

1601. Respecto a la recomendación de realizar una investigación de los hechos denunciados, juzgar y sancionar a los responsables, el Estado de Guatemala, como en fechas anteriores, remitió un informe cronológico, sobre la investigación y sanción de los responsables de los hechos denunciados y reiteró que el Tribunal de Sentencia Penal dictó sentencia absolutoria para Pedro Acabal Chaperón, quien fuere imputado del delito de homicidio en perjuicio del señor Martín Pelicó Coxic. Asimismo, indicó que la querellante adhesiva y actora civil en el proceso penal reiteró no tener conocimiento de quién o quiénes eran los responsables de la muerte de su esposo y que no tiene interés de continuar con la investigación del caso.

1602. Sobre este punto, los peticionarios manifestaron que el caso sigue en impunidad pues al día de hoy no existe nadie condenado por la muerte del señor Martín Pelicó Coxic, además de que los expedientes remitidos por el Estado no evidencian que en los últimos años haya habido un avance sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Así mismo, los peticionarios solicitaron un informe cronológico de las acciones realizadas en materia de investigación, informe que fue entregado por el Estado a través de la CIDH y solicitaron un análisis pormenorizado sobre la viabilidad de la persecución penal en contra de posibles responsables.

1603. En relación la recomendación de reparar, las partes coinciden en que los compromisos fueron cumplidos por el Estado.

1604. La Comisión concluyó en su Informe Anual del 2013 que “el Estado ha dado cumplimiento a las recomendaciones reseñadas, salvo respecto del tema de la investigación. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando dicho punto pendiente”<sup>144</sup>.

1605. El 5 de diciembre de 2014 y el 5 de octubre de 2015, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre dicho cumplimiento.

1606. El Estado respondió el 5 de enero de 2015 informando que ha seguido impulsando la investigación de los hechos a nivel interno, a pesar de que la esposa de la víctima no habría querido continuar con la investigación, por ser éste un delito de acción pública. El Estado no presentó información respecto a la última solicitud de información.

1607. Los peticionarios presentaron información el 16 de noviembre de 2015, reiterando que el caso continúa en la impunidad, y que el Estado no ha cumplido aún con presentar un examen pormenorizado sobre las posibles líneas de acción que podrían guiar la investigación, y sólo ha mencionado dos diligencias

<sup>144</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr.865, Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/annual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap2-D.pdf>

relevantes, sin especificar las fechas en que se realizaron ni los resultados de las mismas si es que los hubiera. Por lo anterior, los peticionarios han solicitado que el Estado provea un análisis pormenorizado de la viabilidad de la persecución penal en contra de las personas responsables que no han sido procesadas o sancionadas, incluyendo las líneas de investigación que esté considerando para el esclarecimiento de los hechos, así como las diligencias puntuales para ello y los resultados si ya contara con ellos.

1608. El 13 de octubre de 2016, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el compromiso pendiente. El 11 de noviembre de 2016, el Estado presentó información actualizada. Por su parte, los peticionarios la presentaron el 14 de noviembre de 2016.

1609. En relación al compromiso pendiente de cumplimiento, el Estado señaló que el Ministerio Público continúa realizando todas las diligencias necesarias y agotar todos los medios con el objeto de esclarecer los hechos, identificar e individualizar a él o los posibles responsables del asesinato del señor Martín Pelicó Coxic, por ser un delito de acción pública. Asimismo, indicó que del informe presentado por el investigador de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, en octubre 2015, de las visitas y entrevistas practicadas se evidencia el desinterés manifestado por los entrevistados en colaborar con proporcionar información al Ministerio Público, lo cual limita el accionar del ente fiscal para poder incorporar medios de convicción que permitan formular una acusación en contra de él o los sindicados.

1610. Por último, el Estado informó que por medio del COPREDEH está trabajando en un mecanismo de coordinación y apoyo con el Ministerio Público por medio de la conformación de una mesa de trabajo que contempla la prioridad de atender los casos presentados ante los órganos del Sistema Interamericano. Asimismo, resaltó la conformación de una mesa de trabajo integrada por la COPREDEH, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala - FAFG -, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses - INACIF - y la sociedad civil con el propósito de dar seguimiento a la realización de exhumaciones para la búsqueda, identificación y entrega de restos de las personas desaparecidas.

1611. Los peticionarios mediante su comunicación, reiteraron lo manifestado en comunicaciones del año 2013 y 2015 en cuanto a que la última diligencia de investigación fue realizada el 28 de mayo de 1996, cuando se practicó una reconstrucción de los hechos con presencia de testigos. Así, los peticionarios señalan que no se ha acreditado por ningún medio que el Estado haya orientado la investigación a determinar toda la verdad de los hechos ni la totalidad de las responsabilidades intelectuales y materiales de los mismos. En particular, los peticionarios manifestaron que las últimas diligencias de las entidades investigativas han sido de mero trámite, lo que ha devenido en que tampoco sean efectivas. Por último, los peticionarios informaron que CEJIL no continuará con la representación legal de las víctimas y desde ahora en adelante el CERJ dará seguimiento del presente caso.

1612. El 21 de marzo de 2017, el Estado reiteró la información suministrada a la CIDH el 11 de noviembre de 2016, en referencia al desinterés de los entrevistados en colaborar con la investigación y la mesa de trabajo conformada por COPREDEH, FAFG, INACIF y la sociedad civil. Asimismo, informó su interés en seguir realizando las diligencias de investigación pertinente para lograr sancionar a los culpables de los hechos.

1613. El 26 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento de la recomendación pendiente. Sin embargo, a la fecha cierre del presente informe ninguna de las partes ha presentado información.

1614. De acuerdo a lo anterior, la CIDH observa la información presentada por las partes y al mismo tiempo, insta al Estado a seguir avanzando de manera eficaz con la investigación y juicio de los hechos. En este sentido, la CIDH seguirá supervisando el punto pendiente relacionado con la investigación de los hechos.

**Caso 11.422, Informe No. 1/12, Mario Alioto López Sánchez (Guatemala)**

1615. El 26 de enero de 2012, mediante informe No. 01/12 la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Mario Alioto López Sánchez. De acuerdo a los antecedentes del mismo, el 11 de noviembre de 1994, Mario Alioto López Sánchez, estudiante de derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estaba junto a un grupo de estudiantes protestando por el aumento al pasaje urbano, bloqueando el paso por la Avenida Petapa. Los peticionarios señalaron que aproximadamente 100 agentes de la Policía Nacional, intentaron dispersar a los estudiantes lanzando bombas lacrimógenas, disparando armas de fuego y golpeándolos, por lo que varios intentaron huir, siendo detenidos aproximadamente 23 de ellos. Entre éstos se encontraba Mario Alioto López Sánchez, quien fue golpeado por los funcionarios de seguridad al momento de ser capturado, y que a pesar que presentaba una hemorragia por el impacto del arma de fuego en su muslo izquierdo, no recibió atención médica inmediata, y fue trasladado aproximadamente dos horas después de su captura a un Hospital Nacional, donde falleció al día siguiente de su ingreso. En cuanto al proceso judicial seguido en el fuero interno, el 30 de julio de 1997, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos dictó sentencia. Danilo Parinello Blanco, Mario Alfredo Mérida Escobar, Salvador Estuardo Figueroa y Carlos Enrique Sánchez Gómez fueron condenados a 10 años, como autores del delito de homicidio preterintencional en contra de Mario Alioto López Sánchez y por el delito de lesiones leves en contra de los estudiantes Julio Alberto Vásquez Méndez y Hugo Leonel Cabrera. Carlos Venancio Escobar Fernández, fue condenado a 30 años de prisión como autor material del delito de asesinato en contra de Mario Alioto López Sánchez y del delito de lesiones leves en contra de los otros dos estudiantes. En segunda instancia, la sentencia fue anulada parcialmente, absolviendo a los primeros cuatro, y reduciendo la sentencia de Escobar Fernández a 10 años de prisión.

1616. El 19 de octubre de 2011, las partes firmaron un “acuerdo de solución amistosa”. Por medio de éste, el Estado reconoció su responsabilidad por los hechos del caso y señaló que el cumplimiento de los compromisos que derivan del Acuerdo, tiene como fundamento principal coadyuvar para alcanzar la reconciliación nacional a través de la búsqueda de la verdad y la administración de justicia, la dignificación de la víctima y familiares, la asistencia o reparación resultante de la violación alegada, y el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, de conformidad con el numeral cuarto de dicho acuerdo, entre los principales compromisos asumidos mediante el acuerdo de solución amistosa No. 01/12 se encuentran:

**1. Reconocimiento de la Responsabilidad Internacional del Estado y aceptación de los hechos**

El Estado de Guatemala reconoce su responsabilidad internacional, derivada de la participación directa de agentes del Estado, en la comisión de los hechos y por las violaciones a los derechos humanos cometidos contra Mario Alioto López Sánchez de conformidad con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente los que establecen los siguientes artículos: Derecho a la vida (artículo 4), Derecho a la integridad personal (artículo 5), Libertad de asociación (artículo 16), y Protección judicial (artículo 25), y Obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 1.1).

El cumplimiento de los compromisos que deriven del presente Acuerdo, tiene como fundamento principal coadyuvar para alcanzar la reconciliación nacional a través de la búsqueda de la verdad y la administración de justicia, en aquellos casos cuya naturaleza lo permita; la dignificación de la víctima y familiares; la asistencia o reparación resultante de la violación alegada; y el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

**2. Disculpa Privada**

a) El Estado de Guatemala se compromete a llevar a cabo un acto privado con altas autoridades del Ministerio de Gobernación y la Presidenta de la Comisión Presidencial

Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, a través del cual reconocerá su Responsabilidad Internacional por las violaciones de Derechos Humanos cometidas en contra de Mario Alioto López Sánchez y se hará entrega de una Carta suscrita por el Presidente de la República de Guatemala, en la que pide perdón por los daños ocasionados a la familia de la víctima.

Las partes acuerdan que el acto se realizará dentro de los tres meses siguientes a partir de la fecha de la suscripción del presente acuerdo.

b) Las partes se comprometen a que el acto privado se celebre en las instalaciones que ocupa actualmente el Ministerio de Gobernación, debiendo establecer en su momento la fecha, programa y hora del mismo.

c) El Estado se compromete a no hacer pública la información contenida en el presente Acuerdo, a petición específica de los familiares de la víctima, para lo cual las partes también solicitarán a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en su momento, se reconozca el cumplimiento del Estado en relación con los compromisos del presente caso, sin que se divulguen los detalles del mismo.

### 3. Medidas para honrar la memoria de la víctima

d) El Estado se compromete a la colocación y develación de una placa conmemorativa en memoria de la víctima en la casa de habitación [...], cuyo material y contenido deberá ser acordado con sus familiares].

e) El Estado se compromete gestionar ante la Universidad de San Carlos de Guatemala, libros y videos que contengan información histórica sobre la lucha de Mario Alioto López Sánchez, la cual será entregada a los familiares de la víctima para su preservación.

### 4. Reparación Económica

a) El Estado reconoce que aceptar la responsabilidad internacional derivada de la violación de los derechos humanos de la víctima establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la responsabilidad de pagar una justa indemnización a los Peticionarios bajo los criterios que, de común acuerdo, dispongan las partes y los parámetros establecidos por el derecho nacional e internacional.

El Estado a través de COPREDEH y de conformidad con el estudio actuarial elaborado por un experto el 27 de abril de 2011, se compromete a otorgar una indemnización económica [...] desglosada de la siguiente manera:

Indemnización por daños materiales: - Lucro Cesante - Daño Emergente	[...] [...]
Indemnización por daño inmaterial (moral):	[...]
<b>Indemnización Total</b>	[...]

### 5. Investigación, juicio y sanción de los responsables

El Estado de Guatemala se compromete a través de las instituciones correspondientes a impulsar la investigación para identificar, juzgar y sancionar a las personas que tengan procedimiento penal abierto como presuntos responsables de la muerte de Mario Alioto López Sánchez, así como abordar el presente caso en el Comité de Impulso.

El Estado de Guatemala se compromete a convocar al Comité de Impulso cada 4 meses, a fin de que rinda un informe sobre los avances de la investigación para ser trasladado a la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes legales del caso y los familiares de la víctima.

1617. En el Informe de Solución Amistosa, la Comisión expresó que quedaría pendiente de cumplimiento lo siguiente: a) la entrega a los familiares de libros y videos de la Universidad de San Carlos sobre la lucha de Mario Alioto López Sánchez, para la preservación de la memoria, y b) la investigación y sanción a los responsables.

1618. El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo.

1619. En relación con la entrega de la información histórica a los familiares, el Estado señaló que a pesar de que se han realizado múltiples gestiones ante la Universidad de San Carlos –e incluso con los familiares de Mario Alioto Sánchez López– para obtener libros y videos que contengan información histórica sobre su lucha, ni la Universidad ni sus familiares cuentan con el material respectivo. En consecuencia, el Estado refirió estar imposibilitado para dar cumplimiento con este compromiso. Sobre la investigación y sanción de los responsables de los hechos, el Estado señaló que ha cumplido con este compromiso debido a que ya mediante sentencia firme de 30 de julio de 1997 del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, fue condenado a prisión Carlos Venencio Escobar Fernández, responsable de la muerte de Mario Alioto López Sánchez.

1620. Por su parte, los peticionarios señalaron que durante 2012 y 2013, el Estado no ha llevado a cabo las acciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de los dos compromisos pendientes.

1621. El 12 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento del acuerdo. El 9 de enero de 2015, el Estado respondió reiterando lo ya establecido en párrafos precedentes del presente informe. Asimismo solicita a la CIDH que pida a los familiares de la víctima información sobre las personas que cuenten con la información histórica sobre la lucha del señor Mario Alioto López Sánchez, para poder dar cumplimiento con el punto relacionado con la medida pendiente para honrar la memoria de la víctima.

1622. El 1 de octubre de 2015, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo. El 21 de octubre de 2015, los peticionarios manifestaron que el Estado no detalló en sus informes anteriores las fechas ni las gestiones que se han realizado ante la Universidad San Carlos para obtener la información histórica sobre la lucha de la víctima, por lo cual no se podría establecer si ha cumplido con la gestión establecida en el acuerdo. Los peticionarios enfatizaron que no cuentan con comprobación documental de la respuesta que esta institución ha dado al Estado sobre las gestiones adelantadas. Los peticionarios negaron que el Estado haya solicitado información de libros y videos sobre Mario Alioto López a los familiares, toda vez que desde un inicio han planteado que no cuentan con dicha información, y la cláusula del acuerdo establece que es el Estado el que debe gestionar la información ante la universidad para dársela a los familiares.

1623. Sobre el punto relacionado a la investigación, juicio y sanción de los responsables, los peticionarios indicaron que, si bien es cierto que mediante sentencia de 30 de julio de 1997 fue condenado a prisión Carlos Venencio Escobar Fernández, en la misma sentencia el Tribunal dejó abierto el procedimiento en contra de otro sindicado identificado como Miguel Angel Fernández Ligorria, quien en una audiencia de juicio desapareció, es decir, se fugó, por lo cual consideran que el Estado no ha dado cumplimiento total a dicho compromiso.

1624. El 9 de noviembre de 2015, el Estado presentó información sobre los puntos pendientes del acuerdo. Al respecto, reiteró lo indicado en los informes presentados en octubre de 2013 y abril de 2014 mediante los cuales señala el “total cumplimiento” de los compromisos adoptados por el Estado, y que “el Estado ha realizado, en la medida de sus posibilidades, todas las gestiones que tienen por objeto cumplir con dichos compromisos”. En relación al compromiso establecido en el punto 3 inciso e), reitera las gestiones realizadas ante la Universidad San Carlos, la cual informó verbalmente que no cuenta con información, libro,

foto, video ni otro tipo de publicación que contenga información histórica relacionada a la víctima, por lo cual el Estado ha concluido que, debido a que ni la Universidad ni los familiares cuentan con las fotografías y videos se encuentran imposibilitados para cumplir dicho compromiso. En este sentido, manifestó que el compromiso se encuentra pendiente de cumplimiento por motivos ajenos a su voluntad, y solicita que la CIDH lo declare por cumplido.

1625. En relación a este punto, la CIDH observa que requiere mayor información del Estado sobre las gestiones que ha realizado para obtener la información histórica referida, y en particular copia simple de las comunicaciones sostenidas formalmente con la Universidad, de manera que puedan valorarse los esfuerzos del Estado para el cumplimiento de este punto.

1626. En relación a la investigación, juicio y sanción de los responsables, el Estado reafirma que la sentencia que condenó a los responsables de la muerte del señor López Sánchez emitida el 30 de julio de 1997 se encuentra firme, ya que luego de haber sido apelada fue confirmada y en consecuencia condenado a prisión al señor Carlos Venancio Escobar Fernández.

1627. El 13 de octubre de 2016, la Comisión solicitó información a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo. El 11 de noviembre de 2016, tanto el Estado como los peticionarios presentaron la información solicitada.

1628. Por su parte, los peticionarios señalaron que el Estado no ha presentado información detallada y específica sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a los dos puntos pendientes del acuerdo de solución amistosa en relación a la entrega de la memoria histórica de la víctima a sus familiares y en relación a la investigación y sanción de los responsables. Al respecto, solicitan al Estado presente a la mayor brevedad informe con documentación de soporte sobre las gestiones que ha realizado.

1629. Mediante comunicación presentada, el Estado reiteró el cumplimiento total de los compromisos relacionados con el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado y aceptación de los hechos; la disculpa privada; la reparación económica; y la placa conmemorativa como medida para honrar a la víctima. En cuanto a los compromisos pendientes, el Estado indicó que a través de las acciones implementadas por la administración actual de COPREDEH, se evidencia el interés del Estado en retomar los compromisos adoptados en el marco del sistema interamericano. En relación a la entrega a los familiares de libros y videos de la Universidad San Carlos, el Estado mencionó lo establecido en su informe del 3 de octubre de 2015 en torno a los obstáculos que imposibilitan el cumplimiento de este punto dado que la Universidad ni los familiares cuentan con las fotografías y videos del señor López. No obstante, el Estado manifestó interés de retomar conversaciones con la Universidad a efecto de indagar nuevamente sobre la existencia de libros y videos que contengan información histórica sobre la lucha López Sánchez.

1630. En relación a la investigación, juicio y sanción, el Estado denotó que ha cumplido parcialmente con el compromiso en virtud de la sentencia condenatoria definitivamente firme en contra de Carlos Venancio Escobar Fernández como uno de los responsables; quedando abierto el procedimiento únicamente en contra del sindicato Miguel Ángel Fernández Ligorria. Al respecto, el Estado señaló que ha mantenido esfuerzos para la captura y el consecuente desarrollo de los procedimientos judiciales persistentes, sin embargo, los resultados obtenidos no han sido los esperados.

1631. El 20 de marzo de 2017, los peticionarios presentaron información sobre los puntos pendientes del acuerdo. Al respecto de los compromisos cumplidos, reiteraron que efectivamente el Estado cumplió con los compromisos 1), 2), y 4) del acuerdo de solución amistosa. Con respecto a la entrega a familiares de las víctimas de los libros y videos, informaron que valoran positivamente el compromiso del Estado de retomar las comunicaciones con la Universidad de San Carlos para continuar la investigación sobre la existencia de los libros y videos. En referencia a la investigación, juicio y sanción de los responsables, también valoraron positivamente que el Estado, iniciara el procedimiento contra el sindicato Miguel Ángel Fernández Ligorria. Finalmente, valoraron la voluntad política del Estado de dar cumplimiento a los compromisos pendientes, del acercamiento y las reuniones de trabajo que se han celebrado en el presente año entre COPREDEH, la Fiscalía General, la Secretaría Privada y la Fiscalía de Derechos Humanos del

Ministerio Público, para priorizar los casos presentados antes los Órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

1632. El 28 de marzo de 2017 y el 27 de abril de 2017, los peticionarios reiteraron lo indicado en los escritos anteriores y resaltaron los esfuerzos por parte del Estado para lograr el cumplimiento de los compromisos 3) y 5).

1633. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó nuevamente información a las partes sobre el estado de cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo.

1634. El 11 de septiembre de 2017, los peticionarios indicaron que no poseen información actualizada y recordaron que en el presente año el Estado no ha brindado información actualizada sobre las diligencias realizadas para dar cumplimiento a los puntos pendientes por cumplimiento.

1635. El 13 de septiembre de 2017, el Estado informó respecto al punto 3) que le solicitó a la Universidad de San Carlos la información referente al caso, pero no han obtenido resultados positivos. Sin embargo, el Estado decidió recopilar la información por diferentes fuentes que serán informados oportunamente a la Comisión. En relación al punto 5) reiteró que se condenó a Carlos Venancio Escobar Fernandez por 10 años. Por lo expuesto anteriormente, el Estado le solicitó a la CIDH que declarara cumplido totalmente el presente caso. Dicha información fue trasladada a los peticionarios para que presentaran sus observaciones.

1636. Al respecto, la CIDH valora la información aportada por las partes, destaca los avances hacia la sanción de los responsables, y al mismo tiempo insta al Estado a seguir avanzando de manera eficaz con el cumplimiento de los dos puntos pendientes sobre investigación y honrar la memoria de la víctima, y a proporcionar información sobre la investigación en curso.

#### **Caso. 12.546, Informe No. 30/12, Juan Jacobo Arbenz Guzmán (Guatemala)**

1637. El 20 de marzo de 2012, mediante informe No. 30/12, la CIDH aprobó un acuerdo de solución amistosa en el caso de Juan Jacobo Arbenz Guzmán. De acuerdo con los antecedentes, Jacobo Arbenz Guzmán fue elegido Presidente constitucional de Guatemala en el año 1951 y ejerció su mandato hasta el día 27 de junio de 1954, fecha en la que fue derrocado por medio de un golpe militar encabezado por el coronel Carlos Castillo Armas y dirigido desde Honduras por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos de Norteamérica, CIA. Juan Jacobo Arbenz y su familia compuesta a ese entonces por su esposa María Cristina Vilanova de Arbenz y sus hijos Juan Jacobo, María Leonora y Arabella fueron expulsados del país y vivieron en el exilio. Juan Jacobo Arbenz Guzmán falleció en el exilio el 27 de enero de 1971. El gobierno *de facto* confiscó los bienes del señor Arbenz Guzmán y su familia. La Junta de Gobierno emitió el decreto N° 2, el 2 de junio de 1954 y luego el dictador Castillo Armas promulgó un segundo decreto N° 68. En el artículo primero del decreto 2, se ordenó intervenir los bienes, congelar e inmovilizar los depósitos, acreedurías, valores y cuentas corrientes de las personas que figuraban en las listas formuladas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde figuraba el Presidente Arbenz. El artículo primero del decreto 68 estableció que se adjudicaba al patrimonio del Estado a título compensatorio y en vía de indemnización, todos los valores, acciones, derechos, activos y bienes de toda clase, sin excepción alguna, que por cualquier concepto estuvieran bajo el dominio, posesión, tenencia y usufructo de los ex funcionarios y empleados que figuran en la lista mencionada en el decreto 2. Entre los bienes confiscados se encontraba la “Finca el Cajón”, propiedad de la familia Arbenz. Tanto el señor Arbenz Guzmán en vida, como sus familiares luego de su muerte, reclamaron la devolución de sus bienes.

1638. El 28 de mayo de 1995 la señora María Cristina Vilanova Castro viuda de Arbenz, promovió una acción de inconstitucionalidad de los decretos 2 y 68, ambos de 1954 ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. El 26 de septiembre de 1996, la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del decreto 2 y del artículo 1 del decreto 68. En 1996 la Procuraduría General emitió el dictamen 8-96 en el que reconoció que se debía estudiar la indemnización de los familiares del expresidente y que debía ser el órgano legislativo el sitio donde se debía debatir esta cuestión. El 31 de enero de 2003 la Procuraduría General de la Nación

emite un nuevo dictamen en el que afirma que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad vino a crear una obligación al Estado de Guatemala, en devolver los bienes o en su defecto hacer efectiva una indemnización, para los herederos del mismo.

1639. El 14 de marzo de 2006, la CIDH declaró admisible el caso por la presunta violación a los artículos 8 (garantías judiciales), 21 (propiedad privada), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial). El 19 de mayo de 2011, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa, cuyas partes pertinentes respecto de la reparación se detallan a continuación:

## 2) REPARACIÓN ECÓNOMICA

[...]

El Estado de Guatemala, luego de una valuación realizada el 21 de febrero de 2007 por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas en la finca número 3443 folio 76 del libro 40 de Escuintla del Registro General de la Propiedad, denominada “Finca el Cajón”, ubicada en el Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa del departamento de Escuintla, se compromete a pagar la cantidad [...] en concepto de reparación económica, a favor del expresidente Juan Jacobo Árbenz Guzmán, su esposa María Cristina Vilanova y sus hijos Juan Jacobo, María Leonora y Arabella, todos de apellidos Árbenz Vilanova, cantidad que comprende daños materiales e inmateriales. El Estado de Guatemala se compromete a hacer efectivo el pago mediante transferencia bancaria, inmediatamente que se haya suscrito el acuerdo de solución amistosa y que los peticionarios entreguen el acta notarial de identificación de beneficiarios y el mandato especial con representación a favor del Doctor Erick Jacobo Arbenz Canales, que lo faculta para la suscripción del presente acuerdo amistoso y para recibir el pago de la reparación económica; estos documentos deben contar con todos los pases de ley para que puedan tener plena validez legal de conformidad con la legislación guatemalteca. Al momento de realizarse la transferencia el peticionario se compromete a firmar un acta administrativa de finiquito a favor del Estado de Guatemala.

## 3) OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN

Mediante este acuerdo de solución amistosa se establece el compromiso del Estado de Guatemala de cumplir con los siguientes compromisos:

**a) Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional:** El Estado de Guatemala se compromete a dignificar la memoria del expresidente Juan Jacobo Árbenz Guzmán con un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado, el cual se realizará en el Palacio Nacional de la Cultura y será presidido por el Presidente de la República. [...]

**b) Carta de Perdón:** El Estado de Guatemala se compromete a redactar una carta de perdón que el Presidente de la República entregará a los familiares del expresidente Árbenz Guzmán en el acto público de reconocimiento de responsabilidad que se realice. Esta carta será firmada por el Presidente y se publicará en el Diario de Centro América y en el Periódico.

**c) Designación de una sala del Museo Nacional de Historia:** El Estado de Guatemala se compromete a nombrar de forma permanente una sala del Museo Nacional de Historia que lleve el nombre de “Jacobó Arbenz Guzmán”.

El 5 de noviembre de 2010, el Estado de Guatemala realizó el nombramiento de la “Sala de Lectura Jacobo Arbenz Guzmán” en el Museo Nacional de Historia, por lo que el peticionario aceptó este acto como parte de la reparación moral en el presente caso, en virtud que dicho acto ya fue realizado.

**d) Revisión del Currículo Nacional Base:** El Estado de Guatemala se compromete a realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Educación para revisar el Currículo Nacional Base, específicamente en lo referente al gobierno del entonces Presidente Constitucional de la República de Guatemala, Coronel Juan Jacobo Árbenz Guzmán y a los hechos acaecidos en la época del golpe militar de 1954 en su contra; luego de realizar la revisión por parte del Estado y los familiares del expresidente Árbenz Guzmán, el Estado realizará las gestiones para que se implementen los cambios que sean propuestos.

**e) Diplomado en Derechos Humanos, Pluriculturalidad y Reconciliación de los Pueblos Indígenas:** El Estado de Guatemala se compromete a crear un “Diplomado en Derechos Humanos, Pluriculturalidad y Reconciliación de los Pueblos Indígenas”, con el aval académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el que se realizarán dos promociones: una en la región occidente, que estará integrada por los departamentos de Quetzaltenango como sede central del diplomado, San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Quiché y Sololá; y la otra en la región oriente que estará integrada por los departamentos de Zacapa como sede central, Chiquimula, Jalapa, El Progreso y Jutiapa.

Este diplomado va dirigido a funcionarias y funcionarios públicos de los Organismos Ejecutivo y Judicial, funcionarias y funcionarios de otras instancias del nivel intermedio y líderes indígenas; tendrá una duración de 10 sesiones presenciales las que se realizarán de forma quincenal. En el diplomado se desarrollarán temas que permitan analizar las desigualdades que existen entre los pueblos Maya, Garífuna, Xinka y Mestizo, con la finalidad de aportar a la disminución de prácticas discriminatorias.

**f) Nombramiento de la Carretera al Atlántico:** El Estado de Guatemala se compromete a realizar las gestiones ante las instituciones correspondientes, para que la carretera al Atlántico sea nombrada “Juan Jacobo Arbenz Guzmán” durante el transcurso de 2011. Al ser autorizada dicha solicitud, se realizará un acto público de nombramiento de la referida carretera.

**g) Restitución área de la Finca el Cajón:** como ya se ha mencionado anteriormente, la finca número 3443, folio 76, del libro 40 de Escuintla del Registro General de la Propiedad, denominada “Finca el Cajón” ubicada en el Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa del departamento de Escuintla, propiedad de la familia Árbenz Vilanova, fue confiscada por el Estado de Guatemala mediante el decreto 2 del 5 de julio de 1954 de la Junta de Gobierno e inscrita a favor del Estado de Guatemala, según lo regulado en el decreto 68 de 6 de agosto de 1954 emitido por el Presidente de Facto. Posteriormente, dicha finca fue parcelada por el Instituto Nacional de Transformación Agraria -INTA-. En 1996 y 2006 la Corte de Constitucionalidad dictó sentencias según expedientes 305-95 y 1143-2005, declarando inconstitucionales los decretos 2 y 68 relacionados.

En dictamen jurídico 29-2003 de la Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación, dicha institución opinó “La sentencia de la Corte de Constitucionalidad que corresponde al expediente 305-95 de fecha 26 de septiembre de 1996, que declaró inconstitucionales y sin ningún efecto las disposiciones que sirvieron de base para la expropiación, prácticamente viene a crear una obligación para el Estado de Guatemala, consistente en devolver los bienes o en su defecto hacer efectiva una indemnización, para los herederos del mismo; así es que dicha sentencia es una decisión de trascendental importancia, para la definición de la situación dudosa que dio lugar al expediente, que hoy se analiza”.

En virtud de lo anterior, el Estado de Guatemala se compromete a realizar las gestiones y estudios correspondientes, para verificar si existe aún algún área que sea parte de la Finca el Cajón que esté en dominio del Estado; en este caso, el Estado de Guatemala realizará las

gestiones legales y/o administrativas necesarias para que la propiedad de esta parte de la finca pueda ser reivindicada a los familiares del expresidente Árbenz Guzmán.

Si del estudio y las gestiones que el Estado realice en relación con la Finca el Cajón, se desprendiere que no existe ninguna área que se encuentre en dominio del Estado o que no sea posible reivindicarla a los familiares del expresidente Arbenz Guzmán, el Estado se compromete a pagar la cantidad adicional [...] en el transcurso de 2011.

Los familiares del expresidente Arbenz Guzmán se reservan el derecho de elegir entre la restitución de la parte de la Finca El Cajón, que como resultado del estudio que se realice pudiere reivindicárseles o el pago [...] antes de finalizar el 2011.

[...]

**i) Exposición Fotográfica en el Museo Nacional de Historia:** El Estado de Guatemala se compromete a gestionar una exposición fotográfica temporal sobre el expresidente Arbenz Guzmán y su familia en una de las salas del Museo Nacional de Historia. [...]

**j) Recuperación del acervo fotográfico de la familia Arbenz Guzmán:** El Estado de Guatemala se compromete a registrar digitalmente en San José de Costa Rica, el archivo fotográfico del expresidente Arbenz Guzmán, que se encuentra en posesión de sus familiares, entregándose a los familiares 3 copias digitales completas y 3 impresas de una selección hecha de mutuo acuerdo. Este compromiso se realizará durante 2011.

**k) Libro de Fotos:** El Estado se compromete a editar durante 2011, un libro con una selección de fotografías del expresidente Arbenz Guzmán. [...]

**l) Reedición del Libro “Mi Esposo el Presidente Árbenz”:** El Estado de Guatemala se compromete a reimprimir el libro “Mi Esposo el Presidente Arbenz”, cuya autora es María Cristina Vilanova de Árbenz, esposa del expresidente Árbenz Guzmán. [...]

**m) Elaboración y publicación de Biografía del expresidente Juan Jacobo Árbenz Guzmán:** El Estado de Guatemala se compromete a elaborar y publicar la Biografía del expresidente Juan Jacobo Árbenz Guzmán. Para el efecto, sus familiares se comprometen a proporcionar los datos que les sean requeridos y a dar acompañamiento al autor del libro en la elaboración de la biografía, asimismo autorizan su elaboración y publicación. [...]

**n) Emisión de una serie de sellos postales:** El Estado de Guatemala se compromete a gestionar la emisión de una serie de sellos postales que tenga como tema y/o motivo conmemorar al expresidente Arbenz Guzmán y su gestión gubernamental. La autorización, diseño, dentado, márgenes, número, valor fiscal, y tiraje queda a discreción de las autoridades de la materia correspondientes, con quienes COPREDEH y los familiares del expresidente Arbenz Guzmán, coordinarán las propuestas.

**o) Traslados [...]**

1640. En el Informe Anual de la CIDH del 2013, la CIDH dio por cumplidos la mayoría de los compromisos adoptados en el acuerdo de solución amistosa<sup>145</sup>. En relación con los compromisos pendientes de cumplimiento, según la información aportada por las partes durante el 2013, la CIDH constató que seguirían pendientes dos puntos del acuerdo:

a. **Libro de Fotos.** El Estado señaló que contrató a un profesional para retocar 120 imágenes fotográficas de la familia Arbenz que se utilizarán para editar el libro de fotos.

<sup>145</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 876-878, Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/annual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap2-D.pdf>

Para la elaboración del libro se estarían realizando las gestiones administrativas correspondientes.

- b. **Emisión de una serie de sellos postales.** El Estado indicó que se habrían sostenido diversas reuniones con el Consejo Nacional Filatélico, quien propone, para poder cumplir con el compromiso, la emisión de un matasellos, que es el que se utiliza para la cancelación u obliteración a efectos de inutilizar un sello. Sin embargo, debido a que con ello se cambiaría el objeto del compromiso, el Estado solicita que la familia Arbenz se pronuncie si está de acuerdo con esta modalidad de cumplimiento.

1641. El 10 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de los dos puntos pendientes. El 9 de enero de 2015, el Estado señaló respecto al primer punto relativo al libro que estarían realizando las gestiones administrativas correspondientes. Con respecto al segundo punto, el Estado manifestó que seguiría a la espera de la respuesta de la familia Arbenz sobre si estaría de acuerdo con la modalidad de cumplimiento señalada.

1642. El 1 de octubre de 2015, la Comisión solicitó información actualizada sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. El 21 de octubre de 2015, el Estado, a través de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, reiteró la información presentada el 9 de enero de 2015 en relación al primer punto pendiente, e indicó que, en relación al segundo punto, se han celebrado reuniones con el Consejo Nacional Filatélico para continuar con las gestiones administrativas y poder cumplir con este compromiso.

1643. El 13 de octubre de 2016, la Comisión solicitó información actualizada sobre los puntos pendientes de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. El 17 de noviembre de 2016, el Estado presentó la información solicitada.

1644. En relación a la edición de un libro de fotos sobre el expresidente Árbenz Guzmán, el Estado informó que el retoque de las 120 imágenes del acervo fotográfico ya fue realizado por un profesional. Así, el Estado continuará gestionando la elaboración del libro, el cual, se estima que una vez se hayan elegido las fotografías, se procederá a la contratación de un historiador para que proceda a la descripción de cada una de las imágenes. En relación a la emisión de una serie de sellos postales, el Estado señaló que actualmente se ha continuado las gestiones necesarias para poder emitir los sellos postales, pero que a la fecha aún las diligencias no han podido concretarse debido la reestructuración de la institución encargada para la emisión de los mismos.

1645. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó nuevamente información a ambas partes sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe los peticionarios no han presentado información actualizada.

1646. El 10 de octubre de 2017, el Estado reiteró la información proporcionada en el escrito del 17 de noviembre de 2016. En relación a la emisión de una serie de sellos postales, el Estado indicó que se llevaron a cabo varias reuniones con el Consejo Nacional de Filatélico para que se pudiera cumplir este compromiso.

1647. Por lo expuesto, la Comisión valora las acciones del Estado y concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas anteriormente. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los dos puntos pendientes a y b.

### **Petición 279-03, Informe No. 39/15, Fredy Rolando Hernández Rodríguez y otros (Guatemala)**

1648. El 24 de julio de 2015, mediante informe No. 39/15, la CIDH aprobó un acuerdo de solución amistosa en el caso de Fredy Rolando Hernández Rodríguez y Otros, relacionado con las torturas y ejecución extrajudicial de Héctor Hernández Rodríguez, Venancio Hernández Rodríguez, y Anacleto Soto Magaña, en el Municipio de Santo Domingo Suchitepéquez del Departamento de Suchitepéquez, por miembros del Ejército guatemalteco, el 21 de marzo de 1982. Los hechos fueron conocidos por el Juzgado de Primera Instancia de

Mazatenango, sin que se realizara una investigación seria que condujera al establecimiento de responsabilidad y sanción de los responsables.

1649. El 26 de septiembre de 2006, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa, en cuyo texto se establece lo siguiente:

#### **IV. DISCULPAS PÚBLICAS**

(a) El Estado se compromete a hacer público su reconocimiento de responsabilidad institucional por las violaciones detalladas en contra las comunidades rurales de Suchitepéquez en general, y presentar disculpas a través de un acto privado dirigido a los familiares de las víctimas, realizado por Eduardo Stein, Vicepresidente de la República.

(b) Las Partes acuerdan que el acto privado se celebrará el 28 de septiembre 2006.

(c) El Estado se compromete a dar publicidad sobre el acto privado a través de los esfuerzos del Departamento de Divulgación y Prensa de COPREDEH ante los medios de comunicación.

#### **V. MEDIDAS PARA HONRAR LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS**

El Estado se compromete a elaborar un muro y colocar plaquetas en una ubicación prominente en la comunidad Parcelamiento la Esperanza, Suchitepéquez, que detalle los nombres de las Víctimas y las violaciones cometidas por el Ejército en su contra, como medida para recuperar y dignificar su memoria, cuyo acto se realizará dos meses después de la fecha de suscripción del presente acuerdo.

CALDH se compromete a remitir los textos de las plaquetas y especificaciones del muro, durante los quince días posteriores a la suscripción del presente acuerdo.

#### **VI. INVESTIGACIÓN, JUICIO Y SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES**

(a) El Estado de Guatemala reconoce la imperiosa necesidad de impulsar investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos de las Víctimas.

(b) Dentro de este marco, COPREDEH impulsará las acciones necesarias ante el Ministerio Público a efecto de que se realice una investigación inmediata, imparcial y efectiva por parte del Estado.

(c) El Estado se compromete a proveer a CALDH y a la Comisión informes sobre el proceso de la investigación arriba detallada, por lo menos cada 6 meses empezando a partir de la fecha de suscripción del presente acuerdo.

#### **VII. REPARACIONES**

(a) El Estado reconoce que el aceptar su responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos de las Víctimas conlleva la responsabilidad de otorgar una justa indemnización a los Peticionarios bajo los parámetros establecidos en el derecho nacional e internacional.

(b) El Estado se compromete a suscribir un acuerdo de indemnización económica que definirán (sic) el monto y el plazo del pago de la indemnización económica, con los familiares de las víctimas, antes de finalizar el mes de octubre del presente año.

(c) Las partes se comprometen a reunirse dentro de ocho días siguientes a la firma del Acuerdo Amistoso, para discutir el tema de la indemnización económica y fijar un cronograma para asegurar el cumplimiento del inciso (b) arriba indicado.

(d) La indemnización económica no será objeto de ningún impuesto, gravamen o tasa actualmente existente o que pueda decretarse en el futuro.

1650. En el Informe No. 39/15 la Comisión expresó que había sido informada sobre la satisfacción de los peticionarios por el cumplimiento de la gran mayoría de los puntos del acuerdo. De acuerdo a la información aportada por las partes durante el seguimiento, la CIDH Declaró que el Estado dio cumplimiento a los compromisos asumidos en relación a las cláusulas 4, 5 y 7 del acuerdo de solución amistosa. En ese

sentido, continuaba pendiente de cumplimiento lo siguiente: a) el compromiso de investigar, juzgar y sancionar a los responsables<sup>146</sup>.

1651. El 13 de octubre de 2016, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los compromisos pendientes. El 11 de noviembre de 2016, los peticionarios y el Estado presentaron la información solicitada.

1652. Los peticionarios manifestaron en cuanto al compromiso de investigar, juzgar y sancionar, que el Estado durante el presente año, no ha proporcionado ninguna información sobre los avances en materia de investigación. De esta forma, destacaron que el Estado, desde su informe de 26 de julio de 2006, no ha brindado ninguna información sobre las acciones que ha impulsado ante el Ministerio Público a efecto de que se realice una investigación inmediata, imparcial, efectiva para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

1653. Por su parte, el Estado indicó que dentro del expediente identificado como MP137/1997/1526 se han llevado a cabo diligencias de exhumación, donde los familiares de las víctimas reconocieron los restos de Venancio y Héctor Hernández Rodríguez, por lo cual se solicitó en su momento al Registro Civil asentar las defunciones respectivas; así como las solicitudes a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de la Defensa Nacional información sobre los hechos. El Estado indicó que actualmente por medio de la COPREDEH viene trabajando con la Fiscalía General de la República, la creación de un mecanismo de coordinación interinstitucional que permita que se dé prioridad a la investigación de los casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y espera en breve su instauración. Por otra parte, solicitó que se tuviera por cumplido el compromiso de las disculpas públicas, el cual se realizó un acto privado dirigido a los familiares de las víctimas, así como la realización del acto público en el Parcelamiento La Esperanza, y las reparaciones económicas.

1654. El 5 de abril de 2017, los peticionarios informaron sobre el estado de cumplimiento del compromiso de investigar, juzgar y sancionar, que el Estado no ha logrado avances concretos ni significativos, por lo que observaron con preocupación que transcurridos 35 años desde que ocurrieron los hechos y más de 10 años de la firma del acuerdo, aún se mantenga la situación de impunidad. Sin embargo, observaron positivamente la creación del mecanismo de coordinación interinstitucional entre COPREDEH y la Fiscalía General de la República.

1655. El 4 de agosto de 2017, el Estado reiteró que COPREDEH ha venido trabajando con el Ministerio Público para avanzar en el cumplimiento de los puntos pendientes. Asimismo, el Estado propuso retomar las reuniones de trabajo con los peticionarios para discutir el cumplimiento de los compromisos pendientes.

1656. El 25 de agosto de 2017, la CIDH solicitó nuevamente información a ambas partes sobre el cumplimiento de los compromisos pendientes. Sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe ninguna de las partes ha presentado información.

1657. La Comisión toma nota y valora la información presentada por las partes. Al respecto la CIDH insta al Estado a tomar las medidas necesarias para avanzar de manera eficaz en la investigación, juicio y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos de las víctimas.

1658. Por lo expuesto, la CIDH recuerda lo establecido en su Informe en cuanto al cumplimiento de los compromisos establecidos en las cláusulas 4, 5 y 7 y concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas anteriormente. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

### **Caso 12.264, Informe No. 1/06, Franz Britton (Guyana)**

<sup>146</sup> Ver CIDH, Informe No. 39/15, Petición 279-03. Solución Amistosa. Fredy Rolando Hernández Rodríguez y Otros. Guatemala. 24 de julio de 2015. Disponible electrónicamente en: <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2015/GTSA279-03ES.pdf>

1659. En el Informe No. 1/06, de fecha 28 de febrero de 2006, la Comisión concluyó que los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado secuestraron y/o detuvieron a Franz Britton y en los siguientes seis años no se determinó su paradero y que, como resultado, Guyana violó los derechos de Franz Britton a la vida, la libertad, la protección judicial, al arresto arbitrario y al debido proceso de la ley, todos reconocidos, respectivamente, en los artículos I, XVIII, XXV, XXV y XXVI de la Declaración Americana.

1660. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Realice una investigación seria, imparcial y efectiva mediante los órganos competentes para establecer el paradero de Franz Britton e identificar a los responsables por su detención-desaparición, y, mediante procedimientos criminales, condene a los responsables de tales actos conforme a la ley.

2. Adopte las medidas legislativas u otras medidas necesarias para prevenir la reincidencia de hechos de esa naturaleza y proveer, en todos los Casos, el acceso al debido proceso y a los medios efectivos para establecer el paradero y la suerte de cualquier persona que se encuentren bajo la custodia Estatal.

3. Adoptar las medidas para hacer una reparación completa por las violaciones probadas, incluyendo las gestiones realizadas para hallar los restos de Franz Britton e informar a su familia sobre su paradero; haciendo los arreglos necesarios para satisfacer los deseos de su familia de saber del lugar final de su reposo; y facilitar a las reparaciones de los familiares de Franz Britton, incluyendo compensaciones morales y materiales, en compensación por el sufrimiento ocasionado por su desaparición y por no saber su verdadero destino.

1661. El Estado presentó su última comunicación el 8 de noviembre de 2013, indicando que no dispone de información adicional para compartir con la Comisión que complemente sus comunicaciones anteriores del 17 de octubre de 2011 y el 2 de noviembre de 2011.

1662. El 4 de diciembre de 2014, el 8 de septiembre de 2015 y 12 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento.

1663. El 18 de octubre de 2016, el Estado solicitó una prórroga, la que fue concedida el 4 de noviembre de 2016. Ninguna de las partes presentó información en dicha oportunidad.

1664. El 24 de agosto de 2017, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones pendientes. Sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe ninguna de las partes ha presentado información.

1665. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones sigue estando pendiente. Como resultado, la Comisión seguirá supervisando su cumplimiento.

#### **Caso 12.504, Informe No.81/07 Daniel y Kornel Vaux (Guyana)**

1666. En el Informe No. 81/07 del 15 de octubre de 2007, la CIDH concluyó que el Estado de Guyana es responsable por la aplicación de violencia por parte de policías a los hermanos Daniel y Kornel Vaux mientras se encontraban bajo su custodia; y por no suministrar un juicio justo a los hermanos Vaux, especialmente en el tratamiento por los tribunales de dicho país del respaldo probatorio relacionado con las confesiones, lo cual les impidió objetar plenamente la voluntariedad del respaldo probatorio relativo a las confesiones que presentó la parte acusadora. Por lo tanto, la CIDH concluyó que el Estado de Guyana violó los derechos consagrados en los artículos XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre en perjuicio de los hermanos Vaux; y que la ejecución de los hermanos Vaux con base en el proceso penal por el cual actualmente se encuentran convictos y condenados sería contrario al artículo I de la Declaración Americana.

1667. Con base en sus recomendaciones, la CIDH recomendó al Estado:

1. Otorgue una reparación efectiva, que incluya una indemnización por el maltrato infligido a los hermanos Vaux; un nuevo juicio sobre los cargos que se imputan a los hermanos Vaux, de acuerdo con las protecciones judiciales consagradas en la Declaración Americana, o, en su defecto, la debida revocación o conmutación de la sentencia.
2. Adopte las medidas legislativas u otras medidas necesarias para asegurar que los acusados obtengan acceso a las pruebas bajo control del Estado que puedan razonablemente necesitar para impugnar el carácter voluntario de las confesiones usadas como pruebas.
3. Realice una investigación para identificar a los autores materiales de las golpizas infligidas a Daniel Vaux y Kornel Vaux cuando estaban bajo custodia, para extraerles confesiones, y aplicarles el debido de castigo que fije la ley;
4. Adopte las medidas legislativas u otras medidas necesarias para asegurar que toda confesión de culpabilidad de un acusado sea válida únicamente si es formulada libre de coerción de cualquier tipo, de acuerdo con el artículo XXV de la Declaración Americana.

1668. El Estado presentó su última comunicación el 8 de noviembre de 2013, indicando que no disponía de información adicional para compartir con la Comisión que complemente sus comunicaciones anteriores del 17 de octubre de 2011 y el 2 de noviembre de 2011.

1669. El 24 de marzo de 2014, los peticionarios informaron que sus hermanos Daniel and Kornel Vaux han sido transferidos a la prisión de Georgetown y que la revisión del beneficio de libertad condicional estaba pendiente para enero de 2016.

1670. El 4 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Los peticionarios no presentaron información. El 6 de febrero de 2015, el Estado informó sobre el cumplimiento de la recomendación establecida en el punto 1. Al respecto estableció que debido a la reforma realizada al Acto de Ofensas Criminales del año 2010, en la cual se elimina la pena de muerte a las personas condenas por homicidios y se regulan las figuras de cadena perpetua y la prisión con posibilidad de libertad condicional, en fecha 28 de enero de 2013 el Tribunal Superior conmutó la sentencia de los hermanos Daniel and Kornel Vaux a cadena perpetua.

1671. La CIDH toma en cuenta y valora las acciones del Estado para dar cumplimiento a la recomendación establecida en el punto 1. Sin embargo, observa que para dar cumplimiento a la mencionada recomendación es preciso otorgar una reparación efectiva, que incluya una indemnización por el maltrato infligido a las víctimas.

1672. El 8 de septiembre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 24 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.

1673. Con base en estas consideraciones, la Comisión observa que el cumplimiento de las recomendaciones es parcial. Como resultado, la Comisión seguirá supervisando su cumplimiento.

**Caso 11.335, Informe No. 78/02, Guy Malary (Haití)**

1674. En el Informe No. 78/02, del 27 de diciembre de 2002, la Comisión concluyó que el Estado haitiano había violado: a) el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana en perjuicio del señor Guy Malary; b) los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial consagrados en los artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana en perjuicio de los familiares del señor Guy Malary; y c) que dichas violaciones involucraban el incumplimiento de la obligación general de respetar y garantizar los derechos prevista en el artículo 1(1) del mismo instrumento internacional, en perjuicio del señor Guy Malary y de sus familiares.

1675. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Que lleve a cabo una investigación judicial de manera completa, rápida, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria haitiana para determinar la responsabilidad de todos los autores de la violación del derecho a la vida del señor Guy Malary y sancione a todos los responsables.
2. Que otorgue una reparación integral a los familiares de las víctimas, entre otras, el pago de una indemnización justa.
3. Que adopte las medidas necesarias para que las autoridades competentes responsables de las investigaciones judiciales conduzcan los procesos penales de acuerdo con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

1676. El 22 de noviembre de 2010, el 24 de octubre de 2011, el 19 de noviembre de 2012, el 7 de octubre de 2013, el 24 de noviembre de 2014, el 8 de septiembre de 2015, el 13 de octubre de 2016 y el 6 de octubre de 2017 la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.

1677. La Comisión invita a las partes a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las demás recomendaciones por parte del Estado. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones sigue estando pendiente. Como resultado, la Comisión seguirá supervisando su cumplimiento.

**Caso 11.826, 11.843, 11.846 y 11.847, Informe No. 49/01, Leroy Lamey, Kevin Mykoo, Milton Montique y Dalton Daley (Jamaica)**

1678. En el Informe No. 49/01, fechado el 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación de los derechos de las víctimas en los Casos Nos. 11.826 (Leroy Lamey), 11.843 (Kevin Mykoo), 11.846 (Milton Montique) y 11.847 (Dalton Daley), protegidos por los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1), conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, por sentenciar a estas víctimas a una pena de muerte obligatoria; b) la violación de los derechos de las víctimas en los Casos Nos. 11.826 (Leroy Lamey), 11.843 (Kevin Mykoo), 11.846 (Milton Montique) y 11.847 (Dalton Daley), protegidos por el artículo 4(6) de la Convención, por no otorgarles un derecho efectivo a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) la violación de los derechos de las víctimas en los Casos Nos. 11.843 (Kevin Mykoo), 11.846 (Milton Montique) y 11.847 (Dalton Daley), protegidos por los artículos 7(5) y 7(6) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no llevar sin demora a las víctimas ante un juez después de su arresto, y por no garantizarles un recurso sin demora ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención, d) La violación de los derechos de las víctimas en los Casos 11.846 (Milton Montique) y 11.847 (Dalton Daley), protegidos por los artículos 7(5) y 8(1) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1), en razón de la demora en someterlas a juicio, e) la violación de los derechos de las víctimas en los Casos Nos. 11.826 (Leroy Lamey), 11.843 (Kevin Mykoo), 11.846 (Milton Montique) y 11.847 (Dalton Daley), protegidos por los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, conjuntamente con violación del artículo 1(1) de la misma, en razón de sus condiciones de

detención, f) La violación de los derechos de las víctimas en los Casos Nos. 11.846 (Milton Montique) y 11.847 (Dalton Daley), protegidos por los artículos 8(2)(d) y 8(2)(c) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por negarles el acceso a un abogado durante períodos prolongados después de su arresto, y g) La violación de los derechos de las víctimas en los Casos Nos. 11.826 (Leroy Lamey), 11.843 (Kevin Mykoo), 11.846) Milton Montique) y 11.847 (Dalton Daley), protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no poner a su disposición asistencia letrada para una acción constitucional.

1679. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Otorgue a las víctimas en los Casos materia del presente informe una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una indemnización.
2. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que no se imponga la pena de muerte en violación de los derechos y libertades consagrados por la Convención, incluidos los artículos 4, 5 y 8, y, en particular, garantizar que nadie sea sentenciado a muerte de acuerdo con una ley de sentencia obligatoria.
3. Adopte las medidas legislativas y de otra índole, necesarias para garantizar la efectividad en Jamaica del derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia, consagrado en el artículo 4(6) de la Convención.
4. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Jamaica del derecho de las víctimas a un trato humano, consagrado en los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, particularmente en relación con sus condiciones de detención.
5. Adopte las medidas legislativas y de otra índole, necesarias para garantizar la efectividad en Jamaica del derecho a una audiencia imparcial, consagrado en el artículo 8(1) de la Convención, y del derecho a la protección judicial, consagrado en el artículo 25 de la misma, en relación con las acciones constitucionales.

1680. En su Informe Anual 2006, la CIDH declaró que se ha cumplido su segunda recomendación y que se han cumplido parcialmente la primera y la tercera de las recomendaciones<sup>147</sup>.

1681. El 3 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento.

1682. El 4 de marzo de 2015, los peticionarios confirmaron que la sentencia de pena de muerte del señor Leroy Lamey fue conmutada a cadena perpetua por el Gobernador General de Jamaica, de conformidad con la decisión del Consejo Privado en el caso *Pratt & Morgan*. De acuerdo con lo establecido por los peticionarios, debido a la modificación en su sentencia, el señor Leroy Lamey estaría calificado para solicitar libertad condicional una vez cumplidos 7 años de su condena. En este sentido, teniendo en cuenta que ya ha cumplido aproximadamente 21 años y 6 meses, los peticionarios afirmaron que el señor Lamey podría ejercer su derechos en cualquier etapa, y que en estos momentos se encuentran haciendo consultas sobre la posición actual relativa a su posible liberación.

1683. Por su parte, se recibió respuesta del Estado el día 22 de abril de 2015. En relación a la primera recomendación, el Estado manifestó que en virtud de la sentencia dictada por el Comité Judicial del Consejo Privado en el caso *Pratt & Morgan* (1993), se les conmutará la pena a cadena perpetua, a todos los detenidos sentenciados de pena de muerte. Igualmente sobre esta recomendación, el Estado consideró como vaga e incoherente la mención hecha por la CIDH en cuanto a otorgar una indemnización a la víctima,

<sup>147</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2006, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 332.

aclarando que el tipo de compensación dependería del objetivo para el cual se otorga, lo cual no habría sido establecido por la Comisión. El Estado manifestó que la CIDH estaría basándose en un premisa falsa si fundamenta que la compensación a la víctima es procedente porque el Estado no proveyó un recurso efectivo en los casos de pena de muerte; al respecto el Estado estableció que si bien debido a la sentencia del Consejo Privado en el caso *Lambert Watson v R* (2004) las leyes fueron reformadas, antes de dicha sentencia la imposición de la pena de muerte en casos como el presente era obligatoria, por lo tanto solo se contemplaría una compensación para las personas sentenciadas a pena de muerte con posterioridad a la mencionada sentencia del Consejo Privado, y que en este caso, la compensación ya había sido cumplida por haber conmutado la pena. En cuanto a la segunda recomendación, el Estado indicó que se han adoptado las medidas legislativas para garantizar que la imposición de la pena de muerte no sea obligatoria, asimismo estableció las diferentes enmiendas realizadas a las leyes pertinentes. En este sentido, aclaró que la pena de muerte ahora es opcional en todos los casos en los cuales anteriormente era obligatoria la imposición de dicha condena, por lo cual ahora la Corte está obligada a escuchar los alegatos, representaciones y evidencias de las partes antes de dictar sentencia. Asimismo, indicó que “en los casos en los cuales haya sido impuesta una pena de muerte, el tribunal debe especificar los años que debe cumplir el condenado antes que pueda solicitar libertad condicional”. Finalmente, el Estado especificó que, como resultado de la jurisprudencia del Comité Judicial del Consejo Privado, la Corte de Apelaciones de Jamaica solo impondrá la pena de muerte en los casos en los cuales los hechos sean los más extremos y excepcionales comparados con los otros casos de homicidios.

1684. En relación a la tercera recomendación, el Estado mencionó que de conformidad con la sección 90 de la Constitución de Jamaica, el Gobernador General tiene la potestad para indultar a cualquier persona condenada por cualquier delito, otorgar una prórroga indefinida o por un periodo específico de la ejecución de una pena o sustituir una sanción por una menos lesiva. En este mismo sentido, especificó que las personas siempre han disfrutado del derecho de recurrir la condena a pena de muerte, lo cual señaló puede ser observado en el número de casos que se han presentado ante el Comité Judicial del Consejo Privado, que han resultado en la confirmación de la sentencia o en su sustitución por una condena más apropiada. En cuanto a la cuarta recomendación, el Estado hizo mención de como los condenados a pena de muerte fueron reubicados con la población general de las prisiones como resultado de la sentencia en el caso *Lambert Watson*; igualmente señaló que las sentencias de las víctimas del presente caso, fueron conmutadas a cadenas perpetuas. En este sentido indicó que Leroy Lamey podrá solicitar libertad condicional en el 2016, los señores Mykoo, Montique, y Daley ya han solicitado libertad condicional, sin embargo las solicitudes de los señores Mykoo y Montique han sido rechazadas mientras que la del señor Daley sigue pendiente. Asimismo el Estado indicó que generalmente las condiciones de detención cumplen con los estándares de trato humano e igualmente señaló las autoridades que monitorean el estado de los centros de detención.

1685. Finalmente, en relación a la quinta recomendación, el Estado consideró que las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial están debidamente protegidos de conformidad con las secciones 13 y 16 de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de Jamaica, los cuales han sido ampliados por la jurisprudencia del Comité Judicial del Consejo Privado de Jamaica y la Corte de Apelaciones.

1686. El 29 de septiembre de 2015, la CIDH volvió a solicitar información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Hasta la fecha los peticionarios no han presentado información. El 17 de noviembre de 2015, el Estado presentó su respuesta en la cual reiteró la información aportada en su escrito anterior.

1687. El 13 de octubre de 2016 y 23 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.

1688. La CIDH valora la información proporcionada por el Estado sobre el cumplimiento de las recomendaciones, en especial la revisión progresiva de las sentencias de pena de muerte, lo que ha llevado a la conmutación de la pena en varios casos. La CIDH aprecia positivamente estos avances estructurales e insta al Estado a continuar trabajando hacia el cumplimiento total de las recomendaciones en este caso, y a brindar información detallada que permita analizar el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

1689. Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente con las recomendaciones arriba mencionadas. La CIDH seguirá la supervisión hasta que se logre el cumplimiento total.

#### **Caso 12.069, Informe No. 50/01, Damion Thomas (Jamaica)**

1690. En el Informe No. 50/01, del 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por no respetar la integridad física, mental y moral de Damion Thomas y, en todas las circunstancias, someter a Damion Thomas a un castigo o tratamiento cruel o inhumano, contrario al artículo 5(1) y 5(2) de la Convención, todo ello, en conjunción con la violación de las obligaciones que impone al Estado el artículo 1(1) de la Convención.

1691. La Comisión Interamericana formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Otorgar a la víctima una reparación efectiva, que incluya una indemnización.
2. Realizar investigaciones exhaustivas e imparciales de los hechos de los incidentes denunciados por los peticionarios, a fin de determinar y atribuir la responsabilidad a quienes corresponda por las violaciones mencionadas, y adoptar medidas de reparación adecuadas.
3. Revisar sus prácticas y procedimientos para asegurar que los funcionarios involucrados en la reclusión y supervisión de reclusos en Jamaica reciban la capacitación correspondiente en relación con las normas de un trato humano de dichas personas, incluida la restricción del uso de la fuerza contra tales personas.
4. Revisar sus prácticas y procedimientos para asegurar que las denuncias presentadas por los reclusos en relación con el presunto maltrato de parte de los funcionarios de la penitenciaría y demás condiciones de su reclusión sean investigadas y resueltas.

1692. El Estado presentó información pertinente al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo de este caso el 19 de diciembre de 2012 y el 7 de enero de 2013. En sus respuestas, el Estado simplemente reiteró sus comunicaciones anteriores sobre este Informe de Fondo, sin citar ningún esfuerzo.

1693. El 3 de diciembre de 2014 y el 29 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Hasta la fecha los peticionarios no han presentado información.

1694. El 17 de noviembre de 2015, el Estado reiteró lo establecido en relación a la primera recomendación en cuanto que considera que la línea de acción apropiada para obtener una reparación es que el señor Thomas acceda a agotar los recursos internos en los tribunales locales. Asimismo, el Estado indicó que considera la mención hecha por la CIDH en cuanto a otorgar una indemnización como vaga e incoherente, ya que estimó que la Comisión no ha establecido el propósito de la compensación ni ha definido los principios en los cuales se basaría. En relación a la segunda recomendación, el Estado indicó que ha conducido investigaciones exhaustivas e imparciales en cuanto a las denuncias hechas por el señor Thomas, llevando a cabo mayores esfuerzos luego de las comunicaciones de la CIDH, sin embargo el señor Thomas no ha brindado ninguna información que pueda facilitar la investigación.

1695. En relación a la tercera recomendación, el Estado indicó que en Jamaica se provee una formación a los funcionarios involucrados en la reclusión y supervisión de reclusos, la cual se revisa de manera continua con el fin de garantizar que se cumplan los estándares requeridos de trato humano. En este sentido, manifestó que la Unidad de Inspección del Departamento de Servicios Correccionales lleva a cabo

una formación de sensibilización con los funcionarios de prisiones, que cubre las normas y obligaciones internacionales pertinentes, así como las leyes de Jamaica en relación con los estándares de trato humano y las restricciones en el uso de la fuerza. En cuanto a la cuarta recomendación, indicó que existen distintos mecanismos para investigar y monitorear las denuncias o quejas realizadas por los detenidos; en este sentido determinó que dichas denuncias se puede hacer ante el Superintendente del centro de detención en el cual se encuentra, el cual está obligado a investigar. De la misma forma, señaló como otras autoridades competentes para investigar dichas denuncias, al Departamento de Servicios Correccionales, en algunos casos la fuerza de policía; la Unidad de Inspección del Ministerio de Seguridad Nacional el cual investiga incidentes en los centro correccionales y puede recomendar acciones disciplinarias en contra de los oficiales, sub Comité Parlamentario que revisa el sistema de detención y sus políticas, el Defensor Público como una comisión independiente del Parlamento y la Comisión Independiente de Investigación INDECOM, la cual recibe denuncias de cualquier persona en relación a los oficiales correccionales.

1696. El 13 de octubre de 2016 y 23 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.

1697. La CIDH valora la información proporcionada por el Estado sobre el cumplimiento de las recomendaciones e insta al Estado a continuar trabajando hacia el cumplimiento total de las recomendaciones en este caso, y a brindar información detallada que permita analizar el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

1698. Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente con las recomendaciones arriba mencionadas. La CIDH seguirá la supervisión hasta que se logre el cumplimiento total.

#### **Caso 12.183, Informe N° 127/01, Joseph Thomas (Jamaica)**

1699. En el Informe No. 127/01, del 3 de diciembre de 2001, la Comisión concluyó: a) que el Estado era responsable de la violación de los derechos del señor Thomas consagrados en los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convención, conjuntamente con la violación de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por sentenciarlo a una pena de muerte obligatoria; b) que el Estado era responsable de la violación de los derechos del señor Thomas consagrados en el artículo 4(6) de la Convención, conjuntamente con la violación de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por no otorgarle un derecho efectivo a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) que el Estado es responsable de la violación de los derechos del señor Thomas consagrados en los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, en razón de sus condiciones de detención; y d) que el Estado es responsable de la violación de los derechos del señor Thomas consagrados en los artículos 8(1) y 8(2) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por la manera en que el juez instruyó al jurado durante su juicio.

1700. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Otorgue a la víctima un recurso efectivo, que incluya un nuevo juicio, de acuerdo con las protecciones del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención o, cuando ello no sea posible, su liberación e indemnización.
2. Adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias para garantizar que la pena de muerte no se imponga dando contrario a los derechos y libertades garantizados en la Convención, incluyendo, en particular, los dispuestos en los artículos 4, 5 y 8.
3. Adopte las medidas legislativas o de otra índole, necesarias para garantizar que tenga efecto en Jamaica el derecho consagrado en el artículo 4(6) de la Convención a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.

4. Adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias para garantizar que las condiciones de detención del señor Thomas cumplan con las normas de un trato humano a que obliga el artículo 5 de la Convención.

1701. En su Informe Anual 2007, la CIDH declaró que se había dado un cumplimiento parcial de la tercera de las recomendaciones contenidas en su Informe N° 127/01, así como el cumplimiento total de la segunda recomendación con la adopción de medidas legislativas que garantizan que ninguna persona sea condenada a muerte en virtud de una ley que imponga esa pena como preceptivo<sup>148</sup>.

1702. El Estado presentó información pertinente al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo de este caso el 19 de diciembre de 2012 y el 7 de enero de 2013. En sus respuestas, el Estado simplemente reiteró sus comunicaciones anteriores sobre este Informe de Fondo, sin citar ningún esfuerzo emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1703. El 3 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El 9 de diciembre de 2014, los peticionarios informaron que después de tratar de visitar al señor Thomas en la prisión, ellos fueron informados que estaba en libertad condicional; ellos están confirmado dicha información con el Comisionado de Prisiones. Por su parte, el Estado presentó su respuesta el 22 de abril de 2015. En dicha comunicación el Estado indicó sus reservas en relación a la primera recomendación. En este sentido, el Estado manifestó que las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención están reconocidas en la sección 16 de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de la Constitución de Jamaica. Asimismo, reiteró que considera que el señor Thomas fue condenado legalmente, y que bajo las leyes del Estado de Jamaica tiene el derecho de apelar su condena ante la Corte de Apelaciones y posteriormente solicitar el permiso para apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado. Al respecto, mencionó que debido a que la separación de poderes es un principio fundamental de la Constitución, el Poder Ejecutivo no puede interferir con el ejercicio de las potestades del Poder Judicial.

1704. El Estado hizo mención a que en el presente caso, la Corte de Apelaciones había determinado que las indicaciones dadas al jurado habían sido justas y claras; y que en su oportunidad el Consejo Privado de Jamaica, de conformidad con la sección 91 de la Constitución, había declarado que la decisión emanada por la Corte de Apelaciones había sido satisfactoria. El Estado agregó que el señor Thomas había realizado una solicitud para obtener una autorización especial para apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado, pero que dicha solicitud había sido rechazada. En este sentido, concluyó que dado el estado actual del caso, no es posible realizar un nuevo juicio; sin embargo indicó que a partir del 2014 el señor Thomas califica para solicitar libertad condicional, por lo que se había interpuesto una solicitud y se encontraba a la espera de la decisión de la Junta pertinente.

1705. En cuanto a la segunda recomendación, el Estado indicó que se han adoptado las medidas legislativas para garantizar que la imposición de la pena de muerte no sea obligatoria, asimismo estableció las diferentes enmiendas realizadas a las leyes pertinentes. En este sentido, aclaró que la pena de muerte ahora es opcional en todos los casos en los cuales anteriormente era obligatoria la imposición de dicha condena, por lo cual ahora la Corte está obligada a escuchar los alegatos, representaciones y evidencias de las partes antes de dictar sentencia. Asimismo, indicó que en los casos en los cuales haya sido impuesta una pena de muerte, el tribunal debe especificar los años que debe cumplir el condenado antes que pueda solicitar libertad condicional. Finalmente, el Estado especificó que, como resultado de la jurisprudencia del Comité Judicial del Consejo Privado, la Corte de Apelaciones de Jamaica solo impondrá la pena de muerte en los casos en los cuales los hechos sean los más extremos y excepcionales comparados con los otros casos de homicidios.

1706. En relación a la tercera recomendación, el Estado mencionó que de conformidad con la sección 90 de la Constitución de Jamaica, el Gobernador General tiene la potestad para indultar a cualquier

<sup>148</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2007, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 511.

persona condenada por cualquier delito, otorgar una prórroga indefinida o por un periodo específico de la ejecución de una pena o sustituir una sanción por una menos lesiva. En este mismo sentido, especificó que las personas siempre han disfrutado del derecho de recurrir de la condena a pena de muerte, lo cual señaló puede ser observado en el número de casos que se han presentado ante el Comité Judicial del Consejo Privado, que han resultado en la confirmación de la sentencia o en su sustitución por una condena más apropiada. En relación a la cuarta recomendación, el Estado reiteró que virtud de la sentencia en el caso *Pratt & Morgan*, todos los condenados a pena de muerte cuyas condenas no se habían hecho efectivas en 5 años se les habían conmutado automáticamente su condena a cadena perpetua; agregando además que habían sido trasladados con la población general de las prisiones. Asimismo, señaló que las condiciones de detención cumplían con los estándares de trato humano y en ese sentido la Unidad de Inspección del Departamento de Servicios Correccionales realiza un monitoreo continuo de cumplimiento de estos estándares y realiza recomendaciones para generar mejoras sistemáticas. Igualmente, expresó las intenciones del Gobierno de construir nuevos centros de detención, de iniciar un proceso de reclasificación para aliviar la sobrepoblación de las prisiones de máxima seguridad, y señaló la revisión del proceso para solicitar la libertad condicional, lo cual ha resultado en un aumento significativo del número de libertades condicionales otorgadas en los últimos 3 años.

1707. El 29 de septiembre de 2015, la CIDH volvió a solicitar información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El 1 de octubre de 2015, los peticionarios informaron que la solicitud del señor Thomas para obtener libertad condicional había sido recibida por la Junta el 28 de noviembre de 2014, y que se encontraban a la espera de la decisión por parte de las autoridades.

1708. El 17 de noviembre de 2015, el Estado reiteró la información aportada en la comunicación anterior en relación al estado de cumplimiento de las recomendaciones. En este sentido, el Estado únicamente reportó nueva información en relación a la primera y a la cuarta recomendación. En cuanto a la primera recomendación el Estado indicó que la autoridad competente le ha concedido al señor Thomas su libertad condicional; igualmente el Estado consideró como vaga e incoherente la mención hecha por la CIDH en cuanto a otorgar una indemnización a la víctima, aclarando que el tipo de compensación dependería del objetivo para el cual se otorga, lo cual no habría sido establecido por la Comisión. En relación a la cuarta recomendación, el Estado manifestó las intenciones del Gobierno de construir nuevos centros de detención, de iniciar un proceso de reclasificación para aliviar la sobrepoblación de las prisiones de máxima seguridad, y señaló la revisión del proceso para solicitar la libertad condicional, lo cual ha resultado en un aumento significativo del número de libertades condicionales otorgadas en los últimos 3 años.

1709. El 13 de octubre de 2016 y 23 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Los peticionarios no presentaron información adicional en esta oportunidad.

1710. El 7 de octubre de 2017, el Estado reiteró a la CIDH que el señor Thomas fue liberado condicionalmente el día 18 de septiembre de 2015.

1711. La CIDH toma nota de que el señor Joseph Thomas fue liberado condicionalmente y valora la información proporcionada por el Estado sobre el cumplimiento de las recomendaciones, en especial la revisión progresiva de las sentencias de pena de muerte, lo que ha llevado a la conmutación de la pena en varios casos. La CIDH aprecia positivamente estos avances estructurales e insta al Estado a continuar trabajando hacia el cumplimiento total de las recomendaciones en este caso, y a brindar información detallada que permita analizar el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.

1712. Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado cumplió parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Como resultado, la Comisión seguirá supervisando los puntos todavía pendientes.

#### **Caso 12.275, Informe No. 58/02, Denton Aitken (Jamaica)**

1713. En el Informe No. 58/02, del 21 de octubre de 2002, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación de los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convención con respecto al señor Aitken, junto con violaciones de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por sentenciarle a una pena de muerte obligatoria; b) la violación del artículo 4(6) de la Convención con respecto al señor Aitken, junto con violaciones de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por no otorgarles un derecho efectivo a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) la violación de los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención con respecto al señor Aitken, junto con violaciones del artículo 1(1) de la misma, en razón de sus condiciones de detención; y d) la violación de los artículos 8(1) y 25 de la Convención con respecto al señor Aitken, junto con violaciones del artículo 1(1) de la misma, por negarle al señor Aitken acceso a un recurso de inconstitucionalidad para la determinación de sus derechos de conformidad con la legislación interna y la Convención en conexión con el proceso penal en su contra.

1714. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Otorgue a la víctima una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una indemnización.
2. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que no se imponga la pena de muerte en violación de los derechos y libertades consagrados por la Convención, incluidos los artículos 4, 5 y 8.
3. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Jamaica del derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia, consagrado en el artículo 4(6) de la Convención.
4. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que las condiciones en que se encuentra detenido el señor Aitken cumplen con las normas de trato humano encomendadas por el artículo 5 de la Convención.
5. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Jamaica del derecho a una audiencia imparcial, consagrado en el artículo 8(1) de la Convención, y del derecho a la protección judicial, consagrado en el artículo 25 de la misma, en relación con las acciones constitucionales, de conformidad con el análisis de la Comisión en este informe.

1715. En su Informe Anual 2006, la CIDH declaró el cumplimiento de la segunda recomendación y un cumplimiento parcial en cuanto a la primera y tercera de las recomendaciones<sup>149</sup>.

1716. El 3 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El 4 de marzo de 2015, los peticionarios reiteraron la información presentada en su nota de fecha 7 de enero de 2009 e informaron que la condena a pena de muerte del señor Aiken había sido conmutada a cadena perpetua por el Gobernador General de Jamaica, de conformidad con la sentencia emanada del Consejo Privado en el caso *Pratt & Morgan*. Al respecto, agregaron que debido a la modificación en su sentencia, el señor Denton Aitken calificaría para solicitar libertad condicional una vez cumplidos 7 años de su condena. En este sentido, teniendo en cuenta que ya ha cumplido más de 17 años, los peticionarios afirmaron que el señor Aitken podría ejercer sus derechos en cualquier etapa, y que en estos momentos se encuentran haciendo consultas sobre la posición actual relativa a su posible liberación.

1717. Por su parte, el Estado presentó información el 28 de abril de 2015. En relación la primera recomendación, en dicha comunicación el Estado manifestó que, en virtud de la sentencia dictada por el Comité Judicial del Consejo Privado en el caso *Pratt & Morgan* (1993), cualquier caso en el cual el período

<sup>149</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2006, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 348.

comprendido entre una sentencia de muerte y la ejecución de dicha condena sea superior a cinco años, la ejecución se presume un castigo inhumano y degradante. Igualmente sobre esta recomendación, el Estado consideró como vaga e incoherente la mención hecha por la CIDH en cuanto a otorgar una indemnización a la víctima, aclarando que el tipo de compensación dependería del objetivo para el cual se otorga, lo cual no habría sido establecido por la Comisión. El Estado manifestó que la CIDH estaría basándose en un premisa falsa si fundamenta que la compensación a la víctima se procedente porque el Estado no proveyó un recurso efectivo en los casos de pena de muerte; al respecto el Estado estableció que si bien debido a la sentencia del Consejo Privado en el caso *Lambert Watson v R* (2004) las leyes fueron reformadas. Antes de dicha sentencia la imposición de la pena de muerte en casos como el presente era obligatoria, por lo tanto solo se contemplaría una compensación para las personas sentenciadas a pena de muerte con posterioridad a la mencionada sentencia del Consejo Privado, y que en este caso, el Estado consideraba que la compensación ya había sido cumplida por haber conmutado la pena.

1718. En relación a la segunda recomendación, el Estado expresó que se han adoptado las medidas legislativas para garantizar que la imposición de la pena de muerte no sea obligatoria, asimismo estableció las diferentes enmiendas realizadas a las leyes pertinentes. En este sentido, aclaró que la pena de muerte ahora es opcional en todos los casos en los cuales anteriormente era obligatoria la imposición de dicha condena, por lo cual ahora la Corte está obligada a escuchar los alegatos, representaciones y evidencias de las partes antes de dictar sentencia. Asimismo, indicó que en los casos en los cuales haya sido impuesta una pena de muerte, el tribunal debe especificar los años que debe cumplir el condenado antes que pueda solicitar libertad condicional. Finalmente, el Estado especificó que, como resultado de la jurisprudencia del Comité Judicial del Consejo Privado, la Corte de Apelaciones de Jamaica solo impondrá la pena de muerte en los casos en los cuales los hechos sean los más extremos y excepcionales comparados con los otros casos de homicidios. En relación a la tercera recomendación, el Estado mencionó que de conformidad con la sección 90 de la Constitución de Jamaica, el Gobernador General tiene la potestad para indultar a cualquier persona condenada por cualquier delito, otorgar una prórroga indefinida o por un periodo específico de la ejecución de una pena o sustituir una sanción por una menos lesiva. En este mismo sentido, especificó que las personas siempre han disfrutado del derecho de recurrir de la condena a pena de muerte, lo cual señaló puede ser observado en el número de casos que se han presentado ante el Comité Judicial del Consejo Privado, que han resultado en la confirmación de la sentencia o en su sustitución por una condena más apropiada.

1719. En cuanto a la cuarta recomendación, el Estado hizo mención de como los condenados a pena de muerte fueron reubicados con la población general de las prisiones como resultado de la sentencia en el caso *Lambert Watson*; asimismo indicó que la pena del señor Aitken fue conmutada a cadena perpetua por el Gobernador en virtud de la sentencia dictada por el Comité Judicial del Consejo Privado en el caso *Pratt & Morgan*; en este sentido agregó que el señor Aitken fue liberado el 16 de mayo de 2014. Sobre esta recomendación, el Estado afirma que generalmente las condiciones de detención cumplen con los estándares de trato humano e igualmente señaló las autoridades que monitorean el estado de los centros de detención.

1720. Finalmente, en relación a la quinta recomendación, el Estado consideró que las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial están debidamente protegidos de conformidad con las secciones 13 y 16 de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de Jamaica, los cuales han sido ampliados por la jurisprudencia del Comité Judicial del Consejo Privado de Jamaica y la Corte de Apelaciones.

1721. El 29 de septiembre de 2015, la CIDH volvió a solicitar información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Hasta la fecha los peticionarios no han proporcionado nueva información. El 29 de octubre de 2015, el Estado reiteró la información aportada en la comunicación anterior en relación al estado de cumplimiento de las recomendaciones. En este sentido, el Estado únicamente reportó nueva información en relación a la cuarta recomendación, sobre lo que indicó que el Departamento de Servicios Correccionales realiza reparaciones y mantenimiento constante de las instalaciones de las prisiones; así como de las intenciones del Gobierno de construir nuevos centros de detención, de iniciar un proceso de reclasificación para aliviar la sobrepoblación de las prisiones de máxima seguridad. Asimismo, señaló la revisión del proceso para solicitar la libertad condicional, lo cual ha resultado en un aumento significativo del número de libertades condicionales otorgadas en los últimos 3 años.

1722. La CIDH observa y valora la información aportada por el Estado, en particular en relación a la cuarta recomendación en la cual se informó que el señor Denton Aitken fue puesto en libertad en mayo de 2014. Sin embargo, dada la contradicción existente con la información presentada por los peticionarios en marzo de 2015 según la cual estarían considerando la presentación de un recurso para la liberación de la víctima, la CIDH considera pertinente contar con información precisa de las dos partes para confirmar el cumplimiento dicha recomendación, y en este sentido insta a las partes aportar la información pertinente y actualizada sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones.

1723. El 13 de octubre de 2016 y 23 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.

1724. Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado cumplió parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Como resultado, la Comisión seguirá supervisando los puntos todavía pendientes.

### **Caso 12.347, Informe No. 76/02, Dave Sewell (Jamaica)**

1725. En el Informe No. 76/02, del 27 de diciembre de 2003, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por: a) la violación de los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convención respecto del señor Sewell, en conjunción con la violación de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por sentenciarlo a una pena de muerte obligatoria; b) la violación de los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención respecto del señor Sewell, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la misma, en razón de su tratamiento y sus condiciones de detención; c) la violación de los artículos 7(5) y 8(1) de la Convención, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la misma, en razón de la demora en el juicio del señor Sewell; y d) la violación de los artículos 8(1) y 25 de la Convención respecto del señor Sewell, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la misma, en razón de la negativa al señor Sewell del recurso a una acción constitucional para determinar sus derechos al amparo de la legislación nacional y de la Convención en relación con el proceso penal instruido contra él.

1726. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Conceder al Sr. Sewell una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia en relación con la sentencia de muerte obligatoria que se le impuso, y una indemnización respecto de las demás violaciones de sus derechos consagrados en la Convención Americana, según las conclusiones que anteceden.
2. Adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que la pena de muerte no sea impuesta en contravención de los derechos y libertades garantizadas por la Convención, incluidos, y en particular, los artículos 4, 5 y 8.
3. Adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para asegurar que las condiciones de detención en que se mantiene al Sr. Sewell cumplan con las normas de un trato humano dispuestas en el artículo 5 de la Convención.
4. Adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para asegurar la vigencia en Jamaica del derecho a un juicio imparcial dispuesto en el artículo 8(1) de la Convención y el derecho a la protección judicial dispuesto en el artículo 25 de la misma, en relación con el recurso a una acción constitucional, de acuerdo con el análisis de la Comisión que consta en el presente informe.

1727. En su Informe Anual 2007, la CIDH declaró el cumplimiento total a la segunda recomendación y un cumplimiento parcial en cuanto a la primera recomendación<sup>150</sup>. La CIDH declaró el cumplimiento de la recomendación 3 en su Informe Anual 2015<sup>151</sup>.

1728. El 3 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El 4 de marzo de 2015, los peticionarios confirmaron que la sentencia a pena de muerte del señor Dave Sewell había sido conmutada a cadena perpetua en julio de 2003 por el Gobernador General de Jamaica, de conformidad con la decisión del Consejo Privado en el caso *Pratt & Morgan*. En este sentido, agregaron que el señor Dave Sewell estaría calificado para solicitar libertad condicional una vez cumplidos 7 años de su condena. Al respecto, los peticionarios indicaron que visto que ya ha cumplido aproximadamente 17 años de su condena, el señor Sewell podría ejercer su derecho en cualquier etapa. Asimismo, indicaron que con posterioridad a la información que presentaron en el 2009, se había publicado un Informe llamado "*Condiciones de las Prisiones en Jamaica: Un Informe basado en la visita de James Robottom en agosto de 2009*", en el cual se ofrece una evaluación de las condiciones de reclusión para aquellos que cumplen condenas de largo plazo o que están condenados a pena de muerte y cuyas conclusiones manifestaron que las condiciones de detención en Jamaica violan las normas y estándares sobre un trato humano. Al respecto, los peticionarios indicaron que las condiciones de las prisiones no han mejorado y que el contenido del Informe sigue siendo acertado.

1729. El 29 de septiembre de 2015, la CIDH volvió a solicitar información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Hasta la fecha, los peticionarios no habían presentado información. El 29 de octubre de 2015, el Estado en relación a la primera recomendación, manifestó que en virtud de la sentencia dictada por el Comité Judicial del Consejo Privado en el caso *Pratt & Morgan* (1993), cualquier caso en el cual el período comprendido entre una sentencia de muerte y la ejecución de dicha condena sea superior a cinco años, la ejecución se presume un castigo inhumano y degradante. Igualmente sobre esta recomendación, el Estado consideró como vaga e incoherente la mención hecha por la CIDH en cuanto a otorgar una indemnización a la víctima, aclarando que el tipo de compensación dependería del objetivo para el cual se otorga, lo cual no habría sido establecido por la Comisión. El Estado manifestó que la CIDH estaría basándose en un premisa falsa si fundamenta que la compensación a la víctima es procedente porque el Estado no proveyó un recurso efectivo en los casos de pena de muerte. Al respecto, el Estado estableció que si bien debido a la sentencia del Consejo Privado en el caso *Lambert Watson v R* (2004) las leyes fueron reformadas, antes de dicha sentencia la imposición de la pena de muerte en casos como el presente era obligatoria. Por lo tanto solo se contemplaría una compensación para las personas sentenciadas a pena de muerte con posterioridad a la mencionada sentencia del Consejo Privado, y que en este caso, el Estado consideraba que la compensación ya había sido cumplida por haber conmutado la pena.

1730. En relación a la cuarta recomendación, el Estado considera que las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial están debidamente protegidos de conformidad con las secciones 13 y 16 de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de Jamaica, los cuales han sido ampliados por la jurisprudencia del Comité Judicial del Consejo Privado de Jamaica y la Corte de Apelaciones.

1731. Por otro lado, la CIDH observa y valora la información aportada por el Estado, en particular en relación a la tercera recomendación; por cuanto visto que el señor Dave Sewell fue puesto en libertad en diciembre de 2013, la Comisión considera que existe un cumplimiento de esta recomendación.

1732. El 13 de octubre de 2016 y 23 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su

---

<sup>150</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2007, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 528.

<sup>151</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2015, Capítulo III, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 1211-1218.

Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.

1733. En relación a las recomendaciones pendientes, la CIDH considera que no cuenta con suficientes elementos para valorar su cumplimiento. Como resultado, la Comisión seguirá supervisando los puntos 1 y 4.

#### **Caso 12.417, Informe No. 41/04, Whitley Myrie (Jamaica)**

1734. En el Informe No. 41/04, del 12 de octubre de 2004, la Comisión concluyó que el Estado era responsable: a) de la violación de los derechos del señor Myrie conforme a los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, en virtud de las condiciones de detención; b) de la violación de los derechos del señor Myrie conforme a los artículos 8(1) y 8(2) de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, porque el juez de instrucción no dispuso lo necesario para que el jurado no estuviera presente en la audiencia de *voir dire* referente a la declaración del señor Myrie, ni postergó el juicio mientras el abogado del señor Myrie estaba ausente, con lo cual denegó al señor Myrie de las plenas garantías del debido proceso durante su juicio; c) de la violación de los derechos del señor Myrie conforme a los artículos 8(1) y 8(2) de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, en virtud de que el patrocinio legal con que contó el señor Myrie durante su juicio fue inadecuado; y d) el Estado es responsable de la violación de los derechos del señor Myrie conforme a los artículos 25 y 8 de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, en virtud de su omisión de brindarle acceso efectivo a una acción constitucional para la protección de sus derechos fundamentales.

1735. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Conceder al señor Myrie un recurso efectivo, inclusive un nuevo juicio en que se apliquen los mecanismos de protección del debido proceso preceptuados por el artículo 8 de la Convención, o bien, si no es posible llevar a cabo un nuevo juicio en que se apliquen esos mecanismos, dejar en libertad a dicha persona y pagarle una indemnización.
2. Adoptar las medidas legislativas o de otro género que sean necesarias para garantizar que las condiciones de detención del señor Myrie sean compatibles con los estándares internacionales de un tratamiento humano conforme al artículo 5 de la Convención Americana y otros instrumentos pertinentes, conforme a lo expuesto en el presente informe.
3. Adoptar las medidas legislativas o de otro género que sean necesarias para garantizar que se hagan efectivos en Jamaica el derecho a la protección judicial conforme al artículo 25 de la Convención y el derecho a un juicio justo conforme al artículo 8(1) de la Convención, en cuanto se refiere a la posibilidad de promover una acción constitucional.

1736. El Estado presentó información pertinente al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo de este caso el 19 de diciembre de 2012 y el 7 de enero de 2013. En sus respuestas, el Estado simplemente reiteró sus comunicaciones anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1737. El 3 de diciembre de 2014 y 29 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El 29 de octubre de 2015, el Estado presentó información en la cual indicó sus reservas en relación a la primera recomendación. En este sentido, el Estado manifestó que las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención están reconocidas en la sección 16 de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de la Constitución de Jamaica. Asimismo, reiteró que considera que el señor Myrie fue condenado legalmente, y que bajo las leyes del Estado de Jamaica tiene el derecho de apelar su condena ante la Corte de Apelaciones y posteriormente solicitar el permiso para apelar ante el Comité Judicial del Consejo

Privado. En este sentido, mencionó que debido a que la separación de poderes es un principio fundamental de la Constitución, el Poder Ejecutivo no puede interferir con el ejercicio de las potestades del Poder Judicial.

1738. El Estado hizo mención que en el presente caso, el señor Myrie había apelado y como resultado su sentencia había sido conmutada a cadena perpetua, por lo cual dado el estatus del presente caso no era posible un nuevo juicio, sin embargo mencionó que el Departamento de Servicios Correccionales había aconsejado la liberación condicional del señor Myrie el 19 de marzo de 2010, sin aclarar cuál sería el efecto jurídico de dicha acción. Igualmente el Estado indicó que considera como vaga e incoherente la mención hecha por la CIDH en cuanto a otorgar una indemnización a la víctima, aclarando que el tipo de compensación dependería del objetivo para el cual se otorga, lo cual no habría sido establecido por la Comisión.

1739. En relación a la segunda recomendación, el Estado mencionó que como resultado de la conmutación de la pena del señor Myrie, este fue trasladado junto con la población general del centro de detención; asimismo afirmó que las condiciones de detención cumplían con los estándares de trato humano y en ese sentido la Unidad de Inspección del Departamento de Servicios Correccionales realiza un monitoreo continuo de cumplimiento de estos estándares y realiza recomendaciones para generar mejoras sistemáticas. Igualmente expresó las intenciones del Gobierno de construir nuevos centros de detención, de iniciar un proceso de reclasificación para aliviar la sobrepoblación de las prisiones de máxima seguridad, y señaló la revisión del proceso para solicitar la libertad condicional, lo cual ha resultado en un aumento significativo del número de libertades condicionales otorgadas en los últimos 3 años. Finalmente, en relación a la tercera recomendación, el Estado consideró que las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial están debidamente protegidos de conformidad con las secciones 13 y 16 de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de Jamaica, los cuales han sido ampliados por la jurisprudencia del Comité Judicial del Consejo Privado de Jamaica y la Corte de Apelaciones. Adicionalmente indicó que el Estado no está en contra de considerar brindar asistencia legal a las personas que deseen interponer acciones constitucionales, sin embargo mantiene que no es una obligación a su cargo según el artículo 8 de la Convención.

1740. La CIDH observa la información aportada por el Estado, al respecto considera que no cuenta con suficientes elementos para valorar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe No. 41/04, y en este sentido insta al Estado a aportar información detallada y actualizada sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones, en particular, referida a la concesión efectiva de la libertad provisional a la víctima en ese caso.

1741. El 13 de octubre de 2016 y 23 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.

1742. Por lo tanto, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe 41/04 continúa pendiente. Como resultado, la Comisión seguirá supervisando su cumplimiento.

#### **Caso 12.418, Informe No. 92/05, Michael Gayle (Jamaica)**

1743. En el Informe No. 92/05, emitido el 24 de octubre de 2005, la Comisión concluyó que el Estado, era responsable: a) de la violación del derecho a la vida del señor Gayle previsto en el artículo 4 de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la Convención, por el hecho de que miembros de las fuerzas de seguridad jamaicanas le dieron muerte en forma ilegal; b) de la violación del derecho del señor Gayle a no ser sometido a torturas u otro trato inhumano conforme a los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, debido a la agresión contra él perpetrada por agentes del Estado, y a sus secuelas, que determinaron su fallecimiento; c) de la violación del derecho del señor Gayle a la libertad personal previsto en el artículo 7 de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la Convención, debido a su detención y arresto ilegales por falsas imputaciones; y d) de la violación de los derechos del señor Gayle a un juicio justo y a la protección judicial previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de ese

instrumento, por omisión de iniciar una investigación inmediata, efectiva e independiente de las violaciones de derechos humanos cometidas contra el señor Gayle y procesar y castigar a los responsables.

1744. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Conceder una reparación efectiva, que incluya el pago de una indemnización por el daño moral padecido, a la madre y parienta más próxima de Michael Gayle, Jenny Cameron, y disculparse públicamente ante la familia de Michael Gayle.
2. Adoptar las medidas legislativas o de otro género que sean necesarias para realizar una investigación exhaustiva e imparcial de las violaciones de derechos humanos cometidas contra el señor Gayle, para identificar, procesar y castigar a todas las personas que sean responsables de esas violaciones de derechos.
3. Adoptar las medidas legislativas o de otro género que sean necesarias para prevenir futuras violaciones de derechos como las cometidas contra el señor Gayle, entre otras cosas capacitando a los miembros de las fuerzas de seguridad de Jamaica en la aplicación de normas internacionales sobre uso de la fuerza, e introduciendo apropiadas reformas en los procedimientos de investigación y procesamiento por privaciones de la vida cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad de Jamaica, para garantizar que sean exhaustivas, inmediatas e imparciales, conforme a las conclusiones del presente informe. A este respecto la Comisión recomienda específicamente al Estado que revise y fortalezca la Dirección de Denuncias Públicas sobre la Policía, como garantía de que pueda investigar eficazmente abusos de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad de Jamaica.

1745. El Estado presentó información pertinente al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo de este caso el 19 de diciembre de 2012 y el 7 de enero de 2013. En sus respuestas, el Estado simplemente reiteró sus comunicaciones anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

1746. El 3 de diciembre de 2014 y el 29 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El 29 de octubre de 2015, el Estado reiteró información presentada en años anteriores en relación al pago de una indemnización a la madre del señor Michael Gayle y al respecto mencionó que la suma de dicha indemnización fue aceptada voluntariamente y formalizada por sentencia de fecha 2 de noviembre de 2004. Asimismo, señaló que una acción independiente por daños morales no ha sido ejercida, y que cuando el asunto estaba ante el tribunal, la señora Cameron representada por un abogado, no presentó en ningún momento evidencia a la atención del Gobierno que hubiera justificado cualquier reclamo adicional por daños y perjuicios. En cuanto a esta recomendación, el Estado también recordó que se habían pedido disculpas públicas a través del Procurador General y Ministro de Justicia, cuyo texto se publicó en su totalidad en el Sunday Herald, 14-20 de marzo de 2004, bajo el título “El caso de Michael Gayle”, hecho que se comentó con citas sustanciales en el Daily Gleaner, fechado el 11 de marzo de 2004, bajo el título “El Gobierno ‘lamenta’ la muerte de Michael Gayle”. En relación a la segunda recomendación, el Estado especificó que la leyes de Jamaica proveen una protección adecuada en contra de las violaciones a los derechos humanos y facilitan una adecuada investigación, y agregó que aunque en el presente caso se realizaron investigaciones imparciales, el Director del Ministerio Público concluyó que no había suficientes evidencias para seguir con una acusación penal. En este sentido, el Estado expresó que las decisiones de continuar o no con un proceso penal corresponden únicamente al Director del Ministerio Público de conformidad con la sección 94 de la Constitución de Jamaica, y que la discrecionalidad de dichas decisiones no está sujeta al control de ninguna persona o autoridad.

1747. En relación a la tercera recomendación, el Estado reiteró información aportada en comunicaciones anteriores en cuanto a que las fuerzas de seguridad reciben entrenamiento extensivo en los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, sobre la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos,

cruelles y degradantes, sobre las ejecuciones extrajudiciales y sobre las detenciones arbitrarias. El Estado explicó que como política, la fuerza policial jamaicana es entrenada en cuanto a los derechos y libertades fundamentales establecidas en la Constitución; agregando que dicho entrenamiento está diseñado para asegurar que los miembros de la policía estén expuestos a legislaciones actuales. Señaló como medidas implementadas por el Estado para asegurar la protección de los derechos humanos, la creación de la Comisión Independiente de Investigaciones, cuyo mandato incluye las investigaciones de las denuncias realizadas por abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en violación a los derechos humanos. Finalmente, el Estado expresó que está trabajando con el fin de establecer un Instituto Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con los Principios de París para la promoción y protección de los derechos humanos.

1748. La CIDH observa y valora altamente los avances realizados por el Estado, en particular con la tercera recomendación.

1749. El 13 de octubre de 2016 y 23 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.

1750. Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado cumplió parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Como resultado, la Comisión seguirá supervisando los puntos todavía pendientes.

#### **Caso 12.447, Informe No. 61/06, Derrick Tracey (Jamaica)**

1751. En el Informe No. 61/06, emitido el 20 de julio de 2006, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación del derecho del señor Tracey al asesoramiento letrado y de su derecho a obtener la comparecencia de personas que podrían arrojar luz sobre los hechos, en contravención del artículo 8(2)(d), (e) y (f) de la Convención, conjuntamente con los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento, en conexión con el uso en el juicio de su declaración en su contra; b) la violación del derecho del señor Tracey a un juicio imparcial, dispuesto en el artículo 8(2)(c) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, debido al tiempo y los medios insuficientes otorgados al señor Tracey y a su abogado para preparar la defensa; c) la violación del derecho del señor Tracey a un juicio imparcial y de su derecho a la protección judicial consagrados en los artículos 8(2)(e) y (h) y 25 de la Convención, conjuntamente con la violación de los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento, debido a que el Estado no brindó al señor Tracey asesoramiento letrado para apelar su sentencia ante una instancia judicial superior.

1752. La CIDH formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Otorgue una reparación efectiva, que incluya un nuevo juicio de los cargos imputados al señor Tracey, de acuerdo con las protecciones de un juicio imparcial dispuestas en la Convención Americana.
2. Adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias para asegurar que los acusados penales indigentes ejerzan el derecho al asesoramiento legal, de acuerdo con el artículo 8(2)(e) de la Convención Americana, en circunstancias en que dicho asesoramiento sea necesario para garantizar el derecho a un juicio imparcial y el derecho a apelar la sentencia ante una instancia superior.
3. Adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias para asegurar que toda confesión de un acusado sea sólo válida si es brindada sin coerción de tipo alguno, de acuerdo con el artículo 8(3) de la Convención.

1753. La CIDH declaró el cumplimiento de las recomendaciones 2 y 3 con anterioridad<sup>152</sup>. El 3 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El 22 de abril de 2015, el Estado manifestó sus reservas en relación a la primera recomendación al considerar que el señor Tracey fue condenado legalmente. El Estado manifestó que considera que las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención están reconocidas en la sección 16 de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de la Constitución de Jamaica. y que bajo las leyes del Estado de Jamaica tiene el derecho de apelar su condena ante la Corte de Apelaciones y posteriormente solicitar el permiso para apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado. En este sentido mencionó que debido a que la separación de poderes es un principio fundamental de la Constitución, el Poder Ejecutivo no puede interferir con el ejercicio de las potestades del Poder Judicial. Aclaró que dado que la Corte de Apelaciones desestimó la apelación del señor Tracey y que éste no ha llevado el caso ante el Comité Judicial del Consejo Privado, las leyes vigentes no permiten un nuevo juicio del presente caso.

1754. El 29 de septiembre de 2014, la CIDH volvió a solicitar información a ambas partes sobre el cumplimiento de la recomendación arriba mencionada, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. El 17 de noviembre de 2015, el Estado reiteró la información presentada en relación a la primera recomendación, e informó que el señor Tracy había sido liberado el 1 de octubre de 2011 al haber cumplido su condena.

1755. Los peticionarios no han presentado información sobre el seguimiento en 9 años desde a emisión del Informe de Fondo No. 61/06.

1756. La CIDH toma nota que el Sr. Tracey fue liberado en el 2011, por cumplimiento de su condena. Por lo tanto, para efectos de dar cumplimiento a la recomendación No. 1 relacionada con una reparación efectiva que incluyera un nuevo juicio de los cargos imputados al señor Tracey, la Comisión considera que en caso de que la víctima así lo desee, el Estado debe revisar la condena a fin de que la misma se ajuste a los estándares de un juicio imparcial, en los términos indicados en su Informe No. 61/06.

1757. El 13 de octubre de 2016 y 23 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. A la fecha de cierre del presente informe las partes no habían presentado información.

1758. Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado cumplió parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Como resultado, la Comisión seguirá supervisando los puntos todavía pendientes.

#### **Caso 11.565, Informe No. 53/01, Hermanas González Pérez (México)**

1759. En el Informe No. 53/01 de fecha 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado mexicano había violado en perjuicio de la señora Delia Pérez de González y de sus hijas Ana, Beatriz y Celia González Pérez los siguientes derechos consagrados en la Convención Americana: derecho a la libertad personal (artículo 7); a la integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad (artículos 5 y 11); garantías judiciales y protección judicial (artículos 8 y 25); respecto de Celia González Pérez, los derechos del niño (artículo 19); todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) de dicho instrumento internacional. Asimismo, concluyó que el Estado era responsable por la violación del artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

1760. Conforme a lo establecido por la Comisión, el 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas, México, a las hermanas González Pérez y su madre Delia Pérez de González para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas. Durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares; el 30

<sup>152</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2014, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones. Párr. 1000.

de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal (Procuraduría General de la República o “PGR”) con base en un examen médico ginecológico; la misma fue corroborada ante dicha institución por la declaración de Ana y Beatriz, las dos hermanas mayores; el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar (“PGJM”) en septiembre de 1994; y ésta decidió finalmente archivar el expediente ante la falta de comparecencia de las mismas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas. Fue establecido que el Estado faltó a su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones.

1761. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González.
2. Reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia González Pérez y a Delia Pérez de González por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas.

1762. El 9 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada acerca del estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas para el presente caso.

1763. En cuanto a la recomendación de investigar, juzgar y sancionar en la jurisdicción ordinaria a los responsables de los hechos denunciados, el Estado indicó que se encuentra trabajando para que las indagatorias producto de las recomendaciones publicadas por la CIDH en su informe 53/01, sean realizadas, implementadas y recabadas con eficiencia. Refirió además que con posterioridad enviará más información sobre los avances de las investigaciones respectivas. Por su parte, los peticionarios señalaron que a pesar de que el traslado de este caso a la jurisdicción civil, es una condición imprescindible para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones, a la fecha, la Delegación estatal en Chiapas de la PGR (donde debería recaer la investigación) no tiene registro de recepción de averiguación previa remitida en razón de incompetencia por parte la PGJM.

1764. Sobre la recomendación de reparar adecuadamente a las víctimas del Caso 11.565, consta que en el año 2011 el Estado informó que a través del Gobierno de Chiapas, el 4 de abril de 2011, entregó a las víctimas y a su madre, en un acto privado, la suma de \$2.000.000 (dos millones de pesos mexicanos), o su equivalente a aproximadamente US\$ 172,000 dólares americanos, por concepto de apoyo humanitario. Preciso que el apoyo otorgado a las víctimas no constituía un reconocimiento de responsabilidad en los hechos que motivaron las recomendaciones de la CIDH y tampoco podía contemplarse como una reparación de daño. En el 2012, el Estado reiteró que el gobierno del Estado de Chiapas había entregado una suma de dinero a las víctimas por concepto de ayuda humanitaria.

1765. Por su parte, los peticionarios señalaron que esta recomendación permanece incumplida debido a que a pesar de que el Estado afirma que esta ayuda económica era en atención a lo señalado en el Informe 53/01, el acuerdo firmado señalaba que la entrega de dicha cantidad se hacía por concepto de ayuda humanitaria, sin que significara dar por cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CIDH.

1766. El 5 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a ambas partes información actualizada sobre el cumplimiento. El 5 de enero de 2015, los peticionarios presentaron dicha información; el Estado, por su parte, lo hizo el 14 de enero de 2015.

1767. En su escrito, los peticionarios reiteraron que no ha habido avance en la investigación, toda vez que la PGR viene insistiendo en aplicar el Protocolo de Estambul. Los peticionarios y las víctimas se oponen a que se practique dicho examen a más de 20 años de ocurridos los hechos, y han solicitado que se acepte como prueba fehaciente de la existencia de violencia sexual en contra de las hermanas, el certificado médico practicado oportunamente. Los peticionarios precisaron además que insistir en la aplicación del

mencionado protocolo sería profundamente revictimizante. Concluyeron que el Estado sigue sin juzgar a los responsables de las violaciones de derechos humanos sufridas por las hermanas González Pérez.

1768. Con respecto a la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas, los peticionarios insistieron en que hasta la fecha el Estado mexicano no ha implementado medidas de reparación que satisfagan integralmente el deber de reparar a las hermanas González Pérez, puesto que, como ya se ha señalado anteriormente, la ayuda humanitaria entregada por parte del gobierno no constituye en sí misma la medida de reparación ordenada por la Comisión. Finalmente, afirmaron que tendrían la voluntad de suscribir un acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo con el Estado mexicano y que se encontrarían en el estudio de una contrapropuesta que les fue presentada.

1769. Por su parte, el Estado afirmó que con respecto a la primera recomendación se encontraría realizando las investigaciones correspondientes bajo la jurisdicción penal y que se compromete a continuar con las mismas de acuerdo “a los más altos estándares en materia de tortura y discriminación contra la mujer”.

1770. Con respecto a la segunda recomendación, el Estado afirmó haber recibido el 29 de octubre de 2014 una propuesta de reparación por parte de los peticionarios, sobre la cual el Estado habría pasado una contrapropuesta el 5 de diciembre de 2014. Dicha contrapropuesta que contiene los siguientes rubros: deber de investigar y sancionar, acceso a la investigación y participación de las víctimas, que las aseveraciones del informe de fondo de la CIDH sean consideradas en la investigación penal a nivel interno, realización de un Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad, medidas de rehabilitación (tratamiento médico y psicológico) y una debida indemnización pecuniaria, además de otras propuestas planteadas por el Estado y que estarían en revisión con las peticionarias.

1771. El 21 de marzo de 2015, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con el acompañamiento de la CIDH, dentro del marco de su 154 Periodo Ordinario de Sesiones. En dicha reunión la parte peticionaria expuso sus observaciones sobre la propuesta de cumplimiento del Estado. Adicionalmente, las partes dialogaron sobre los distintos elementos que se contemplarían en el acuerdo y que conforman la reparación integral. Los peticionarios también presentaron sus observaciones por escrito el 21 de abril de 2015, la cual fue remitida al Estado para su conocimiento.

1772. En relación a la propuesta de acuerdo de cumplimiento, las partes indicaron en la reunión de trabajo que avanzarían en la elaboración de una cláusula más detallada sobre la atención en salud y el acto de reconocimiento de responsabilidad. El Estado indicó que recalcularía los montos de indemnización económica, reformulando los montos de daño emergente a daño moral. En relación al tema de investigación, el Estado se comprometió a buscar otros mecanismos alternativos a la práctica del Protocolo de Estambul en las víctimas, incluyendo la posibilidad de realizar un peritaje psicológico independiente. Sin embargo, ninguna de las partes envió la información relacionada con las conclusiones de la reunión de trabajo en el resto del periodo examinado en el presente informe.

1773. El 30 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó a ambas partes información actualizada sobre el cumplimiento. A la fecha de elaboración de este informe, el Estado no ha presentado la información solicitada.

1774. Los peticionarios indicaron el 9 de noviembre de 2015, que la investigación penal se encuentra desde el año 2011 en el fuero ordinario, sin ser reactivada, a pesar de que la Procuraduría General de la República aceptó la declinación de competencia efectuada por el fuero militar a efectos de continuar la investigación en sede ordinaria. Los peticionarios indicaron que finalmente se logró superar el obstáculo en relación a la práctica de la prueba del Protocolo de Estambul, y en cambio se realizaron peritajes que fueron presentados ante las oficinas locales de la PGR en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sin embargo, mencionaron que tras la reunión de trabajo sostenida en la sede de la CIDH en el marco del 154º Periodo de Sesiones, no ha habido mayor acercamiento por parte de la PGR ni se han mostrado avances sustantivos en la investigación. En ese sentido, los peticionarios solicitaron que la autoridad central presente su hipótesis del caso a la mayor brevedad posible, establezca una ruta detallada sobre las acciones concretas que se seguirán

para combatir la impunidad en el presente caso, la cual deberá incluir líneas de investigación, cronograma de actividades, equipo que intervendrá y su especialidad, así como los medios que se emplearan para indagar eficazmente y los plazos correspondientes a cada una de las acciones, observando la no re victimización de las Hermanas González y su madre. En relación al tema de las reparaciones económicas, los peticionarios indicaron que aún no se ha cumplido con dicha recomendación.

1775. En general, frente al tema de la negociación de un posible acuerdo de cumplimiento, la parte peticionaria reiteró que los puntos de mayor interés para una negociación serían los elementos de investigación, participación del SEDENA en el acto de reconocimiento de responsabilidad, y la no inscripción en registros tales como el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o de naturaleza similar.

1776. El 11 de julio de 2016, las peticionarias presentaron información mediante la cual manifestaron sus observaciones a la información presentada por el Estado en fecha 11 de febrero 2015. Al respecto, las peticionarias aclararon que la suspensión de las negociaciones sobre el acuerdo de cumplimiento de recomendaciones no denota una falta de voluntad por parte de las víctimas o sus representantes de continuar con dicho proceso, por el contrario, responde a un proceso de búsqueda entre las representantes y las víctimas de adecuar las contrapropuestas hechas por el Estado, a la realidad y necesidades de las Hermanas González Pérez y su madre, para que el acuerdo cumpla con su objetivo reparador.

1777. Las peticionarias indicaron en relación a la obligación de investigar adecuadamente, que la investigación penal dirigida por la PGR, luego del 2011, no ha presentado avances sustanciales, y que los adelantos reflejados han sido a partir del impulso de las representantes legales. En ese sentido, las peticionarias presentaron información respecto al ofrecimiento de pruebas que promovieron en el expediente de la averiguación previa, con el objeto de aportar elementos para acreditar el delito de tortura y de violación sexual. Al respecto, manifestaron que los peritajes presentados en julio de 2015 en conjunto con el dictamen de valoración psicológica practicado a las hermanas González Pérez que consta en el expediente desde el año 2004, no fueron retomados por el perito que emitió los dictámenes en medicina forense y en criminalística del campo a solicitud del Ministerio Público. Estos dictámenes solicitados por el Ministerio Público concluyen, en términos similares, que no cuentan con elementos clínicos o documentales que les permita sustentar una opinión, o en su caso establecer la mecánica de lesiones, sobre los hechos acontecidos el 4 de junio de 1994. Sin embargo, las peticionarias consideraron que dichas pruebas deben ser analizadas por el Ministerio Público de manera integral y en conexión con los certificados médicos ginecológicos practicados a las hermanas González Pérez recién ocurridos los hechos. En ese sentido, de acuerdo a las pruebas reseñadas, las peticionarias manifestaron que no es aceptable que el Estado argumente que por el transcurso del tiempo no es posible acreditar el delito de violación, más aún cuando existen certificados ginecológicos que fueron practicados a los pocos días de ocurrida la violación sexual y que dan cuenta de ello.

1778. Por otro lado, las peticionarias manifestaron preocupación al haber corroborado que aún no existen en el expediente de la averiguación previa, diligencias tendientes a identificar a los elementos militares responsables de las violaciones sexuales. En este sentido, reiteraron los 22 años de impunidad a favor de los militares, toda vez que el Estado no ha identificado y sancionado a los responsables. Por último, las peticionarias aclararon que, contrario a lo expuesto por el Estado, no han negado la presencia de las víctimas en las diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables, sólo se ha solicitado al Estado que toda diligencia o actuación en la que se requiera la presencia de las víctimas, sea notificada y acordada por medio de las representantes. Finalmente, sobre esta recomendación, las representantes reiteraron la solicitud al Estado de que presente una ruta detallada sobre las acciones concretas que se van a tomar para combatir la impunidad en el presente caso, las diligencias restantes para tener los elementos de prueba suficientes a fin de poder consignar ante el Poder judicial a los responsables de la tortura y violación sexual cometida en contra de las Hermanas González Pérez, así como los plazos determinados para agotar cada una de las diligencias pendientes.

1779. En relación a la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas, las peticionarias hicieron referencia a lo informado por el Estado en cuanto a las reparaciones relativas a: la inscripción de las víctimas al Registro Nacional de Víctimas - RENAVI, el tratamiento médico y psicológico, la capacitación a

funcionarias y funcionarios federales; así como a las otras medidas de reparación contenidas en el proyecto de acuerdo de cumplimiento de recomendaciones. Respecto a la inscripción de las víctimas al RENAVI, las peticionarias reiteraron la posición de las hermanas González Pérez de prescindir de los servicios ofrecidos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) previo registro al RENAVI y, enfatizaron que ello no debe ser obstáculo para que las víctimas puedan acceder de manera pronta y efectiva a las medidas de reparación integral. Al respecto, manifestaron que al ser el Informe de fondo 53/01 anterior a la creación de la CEAV y al mismo RENAVI, condicionar la reparación de las víctimas a la inscripción de este tipo de mecanismos implicaría someter a las víctimas a procesos burocráticos excesivos.

1780. Respecto al tratamiento médico y psicológico, las peticionarias reiteraron que, de conformidad con cosmovisión indígena, las hermanas González acostumbran a tratar sus padecimientos físicos a través de la medicina tradicional y/o “curandero”, y acuden al Hospital Privado San Carlos ubicada en el municipio de Altamirano, Chiapas, para una atención más especializada. En consecuencia, las hermanas González no desean acudir a los servicios de salud pública ofrecidos por el Estado en las instituciones públicas del sector salud. Al respecto, las peticionarias indicaron que, a pesar de la petición de las hermanas González Pérez de que se les reembolsaran los gastos de salud y tratamiento psicológico, el Estado ha mantenido como única opción ofrecida la atención de salud ofrecida en las unidades médicas de salud pública.

1781. Respecto a la capacitación a funcionarias y funcionarios federales, destacan que el Estado no ha remitido pruebas que permitan corroborar el contenido de los programas de capacitación, a fin de verificar que los mismos sean acordes con la enseñanza de los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, la debida actuación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública a fin de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas así como en materia de investigación de violaciones graves a derechos humanos. Asimismo, en relación con el acto público de reconocimiento de responsabilidad, las representantes reiteraron la importancia de que se asegurara la presencia de un representante de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) en el acto público de reconocimiento al ser institución directamente involucrada en las múltiples violaciones a los derechos humanos de las hermanas González Pérez y de su madre.

1782. Finalmente, las peticionarias informaron que a pesar de que se ha hecho del conocimiento del Estado la cuantificación de los montos de reparación en cuanto a lucro cesante y daño emergente solicitado por las hermanas González Pérez, no se ha realizado la entrega del monto de indemnización.

1783. El 12 de octubre de 2016, el Estado reiteró, en relación a las observaciones realizadas por las peticionarias, su absoluta disposición de continuar con el proceso de diálogo con el objeto de consolidar un acuerdo con un efecto realmente reparador para las hermanas González Pérez y su madre. Sobre las observaciones de las representantes en relación a la obligación de investigar adecuadamente, el Estado señaló que aun cuando reconoce que la obligación de investigar debe ser asumida como un deber jurídico propio, el contar con los testimonios directos de las víctimas podría implicar avances sustanciales en el proceso de investigación dada la naturaleza del delito. En este sentido, de acceder a coadyuvar, el Estado se compromete con las víctimas a que las diligencias sean realizadas en un ámbito cómodo y seguro con el fin de evitar situaciones de re victimización. Por otro lado, el Estado anunció que se inició gestiones para que desde la Secretaría de la Defensa Nacional se ubiquen y citen a declarar, en calidad de testigos, al personal que se encontraba en el destacamento el 4 de junio de 1994.

1784. En relación a la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas, el Estado aclaró que el propio Sistema Legal de Registro Nacional de Víctimas prevé la posibilidad de asegurar la confidencialidad de los datos personales, finalidad que buscan las hermanas González con la solicitud de usar los nombres que les fueron dados para el proceso ante la CIDH. Sin embargo, el Estado manifiesta que la inscripción al RENAVI no condiciona la implementación de la reparación integral a favor de las hermanas González. En cuanto al tratamiento médico y psicológico, el Estado informó que como recurso disponible actualmente se cuenta con una serie de instituciones médicas especializadas, gratuitas y de manera preferencial, entre las cuales menciona el Hospital Nacional Homeópata y la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Interculturalidad.

1785. En cuanto a los cursos de capacitación a funcionarias y funcionarios federales, el Estado presentó información detallada sobre los programas de capacitación en materia de derechos humanos, en particular en materia de género, dirigidos a las fuerzas armadas, desde la Secretaría de Defensa Nacional en el marco del *Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa Nacional 2014-2018*, publicado el 10 de diciembre de 2014. En particular, el Estado señaló como resultado que, durante el 2015, se realizaron un total de 2.637 eventos de capacitación como seminarios, foros, simposios, talleres, conferencias y cursos con la participación de 243.754 funcionarios militares; y durante el período comprendido entre el 1 de enero al 7 de marzo de 2016, se han realizado 474 eventos en los que han participado 39.278 funcionarios. Entre varios puntos, el Estado informó que, de acuerdo con el mencionado programa, se estarían creando protocolos de actuación con el objetivo de orientar la conducta del personal militar en actividades para reducir la violencia del país, para garantizar el principio de seguridad jurídica de las personas que sean detenidas en flagrancia delictiva, y para el trato a los menores de edad, personas con discapacidad, y la asistencia de heridos.

1786. Adicionalmente, el Estado resaltó la celebración de capacitaciones en materia de derechos humanos dentro de la Administración Pública Federal, con especial énfasis en aquella dirigida al personal que realizan funciones de seguridad y aquellos que tienen contacto directo con la ciudadanía. Así, destacó en materia de prevención de violaciones de derechos humanos, la estrategia de capacitación de la Secretaría Relaciones Exteriores en materia de género y el curso internacional de la alta formación en políticas públicas antidiscriminatorias del CONAPRED, así como la cátedra de la UNESCO “Igualdad y No Discriminación.”

1787. El 2 de diciembre de 2016, las peticionarias señalaron que a la fecha se han detenido las acciones para avanzar en el cumplimiento de la reparación integral a favor de las hermanas González. En relación a la obligación de investigar, las peticionarias reiteran lo expuesto en su informe presentado en julio del 2016 en cuanto a que los adelantos reflejados en la investigación han sido el resultado del impulso de las representantes legales. Sin embargo, reconocen la buena voluntad que ha mantenido en los últimos meses la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas con quienes informan, se han generado mesas de discusión sobre el enfoque de las diligencias pendientes. Por otro lado, las peticionarias informan que a la fecha se encuentran a la espera de la respuesta a una solicitud de copias simples de la averiguación previa presentada en fecha 21 de octubre de 2016, y en este sentido resaltan la importancia del acceso al expediente.

1788. En relación a la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas, las peticionarias en vista de que no ha habido avances sustanciales, reiteraron las observaciones presentadas en su comunicación anterior. En cuanto a la inscripción de las víctimas al RENAVID, reafirmaron la negativa de las hermanas González a inscribirse en dicho registro, en razón de su decisión de mantener un contacto mínimo con autoridades y representantes del Estado. En cuanto al tratamiento médico y psicológico, reiteraron la importancia que tiene para las víctimas el acudir con el médico que ellas consideran más adecuado de conformidad con su cosmovisión, y agregaron que las instituciones presentadas por el Estado en su escrito de octubre 2016, únicamente tienen sede en Ciudad de México y que al igual que los hospitales públicos de Chiapas carecen de traductoras e intérpretes indígenas de la lengua tzeltal, por lo que podría ser más oneroso, complicado e inútil para las hermanas e incluso para el propio Estado.

1789. En cuanto al acto público de reconocimiento, indicaron que no se les ha presentado una nueva información sobre los avances para la celebración del acto, ni sobre la aceptación de las peticiones hechas por las hermanas en torno a la presencia en el acto público de un representante de la SEDENA, al ser la institución responsable de las violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de las hermanas González. En cuanto a las indemnizaciones por daño moral y material, las peticionarias indicaron igualmente que no se les ha presentado nueva información sobre los avances en torno al pago de la indemnización a favor de las hermanas González y reafirmaron la no aceptación de las hermanas para acceder a los programas estatales de apoyo económico y financiamiento laboral, en tanto a que el ofrecimiento no representa un programa de atención especial para ellas como víctimas de violaciones a derechos humanos cometidos por el Estado y que les permita atender las necesidades especiales que se generaron con motivo de las mismas.

1790. Finalmente, en cuanto a las capacitaciones a las funcionarias y funcionarios, las peticionarias indican que, si bien el Estado se refiere en su informe anterior a los diversos cursos y programas en materia de derechos humanos, este no señala como dichos cursos se relacionan con el cumplimiento o en

consecuencia del Informe No. 53/01 y, no sean consecuencia de los muchos cursos de capacitación que se hace de manera periódica a las instituciones públicas.

1791. El 26 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones pendientes. Sin embargo, a la fecha del presente informe el Estado no ha presentado información.

1792. El 26 de octubre de 2017, los peticionarios informaron sobre la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables y resaltaron que a más de 23 años de ocurridos los hechos, el caso se mantiene en impunidad. Indicaron que los constantes cambios en la Procuraduría General de la República han provocado el retraso en la investigación, debido a que en cada cambio se ha alegado que el nuevo responsable de la investigación necesita tiempo para estudiar el caso, para posteriormente proponer las diligencias que permitan la identificación de los responsables. Adicionalmente, los peticionarios manifestaron que no se les ha garantizado el derecho a las víctimas y sus representantes a participar en el proceso; indicaron que mediante el oficio del 19 de octubre de 2016, los representantes de las víctimas solicitaron copias simples de la averiguación y según el oficio PGR/SEIDF/UEIDT/24318/2016 del 1 de noviembre de 2016. Según lo indicado, el Agente de la averiguación previa negó la expedición de dichas copias. Posteriormente, los peticionarios interpusieron una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, en donde se radicó el expediente 1148/2016. Dicho amparo fue resuelto a favor de las víctimas, mediante sentencia del 17 de mayo de 2017, y en su decisión, el Juez Quinto de Distrito ordenó dejar insubsistente el oficio PGR/SEIDF/UEIDT/37/24318/2016; emitir un nuevo pronunciamiento que autorice la expedición de las copias solicitadas por los peticionarios; y notificar personalmente a las impetrantes el oficio que dicte el cumplimiento a la sentencia. En cumplimiento de la resolución del amparo indirecto, el nuevo Agente del Ministerio Público, mediante el oficio PGR-SEIDG-UEIDT-10-2820-2017, del 23 de mayo de 2017, emitió un nuevo acuerdo en el que autorizó la expedición de las copias solicitadas por los peticionarios, previo pago de las mismas. En virtud de lo anterior, los peticionarios presentaron un recurso de inconformidad, al considerar que se había cumplido indebidamente el amparo, ya que el nuevo acuerdo no implicó la entrega de las copias de la averiguación libre de gravámenes, ni cargas excesivas para las víctimas. Adicionalmente, los peticionarios informaron que el 14 de junio de 2017, presentaron una nueva demanda de amparo en contra del nuevo acuerdo emitido por el Ministerio Público, por considerar que condicionar la entrega de las copias al previo pago, vulnera el acceso a la justicia efectiva y constituye una violación grave a los derechos humanos de las víctimas. Dicha demanda recayó nuevamente ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, bajo el número 493/2017 y se encuentra pendiente de resolución.

1793. En relación a la obligación de reparar adecuadamente, los peticionarios reiteraron la información presentada en informes anteriores y resaltaron que ninguna de las medidas solicitadas por las hermanas González Pérez han sido cumplidas. Por lo que manifestaron que mediante el oficio del 20 de octubre de 2017, dirigido a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, solicitaron que se reactivaran las mesas de trabajo para dar cumplimiento inmediato a las medidas pendientes, sin embargo, informaron que a la fecha no tienen respuesta por parte del Estado.

1794. La Comisión lamenta que después de transcurridos 16 años de la emisión del Informe de Fondo, el Estado mexicano no haya avanzado en la implementación de las recomendaciones formuladas por la CIDH.

1795. Por lo expuesto, la CIDH insta a las partes a retomar y mantener el diálogo con el fin de alcanzar un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones adecuado para brindar una reparación integral a las hermanas González Pérez y a su madre. Al respecto, la CIDH valora el compromiso del Estado de asegurar un ambiente cómodo y seguro para las víctimas con el objeto de evitar una revictimización durante la posible rendición de un testimonio personal.

1796. Por otro lado, la Comisión destaca la necesidad de superar los obstáculos existentes en dicho diálogo. Por lo pronto y hasta no recibir nueva información sobre los avances de las negociaciones, la CIDH

observa que las recomendaciones emitidas en este caso por la Comisión están pendientes de cumplimiento y, por ende, la Comisión continuará supervisando su cumplimiento.

### **Caso 12.130, Informe No. 2/06, Miguel Orlando Muñoz Guzmán (México)**

1797. En el Informe No. 2/06 de fecha 28 de febrero de 2006, la Comisión concluyó que el Estado mexicano era responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Miguel Orlando Muñoz Guzmán. Asimismo determinó que el expediente no contenía elementos que permitieran imputar responsabilidad internacional al Estado por la alegada desaparición forzada de Miguel Orlando Muñoz Guzmán. En consecuencia, no halló responsabilidad del Estado por la alegada violación de los derechos a la vida, la integridad física y la libertad personal; como tampoco del derecho a la integridad personal de sus familiares. Sin embargo, recomendó al Estado investigar en la jurisdicción ordinaria el paradero de Miguel Orlando Muñoz Guzmán y, de establecerse que hubo desaparición forzada, sancionar a los responsables.

1798. Conforme a la denuncia, el señor Miguel Orlando Muñoz Guzmán, teniente del Ejército mexicano, desapareció el 8 de mayo de 1993 a los 25 años de edad. Fue visto por última vez en dicha fecha por sus camaradas del 26° Batallón de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, cuando se preparaba para salir de franco. La familia del Teniente Muñoz Guzmán indica que éste era un oficial dedicado a su carrera, y por lo tanto restan credibilidad a la versión oficial del Ejército, de acuerdo a la cual habría desertado y luego viajado a Estados Unidos. Explican que hasta la fecha no se ha llevado adelante en México una investigación seria encaminada a establecer su paradero y sancionar a los responsables de su desaparición forzada. Argumentan que las irregularidades que han rodeado a este Caso han sido deliberadas, con la intención de encubrir a los responsables. También mencionan el hecho de que la familia empezó a recibir amenazas anónimas, que atribuyen a los militares, desde el momento en que acudieron a denunciar los hechos.

1799. La CIDH efectuó al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria mexicana para determinar el paradero de Miguel Orlando Muñoz Guzmán; y, de establecerse que hubo desaparición forzada, para sancionar a todos los responsables de los hechos que conforman dicha figura jurídica.
2. Reparar adecuadamente a los familiares de Miguel Orlando Muñoz Guzmán por las violaciones de derechos humanos establecidas en el presente informe.

1800. El 7 de noviembre de 2013, la CIDH solicitó a las partes que informaran sobre las medidas de cumplimiento de dichas recomendaciones.

1801. El Estado manifestó que en octubre de 2013 se llevó a cabo una reunión entre la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y los peticionarios, en la que se definieron las acciones necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones, y se establecieron siete acuerdos relativos a la revisión conjunta de la integración de la indagatoria. Adicionalmente, el Estado refirió que les solicitó a los familiares del señor Miguel Orlando Muñoz Guzmán su perfil genético con el fin de fortalecer las líneas actuales de la investigación. Los peticionarios manifestaron que valoran los referidos acuerdos, y que esperan que éstos sean cumplidos cabalmente; sin embargo, reiteraron que mientras esto suceda, la recomendación relacionada con la investigación, juicio y sanción de los responsables continúa sin cumplirse por el Estado mexicano. Por otra parte, refirieron que desde la emisión del informe de Fondo No. 2/06, el Estado ha sido omiso en abordar la recomendación consistente en la reparación a los familiares del señor Muñoz Guzmán.

1802. El Estado aportó información sobre el cumplimiento de las recomendaciones el 2 de febrero de 2015. En relación a la recomendación 1, el Estado informó a esta Comisión, sobre distintas reuniones sostenidas en el país con la parte peticionaria, en las cuales el Estado se comprometió a garantizar el acceso

de las víctimas y sus representantes al expediente de la investigación, y a remitir un informe bimestral general a las mismas. En ese sentido, el Estado informó haber entregado a los representantes de las víctimas la copia de la “averiguación previa 002/20001” (sic), e indicó algunas gestiones adelantadas dentro del marco de dicha investigación entre marzo y diciembre de 2014. La CIDH observa en relación al listado de acciones investigativas, que la mayoría se refiere a acciones administrativas de oficios entre dependencias y búsqueda en bases de datos de las mismas.

1803. El 21 de marzo de 2015, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con el acompañamiento de la CIDH, dentro del marco de su 154 Periodo Ordinario de Sesiones, en la cual las partes dialogaron sobre el tema de la investigación penal. El Estado entregó a la parte peticionaria una copia del expediente en formato digital.

1804. El 30 de septiembre de 2015, los peticionarios informaron a la CIDH, que a pesar del compromiso asumido por el Estado de informar bimensualmente a los representantes de las víctimas sobre la investigación, estos solo habrían recibido un reporte el 20 de marzo de 2014. Los peticionarios consideran que de la información aportada por el Estado resulta evidente que las diligencias realizadas han sido deficientes, repetitivas, vagas y descoordinadas.

1805. El 6 de abril de 2016, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con el acompañamiento de la CIDH, dentro del marco de su 157 período ordinario de sesiones. En dicha reunión las partes presentaron sus apreciaciones y solicitudes en torno a las recomendaciones del informe de fondo sobre el caso.

1806. Los peticionarios reiteraron nuevamente su solicitud en cuanto a la federalización del caso para que la investigación sea llevada por la Procuraduría General de la República -PGR. Asimismo, los peticionarios manifestaron el incumplimiento por parte del Estado del compromiso asumido en la última reunión de trabajo, al no haber proporcionado formalmente y por escrito, la decisión fundada de la PGR sobre la investigación que se adelanta ante la Fiscalía del Estado de Chihuahua. El Estado, por su parte, reiteró que la PGR a través de un estudio sobre la factibilidad de federalización del caso, determinó su incompetencia para conocer del mismo. En este sentido, el Estado afirmó que la investigación debe continuarse ante la Fiscalía local.

1807. El 18 de julio de 2016, los peticionarios remitieron a la CIDH copia de la solicitud de atracción realizada a la PGR en abril de 2015. El 5 de agosto de 2016, la Comisión remitió la información aportada por los peticionarios y solicitó al Estado presentar la decisión motivada de la PGR mediante la cual estableció su falta de competencia para conocer del asunto y decidió no federalizar el presente caso.

1808. El 20 de octubre de 2016, la CIDH solicitó a ambas partes información actualizada sobre el cumplimiento. El 16 de diciembre de 2016, los peticionarios presentaron comunicación con fecha de noviembre 2015 en la cual hacen alusión de manera general a observaciones orales que presentaron en la reunión de trabajo que tuvo lugar el 21 de octubre de 2015 en el marco del 156 período de sesiones de la CIDH.

1809. El 26 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó a las partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones pendientes. Sin embargo, a la fecha del presente informe el Estado no ha presentado información.

1810. El 26 de octubre de 2017, los peticionarios informaron que debido a la falta de respuesta de la solicitud de atracción presentada en abril de 2015, realizaron un recordatorio, el 7 de marzo de 2017, a la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención de Delitos y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, sin que a la fecha los peticionarios hayan obtenido una respuesta. Asimismo, los peticionarios informaron que el 22 de agosto de 2017, presentaron un escrito ante la Oficialía de Partes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, dirigido al licenciado César Augusto Espejel, Fiscal General del Estado de Chihuahua, mediante el cual

solicitan la remisión del caso a la PGR, sin embargo, los peticionarios informaron que no han obtenido respuesta.

1811. En relación a las medidas de reparación, los peticionarios indicaron que la familia Muñoz Guzmán reitera que cualquier proceso de reparación no tiene cabida sin que exista previamente el acceso a la justicia y a la verdad sobre los hechos acaecidos en torno a la desaparición de la víctima. Por lo anterior, manifestaron que no están dispuestos a iniciar el proceso de reparación hasta que no se lleve a cabo investigación completa e imparcial.

1812. Por lo expuesto, la Comisión lamenta la falta de respuesta de las autoridades estatales mexicanas y concluye que no se dado cumplimiento a las recomendaciones reseñadas, e insta al Estado a tomar las medidas necesarias para avanzar de manera eficaz en la investigación, juicio y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos del señor Miguel Orlando Muñoz Guzmán. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

### **Caso 11.822, Informe de solución amistosa No. 24/09, Reyes Penagos Martínez y otros (México)**

1813. El 20 de marzo de 2009, mediante Informe de Solución Amistosa No. 24/09, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa para el caso de Reyes Penagos Martínez, Enrique Flores González y Julieta Flores Castillo. La denuncia presentada por los peticionarios se basó en la presunta detención ilegal de las víctimas, los actos de tortura a los que habrían sido sometidos y la alegada ejecución extrajudicial del señor Reyes Penagos Martínez. En resumen, los peticionarios informaron que las víctimas fueron detenidas el 16 de diciembre de 1995, durante un violento desalojo de un plantón de protesta que se había desarrollado en el ejido de Nueva Palestina, y que los días siguientes a su detención, las víctimas fueron torturadas. Respecto de la señora Flores Castillo, agregaron que, además, había sido víctima de violación sexual. Adicionalmente, señalaron que en las primeras horas del 18 de diciembre el señor Reyes Penagos Martínez había sido trasladado con rumbo desconocido, y que horas después fue encontrado su cuerpo sin vida, cerca de Jaltenangó. Respecto de Enrique Flores González y de Julieta Flores Castillo, informaron que fueron liberados dos meses después. En materia de justicia, indicaron que, con motivo de la detención y posterior muerte del señor Reyes Penagos Martínez, se inició una averiguación previa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Sin embargo, a su criterio, la investigación no habría sido integrada correctamente y habría adolecido de múltiples vicios.

1814. El 1 de marzo de 1999 en la sede de la CIDH, las partes suscribieron el compromiso de iniciar un proceso de solución amistosa y el 3 de noviembre de 2006, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas, suscribieron un acuerdo sobre reparación del daño a las víctimas y sus familiares. Las partes convinieron:

#### **TERCERO.- Medidas de Satisfacción y Garantías de no repetición**

[...]

##### **a) Reconocimiento Público de Responsabilidad Internacional del Estado mexicano.**

El Estado se compromete a realizar un pronunciamiento público en donde reconozca SU RESPONSABILIDAD en los hechos señalados en el primer apartado, en virtud de que la muerte de Reyes Penagos Martínez y la detención y tortura de Julieta Flores Castillo y Enrique Flores González, cometidos por diversos servidores públicos del Estado de Chiapas, le son imputables.

El Estado también se compromete a que en el mismo acto se les pedirá perdón público a las víctimas y a sus familiares por los hechos denunciados ante la CIDH, mismos que fueron consecuencia de una violación a los derechos humanos.

Este pronunciamiento podrá ser hecho al momento en que se realice el pago correspondiente a la reparación del daño material e inmaterial acordado en los párrafos precedentes.

De igual forma el Estado se compromete a publicar en dos periódicos de circulación local el pronunciamiento público.

**b) Investigación y sanción de los responsables**

Asimismo el Estado se compromete a continuar con las investigaciones hasta conseguir la sanción de los responsables de esos crímenes, mediante una investigación seria e imparcial de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos con la finalidad de evitar su revictimización por falta de acceso a la justicia.

[...]

**SEXTA.- Daño Material.**

[...]

En este sentido se han acordado las siguientes cantidades:

Beneficiario	Concepto	Monto
1. Familia Penagos Roblero	Daño Emergente	\$ 52,548.00 MN
	Lucro Cesante	\$ 105,354.00 MN
2. Julieta Flores Castillo	Daño Emergente	\$ 52,548.00 MN
	Lucro Cesante	\$ 12,640.00 MN
3. Enrique Flores González	Daño Emergente	\$ 52,548.00 MN
	Lucro Cesante	\$ 12,640.00 MN

**SÉPTIMA.- Daño Inmaterial.** [...] Las cantidades acordadas son las siguientes:

Beneficiario	Concepto	Monto
1. Familia Penagos Roblero	Daño Inmaterial	\$ 342,098.00 MN
2. Julieta Flores Castillo	Daño Inmaterial	\$ 228,951.00 MN
3. Enrique Flores González	Daño Inmaterial	\$ 228,951.00 MN

[...]

**NOVENA.-** En virtud de las alteraciones en las condiciones de existencia de las víctimas y sus familiares, la Fiscalía General del Estado de Chiapas se compromete a realizar las gestiones que resulten necesarias, ante las autoridades componentes, a efecto de que les sean otorgadas becas de estudio a los tres hijos menores del señor Reyes Penagos. En el entendido que la Fiscalía General no puede garantizar que el resultado de las mismas sean positivas, no obstante expresa su compromiso para impulsar diligentemente estas solicitudes y buscar un resultado favorable para los hijos del señor Reyes Penagos.

**DÉCIMA.-** En este mismo sentido, el Estado se compromete a realizar gestiones para que los beneficiarios obtengan acceso a un seguro médico.

1815. En su Informe No. 24/09, la CIDH analizó las medidas adoptadas por el Estado mexicano y reconoció el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de: i) reconocimiento de responsabilidad estatal; ii) publicación del texto del acto de reconocimiento público de responsabilidad estatal; iii) indemnización pecuniaria; y iv) acceso a seguro médico, en beneficio de Enrique Flores y Julieta Flores. Adicionalmente, en el referido informe la CIDH decidió:

“2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes, en particular, la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial del señor Reyes Penagos Martínez y de la detención ilegal y tortura del señor Enrique Flores y de la señora Julieta Flores”.

1816. El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada acerca del estado de cumplimiento de los compromisos pendientes. En relación con recomendación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados, el Estado reiteró que ha venido dando seguimiento a su cumplimiento. Informó que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas era la instancia encargada de vigilar que las investigaciones se realicen en forma diligente. Sobre el delito de violación cometido en contra de una de las víctimas, informó que el Ministerio Público ejerció acción penal el 13 de septiembre de 2012 en contra de siete sindicatos. Destacó que la víctima ha tenido la posibilidad de acceder a los expedientes y al proceso y ratificó su compromiso de garantizarle el ejercicio de su derecho a la coadyuvancia. En cuanto a la investigación de los delitos cometidos en contra de Reyes Penagos y Enrique Flores, indicó que las indagatorias administrativas y penales en contra de servidores públicos involucrados fueron agotadas y se les aplicó las sanciones correspondientes.

1817. Los peticionarios señalaron que el Estado ha fallado en realizar gestiones para investigar efectivamente tanto la ejecución extrajudicial del señor Reyes Penagos como la detención ilegal y tortura del señor Enrique Flores y de la señora Julieta Flores. Señalaron que el Estado solamente ha hecho referencia a ciertas diligencias de las investigaciones del delito cometido en contra de la señora Julieta Flores pero no se ha referido a investigaciones de violaciones de derechos humanos en perjuicio de otras víctimas.

1818. El 12 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información a las partes sobre el cumplimiento. Las partes no presentaron la información actualizada.

1819. El 13 de enero de 2015, la parte peticionaria expresó su preocupación por la falta de información sobre el proceso de investigación. El Estado no les habría informado sobre los avances en la materia desde el año 2013, y al acercarse una representante de las víctimas la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Relevantes del Estado de Chiapas, para obtener mayor información sobre lo actuado, el personal de la Fiscalía informó no tener conocimiento del expediente.

1820. El 23 de enero de 2015, el Estado presentó una información adicional que fue trasladada a los peticionarios para su conocimiento. El Estado indicó en relación a la investigación No. 197/2012 por la violación sexual de una de las víctimas, que el 25 de junio de 2013 se logró la detención de Jaime Arturo Cabrera Ferro, quien promovió juicio de amparo No. 1083/2013. El Estado no indicó en qué sentido se decidió dicho amparo. Adicionalmente, el señor Bulmaro Trejo Lopez fue detenido, sin embargo a través de acción de amparo obtuvo la declaración de insubsistencia de la orden de aprehensión y declaratoria de extinción de la acción penal por haber operado la prescripción. El señor Francisco Hernández Chacón, también promovió juicio de amparo No. 946/2013, resuelto el 13 de octubre de 2013, logrando la cancelación de la orden de aprehensión y la declaración de prescripción de la acción penal. Cesar Montes Alegría, promovió juicio de amparo No. 1284/2013 que se encuentra pendiente de decisión. Finalmente, para Dagoberto García Cisneros, Martin Hernández Ocaña y Juan Otilio Lopez Guillen, continua vigente la orden de aprehensión. El Estado solicitó a la CIDH tomar en consideración que la obligación de investigar es una obligación de medios y no de resultado, y que la Procuraduría General de Justicia había logrado capturar y consignar a la mayoría de los responsables de los agravios en contra de las víctimas, aunque no hubiera podido obtener sentencias condenatorias.

1821. En relación a lo anterior, la CIDH toma nota de los esfuerzos del Estado por identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de la violación sexual contra una de las víctimas. Al mismo tiempo, recuerda al Estado Mexicano que en su reconocimiento de responsabilidad aceptó que los hechos perpetrados por las autoridades mexicanas contemplaban la muerte de Reyes Penagos Martínez y la detención y tortura de Julieta Flores Castillo y Enrique Flores González. En ese sentido, la jurisprudencia constante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido que son inadmisibles las disposiciones de prescripción que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las

violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura y las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias<sup>153</sup>. Por lo anterior, la CIDH no puede concluir que el Estado ha cumplido con el compromiso relativo a la investigación y sanción de los responsables.

1822. Por otro lado, en relación al tema de las becas estudiantiles, el Estado indicó que la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, ha otorgado becas educativas desde el año 2008 de manera mensual a favor de los 3 beneficiarios. La CIDH toma nota de dicha información y considera que el Estado ha venido dando un cumplimiento a esta medida. Al respecto, la Comisión observa que en el presente caso la medida comprende la finalización de los estudios profesionales de los beneficiarios. Por lo tanto, la CIDH continuará dando seguimiento a dicha medida.

1823. El 30 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó a ambas partes información actualizada sobre el cumplimiento. A la fecha de elaboración de este informe, ninguna de las partes ha presentado la información solicitada.

1824. El 1 de diciembre de 2015, indicaron que, desde el 29 de marzo de 2013, no habían recibido ningún tipo de información estatal actualizada y detallada de las acciones que se estarían ejecutando para cumplir con esta medida de reparación.

1825. El 20 de octubre de 2016, la CIDH nuevamente solicitó a ambas partes información actualizada sobre el cumplimiento. Hasta el momento, el Estado no había presentado información actualizada. Por su parte, los peticionarios presentaron información el 23 de noviembre de 2016.

1826. En relación a la investigación penal seguida en contra de los responsables de las violaciones a derechos humanos de los señores Reyes Penagos Martínez, Enrique Flores y de la señora Julieta Flores, los peticionarios reiteraron lo expresado en comunicación de diciembre de 2015 en cuanto a la falta de información en torno a la investigación por parte del Estado mexicano. Al respecto, indicaron que luego de la comunicación presentada por el Estado en el mes de octubre de 2013 mediante la cual indicó que se habría ejercido la acción penal en contra de siete personas señaladas como probables responsables entre los meses de septiembre del año 2012 y octubre del año 2013; no han recibido ningún otro informe que aporte mayores datos ni sobre ningún otro avance.

1827. El 6 de junio de 2017, el Estado reiteró la información suministrada el 23 de octubre de 2016, en relación a la investigación penal de los responsables por los hechos de tortura y homicidio perpetuado presuntamente en contra del señor Reyes Penagos Martínez, Enrique Flores y Julieta Flores, e indicó que la orden de aprehensión librada contra Martín Hernández Ocaña, el 13 de septiembre 2012, se encuentra vigente.

1828. El 26 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado información.

1829. Por lo expuesto, la CIDH insta al Estado a presentar información específica y actualizada sobre los resultados de la investigación, así como de las gestiones realizadas para juzgar y sancionar a los responsables de los hechos relacionados con el presente caso.

1830. Por lo expuesto, la CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.

#### **Caso 12.228, Informe No. 117/09, Alfonso Martín del Campo Dodd (México)**

1831. El 12 de noviembre de 2008, la CIDH aprobó el Informe de Fondo No. 117/09, en el cual concluyó que el Estado mexicano era responsable por la violación de los artículos 5, 7, 8(1), 8(2), 8(3) y 25 de

<sup>153</sup> Corte IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia de 14 de marzo de 2001, Fondo, Párr. 41

la Convención Americana, así como de los artículos 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; todo ello en violación del deber de respeto y garantía consagrado en el artículo 1(1) de la Convención Americana, en perjuicio del señor Alfonso Martín del Campo Dodd.

1832. En consecuencia, la CIDH formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Impulsar las medidas conducentes para anular la confesión obtenida bajo tortura en las instalaciones de la PGJDF el 30 de mayo de 1992 y de todas las actuaciones derivadas de ella; revisar la totalidad del proceso judicial contra la víctima en el presente caso; y disponer de inmediato la liberación de Alfonso Martín del Campo Dodd mientras se sustancian tales medidas.
2. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de Alfonso Martín del Campo Dodd.
3. Reparar adecuadamente a Alfonso Martín del Campo Dodd por las violaciones de los derechos humanos [...] establecidas.

1833. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada acerca del estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas para el presente caso.

1834. El 7 de noviembre de 2013, los peticionarios afirmaron que han transcurrido más de once años desde que la CIDH emitiera sus recomendaciones y que durante ese periodo de tiempo el Estado no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones. Los peticionarios manifestaron que el señor del Campo Dodd continuaba privado de su libertad. Informaron éste presentó en agosto de 2010 ante la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, una solicitud de reconocimiento de inocencia donde hizo referencia al trámite internacional del caso, y el 25 de noviembre de 2011, la referida Sala declaró infundado el incidente. Agregaron que contra dicha decisión se promovió el 16 de noviembre de 2011 un recurso de amparo, que fue resuelto a su favor el 30 de abril de 2013 por el Juzgado Sexto. Al considerar que los términos de la resolución eran sumamente vagos y no dejaban claridad sobre sus efectos, ambas partes promovieron recursos de revisión.

1835. En comunicación de los peticionarios del 12 de septiembre del 2014, afirmaron que el representante legal del señor Martín del Campo Dodd solicitó la “atracción” del mencionado recurso de revisión y, en ese sentido, el 6 de noviembre de 2013, la Primera Sala de la SCJN, decidió por unanimidad atraer el asunto y fue turnado a un ministro para que elaborase el proyecto de resolución. El 2 de julio de 2014 se llevó a cabo la discusión sobre dicho proyecto de resolución, mismo que argumentaba que derivado del art. 36 de la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, los informes de la CIDH y las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, son obligatorias para las autoridades del Distrito Federal y, por tanto, correspondía ordenar la inmediata libertad del señor Martín del Campo. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre ministros, el asunto fue turnado a otro despacho y se sometería a votación a finales del año 2014.

1836. Mediante comunicación del 29 de octubre de 2014, el Estado de México afirmó que tenía una diferencia de interpretación con la CIDH respecto de cómo deben entenderse sus facultades para publicar un informe de fondo, una vez que la Corte Interamericana ya ha determinado que no tiene jurisdicción sobre un caso. A juicio del Estado mexicano, si un caso es enviado a la Corte, independiente de si ésta se pronuncia sobre el fondo o no, la CIDH ya no podría publicar el informe de fondo, pues se atentaría contra la seguridad jurídica del Estado. Por lo anterior, el Estado de México en su comunicación concluyó que no rendirá más observaciones sobre este caso ante la CIDH.

1837. El 30 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó a ambas partes información actualizada sobre el cumplimiento. El Estado no presentó información actualizada en esta oportunidad.

1838. Los peticionarios por su parte, informaron que el 18 de marzo de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de revisión ordenando la liberación inmediata de Alfonso Martin del Campo Dodd, sobre la base que se había comprobado que la tortura a la que fue sometido, tuvo como finalidad la obtención de una confesión sin que mediaran más pruebas para respaldar la condena en su contra. Los peticionarios indicaron que el señor del Campo ha recuperado su plena libertad.

1839. Por otro lado, los peticionarios indicaron que el Estado aún no ha cumplido con la recomendación relacionada con la reparación integral del daño ocasionado a Alfonso Martin del Campo Dodd, y tampoco ha cumplido con el deber de investigar y establecer las responsabilidades de las personas involucradas en las violaciones de derechos humanos cometidas contra la víctima en este caso.

1840. El 20 de octubre de 2016, la CIDH solicitó a ambas partes información actualizada sobre el cumplimiento. Mediante comunicación recibida el 22 de diciembre de 2016, los peticionarios reiteraron información relativa a la emisión en fecha 18 de marzo de 2015 de sentencia en la cual se resolvió la liberación inmediata del señor del Campo Dodd. En ese sentido, indicaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación utilizó como fundamentos de su decisión todos los informes de órganos de protección de derechos humanos que respaldaban la existencia de tortura en contra de Martín del Campo Dodd, entre ellos los informes de la Comisión No 63/02, 33/09 y 117/09. Los peticionarios señalaron que actualmente, el señor Alfonso Martin del Campo Dodd ha iniciado distintas acciones administrativas y judiciales para solicitar la reparación por el daño a raíz de la violación de sus derechos, en el marco de la reparación integral requerida al Estado mexicano por la CIDH.

1841. Por otro lado, los peticionarios denunciaron nuevamente la absoluta inacción del Estado en lo que respecta a las investigaciones de las personas responsables de llevar a cabo la tortura y de desconocer las garantías judiciales de Alfonso Martín del Campo Dodd. Finalmente, la organización peticionaria CEJIL, desistió de la representación legal de la víctima en este caso.

1842. La CIDH toma nota y valora la información suministrada por los peticionarios. Al respecto, la Comisión destaca, en particular, la jurisprudencia aplicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomando en cuenta los estándares internacionales pertinentes. En este sentido, invita nuevamente al Estado mexicano a presentar información actualizada sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones del Informe No. 117/09.

1843. El 26 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento. Sin embargo, a la fecha del presente informe ninguna de las partes ha presentado información.

1844. Por lo expuesto, la CIDH concluye que las recomendaciones de la CIDH se encuentran parcialmente cumplidas. Por otro lado, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones 2 y 3, que se encuentra aún pendientes de implementación.

#### **Caso 12.642, Informe de solución amistosa No. 90/10, José Iván Correa Arévalo (México)**

1845. El 15 de julio de 2010, mediante Informe No. 90/10, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa para el caso de José Iván Correa Arévalo. En la petición se alegaba que José Iván Correa Arévalo, joven estudiante de 17 años, falleció el día 28 de mayo de 1991 a consecuencia del impacto de un proyectil de arma de fuego en su cabeza. Se sostenía que la muerte del joven José Iván –la cual estaría vinculada con su condición de líder estudiantil independiente- no habría sido investigada diligentemente por las autoridades mexicanas, y que los responsables de su muerte no fueron condenados. En suma, alegaron los peticionarios que la investigación realizada por el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas habría sido sustanciada sin la debida diligencia, y que, sin perjuicio del transcurso de los años, la justicia mexicana no habría logrado determinar los motivos del asesinato de la presunta víctima ni sancionar a los responsables.

1846. En el Informe la CIDH dejó constancia de que durante una reunión de trabajo realizada el 24 de octubre de 2008, durante el 133° período ordinario de sesiones de la CIDH las partes firmaron un documento en el cual se consignaron los siguientes compromisos:

1. Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a continuar la investigación diligente y exhaustiva y a abrir nuevas líneas de investigación para lograr el pronto esclarecimiento de la verdad histórica acerca del homicidio de José Iván Correa Arévalo. Durante la investigación, se realizarán mesas de trabajo entre los agentes encargados de la misma y la coadyuvancia para la revisión integral del expediente.
2. Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por la falta de investigación diligente de las autoridades en lo que respecta al homicidio de José Iván Correa Arévalo. Este reconocimiento y disculpa pública será publicado en los diarios de mayor circulación del Estado de Chiapas. Los peticionarios se comprometen a presentar una propuesta de texto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en el plazo de 15 días contados a partir del día de la fecha. La propuesta será analizada por las autoridades del Estado de Chiapas en el plazo de 15 días a partir de que la misma sea recibida. El texto final será acordado entre las partes. Frente al requerimiento de los peticionarios de que el acto público referido sea encabezado por el titular del Ejecutivo del Estado de Chiapas, el Ministerio de Justicia se compromete a plantear esta solicitud a dicha autoridad, y en su defecto, a que sea el Titular del Ministerio de Justicia quien encabece el acto. Las partes acordarán la fecha de celebración del acto público, buscando que sea posible la presencia del Comisionado Florentín Meléndez, Relator para México. En la concertación de dicho acto, las partes manifiestan que existe la posibilidad de firmar el acuerdo de solución amistosa en este caso.
3. Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a ofrecer un tratamiento psicológico al Señor Juan Ignacio Correa López y a incorporarlo, junto con su familia al Programa de Salud del Seguro Popular, conforme a lo acordado en la Minuta de Trabajo firmada en el Estado de Chiapas el día 8 de octubre de 2008.
4. Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a incorporar al Señor Juan Ignacio Correa López al Programa de Vivienda de Interés Social en los términos de la Minuta de Trabajo firmada en el Estado de Chiapas el día 8 de octubre de 2008.
5. Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a incorporar al Señor Juan Ignacio Correa López al Programa de Reactivación Económica del Estado de Chiapas, para la adquisición de un crédito destinado a actividades empresariales. El Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a gestionar, en caso de que sea necesario, la amortización del crédito y su no reembolso para beneficio del peticionario.
6. Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a otorgar una indemnización en concepto de daño material y moral, al Señor Juan Ignacio Correa López, por un monto total de \$600.000 pesos (seiscientos mil pesos moneda nacional) libre de todo gravamen.
7. Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a gestionar ante el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez del Estado de Chiapas, la denominación con su nombre de la calle en que fue privado de la vida José Iván Correa Arévalo; o, en su defecto, a gestionar ante la autoridad educativa respectiva la

colocación de una placa alusiva a los hechos del presente caso, en el Colegio de Bachilleres Plantel 01 (COBACH), al cual asistía José Iván Correa Arévalo.

1847. El 21 de marzo de 2009, durante la reunión de trabajo celebrada en el 134° período ordinario de sesiones de la CIDH, las partes suscribieron un acta de reunión de trabajo, donde reconocieron el cumplimiento de la solución amistosa, y acordaron continuar con el seguimiento de los puntos 1 y 4. En ese sentido, la CIDH emitió el Informe 90/10 aprobando la solución amistosa alcanzada entre las partes, y continuó con el seguimiento de los dos puntos pendientes de cumplimiento. La CIDH dio por cumplido el punto 4 en su Informe Anual 2012<sup>154</sup>.

1848. Derivado de lo anterior, el único punto pendiente de cumplimiento es la primera cláusula del acuerdo:

1. Que el Estado mexicano por conducto del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas se compromete a continuar la investigación diligente y exhaustiva y a abrir nuevas líneas de investigación para lograr el pronto esclarecimiento de la verdad histórica acerca del homicidio de José Iván Correa Arévalo. Durante la investigación, se realizarán mesas de trabajo entre los agentes encargados de la misma y la coadyuvancia para la revisión integral del expediente.

1849. El 12 de enero de 2015, los peticionarios reiteraron que el caso continúa en la impunidad, ya que el Estado mexicano no ha cumplido hasta el momento con su compromiso de continuar con una investigación diligente y exhaustiva.

1850. El Estado presentó información adicional el 21 de abril de 2015, en la cual dio cuenta de diligencias adelantadas durante la investigación penal de los hechos con anterioridad a la emisión del informe de solución amistosa. Asimismo, el Estado indicó, sin especificar fecha, que el Juez Segundo del Ramo Penal decretó la prescripción del delito imputado en la causa radicada 408/2010. El Estado indicó que a través de este proceso se esclarecieron los hechos en que perdió la vida la víctima y se identificaron los autores. Sin embargo, no fue posible sancionar a los perpetradores por haber operado la prescripción de la acción penal. El Estado solicitó en consecuencia, que la CIDH tenga por cumplida la medida, toda vez que se habría investigado diligentemente y exhaustivamente los hechos y se habría esclarecido de forma fehaciente el marco fáctico en el cual falleció la víctima.

1851. El 30 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó a ambas partes información actualizada sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre del presente informe, las partes no habían presentado información adicional.

1852. La CIDH toma nota de la prescripción de la acción penal enunciada por el Estado y de la solicitud de declaración de cumplimiento total del acuerdo. Al respecto, la CIDH considera que no cuenta con suficientes elementos que permitan concluir que el Estado realizó una investigación diligente y que se esclareció la verdad material de los hechos. En consecuencia, la CIDH insta al Estado a presentar información sobre los resultados de la investigación, las gestiones realizadas para juzgar y sancionar a los autores que reporta como identificados y las razones por las que operó la prescripción de la acción penal. Por lo anterior, la CIDH considera que este punto no se encuentra cumplido.

1853. El 21 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. Las partes no presentaron información adicional sobre el cumplimiento.

1854. El 7 de marzo de 2017, el Estado reiteró la información que ya había suministrado en relación con la investigación penal. En relación al compromiso de incorporar al señor Juan Ignacio Correo López al Programa de Vivienda de Interés Social, el Estado reiteró que el 13 de mayo de 2009, el Estado de

<sup>154</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2012, Capítulo III. D. Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. Párr. 873 c.

Chiapas le otorgó al señor Juan Ignacio Correa López la suma de 600.000 pesos para la adquisición de una vivienda, monto requerido por el peticionario el 15 de abril de 2009. Por lo anterior, el Estado considera cumplido totalmente el compromiso 4) del acuerdo. Al respecto, la CIDH declaró en el 2012, que dicha cláusula estaba cumplida.

1855. El 16 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento de los compromisos pendientes. Sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe ninguna de las partes ha presentado información.

1856. Teniendo en cuenta lo anterior, la CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa se cumplió parcialmente, por lo que continuará dándole supervisión al punto 1 del acuerdo.

**Caso 12.551, Informe No. 51/13, Paloma Angélica Escobar Ledezma y otros (México)**

1857. El caso se refiere a la falta de investigación oportuna, inmediata, seria e imparcial de la desaparición de la niña Paloma Angélica Escobar Ledezma, de 16 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado a casi un mes de su desaparición por una familia de transeúntes en el kilómetro 4.5 de Chihuahua a Aldama.

1858. En su Informe No. 113/12, la CIDH concluyó que el Estado de México es responsable, en perjuicio de Paloma Angélica Escobar, de violaciones de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, a los derechos del niño y a la igual protección de la ley, consagrados en los artículos 8.1, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en conexión con la obligación que le imponen al Estado los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado. Igualmente, la CIDH concluyó que el Estado menoscabó los derechos de Paloma Angélica Escobar bajo el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Finalmente, en relación a Norma Ledezma Ortega, Dolores Alberto Escobar Hinojos y Fabián Alberto Escobar Ledezma, la CIDH concluyó que el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana en conexión con la obligación que le impone al Estado el artículo 1.1 de dicho tratado, así como el derecho a las garantías y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con la obligación que le imponen al Estado los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado.

1859. El 3 y 4 de agosto de 2011, las partes llegaron a dos acuerdos para el cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo No. 87/10. En su Informe No. 51/13, la CIDH observó que el Estado dio cumplimiento sustancial a las recomendaciones formuladas en su Informe No. 87/10 y valoró los esfuerzos desplegados por las partes para dar cumplimiento a sus recomendaciones. En dicho informe la CIDH reiteró todas las recomendaciones al Estado Mexicano, y dio por cumplidos 10 puntos del acuerdo de cumplimiento alcanzado por las partes<sup>155</sup>.

1860. El 5 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó a las partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 2 de febrero de 2015, el Estado presentó la información solicitada. Asimismo, los peticionarios presentaron dicha información el 16 de febrero de 2015.

1861. A continuación se detalla el estado que para el 2016 tenía cada uno de los compromisos asumidos para el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, seguido de un resumen de la información proporcionada por las partes y el respectivo análisis de la Comisión sobre el cumplimiento de las mismas.

<b>Acciones establecidas en el “Acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de fondo No. 87/10”</b>	<b>Estado de Cumplimiento</b>
<b>Recomendación No. 1:</b> Completar la investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial con el objeto de esclarecer el asesinato de Paloma Angélica Escobar e identificar, juzgar y, en su caso sancionar a los responsables.	

<sup>155</sup> CIDH, Informe No. 51/13, Caso 12.551 Paloma Angeliza Escobar Ledezma y Otros, Fondo, México.

Investigar con la debida diligencia, en forma seria, imparcial y exhaustiva, la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Escobar Ledezma, para lo cual el Estado deberá adoptar todas las medidas judiciales y administrativas necesarias con el fin de completar la investigación, localizar, juzgar y, en su caso, sancionar al o los autores intelectuales y materiales de los hechos, e informar sobre los resultados.	En proceso de cumplimiento.
Entregar a la señora Norma Ledezma un informe mensual por escrito y sobre las líneas de investigación, diligencias y acciones que se realizan en el caso, hasta que se esclarezca el caso y, en su caso, se sancione a los responsables.	Cumplido.
Revisar y, en su caso, agotar, las líneas de investigación propuestas por la Señora Norma Ledezma Ortega.	En proceso de cumplimiento.
Garantizar el derecho de plena coadyuvante de la Sra. Norma Ledezma Ortega.	Cumplido.
<b>Recomendación No. 2:</b> Reparar plenamente a los familiares de Paloma Angélica Escobar por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas.	
Realizar un documento separado, el cual será firmado por los representantes del Estado y el señor Escobar Hinojos, en el que se reconoce al señor Escobar Hinojos, por concepto de Daño Inmaterial, un monto de [...]	Cumplido.
El Estado mexicano, a través del Gobierno Federal pagará en efectivo a las víctimas Norma Ledezma y Fabián Alberto Escobar Ledezma, la cantidad total de [...].	Cumplido.
El Gobierno del Estado de Chihuahua otorgará a Fabián Alberto Escobar Ledezma, un apoyo económico para sufragar su carrera universitaria y de postgrado [...].	Cumplido.
El Gobierno del Estado, entregará a la señora Norma Ledezma Ortega [...] una vivienda [...] cuya ubicación serán convenidas entre el Gobierno del Estado y la víctima. Dicha vivienda será entregada en un plazo máximo de 3 meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente Acuerdo.	En proceso de cumplimiento.
Ofrecer asistencia médica y psicológica a los peticionarios [...].	Cumplido.
El acto público de reconocimiento de responsabilidad realizado de común acuerdo.	Cumplido.
El Gobierno del Estado de Chihuahua se compromete a que el Centro de Justicia para las Mujeres de Ciudad de Chihuahua, [...] en memoria de Paloma Angélica Escobar Ledezma, lleve su nombre.	Cumplido.
Construir un memorial que incluya una fuente de agua y palomas, así como una placa conmemorativa [...].	Cumplido.
[...] inauguración del memorial [...] de manera simultánea al acto público de reconocimiento de responsabilidad [...]	Cumplido.
<b>Recomendación No. 3:</b> Implementar como medida de no-repetición, una política estatal integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados, para garantizar que los casos específicos de violencia contra las mujeres, sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y reparados en la Ciudad de Chihuahua.	
Concluir la creación de la Fiscalía Especializada. [...] Asimismo, deberá nombrar al/la titular de dicha Fiscalía y destinar los recursos materiales y económicos suficientes, en la medida de la capacidad financiera y presupuestal, para el funcionamiento de esta unidad en las cuatro zonas del Estado.	Cumplido.
Diseñar un programa de capacitación al personal dedicado a la Atención a Víctimas, a efectos de que éstos cuenten con la formación necesaria respecto al impacto psicosocial de las violaciones a los derechos humanos y la violencia contra las mujeres, para lo cual se deberá realizar un taller de sensibilización y capacitación a los profesionales del Sistema Estatal de Salud y de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, adscrita a la Fiscalía General del Estado, que será impartido por profesionales especialistas en la materia, dentro de los plazos del presente acuerdo.	En proceso de cumplimiento.

<p>La Secretaría de Gobernación realizará una campaña nacional de doce meses consistente en dar a conocer los mecanismos gubernamentales a disposición, tanto de autoridades como de particulares, para la captación de datos, registros y hechos relativos a casos de desaparición de personas, con el objeto de continuar en la conformación de las diversas bases de datos a cargo de las autoridades estatales, mismas que serán administradas por la Procuraduría General de la República bajo un solo software denominado CODIS.</p>	<p>La CIDH no cuenta con información sobre el cumplimiento.</p>
<p>El Gobierno del Estado se obliga a continuar a seguir los procedimientos de conformidad con la Ley Reguladora de la Base de Datos Genéticos para el Estado de Chihuahua. Esta obligación incluye que el Gobierno Federal por conducto de la Procuraduría General de la República, realice el cotejo de las muestras genéticas en la búsqueda de coincidencias entre familiares y víctimas.</p>	<p>La CIDH no cuenta con información sobre el cumplimiento.</p>
<p>En el ámbito del Estado de Chihuahua las autoridades estatales se comprometen a que dentro de la consulta para la elaboración de los protocolos de investigación de mujeres desaparecidas y homicidios de mujeres, se garantizará la consulta a "Justicia para Nuestras Hijas", procurando atender sus observaciones. Así como la consulta sobre la capacitación para la adecuada implementación de dichos protocolos, que será impartida por personal adecuadamente capacitado para ello.</p>	<p>En proceso de cumplimiento.</p>
<p><b>Recomendación No. 4:</b> Adoptar reformas en los programas educativos del Estado, desde la etapa formativa y temprana, para promover el respeto de las mujeres como iguales, así como el respeto de sus derechos a la no violencia y a la no discriminación.</p>	
<p>El Gobierno del Estado y el Gobierno Federal promoverán la incorporación de la materia de género y derechos humanos en la currícula de primarias, secundarias, preparatorias y universidades públicas. Para tal efecto, por lo que hace al Gobierno Federal, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos, convocará a las organizaciones de la sociedad civil, a efecto de que participen en la consulta que coordinará la Subcomisión de Educación, para elaborar una propuesta concreta para incorporar la materia de género y derechos humanos en la currícula que se indica, la cual será sometida en la próxima sesión de la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos.</p>	<p>La CIDH no cuenta con información sobre el cumplimiento.</p>
<p><b>Recomendación No. 5:</b> Investigar las irregularidades en la investigación del caso que se hayan cometido por agentes del Estado y sancionar a los responsables</p>	
<p>En relación con las acciones tendientes a castigar penal o administrativamente a funcionarios que intervinieron en la investigación, acreditar que se han realizado todas las investigaciones que por tales hechos fueron abiertas, haciendo del conocimiento de la Sra. Norma Ledezma Ortega los resultados obtenidos, así como las personas que resultaron responsables.</p>	<p>En proceso de cumplimiento.</p>
<p>El Gobierno del Estado de Chihuahua se compromete a establecer una mesa de análisis con la Sra. Norma Ledezma Ortega, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, para revisar de manera pormenorizada las actuaciones ministeriales, y en caso de desprenderse presuntas responsabilidades respecto de otros funcionarios, iniciar los procedimientos correspondientes de carácter administrativo y/o penal, conforme al orden jurídico vigente.</p>	<p>En proceso de cumplimiento.</p>
<p><b>Recomendación No. 6:</b> Fortalecer la capacidad institucional para combatir la impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua a través de investigaciones criminales efectivas con perspectiva de género, que tengan un seguimiento judicial consistente, garantizando así una adecuada sanción y reparación.</p>	
<p>Entregar el Protocolo para la Investigación de Homicidios de Mujeres con perspectiva de género, incluyendo el nombre de "Paloma" en el mismo. El Estado proporcionará a las peticionarias y a la Señora Norma Ledezma, en un plazo de tres meses, el proyecto correspondiente, a fin de recibir sus comentarios y los de sus representantes.</p>	<p>Cumplido.</p>

Elaborar y difundir, en un plazo de tres meses, una Carta de los Derechos de las Víctimas del Delito, de acuerdo al redimensionamiento de la Unidad de Investigación de Homicidios de Mujer y Búsqueda de Personas Ausentes y, en su momento, de la Fiscalía Especializada. El Gobierno del Estado se compromete a entregar el proyecto a Justicia para Nuestras Hijas y en su caso de otras organizaciones interesadas en el tema; así mismo, a difundir de manera masiva la Carta, para lo cual se realizará un tiraje de hasta 3,000 ejemplares.	Cumplido.
<b>Recomendación No. 7:</b> Implementar medidas y campañas de difusión destinadas al público en general sobre el deber de respetar y garantizar los derechos humanos de las niñas y los niños.	
Con relación a la implementación de medidas y campañas de difusión destinadas al público en general sobre el deber de respetar y garantizar los derechos humanos de las niñas y los niños, el Gobierno del Estado se compromete a recoger la opinión relativa al contenido de dichas campañas de "Justicia de Nuestras Hijas" y otras Organizaciones Especializadas en el tema.	La CIDH no cuenta con información sobre el cumplimiento.
<b>Recomendación No. 8:</b> Desarrollar programas de formación para los funcionarios estatales que tenga en cuenta las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul, con el fin de que dichos funcionarios cuenten con los elementos técnicos y científicos necesarios para investigar los asesinatos de mujeres.	
A fin de contar con un programa eficaz de capacitación, el Gobierno del Estado de Chihuahua deberá impartirla con personal especializado con un adecuado perfil en investigación criminal para capacitar y certificar al personal encargado de las investigaciones relacionadas con desapariciones de mujeres y niñas, feminicidios y trata de personas, en el que se deberán tener en cuenta el contexto particular del estado, la perspectiva de género y la eficaz implementación de los protocolos de investigación que sean consensuados entre las partes. En particular en los cursos de formación se deberá garantizar la capacitación a todo el personal de la Fiscalía Especializada de referencia, los capacitadores y los temas podrán ser sugeridos por la Sra. Norma Ledezma y/o por los Representantes.	En proceso de cumplimiento.
<b>Recomendación No. 9:</b> Continuar adoptando políticas públicas y programas institucionales destinados a reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en el estado de Chihuahua y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a la justicia, que incluyan programas de capacitación para funcionarios públicos en todos los sectores del Estado, incluyendo el sector educación, las ramas de la administración de la justicia y la policía, y políticas integrales de prevención.	
Estrategia de Sensibilización dirigida a medios de comunicación "por un México libre de Violencia contra las Mujeres": La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), será la encargada de iniciar la estrategia de sensibilización dirigida a medios de comunicación por un México libre de violencia contra las mujeres. Se propiciará la vinculación con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación y periodistas.	En proceso de cumplimiento.
El Gobierno del Estado se compromete a publicar y distribuir en bibliotecas públicas del Estado, Organizaciones No Gubernamentales y Centros Comunitarios, un libro titulado "Justicia para Nuestras Hijas", cuyo prólogo será escrito por la Señora Norma Ledezma y consensuado con el Gobierno del Estado, y el contenido será una compilación de leyes sobre Derechos Humanos de las Mujeres [...]	En proceso de cumplimiento.
El Gobierno del Estado reconoce la aportación de la Asociación Civil Justicia para Nuestras Hijas, [...] por lo cual este se compromete a realizar las gestiones para la celebración de un Convenio con el sector maquilador del Estado a fin que la organización pueda presentar e implementar su programa.	Cumplido.

1862. En relación a la recomendación 1, el Estado presentó información sobre las líneas de investigación diseñadas en torno al caso, e indicó de manera general que las diligencias se han desahogado y que se practican de acuerdo al cronograma de la investigación, habiéndose recolectado 345 declaraciones de

testigos, 203 partes informativos y 95 dictámenes periciales. El Estado indicó que se ha continuado con la metodología de mesas de trabajo con la señora Ledezma Ortega.

1863. Los peticionarios por su parte indicaron que los problemas en la investigación están íntimamente relacionados con las deficiencias al inicio de la misma, a lo que se suma, en primer lugar la falta de recursos, tiempo y materiales de la Policía de Chihuahua; la descoordinación entre los agentes del ministerio Público y los Policía de Investigación debido a la falta de trasmisión de la información internamente. Asimismo, los peticionarios indicaron que las reuniones con la Fiscalía se han vuelto reiterativas, toda vez que los acuerdos sobre los pasos a seguir no se han cumplido. Los peticionarios critican el que los investigadores no conozcan el contenido del Informe de Fondo de la CIDH y que el Fiscal Especializado en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, haya tomado la declaración de la señora Ledezma en múltiples oportunidades sobre los mismos puntos, lo cual consideran “improductivo, denigrante y revictimizante”.

1864. Los peticionarios informaron que se entregaron 8 de los 12 informes mensuales que debía entregar el Estado durante el 2014 a la señora Ledezma, y que además de constituir esto por sí mismo un incumplimiento, dichos informes no reportaban avances en la investigación, puesto que no los ha habido. Finalmente, indicaron que no se han realizado mesas formales de revisión de la investigación en los últimos dos años, y reiteraron que en relación a las líneas de investigación, no se han realizado las diligencias oportunamente por falta de personal encargado de las investigaciones.

1865. La CIDH toma nota de la información proporcionada por las partes, y al respecto, observa que aún se requiere avanzar en las investigaciones para dar cumplimiento a la recomendación 1. Por lo anterior, CIDH considera que dicha recomendación se encuentra en proceso de cumplimiento. La CIDH insta al Estado a continuar proporcionando informes escritos sobre la investigación a la señora Ledezma.

1866. En relación a la recomendación 2, las partes coincidieron en reportar que el Estado ha efectuado el último pago que quedaba pendiente a favor de Fabián Escobar Ledezma. En relación a la entrega del inmueble a la señora Ledezma, el Estado reportó que no ha sido posible cumplir con este punto toda vez que la peticionaria ha manifestado “razones de índole personal para posponer su entrega” y reiteró su completa disposición para formalizarla. Al respecto, los peticionarios indicaron que si bien la vivienda había sido designada en el 2013, la víctima se negó a recibir el inmueble porque no cumplía con los estándares mínimos de seguridad, ya que no tenía puerta, y estaba bastante deteriorado por la lluvia. Según los peticionarios, dicha vivienda ha sido designada a otra familia, sin que se haya designado otro inmueble a la señora Ledezma. Los peticionarios también criticaron el hecho de que el inmueble ofrecido se encontrara en una zona que ha sido objeto de quejas de sus habitantes por el elevado nivel de plomo presente en el ambiente.

1867. La CIDH toma nota de la información proporcionada por las partes, y valora los esfuerzos del Estado para cumplir totalmente con la recomendación 2 relativa a reparaciones. En particular, la CIDH observa positivamente que el Estado ha cumplido con uno de los dos puntos pendientes de cumplimiento, esto es, lo relacionado con el pago de los estudios de Fabián Escobar Ledezma. La Comisión observa por otro lado, que el compromiso asumido por el Estado de entregar a la señora Ledezma una vivienda, incluía que su ubicación debía ser convenida entre el Gobierno y la víctima, por lo tanto la CIDH insta al Estado a que continúe desplegando esfuerzos para primero, llegar a un consenso con la víctima sobre la ubicación del inmueble que esta habitaría, y segundo, asegurar que al momento de la entrega oficial del bien, este cuente con las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. La CIDH continuará monitoreando este punto, único que se encuentra pendiente para el cumplimiento total de la recomendación 2.

1868. En relación a la recomendación 3, el Estado indicó que el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua sometió a consideración de la señora Ledezma los protocolos de atención a delitos de competencia de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el 21 de julio de 2014, por lo cual estaría a la espera de la respuesta de la parte peticionaria. El Estado no reportó sobre los demás puntos del acuerdo para el cumplimiento de esta recomendación.

1869. Los peticionarios indicaron sobre dicha recomendación, que no cuentan con información sobre la dotación de recursos humanos y materiales de la Fiscalía. Asimismo manifestaron que no han tenido conocimiento de la existencia de un programa de capacitación, ni detalles acerca del enfoque del mismo, así como tampoco cuentan con información sobre el funcionamiento del Sistema CODIS, y su campaña de difusión. Los peticionarios reportaron que el Estado ha desplegado algunas acciones para difundir los mecanismos de desaparición pero solo en el internet, lo cual consideran inadecuado por la falta de acceso a este recurso tecnológico por parte de la población, y resaltaron en ese sentido, que la campaña tendría que tomar en consideración el público meta al momento de realizarse. Finalmente los peticionarios indicaron que se llevaron a cabo reuniones de seguimiento durante 2014 sobre los protocolos, pero que no se cuenta con protocolos para la investigación de las desapariciones de mujeres. Indican que existen en la actualidad dos protocolos, el Alba y el Alerta Amber, pero que el primero no crea estrategias claras de investigación, y el segundo solo se aplica para la búsqueda de menores. Los peticionarios no confirmaron si finalizaron la revisión de los protocolos propuestos por el Estado y presentaron sus observaciones para la versión final.

1870. La CIDH toma nota de la información proporcionada por las partes y al respecto reitera que el compromiso relacionado con la creación de la Fiscalía fue declarado cumplido en el Informe de Fondo 51/13<sup>156</sup>. La CIDH observa, por otro lado, que no cuenta con suficiente información por parte del Estado sobre el diseño del programa de capacitación, ni sobre la campaña de difusión CODIS, e insta al Estado a proporcionar a esta Comisión y a los peticionarios, información detallada sobre el cumplimiento de estos puntos. Finalmente, en relación a los protocolos, la CIDH observa que al momento de la emisión del Informe de Fondo, Justicia para Nuestras Hijas estaba en etapa de revisión final de los protocolos, sin que resulte claro si dichos insumos fueron entregados al Estado para su consideración. Al respecto, la CIDH llama a las partes a dialogar sobre los puntos pendientes, de manera que se alcance de manera conjunta el cumplimiento de este compromiso en un futuro próximo.

1871. En relación a la recomendación 4, el Estado no presentó información sobre las actividades destinadas a cumplir con ese punto. Los peticionarios por su parte indicaron que aún no se ha incorporado la materia de género y derechos humanos en la currícula de educación primaria, secundaria, media y superior. Por lo anterior, la CIDH considera que no tiene información suficiente que permita valorar el cumplimiento de este compromiso, e insta al Estado a reportar sobre la incorporación del componente de género en las mallas curriculares lo antes posible.

1872. En relación a la recomendación 5, el Estado informó que se inició una investigación administrativa bajo el radicado 211/2012 contra 9 funcionarios públicos y detalló el estado actual de cada uno de esos procesos, ocho de los cuales continúan pendientes de resolución final, y en uno de ellos se habría impuesto una sanción administrativa de 30 días de suspensión sin goce de sueldo a uno de los funcionarios públicos. El Estado indicó también sobre 8 procedimientos administrativos declarados sin materia dentro del mismo proceso, en virtud de que los involucrados no tienen el carácter de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. Al respecto, el Estado indicó que 3 de ellos renunciaron y 5 fallecieron. El Estado agregó que dentro de la investigación 211/2012, se ordenó girar instrucciones al Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro, y se remitieron copias certificadas de las constancias de la investigación para que se iniciara de manera inmediata la investigación penal contra 12 servidores públicos, derivado de lo anterior se abrió la carpeta de investigación 7809-16273-2013 en la Fiscalía Especializada en Investigación y persecución del Delito de la Zona Centro, que se encuentra actualmente en etapa de integración. Finalmente, El Estado indicó que continúa en comunicación con la señora Ledezma Ortega con quien revisa conjuntamente la integración de la Averiguación Previa 77/202 y de los procedimientos administrativos.

1873. Al respecto, los peticionarios indicaron que las investigaciones adelantadas no han sido completas ni efectivas, ya que se han limitado a investigar la siembra de evidencia, ignorando otras irregularidades, por lo cual la señora Ledezma pidió a las autoridades investigar todas las anomalías

<sup>156</sup> CIDH, Informe No. 51/13, Caso 12.551 Paloma Angeliza Escobar Ledezma y Otros, Fondo, México. Pág. 91.

cometidas por cualquier funcionario público al que le correspondiera de manera directa o indirecta la averiguación del caso de Paloma Escobar Ledezma. Los peticionarios indicaron que la mesa de análisis se reunió en enero de 2012, por única vez, y que desde entonces, la Fiscalía Especializada en Control ha cambiado dos veces de titular, luego de lo cual no se le habría informado a la señora Ledezma del Estado del procedimiento, ni de las diligencias adelantadas.

1874. La CIDH toma nota de la información proporcionada por las partes, y valora altamente los esfuerzos del Estado para sancionar administrativamente a los funcionarios investigados. Por lo anterior, queda a la espera de información actualizada sobre las decisiones finales que establezcan las sanciones administrativas restantes, así como del radicado penal 7809-16273-2013, de manera que se pueda verificar el cumplimiento de esta recomendación. Asimismo, la CIDH queda a la espera de documentación que permita verificar el funcionamiento actualizado de la mesa de análisis con la señora Ledezma a través de actas u otras constancias.

1875. En relación a la recomendación 6, el Estado indicó que la Carta de los Derechos de las Víctimas del Delito fue elaborada y distribuida, remitiéndose a diversas autoridades locales y exhibiéndose en las sedes de las fiscalías, y otras instituciones públicas. El Estado incluyó en su informe registro fotográfico sobre la difusión de la Carta. Los peticionarios reconocieron que la Carta fue elaborada, pero indican que no ha sido difundida, e indican que habría que modificarla para incluir referencia a la Ley General de Víctimas de 2013.

1876. Sobre este punto, la CIDH toma nota de la información proporcionada por las partes, y valora los esfuerzos del Estado y de los peticionarios en la elaboración de la Carta de los Derechos de las Víctimas del Delito. Al respecto, considera que el Estado ha cumplido con el compromiso de elaborar la mencionada Carta, y de proceder a su difusión como consta en el registro fotográfico proporcionado, y considera que la elaboración de un segundo tiraje para actualizar la Carta para hacer referencia a la nueva Ley General de Víctimas escapa al contenido del acuerdo. Por lo anterior, la CIDH da por cumplido este punto. En consecuencia, considerando que el otro compromiso asumido por el Estado en relación a esta recomendación había sido cumplido con anterioridad, se declara cumplida en su totalidad la recomendación 6 del Informe 51/13.

1877. En relación a la recomendación 7, los peticionarios indicaron que Justicia para nuestras Hijas no ha sido consultada en relación a ninguna campaña de difusión sobre los derechos de las niñas y los niños, ni tiene conocimiento tampoco de que esta se hayan llevado a cabo. El Estado no proporcionó información sobre este punto. Por lo anterior, la CIDH no cuenta con suficientes elementos para valorar el cumplimiento de esta medida, e insta a las partes a trabajar conjuntamente en la elaboración de la mencionada campaña lo más pronto posible.

1878. En relación a la recomendación 8, el Estado informó que el 17 de octubre de 2014 celebró un Convenio de Cooperación con la Secretaría de Gobernación, dentro del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos, con el objetivo de transferir recursos federales para la elaboración de programas relacionados con este punto. Los peticionarios reiteraron que no tienen información sobre el cumplimiento de este compromiso. La CIDH toma nota del convenio de cooperación mencionado, y queda a la espera de información detallada del parte del Estado sobre el cumplimiento del compromiso de capacitación de funcionarios asumido en el acuerdo alcanzado en este caso.

1879. En relación a la recomendación 9, el Estado indicó que continúa a la espera de la propuesta de parte de la señora Ledezma, para el prólogo del libro "Justicia para Nuestras Hijas", sin que a la fecha la Dirección General de Normatividad haya recibido la información de manera que puedan proceder a su elaboración y distribución. El Estado no se refirió a la estrategia de sensibilización dirigida a los medios de comunicación. Los peticionarios indicaron que el prólogo para el libro fue escrito por la señora Ledezma y que se ha llegado un acuerdo para realizar el lanzamiento del libro en el marco del aniversario de la Asociación Justicia para Nuestras Hijas. Finalmente indicaron que no se ha credo la estrategia de sensibilización. En consecuencia, la CIDH considera en relación a la publicación del libro que el punto se encuentra en proceso de cumplimiento. En relación a la estrategia de sensibilización dirigida a medios de

comunicación, la CIDH hace un llamado al Estado a proporcionar información sobre este compromiso que permita valorar el avance en su cumplimiento.

1880. El 21 de marzo de 2015, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con el acompañamiento de la Comisión, dentro del marco de su 154 período de sesiones. En dicha reunión, las partes dialogaron sobre las medidas necesarias para cumplir totalmente con la recomendación No. 2 (vivienda) y sobre la recomendación 5 (investigación).

1881. El 30 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó a ambas partes información actualizada sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre del presente informe, las partes no habían presentado información adicional.

1882. El 23 de marzo de 2016, las peticionarias presentaron información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.

1883. El 21 de septiembre y el 11 de octubre de 2016, el Estado presentó la información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

1884. El 14 de noviembre de 2016, las peticionarias presentaron información sobre el cese de la representación de CEJIL de las víctimas en el presente caso.

1885. En relación a la recomendación 1, ambas partes coincidieron en la información aportada sobre la constitución de un Comité de Seguimiento a la Investigación y sobre la participación de equipo independiente de antropólogos forenses dentro de la investigación, como parte de los acuerdos alcanzados en el marco de una reunión celebrada el 8 de abril de 2015.

1886. Las peticionarias señalaron que, durante el último trimestre del año, la Fiscalía se ha enfocado en agotar las líneas de investigación menos consistentes, con el objetivo de centrarse en avanzar en las líneas de investigación que poseen mayores elementos probatorios. Como resultado se han descartado las líneas más débiles y se han concentrado esfuerzos en avanzar en la investigación sobre una sola hipótesis. En ese sentido, las peticionarias destacaron que la falta de recursos materiales ha impedido la realización de varias de las diligencias necesarias, siendo el principal obstáculo existente la falta de pago de los servicios del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF). Al respecto, las peticionarias informaron que el EMAF se trasladó a Chihuahua para realizar un primer análisis de la investigación del caso en la semana del 23 al 28 de noviembre de 2015. Durante esta visita se hizo una reunión final y luego de entregar un informe verbal sobre la situación, dicha institución se comprometió a presentar un informe escrito, una vez reciba el pago acordado. Sin embargo, a la fecha la fiscalía no ha entregado el pago para el informe; con la excusa de falta de presupuesto.

1887. Asimismo, las peticionarias indicaron que los informes mensuales por escrito y sobre las líneas de investigación, diligencias y acciones que se realizan en el caso están siendo entregados de forma periódica, aunque la información contenida es poco sustancial. Al respecto, reiteraron que el compromiso se encuentra en proceso de cumplimiento en tanto no se esclarezca el caso y se sancionen a los responsables.

1888. El Estado, por su parte, hizo referencia a las líneas de investigación sustentable en las cuales diversas diligencias han sido cumplidas, tales como un dictamen pericial en materia de poligrafía, la toma de los testimonios de varios servidores públicos y particulares que acudieron al lugar donde se localizó el cuerpo de Paloma Angélica, un dictamen pericial para analizar las condiciones del lugar y el momento en que el cuerpo fue depositado, informes periciales en psicología en virtud del cual se estudiaron los vínculos con otras víctimas. Asimismo indicó que, a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de la Gobernación, se han llevado a cabo diversas acciones dentro de la hipótesis relacionada con el lugar de hallazgo y los vínculos entre éste y otras víctimas. En virtud de ello, se confrontó a Alfredo Pacheco Escárcega, Jesús Manuel Juárez Palomino, Antonio Nieto Lozano, en relación con las circunstancias de hallazgo; y también se localizó a Teresa Flores y a Nancy Pacheco Flores. En torno a esta recomendación, el Estado mencionó que dentro del expediente de averiguación previa se lleva a cabo la práctica de diligencias

en forma ininterrumpida, informando de todas ellas a la señora Norma Ledezma Ortega, en su calidad de víctima y coadyuvante.

1889. La CIDH toma nota de la información proporcionada por las partes, y al respecto, observa que aún se requiere avanzar en las investigaciones para dar cumplimiento a la recomendación 1. Por lo anterior, CIDH considera que dicha recomendación se encuentra en proceso de cumplimiento. La CIDH valora la participación reconocida a la señora Ledezma y en este sentido, insta al Estado a continuar proporcionando informes escritos sobre la investigación a la señora Ledezma.

1890. En relación a la recomendación 2, en su escrito de 23 de marzo de 2016, las peticionarias informaron que no se ha podido avanzar en el cumplimiento del compromiso debido a que ninguna de las cuatro propuestas presentadas por parte del Estado, vía correo electrónico, cumplen los estándares de seguridad teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de la señora Ledezma en su condición de defensora de derechos humanos. El Estado no proporcionó información sobre este punto.

1891. La CIDH toma nota de la información proporcionada por las peticionarias, y valora los esfuerzos de las partes para llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones para cumplir totalmente con la recomendación 2 relativa a reparaciones. En particular, la CIDH observa, que el compromiso asumido por el Estado de entregar a la señora Ledezma una vivienda, incluía que su ubicación debía ser convenida entre el Gobierno y la víctima, por lo tanto la CIDH insta al Estado a que continúe desplegando esfuerzos para proponer viviendas que cumplan con lo consensuado con la víctima sobre la ubicación del inmueble que esta habitaría, y con las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. La CIDH continuará monitoreando este punto, y destaca que es el único que se encuentra pendiente para el cumplimiento total de la recomendación 2.

1892. En relación a la recomendación 3, las peticionarias reiteraron lo establecido en comunicación presentada en el año 2015. En ese sentido, indicaron que la Fiscalía Especializada creada no ha sido dotada con recursos materiales y económicos suficientes para su operación, lo cual dificulta el trabajo dentro de la Fiscalía. Al respecto, las peticionarias recalcaron que en fecha 14 de abril de 2015 remitieron a la SRE un documento con las propuestas de fortalecimiento institucional pero a la fecha, no cuentan con información sobre el seguimiento que se le ha dado a este compromiso y las medidas que se estarían implementando para lograr tal objetivo. Las peticionarias resaltaron que no tienen información concreta sobre la realización de capacitaciones, ni sobre la existencia de un programa integral de capacitación al personal dedicado a la atención de víctimas, así como tampoco cuentan con información sobre el funcionamiento del sistema CODIS.

1893. Las peticionarias aclararon que el Estado ha realizado algunas acciones mínimas para difundir los mecanismos aplicables en casos de desaparición a través de internet, lo cual consideran inadecuado ya que la mayoría de la población no cuenta con acceso a este tipo de tecnologías. Finalmente, las peticionarias reafirmaron que no existe aún protocolo para la investigación de las desapariciones de mujeres. Si bien, existen dos protocolos en operación *el Protocolo Alba* y la *Alerta Amber*, entre otros, ninguno cumple a cabalidad los requerimientos para un protocolo efectivo de búsqueda de mujeres desaparecidas. En este sentido, establecieron nuevamente que la organización “Justicia para Nuestras Hijas” siga participado en la construcción de estos protocolos. El Estado no proporcionó información sobre este punto.

1894. La CIDH toma nota de la información proporcionada por las peticionarias y al respecto reitera que el compromiso relacionado con la creación de la Fiscalía fue declarado cumplido en el Informe de Fondo No. 51/13<sup>157</sup>. La CIDH observa, por otro lado, que no cuenta con suficiente información por parte del Estado sobre el diseño del programa de capacitación, ni sobre la campaña de difusión CODIS, e insta nuevamente al Estado a proporcionar a esta Comisión y a los peticionarios, información detallada sobre el cumplimiento de estos puntos. Finalmente, en relación a los protocolos, la CIDH no cuenta con suficiente información sobre la etapa de revisión final de los protocolos, por lo cual insta a las partes a presentar

<sup>157</sup> CIDH, Informe No. 51/13, Caso 12.551 Paloma Angeliza Escobar Ledezma y Otros, Fondo, México. Pág. 91.

información más detallada para consideración. Al respecto, la CIDH llama a las partes a dialogar sobre los puntos pendientes, de manera que se alcance de manera conjunta el cumplimiento de este compromiso en un futuro próximo.

1895. En relación a la recomendación 4, las peticionarias destacaron que aún no se ha incorporado la materia de género y derechos humanos en la currícula de educación primaria, secundaria, media y superior. Asimismo, las peticionarias agregaron a pesar del compromiso del Estado de llevar a cabo reuniones específicas sobre este punto, no tienen información sobre el seguimiento a este compromiso. El Estado no proporcionó información sobre este punto.

1896. Por lo anterior, la CIDH considera que no tiene información suficiente que le permita valorar el cumplimiento de este compromiso, e insta nuevamente al Estado a reportar sobre la incorporación del componente de género en las mallas curriculares lo antes posible.

1897. En relación a la recomendación 5, las peticionarias señalaron con preocupación no tener información sobre las investigaciones respecto a la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la investigación, debido a que presumen la prescripción de muchas de estas responsabilidades administrativas. El Estado no proporcionó información sobre este punto.

1898. La CIDH observa con preocupación la información presentada por las peticionarias y al respecto insta al Estado a presentar a las peticionarias y a la CIDH, información actualizada sobre los avances en las investigaciones señaladas.

1899. En relación a la recomendación 6, las peticionarias reiteraron que aun cuando la Carta de los Derechos de las Víctimas del Delito fue elaborada, aún no ha sido difundida. Sobre este punto, la CIDH reitera que el compromiso relacionado con la Carta de los Derechos de las Víctimas del Delito, fue declarado cumplido en el Informe Anual 2015. En dicha oportunidad, la CIDH consideró en base a documentación presentada, que el Estado cumplió con el compromiso de elaborar la mencionada Carta, y de proceder a su difusión. En consecuencia, considerando que el otro compromiso asumido por el Estado en relación a esta recomendación había sido cumplido con anterioridad, se reafirma el cumplimiento en su totalidad la recomendación 6 del Informe No. 51/13.

1900. En relación a la recomendación 7, las peticionarias reiteraron que “Justicia para nuestras Hijas” no ha sido consultada en relación a ninguna campaña de difusión destinada al público en general sobre el deber de respetar y garantizar los derechos humanos de las niñas y niños y tampoco tiene conocimiento de si estas campañas se han llevado a cabo. El Estado no proporcionó información sobre este punto.

1901. Por lo anterior, la CIDH reitera que no cuenta con suficientes elementos para valorar el cumplimiento de esta medida, e insta nuevamente a las partes a trabajar conjuntamente en la elaboración de la mencionada campaña lo más pronto posible.

1902. En relación a la recomendación 8, sobre los programas de formación para funcionarios estatales, las peticionarias reiteraron que no tienen información sobre el cumplimiento de este compromiso. De acuerdo, a la información suministrada por el Estado en años anteriores, la CIDH considera que se encuentra en proceso de cumplimiento, y hace un llamado al Estado a proporcionar información actualizada sobre este compromiso que permita valorar el avance en su cumplimiento.

1903. En relación a la recomendación 9, las peticionarias presentaron información sobre el programa creado en conjunto con la CONAVIM con el objeto de realizar la estrategia de sensibilización dirigida a medios de comunicación. Al respecto, destacaron que existe un acuerdo tanto en la estrategia de medios como en las fechas y los plazos en los que se desarrollaría la propuesta. En ese sentido, las peticionarias indicaron que durante 2016 se iba a iniciar una campaña piloto en el Estado de Chihuahua que se replicaría en el resto del país. En cuanto a la publicación del libro, las peticionarias informaron que, a la fecha, la señora Ledezma se encuentra revisando la misma.

1904. El 2 de octubre de 2017, los peticionarios informaron con respecto a la recomendación 1) que el 26 de octubre de 2017 sostuvieron una reunión de trabajo en la Unidad de la Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, en la ciudad de Chihuahua. Indicaron que en dicha reunión se encontraba presente la Coordinadora Regional de la Fiscalía; la Coordinadora de la Unidad de Homicidios Dolosos por Razones de Género; el Director de la Policía Ministerial de Investigación de la FEM y el Coordinador de la Policía Ministerial de la Unidad de Homicidios de Mujeres por Razones de Género. Los peticionarios manifestaron que en la reunión se revisaron los avances en la investigación por asesinato de Paloma Angélica Escobar Ledezma, que según indicaron, continúa su curso. Los peticionarios resaltaron que desde el año 2015 se enviaron las muestras para obtener el perfil genético de Paloma Angélica Escobar Ledezma a un laboratorio en Estados Unidos de América, consistentes en elementos filamentosos, pero no ha sido posible concluir dicho proceso porque las autoridades mexicanas han indicado que no cuentan con suficientes recursos económicos para cubrir los costos de laboratorio.

1905. En relación a la recomendación 2), los peticionarios indicaron que hasta la fecha no ha habido avances en el cumplimiento de la medida relacionada con la entrega de la vivienda, toda vez que el Estado alega “no tener presupuesto” para implementar la medida. En cuanto a las recomendaciones 3), 4) y 7), los peticionarios informaron que se realizó un Convenio con el Gobernador de Chihuahua para la construcción de un Programa preventivo-educativo, sin embargo posteriormente el Estado indicó no tener recursos suficientes para costear la implementación del mismo.

1906. En referencia a la recomendación 5), los peticionarios reiteraron la información presentada en informes anteriores señalando que no ha habido avances en la investigación de agentes estatales. En cuanto a la recomendación 6), indicaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua – CEAVE – ha realizado diversas alianzas con Organizaciones de la Sociedad Civil, sin embargo, el Estado no ha tomado en cuenta a la Organización Justicia para Nuestras Hijas, A.C, a pesar de que la peticionaria y madre de la víctima ha solicitado en diversas ocasiones una reunión de trabajo con CEAVE, para lograr el apoyo y fortalecimiento de la presente medida. Finalmente, en relación a los puntos 8) y 9), los peticionarios indicaron que continúan sin tener información que pueda demostrar el cumplimiento de estos puntos. Por lo anterior, los peticionarios indicaron que aún se encuentran pendientes de cumplimiento los puntos 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) y 9) contenidos en el acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en este caso.

1907. La Comisión observa que no han existido avances recientes en la implementación del acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones, e insta al Estado a desplegar mayores esfuerzos para cumplir con los compromisos asumidos en el acuerdo de cumplimiento.

**Caso 12.769, Informe No. 65/14, Irineo Martinez Torres y Candelario Martinez Damián (México)**

1908. El 25 de julio de 2014, la CIDH emitió el Informe No. 65/14 a través del cual aprobó el acuerdo de solución amistosa alcanzado en beneficio de Irineo Martinez Torres y Candelario Martinez Damián, miembros del pueblo indígena Purépecha, originarios de la localidad de Ahuirán, Estado de Michoacán, quienes habrían sido víctimas de violaciones a derechos amparados en la Convención Americana durante su arresto y durante el procedimiento criminal seguido en su contra. Las presuntas víctimas habrían sido objeto de agresiones físicas por policías judiciales al momento de su detención; y durante el proceso penal seguido en su contra, el defensor de oficio no habría realizado una defensa eficiente. Tampoco se les habría designado un intérprete, a pesar de su idioma materno es el Purépecha (Tarasco), y no tenían un entendimiento o manejo fluido del idioma español.

1909. El Estado se comprometió a avanzar en materia de reparaciones individuales y medidas de no repetición. En el informe No. 65/14 la CIDH reconoció el cumplimiento sustancial de las medidas pactadas, e indicó que continuaría supervisando el cumplimiento de los compromisos programáticos. De acuerdo a la información consignada en el informe de aprobación del acuerdo, la CIDH considera que se encuentran cumplidos en su totalidad los puntos 3, 4, 5 y 6 de la propuesta del Estado, así como los puntos a, b, c y d de

los términos de aceptación de los peticionarios. Asimismo, la CIDH reitera que se encuentran cumplidos parcialmente los puntos 1 y 2 del acuerdo relacionados con medidas programáticas y/o asistenciales.

1910. A continuación se detalla el estado que para febrero de 2016 tenía cada uno de los compromisos asumidos para el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, seguido de un resumen de la información proporcionada por las partes y el respectivo análisis de la Comisión sobre el cumplimiento de las mismas.

<b>ACUERDOS Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO</b>	
1) Tomando en cuenta que el 95.5% de la comunidad no está inscrito en ninguna institución de salud, el Estado se compromete, en el presente año a: a. Difundir información acerca de los requisitos necesarios para ingresar al sistema de salud mexicano. b. Instalar una mesa de salud encargada de asesorar a todas las personas de la comunidad que se acerquen para garantizar su derecho a la salud y, una vez cumplidos los requisitos, proceder a su registro. (SS, Gobierno del Estado).	<b>Parcial</b>
2) Del diagnóstico de la comunidad se desprende que existe un importante segmento de la población en edad de trabajar que se ve afectado por baja demanda de mano de obra. El Estado mexicano insta a que la comunidad purépecha de Ahuirán se organice mediante sus autoridades tradicionales y/o familiares para realizar un proyecto que mejore las condiciones familiares o comunitarias de la localidad y provea de un apoyo económico temporal a cuantas personas requiera el proyecto. Este programa se ofrece a hombres y mujeres de 16 años o más que deseen ejecutar proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias. En ese sentido, el Estado otorgará, a petición de parte, asesoría para la definición del proyecto y podrá otorgar jornales equivalentes al 99% del salario mínimo para la región. [...]	<b>Parcial</b>
3) El Estado, mediante la Procuraduría General de la Republica, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la Secretaria de Relaciones Exteriores (SER) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se comprometen a diseñar una campaña informativa mediante diversos medios, que incluyan el radio y medios impresos para que la comunidad purépecha conozca sus derechos al ser detenidos y en la cual inste a la comunidad a hacerlos valer (PGR, INALI, CDI, SER).	<b>Total</b>
4) El Estado realizará un diplomado para la formación de intérpretes en lenguas indígenas del Estado de Michoacán en el ámbito de procuración y administración de justicia (en conjunto con la Universidad de Michoacán, PGR o PGJ y Poder Judicial del Estado o de la Federación), a fin de que los acreditados del diplomado se incorporen en el padrón de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, comprometiéndose el gobierno federal a impulsar su utilización (INALI).	<b>Total</b>
5) Las entrevistas in situ con el peticionario y las familias de los peticionarios indican que se dedican tradicionalmente a la artesanía. No obstante, debido a su estado socioeconómico, seguido se ven obligados a diversificar sus fuentes de ingresos. El Estado mexicano, reconociendo su deseo de dedicarse exclusivamente a la artesanía y tomando en cuenta que es la falta de insumos y herramientas lo que les impide que así lo hagan, ofrece rehabilitar los talleres artesanales de las dos familias por medio del Programa de Apoyo a la Productividad Indígena y el Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas por montos que varían de acuerdo con el proyecto que sometan los peticionarios (DCI, Peticionarios y Municipio de Paracho) y de acuerdo con lo establecido en el inciso siguiente.	<b>Total</b>
6) Dando cumplimiento a los acuerdos del día 26 de marzo de 2011, sostenidos durante el 141 periodo de sesiones de la CIDH, el Estado ofrece a los peticionarios otorgar por concepto de reparación del daño la cantidad de 500,000 pesos (SEGOB).	<b>Total</b>
<b>TERMINOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO</b>	
a) exhibición y entrega de la suma de \$125,000.00 a cada uno de los representados, más tardar el día 15 de agosto de 2011.	<b>Total</b>

b) El Estado deberá iniciar los trámites para el inicio de las obras para la rehabilitación de los talleres artesanales en un término de 15 días a partir de la aceptación de la propuesta del Estado y mantendrá informado al representante de los peticionarios del avance en los mismos con la finalidad de que las obras se culminen con la mayor celeridad posible.	<b>Total</b>
c) De igual manera, el Estado deberá hacer un pronunciamiento público en la comunidad de Ahuirán acerca de la situación de los derechos humanos al momento de la detención y proceso judicial de los señores Irineo Martínez Torres y Candelario Martínez Damián.	<b>Total</b>
d) El Estado deberá iniciar la implementación de los programas restantes dentro de un término de treinta días a partir de la aceptación de la propuesta.	<b>Total</b>

1911. La CIDH observó en el informe de aprobación del acuerdo de solución amistosa que el 31 de mayo de 2012 y el 2 de noviembre de 2012, el Estado suministró información sobre la ampliación de la cobertura de servicios de salud. En ese sentido, el Estado informó que el 26 de marzo y el 3 de abril de 2012, personal de la Secretaría de Salud de Michoacán llevó a cabo brigadas de incorporación que tuvieron como resultado el registro de 44 familias al Sistema de Salud, así como el inicio de 53 trámites de afiliación al mismo. Adicionalmente, el Estado informó el 28 de agosto de 2015 sobre el alcance de la cobertura del sistema Seguro Popular. El Estado solicitó la declaración de cumplimiento total y el cierre de la supervisión de la implementación del acuerdo de solución amistosa.

1912. La CIDH también observó en cuanto al proyecto de empleo temporal, que el Estado otorgó asesoría a las autoridades municipales de Paracho, en una reunión de alto nivel realizada el 2 de mayo de 2012. El Estado y representantes de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) reiteraron su disponibilidad de continuar brindando la asesoría para el perfeccionamiento de un eventual proyecto. Según la información proporcionada por el Estado el 28 de agosto de 2015, luego de la reunión de asesoría, las autoridades municipales de Paracho y las autoridades tradicionales manifestaron que no era necesaria la asesoría, y expresaron su intención de someter a consideración de la SEDESOL un paquete de tres programas de empleo. Sin embargo, el 21 de mayo de 2012, la SEDESOL habría informado que debido al monto de los proyectos propuestos, no existía la posibilidad presupuestal para atenderlos, pero reiteró la disposición de brindar la asesoría necesaria en la definición y estructuración de otros proyectos a presentarse en el marco del Programa de Empleo Temporal.

1913. El 14 de diciembre de 2015, la CIDH trasladó la información que el Estado presentó sobre el cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo a la parte peticionaria para sus observaciones. El peticionario no presentó observaciones.

1914. El 20 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa.

1915. El 23 de diciembre de 2016, el Estado reiteró la información presentada en el año 2015, y agregó en relación al punto 1 del acuerdo que se elaboró y publicó el Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2018, que traza los objetivos de las políticas públicas y rige la programación y cálculos presupuestales correspondientes a la Administración pública Federal. Asimismo, el Estado indicó que dentro de la Meta Nacional II, México Incluyente, se incorporó el *objetivo 2.3, para asegurar el acceso a los servicios de salud*, con un enfoque transversal con la estrategia 2.3.1 *Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal* y la estrategia 2.3.4 *Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud*, dichas estrategias contienen líneas de acción que incluyen avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población. El Estado indicó que en la actualidad la población de Ahuirán cuenta con un centro de salud, y que existen módulos de afiliación de manera permanente para la incorporación al Programa de Protección Social en Salud de la población.

1916. En relación con el punto 2, el Estado reiteró la información aportada en el 2015, y agregó que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018, se incluyó la meta acción IV, *México Próspero*, en la cual se incorporó el objeto 4.3. *Promover el empleo de calidad*; y que específicamente con la estrategia 4.3.2 *Promover un trabajo digno y decente*, se está contribuyendo a eliminar la desigualdad y discriminación en el mercado

laboral. Finalmente, el Estado reiteró la solicitud de declaratoria de cumplimiento total y cese de la supervisión de la implementación del acuerdo de solución amistosa.

1917. El peticionario no presentó información actualizada sobre el cumplimiento, ni observaciones a la respuesta del Estado.

1918. La CIDH toma nota de la información presentada por el Estado en los años 2015 y 2016, y valora las acciones desplegadas por el Estado mexicano para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los puntos 1 y 2 del acuerdo de solución amistosa el tema de salud para la comunidad. Frente a lo anterior, y dada la ausencia de observaciones de la parte peticionaria, la CIDH declara el cumplimiento total del punto 1 del acuerdo de solución amistosa. En relación al punto 2, sobre trabajo, la CIDH no cuenta con suficiente información sobre las inversiones realizadas por el Estado con posterioridad al año 2012, para impulsar los programas y proyectos de empleo para la comunidad, por lo que quedaría a la espera de información adicional actualizada sobre el particular.

1919. El 27 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa. A la fecha de cierre de este informe, ninguna de las partes ha presentado información.

### **Caso 12.813, Informe No. 81/15, Blanca Olivia Contreras Vital y Otros (México)**

1920. En su Informe No. 81/15 de 28 de octubre de 2015, la CIDH aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito entre las partes el 5 de octubre de 2012, para la reparación de violaciones al debido proceso en contra de Blanca Olivia Contreras Vital y Roberto Clemente Álvarez Alvarado, quienes no contaron con una defensa penal adecuada, y en consecuencia, se les impuso sentencias condenatorias arbitrarias y contrarias a la Convención Americana. Las víctimas de este caso se encontraban privadas de la libertad al momento de presentación de la petición, y habrían recuperado con posterioridad su libertad por cumplimiento total de sus condenas. En ese sentido, el objeto de la petición y de la negociación del acuerdo de solución amistosa era obtener una compensación por los perjuicios ocasionados.

1921. En el acuerdo de solución amistosa, el Estado mexicano se comprometió a adoptar varias medidas de satisfacción, rehabilitación y compensación. En su informe de homologación, la CIDH concluyó que el Estado cumplió con los compromisos relacionados con la indemnización compensatoria (VII.1); tratamiento psicoterapéutico (VII.2.1.2); beca educativa (VII.2.1.3) y capacitación para el autoempleo (VII.2.1.4 y VII.2.2.2) por lo cual los declaró cumplidos en su totalidad.

1922. La CIDH consideró que no contaba con suficientes elementos para valorar el cumplimiento de los compromisos VII.2.1.1 y VII.2.2.1. referidos a apoyo para vivienda, y decidió continuar su seguimiento. En ese sentido, el Estado se comprometió a lo siguiente:

## **2. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición**

### **VII.2.1 Para la señora Blanca Olivia Contreras Vital**

#### **VII.2.1.1 Apoyo para vivienda**

ÚNICO.- La Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia realizarán las gestiones necesarias para la inscripción de la señora Blanca Olivia Contreras Vital en el programa Tu Casa del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, ante la Delegación Zacatecas de la Secretaría de Desarrollo Social. Este programa otorga subsidios a los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda para que, adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas.

## VII.2.2 Para el señor Roberto Clemente Álvarez Alvarado

### VII.2.2.1 Apoyo para vivienda

**ÚNICO.**- La Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia realizarán las gestiones necesarias ante la Delegación Aguascalientes de la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de inscribir al señor Roberto Clemente Álvarez Alvarado en el programa *Tu Casa* del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Este programa otorga subsidios a los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda para que adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas.

1923. En su Informe de Solución Amistosa No. 81/15, la CIDH declaró cumplidos en su totalidad los puntos (VII.1); (VII.2.1.2); (VII.2.1.3) (VII.2.1.4 y VII.2.2.2) del acuerdo suscrito por las partes el 5 de octubre de 2012. Asimismo, decidió continuar con la supervisión de los compromisos VII.2.1.1. y VII.2.2.1 pendientes de cumplimiento por parte del Estado de México<sup>158</sup>.

1924. El 10 de marzo de 2016, la señora Blanca Olivia Contreras, informó que el Estado de Zacatecas no se ha puesto en contacto con ella para dar cumplimiento a la medida de apoyo para vivienda. Destacó que un funcionario del gobierno le solicitó 50.000 pesos para que le asignaran una vivienda. Asimismo, indicó que los funcionarios del Estado le comunicaron que no cuentan con viviendas para otorgarle, lo cual considera que es falso y que constituye una discriminación. Para finalizar, la peticionaria indicó que considera que ella no debe entrar en un sistema de sorteo, debido a que su derecho a la vivienda proviene de un compromiso asumido por el Estado. Dicha información fue trasladada al Estado mexicano para que presentara sus observaciones.

1925. El 20 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las cláusulas pendientes del acuerdo de solución amistosa. Las partes no presentaron información actualizada en dicha oportunidad.

1926. El 27 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento. El 27 de septiembre de 2017, el peticionario indicó que perdió contacto con la víctima Blanca Olivia Vidal y resaltaron que en la última reunión que sostuvieron con la víctima, la misma manifestó la falta de respuesta del Estado en referencia al compromiso pendiente de cumplimiento.

1927. A la fecha de cierre del presente informe, el Estado no ha presentado información actualizada.

1928. La Comisión lamenta la falta de avances en la implementación de la medida de vivienda, e insta al Estado a articular las acciones con las autoridades estatales, en particular con el Gobierno de Zacatecas, para la implementación de la medida sin costo para la víctima y de manera preferencial según se deriva del espíritu del acuerdo de solución amistosa.

1929. Por lo anterior, la CIDH considera que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido, a nivel sustancial, e insta al Estado a continuar avanzando en la implementación de las cláusulas VII.2.1.1. y VII.2.2.1.

### **Petición 1171-09, Informe No. 15/16, Ananías Laparra Martínez y Familiares, (México).**

1930. El 14 de abril de 2016, la CIDH aprobó el Informe de Solución Amistosa No. 15/16 sobre el caso de Ananías Laparra Martínez y Familiares. El caso se refiere a los hechos ocurridos el 14 de octubre de 1999 en la ciudad Tapachula, Chiapas; Estados Unidos de México, en perjuicio del señor Ananías Laparra,

<sup>158</sup> CIDH, Informe No. 81/15, Caso 12.813. Solución Amistosa. Blanca Olivia Contreras Vital y otros. México. 28 de octubre de 2015.

quien fue detenido de manera ilegal y arbitraria, y fue posteriormente condenado, con base en una confesión obtenida bajo tortura por agentes de la Policía Judicial del Estado de Chiapas. Asimismo, los dos hijos del señor Ananías Laparra, que en ese momento eran menores de edad, - José Ananías de 14 años y Rocío Fulvia Laparra Godínez de 16 años - así como su esposa, Rosa Godínez, fueron torturados y forzados a firmar declaraciones que inculpaban al señor Ananías Laparra como culpable en el homicidio del joven Elvis Díaz Martínez, originario de la colonia Unión Roja, municipio de Cacahoatán, Chiapas.

1931. El 5 de septiembre de 2014, las partes suscribieron un acuerdo de Solución Amistosa en la cual el Estado se comprometió a implementar medidas de reparación a favor del Señor Ananías Laparra y su familia por los daños ocasionados en su contra, y en el cual se establecieron las siguientes cláusulas, cuyo nivel de cumplimiento, a la fecha de aprobación del acuerdo por parte de la CIDH, se enuncia a continuación:

<b>VIII.1. RESTITUCIÓN</b>	
[...] tomar todas las medidas administrativas y de cualquier otra índole necesarias para lograr su inocencia. [...]	<b>Cumplido totalmente</b>
<b>VIII.2 REPARACIÓN POR DAÑO INMATERIAL Y MEDIDAS DE SATISFACCIÓN</b>	
<b>VIII.2.1. COMPENSACIÓN MONETARIA POR DAÑO INMATERIAL</b>	<b>Cumplido totalmente</b>
<b>VIII.2.2. SEGURO DE ATENCIÓN MÉDICA</b>	<b>Cumplido Parcialmente</b>
El Estado Mexicano se compromete a realizar las gestiones necesarias para otorgar a las víctimas atención integral de salud, de forma preferencial gratuita. Asimismo, tendrán acceso a los servicios y bienes farmacéuticos establecidos en la cobertura médica del Seguro Popular. Si las víctimas cambian de domicilio a otra Entidad Federativa de la República mexicana, la atención médica se brindará en su nuevo lugar de residencia a través del Seguro Popular o un programa afín que otorgue el mismo nivel de atención establecido en este acuerdo. En caso de que el servicio médico que requieran se brinde en instalaciones fuera de su lugar de residencia, tendrán derecho a que los gastos de traslado y viáticos respectivos los erogue el Estado mexicano. Esta obligación se cumplirá en el plazo de 6 meses desde la firma de este acuerdo.	<b>Cumplido Parcialmente</b>
<b>VIII.2.3. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO</b>	<b>Cumplido Parcialmente</b>
Una vez firmado el acuerdo la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores realizarán las gestiones necesarias, para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brinde la atención psicológica a las víctimas, Ananías Laparra Martínez, Rosa Godínez Chávez, Rocío Fulvia Laparra Godínez y José Ananías Laparra Godínez, por el tiempo que sea necesario, en las instalaciones del Centro de Atención a Víctimas y Ofendidos más cercana a su domicilio, o en otras instalaciones del mismo centro, a elección de las víctimas y por el tiempo que ellas lo requieran. El tratamiento psicológico y médico debe tener en cuenta que se trata de víctimas de tortura y de una persona que ha estado privado de su libertad por 12 años, debe realizarse de acuerdo a los estándares internacionales y los cuidados establecidos en el Protocolo de Estambul.	<b>Cumplido Parcialmente</b>
<b>VIII.2.4. TRATAMIENTO CONTRA ADICCIONES Y REHABILITACIÓN</b>	<b>Cumplido Parcialmente</b>
El Estado Mexicano se compromete a realizar las gestiones necesarias y razonables, en coordinación con sus familiares, teniendo especial consideración de la vulnerabilidad de José Ananías Laparra Godínez, para poder identificar sus necesidades y, de acuerdo a las mismas, con el consentimiento de José Ananías Laparra Godínez cuando este lo solicite, otorgar tratamiento contra las adicciones que sufra, a través de las instancias de salud correspondientes. Estas gestiones deberán iniciarse en el plazo de 6 meses desde la firma del acuerdo y la obligación podrá darse por cumplida cuando el Estado mexicano realice las gestiones necesarias y razonables para que José Ananías Laparra Godínez tenga acceso al tratamiento respectivo independientemente de que decida tomarlo o no.	<b>Cumplido Parcialmente</b>
<b>VIII.2.5. BECAS EDUCATIVAS</b>	<b>Cumplido Parcialmente</b>
El Estado Mexicano acuerda otorgar becas educativas a Rocío y José Ananías, ambos de apellidos Laparra Godínez, para completar los estudios necesarios preparatorios y correspondientes a alguna carrera universitaria o técnica, a su elección. Debido a que Rocío no podría cursar una carrera universitaria de derecho fuera del Municipio de Tapachula Estado de Chiapas, se realizarán las gestiones pertinentes para lograr cubrir el costo de los estudios universitarios de la carrera de derecho u otra elección en la Ciudad de Tapachula Estado de Chiapas. Trasladarse a otro lugar para estudiar le imposibilitaría lograrlo. Toda vez que no existe facultad pública de derecho en la Ciudad de Tapachula Estado de Chiapas, carrera que inicialmente sería de preferencia de Rocío Fulvia Laparra Godínez. En caso que la víctima lo solicite, el Estado de Chiapas realizará las gestiones pertinentes para acordar con las facultades privadas tengan convenios con gobierno de derecho u	<b>Cumplido Parcialmente</b>

<p>otra de su elección, a estudiantes, de forma tal que se le otorgue una beca a Rocío Fulvia Laparra Godínez para cubrir el monto faltante y así lograr hacer efectiva la beca para que concluya sus estudios.</p> <p>Luego que se realice el dictamen médico psicológico de José Ananías Laparra se valorará la pertinencia de esta medida y, en caso que su salud no lo permita, se sustituirá por otra más adecuada (como un arte u oficio), en coordinación con las víctimas, para que le permita vivir con dignidad fuera de las calles.</p> <p>El pago de las becas educativas será gestionado por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de conformidad con las Reglas de Operación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos, previo cumplimiento de los requisitos que correspondan por parte de las víctimas, lo que deberá realizarse dentro de los 6 meses siguientes.</p>	<p><b>Cumplido Parcialmente</b></p>
<p><b>VIII.2.6. ACTO PÚBLICO DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD</b></p> <p>Tomando como referencia las buenas prácticas de casos en que se ha establecido la responsabilidad internacional del Estado Mexicano, previo acuerdo libre e informado con las víctimas y los peticionarios, se realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpa pública, efectuado por altas autoridades nacionales y estatales. En el acto participarán representantes del Poder Ejecutivo Estatal, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El acto deberá celebrarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de firma de este acuerdo. En dicho acto se dará participación a las víctimas y a quienes ellos designen y se hará referencia, a la inocencia del señor Ananías Laparra Martínez, la detención ilegal, tortura, la falta de protección a la niñez y violaciones a la integridad personal y al debido proceso sufridos por todas las víctimas. Se difundirá en distintos medios de comunicación con alcance local y nacional, y se publicará en una página electrónica del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Chiapas.</p>	<p><b>Cumplido totalmente</b></p>
<p><b>VIII.2.7. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE LA CIDH</b></p> <p>El Estado Mexicano se compromete a la publicación en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Estado de Chiapas y en un diario de amplia circulación nacional y local, por una sola vez, el resumen de los hechos del caso reconocidos por el Estado Mexicano y las violaciones a los derechos humanos reconocidas y establecidas en el Informe de la CIDH, previamente acordado con las víctimas y sus representantes.</p> <p>Asimismo, el Estado Mexicano se compromete a publicar por espacio de un año, a través de las páginas de algunas de las siguientes autoridades, el Gobierno del Estado de Chiapas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, el Consejo de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Relaciones Exteriores, una versión pública, previo acuerdo con las víctimas, del Informe de la CIDH. Lo anterior, en el entendido que la publicación deberá realizarse en la página web de por menos una autoridad de las señaladas del nivel federal y dos de las autoridades señaladas del nivel estatal. Esta obligación deberá realizarse en el plazo de 6 meses desde la publicación del informe por la CIDH.</p>	<p><b>Pendiente de Cumplimiento</b></p>
<p><b>VIII.3. REPARACIÓN POR DAÑO MATERIAL</b></p>	
<p><b>VIII.3.1. PÉRDIDA DE INGRESOS PASADOS Y FUTUROS</b></p>	<p><b>Cumplido totalmente</b></p>
<p><b>VIII.3.2. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL</b></p>	
<p><b>VIII.3.3. GASTOS Y COSTAS</b></p>	
<p><b>IX. GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN</b></p>	
<p><b>IX.1. INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS VIOLATORIOS AL DEBIDO PROCESO EN PERJUICIO DEL SEÑOR ANANÍAS LAPARRA MARTÍNEZ Y FAMILIA</b></p> <p><b>Sobre el deber del Estado Mexicano de investigar y sancionar.-</b> El Estado Mexicano, en un plazo razonable, a través de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, se compromete a realizar y proseguir de modo diligente todas las investigaciones y actuaciones necesarias, para deslindar responsabilidad y en su caso, sancionar la comisión del delito de tortura. Este deber incluye las acciones y omisiones que se realizaron en perjuicio de las víctimas y que generaron la responsabilidad internacional del Estado Mexicano. En cumplimiento de esta obligación, el Estado Mexicano debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad, tomando en consideración los hechos del presente acuerdo y dando acceso a una participación efectiva de las víctimas.</p> <p><b>Sobre la obligación de investigar oficiosamente.-</b> El Estado Mexicano reconoce que las investigaciones se deben llevar a cabo de acuerdo con todas las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular con su artículo 1, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.</p> <p><b>Sobre el recurso de reconocimiento de inocencia.-</b> El Estado Mexicano, de conformidad con lo establecido en el apartado VIII.1 Restitución, realizará las gestiones pertinentes para dar</p>	<p><b>En proceso de implementación</b></p>

<p>cumplimiento a esta parte del acuerdo.</p>	
<p><b>IX.2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA DEFENSORÍA DE OFICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS</b></p> <p>El Estado Mexicano, a través de los expertos seleccionados por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, en acuerdo con los representantes de las víctimas y el Gobierno del Estado de Chiapas, se compromete a otorgar capacitación a los operadores de justicia bajo los estándares internacionales más altos, para que puedan identificar, reaccionar, corregir, proteger, prevenir, denunciar y sancionar, el uso de técnicas de tortura y coacción. Adicionalmente, la capacitación abarcará los estándares internacionales más estrictos sobre el cumplimiento del debido proceso legal, tendiente a evitar toda violación de derechos por parte de las autoridades que intervienen en la privación de la libertad de una persona y en la procuración y la administración de justicia. Se tendrá particular consideración a los requisitos para realizar una detención, la necesidad de defensa adecuada, la necesidad de corregir la aplicación inadecuada del principio de inmediatez procesal, la necesidad de impulsar de oficio investigaciones sobre denuncias de torturas realizadas por personas que enfrentan una imputación penal, la aplicación del Protocolo de Estambul, el alcance del principio de presunción de inocencia, la aplicación del concepto de prueba ilícita y su invalidez, así como la invalidez de declaraciones obtenidas bajo coacción o tortura, de conformidad a decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y de la jurisprudencia internacional. También se tendrá en cuenta las especiales protecciones establecidas para los niños y niñas en materia penal. Dentro de los operadores de justicia que tomen parte en el programa señalado en el párrafo anterior, deberán encontrarse miembros del Poder Judicial, de la Procuraduría General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Defensoría de Oficio del Estado de Chiapas y de la Comisión de Derechos Humanos.</p> <p>Estas capacitaciones deberán realizarse en el plazo de un año desde la firma de este acuerdo.</p>	<p><b>Cumplido totalmente</b></p>
<p><b>IX.3. IMPULSO DEL DEBATE LEGISLATIVO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA EN CASO DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS.</b></p> <p>El Estado Mexicano, a través del Gobierno del Estado de Chiapas, con la asesoría de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, se compromete a impulsar el debate legislativo relativo a las causales de procedencia del recurso de reconocimiento de inocencia en casos de violaciones a los derechos humanos.</p> <p>Así mismo, el Estado Mexicano, a través del Gobierno del Estado de Chiapas se compromete a agilizar el proceso de consolidación del Consejo Estatal de Derechos Humanos para que atienda las quejas de fondo y emita recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos, y a presentar una iniciativa a la legislatura local, en la que se incluya la posibilidad de que las recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos puedan servir de base para solicitar el reconocimiento de inocencia.</p> <p>Estas iniciativas deberán presentarse en el plazo de un año desde la firma de este acuerdo.</p>	<p><b>Pendiente de Cumplimiento</b></p>

1932. En su Informe de Solución Amistosa No. 15/16, la CIDH declaró cumplidos en su totalidad las cláusulas VIII.1, VIII.2.6, VIII.2.1, VIII. 3 (1, 2 y 3) y IX.2. Asimismo, la CIDH decidió continuar con la supervisión de los compromisos pendientes de cumplimiento por parte del Estado de México. Con tal finalidad recordó a las partes su compromiso de informar periódicamente a la CIDH sobre el cumplimiento de las cláusulas VIII.2.2, VIII.2.3, VIII. 2.4, VIII.2.5, VIII.2.7, IX.1 y IX.3<sup>159</sup>.

1933. El Informe de Solución Amistosa da cuenta que el 5 de septiembre de 2014, se llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad e inocencia, en el cual el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas, ofreció una disculpa pública, y reconoció la responsabilidad directa en los hechos sucedidos, y reconoció de manera pública la inocencia de Ananías Laparra.

1934. En cuanto al reconocimiento judicial de inocencia del señor Ananías Laparra Martínez, el 27 de enero de 2015, el Pleno del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas, en sesión extraordinaria, mediante una resolución aprobó por mayoría de votos la solicitud de reconocimiento de inocencia formulada por Ananías Laparra, declarándola fundada, según lo acordado en el acuerdo de solución amistosa, respecto de la sentencia condenatoria pronunciada el 31 de enero de 2002,

<sup>159</sup> CIDH, Informe No. 15/16, Petición 1171-09. Solución Amistosa. Ananías Laparra Martínez y familiares. México. 14 de abril de 2016.

dictada por el Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial del Soconusco, instruida en contra del peticionario y otras personas, por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Elvis Díaz Martínez. Asimismo, el Estado proporcionó un ejemplar del Periódico Oficial de la Secretaría General de Gobierno de Chiapas, de fecha 11 de febrero de 2015, en el cual se publicaron los puntos resolutive de la resolución del reconocimiento de inocencia en favor de Ananías Laparra Martínez.

1935. En relación a la eliminación de los antecedentes penales, el 14 de junio de 2015 fue solicitado al Director de Desarrollo de Infraestructura Tecnológica del Consejo de Judicatura Federal, la modificación en la información contenida en el Sistema CARTAPEN, para eliminar los datos personales y procesales y antecedentes penales del señor Ananías Laparra Martínez de dicha base de datos. Según información aportada por el Estado, el 15 de julio de 2015, el Consejo de Judicatura Federal, notificó del cumplimiento de dicha solicitud.

1936. En cuanto a las medidas de compensación económica, vivienda y costas y gastos, las partes confirmaron el cumplimiento por parte del Estado. Por último, respecto a los programas de capacitación e impulso legislativo, el Estado informó el 17 de julio de 2015, que se había llevado a cabo una reunión de seguimiento de la coordinación logística del curso de capacitación, así mismo indicó que se había realizado un “Curso de Capacitación sobre Derechos Humanos y el Delito de Tortura: Identificación, Sanción y Prevención”, actividad difundida a través de distintos medios de comunicación.

1937. Tomando en cuenta los elementos anteriormente descritos, la CIDH declaró el cumplimiento total de las cláusulas VIII.1, VIII.2.6, VIII.2.1, VIII. 3 (1, 2 y 3) y IX.2.

1938. En lo referente a la cláusula VIII.2.2 sobre las medidas de rehabilitación para brindar seguro de atención médica; y la cláusula VIII.2.3 sobre la medida de rehabilitación para tratamiento psicológico, el Estado Mexicano indicó que Centros de Atención Médica se encontraban disponibles en caso que las víctimas requirieran atención médica, pudiendo acudir a dicho Centro de asistencia y ser atendidos inmediatamente; igualmente, en el referido informe se indicó que las víctimas no habían hecho uso del servicio psicológico y se reiteró el compromiso de brindar atención en salud cuando así lo requiriesen los beneficiarios.

1939. El Informe de Solución Amistosa da cuenta que en una reunión celebrada entre las partes el día 24 de septiembre de 2015, el Estado, a través de la SEGOB, se comprometió a remitir una circular recordatoria a las instancias de Salud correspondiente con la finalidad de informar respecto de las vertientes específicas del caso, así como de la continuación de una atención debida al señor Laparra. En la misma reunión, la SEGOB se comprometió a celebrar, junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una reunión de trabajo en la ciudad de Tapachula, Chiapas con la finalidad de informar a la familia Laparra y sus representantes del procedimiento a seguir para brindar la atención psicológica y de brindarles el protocolo de atención por escrito.

1940. Al respecto, la Comisión no ha recibido información actualizada de parte del Estado sobre la remisión de dicha circular recordatoria, ni sobre la reunión de asesoría a la familia.

1941. En relación a la cláusula VIII.2.4, sobre la medida de rehabilitación médica y psicológica especial para Jose Ananías Laparra, el Estado informó que se llevó a cabo una evaluación médica, pero frente al cambio de residencia del beneficiario, la medida continúa a su disposición si desea hacer uso de ella.

1942. En relación a la cláusula VIII.2.5 relativa a la medida de rehabilitación social a través de becas educativas, un Comité Técnico aprobó la creación de subcuentas en favor de los hijos del señor Laparra, y en consiguiente se informó de la disponibilidad del Estado por dar cumplimiento. Asimismo, el 15 de mayo de 2015, el representante de las víctimas remitió documentos para solicitar la liberación del cheque correspondiente al ciclo escolar 2015-2016, en favor de Rocío Fulvia Laparra. Respecto al joven José Ananías Laparra, hasta la fecha, la Comisión no ha recibido mayor información sobre este punto del acuerdo en referencia a las gestiones realizadas para determinar la pertinencia de esta medida, o su sustitución por otra más adecuada, por lo que considera que se encuentra en proceso de cumplimiento y solicita a las partes que la mantengan informada sobre los avances que a este respecto se realicen.

1943. En relación a la cláusula IX.1 sobre la investigación de los hechos, según se indica en el Informe de Solución Amistosa, el 7 de abril de 2015 la Procuraduría General de Justicia de Chiapas llevó a cabo un dictamen psicológico con el apoyo de la delegación en Chiapas de la Procuraduría General de la República, agregando que en una reunión celebrada con el representante del señor Laparra, se acordó que este solicitaría el Protocolo de Estambul aplicado al señor Laparra Martínez por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). El Estado informó que dicha Comisión remitió el Protocolo de Estambul practicado a la víctima, y que actualmente la PGJ de Chiapas lo utiliza como evidencia para continuar con las investigaciones. De lo acordado en la reunión celebrada el 24 de septiembre de 2015 para dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, la Fiscalía de Derechos Humanos y el representante de las víctimas pactaron celebrar una reunión de trabajo con el Fiscal Especial Anticorrupción el 2 de octubre de 2015, con la finalidad de informar el Estado de las investigaciones correspondientes. En el mismo sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores se comprometió a asesorar a la Fiscalía de Chiapas en relación a la imprescriptibilidad del delito de tortura, con base en estándares internacionales.

1944. En relación a la cláusula IX.3 sobre el impulso del debate legislativo, en la reunión de trabajo celebrada entre las partes el 24 de septiembre de 2015, el Estado mexicano, a través del Gobierno del Estado de Chiapas, se comprometió a enviar a los peticionarios el proyecto legislativo sobre de la armonización del delito de tortura con estándares internacionales y la inclusión de la declaratoria de inocencia en aquellos casos donde existan violación de derechos humanos; y se comprometió además, a involucrar a los peticionarios en el debate legislativo.

1945. Con posterioridad a la aprobación y publicación del acuerdo de solución amistosa, el 17 de marzo de 2017, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con la facilitación de la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora de la CIDH para México, en la cual los peticionarios solicitaron una medida alternativa en materia de salud para Ananías y su familia. Asimismo, indicaron que el Estado suspendió el pago de la beca de estudios de la hija de Rocío Fulvia Laparra Godínez. Los peticionarios solicitaron los videos y demás registros del acto de reconocimiento de responsabilidad para poder dar visibilidad al caso a través del programa Inocence Project [Proyecto Inocencia].

1946. El Estado se comprometió a entregar dicho material en un lapso de 15 días, y a explorar la solicitud de la parte peticionaria en relación a la medida alternativa en salud y a impulsar el pago de la beca.

1947. El 25 de abril de 2017, las partes sostuvieron otra reunión de trabajo en la Ciudad de México, con la facilitación de la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño. Los peticionarios reiteraron la falta de avances en los puntos señalados y los compromisos alcanzados en la reunión anterior. El Estado por su parte reiteró su compromiso de avanzar en estos extremos del acuerdo de solución amistosa.

1948. El 4 de agosto de 2017, el Estado informó que en relación con el seguro de atención médica, el 23 de mayo de 2017 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas, en la cual se identificó que el problema que han presentado los peticionarios, es que no se les está proporcionando unas gotas oftalmológicas de forma gratuita. Por lo anterior, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) manifestó que una vez inscritos, los peticionarios recibirán el reembolso de los gastos incurridos. Asimismo, el Estado comunicó que independientemente de lo anterior, los peticionarios han recibido una adecuada atención médica gratuita en el Sistema de Salud Pública. Respecto a las becas educativas, el Estado informó que en la reunión del 23 de mayo de 2017 se confirmó que Rocío Laparra Godínez continuará recibiendo la beca hasta que culmine sus estudios superiores. Asimismo, se le informó a los peticionarios los documentos requeridos para continuar dando cumplimiento a la presente medida. En relación con el programa de capacitación, el Estado ratificó lo informado en las reuniones de trabajo con las partes y remitió los materiales de los cursos de capacitación, tanto a la parte peticionaria como a la CIDH.

1949. En lo que respecta al impulso del debate legislativo, el Estado informó que el 26 de abril de 2017, el estado de Chipas se comprometió a remitirte un exhorto al Poder Legislativo para que se lleve a cabo el debate acordado con los peticionarios. Adicionalmente, en relación con la investigación de los hechos, el Estado manifestó que la misma fue iniciada y que se encuentra a la espera de la respuesta que la Fiscalía de

Procedimientos Penales proporcione a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que se realicen las diligencias pertinentes y se ratifique el dictamen psicológico del 14 de enero de 2013. En virtud de lo anterior, el Estado se comprometió a mantener informados a los peticionarios y a la CIDH sobre los avances para lograr un cumplimiento total de la presente cláusula. Dicha información fue trasladada a los peticionarios para que presentaran sus observaciones.

1950. Al respecto, la Comisión toma nota de la información suministrada por las partes, y valora la voluntad de las mismas de avanzar en la ejecución del acuerdo de solución amistosa, de manera conjunta a través de los espacios de diálogo y la concertación. Asimismo, la Comisión aprovecha para reiterar que la Cláusula X.2 se encuentra cumplida totalmente. En consecuencia, la Comisión continuará supervisando las cláusulas VIII.2.2, VIII.2.3, VIII. 2.4, VIII.2.5, VIII.2.7, IX.1 y IX.3.

**Caso 12.847, Informe No. 16/16, Vicenta Sánchez Valdivieso, (México)**

1951. El 14 de abril de 2016, la CIDH aprobó el informe de Solución Amistosa No. 16/16 sobre el caso de Vicenta Sánchez Valdivieso. El caso se refiere a la violación de los derechos humanos de Vicenta Sánchez Valdivieso, mujer indígena zapoteca, derivada de la falta de ejecución de una decisión laboral emitida a su favor el 13 de agosto de 1999, la cual habría condenado a la parte patronal al pago de \$97,827.60 pesos mexicanos. Ante la falta del referido pago, se habría instaurado un embargo sobre un automóvil del deudor y se nombró depositaria del bien a la señora Esther Jiménez Guerra; posteriormente el 2 de marzo de 2000, el empleador, habría acudido junto con un grupo de personas al domicilio de la depositaria del embargo y a través de la violencia habría sustraído el vehículo. Por lo anterior, Vicenta Sánchez habría presentado una acción penal por hurto el 3 de marzo de 2000, y dentro de dicho proceso se emitió una orden de aprehensión contra Santana Lopez, pero éste no habría sido aprehendido, toda vez habría sido favorecido por la investidura de candidato electoral a las elecciones federales.

1952. El 25 de septiembre de 2012, las partes suscribieron un acuerdo de Solución Amistosa en la cual el Estado se comprometió a implementar medidas de reparación a favor Vicenta Sanchez Valdivieso y su familia por los daños ocasionados en su contra, y en el cual se establecieron las siguientes cláusulas, cuyo nivel de cumplimiento, a la fecha de aprobación del acuerdo por parte de la CIDH, se enuncia a continuación:

<b>COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA - CASO 12.847 VICENTA SÁNCHEZ VALDIVIESO</b>	
<p><b>SEGUNDO.</b> El Estado se compromete a otorgar, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por concepto de reparación integral del daño la cantidad total de \$498,927.00 (cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.).</p> <p>La cantidad de \$378,927,00 (trescientos setenta y ocho mil novecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) serán pagadas por la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, mediante la entrega de los documentos mercantiles correspondientes dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma del presente acuerdo de solución amistosa.</p> <p>La cantidad de \$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) serán pagadas por el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos, mediante la entrega de los documentos mercantiles correspondientes dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma del presente acuerdo de solución amistosa.</p>	<b>Cumplido Totalmente</b>
<b>TERCERO.</b> El Estado mexicano se compromete a incluir a la señora Vicenta Sánchez Valdivieso en los siguientes programas que ofrece el gobierno del estado de Oaxaca:	
) Programa productivo a cargo del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca.	<b>Cumplido Totalmente</b>
) Beca de capacitación para el empleo y Programa Semilla.	<b>Cumplido Totalmente</b>
) Seguro médico por medio del Seguro Popular del estado de Oaxaca.	<b>Cumplido Parcialmente</b>
) Apoyo para mejoramiento de vivienda.	<b>Cumplido Parcialmente</b>

) Becas educativas para niñas y niños entre 4 y 14 años de edad.	<b>Cumplido Totalmente</b>
--	--------------------------------

1953. En su Informe de Solución Amistosa No. 16/16, la Comisión declaró cumplida totalmente la cláusula segunda y los puntos 1, 2 y 5 de la cláusula tercera. Asimismo, decidió continuar con el seguimiento de los puntos 3 y 4 de la cláusula tercera.

1954. En relación al pago por compensación monetaria, se efectuó la entrega de dos cheques a favor de la señora Sanchez Valdivieso: un cheque emitido por el Gobierno de Oaxaca por la cantidad de ciento veinte mil pesos mexicanos (120.000.00 M.N.) y un cheque emitido por la Secretaría de la Gobernación por la cantidad de trescientos setenta y ocho mil novecientos veintisiete pesos mexicanos (378.927.00 M.N.). El Estado aportó a la CIDH el acta de entrega de los cheques de fecha 24 de octubre de 2012, firmada por las partes y copia simple de uno de los cheques.

1955. Respecto al programa productivo, el 10 de diciembre de 2012, el gobierno de Oaxaca realizó la entrega de bienes a la víctima y su familia de la “Iniciativa Ocupacional por Cuenta Propia” que incluía un roscicero de pollo a favor de la señora Vicenta Sanchez Valdivieso y los equipos para iniciar su negocio propio “Rosticería Ña Vicenta”. El Estado realizó varias visitas de seguimiento para verificar el funcionamiento de los bienes entregados y de su debida implementación. El Estado aportó registro fotográfico del equipo de trabajo del negocio, así como un documento de relación de bienes entregados, firmado por el peticionario y un representante de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de Oaxaca, en el cual consta la entrega de “congelador con tubería de cobre para uso rudo con llave de canastillas deslizables, sistema de drenado de agarradera, y roscicero de 21 a 27 pollos, interior frente en acero inoxidable de 3 varillas giratorias, luz interior y puerta de cristal templado”.

1956. En referencia a la beca de capacitación para el empleo y programa semilla, se realizó la capacitación a los peticionarios para la puesta en marcha y operación del roscicero para pollo de acuerdo a la modalidad de autoempleo.

1957. Por lo anterior, la Comisión declaró que la cláusula segunda y los puntos 1, 2 y 5 de la cláusula tercera se encontraban cumplidas totalmente.

1958. Por otro lado, en relación al punto 3 de la cláusula tercera, el Estado informó que la víctima indicó no necesitar la cobertura del seguro popular, toda vez que contaba con el seguro que brinda la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca en virtud de que su hijo trabaja en esa dependencia. Sin embargo, en una reunión de trabajo realizada en fecha 13 de febrero de 2015, las partes suscribieron un acta de entendimiento en la cual el Estado se comprometió a lo siguiente:

**Primero:** El representante de la Secretaría de Salud, gestionará ante el Hospital General “Aurelio Valdivieso” de Oaxaca, la atención a la beneficiaria C. Vicenta Sanchez Valdivieso, al efecto se solicitará, la intervención de la Secretaría de la Gobernación, para efecto de definir la posibilidad o no, de absorber los costos, para efecto de que se atienda la cirugía que necesita en las rodillas, en caso de ser procedente. [...]

1959. En el Informe de Solución Amistosa 16/16, la Comisión tomó nota de la cobertura médica de la víctima en el seguro de salud Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, y observó la subsistencia del compromiso relacionado con una operación quirúrgica de las rodillas, emanado de la minuta de reunión de trabajo del 13 de febrero de 2015, que aún no ha sido cumplido en su totalidad. Dicho interés fue reiterado por la víctima en la reunión de trabajo presidida con el Relator de País, Comisionado James Cavallaro, en septiembre de 2015. Por lo anterior, la CIDH consideró que el punto 3 se encontraba cumplido parcialmente, e instó al Estado a adelantar todas las gestiones necesarias para cumplir con el tratamiento de las rodillas de la víctima.

1960. En relación al programa de apoyo de vivienda, la señora Sanchez Valdivieso indicó que no necesitaba las reparaciones sino una casa nueva, ante ello se le realizó una invitación a integrarse al programa de autoproducción asistida.

1961. En el Informe de Solución Amistosa 16/16, la Comisión consideró que no contaba con suficientes elementos para expedirse sobre el cumplimiento de este punto. Sin embargo, dada la edad avanzada de la víctima y su estado de salud, así como la imposibilidad que tendría para realizar por sí misma las mejoras a la vivienda, la CIDH instó al Estado a explorar todas las posibilidades viables para que la señora Vicenta Sanchez Valdivieso pudiera acceder a otros programas que ayuden a mejorar su vivienda, y en consecuencia, su calidad de vida en un entorno seguro, saludable, accesible y adaptable a sus necesidades como persona mayor.

1962. La Comisión no ha recibido información actualizada de las partes sobre el cumplimiento de los dos puntos pendientes desde la fecha de la notificación del Informe de Solución Amistosa, por lo cual insta al Estado a adoptar medidas para cumplir con estos puntos de la manera más expedita y tomando en especial consideración la avanzada edad de la beneficiaria del acuerdo, de manera que se pueda lograr un cumplimiento total del mismo. Ante lo expuesto anteriormente, la CIDH continuará con la supervisión de los compromisos pendientes de cumplimiento por parte del Estado Mexicano.

**Caso 11.564, Informe No. 51/16. Gilberto Jiménez Hernández y otros (La Grandeza), (México).**

1963. El 30 de noviembre de 2016, la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 51/16 en el caso Gilberto Jimenez Hernández y Otros (la Grandeza), relacionado con la ejecución extrajudicial de Gilberto Jimenez, mientras huía de militares junto con su familia y otros comunitarios del ejido La Grandeza en el Municipio de Altamirano, Estado de Chiapas, México, el 20 de febrero de 1995. En su Informe de Fondo, la Comisión declaró la violación del derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, establecidos en los artículos 4.1 y 24 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Gilberto Jiménez Hernández; así como la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández; y la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández<sup>160</sup>.

1964. En su Informe de Fondo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló al Estado mexicano las siguientes recomendaciones:

1. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como moral. En cumplimiento de esta reparación, el Estado deberá tomar en especial consideración tanto el daño a la familia del señor Jiménez Hernández como los efectos comunitarios de la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 1994.
2. Realizar una investigación de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe. En el marco de esta investigación se deberá esclarecer el contexto en que tuvieron lugar los hechos del caso.
3. Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso.

<sup>160</sup> CIDH, Informe No. 51/16, Caso 11.564. Fondo. Gilberto Jiménez Hernández y otros (La Grandeza). México. 30 de noviembre de 2016.

4. Adoptar medidas de no repetición que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con la finalidad de asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, sea compatible con los estándares descritos en el presente informe.

1965. El 25 de enero de 2016, los peticionarios presentaron su escrito de conformidad con el artículo 44.3 del Reglamento de la CIDH. Mediante dicho escrito los peticionarios expresaron su posición y la decisión de las víctimas de no solicitar el sometimiento del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resaltaron que la publicación y difusión por parte del Estado de la decisión de fondo de la CIDH representa una medida adecuada de satisfacción para las víctimas y solicitaron a la Comisión que sobre la base de los artículos 47 y 48 de su Reglamento emita su informe definitivo, en su oportunidad lo publique y le dé el seguimiento correspondiente. Dicha información fue remitida para conocimiento del Estado.

1966. El 28 de octubre de 2016, los peticionarios presentaron un informe sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones del informe No. 34/16. En el mismo indicaron que el Estado no ha mostrado interés en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la CIDH. Al respecto indicaron que “no se ha convocado ni a las representantes ni a las víctimas del presente caso a una reunión para ver los detalles sobre ello, como tampoco ha remitido alguna propuesta en tal sentido; lo anterior demuestra un desinterés por parte del Estado para reparar integralmente a las víctimas”.

1967. El 7 de noviembre de 2016, el Estado presentó su informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH. En dicho informe presentó una propuesta de reparación integral y manifestó interés en suscribir un convenio con las víctimas sobre dichas medidas.

1968. En el marco de dicha propuesta indicó que las medidas de rehabilitación incluirían: i) otorgar atención médica y psicológica a las víctimas de forma preferencial y gratuita; y ii) incorporarlas al seguro popular. Las medidas de satisfacción incluirían: i) realizar una disculpa pública, encabezada por funcionarios del Gobierno Federal y Estatal; ii) develar una placa en conmemoración de las víctimas de los hechos; iii) nombrar una calle o escuela en honor a las víctimas; y iv) incorporar a las víctimas en programas sociales existentes en las entidades (estudios académicos o actividades profesionales, proyectos productivos). Por otro lado, señaló que las garantías de no repetición consistirían en diseñar e implementar una política pública destinada a evitar que se repitan los hechos del caso. Finalmente, el Estado informó que la indemnización compensatoria consistiría en el pago de los perjuicios materiales e inmateriales sufridos por las víctimas. Para ello, indicó que se seguirían las reglas de operación del “Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos”. Dicha información fue trasladada a los peticionarios para que presentaran sus observaciones.

1969. En ese sentido, la Comisión observó que el Estado no adoptó ninguna medida concreta para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH.

1970. La Comisión Interamericana, conforme a los instrumentos que rigen su mandato, seguirá evaluando las medidas adoptadas por el Estado mexicano respecto a las referidas recomendaciones hasta que determine que las mismas se han cumplido de forma plena.

#### **Caso 11.381, Informe No. 100/01, Milton García Fajardo (Nicaragua)**

1971. El 11 de octubre de 2001, la CIDH aprobó el Informe de Fondo No. 100/01, y concluyó que el Estado de Nicaragua: a) violó en perjuicio de Milton García Fajardo, Cristóbal Ruiz Lazo, Ramón Roa Parajón, Leonel Arguello Luna, César Chavarría Vargas, Francisco Obregón García, Aníbal Reyes Pérez, Mario Sánchez Paz, Frank Cortés, Arnoldo José Cardoza, Leonardo Solís, René Varela y Orlando Vilchez Florez, el derecho a la integridad, contenido en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y b) violó en perjuicio de Milton García Fajardo y los 141 trabajadores que comprende la presente denuncia, los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, y los derechos económicos, sociales y culturales, protegidos por los artículos 8, 25, y 26 del citado instrumento internacional, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) del mismo.

1972. Según la denuncia, el 26 de mayo de 1993, los trabajadores de aduanas iniciaron una huelga, después de haber gestionado infructuosamente ante el Ministerio de Trabajo la negociación de un pliego de peticiones que demandaba, entre otras cosas, la reclasificación nominal de los cargos propios y comunes de la Dirección General de Aduanas, estabilidad laboral, indexación del 20% de los salarios de acuerdo a la devaluación, etc. El Ministerio de Trabajo resolvió el 27 de mayo de 1993, declarar ilegal la huelga alegando que el artículo 227 del Código de Trabajo no permitía el ejercicio de ese derecho a los trabajadores del servicio público o de interés colectivo. Los peticionarios denunciaron también el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía durante la huelga realizada por los trabajadores aduaneros el 9 y 10 de junio de 1993.

1973. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores de las lesiones ocasionadas en perjuicio de Milton García Fajardo, Cristóbal Ruiz Lazo, Ramón Roa Parajón, Leonel Arguello Luna, César Chavarría Vargas, Francisco Obregón García, Aníbal Reyes Pérez, Mario Sánchez Paz, Frank Cortés, Arnoldo José Cardoza, Leonardo Solís, René Varela y Orlando Vilchez Florez, y sancionar a los responsables con arreglo a la legislación nicaragüense.
2. Adoptar las medidas necesarias para que los 142 trabajadores aduaneros que presentaron esta demanda reciban adecuada y oportuna reparación por las violaciones de sus derechos humanos aquí establecidas.

1974. Con el objeto de dar cumplimiento a la segunda recomendación, el Estado y 113 víctimas suscribieron el 7 de junio de 2007 un “Acta de Acuerdos y Compromisos” (a la cual adhirieron posteriormente 20 trabajadores más). En el Informe Anual 2014, la CIDH concluyó que no contaba con información suficiente para valorar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

1975. En reunión de trabajo celebrada entre las partes el 21 de octubre de 2015, el Estado presentó documentación según la cual, a través de Escritura Pública No. 35 del 18 de mayo de 2007, 105 trabajadores revocaron el poder de representación a Alfredo Barberena Campos, y otorgaron poder especial a un grupo de 5 personas para que los representara en las negociaciones relacionadas al caso 11.381, ante el Estado nicaragüense y ante la CIDH. Asimismo, según la documentación proporcionada, a través de Escritura Pública No. 37 del 22 de mayo de 2007, el grupo designado por los trabajadores como Comisión Negociadora, otorgó poder legal a Héctor Sánchez Baltodano para adelantar los trámites concernientes a la firma de acuerdos relacionados al Caso 11.381, ante la CIDH. Es de indicar que a esa fecha, las organizaciones CENIDH y CEJIL figuraban también como copeticionarios.

1976. En la misma documentación consta que el 7 de junio de 2007, las víctimas representadas por su apoderado designado por la Comisión Negociadora, y el Estado, representado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Director General de la Dirección General de Servicios Aduaneros, y el Procurador General de la República, firmaron un Acta de Acuerdos y Compromisos. En dicho acuerdo, las partes asumieron los siguientes compromisos:

PRIMERO: El Estado de la Republica de Nicaragua, en cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre el Caso No. 11.381- Milton Garcia Fajardo y Otros; se compromete a pagar a cada uno de los ciento cuarenta y cuatro ex trabajadores de aduana, la cantidad de ciento veinticinco mil córdobas (C\$125,000.00) [...].

CUARTO: Los ex trabajadores, sus herederos o representantes, que no hayan suscrito la presente Acta de Acuerdos y Compromisos, suscrito entre el Estado de la Republica de Nicaragua y Ex Trabajadores de la Dirección General de Aduanas, Caso 11.81 de la CIDH,

podrán adherirse a ella, siempre y cuando se cumplan con los compromisos dispuestos en la misma.

#### COMPROMISOS

PRIMERO: Los ex trabajadores, se comprometen a no interponer, ni presentar, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos o cualquier instancia sea esta judicial o extrajudicial en el territorio nacional o de Derechos Humanos propiamente dicha, de las que existan dentro del seno de las organizaciones regionales o internacionales de las cuales Nicaragua sea Estado parte, denuncia o reclamación en contra del Estado de la República de Nicaragua [...].

SEGUNDO: Los ex trabajadores, se comprometen a suscribir finiquitos a favor del Estado de la República de Nicaragua, ante la Notaría de Estado, los cuales deberán incorporarse íntegramente a los acuerdos y compromisos aquí suscritos. Para los efectos de los finiquitos a otorgarse, los ex trabajadores deberán designar único mandatario con facultades suficientes para comparecer ante la Notaría del Estado y conforme a la ley otorgar los finiquitos.

[...]

CUARTO: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Aduanas, reconocen las cotizaciones no gozadas y aportas (Sic) el Ministerio Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), correspondientes a los catorce años no laborados. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Aduanas, se harán cargo de las mismas conforme a las normas presupuestarias y la disposición de recursos.

QUINTO: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Aduanas, están conscientes de la lucha de los peticionarios y por ello se realizarán los mejores esfuerzos de reincorporación de los peticionarios ex trabajadores de aduana a las labores del sector público de manera gradual.

[...]

1977. En relación a la recomendación No.1, el Estado indicó que no es posible cumplirla dado que operó la prescripción de la acción penal por lesiones personales. Según el Estado, dado que los hechos ocurrieron el año 1993, y la acción prescribe en 5 años, es decir que dicho evento se dio con anterioridad a la emisión del Informe de Fondo 100/01, y han transcurrido 17 años desde que ocurrió la prescripción de la acción penal.

1978. En relación a la recomendación 2, el Estado indicó que se cumplió totalmente con las obligaciones derivadas del Acta de Acuerdos y Compromisos, pagándose la totalidad de los montos establecidos, incluyendo las cotizaciones al INSS, y cumpliéndose con la reincorporación de 46 trabajadores.

1979. El Estado aportó información según la cual el 16 de junio de 2011, los miembros de la Comisión Negociadora, designada por los trabajadores, firmaron el Acta de Pago y Finiquito por Cumplimiento Total del Acta de Acuerdos y Compromisos suscrito entre el Estado y los trabajadores. En dicha acta consta que los ex trabajadores recibieron a su entera satisfacción, analizado y estudiado detenidamente, la liquidación entregada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aceptándola en todas sus partes, sin tener observación alguna que formular. Asimismo, se deja constancia de la entrega total de los pagos debidos, que ascendieron a dieciocho millones (18'000.000,00) de córdobas. Mediante el acta se otorgó expresamente el finiquito al Estado por el cumplimiento total del Acta de Acuerdos y Compromisos, declaró que no había reclamo alguno que formular contra el Estado, se renunció expresamente a cualquier derecho, acción o reclamo que eventualmente pudiera surgir contra el Estado en relación al cumplimiento de la obligación, y expresamente se liberó totalmente de las obligaciones y de toda la responsabilidad al Estado con respecto a los ex trabajadores de aduana. El acta contiene un anexo, parte integral del documento, en el cual se

identificaron un total de 144 trabajadores que se beneficiaron con los pagos realizados, lista que incluye a Alfredo Barabena Campos. Asimismo, el Estado entregó el listado de cheques de pago de los 144 beneficiarios del acuerdo.

1980. De conformidad con la documentación aportada por el Estado, el 16 de junio de 2011, los representantes designados por los trabajadores presentaron a la CIDH, un escrito en la cual reconocían el límite legal de la prescripción de las acciones penales por lesiones personales, expresaban su satisfacción por el cumplimiento del acuerdo y solicitaron el archivo del caso.

1981. Al respecto, la CIDH recibió comunicaciones de Alfredo Barabena Campos, directamente y/o a través de su apoderado, el 3 de octubre de 2011, 16 de marzo, 30 de octubre de 2012, 3 de diciembre de 2012 y 10 de diciembre de 2012, 16 de abril, 28 de mayo, 3 de junio, 1 de julio, 7 de julio, 24 de julio y 21 de septiembre de 2013, 24 de octubre de 2014 y 1 de enero de 2015. En dichas comunicaciones, el peticionario, indicó que no estaba satisfecho con el pago de la indemnización y consideraba que el Estado no cumplió con las recomendaciones. El 4 de junio y 27 de septiembre de 2013, Carlos Montenegro, Carlos Mejía y Leonel Arguello, indicaron que consideraban que el Estado no había cumplido con las recomendaciones emitidas por la CIDH.

1982. Por su parte, las organizaciones CEJIL y CENIDH, indicaron el 19 de octubre de 2011, 17 de diciembre de 2012 y el 7 de noviembre de 2013 que no tenían más observaciones que presentar en relación al cumplimiento. El 18 de diciembre de 2014, dichas organizaciones indicaron que aún se encontraba pendiente de cumplimiento las recomendaciones.

1983. La CIDH convocó una reunión de trabajo el 21 de marzo de 2015, en la que el Estado presentó un informe sustancial del cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del marco del acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones y solicitó a la CIDH que declare el cumplimiento total. El señor Alfredo Barabena remitió una ayuda memoria a la CIDH el 20 de julio de 2015, en la cual indicó que las partes habían llegado a la firma de un arreglo amistoso para el cumplimiento durante la reunión de trabajo en sede de la Comisión. La CIDH observa que el documento allegado por el peticionario no corresponde al desarrollo y resultados de la reunión de trabajo.

1984. El 14 de agosto de 2015, las organizaciones CEJIL y CENIDH, remitieron un escrito a la CIDH indicando que no continuarían con la representación en el caso 11.381, por la imposibilidad de darle seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, dado que la gran mayoría de víctimas, firmó un Acta de Acuerdos y Compromisos con el Estado de Nicaragua, sin consultarlo previamente con las organizaciones copeticionarias. Informaron además que las víctimas no tienen una posición conjunta sobre el seguimiento del caso, y que se ha perdido el contacto con la mayoría de las víctimas, todo lo cual les impide continuar con la representación. Adicionalmente, solicitaron que la CIDH designe un defensor interamericano para que continúe con la representación. Finalmente, proporcionaron los datos de tres de las víctimas del caso con las cuales aún tenían contacto.

1985. La CIDH solicitó información actualizada a las partes el 24 de noviembre de 2015, para valorar el cumplimiento de las recomendaciones. A la fecha de cierre del presente informe, las partes no habían presentado información adicional.

1986. Teniendo en consideración la información suministrada con anterioridad por las partes, la CIDH observa que 105 trabajadores eligieron a un grupo de representantes para que adelantaran las negociaciones en el país con el Estado de Nicaragua. Dichos representantes haciendo uso de sus facultades legales designaron a una persona para que representara a la totalidad del conglomerado. Esta persona firmó un acuerdo que establecía ciertos montos reparatorios. Otro grupo de trabajadores se adhirió al acuerdo con posterioridad, ampliando el acuerdo a 144 beneficiarios. El Estado ha logrado acreditar que cumplió con las obligaciones derivadas del acuerdo firmado con el representante de los trabajadores. Lo anterior fue manifestado expresamente por la Comisión Negociadora designada por escritura pública como representantes de las víctimas.

1987. La CIDH observa también, que con posterioridad a la solicitud de declaratoria de cumplimiento de las recomendaciones, cuatro víctimas han indicado que están en desacuerdo con el cumplimiento; dos de las cuales firmaron la escritura pública que confirió el poder a la Comisión Negociadora. La CIDH también pudo comprobar que estas cuatro personas, y las víctimas indicadas como contacto por parte de las organizaciones que antes sirvieran como copeticionarias, se encuentran en el listado anexo al Acta de Pago y Finiquito, que corresponde a la lista de trabajadores que se beneficiaron del acuerdo y que otorgaron el cumplimiento total del mismo. Adicionalmente, la CIDH verificó que estas personas se encuentran en el listado de los cheques desembolsados por el Estado, lo que permite concluir que recibieron dicho monto. Según la información presentada, la recepción de los cheques significó la aceptación de dicho componente del acuerdo de cumplimiento. Por las consideraciones anteriores, la CIDH declara que el Acta de Acuerdos y Compromisos suscrito entre las partes se encuentra cumplido en su totalidad, y con esto se declara cumplida la recomendación No. 2.

1988. En relación a la recomendación No. 1, la CIDH toma nota de la prescripción de la acción penal enunciada por el Estado y de la solicitud de declaración de cumplimiento total de las recomendaciones. Al respecto, la CIDH considera que no cuenta con suficientes elementos que permitan concluir que el Estado realizó una investigación diligente y que se esclareció la verdad material de los hechos.

1989. El 12 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado información.

1990. El 21 de abril de 2017, los peticionarios informaron que a la fecha el Estado no ha investigado, ni sancionado conforme a la legislación interna a los autores de la agresión física contra los peticionarios.

1991. El 8 de septiembre de 2017, los peticionarios indicaron que han solicitado la intermediación del Presidencia de la República, a través de la Vicepresidencia de la República, que se conceda una reunión de trabajo o asigne a algún representante con quien se puedan reunir para dialogar sobre el presente caso, sin indicar con posterioridad algún resultado de la misma.

1992. El 13 de octubre de 2017, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento los compromisos pendientes. Sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe ninguna de las partes ha presentado información.

1993. Teniendo en cuenta lo anterior, la CIDH concluye que las recomendaciones se encuentran parcialmente cumplidas y decide continuar con la supervisión de cumplimiento de la recomendación No. 1o.

#### **Caso 12.848, Informe No. 42/16, Señora N, (Panamá)**

1994. En fecha 25 de septiembre de 2016 la CIDH aprobó el informe de Solución Amistosa No. 42/16 sobre el caso de la Señora N, relacionado con la responsabilidad internacional de la República de Panamá por la infección de la víctima, quien era menor de edad al momento de los hechos, con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), a través de una transfusión de sangre contaminada en un hospital público.

1995. El 7 de agosto de 2015 las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa, en el cual se dejó plasmado lo siguiente:

1. **Atención médica y psicológica:** En vista que la afectación causada a la peticionaria fue a consecuencia de acciones negligentes en el sistema de salud pública, ambas partes acuerdan que la atención médica y psicológica, para mayor beneficio y tranquilidad de la parte afectada, sea dispensada en el sistema de salud privada, de preferencia de la peticionaria. No obstante lo expuesto, el Estado está obligado en cualquier momento a brindar el acceso al sistema de salud pública bajo los parámetros legales existentes, cuando la peticionaria así lo requiera.

2. **Alcance, cobertura y condiciones:** El acuerdo económico alcanzado en materia de atención médica y psicológica incluye las revisiones periódicas de control, la provisión de medicamento para su tratamiento, la atención médica especializada en el caso de que circunstancias derivadas de la enfermedad así lo requieran y los tratamientos físicos, quirúrgicos o farmacológicos, que tengan como propósito aminorar y contrarrestar las secuelas de la enfermedad y mejorar su calidad de vida.

3. **Medidas de compensación económica:** El Estado panameño se compromete a pagar una justa indemnización de reparación económica basándose en la propuesta realizada por el Peritaje Actuarial presentado por la Señora N. **3.1. Daño Material:** El daño material se encuentra determinado para cubrir el período en el que la víctima tuvo que incurrir en gastos a cuenta propia y de los familiares, incluyendo los médicos, los judiciales y los emergentes, en los que no contó con una reparación inmediata respondiendo a la vulneración causada. **3.2. Lucro Cesante:** El Estado panameño reconoce el desmejoramiento de sus condiciones de trabajo, tanto en la obtención de ofertas laborales como en las afectaciones físicas que pueden incidir en su rendimiento en el ejercicio de sus labores. **3.3. Daño Inmaterial:** Tomando en cuenta las contrariedades sufridas por la víctima y sus familiares, además del desmejoramiento de la calidad de vida debido a su condición médica, el Estado panameño reconoce las dificultades físicas y psicológicas a las que se encuentran expuestas y la afectación de su familia.

4. **Medidas de Satisfacción y Medidas de No Repetición:** El Estado panameño se compromete a que el sistema de salud preste sus servicios bajo los mejores estándares de calidad, en el que asegure que los manejos de muestras de sus laboratorios se den en observancia a las reglas de seguridad en el que los mismos se encuentran debidamente certificados y cuenten con el personal idóneo capacitado, de manera que no se vuelva a incurrir en negligencias operativas y se protejan los derechos de los usuarios del sistema de salud, proporcionándoles una prestación segura y digna.

**Monto acordado por la Reparación:** Las partes han acordado el monto de [...] en concepto de compensación económica. Las partes han acordado el monto de [...] en concepto de atención de salud médica, psicológica y demás, en la instalación de salud de su preferencia.

**Honorarios Legales y Periciales:** Las partes han acordado el pago del 6% sobre la suma líquida que reciba la peticionaria, lo que equivale a [...] a favor de A en concepto de honorarios profesionales. La Dra. B recibirá la suma de [...], más el 7% de ITBM que corresponde a la suma de [...], en concepto de honorarios profesionales por los estudios periciales realizados y las alternativas trabajadas en las negociaciones.

1996. En su informe de Solución Amistosa No. 42/16, la CIDH tomó nota del reconocimiento de responsabilidad del Estado panameño por los hechos ocurridos en perjuicio de la Señora N.

1997. A su vez, la CIDH tomó nota que según se desprende del acuerdo de solución amistosa, la víctima optó por presentar un peritaje actuarial que liquidara los montos debidos por concepto de compensación económica y gastos de rehabilitación médica y psicológica; los que fueron acogidos favorablemente por el Estado Panameño.

1998. La Comisión valoró la entrega a la beneficiaria un cheque del tesoro nacional por el monto resarcitorio establecido en el referido acuerdo; así como de los montos por concepto de atención en salud, honorarios profesionales al respectivo abogado y por concepto de honorarios profesionales por los estudios periciales.

1999. Por su parte, la Señora N confirmó de manera telefónica la información proporcionada, expresó la satisfacción por el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa y su posición favorable a la aprobación del mismo por parte de la CIDH.

2000. Tomando en consideración todos los elementos mencionados anteriormente, la CIDH declaró que el acuerdo de solución amistosa se encontraba cumplido en su totalidad; y expresó su reconocimiento al Estado panameño por los esfuerzos desplegados para dar cumplimiento a los compromisos asumidos dentro del plazo y la forma acordada entre las partes.

**Caso 11.506, Informe No. 77/02, Waldemar Gerónimo Pinheiro y José Víctor Dos Santos (Paraguay)**

2001. En el Informe No. 77/02 de fecha 27 de diciembre de 2002, la Comisión concluyó que el Estado paraguayo: a) había violado, respecto a Waldemar Gerónimo Pinheiro y José Víctor Dos Santos, los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales, consagrados en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana en lo que se refiere a los hechos posteriores al 24 de agosto de 1989; y b) había violado respecto a Waldemar Gerónimo Pinheiro y José Víctor Dos Santos, los derechos de protección contra la detención arbitraria y a proceso regular establecidos por los artículos XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre por los hechos acaecidos con anterioridad al 24 de agosto de 1989.

2002. La CIDH formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Reparar plenamente al señor Waldemar Gerónimo Pinheiro, lo que incluye la correspondiente indemnización.
2. Reparar plenamente al señor José Víctor Dos Santos, lo que incluye la correspondiente indemnización.
3. Dicha reparación debe ser proporcional a los daños infringidos, lo que implica que debe ser mayor en el Caso de José Víctor Dos Santos por haber permanecido detenido durante ocho años sin existir ninguna justificación legal para ello.
4. Ordene una investigación para determinar quiénes fueron los responsables de las violaciones que la Comisión ha encontrado, y sancionarlos.
5. Tome las medidas necesarias para prevenir que estos hechos se repitan en el futuro.

2003. En el 2010 la Comisión solicitó información actualizada a las partes. Mediante nota de 22 de noviembre de 2010 el Estado solicitó una prórroga de dos meses para atender la solicitud de información sobre el cumplimiento de las recomendaciones, entre otras razones, porque desconocía el paradero de los peticionarios. Al cierre del presente Informe Anual, las partes no habían presentado información respecto al cumplimiento de las mencionadas recomendaciones de la CIDH.

2004. El 5 de diciembre de 2012, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe de fondo, sin que el Estado remitiera la información solicitada. El 13 de febrero de 2015, la CIDH reiteró la solicitud de información actualizada al Estado, en particular sobre las medidas adoptadas para localizar a las víctimas. Al cierre del presente informe no se había recibido la información requerida.

2005. El 30 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado la información solicitada.

2006. El 14 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento.

2007. El 14 de diciembre de 2016, el Estado presentó un escrito que complementó con una comunicación posterior. El Estado indicó que a efectos de localizar a Waldemar Gerónimo Pinheiro y a José Víctor Dos Santos, la Unidad General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a distintas instituciones nacionales la revisión de las bases de datos para dar con el paradero de dichas personas y poder finalizar el cumplimiento del Informe de Fondo No. 77/02. En ese sentido, el Departamento de Informática de la Policía Nacional, informó no haber encontrado datos referidos a estas personas. Asimismo, el Departamento de la INTERPOL fue consultado y manifestó no tener registros de Waldemar Gerónimo Pinheiro y José Víctor dos Santos en sus bases de datos ni en el Sistema de Búsqueda. Por su parte, la Dirección General del Registro Civil, indicó que luego de verificar los registros de nacimiento, matrimonio y defunción, no logró constatar inscripción alguna de carácter registral sobre las víctimas. Finalmente, la Dirección General de Migraciones, indicó haber investigado en el Sistema de Entrada y Salidas del País, informando que no se registraron datos sobre movimientos migratorios, ni expedientes en trámite sobre las víctimas.

2008. El 17 de enero de 2017, el Estado presentó una comunicación a la CIDH en la que reiteró la información presentada el 14 de diciembre de 2016, con respecto a los esfuerzos de ubicación de los peticionarios.

2009. El 26 de septiembre de 2016, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de las partes ha presentado información.

2010. En relación a las recomendaciones 1, 2 y 3 sobre reparaciones, la Comisión toma nota de la imposibilidad de cumplimiento, manifestada por el Estado, por ausencia de los beneficiarios. Al respecto, la Comisión estima, a la luz de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos en materia de seguimiento y cumplimiento de los Estados con las medidas reparatorias, en casos en los cuales no ha habido contacto con la persona beneficiaria, que es deber del Estado establecer al menos la posibilidad para que el interesado pueda acceder a esta medida<sup>161</sup>. En ese sentido, la CIDH valora los esfuerzos desplegados por el Estado paraguay para dar con el paradero de Waldemar Gerónimo Pinheiro y a José Víctor Dos Santos en territorio paraguay. Al mismo tiempo, la CIDH observa que no cuenta con información sobre las acciones desplegadas por el Estado paraguay en Brasil para dar con el paradero de estos nacionales brasileiros. En ese sentido, la CIDH quedaría a la espera de información sobre el emplazamiento de los peticionarios en territorio brasileiro para dar por cumplidas las recomendaciones 1, 2 y 3.

2011. En relación a las recomendaciones 4 y 5, la CIDH considera que el Estado aún no ha proporcionado información sobre la investigación adelantada, ni sobre la adopción de medidas de no repetición. Por lo anterior, la CIDH estima que las recomendaciones 4 y 5 se encuentran pendientes de cumplimiento.

2012. Por ello, la Comisión concluye que el Estado ha cumplido parcialmente con las recomendaciones y seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones 4 y 5.

### **Caso 11.607, Informe No. 85/09, Víctor Hugo Maciel (Paraguay)**

2013. En el Informe N° 85/09 del 6 de agosto de 2009, la Comisión concluyó que el Estado paraguay había violado los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida, a medidas especiales de protección de la niñez, a la protección judicial y a garantías judiciales, consagrados, respectivamente, en los artículos 7, 5, 4, 19, 25 y 8 de la Convención Americana. En resumen, los alegaron que el niño Víctor Hugo Maciel, de 15 años de edad, fue reclutado el 6 de agosto de 1995 para prestar el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en el Ejército del Paraguay, a pesar de que sus padres se opusieron expresamente; y que falleció el 2 de octubre de 1995 a consecuencia de una sobrecarga de actividades físicas, conocidas en

<sup>161</sup> Ver Corte IDH, Caso Gomes Lund y Otros (Guerrilla do Araguaia) Vs. Brasil, Sentencia de 24 de Noviembre de 2010. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Paraguay como “descuereo”, en castigo por una falta cometida durante los llamados “ejercicios de orden cerrado”. Los peticionarios indicaron que el menor Maciel sufría la enfermedad de Chagas en su etapa crónica, cuyas manifestaciones más evidentes eran las relacionadas con alteraciones del corazón. Los peticionarios alegaron que se inició una investigación sumaria en el fuero militar, siendo la causa sobreseída el 4 de diciembre de 1995 y, paralelamente otra investigación en el fuero ordinario, dada la difusión de los hechos por medios periodísticos y por los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores del Congreso, la cual tampoco avanzó.

2014. El 8 de marzo de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó el Informe Nº 34/05, conforme al artículo 50 de la Convención Americana, siendo notificado al Estado de Paraguay el 20 de abril de 2005 con un plazo de dos meses para cumplir con las recomendaciones. En comunicación de 17 de junio de 2005, el Estado solicitó la suspensión del plazo establecido en el artículo 51 (1) de la Convención y solicitó formalmente la posibilidad de negociar un acuerdo de cumplimiento con los peticionarios sobre la base del reconocimiento de su responsabilidad internacional por los hechos que originaron este caso, lo cual fue aceptado por los peticionarios. El 22 de marzo de 2006, los representantes del Estado y los peticionarios suscribieron un acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones.

2015. En el Informe No. 85/09 la Comisión concluyó que, a pesar de los importantes avances alcanzados para cumplir el Acuerdo de Cumplimiento de 22 de marzo de 2006, el Estado cumplió parcialmente la recomendación realizada por la CIDH en el Informe Nº 34/05, relativa a la obligación del Estado de investigar los hechos denunciados. En consecuencia la CIDH recomendó al Estado paraguayo:

1. Completar una investigación de manera completa, imparcial y efectiva de los hechos denunciados a fin de juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Víctor Hugo Maciel Alcaraz.

2016. Mediante nota del 29 de diciembre de 2010 el Estado informó que la causa caratulada “Denuncia remitida por la Fiscalía General del Estado s/ Muerte del Conscripto Víctor Hugo Maciel Alcaraz. Causa No. 397/95” se encuentra en el Juzgado de Liquidación y Sentencia No. 3, pendiente de la realización de la declaración de cuatro testigos, entre otras pruebas.

2017. Por su parte, en comunicación del 21 de diciembre de 2010, los peticionarios indicaron que el Estado no ha tomado ninguna medida para lograr una investigación útil dirigida a la determinación de la responsabilidad en los hechos que resultaron en la muerte de Víctor Hugo Maciel, con lo cual se incumplió la recomendación emitida por la CIDH. Consideran que a cuatro años de reabierto el sumario las gestiones han sido deficientes poco operativas y sin una dirección estratégica que abarque todos los aspectos del caso. Dicha información fue reiterada por los peticionarios en sus informes de fechas 21 de noviembre de 2011, 4 de enero de 2013, 15 de noviembre de 2013, y 18 de diciembre de 2014.

2018. En su comunicación del 29 de febrero de 2012, el Estado mencionó algunas acciones adelantadas para impulsar la investigación. En ese sentido, el Estado reportó que se solicitó a la Fuerzas Armadas de la Nación información sobre la existencia de protocolos de inspección médica para la admisión y rechazo de postulantes, se remitió al Juzgado las cédulas de notificaciones de testigos para su diligenciamiento, se solicitó al Juzgado el libramiento de oficio al Juez para la remisión del acta de declaración testimonial de una persona y se solicitó que se agregara un oficio al expediente. El Estado indicó en dicha comunicación que estaba reuniendo los elementos de convicción para proseguir las investigaciones, pero que no ha logrado hacerse ninguna imputación.

2019. La CIDH solicitó información actualizada a las partes el 4 de diciembre de 2014 sobre el cumplimiento de la recomendación del informe No. 34/25.

2020. Los peticionarios reiteraron el 2 de septiembre de 2015, que la recomendación relativa a la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de la víctima de este caso continúa pendiente de cumplimiento y que el Estado no ha tomado ninguna medida para impulsar la investigación eficaz de los hechos. El Estado por su parte no presentó información actualizada.

2021. El 30 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado la información solicitada.

2022. El 6 de abril de 2016, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con el acompañamiento del Comisionado Paulo Vannuchi, Relator de la CIDH para Paraguay. En dicha reunión, las partes dialogaron sobre la medida de justicia. El Estado informó que la Fiscal de la Unidad de Transición del Ministerio Público ha dispuesto recolectar los elementos de convicción suficientes para esclarecer los hechos; y que ha solicitado con carácter urgente al Juez de causa la declaración de un testigo. Los peticionarios reiteraron que consideran que no se ha cumplido con la obligación de investigar, de manera imparcial y efectiva los hechos denunciados a fin de juzgar y sancionar a los responsables de los hechos.

2023. El 12 de octubre de 2016 y 26 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado información adicional a lo ya enunciado en la reunión de trabajo de manera oral y escrita.

2024. La Comisión observa la falta de cumplimiento de la recomendación relativa a la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones a los derechos humanos cometidos en perjuicio de Víctor Hugo Maciel. Por lo tanto, la CIDH concluye que el Acuerdo de Cumplimiento suscrito por las partes el 22 de marzo de 2006 se encuentra parcialmente cumplido.

#### **Caso 12.358, Informe No. 24/13, Octavio Rubén González Acosta (Paraguay)**

2025. El 20 de marzo de 2013, la CIDH aprobó el Informe de Solución Amistosa No. 24/13 en el Caso 12.358 Octavio Rubén González Acosta contra el Estado de Paraguay. El caso se refería a la presunta detención arbitraria, tortura y desaparición forzada del señor Octavio Rubén González Acosta, el 3 de diciembre de 1975 durante el régimen de Alfredo Stroessner, por agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Capital. De acuerdo a lo pactado en dicho acuerdo, el Estado se comprometió a lo siguiente:

1. Reconocer su responsabilidad internacional por los actos de detención arbitraria, torturas y desaparición forzadas perpetradas por agentes del Estado en violación de los derechos de la víctima directa, el señor Octavio Rubén González Acosta, así como de sus familiares: su esposa, señora Adela Elvira Herrera de González, y sus hijos Guillermo y Mariano González.
2. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la desaparición forzada del Señor Octavio Rubén González Acosta y pedir disculpas públicas a sus familiares.
3. Impulsar en el fuero penal, la investigación de los hechos que generaron las violaciones del presente caso, identificar, juzgar y si se hallaren culpables, sancionar.
4. Brindar sin costo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran los familiares identificados en el punto I del presente acuerdo, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos a partir de la firma del acuerdo de solución amistosa, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión gratuita de medicamentos disponibles en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y de conformidad con la normativa administrativa que sea dictada para casos de violaciones de derechos humanos.
5. Desistir de la excepción de prescripción presentada en la demanda "Adela Elvira Herrera González y otros c/ Estado Paraguayo s/ Indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual", tramitada por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 10º Turno de la ciudad de Asunción; allanándose a los hechos

denunciados, dejando al arbitrio del Juzgado la cuantificación de la indemnización reclamada.

6. Realizar un reconocimiento histórico de la vigencia del Partido Comunista Paraguayo, con anterioridad al golpe del Estado del 2 y 3 de febrero de 1989, en el que se contemple la memoria de la víctima directa y de los ciudadanos y ciudadanas miembros de esta agrupación.

7. Publicar en la Gaceta Oficial y en los sitios web oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Presidencia de la República los términos del presente acuerdo de solución amistosa.

2026. De acuerdo a lo establecido en el Informe No. 24/13, el Estado dio cumplimiento a las cláusulas primera y segunda a través de la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad el 20 de marzo de 2012, con la presencia de autoridades nacionales, familiares de la víctima e invitados especiales. Asimismo, dicho informe da cuenta del cumplimiento del Estado del punto sexto sobre el reconocimiento histórico de la vigencia del Partido Comunista Paraguayo, que se dio dentro del marco del acto público de reconocimiento de responsabilidad previamente mencionado. Finalmente, el informe señala que se efectuaron las publicaciones en la Gaeta oficial y el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a lo pactado en el punto 7 del acuerdo. En atención de lo anterior, la CIDH da por cumplidos los puntos 1, 2, 6 y 7 del acuerdo de solución amistosa.

2027. De conformidad con la información suministrada por los peticionarios, el 13 de septiembre de 2013 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Turno dictó sentencia en el juicio por indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual expediente No. 423/2010, declarando a lugar parcialmente la demanda presentada por las víctimas y condenando al Estado paraguayo al pago de una indemnización.

2028. El 4 de diciembre de 2014, la CIDH pidió información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo de solución amistosa. Por su parte, el 12 de diciembre de 2014, los peticionarios informaron, que a pesar de haber ganado la demanda, los recursos sufragar el monto de la indemnización no fueron incluidos en el presupuesto general de gastos de 2015; e indicaron que esperan que el Estado paraguayo realice una ampliación presupuestaria que incluya los rubros que la sentencia estableció a su favor. El Estado por su parte no presentó información actualizada al cierre de este informe.

2029. El 30 de septiembre de 2015, el Estado indicó en relación a la cláusula 5 del acuerdo, que el compromiso asumido por el Estado era el de asumir una posición procesal de desistimiento de una excepción opuesta al progreso de la demanda y el allanamiento a los hechos presentados por la parte actora, para que el juez dictara la resolución indemnizatoria a su arbitrio. El Estado indicó que el Juzgado fijó la indemnización en la suma de dos mil trescientos millones veinte mil doscientos noventa y tres guaraníes (2,300.020.293), importe al que habría que descontar lo ya percibido por los beneficiarios dentro del marco de la indemnización concedida vía administrativa bajo la Ley No. 838/1996. El Estado indicó, que en cumplimiento de los compromisos asumidos, la Procuraduría General no apeló a sentencia y manifestó en el expediente su voluntad de cumplir con lo acordado. El Estado reconoció en su escrito que al haberse recibido el oficio del Juzgado con posterioridad a la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto al Congreso por parte del Poder Ejecutivo, la comunicación no surtió los efectos para el monto de 2015, pero aclara que dicha sentencia se encuentra dentro del Anteproyecto de Presupuesto General de Gastos de la Nación para 2016.

2030. La parte peticionaria indicó el 22 de octubre de 2015, que no se ha realizado el pago de lo ordenado en la sentencia, por lo cual solicita a la CIDH que continúe supervisando el cumplimiento del punto 5. La parte peticionaria también se refirió a la omisión del Estado de presentar información actualizada sobre los puntos 3 y 4 que continuarían pendientes de cumplimiento.

2031. Al respecto, la Comisión observa que efectivamente mediante el punto 5 el Estado paraguayo se comprometió a desistir de la excepción de prescripción presentada en la demanda "Adela Elvira Herrera González y otros c/ Estado Paraguayo s/ Indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual", tramitada por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 10º Turno de la ciudad de Asunción; y a allanarse a los hechos denunciados, dejando al arbitrio del Juzgado la cuantificación de la indemnización reclamada. Asimismo, que de conformidad con la información suministrada por las partes, el Estado por conducto de la Procuraduría General desistió de la excepción y se allanó a la demanda.

2032. El 6 de abril de 2016, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con el acompañamiento del Comisionado Paulo Vannuchi, Relator de la CIDH para Paraguay, durante su visita al país. En dicha reunión, las partes dialogaron sobre los avances y retos en la implementación del acuerdo y suscribieron un Acta de Reunión de Trabajo de Seguimiento de Solución Amistosa, en la cual las partes coincidieron en que la cláusula cuarta sobre las medidas relacionadas con la prestación del servicio de salud se encuentra cumplida y solicitaron conjuntamente a la CIDH que así lo declarara. Asimismo, el Estado expresó su compromiso de efectuar el pago de las indemnizaciones que se encontrarían pendientes de desembolso, y de continuar trabajando en el impulso de la investigación penal.

2033. El 12 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento. A la fecha de cierre de este informe el Estado no ha presentado información adicional a lo ya enunciado en la reunión de trabajo. El 30 de diciembre de 2016, la parte peticionaria informó que no han existido avances respecto al cumplimiento de la cláusula de justicia y que continúa pendiente el desembolso del pago.

2034. Al respecto, la CIDH toma nota de la información suministrada por las partes durante el año 2016 y valora los esfuerzos de avanzar conjuntamente a través del diálogo en la definición de la ruta hacia el cumplimiento total del acuerdo. Por lo anterior, tomando en consideración la voluntad expresada por las partes en el Acta de Reunión de Trabajo de Seguimiento de Solución Amistosa, y la confirmación de la parte peticionaria durante la reunión de trabajo de la implementación de la medida de salud, declara cumplido el punto 4 del acuerdo sobre medidas de atención en salud. Asimismo, la CIDH continúa a la espera de la confirmación sobre el desembolso de la indemnización, e insta al Estado a impulsar la ejecución de la decisión correspondiente, según la voluntad expresada en la reunión de trabajo sostenida entre las partes.

2035. Por otra parte, la Comisión observa que no cuenta con información sobre el cumplimiento del punto del acuerdo de solución amistosa, referente a la identificación y juzgamiento de los autores de los hechos; como tampoco del punto cuarto, sobre el tratamiento de salud y provisión de medicamentos.

2036. El 18 de mayo de 2017, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con la facilitación del Comisionado Paulo Vannuchi, Relator de la CIDH para Paraguay. En dicha reunión, los peticionarios reiteraron que no ha habido avances en la investigación penal, e indicaron que tampoco han recibido una reparación, toda vez que la resolución aprobatoria de la indemnización se encontraría en proceso de firma. Asimismo, los peticionarios indicaron que la esposa de la víctima tiene una enfermedad grave y esperan que pueda recibir la indemnización lo más pronto posible para poder financiar su tratamiento. El Estado por su parte, se comprometió en esa reunión a dar seguimiento a través del Ministerio de Salud para la entrega de medicamentos. Las partes decidieron sostener una reunión bilateral e informar a la CIDH sobre los avances.

2037. El 26 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó nuevamente información actualizada a las partes sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa.

2038. El 4 de octubre de 2017, los peticionarios informaron que no se ha coordinado una reunión de trabajo para dar seguimiento al desembolso de las indemnizaciones. Resaltaron que luego de que se ejecutara la sentencia definitiva, iniciaron los trámites necesarios ante el Ministerio de Hacienda para que cumpliera con el pago ordenado por el Juzgado. Asimismo, los peticionarios indicaron que a pesar de infructuosos intentos de comunicación con la Ministra de Hacienda, hasta la fecha no han recibido la indemnización. Los peticionarios hicieron un llamado al Estado para que cumpla con el acuerdo de solución

amistosa y resaltaron que la señora Adela Elvira Herrera de González está muy enferma y debe recibir un tratamiento de salud complicado y costoso, por lo que le solicitan al Estado hacer efectivo el pago de la indemnización. Dicha información fue trasladada al Estado el mismo día de su recepción para que presentara sus observaciones.

2039. A la fecha de cierre de este informe el Estado no ha presentado información adicional.

2040. La CIDH valora la información suministrada por el Estado, así como los avances registrados en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. Al mismo tiempo, insta al Estado a suministrar información sobre el cumplimiento de los puntos tercero y cuarto, la cual será de utilidad para evaluar los avances dirigidos al cumplimiento integral de dicho acuerdo. La CIDH toma nota de la urgente necesidad de salud de la señora Herrera y hace un llamado al Estado a encontrar la manera de agilizar los trámites del pago de la indemnización. Por lo tanto, la CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido.

### **Casos 11.031 y otros, Informe No. 111/00, Pedro Pablo López González y otros (Perú)**

2041. En el Informe No. 111/00 de fecha 4 de diciembre de 2000, la CIDH concluyó que el Estado peruano: a) A través de miembros de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú, detuvo a los señores Pedro Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More el día 2 de mayo de 1992, en los Asentamientos Humanos “La Huaca”, “Javier Heraud”, y “San Carlos”, ubicados en el Distrito y Provincia de Santa, del Departamento de Ancash, y que posteriormente procedió a desaparecerlos; y b) Que por ello, era responsable por la desaparición forzada de las víctimas antes identificadas, violando en consecuencia el derecho a la libertad (artículo 7), el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la vida (artículo 4), el derecho a la personalidad jurídica (artículo 3) y el derecho a un recurso judicial efectivo (artículo 25) consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y c) Que había incumplido su obligación general de respetar y garantizar el ejercicio de estos derechos consagrados en la Convención, en los términos del artículo 1(1) de dicha Convención.

2042. La Comisión formuló al Estado peruano las siguientes recomendaciones:

1. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar las circunstancias de la desaparición de los señores Pedro Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More, y para sancionar a los responsables con arreglo a la legislación peruana.
2. Dejar sin efecto toda medida interna, legislativa o de otra naturaleza, que tienda a impedir la investigación, el procesamiento y la sanción de los responsables de la desaparición forzada de los señores Pedro Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More. En tal virtud, el Estado debe dejar sin efecto las Leyes Nos. 26479 y 26492.
3. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de los señores Pedro Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More reciban adecuada y oportuna reparación por las violaciones aquí establecidas.

2043. Mediante comunicación recibida el 10 de diciembre de 2010, los peticionarios manifestaron que el 1 de octubre de 2010 la Primera Sala Penal Especial emitió sentencia condenatoria contra ex integrantes de las fuerzas de seguridad y altos funcionarios del gobierno del entonces Presidente Alberto Fujimori, por el delito de homicidio calificado en agravio de Pedro Pablo López Gonzales, Jesús Manfredo

Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More, Jorge Luis Tarazona More, Roberto Barrientos Velásquez, Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Gilmar León Velásquez, Denis Atilio Castillo Chávez y Federico Coquis Vásquez. Agregaron que las juezas de la referida Sala Penal ordenaron a los condenados y al Estado, como tercero civilmente responsable, el pago de indemnizaciones, asistencia médico-psicológica y otras modalidades de compensación por los daños materiales e inmateriales sufridos por los familiares de las víctimas. Los peticionarios indicaron que la defensa de los condenados presentaron recurso de nulidad y que el mismo se encuentra pendiente de decisión ante la Corte Suprema de la República.

2044. Los peticionarios afirmaron que el Estado peruano no ha adoptado las medidas necesarias para que se determine el paradero y entrega de los restos mortales de los campesinos desaparecidos en el distrito de El Santa. En cuanto a la segunda recomendación del Informe No. 111/00, manifestaron que si bien el Poder Judicial peruano ha dejado sin efecto las Leyes N° 26479 y 26492, el Poder Ejecutivo ha impulsado medidas legislativas cuya vigencia implicaría la obstaculización en la investigación de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

2045. A lo largo del año 2012 los peticionarios remitieron comunicaciones indicando que el 20 de julio de 2012 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia había dictado sentencia de segunda instancia en el proceso llevado a cabo para esclarecer una serie de delitos, entre los cuales se encuentra la desaparición forzada de los campesinos del Santa. Los peticionarios destacaron que la Sala Penal Permanente concluyó que la desaparición de los campesinos del Santa no constituye delito de *lesa humanidad*, bajo el criterio de que si bien existió una práctica sistemática y generalizada de ejecuciones y desapariciones para la fecha de los hechos, la misma no estuvo dirigida a la población civil, sino a “mandos militares del Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso, y delincuentes terroristas”. En agosto de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia sobre este tema dentro del seguimiento de la sentencia del caso Barrios Altos y emitió una resolución en septiembre del mismo año. Según la información recibida por la CIDH, el 27 de septiembre de 2012 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia anuló el fallo emitido el 20 de julio de 2012. Con esa decisión, se conformará una nueva Sala para que conozca en segunda instancia el proceso penal dirigido a establecer la responsabilidad de los autores materiales y altos funcionarios del Estado por los hechos del Santa y de otros casos.

2046. El 3 de noviembre de 2012 se llevó a cabo una reunión de trabajo, en el marco del 146º Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, sobre el presente caso. En esa ocasión, el Estado refirió que viene cumpliendo su obligación internacional de investigar y sancionar los responsables por la desaparición de los campesinos del Santa, por cuanto la sentencia emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 20 de julio de 2012 fue anulada de oficio por la misma instancia judicial. A su vez, los peticionarios destacaron que la decisión de 20 de julio de 2012 obedece a una práctica constante de la Sala Penal Permanente de adoptar decisiones en casos de graves violaciones a los derechos humanos que se apartan a los estándares interamericanos. Los peticionarios adujeron asimismo que si bien la anulación de la decisión ha corregido una situación de impunidad, la Corte Suprema aún no ha emitido una decisión definitiva en torno a la desaparición forzada de las víctimas, pese a que han pasado más de veinte años de los hechos.

2047. El 16 de noviembre de 2012 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en la implementación de las recomendaciones previamente referidas. Los peticionarios y el Estado peruano remitieron comunicaciones en las que reiteraron las alegaciones vertidas durante la reunión de trabajo realizada el 3 de noviembre de 2012. Los peticionarios refirieron, adicionalmente, que el 6 de marzo de 2012 el imputado Julio Rolando Salazar Monroe había obtenido una sentencia en el marco de un proceso de *habeas corpus*, en la que el Tribunal Constitucional ordenó su desvinculación del proceso penal relacionado con los casos del Santa, Barrios Altos y Pedro Yauri Bustamante. Según los peticionarios, en caso de que sea ejecutoriada, dicha decisión implicaría un desconocimiento de la obligación del Estado peruano de sancionar adecuadamente los citados delitos. Con relación a las reparaciones económicas, los peticionarios reiteraron las observaciones remitidas en años anteriores, las cuales se resumen en el apartado relativo al Informe No. 101/01.

2048. El 26 de diciembre de 2013, el Estado informó a la CIDH, de manera general, que se habían adelantado gestiones para la localización y exhumación de los restos de las víctimas, así como para su entrega

a los familiares. Al mismo tiempo la CIDH observa que el Estado no ha brindado información específica sobre la localización de las víctimas enunciadas en esta petición. El Estado indicó que se habrían localizado y recuperado 2662 individuos de los cuales ya se habían identificado 1528 personas, y se habían entregado 1381 restos a sus familiares a fecha de julio 2013. El Estado informó, asimismo, que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos continuaba estudiando los proyectos de ley para la reforma del Código Penal en el articulado referido a la desaparición forzada, y que el Congreso de la República, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, han programado el debate para acumulación de tres proyectos de ley para adecuar el artículo 320 del Código Penal que regula la desaparición forzada.

2049. La CIDH solicitó información actualizada a las partes el 30 de septiembre de 2015, sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el Informe N° 111/00. Las partes no presentaron información actualizada en el plazo fijado por la CIDH.

2050. No obstante y, dado que la recomendación 3 de los Informes N° 111/00 y N° 101/01 se encuentra comprendida en los literales c) y d) del comunicado de prensa conjunto suscrito por la CIDH y el Estado peruano el 22 de febrero de 2001, la CIDH se referirá al cumplimiento de esta recomendación conjuntamente, en la sección subsiguiente sobre el Informe N° 101/01. En relación al resto de las recomendaciones, la CIDH considera que continúan pendientes de cumplimiento e insta al Estado a continuar desplegando las acciones tendientes al cumplimiento total de las recomendaciones.

2051. El 1 de diciembre de 2015, el Estado presentó comunicación en la cual expone los avances realizados para cumplir con las recomendaciones contenidas en el Informe No. 111/10. En relación a la tercera recomendación, el Estado presentó información de la cual se desglosa las medidas ejecutadas para otorgar reparaciones en materia económica, así como en materia de salud, educación, simbólicas, y de vivienda. En relación a las reparaciones económicas, el Estado precisó que desde el Programa de Reparaciones Económicas se realizó el pago de montos de forma individualizada a cada uno de los familiares de las víctimas incluidas en el presente caso. Al respecto, el Estado señaló que, a la fecha, 18 de los 19 familiares reparados han efectuado el cobro de los montos asignados, por lo que se encuentra pendiente únicamente el cobro en el Banco de la Nación por parte del señor Jorge Antonio Noriega Flores. En cuanto a las reparaciones en materia de salud, el Estado indicó que se realizó la afiliación al Seguro Integral de Salud, y dio detalles sobre la situación que tiene la condición de beneficiario. En ese sentido, aclaró que las personas que no han sido afiliadas cuentan con un seguro privado o se encuentran afiliados al seguro social, sin embargo, una vez que dichos seguros pierdan vigencia, tales personas serán incluidas al Seguro Integral de Salud.

2052. En cuanto a las reparaciones en materia de educación, el Estado reiteró que desde el segundo semestre del año 2012, el Ministerio de Educación ha implementado la Beca REPARED que tiene por finalidad financiar los estudios profesionales, universitarios o técnicos a beneficiarios inscritos en el RUV. En particular, el Estado informa que Sheyla Noriega Flores y Carlita Tarazona Reyes son beneficiarias de esta beca desde 15 de mayo y 25 de abril de 2014, respectivamente; y que ambas realizan sus estudios en la carrera de Aseguramiento de Calidad de Productos Hidrobiológicos en el Instituto de Educación Superior. Asimismo, el Estado indica que cualquier otro familiar que desee ser beneficiario de esta beca puede iniciar las gestiones correspondientes.

2053. En cuanto a las reparaciones simbólicas y de memoria, el Estado informó a solicitud de la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, el Proyecto CHAVIMOCCHIC independizó el terreno donde se exhumaron los restos óseos de las víctimas del presente caso, con la finalidad de construir un Santuario de Memoria denominado Área de Reserva Santuario Coscobamba. Indicó que a la fecha se realizan gestiones correspondientes ante el gobierno local a fin de que se realice el saneamiento físico y legal.

2054. En cuanto a las reparaciones en materia de vivienda, el Estado comunicó que en conjunto con los familiares de las víctimas, representantes de la Municipalidad Provincial del Santa y de la Secretaría Técnica de la CMAN, se encuentran en proceso de identificar los terrenos que serán destinados para viviendas. Una vez identificados serán transferidos a título gratuito a los beneficiarios cuya formalización será gestionada por Municipalidad Provincial del Santa.

2055. Finalmente, en cuanto a la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas, el Estado peruano destacó la realización de una diligencia de exhumación de restos a cargo del Fiscal Provincial de la Fiscalía Mixta Corporativa de Virú el 4 de agosto de 2011. Según informa el Estado, de la exhumación realizada y la posterior identificación de los restos hallados por el Equipo Forense Especializado, se obtuvo la identificación de: Pedro Pablo López González; Denis Atilio Castillo Chávez; Gilmer Ramiro León Velásquez; Jesús Manfredo Noriega Ríos; Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More. Para noviembre de 2011, los restos de cada una de las víctimas incluidas en el presente caso había sido entregado a los respectivos familiares.

2056. Por otro lado, en relación a la primera y a la segunda recomendación, el Estado destacó que ha removido los obstáculos que pudieron impactar negativamente la investigación, el procesamiento y sanción de los responsables individuales. Al respecto, el Estado informó que mediante Ejecutoria Suprema de fecha 20 de marzo de 2013, la Sala Permanente de la Corte Suprema ha cumplido con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha emitido sentencia en el caso Barrios Altos, la misma que incluye a los casos Pedro Yauri y El Santa. En dicha sentencia se declara que los crímenes relacionados con estos 3 casos “no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de un plan sistemático y generalizado de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales contra la población civil”. En el mismo sentido, se destaca que el señor Julio Rolando Salazar no fue apartado del proceso penal que se le seguía y, por el contrario, mediante la citada sentencia, se estableció su responsabilidad penal por el delito de homicidio calificado en agravio de las víctimas del presente caso.

2057. El 21 de octubre de 2016, la CIDH solicitó nuevamente información a las partes sobre los avances en la implementación de las recomendaciones previamente referidas. El 21 de noviembre de 2016, el Estado presentó la información requerida, sin embargo, a la fecha de cierre de este informe, los peticionarios no han presentado información.

2058. Respecto a la primera recomendación, el Estado recordó que, a través de los órganos competentes, se desarrolló el proceso penal en el cual se establecieron a los responsables y se les impuso las respectivas condenas penales. Asimismo, en cuanto a la segunda recomendación, el Estado reiteró que ha cumplido con remover los obstáculos a fin de garantizar una investigación, procesamiento y sanción de los responsables. Finalmente, en cuanto a la tercera recomendación el Estado manifestó que en el informe presentado en diciembre de 2015, se verifica el otorgamiento de medidas de reparación de distinta naturaleza a los familiares de las víctimas.

2059. El 26 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones pendientes. A la fecha de cierre del presente informe los peticionarios no han presentado información.

2060. El 27 de octubre de 2017, el Estado informó con referencia a los avances en materia de reparaciones en vivienda, que el 27 de abril de 2016, las nueve familias recibieron las actas de asignación de lotes en ubicaciones distintas a las ofrecidas originalmente por la Municipalidad Provincial del Santa. Asimismo, indicó que seis de los lotes adjudicados fueron devueltos por los familiares, debido a que no estaban de acuerdo con la ubicación. Por lo anterior, el Estado indicó que la Secretaría Técnica de la CMAN solicitó a los peticionarios que emitieran un acta en la que hagan constar dicha decisión, para que puedan proceder a determinar las acciones a seguir para cumplir con la presente medida. En relación a los avances en la construcción del Santuario de la Memoria en el Distrito de Guadalupe, el Estado informó que en el año 2016, el Proyecto Especial Chavimochic, realizó el levantamiento topográfico del terreno, sin embargo, el Estado manifestó que debido al cambio de Alcalde no se ha logrado avanzar en el proyecto. En cuanto a la reparación económica, el Estado señaló que según la información presentada en mayo del presente año por parte del Banco de la Nación, el señor Jorge Alberto Noriega Flores no ha efectuado el cobro.

2061. Al respecto, la Comisión valora los importantes avances logrados por el Estado peruano en el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 111/10. La CIDH valora las diversas medidas reparatorias otorgadas a los familiares de las víctimas, e invita al Estado a continuar gestiones

correspondientes para concretar las medidas en materia de vivienda, así como la implementación del “Área de Reserva Santuario Coscobamba.” Al mismo tiempo, la CIDH insta a los peticionarios a suministrar la información que consideren pertinente a la brevedad.

2062. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de estas recomendaciones.

### **Casos 10.247 y otros, Informe No. 101/01, Luis Miguel Pasache Vidal y otros (Perú)**

2063. En el Informe No. 101/01 de fecha 11 de octubre de 2001, la CIDH concluyó que el Estado de Perú era responsable de: a) la violación del derecho a la vida y a las garantías y la protección judiciales consagrados en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana; b) la violación del derecho a la libertad personal establecido en el artículo 7 de la Convención Americana; c) la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, y de su deber de prevenir y sancionar la tortura establecido en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura; d) la violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica consagrado en el artículo 3 de la Convención; y e) la violación de los derechos del niño establecidos en el artículo 19 de la Convención Americana. Ello en perjuicio de las personas que señala el informe.

2064. La Comisión formuló al Estado peruano las siguientes recomendaciones:

1. Dejar sin efecto toda decisión judicial, medida interna, legislativa o de otra naturaleza, que tienda a impedir la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de las ejecuciones sumarias y desaparición de las víctimas relacionadas en el párrafo 259. En tal virtud, el Estado también debe dejar sin efecto las Leyes N<sup>o</sup> 26479 y 26492.
2. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar las circunstancias de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de las víctimas y para sancionar a los responsables de acuerdo con la legislación peruana.
3. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban una adecuada y oportuna indemnización, por las violaciones aquí establecidas.
4. Adherir a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

2065. Respecto del caso 10.247, APRODEH afirmó que en mayo de 2008 se abrió proceso penal contra Jesús Miguel Ríos Sáenz, Walter Elias Lauri Morales o Walter Elias Ruiz Miyasato y Máximo Augusto Agustín Mantilla Campos, por el delito de secuestro y homicidio calificado en agravio de Luis Miguel Pasache Vidal. Según lo alegado, se ha concluido la etapa de instrucción, encontrándose pendiente el pronunciamiento del Fiscal Superior. En cuanto al caso 11.501, APRODEH indicó que el 2 de junio de 2010 la Sala Penal Nacional emitió sentencia absolutoria a favor de Santiago Enrique Martín Rivas y reservó el juzgamiento de Eudes Najarro Gamboa hasta que sea habido. Tales personas han sido procesadas por homicidio calificado en agravio de Adrián Medina Puma. Según lo alegado, el Ministerio Público ha presentado recurso de apelación contra la resolución de la Sala Penal Nacional de 2 de junio de 2010.

2066. Con relación al caso 11.680, APRODEH indicó que el 31 de enero de 2008 el procesado José Alberto Delgado Bejarano fue absuelto de la acusación de homicidio calificado en agravio de Moisés Carbajal Quispe, y que dicha decisión fue mantenida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República. En cuanto al caso 11.132, señaló que la desaparición forzada de Edith Galván Montero continúa en etapa de investigación ante la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial.

2067. La CIDH no recibió información actualizada sobre el cumplimiento de la segunda recomendación del informe 10/01 respecto de los siguientes casos allí comprendidos – 10.472, 10.805,

10.913, 10.947, 10.944, 11.035, 11.057, 11.065, 11.088, 11.161, 11.292, 10.564, 10.744, 11.040, 11.126, 11.179, 10.431, 10.523, 11.064 y 11.200.

2068. En cuanto a la primera recomendación del informe 101/01, APRODEH afirmó que si bien el Poder Judicial peruano ha declarado sin efecto las Leyes N° 26479 y 26492, el Poder Ejecutivo ha impulsado medidas legislativas cuya vigencia implicaría la obstaculización en la investigación de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

2069. Con relación a la tercera recomendación, la Comisión nota que los casos a los que se refieren los Informes No. 111/00 y 101/01 se encuentran comprendidos en los literales c) y d) del comunicado de prensa conjunto suscrito por la CIDH y el Estado peruano el 22 de febrero de 2001. En esa ocasión, Perú formalizó su compromiso de buscar soluciones integrales a las recomendaciones emitidas por la CIDH en más de cien informes finales sobre el fondo, adoptados de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos<sup>162</sup>.

2070. Los peticionarios señalaron durante el año 2010 que a pesar de las obligaciones asumidas en el comunicado conjunto, y de lo establecido en la Ley No 28592 “Ley del Plan Integral de Reparaciones”, hasta el momento se encuentra pendiente el pago de indemnizaciones. Señalaron que si bien el Decreto Supremo N° 005-2002-JUS de abril de 2003 reguló algunas modalidades de reparación no dineraria en materia de vivienda, educación y salud, el Estado peruano ni siquiera ha identificado el terreno que podría ser adjudicado a los familiares de las víctimas en los casos 10.805, 10.913, 11.035, 11.605, 11.680, 10.564, 11.162, 11.179 y 10.523.

2071. Los peticionarios indicaron que desde el 2003 se ha adjudicado al Ministerio de Justicia un terreno en el sector de Huachipa, distrito de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, para que fuese entregado a 200 víctimas o sus familiares, en algunos de los casos referidos en el comunicado de prensa conjunto del 22 de febrero de 2001, entre los cuales se encuentran los de número 10.247, 10.472, 10.878, 10.994, 11.051, 11.088, 11.161, 11.292, 10.744, 11.040, 11.126, 11.132, 10.431, 11.064 y 11.200, comprendidos en el Informe 101/01. Sin embargo, destacaron que el Estado peruano no ha adoptado medidas en aras de regularizar la ocupación y titulación de los lotes del aludido terreno. Señalaron que ante esa omisión, algunos beneficiarios han establecido habitaciones de forma precaria y sin acceso a servicios básicos de saneamiento, sometiéndose asimismo a constantes saqueos e invasiones por parte de terceros.

2072. Según los peticionarios, el Ministerio de Justicia ha condicionado la entrega final del terreno a una evaluación de riesgo, debido a la reactivación de una fábrica de armas del Ejército contigua al mismo. Sin embargo, señalaron que a través del Oficio N° 709-2010-MML/SGDC, la Sub Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha informado que el terreno de Huachipa se encuentra habilitado para la construcción de viviendas, sin que exista impedimento alguno para la regularización de los lotes a favor de los 200 beneficiarios.

2073. Finalmente, en cuanto a la cuarta recomendación del Informe 101/01, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas fue ratificada el 8 de febrero de 2002 y entró en vigor el 13 de febrero del mismo año en el Perú.

2074. Durante al año 2011, el Estado presentó información en relación a las medidas adoptas en materia de vivienda, educación y salud. En cuanto a las reparaciones en vivienda, el Estado señaló que mediante D.S. N° 014-2006-JUS se autorizó al Ministerio de Justicia a que adopte las acciones necesarias para efectuar la transferencia a título gratuito del 50% del terreno denominado Sublote N° 01, ubicado en la avenida Central, localidad de Huachipa, distrito de Lurigancho, provincia y departamento de Lima. El Estado indicó que durante la reunión de trabajo celebrada durante el 141º período ordinario de la CIDH se comprometió a: 1) aprobar sin mayor dilación el Decreto Supremo por el cual se transfiere la propiedad de

<sup>162</sup> Véase [www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm](http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm).

los lotes del terreno de Huachipa a las 200 víctimas beneficiadas por esta medida; 2) informar a la Comisión en el plazo de dos meses sobre las medidas que el Estado adopte para identificar los posibles terrenos de la reparación en vivienda, en relación con otras 307 víctimas que no han sido atendidas. Igualmente informó que el 5 de abril de 2011, el Ministerio de Justicia remitió información referida a la transferencia de la propiedad del terreno Lote 1-B, así como la necesidad de subsanar algunas contingencias.

2075. Respecto de las reparaciones en educación, el Estado informó que mediante Decreto Supremo N° 038-2002-ED de 13 de noviembre de 2002, se dispuso la exoneración a las víctimas o familiares comprendidos en el DS N° 005-2002-JUS, del examen de ingreso a los institutos de Educación Superior – Tecnológicos, Pedagógicos y Artísticos de carácter público a nivel nacional, siempre que tengan certificado de haber concluido la Educación Secundaria. Adicionalmente, el Estado indicó que igualmente, durante la reunión de trabajo celebrada durante el 141º período ordinario de sesiones de la CIDH, se comprometió a implantar los puntos de educación acordados en el Decreto Supremo N° 005-2002-JUS, relativos al Programa de Reparaciones, y que se encuentran orientados: 1) a extender la condición de beneficiarios de reparaciones en educación a los hijos de las víctimas muertas y desaparecidas, y los hijos producto de violación sexual, que no necesariamente interrumpieron sus estudios como consecuencia de la violencia; y 2) a establecer como componentes del Programa: la reserva de vacantes, programa de becas descentralizado, programa especial de aprendizaje continuo y plan de actualización para la promoción de la inserción laboral y desarrollo de capacidades empresariales. En este sentido, el Estado informó que proporcionará a las Universidades e Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos de carácter público la base de datos del Registro Único de Víctimas y el listado de casos comprendidos en el Comunicado Conjunto de 22 de febrero de 2001.

2076. En relación a las reparaciones en materia de salud, el Estado informó que mediante Resolución Jefatural N° 082-2003/SIS se incorporó al SIS a las víctimas de violación a derechos humanos y sus familiares reconocidos por la CIDH. Señaló que a la fecha el Ministerio de Salud reporta un total de 191 beneficiarios afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y 68 beneficiarios afiliados a otro tipo de seguro. Indicó que mediante Acuerdo de Entendimiento de 29 de marzo de 2011, durante el 141º período ordinario de sesiones de la CIDH se acordó que para asegurar que los beneficiarios no encuentren obstáculos a la hora de probar su filiación al SIS, el Estado por medio del Ministerio de Salud, emitirá una carta en el plazo máximo de dos meses a cada uno de los beneficiarios que acredite su condición, de afiliados al SIS de por vida.

2077. Los peticionarios, en comunicación de 22 de noviembre de 2011, informaron que aunque se aprecian algunos avances respecto de los compromisos asumidos por el Estado en el Acta de Entendimiento suscrito durante el 141º período ordinario de sesiones de la CIDH, les causa una profunda preocupación que el Estado no haya concretado a la fecha medidas previamente anunciadas respecto a la reparación en vivienda, así como de algunos aspectos concernientes a las reparaciones económicas en materia de salud y educación.

2078. El Estado informó, mediante comunicación de 20 de diciembre de 2012, que los familiares de las víctimas se encuentran cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS), contando con acceso universal a servicios de salud en los centros adscritos al lugar de su domicilio. Con relación a la reparación en materia de vivienda, afirmó que “viene avanzando en la ejecución de la reparación [respectiva] a doscientos (200) beneficiarios, del total de víctimas comprendidas en el Decreto Supremo N° 005-2002-JUS, o a sus herederos legales, según el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Supremo N° 014-2006-JUS. En cuanto a las reparaciones económicas, Perú indicó que se encuentra previsto el pago de 10.000 nuevos soles por víctima comprendida en el comunicado de prensa conjunto de 22 de febrero de 2001 y señaló que “viene realizando todas las gestiones pertinentes con la finalidad de dar cumplimiento a este extremo”.

2079. No obstante, y dado que la recomendación 3 de los Informes N° 111/00, N° 101/01 y 112/00 se encuentran comprendida en los literales c) y d) del comunicado de prensa conjunto suscrito por la CIDH y el Estado peruano el 22 de febrero de 2001, la CIDH tendrá en cuenta la información aportada en este sentido por los peticionarios durante el año 2012. Al respecto, los peticionarios presentaron información en materia de justicia, vivienda, educación y salud.

2080. Respecto de las acciones emprendidas por el Estado a fin de investigar y sancionar a los presuntos responsables, los peticionarios mostraron su preocupación por el Acuerdo Plenario N° 9/2009 de la Corte Suprema de la República de Perú, ya que exige la condición de funcionarios públicos a los presuntos responsables de las desapariciones forzadas al momento de la incorporación de esta figura penal en la legislación peruana en 1991.

2081. En relación a las reparaciones en materia de salud, los peticionarios informaron que en este período se suscitaron nuevos problemas como consecuencia de la intervención del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que es la entidad dependiente del Ministerio de Inclusión Social que aprueba o no la condición de pobreza y pobreza extrema de las personas que requieren la afiliación al SIS gratuito, ya que ha rechazado la afiliación de algunos familiares de las víctimas. Los peticionarios indicaron que el Estado debería incluir la condición de “afectado por violencia política”, a fin de evitar problemas de este tipo.

2082. Respecto de las reparaciones en materia de educación, los peticionarios comunicaron que es una demanda de los beneficiarios la posibilidad de ceder el beneficio en educación a un familiar, la cual ha sido apoyada por la Defensoría del Pueblo, y que hasta la fecha el Estado no atiende. En relación con las reparaciones sobre vivienda, los peticionarios informaron que si bien el Estado ha realizado algunas acciones que beneficiarían a 200 víctimas de las 507 comprendidas en los literales “c” y “d” del comunicado de prensa conjunto, aún no se han logrado definir las medidas efectivas que beneficiarían al restante grupo de víctimas. Indicaron que en junio de 2012, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un informe de evaluación de riesgos en el que concluyó que el cambio de condición de riesgo muy alto a medio. Informaron que las víctimas y sus familiares se encuentran bajo una situación agobiante, pues se sienten muy decepcionados por la excesiva dilación del Estado para cumplir con el compromiso de transferir la propiedad de los lotes, y que muchos de ellos vienen ocupando el terreno a pesar de la falta de servicios básicos y de seguridad en la zona.

2083. En cuanto a la reparación económica, los peticionarios informaron que existían algunas dificultades a fin de incorporar en el Registro Único de Víctimas (RUV) a algunas de las víctimas y sus familiares, lo cual constituye un requisito para ser beneficiario del programa de reparación económica. En este sentido señalan que además de las exclusiones que establece la ley de reparaciones en su artículo 4, sólo serían beneficiarios de reparación económica aquellos casos de tortura en los que se acredite discapacidad permanente, y no serían beneficiarias las personas que hubieran sido objeto de desapariciones forzadas, pero que hubieran aparecido posteriormente con vida.

2084. En relación a la reparación relativa a vivienda, los peticionarios informaron que hasta la fecha el Estado no ha aprobado el Decreto Supremo que autorizaría la transferencia de la propiedad del terreno ubicado en Huachipa. Indicaron, igualmente, que el Estado no les ha informado sobre las gestiones que ha realizado para ubicar terrenos similares en relación con las víctimas y/o familiares no incluidas en el terreno de Huachipa. Respecto a las acciones emprendidas por el Estado en materia de salud, los peticionarios señalaron que el Estado no ha informado a la fecha si ha subsanado las dificultades de afiliación al SIS de las víctimas, ni las deficiencias en la atención de los beneficiarios de esta medida señaladas en años anteriores. En relación con las medidas económicas de reparación, los peticionarios indicaron que si bien el Estado ha venido pagando indemnizaciones dentro del alcance de la Ley N° 28593 Plan Integral de Reparaciones, algunas víctimas y/o familiares no pueden ser incluidas bajo los alcances de la misma, por lo que el Estado debe implementar medidas de reparación económica específicas fuera del alcance de la anterior ley. Por último, y respecto a la reparación en materia de educación, los peticionarios señalaron que si bien habían enviado al Estado un listado con los nombres y datos de las personas beneficiarias de esta reparación, el Estado no les ha informado a la fecha sobre qué acciones ha tomado al respecto, y tampoco han recibido respuesta respecto a la solicitud realizada consistente en que se pueda transferir este beneficio a otro familiar.

2085. El 27 de diciembre de 2013, el Estado peruano informó que aún continúan bajo estudio los proyectos de ley relacionados con la tipificación del delito de desaparición forzada de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, y dio detalle sobre los aspectos procesales de dichos trámites.

2086. La CIDH solicitó información actualizada a las partes el 30 de septiembre de 2015. Sin embargo, los peticionarios no presentaron información actualizada en el plazo fijado por la CIDH.

2087. El 9 de noviembre de 2015, el Estado indicó en relación al compromiso de llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva, que existe un proceso penal en trámite por el secuestro y posterior homicidio de Luis Miguel Pasache Vidal, el cual se encuentra en etapa de juicio oral que se reinició el 26 de febrero de 2015.

2088. El 22 de noviembre de 2015, el Estado presentó información en relación al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 101/01. En relación a la primera recomendación, el Estado señaló que en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Barrios Altos vs Perú*, ha dejado sin efecto las leyes No. 26479 y 26492. Al respecto, es de indicar que en la Resolución de 22 de septiembre de 2005 sobre la supervisión de cumplimiento de la sentencia del *Caso Barrios Altos*, la Corte Interamericana de Derechos Humanos constató que Perú había cumplido con la aplicación de lo dispuesto por la Corte en su sentencia de interpretación de la sentencia de fondo de 3 de septiembre de 2001 en este caso “sobre el sentido y alcances de la declaración de ineficacia de las Leyes N° 26479 y [N°] 26492” (punto resolutivo 5.a) de la Sentencia sobre Reparaciones de 30 de noviembre de 2001)<sup>163</sup>.

2089. El 21 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes. A la fecha de cierre de este informe la parte peticionaria no ha presentado información.

2090. El 3 de marzo de 2017, el Estado informó sobre el fallecimiento del presunto autor mediato de los delitos en contra de Luis Miguel Pasache Vidal.

2091. El 26 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento. Sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe la parte peticionaria no ha presentado información.

2092. El 27 de octubre de 2017, el Estado reiteró en relación a la recomendación 1) la información suministrada con anterioridad. Adicionalmente, informó que el tipo penal de desaparición forzada previsto en el artículo 320 del Código Penal peruano, se modificó mediante el artículo 2 del Decreto Legislativo No. 1351, publicado el 7 de enero de 2017. Asimismo, informó que dicha modificación fue corregida mediante *Fe de Erratas* publicada el 10 de enero de 2017, e indicó que el artículo 320 del Código Penal quedó de la siguiente forma:

*“Artículo 320.- Desaparición forzada de personas  
El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel, que de cualquier forma priva a otro de su libertad y se haya negado a reconocer dicha privación de libertad o a dar información cierta sobre el destino o el paradero de la víctima, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de treinta años e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1) y 2)...”*

2093. Por lo anterior, el Estado consideró que con la modificación del artículo 320 del Código Penal se logró la armonía y consistencia de la legislación peruana con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2094. En una serie de casos anteriores y de nuevo en su Informe Anual de 2016, la CIDH indicó que la tipificación de la desaparición forzada en la legislación peruana no era consistente con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas dadas las limitaciones establecidas en el Código Penal del Perú al restringir la autoría de la desaparición forzada a los “funcionarios o servidores públicos” sin incluir la posibilidad de que los hechos fueran cometidos por particulares, que actúan con tolerancia o

<sup>163</sup> Corte IDH, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005, Caso *Barrios Altos*, Cumplimiento de Sentencia. DECLARA. Punto 1 literal b.

aquiescencia del Estado; así como la falta de referencia en la misma normativa del elemento característico de la desaparición forzada consistente en la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de las personas y por no dejar huellas o evidencias.

2095. Al respecto, se observa que el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de personas, establece el compromiso de los Estados ratificantes de “tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención” y “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

2096. Derivado de lo anterior, se observa que el tipo penal establecido en la nueva legislación incluye los elementos de a) la privación de la libertad de una persona, b) en cualquiera de sus formas, c) que la conducta sea cometida por agentes del estado o incluso particulares que actúan con el consentimiento o aquiescencia del Estado; d) y la denegación de la información sobre el paradero de la víctima o negación de reconocimiento de la privación de la libertad. En ese sentido, la Comisión considera que el artículo que tipifica la desaparición forzada es consistente con las definiciones establecidas en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

2097. Por lo anterior, la CIDH toma nota de la información suministrada por el Estado en relación a la modificación del artículo 320 de Código Penal, y considera que la recomendación 1) se ha cumplido totalmente, al ampliar la restricción preexistente sobre la autoría de la desaparición forzada a funcionarios, a servidores públicos y a cualquier otra persona que actúa con tolerancia o aquiescencia del Estado. Asimismo, se observa que la normativa ahora hace referencia al elemento característico de la desaparición forzada consistente en la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de las personas.

2098. En relación a la segunda recomendación, el Estado reafirmó que se encuentra en trámite el proceso penal bajo el No. 935-2007 contra Agustín Mantilla Campos, Jesús Miguel Ríos Sáenz y otros por el delito de secuestro y posterior asesinato de Luis Miguel Pasache Vidal. Este proceso actualmente se encuentra en juicio oral en etapa de testigos, a la espera de una audiencia que tendrá lugar el 20 de noviembre de 2016. El Estado informó igualmente que el señor Agustín Mantilla Campos falleció el 20 de noviembre de 2015. Adicionalmente, el 27 de octubre de 2017, el Estado reiteró que el proceso penal No. 935-2017 continúa en fase de juicio oral, precisamente en etapa de testigos. Asimismo, indicó que el 13 de septiembre de 2017 se realizó la sesión No. 68 en la Sala Penal Nacional, con la finalidad de continuar con el debate oral. Al respecto, la CIDH valora la información suministrada por el Estado, y le insta para avanzar rápidamente en el proceso penal correspondiente.

2099. En 1 de noviembre de 2017, el Estado informó que en relación a la recomendación 3), la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel reservó dos lotes de terreno hasta que se logre constatar el vínculo del señor Pasache Vidal con el terrorismo.

2100. En relación a la tercera recomendación, la CIDH no cuenta con suficientes elementos sobre a) la aprobación del Decreto Supremo que autorizaría la transferencia de la propiedad del terreno ubicado en Huachipa; y b) el cumplimiento de los rubros de educación, salud y vivienda. Por lo anterior, la CIDH insta a las partes a avanzar conjuntamente en la definición de las medidas concretas que deban efectuarse para finalizar el cumplimiento de dicha recomendación. En particular, la CIDH nota que en sus escritos pasados, la parte peticionaria reconoció avances en la implementación de las medidas de reparación, y asimismo indicaron que habría un grupo de víctimas o familiares que no habrían podido acceder a la reparación a través de la Ley N° 28593 Plan Integral de Reparaciones, y que dicha información habría sido remitida al Estado. En ese sentido, la CIDH quedaría a la espera de la información adicional que pueda presentar el Estado sobre este punto a efectos de valorar el cumplimiento de la tercera recomendación.

2101. Finalmente, en relación a la cuarta recomendación, el Estado precisó que el 8 de febrero de 2002 ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual entró en vigor el 13 de febrero del mismo año. La CIDH observa que, efectivamente la información pública del estado de ratificaciones del tratado, da cuenta de la ratificación y depósito de dicho instrumento. Luego de verificar el estatus de las ratificaciones de dicho tratado, la CIDH declara que la recomendación 4 se encuentra cumplida.

2102. La Comisión valora la información aportada por el Estado y al respecto verifica que ha dado total cumplimiento a la recomendación 1 y 4 establecida en el Informe No. 101/01. Sin embargo, la CIDH observa que no cuenta información actualizada por parte sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a la segunda y tercera recomendación. Al respecto la CIDH invita a las partes a presentar información sobre este punto.

2103. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones, por lo cual seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 11.099, Informe No. 112/00, Yone Cruz Ocalio (Perú)**

2104. En el Informe No. 112/00 de fecha 4 de diciembre de 2000, la CIDH concluyó que el Estado peruano: a) a través de efectivos de la Policía Nacional, detuvo al señor Yone Cruz Ocalio el 24 de febrero de 1991, en la estación agropecuaria Tulumayo, Aucayacu, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco, Perú, de donde habría sido conducido a la Base Militar de Tulumayo, y posteriormente procedió a desaparecerlo; b) que en consecuencia era responsable de la desaparición forzada del señor Yone Cruz Ocalio; c) que por ello, violó el derecho a la libertad (artículo 7), el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la vida (artículo 4), el derecho a la personalidad jurídica (artículo 3) y el derecho a un recurso judicial efectivo (artículo 25) consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y d) que incumplió su obligación general de respetar y garantizar el ejercicio de estos derechos consagrados en la Convención, en los términos del artículo 1(1) de dicho instrumento.

2105. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar las circunstancias de la desaparición del señor Yone Cruz Ocalio y para sancionar a los responsables con arreglo a la legislación peruana.
2. Dejar sin efecto toda medida interna, legislativa o de otra naturaleza, que tienda a impedir la investigación, el procesamiento y la sanción de los responsables de la desaparición forzada del señor Yone Cruz Ocalio. En tal virtud, el Estado debe dejar sin efecto las Leyes Nos. 26479 y 26492.
3. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares del señor Yone Cruz Ocalio reciban adecuada y oportuna reparación por las violaciones aquí establecidas.

2106. El 5 de diciembre de 2008 el Estado informó que el 25 de octubre de 2002 el Fiscal Especializado para Desapariciones forzadas, ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas resolvió remitir a la Fiscalía Provincial Mixta de Aucayacu los actuados de los expedientes que comprenden como agraviados a Yone Cruz Ocalio, entre otros. Indicó que por Resolución de la Fiscalía Provincial Mixta de Leoncio Prado-Aucayacu de 9 de agosto de 2004, el Fiscal consideró que resultaba pertinente reunir mayores elementos de juicio en cuanto a la presunta comisión del delito de secuestro en agravio del señor Cruz Ocalio y resolvió ordenar varias diligencias.

2107. En relación con la segunda recomendación, el Estado peruano ha señalado en reiteradas ocasiones que existe una práctica de sus instituciones, fundada en la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altos, orientada a que las amnistías no pueden ser válidamente opuestas a las investigaciones

que se emprenden para la identificación y posterior sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.

2108. El 16 de noviembre de 2012 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en la implementación de las recomendaciones previamente referidas. Los peticionarios no presentaron información en el plazo fijado. El 20 de diciembre de 2012 el Estado presentó un informe en el que describió las medidas que viene adoptando en materia de reparación. Dicho informe reitera la información presentada en los demás casos abarcados por el comunicado de prensa conjunto de 22 de febrero de 2001, cuyo resumen se encuentra en el seguimiento realizado por la Comisión respecto de los Casos 10.247 y otros, Informe No. 101/01, Luis Miguel Pasache Vidal y otros (Perú).

2109. El 2 de febrero de 2014, el Estado informó que el Código Penal vigente establece el delito de desaparición forzada, sin embargo, el Estado reconoce que el tipo jurídico debe ser adecuado a las obligaciones derivadas de los tratados y el derecho internacional, e informa que existe una propuesta de reforma legislativa sobre la desaparición forzada que está siendo discutida ante el Congreso de la República bajo los proyectos de ley 1406/2012 CR, 1615/2012 CR y 1687/2012 CR, que buscan reformar el artículo 320 del Código Penal, proponer la Ley de Delitos Contra el DIDH y DIH e incorporar un capítulo al Código Penal respectivamente.

2110. La CIDH solicitó información actualizada a las partes el 30 de septiembre de 2015. Sin embargo, ni el Estado ni los peticionarios presentaron información actualizada en el plazo fijado por la CIDH.

2111. El Estado, por su parte, reiteró el 9 de noviembre de 2015, que a la fecha no ha sido posible localizar los restos de Yony Cruz Ocalio, y que continua en la búsqueda, por lo cual se ha realizado una inspección preliminar arqueológico forense en la localidad, de Aucayacu, en donde se encontró una fosa común, para establecer la viabilidad de la diligencia de exhumación. Al respecto, la CIDH quedaría a la espera de información adicional sobre el resultado de la inspección preliminar y la determinación de las pruebas de ADN y demás formas de identificación de dichos restos.

2112. El 21 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en la implementación de las recomendaciones establecidas en el Informe No. 112/00. El Estado presentó información actualizada el 22 y 28 de noviembre de 2016. A la fecha de cierre de este informe, los peticionarios no han presentado información.

2113. En comunicación del 22 de noviembre de 2016, el Estado precisó en relación a la investigación sobre la desaparición forzada del señor Yone Cruz, que mediante Resolución de Ampliación de Investigación No. 01-2016 del 17 de noviembre de 2016, la Fiscalía resolvió ampliar el plazo de la investigación por su complejidad y al respecto, programó distintas diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos con relacionados a la desaparición del señor Yone Cruz.

2114. En relación a la segunda recomendación, el Estado señaló que en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Barrios Altos vs Perú*, ha dejado sin efecto las leyes No. 26479 y 26492. Sobre el particular, la parte peticionaria no ha presentado información. Al respecto, es de indicar que en la Resolución de 22 de septiembre de 2005 sobre la supervisión de cumplimiento de la sentencia del *Caso Barrios Altos*, la Corte Interamericana de Derechos Humanos constató que Perú había cumplido con la aplicación de lo dispuesto por la Corte en su sentencia de interpretación de la sentencia de fondo de 3 de septiembre de 2001 en este caso “sobre el sentido y alcances de la declaración de ineficacia de las Leyes N° 26479 y [N°] 26492” (punto resolutivo 5.a) de la Sentencia sobre Reparaciones de 30 de noviembre de 2001”<sup>164</sup>.

2115. Adicionalmente, en comunicación del 28 de noviembre de 2016, el Estado informó en relación a la tercera recomendación, que los padres del señor Cruz han sido inscritos en el Registro Único de

<sup>164</sup> Corte IDH, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005, Caso *Barrios Altos*, Cumplimiento de Sentencia. DECLARA. Punto 1 literal b.

Víctimas. Ambos han sido reconocidos como beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas mediante Resolución Ministerial No. 267-2014-JUS, con un monto de reparación ascendiente a la suma de S/. 5,000 soles. En este sentido, el Estado señaló que la indemnización fue cobrada el 28 de enero de 2015. Adicionalmente, los padres se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud como beneficiarios de reparaciones en salud. Al respecto, tomando en consideración la información presentada por el Estado, la CIDH decide declarar cumplida la recomendación 3.

2116. El 26 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento de las recomendaciones pendientes. Sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe la parte peticionaria no ha presentado información.

2117. El 27 de octubre de 2017, el Estado informó que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad del Distrito Fiscal de Huánuco, mediante Resolución No. 04-2017 del 9 de octubre de 2017, decidió ampliar el plazo de la investigación por su complejidad, por un plazo de 180 días.

2118. El 27 de octubre de 2017, el Estado reiteró en relación a la recomendación 2) la información suministrada con anterioridad. Adicionalmente, informó que el tipo penal de desaparición forzada previsto en el artículo 320 del Código Penal peruano, se modificó mediante el artículo 2 del Decreto Legislativo No. 1351, publicado el 7 de enero de 2017. Asimismo, informó que dicha modificación fue corregida mediante *Fe de Erratas* publicada el 10 de enero de 2017, e indicó que el artículo 320 del Código Penal quedó de la siguiente forma:

*“Artículo 320.- Desaparición forzada de personas*

*El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel, que de cualquier forma priva a otro de su libertad y se haya negado a reconocer dicha privación de libertad o a dar información cierta sobre el destino o el paradero de la víctima, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de treinta años e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1) y 2)...”*

2119. Por lo anterior, el Estado consideró que con la modificación del artículo 320 del Código Penal se logró la armonía y consistencia de la legislación peruana con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2120. En una serie de casos anteriores y de nuevo en su Informe Anual de 2016, la CIDH indicó que la tipificación de la desaparición forzada en la legislación peruana no era consistente con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas dadas las limitaciones establecidas en el Código Penal del Perú al restringir la autoría de la desaparición forzada a los “funcionarios o servidores públicos” sin incluir la posibilidad de que los hechos fueran cometidos por particulares, que actúan con tolerancia o aquiescencia del Estado; así como la falta de referencia en la misma normativa del elemento característico de la desaparición forzada consistente en la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de las personas y por no dejar huellas o evidencias.

2121. Al respecto, se observa que el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de personas, establece el compromiso de los Estados ratificantes de “tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención” y “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

2122. Derivado de lo anterior, se observa que el tipo penal establecido en la nueva legislación incluye los elementos de a) la privación de la libertad de una persona, b) en cualquiera de sus formas, c) que

la conducta sea cometida por agentes del estado o incluso particulares que actúan con el consentimiento o aquiescencia del Estado; d) y la denegación de la información sobre el paradero de la víctima o negación de reconocimiento de la privación de la libertad. En ese sentido, la Comisión considera que el artículo que tipifica la desaparición forzada es consistente con las definiciones establecidas en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

2123. Por lo anterior, la CIDH toma nota de la información suministrada por el Estado en relación a la modificación del artículo 320 de Código Penal, y considera que la recomendación 2) se ha cumplido totalmente, al ampliar la restricción preexistente sobre la autoría de la desaparición forzada a funcionarios, a servidores públicos y a cualquier otra persona que actúa con tolerancia o aquiescencia del Estado. Asimismo, se observa que la normativa ahora hace referencia al elemento característico de la desaparición forzada consistente en la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de las personas.

2124. La Comisión valora la información aportada por el Estado y al respecto verifica que ha dado total cumplimiento a las recomendaciones 2 y 3 establecidas en el Informe No. 112/00. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones, por lo tanto seguirá supervisando la recomendación 1.

**Caso 12.191, Informe No. 71/03, María Mamérita Mestanza (Perú)**

2125. El caso se refiere al sometimiento forzado de Maria Mamérita Mestanza a un proceso de esterilización quirúrgica que le ocasionó la muerte, así como la subsiguiente falta de investigación y sanción de los responsables por los hechos sucedidos. El 10 de octubre de 2003, mediante Informe No. 71/03, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso María Mamérita Mestanza.

2126. El acuerdo de solución amistosa aprobado por la Comisión incluye las siguientes secciones 1) Antecedentes; 2) Reconocimiento de responsabilidad; 3) Investigación; 4) Indemnización; 5) Exclusión del acuerdo del derecho de indemnización a cargo de los responsables penales; 6) Derecho de repetición del Estado; 7) Exención de tributos; 8) Prestaciones de Salud; 9) Prestaciones Educativas; 10) Otras prestaciones; 11) Modificaciones Legislativas y de Políticas Públicas; y otras cláusulas relativas a la base jurídica, interpretaciones, aceptación y homologación. En ese sentido a continuación se enuncian las cláusulas de compromisos sustanciales y el nivel de cumplimiento de cada una:

<b>Compromisos establecidos en el acuerdo de solución amistosa aprobado en el Informe No. 71/03</b>	<b>Estado de Cumplimiento</b>
<b>TERCERA: INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN</b>	
<p>El Estado Peruano se compromete a realizar exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares. En tal sentido, el Estado peruano se compromete a realizar las investigaciones administrativas y penales por los atentados contra la libertad personal, la vida, el cuerpo y la salud y, en su caso, a sancionar a:</p> <p>a. Los responsables de los actos de vulneración del derecho al libre consentimiento de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, para que se sometiera a la ligadura de trompas.</p> <p>b. El personal de salud que hizo caso omiso de la demanda de atención urgente de la señora Mestanza luego de la intervención quirúrgica.</p> <p>c. Los responsables de la muerte de la Sra. María Mamérita Mestanza Chávez.</p> <p>d. Los médicos que entregaron dinero al cónyuge de la señora fallecida a fin de encubrir las circunstancias del deceso.</p> <p>e. La Comisión Investigadora, nombrada por la Sub Región IV de Cajamarca del</p>	<p><b>EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO</b></p>

<p>Ministerio de Salud que cuestionablemente, concluyó con la ausencia de responsabilidad del personal de salud que atendió a la señora Mestanza.</p> <p>Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales, el Estado peruano se compromete a poner en conocimiento del Colegio Profesional respectivo las faltas contra la ética que se hayan cometido, a efectos de que conforme a su estatuto se proceda a sancionar al personal médico involucrado con los hechos referidos.</p> <p>Asimismo, el Estado se compromete a realizar las investigaciones administrativas y penales por la actuación de los representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial que omitieron desarrollar los actos tendientes a esclarecer los hechos denunciados por el viudo de la señora Mamérita Mestanza.</p>	
<p><b>CUARTA: INDEMNIZACION<sup>165</sup></b></p>	
<p>a. Daño Moral: El Estado Peruano otorga una indemnización a favor de los beneficiarios por única vez de diez mil dólares americanos (US \$10, 000.00 y 00/100) para cada uno de ellos, por concepto de reparación del daño moral, lo cual hace un total de ochenta mil dólares americanos (US \$80,000.00 y 00/100).</p> <p>Respecto a los menores de edad, el Estado, depositará la suma correspondiente en fondo de fideicomiso en las condiciones más favorables según la práctica bancaria. Las gestiones se realizarán conjuntamente con los representantes legales de la familia Salazar Mestanza.</p> <p>b. Daño emergente: El daño ocasionado como consecuencia directa del evento dañoso está constituido por los gastos en que incurrió la familia como consecuencia directa de los hechos. Estos gastos fueron los realizados para tramitar y hacer el seguimiento de la denuncia penal ante el Ministerio Público por homicidio culposo en agravio de María Mamérita Mestanza, así como el monto por concepto de gastos de velorio y entierro de la señora Mestanza. La suma por dicho concepto asciende a dos mil dólares americanos (US \$ 2,000.00 y 00/100), la cual deberá ser abonada por el Estado peruano a los beneficiarios.</p>	<p><b>CUMPLIMIENTO TOTAL</b></p>
<p><b>OCTAVA: PRESTACIONES DE SALUD</b></p>	
<p>El Estado Peruano se compromete a otorgar a los beneficiarios, por única vez, la suma de siete mil dólares americanos (US \$ 7,000.00 y 00/100), por concepto del tratamiento de rehabilitación psicológica, que requieren los beneficiarios como consecuencia del fallecimiento de la señora María Mamérita Mestanza Chávez. [...]</p> <p>Asimismo, el Estado peruano se compromete a brindar al esposo e hijos de María Mamérita Mestanza Chávez, un seguro permanente de salud a través del Ministerio de Salud o de la entidad competente. El seguro de salud para el cónyuge supérstite será permanente, y el de sus hijos, mientras no cuenten con un seguro de salud público y/o privado.</p>	<p><b>CUMPLIMIENTO TOTAL</b></p>
<p><b>NOVENA: PRESTACIONES EDUCATIVAS</b></p>	

<sup>165</sup> De acuerdo al texto del acuerdo, el Estado Peruano reconoce como únicos beneficiarios de cualquier indemnización a las personas de Jacinto Salazar Suárez, esposo de María Mamérita Mestanza Chávez y a los hijos de la misma: Pascuala Salazar Mestanza, Maribel Salazar Mestanza, Alindor Salazar Mestanza, Napoleón Salazar Mestanza, Amancio Salazar Mestanza, Delia Salazar Mestanza y Almanzor Salazar Mestanza.

<p>El Estado peruano se compromete a brindar a los hijos de la víctima educación gratuita en el nivel primario y secundario, en colegios estatales. Tratándose de educación superior, los hijos de la víctima recibirán educación gratuita en los Centros de Estudios Superiores estatales, siempre y cuando reúnan los requisitos de admisión a dichos centros educativos y para estudiar una sola carrera.</p>	<p><b>EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO</b></p>
<p><b>DECIMA : OTRAS PRESTACIONES</b></p>	
<p>El Estado peruano se compromete a entregar adicionalmente el monto de veinte mil dólares americanos (US \$ 20,000.00 y 00/100) al señor Jacinto Salazar Suárez para adquirir un terreno o una casa en nombre de sus hijos habidos con la señora María Mamérita Mestanza. [...]</p>	<p><b>CUMPLIMIENTO TOTAL</b></p>
<p><b>DECIMOPRIMERA: MODIFICACIONES LEGISLATIVAS Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR</b></p>	
<p>El Estado peruano se compromete a realizar las modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre los temas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, eliminando de su contenido cualquier enfoque discriminatorio y respetando la autonomía de las mujeres.</p> <p>Asimismo, el Estado peruano se compromete a adoptar e implementar las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo respecto a políticas públicas sobre Salud Reproductiva y Planificación Familiar, entre ellas las siguientes:</p> <p><i>a. Medidas de sanción a los responsables de violaciones y reparación a las víctimas</i></p> <p>45. Revisar judicialmente todos los procesos penales sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, para que se individualice y se sancione debidamente a los responsables, imponiéndoles, además, el pago de la reparación civil que corresponda, lo cual alcanza también al Estado, en tanto se determine alguna responsabilidad suya en los hechos materia de los procesos penales.</p> <p>46. Revisar los procesos administrativos, relacionados con el numeral anterior, iniciados por las víctimas y/o familiares, que se encuentran en trámite o hayan concluido respecto de denuncias por violaciones de derechos humanos.</p> <p><i>b. Medidas de monitoreo y de garantía de respeto de los derechos humanos de los y las usuarias de los servicios de salud</i></p> <p>V. Adoptar medidas drásticas contra los responsables de la deficiente evaluación pre-operatoria de mujeres que se someten a una intervención de anticoncepción quirúrgica, conducta en que incurren profesionales de la salud de algunos centros de salud del país. Pese a que las normas del Programa de Planificación Familiar exigen esta evaluación, ella se viene incumpliendo.</p> <p>VI. Llevar a cabo, permanentemente, cursos de capacitación calificada, para el personal de salud, en derechos reproductivos, violencia contra la mujer, violencia familiar, derechos humanos y equidad de género, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil especializadas en éstos temas.</p> <p>VII. Adoptar las medidas administrativas necesarias para que las formalidades establecidas para el estricto respeto del derecho al</p>	<p><b>EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO</b></p>

	consentimiento informado sean acatadas cabalmente por el personal de salud.	
VIII.	Garantizar que los centros donde se realizan intervenciones quirúrgicas de esterilización tengan las condiciones adecuadas y exigidas por las normas del Programa de Planificación Familiar.	
IX.	Adoptar medidas estrictas dirigidas a que el plazo de reflexión obligatorio, fijados en 72 horas, sea, sin excepción, celosamente cautelado.	
X.	Adoptar medidas drásticas contra los responsables de esterilizaciones forzadas no consentidas.	
XI.	Implementar mecanismos o canales para la recepción y trámite célere y eficiente de denuncias de violación de derechos humanos en los establecimientos de salud, con el fin de prevenir o reparar los daños producidos.	

2127. Durante el año 2017, la CIDH, recibió comunicaciones de las partes en relación al estado de cumplimiento de los compromisos pendientes de cumplimiento en virtud del Acuerdo de Solución Amistosa. Los peticionarios presentaron información actualizada en fecha 24 de mayo de 2017, 3 de agosto de 2017 y 13 de septiembre de 2017. Por su parte, el Estado presentó información 17 de mayo de 2017, 12 de abril de 2017, 24 de mayo de 2017, 29 de agosto de 2017 y 27 de octubre de 2017. Adicionalmente, las partes sostuvieron una reunión de trabajo el día 17 de marzo de 2017, con la facilitación del Comisionado Paulo Vannuchi, Relator de la CIDH para Perú.

2128. A continuación se actualiza con dicha información el estado de cumplimiento de las diferentes cláusulas del acuerdo de solución amistosa.

*Cláusula Tercera sobre investigación y sanción de los responsables de la muerte de Maria Mamérita Mestanza y Cláusula decimoprimer a) 1 y 2 sobre revisión judicial de todos los procesos penales sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar<sup>166</sup>*

2129. El Estado informó en el pasado que la Comisión Permanente de procesos disciplinarios de la Dirección Regional de Cajamarca, con fecha 9 de enero de 2001, había establecido que dos doctores fueron inhabilitados y que con fecha 18 de enero de 2001, se estableció la absolución de un médico obstetra, dos obstetricas, y una enfermera. El 21 de octubre de 2011 la Fiscalía de la Nación dispuso reabrir la investigación sobre la esterilización forzada de María Mamérita Mestanza y otras miles de mujeres, acaecidas en la segunda mitad de la década de los noventa. Al culminar el 143º período de sesiones la CIDH saludó la decisión de la Fiscalía y señaló que ello representa un paso inicial e importante “en relación con el compromiso del Estado de realizar una investigación exhaustiva de los hechos y de aplicar sanciones legales a los responsables, incluyendo funcionarios públicos”.

2130. Los peticionarios denunciaron en escrito del 26 de diciembre de 2014 que durante el año 2014 que el 22 de enero de 2014 se emitió una resolución que declaró no ha lugar formular denuncia penal contra varias autoridades que habrían llevado a cabo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Asimismo, la resolución habría declarado no ha lugar la denuncia penal contra varios médicos involucrados en los hechos específicamente relacionados con Maria Mestanza, y al mismo tiempo formalizó denuncia contra dos funcionarios de salud, un serumista y dos médicos legistas presuntamente

<sup>166</sup> Estas cláusulas se trataran conjuntamente por la acumulación del caso de Maria Mamérita Mestanza y la investigación de esterilizaciones forzadas en el año 2002.

responsables por la muerte de Maria Mestanza. Los peticionarios presentaron un recurso de queja el 28 de enero de 2014 alegando que los hechos ocurridos contra Maria Mestanza constituían un crimen de lesa humanidad y que existe una responsabilidad de autoridades políticas de ese momento como autores mediatos. De igual forma los peticionarios denunciaron en dicho recurso diferentes irregularidades que se presentaron a nivel procesal.

2131. El 21 de octubre de 2015, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con el acompañamiento de la Comisión, dentro del marco de su 156 Periodo Ordinario de Sesiones. Durante dicha reunión de trabajo la parte peticionaria observó positivamente avances como en la reapertura de la investigación penal de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, involucrando a más de 2000 víctimas. Al mismo tiempo, manifestaron su preocupación por el cumplimiento de las medidas de reparación dentro del marco del acuerdo. El Estado por su parte, expresó que en el marco del acuerdo de solución amistosa su obligación sobre la investigación penal se circunscribe a los hechos relativos a María Merita Mestanza.

2132. Los peticionarios señalaron el 27 de febrero de 2015 que el recurso de queja interpuesto contra la resolución de la Segunda Fiscalía Penal Supra Provincial de Lima, del 22 de enero de 2014, que archivaba la investigación en miles de casos de esterilizaciones forzadas, aún se encontraba en ese momento pendiente de revisión. Asimismo, los peticionarios consideraron que no se ha vinculado al proceso penal a todas las personas involucradas en los hechos incluyendo a las personas que realizaron la operación y las que omitieron brindar la atención post operatoria, entre otras. Asimismo, los peticionarios consideran que el Estado tiene la obligación de reparar a todas las víctimas de esterilizaciones forzadas “de manera independiente al proceso judicial”.

2133. En su escrito sobre seguimiento de 11 de noviembre de 2015, el Estado reiteró que el cumplimiento de la investigación se circunscribe únicamente al caso de Maria Mamérita Mestanza, y que la extensión a otras personas no se desprende del acuerdo. Sin embargo, el Estado informó que mediante Resolución de 6 de agosto de 2015, se dispuso declarar el asunto complejo y ampliar la investigación preliminar por un plazo de 180 días para realizar diligencias y actos de investigación dispuestos por el superior jerárquico, entre ellas la programación de la toma de declaraciones de las personas agraviadas, previa identificación de su lugar de domicilio. Asimismo, se solicitó documentación a quienes participaron en las actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, conforme al Programa Nacional de Reproducción y Planificación Familiar entre 1995 y 2005. La toma de declaraciones se dispuso para el 31 de agosto de 2015 hasta el 11 de septiembre de 2015, y un plazo de verificación de la calidad de agraviadas del 27 de septiembre de 2015 al 7 de octubre de 2015.

2134. La CIDH valora altamente la información proporcionada por las partes, y observa que han habido avances hacia el cumplimiento del compromiso asumido por el Estado en el acuerdo de solución amistosa. La CIDH también tuvo conocimiento de la emisión del Decreto Supremo que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995 y 2001 y crea el registro correspondiente. La CIDH aplaude esta medida, que demuestra el compromiso del Estado de continuar avanzando hacia el cumplimiento total de estas cláusulas de investigación.

2135. En relación a estas cláusulas, ambas partes han presentado sus posiciones respecto a la interpretación adecuada de las mismas. Los peticionarios han mantenido que la obligación del Estado peruano de investigar y sancionar, tanto penal como administrativamente, a los responsables materiales y mediatos de las violaciones cometidas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar debe cubrir el universo de las personas que se determinen fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos, por lo cual aún se mantiene pendiente de cumplimiento. El Estado, por el contrario, ha reiterado nuevamente que el cumplimiento de la investigación se circunscribe únicamente al caso de María Mamérita Mestanza, y que la extensión a otras personas no se desprende del acuerdo.

2136. En particular, los peticionarios en comunicación de noviembre de 2016, denunciaron que el 27 de julio de 2016 se emitió Resolución Fiscal N°16 que declaró nuevamente el archivamiento parcial de la Investigación Preliminar N°029-2011. Asimismo, la Resolución habría formalizado la denuncia en relación a

siete víctimas; e interpretó que el engaño no se encuentra acreditado en elementos objetivos, y podría haber sido “fácilmente superado” si las víctimas, “así sean quechua hablantes o iletradas” hubiesen actuado con la diligencia debida. Los peticionarios han indicado que dicha decisión no es acorde a la interpretación de los derechos humanos, en particular en cuanto al consentimiento previo. Así, los peticionarios han recalcado que para evaluar el consentimiento informado válido es necesario tomar en cuenta el contexto en que se desarrollan las personas, sus necesidades y las situaciones de vulnerabilidad que las afectan.

2137. El Estado por su parte, informó en comunicación de octubre de 2016 que las peticionarias presentaron recursos de queja contra la Resolución Fiscal el 3 y 4 de agosto de 2016. Así, el 10 de agosto de 2016, la Segunda Fiscalía Supraprovincial habría concedido los recursos de queja, y el 18 de agosto de 2016, habría dispuesto devolver todo lo actuado a la Fiscalía de origen para que emitiera un nuevo pronunciamiento, basado en la indebida desacumulación de la acumulación de la investigación. El Estado aclaró que, a la fecha, después de haber sido otorgado prorrogas, la Fiscalía todavía se encuentra dentro del plazo para formular el pronunciamiento solicitado por el Fiscal Superior a fin de que este pueda proceder a adoptar respecto de los recursos de quejas interpuestos.

2138. La CIDH valora la información proporcionada por las partes, y observa con preocupación la información relacionada con la Resolución Fiscal No. 16 de 27 de julio de 2016, en cuanto a la posibilidad existente del cierre de toda investigación. De esta forma, la CIDH queda a la espera de información adicional sobre los actos procesales subsiguientes a dicha Resolución Fiscal, en particular la decisión sobre los recursos de quejas presentados.

2139. El 1 de diciembre de 2016, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con el acompañamiento de la Comisión, dentro del marco de su 159 Período Ordinario de Sesiones. Durante dicha reunión de trabajo el Estado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se comprometió a convocar a una reunión exploratoria a los representantes legales de la familia Mestanza, representantes de asociaciones de víctimas y de organizaciones de sociedad civil para abordar la cuestión de un Grupo de Trabajo sobre reparaciones integrales a favor de las víctimas de esterilizaciones forzadas. La CIDH queda a la espera de información adicional sobre las medidas exploradas en el marco de dicho Grupo de Trabajo.

2140. El 17 de marzo de 2017, las partes sostuvieron una reunión de trabajo con la facilitación de la Comisión, en el marco del 161 Período Ordinario de Sesiones. En dicha reunión, los peticionarios manifestaron el incumplimiento de la obligación de investigación. Asimismo, informaron que con posterioridad a la reunión de trabajo de diciembre de 2016, el Estado archivó la investigación. Por su parte, el Estado indicó que en la Fiscalía existe un proceso en trámite sobre el presente caso y otro grupo de presuntas víctimas. Adicionalmente, informó que debido a la independencia de poderes, el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en los Asuntos del Ministerio Público, por lo que el Estado solamente ha realizado exhortos de celeridad y ha manifestado su posición ante la Fiscalía.

2141. El 12 de abril de 2017, el Estado informó que el 6 de diciembre de 2016, la Segunda Fiscalía Supraprovincial emitió una Resolución Fiscal mediante la cual decidió no haber lugar a la formalización de la denuncia penal en contra de Alberto Fujimori y otros, por la presunta comisión de delitos graves seguidos de muerte y lesiones graves. Asimismo, informó que el 12 de diciembre de 2016, representantes de DEMUS y el abogado Milton Campos interpusieron un recurso de queja contra la mencionada Resolución Fiscal, por lo que no es un pronunciamiento definitivo ante el cual no se pueda presentar recurso. Finalmente, el Estado agregó que el 9 de marzo de 2017, la Tercera Fiscalía Supranacional, mediante informe N° 01-2017-3°FPS-MP-FN, notificó sobre las acciones dentro del proceso penal y resaltó que el mismo se encuentra pendiente de resolver en la Sala Penal Nacional.

2142. El 12 de abril de 2017, la CIDH le transmitió a las partes los estándares y jurisprudencia sobre el derecho de acceso a la información y al consentimiento informado en salud y casos de esterilización forzada, así como el Informe de Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos, según lo solicitado por las partes en la reunión de trabajo mencionada. El 24 de mayo de 2017, el Estado informó a la CIDH sobre la apropiada recepción y distribución del material al Director de

Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Procurador Público Adjunto Supranacional, al Fiscal de la Nación y al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción.

2143. El 24 de mayo de 2017, los peticionarios reiteraron información proporcionada en escritos anteriores y solicitaron a la CIDH su pronunciamiento con respecto a la interpretación de las cláusulas terceras y décimo primera del acuerdo de solución amistosa. Asimismo, expresaron que la resolución de la Segunda Fiscalía Supranacional del Distrito de Lima contradice el deber de ejercer el control de convencionalidad y el deber de actuar con debida diligencia frente a la violencia de género. Adicionalmente, consideraron que la Comisión no puede dar por cumplida la cláusula del acuerdo, si aún se encuentra pendiente el recurso de queja presentado ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial.

2144. El 27 de octubre de 2017, el Estado reiteró la información suministrada en informes anteriores y destacó que por el momento no tenía información adicional.

*Cláusula novena: prestaciones educativas*

2145. En relación a la cláusula sobre prestaciones educativas, los peticionarios han indicado en comunicaciones escritas y en reuniones de trabajo ante la CIDH, que el Estado no ha garantizado el acceso a la educación de los beneficiarios del acuerdo, toda vez que no existen establecimientos educativos del nivel correspondientes en su zona habitacional. En este sentido, los peticionarios plantearon durante la última reunión de trabajo en el marco del 153º período de sesiones, la posibilidad de que el Estado les apoyara con los gastos de traslado, manutención, y vivienda en una zona que contara con el establecimiento educativo adecuado o, en su defecto, que el Estado corriera con los gastos de transporte diario que requieran los beneficiarios para acceder efectivamente al servicio educativo acordado.

2146. En la reunión de trabajo de 14 de noviembre de 2015, el Estado se comprometió a apelar al Ministerio de Educación para que se le otorgue una beca a los hijos de la víctima que quieran estudiar. Al respecto, el Estado informó el 11 de noviembre de 2015 que las partes sostuvieron una reunión de trabajo en el país en julio de 2015, en la cual se dialogó sobre las diferentes modalidades para acceso a la educación, y la posibilidad de acceder a una beca para finalizar los estudios.

2147. Las partes han proporcionado información según la cual sólo dos de los hijos de la víctima desean continuar sus estudios, Napoleón Salazar Mestanza y Almanzor Salazar Mestanza. La Comisión queda a la espera de información adicional relacionada con las medidas concretas que se hayan explorado y los avances hacia la materialización de la medida en beneficio a favor de estas dos personas. Por ejemplo, el Estado indicó en su escrito sobre el seguimiento, que Almanzo Salazar Mestanza se encuentra cursando cuarto grado de secundaria, y que una vez finalizado la educación básica regular podría acceder a una beca universitaria o a otro tipo de estudios superior.

2148. Por otro lado, los peticionarios indicaron que debe salvarse el derecho de los demás hijos de Maria Mamérita Mestanza a obtener una reparación en educación, dado que por el transcurso del tiempo y por la inacción del Estado, no pudieron estudiar con anterioridad. El Estado por su parte, indicó que los otros hijos de la víctima podrían acceder a la atención educativa bajo la modalidad de educación básica alternativa a través del CEBA o CETPROS en horario nocturno o los fines de semana. La CIDH ha tomado nota de las posiciones de las partes y considera que al estar el acuerdo de solución amistosa basado en la voluntad de las partes, el tema debe ser tratado conjuntamente por las partes directamente con las víctimas<sup>167</sup>.

2149. En la reunión de trabajo de 2 de diciembre de 2016, el Estado se comprometió a obtener respuesta oficial del Ministerio de Educación en relación a la concreción de una beca integral de estudios superiores en beneficio de Almanzor Salazar, la cual se mantendría pendiente de ejecución hasta que termine sus estudios secundarios. La Comisión queda a la espera de información adicional relacionada con las

<sup>167</sup> Ver, Corte IDH, Caso Valle Jaramillo y Otros, vs. Colombia, Sentencia de 7 de julio de 2009, interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 33-40; y Corte IDH, Resolución de 15 de mayo de 2011, Caso Valle Jaramillo vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, párr. 4-10.

medidas concretas que se hayan explorado en base a la respuesta oficial del Ministerio de Educación y los avances hacia la materialización de la medida en beneficio a favor de estas dos personas.

2150. En 17 de marzo de 2017, los peticionarios informaron que en relación a la beca para estudios, se encuentran a la espera de información oficial por parte del Estado. Por su parte, el Estado comunicó la información brindada por el Ministerio de Educación, la cual no permite que se otorguen becas de estudio cuando la persona que la solicita se encuentra estudiando. Adicionalmente, informó sobre la existencia de un sistema de postulaciones requeridos por el Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos (PRONABEC) para poder recibir los beneficios educativos.

2151. El día 12 de abril de 2017, el Estado informó que sólo dos de los hijos de la señora Mestanza se encuentran estudiando actualmente. Resaltó que Almanzor Salazar Mestanza se encuentra cursando educación secundaria en un instituto estatal de su localidad y que no posee información sobre Napoleón Salazar Mestanza. En relación a lo discutido en la reunión de trabajo del 17 de marzo de 2017, con respecto al concurso previo requerido por PRONABEC para otorgar becas, el Estado señaló que existe la posibilidad de modificar la normativa para permitir que los beneficiarios de casos presentados ante el sistema interamericano de derechos humanos cuenten con la posibilidad de recibir una beca especial. Sobre lo anterior resaltó que la Procuraduría se encuentra haciendo seguimiento a este punto.

2152. El 24 de mayo de 2017 y 3 de agosto de 2017, los peticionarios reiteraron información suministrada con anterioridad.

2153. En los informes presentados el 24 de mayo de 2017, 29 de agosto de 2017 y 27 de octubre de 2017, el Estado reiteró la información proporcionada en la reunión de trabajo del marzo de 2017.

*Cláusula decimoprimer a) Medidas de monitoreo y de garantía de respeto de los derechos humanos de los y las usuarias de los servicios de salud*

2154. En relación a esta cláusula, los peticionarios han indicado que la medida adecuada para que se cumpla con este punto es la modificación de la legislación penal peruana, para que se incorpore el tipo penal específico de esterilización forzada. En ese sentido, los peticionarios han mantenido que el Estado peruano debe adecuar su Código Penal al Estatuto de la Corte Penal Internacional, de forma que hechos como los acaecidos en perjuicio de María Mamérita Mestanza y otras miles de peruanas sean considerados delitos de *lesa humanidad*.

2155. El Estado por su parte, ha indicado que, en relación a la modificación legislativa, en su escrito del 11 de noviembre de 2015, que la modificación de la legislación penal de acuerdo al Estatuto de Roma es una opinión de los peticionarios, basada únicamente en una interpretación subjetiva con relación al texto del compromiso del acuerdo. El Estado solicita en cambio que se declare el cumplimiento de este punto sobre la base de los avances en la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, en cuanto a la emisión progresiva de normativa relacionada con dicha temática.

2156. Por otro lado, los peticionarios han solicitado la emisión por parte del Estado de un informe técnico que sistematice lo realizado respecto a leyes y políticas públicas promovidas como parte del Acuerdo de Solución Amistosa. En relación al Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas -REVIESFO y su correspondiente procedimiento de inscripción, los peticionarios han informado la publicación de Resoluciones Ministeriales de fecha 8 de enero y 8 de julio de 2016 relacionada al cronograma de implementación progresiva en distintos departamentos del país. Al mismo tiempo indican que el número reducido de personas registradas evidencia la falta de difusión del REVIESFO y la falta de reforzamiento en la capacitación del personal a cargo de la inscripción. En el caso particular, los peticionarios indicaron en su última comunicación, que se sigue a la espera de la inscripción solicitada el 28 de enero de 2016.

2157. En reunión de trabajo sostenida entre las partes con el acompañamiento de la CIDH el 2 de diciembre de 2016, el Estado se comprometió a dar respuesta a la solicitud de información con relación al registro de víctimas de esterilizaciones forzadas de la familia de la señora María Mamérita Mestanza.

2158. El 17 de marzo de 2017, los peticionarios manifestaron que hasta la fecha ni la víctima, ni sus familiares se encuentran inscritos en el registro de víctimas de esterilización forzada. Por su parte, el Estado informó que no es posible realizar el registro con el marco actual y que se requiere que se establezcan otras medidas. Adicionalmente, el Estado enfatizó que no se ha logrado determinar si es posible avanzar por otra vía.

2159. El 12 de abril de 2017, el Estado informó sobre las modificaciones legislativas y de políticas públicas realizadas por el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, destacando que a la fecha se elaboraron las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, mediante las cuales se indica el procedimiento a seguir para realizar el bloqueo tubario bilateral se aprobó la Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, el 31 de agosto de 2016, que establece los procesos de atención integral en planificación familiar, con calidad y seguridad, en los centros de salud de los diferentes niveles de atención. Indicó que se está actualizando el Manual de Orientación y Consejería en Salud Sexual y Reproductiva; se ha venido implementando el Documento Técnico: "Adecuación Cultural de la Orientación en Salud Sexual y reproductiva"; se están fortaleciendo las competencias técnicas del personal de salud, mediante la capacitación continua para que se logre estandarizar las actividades de planificación familiar, haciendo énfasis en los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración; se ha venido garantizando que los Establecimientos de Salud donde se realicen intervenciones quirúrgicas sean adecuados; se están realizando visitas de asistencia técnica a las Direcciones Regionales de Salud a nivel nacional para verificar la categorización de los hospitales donde se han venido realizando anticoncepciones quirúrgicas voluntarias, para que estén en condiciones óptimas, además se verifica que se esté aplicando el consentimiento informado en dichos procedimientos.

2160. Por lo anterior el Estado estimó que ha cumplido totalmente con la presente cláusula. Asimismo, resaltó que lo relativo al Registro de víctimas de esterilizaciones forzadas y la tipificación como delito en el Código Penal no forman parte de los compromisos, por lo que le solicitó a la CIDH declarara cumplida totalmente cláusula decimoprimera.

2161. El 24 de mayo de 2017, los peticionarios manifestaron que en enero de 2017 le solicitaron al Estado la creación de unas mesas de trabajo para tratar las respuestas que el Estado debe proporcionar a las víctimas por las esterilizaciones forzadas, sin embargo hasta la fecha no han tenido respuestas. En lo que respecta al Registro de las Víctimas de las esterilizaciones forzadas que se llevaron a cabo entre 1995 y 2001, indicaron que según la información suministrada por REVIESFO, hasta febrero de 2017, 5.054 personas han iniciado el procedimiento de inscripción, de las cuales 95.76% son mujeres y solamente el 57.84% de las personas inscritas han logrado llegar hasta la fase final. De lo anterior, manifestaron que se evidencia que el registro de víctima es aún reducido debido a las barreras económicas, geográficas y a la desconfianza en el proceso. Adicionalmente, los peticionarios recordaron que los familiares de la señora Mestanza aún no se han logrado inscribir en el registro y que aún está pendiente la adecuación de la legislación penal interna conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

2162. El 24 de mayo de 2017, el Estado informó que la Dirección General de Defensa Pública solicitó realizar una modificación normativa para permitir la inscripción de la familia de la señora Mestanza en el registro. En relación al grupo de trabajo sobre reparaciones integrales a favor de las víctimas de esterilización forzada, el Estado informó que el 27 de diciembre de 2016, el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia realizó una reunión con la Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre esterilizaciones forzadas, un representante de Amnistía Internacional Perú, representantes del Movimiento Amplio de Mujeres y la presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de la provincia de Chumbivilcas. En dicha reunión se decidió hacer visitas a las zonas afectadas para recaudar información directa de las presuntas víctimas. Por lo anterior, se realizaron visitas a Picotas en el departamento de San Martín y a Chumbivilcas en el departamento de Cusco. Asimismo, el Estado informó que quedan pendiente visitas a otras zonas del país. En lo que respecta a la elaboración de un protocolo de actuación de los defensores públicos, el Estado informó que la Procuraduría Supranacional trasladó la solicitud al Director General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y de Derechos Humanos para que le dé el seguimiento adecuado.

2163. El 24 de mayo de 2017, los peticionarios manifestaron que no es suficiente con que las víctimas de violaciones de derechos humanos se afilien a un Seguro Integral de Salud, sino que es necesario que se les proporcione un acceso efectivo mediante un servicio médico especializado que responda a sus necesidades. Reconocieron que el Estado inscribió a los familiares de la víctima en un seguro médico, sin embargo, informaron que con posterioridad se han presentado ciertos obstáculos que han sido notificados a la CIDH en informes anteriores. Asimismo y pese a que la CIDH haya reconocido el cumplimiento total de este punto en el informe anual del año 2016, los peticionarios recordaron que queda pendiente el compromiso de capacitación al personal de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca. Desestimaron que se le hiciera seguimiento a este compromiso en la cláusula onceava, debido a que las capacitaciones deben ser desarrolladas en lo que respecta al derecho a las reparaciones a las víctimas de esterilizaciones forzadas.

2164. El 29 de agosto de 2016 y 27 de octubre de 2017, el Estado reiteró información suministrada con anterioridad.

2165. Al respecto, la CIDH toma nota de la información proporcionada por ambas partes, y observa que los peticionarios han solicitado una capacitación al personal de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca sobre el derecho a las reparaciones de las víctimas de esterilizaciones forzadas, lo cual cabría dentro del seguimiento de lo establecido en esta cláusula, según lo indicado por la CIDH en su Informe Anual 2016 cuando consideró que la cláusula octava sobre prestaciones en salud se encontraba cumplida totalmente<sup>168</sup>.

2166. La Comisión toma nota de la información suministrada por las partes, y valora la voluntad de las mismas de avanzar en la ejecución del acuerdo de solución amistosa, de manera conjunta, a través de espacios de diálogo y concertación. Con ese mismo espíritu, la CIDH insta al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar la difusión del REVIESFO de forma particular a comunidades retiradas. La CIDH queda a la espera de información adicional relacionada con las medidas concretas que se hayan explorado en base a la respuesta oficial a la inscripción de la señora María Mamérita al registro de víctimas.

2167. La CIDH reitera que la cláusula décimo primera contiene una pluralidad de componentes relativos tanto a modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre los temas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, como a la implementación de las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo respecto a políticas públicas sobre Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Al respecto, si bien la CIDH reconoce la existencia de avances, por el momento no cuenta con elementos de información suficiente para concluir que existe un cumplimiento total de la cláusula. Por lo anterior, la CIDH queda a la espera de un informe comprensivo y resumido por parte del Estado, con datos complementarios a la información presentada durante el año 2017, sobre acciones específicas que se han adelantado para cumplir con la totalidad de los literales b 1,2, 3, 4, 5, 6 y 7 para valorar el cumplimiento, y finalizar los extremos en los que así corresponda.

2168. La Comisión valora las medidas adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante el acuerdo de solución amistosa. Al mismo tiempo observa que existen medidas que se encuentran pendiente de cumplimiento tales como la beca de estudios y los compromisos derivados de la cláusula decimoprimera del acuerdo. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

#### **Caso 12.078, Informe No. 31/04, Ricardo Semoza Di Carlo (Perú)**

2169. El caso se refiere a la falta de aplicación de una sentencia que ordenaba la reincorporación de la víctima a la Policía Nacional del Perú. El 11 de marzo de 2004, mediante Informe No. 31/04, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso Ricardo Semoza Di Carlo.

<sup>168</sup> Ver CIDH, Informe Anual 2016, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH, párr. 1856.

2170. De conformidad con el acuerdo, el Estado:

1. Reconoció su responsabilidad en base a los artículos 1° inciso 1) y artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en agravio de Ricardo Semoza Di Carlo.

2. Reconoció en carácter de indemnización los siguientes beneficios: a) Reconocimiento del tiempo que estuvo apartado arbitrariamente de la Institución; b) Reincorporación inmediata a la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú (ESUPOL); c) Regularización de los haberes, a partir de la fecha de su reincorporación, tomando en cuenta el nuevo cómputo del tiempo de servicios; d) Devolución del seguro de retiro de oficiales (FOSEROF y AMOF y otros); e) Realización de una ceremonia pública.

3. Se comprometió a realizar una exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos materia del presente Caso, para lo cual se nombrará una Comisión Ad Hoc, de la Oficina de Asuntos Internos y de la Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior.

2171. En comunicación recibida el 13 de diciembre de 2007 el peticionario informó que a pesar de que el Estado le reconoció el tiempo de servicio en forma “real, efectiva e ininterrumpida” en el que estuvo arbitrariamente separado del Servicio Activo, aun no se habría dado cumplimiento a una serie de beneficios conexos que se derivarían del referido reconocimiento. Concretamente, el señor Semoza Di Carlo señaló en aquella oportunidad que no se habría cumplido con el reintegro que le corresponde por concepto de combustible; con la regularización de sus haberes; con la regularización de sus aportaciones al Fondo de Seguro de Retiro de Oficiales; con la realización de la ceremonia de desagravio; y con la investigación y sanción de los responsables del incumplimiento de los mandatos judiciales proferidos para amparar sus derechos vulnerados. Finalmente, el peticionario mencionó que la falta de cumplimiento del acuerdo en los aspectos señalados le ha generado daño moral tanto para su persona como para su familia.

2172. Según el informe de Devolución de aportaciones del FOSEROF No. 011 de 2005, el Departamento de Liquidaciones había calculado los montos a reconocer al peticionario y le había citado para indicarle el adeudo sin que este se presentara a recibir dicha información. El Estado aportó algunos documentos de cotizaciones y dictámenes para el FOSEROF, incluyendo el Decreto Supremo No. 009-85 indicando el pago de 475'460.915 soles a fecha 25 de octubre de 1990.

2173. Mediante nota 7-5-M/828 recibida el 14 de diciembre de 2009 el Estado señaló que, a través de resolución directoral No. 735-2006-DIRREHUM-PNP de 20 de enero de 2006 se reconoció al Mayor Semoza su tiempo de servicio real y efectivo a la Policía y en consecuencia su pensión de retiro renovable equivalente al grado inmediato superior; que a partir del mes de octubre de 2005 se otorgó a la víctima el beneficio no pensionable de combustible; y que el 8 de febrero de 2006 el Comisario de Surquillo dispuso la notificación al peticionario para programar la ceremonia pública de desagravio, la que según el Estado, el peticionario se negó a recibir.

2174. Mediante nota recibida el 10 de diciembre de 2010, el Estado reiteró que la Policía Nacional del Perú ya ha regularizado los haberes y otorgado una pensión renovable al señor Semoza Di Carlo, reincorporándolo asimismo a la Escuela Superior de la Policía Nacional. En cuanto al compromiso de realizar una ceremonia pública de desagravio, afirmó que ello no ha sido posible “debido al desinterés por parte del peticionario, a pesar de las invitaciones cursadas por la Dirección pertinente de la Policía Nacional del Perú”. En cuanto a los demás compromisos, el Estado señaló que enviaría información complementaria a la CIDH a la brevedad posible.

2175. A lo largo del 2011 el Estado indicó que el Director General de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior ha emitido la Resolución Ministerial N° 0217-2010-IN, de 9 de marzo de 2010, por medio de la cual conformó la Comisión Ad Hoc encargada de identificar y establecer las responsabilidades de los funcionarios que no dieron cumplimiento oportuno al mandato judicial a favor del señor Ricardo Semoza

Di Carlo. Refirió que a través de una resolución directoral de 15 de enero de 2004 la Policía Nacional del Perú otorgó una vacante al Mayor Ricardo Semoza Di Carlo como participante de un programa de maestría y ciencias sociales Promoción 2004. Añadió que el 25 de febrero de 2005 se le otorgó el Diploma de Oficial de Estado Mayor, al haber culminado satisfactoriamente el referido programa. El Estado suministró la documentación en la que consta la reincorporación del peticionario para culminar el programa de entrenamiento. Con base en esa información, el Estado sostuvo que el acuerdo se encuentra cumplido en el extremo relacionado con la reincorporación inmediata a la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. El peticionario no ha manifestado controversia con respecto a la reincorporación, razón por lo cual la Comisión decide dar por cumplido el punto 2.b del acuerdo.

2176. El Estado también presentó información de comunicaciones dirigidas al peticionario el 15 y 19 de marzo de 2010 para organizar la ceremonia de desagravio por segunda vez, pero indica que no contó con una respuesta positiva por parte del peticionario, por lo cual el Estado ha reportado que este punto de desagravio no ha podido llevarse a cabo debido al desinterés del peticionario ante las distintas invitaciones y contactos iniciados por el Estado.

2177. Por su parte, mediante comunicación del 23 de mayo de 2011, el peticionario indicó que el Estado había dado cumplimiento al punto 2 del acuerdo ya que el Estado había reconocido el tiempo de servicios a la Policía Nacional del Peticionario, regularización de sus haberes, otorgamiento de una pensión renovable equivalente al grado inmediato superior y reincorporación a la Escuela Superior de la Policía Nacional. En la misma comunicación el peticionario indicó que no había recibido las notificaciones para las ceremonias de desagravio.

2178. Con relación a la Comisión Ad Hoc, mediante comunicación del 31 de agosto de 2011 el Estado informó que fue necesario reemplazar dos de los funcionarios que la integraban y que se había iniciado la recopilación y sistematización de los elementos de información para llevar a cabo la investigación. Debido a los cambios mencionados, el Estado indicó que se habían suspendido las diligencias, mismas que reanudarían una vez se designaran los nuevos miembros.

2179. En relación con el punto 2, mediante comunicación recibida el 11 de noviembre de 2013 el peticionario indicó que a la fecha el Estado peruano no le ha reintegrado con el concepto de combustible dejado de percibir desde agosto de 1990 hasta septiembre de 2001 (75,000.00 soles aprox.), ni con el concepto de haberes de avas dejado de percibir desde 1997 hasta 2003 (5,000.00 soles aprox.). Indicó que el Estado no había cumplido con la regularización del FOSEROF (12,000.00 soles aprox.), no había realizado la ceremonia pública de desagravio, y no había sancionado a los responsables de la conculcación de sus derechos. El peticionario solicitó en esa oportunidad el reconocimiento en lo grados de Comandante, Coronel y General respectivamente, designación de chofer, designación de mayordomo, afectación de vehículo inherente al grado, el reconocimiento de los años de servicio en forma real, efectiva e ininterrumpida a la fecha actual, reintegro de combustible, reintegro de avas, regularización del FOSEROF, y ceremonia de desagravio, ubicación en escalafón PNP de acuerdo al nuevo grado e investigación y sanción de los funcionarios responsables de la conculcación de sus derechos. El Estado no presentó información respecto al cumplimiento en esa oportunidad.

2180. En relación al punto 3, desde agosto de 2011 el Estado no ha brindado información sobre los avances en la investigación de los responsables de la inejecución de la decisión judicial que ordenaba la reincorporación del peticionario. Asimismo, el Estado ha manifestado en varias oportunidades que ha notificado al peticionario para hacer el acto de desagravio sin éxito, y el peticionario a su vez ha indicado que no ha sido notificado de dichas actividades.

2181. La CIDH solicitó información actualizada a las partes el 8 de diciembre de 2014. El peticionario indicó por medio de nota del 8 de enero de 2015 que desiste del acuerdo suscrito con el Estado por incumplimiento de este actor e insiste en los requerimientos solicitados con posterioridad al acuerdo. El Estado solicitó una prórroga el 9 de enero de 2015, la que fue concedida.

2182. La CIDH toma nota de la información proporcionada por ambas partes durante el periodo en el cual el asunto ha estado bajo seguimiento del cumplimiento del acuerdo. Al respecto, la Comisión observa que la información reportada por ambas partes es contradictoria y no permite valorar en su integridad el cumplimiento del acuerdo. En particular, si bien el Estado aportó dictámenes y cotizaciones sobre los montos a pagar, a la fecha no ha proporcionado comprobantes de pago, o cualquier otro documento, que permita verificar que se ha realizado un pago al peticionario, ni información relativa a los criterios utilizados para la eventual liquidación de los salarios dejados de percibir y de la pensión. Por su parte, el peticionario reconoce que el Estado le ha pagado el monto debido, pero advierte que hay rubros que no fueron incluidos en su momento en la liquidación de indemnización, y en la actualidad pide un monto y servicios adicionales que al parecer exceden el ámbito del acuerdo.

2183. La CIDH solicitó información actualizada a las partes el 30 de septiembre de 2015. El 1 de octubre de 2015, el peticionario reiteró su postura ante todos los puntos, insiste en el desistimiento del acuerdo y su renuncia a la indemnización que el Estado estaba obligado a concederle pero no a los beneficios económicos dejados de percibir.

2184. Mediante nota del 11 de noviembre de 2015, el Estado se refirió al punto 1 en cuanto a relativo al reconocimiento de responsabilidad, indicando que el mismo, no comporta un compromiso, sino que su contenido es declarativo e incluye, en el cual hay un reconocimiento de su responsabilidad. Asimismo en relación al punto 2 a) y c), el Estado reiteró, como lo ha hecho en varias ocasiones, que a través del Ministerio del Interior expidió dos resoluciones: primero una siendo la Resolución Suprema No. 0501-2003-IN/PNP en fecha 29 de agosto de 2003 mediante la cual se declaró nula la Resolución Suprema que resolvió pasar al señor Ricardo Semoza a la situación de retiro, su reincorporación a la situación de actividad en la Policía Nacional del Perú y su reinscripción en el escalafón de personal de oficiales de la misma Policía que le corresponde; y posteriormente la Resolución Directoral No. 170-DIRREHUM-PNP de fecha 7 de enero de 2005 mediante la cual se reconoció al señor Semoza el tiempo de servicios como reales y efectivos e ininterrumpidos en su cómputo general los periodos que permaneció en situación de retiro. El Estado recalca lo establecido en la cláusula tercera del acuerdo y en ese sentido expresó que cualquier pretensión económica adicional que el peticionario solicite debe ser desestimada al no formar parte de los compromisos asumidos por el Estado peruano en el acuerdo; e informó que de acuerdo con el registro del Estado de cuenta y planillas del señor Ricardo Semoza, se le había empezado a pagar sus haberes correspondientes a partir de septiembre de 2003 hasta cuando estuvo en situación de actividad.

2185. En relación al punto 2 d), el Estado resaltó que dicho punto en el acuerdo se relaciona con una obligación a cargo del señor Semoza, reiterando que este debe reintegrar al FOSEROF PNP la suma correspondiente al beneficio de retiro que cobró, los aportes y los intereses legales de dicha suma; al respecto afirmó que no se evidencia que el peticionario haya cumplido con realizar el pago correspondiente. Y por último en relación al punto 3, manifestó que no se cuenta con información con relación al compromiso de realizar una exhaustiva investigación de los hechos y aplicación de las sanciones legales correspondientes.

2186. En relación a las observaciones del Estado sobre el punto 1, haciendo uso de las facultades establecidas expresamente por las partes en la cláusula octava sobre la interpretación del acuerdo, la CIDH examinó en esta oportunidad, su contenido literal que indica:

El Estado peruano, consciente de que la protección y respeto irrestricto de los derechos humanos es la base de una sociedad justa, digna y democrática, en estricto cumplimiento de sus obligaciones adquiridas por la firma y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que el Perú es parte, y consciente que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, constituyendo la restitución del cargo a la víctima, la forma justa de hacerlo, reconoce su responsabilidad en base a los artículos 1° inciso 1) y artículo 25° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en agravio de Ricardo Semoza Di Carlo.

2187. De lo anterior se desprende que la formulación de la cláusula constituye en sí misma un reconocimiento de responsabilidad. La CIDH verificó el contenido total del documento e interpreta que la cláusula ejecutoria es la contenida en el literal e) bajo el rubro de “realización de ceremonia pública”. Asimismo, la CIDH toma nota de la información suministrada por las partes, pero reitera que se requiere de información adicional para valorar el cumplimiento de todos los compromisos. De la misma forma la Comisión observa que el Estado no ha presentado sus observaciones sobre los alegatos esgrimidos por el peticionario en su comunicación del 11 de noviembre de 2013, en relación a la liquidación de los montos a favor del peticionario, y las verificaciones de su cancelación, así como tampoco ha proporcionado la información relacionada con la investigación de los hechos, ni la labor de la Comisión Ad Hoc, por lo cual insta al Estado a presentar información detallada. Por otro lado, en virtud de la cláusula 8 del acuerdo y vista la observación realizada por el Estado en relación al punto 1, la CIDH considera y concuerda que dicho punto es una declaratoria de reconocimiento de responsabilidad del Estado por lo cual no es objeto de supervisión.

2188. En relación al desistimiento del acuerdo por parte del peticionario, corresponde aclarar que la Comisión decidió en su momento aprobar y publicar el Informe No. 31/04, y que desde ese momento el caso se encuentra en etapa de seguimiento, sin que se pueda anular el acuerdo alcanzado por las partes o retrotraer el proceso.

2189. El 21 de octubre de 2016, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de los compromisos pendientes. A la fecha de cierre de este informe, el peticionario no ha presentado información.

2190. Mediante comunicación recibida el 22 de noviembre de 2016, el Estado presentó su respuesta. En relación al punto 1, el Estado insistió que el mismo, no comporta un compromiso, sino que su contenido es declarativo y no es materia de supervisión del cumplimiento del acuerdo. En relación al punto 2 a) y 2 c), el Estado reiteró información presentada en comunicación de noviembre de 2015, en cuanto a la emisión y el contenido de la Resolución Suprema No. 0501-2003-IN/PNP de fecha 29 de agosto de 2003 y la Resolución Directoral No. 170-DIRREHUM-PNP de fecha 7 de enero de 2005. El Estado sostuvo que el señor Semoza Di Carlo acumuló 29 años, 8 meses y 3 días de servicio computados al 24 de septiembre de 2005 y que tomando en cuenta el nuevo cómputo de tiempo, de acuerdo con el registro del estado de cuenta y planillas del señor Ricardo Semoza, se le había empezado a pagar sus haberes correspondientes a partir de septiembre de 2003 hasta cuando estuvo en situación de actividad, con lo cual se ha dado cumplimiento con la regularización de sus haberes. Al respecto, el Estado indicó que se generó las constancias de planillas de pago de haberes, y que al momento se cuenta solamente con archivo magnético y/o base de datos desde marzo de 2001 a enero del 2013. Adicionalmente, el Estado solicitó a la CIDH aclarar la controversia en lo relativo a la procedencia de incluir rubros o conceptos sobre los cuales las partes difieren.

2191. Por otra parte, el Estado manifestó su desacuerdo en abordar en conjunto los puntos 2 a) y 2 c) por la CIDH. Al respecto aclaró que dichos literales deben ser tratados de manera diferencial incluyendo la valoración de los mismos, y en ese sentido manifestó en relación al punto 2 a) haber acreditado de manera suficiente su cumplimiento con la emisión de las Resoluciones mencionadas anteriormente. En ese sentido expresó haber cumplido con la regularización y pago de sus haberes de conformidad con el punto 2 c), lo cual no incluye el pago de salarios y demás remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha de su retiro.

2192. En relación al punto 2 d), el Estado sostuvo que dicho extremo se relaciona con una obligación que debe ser cumplida por el señor Semoza en cuanto a lo establecido por el artículo 4 de la Resolución Suprema No. 0501-2003-IN/PNP del 29 de agosto de 2003, con lo cual no se trata de un compromiso a ser cumplido por el Estado. Al respecto, el Estado informó no tener evidencia hasta la fecha del cumplimiento del pago correspondiente por el peticionario. En relación al punto 2 e), el Estado reiteró lo mencionado en comunicaciones anteriores, en cuanto a la falta de interés por parte del peticionario de emprender gestiones pertinentes para concretar la realización de la ceremonia pública, pese a las diversas comunicaciones que le fueron remitidas por las autoridades competentes. En este sentido, el Estado insistió que no le fue, ni le es posible dar cumplimiento a tal compromiso.

2193. En relación al punto 3, el Estado afirmó no contar con información, sin embargo, aclaró que una vez la reciba la pondrá en conocimiento de la CIDH para su respectiva evaluación.

2194. El 15 de marzo de 2017, el peticionario reiteró la información proporcionada con anterioridad.

2195. El 5 de mayo de 2017, el Estado reiteró la información proporcionada con anterioridad.

2196. En relación con la observación que realizó la CIDH sobre el punto 2 d) en el informe anual del año 2016, el Estado suministró copia simple de la Resolución Suprema No. 0501-2003-IN/PNP de 29 de agosto de 2003, para su análisis. Asimismo, reiteró la información suministrada en noviembre de 2016, mediante la cual manifestó que es obligación de la señora Semoza Di Carlos realizar el reintegro al Estado del seguro de retiro otorgado, por lo que alegó que no es una obligación del Estado sino de los peticionarios.

2197. El 26 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa. El Estado presentó la información solicitada el 27 de octubre de 2017, sin embargo, a la fecha del presente informe, los peticionarios no han presentado información.

2198. La CIDH verificó el contenido total del documento en el cual se observa que en su parte resolutive se anuló el mandato judicial que ordenó el retiro del peticionario, se resolvió reincorporar al señor Ricardo Semoza Di Carlo al cargo de Mayor PNP, y ordenó el reintegro al Estado de los beneficios económicos otorgados con motivo del retiro de su cargo. Por lo anterior, la CIDH considera que cuenta con suficientes elementos de juicio para concluir con la supervisión del punto 2 d).

2199. La CIDH toma nota y valora la información presentada por el Estado. En particular, vista la observación realizada por el Estado en relación al punto 1, la CIDH reitera lo establecido en el Informe Anual 2015 en cuanto considera y concuerda que dicho punto es una declaratoria de reconocimiento de responsabilidad del Estado por lo cual no es objeto de supervisión. En relación los puntos 2 a) y 2c), la CIDH destaca que si bien se verifica la publicación y contenido de la Resolución Suprema No. 0501-2003-IN/PNP de fecha 29 de agosto de 2003 y la Resolución Directoral No. 170-DIRREHUM-PNP de fecha 7 de enero de 2005, reitera que no cuenta con suficientes elementos de juicio para concluir que el Estado ha dado cumplimiento total a las recomendaciones contenidas en estos puntos, por lo cual se encuentra a la espera de la documentación correspondiente.

2200. Al mismo tiempo, la Comisión observa con preocupación los obstáculos presentes entre las partes y al respeto, invita a las partes a mantener un diálogo con el fin de identificar las medidas necesarias para obtener el cumplimiento total del acuerdo, en particular la celebración de la ceremonia pública. Al mismo tiempo, la CIDH insta al peticionario a proporcionar información actualizada que permita valorar el cumplimiento de los puntos pendientes. Por lo expuesto, la CIDH seguirá supervisando los puntos pendientes 2 a y c, así como el punto 3.

**Petición 711-01 y otras, Informe No. 50/06, Miguel Grimaldo Castañeda Sánchez y Otros (Perú); Petición 33-03 y otras, Informe No. 109/06, Héctor Núñez Julia y otros (Perú); Petición 732-01 y otras, Informe 20/07 Eulogio Miguel Melgarejo y otros; Petición 758-01 y otras, Informe No. 71/07 Hernán Atilio Aguirre Moreno y otros (Perú)**

2201. El 15 de marzo de 2006, mediante Informe No. 50/06, la Comisión aprobó los términos de los Acuerdos de Solución Amistosa de fecha 22 de diciembre de 2005, 6 de enero de 2006, y 8 de febrero de 2006 suscritos entre el Estado peruano y un conjunto de magistrados no ratificados, peticionarios de la petición No 711-01 y otras. El 21 de octubre de 2006, mediante Informe No. 109/06, la Comisión aprobó los términos de los Acuerdos de Solución Amistosa de fecha 26 de junio y 24 de julio de 2006 suscritos entre el Estado peruano y un conjunto de magistrados no ratificados, peticionarios de la petición No 33-03 y otras. El 9 de marzo de 2007, mediante Informe No. 20/07, la Comisión aprobó los términos de los Acuerdos de Solución Amistosa de fecha 13 de octubre y 23 de noviembre de 2006 suscritos entre el Estado peruano y un

conjunto de magistrados no ratificados, peticionarios de la petición No 732-01 y otras. El 27 de julio de 2007, mediante Informe No. 71/07, la Comisión aprobó los términos del acuerdo de solución amistosa de fecha 7 de enero de 2007 suscrito entre el Estado peruano y un conjunto de magistrados no ratificados, peticionarios de la petición No 758-01 y otras. El 13 de marzo de 2008, mediante Informe No. 71/07, la Comisión aprobó los términos del acuerdo de solución amistosa de fecha 24 de abril de 2007 suscrito entre el Estado peruano y un magistrado no ratificado, peticionario de la petición No 494-04.

2202. De conformidad con el texto de los Acuerdos de Solución Amistosa comprendidos en los mencionados informes, el Estado:

1. Se comprometió a rehabilitar el título correspondiente y a disponer la reincorporación de los magistrados.
2. Se comprometió a reconocer el tiempo de servicios no laborados para los efectos del cómputo del tiempo de servicios, jubilación, y demás beneficios laborales que corresponden conforme a la ley peruana.
3. Reconoció una indemnización total de US\$ 5,000.00 (Cinco Mil Dólares Americanos y 00/100) que incluye los gastos y costas derivados del proceso nacional e internacional correspondiente a su petición.
4. Se comprometió a llevar a cabo un nuevo procedimiento de evaluación y ratificación a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura respecto de los magistrados comprendidos en los acuerdos de solución amistosa, el cual se encontrará a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura y se realizará de conformidad con las normas y principios constitucionales (artículos 139 y 154 de la Constitución Política del Perú), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia vinculante que garantiza el debido proceso dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Las disposiciones normativas correspondientes en lo que fuere necesario serán adecuadas para tal efecto.
5. Se comprometió a realizar una Ceremonia de Desagravio Público a favor de los magistrados reincorporados.

2203. Mediante comunicación de fecha 18 de diciembre de 2008, el Estado informó que en fecha 9 de diciembre de 2008 se había llevado a cabo una ceremonia de Desagravio Público en el Auditorio del Ministerio de Justicia en honor de los 79 magistrados comprendidos en los Informes No. 50/06 y 109/06, con la finalidad de dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales adquiridas en el marco del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Asimismo, el Estado precisó que dicha ceremonia contó con la presencia de altos funcionarios del Estado, como el Presidente del Consejo de Ministros – en representación del Presidente peruano-, la Ministra de Justicia, el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, entre otros; así como con la presencia de la sociedad civil y del grupo de los 79 magistrados comprendidos en los Informes de la CIDH anteriormente referidos.

2204. Algunos peticionarios comprendidos en los informes materia de la presente sección presentaron información en distintas oportunidades en el año 2009. En general, los magistrados no ratificados comprendidos en los acuerdos de solución amistosa señalaron la falta de cumplimiento total de dichos acuerdos y solicitaron a la CIDH que reitere al Estado que brinde cumplimiento pleno a los acuerdos suscritos.

2205. El 27 de octubre de 2010 la CIDH sostuvo una reunión de trabajo en el marco de su 140º Período Ordinario de Sesiones, sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano en los acuerdos de solución amistosa relacionados con magistrados no ratificados. En esa ocasión, el solicitante de la reunión de trabajo, señor Elmer Siclla Villafuerte, señaló que si bien el Tribunal Constitucional ha establecido algunos requisitos que deben ser observados por el Consejo Nacional de la

Magistratura, la sola existencia de un sistema de ratificación en el Perú, cuya naturaleza no es disciplinario-sancionatoria, es incompatible con los estándares internacionales y constitucionales en materia de independencia del Poder Judicial. Asimismo, sostuvo que el procedimiento de ratificación es incompatible con las garantías de un debido proceso, inexistiendo por ejemplo el derecho a una doble instancia de revisión. El señor Elmer Siclla destacó que el Estado no ha efectuado el pago de indemnización por costas y gastos a todos los magistrados reincorporados y tampoco ha llevado a cabo una ceremonia de desagravio público a favor de todas las víctimas.

2206. A su vez, el Estado informó que se ha asignado al Ministerio de Justicia un monto dinerario para el pago de una parcela de la indemnización de cinco mil dólares estadounidenses a cada uno de los magistrados comprendidos en los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH. Sostuvo que la actual jurisprudencia del Tribunal Constitucional garantiza a los magistrados un debido proceso y el derecho de recurrir de la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, en caso de no ratificación.

2207. A lo largo del 2011 algunos peticionarios informaron que un grupo de magistrados habían sido reincorporados en plazas distintas a las que ocupaban al momento de ser desvinculados del Ministerio Público o del Poder Judicial. Señalaron que el Estado aún no ha llevado a cabo una ceremonia de desagravio público a favor de todos los magistrados que suscribieron los acuerdos de solución amistosa y que aún se encuentra pendiente el pago de parte de los 5.000 dólares estadounidenses como monto indemnizatorio.

2208. A su vez, el Estado peruano señaló que ha dado cumplimiento total a la cláusula del acuerdo de solución amistosa relacionada con la rehabilitación del título y reincorporación de los magistrados. Añadió que un número muy reducido de magistrados no pudieron ser reincorporados porque habían alcanzado la edad máxima legal de 70 años para el ejercicio de la magistratura o por causas personales que lo impedian, tales como la opción por la jubilación o ejercicio de cargo electivo. Perú afirmó que ha pagado el monto de 5.000 dólares a un total de 79 magistrados y que otros 97 han cobrado parcialmente ese valor. Añadió que el Ministerio de Justicia ya cuenta con una partida presupuestaria transferida por el Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado – FEDADOI, destinada al pago del valor remaneciente.

2209. El 26 de octubre de 2011 se realizó una reunión de trabajo entre el Estado peruano y el representante de la petición 33-03, señor Elmer Siclla Villafuerte. En esa ocasión, el solicitante reiteró la información proporcionada en reuniones anteriores. A su vez, el Estado ratificó la información presentada a lo largo del 2011, añadiendo que el Consejo Nacional de la Magistratura y los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores vienen coordinando una fecha para la realización de una ceremonia pública de reconocimiento de responsabilidad, en los términos señalados en los acuerdos amistosos.

2210. El Estado informó mediante comunicaciones de 11 y 17 de diciembre de 2012, que ha pagado la suma indemnizatoria total a parte de los magistrados (79), y parcialmente a otro grupo de Magistrados (97), habiendo desembolsado una suma de US\$ 724,800.00. Indicó que en el caso del señor Castañeda Sánchez, había pagado los US\$ 5,000 acordados en el acuerdo de solución amistosa. Por su parte, algunos peticionarios informaron que el Estado peruano aún no ha abonado la integralidad del monto indemnizatorio de US\$5.000 y que tampoco ha realizado una ceremonia de desagravio público a favor de todos los magistrados.

2211. A lo largo del 2012 la CIDH recibió comunicaciones en las que algunos magistrados y magistradas alegan haber sido objeto de procesos disciplinarios sin observarse sus garantías y que Perú no habría efectuado el pago de sus pensiones u otros beneficios sociales devengados. Dado que tales planteamientos no están comprendidos en los acuerdos de solución amistosa suscritos entre las partes y sin perjuicio de las gestiones que hubieren adoptado los peticionarios en sede interna, la CIDH no dará seguimiento a las referidas comunicaciones en el marco de los Informes de Solución Amistosa previamente señalados.

2212. El Estado presentó información mediante comunicación de 27 de noviembre de 2013. En esta oportunidad, el Estado indicó que en relación a los magistrados comprendidos en el Informe sobre Solución Amistosa N° 50/06 de 15 de marzo de 2006, resolvió rehabilitar sus títulos de magistrados mediante Resolución N° 156-2006-CNM de 20 de abril de 2006. Igualmente señaló que ha reconocido el tiempo de servicios, jubilación y demás beneficios laborales; les ha pagado la suma de US\$5,000 establecido en el acuerdo de solución amistosa y realizó el acto de desagravio público el 9 de diciembre de 2008.

2213. Respecto a los magistrados comprendidos en el Informe sobre Solución Amistosa N° 109/06 de 21 de octubre de 2006, el Estado señaló que mediante Resolución N° 019-2007-CNM de 11 de enero de 2007 rehabilitó sus títulos de magistrados, cumpliendo de esta forma con el compromiso asumido en el acuerdo de solución amistosa. Igualmente, el Estado informó que ha reconocido a este grupo de magistrados el tiempo de servicios de los periodos no laborados para el cómputo de tiempos de servicios, jubilación y demás beneficios laborales; y les ha pagado por concepto de reparaciones económicas la suma de US\$5,000, establecido en el acuerdo de solución amistosa.

2214. El Estado indicó, en relación con los magistrados comprendidos en el Informe sobre Solución Amistosa N° 20/07 de 9 de marzo de 2007, que ha reconocido a la fecha el tiempo de servicios, jubilación y demás beneficios laborales; y les ha pagado la suma de US\$3,400 en concepto de reparación económica, quedando pendiente el pago de US\$1,600.

2215. Respecto a los magistrados comprendidos en el Informe sobre Solución Amistosa N° 71/07 de 27 de julio de 2007, el Estado informó que mediante Resolución N° 319-2007-CNM de 2 de octubre de 2007 resolvió rehabilitar sus títulos de magistrados. Igualmente señaló que reconoció a este grupo de magistrados el tiempo de servicios de los periodos no laborados para el cómputo de tiempos de servicios, jubilación y demás beneficios laborales; y ha pagado por concepto de reparaciones económicas la suma de US\$3,400 a cada uno de los peticionarios, quedando pendiente de desembolsar la cantidad de US\$1,400 a cada uno de ellos.

2216. A lo largo del 2013 la CIDH recibió comunicaciones en las que algunos magistrados y magistradas alegaron que el Estado había incumplido con la ceremonia de desagravio y no había cancelado el monto total de la reparación económica.

2217. La CIDH solicitó información actualizada a las partes el 3 de diciembre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015. A la fecha de cierre de este informe la parte peticionaria no ha presentado la información solicitada.

2218. El 24 de noviembre de 2015, el Estado presentó información en relación al cumplimiento de los compromisos adquiridos de los acuerdos de solución amistosa. En relación al pago de las indemnizaciones, el Estado manifestó que la indemnización correspondiente a los peticionarios que formaron parte de los acuerdos de solución amistosa homologados por los Informes No. 50/06 y No. 109/06, el pago se realizó en su totalidad en el año 2007 y 2008; y agregó que, respecto a los peticionarios que formaron parte de los acuerdos de solución amistosa homologados en los Informes No. 20/07 y No. 71/07, el pago se realizó en dos partes, una durante el mes de enero de 2011 y la segunda en enero de 2015, luego de la aprobación del Decreto No. 375-2014-EF. En relación a la ceremonia de desagravio público, el Estado señaló que se había realizado a favor de los peticionarios que formaron parte de los acuerdos de solución amistosa homologados por los Informes No. 50/06 y No. 109/06, no obstante aún estaba pendiente realizarlo a favor de los peticionarios que formaron parte de los acuerdos de solución amistosa homologados en los Informes No. 20/07 y No. 71/07. Por último, el Estado desglosó las resoluciones remitidas respecto a cada Informe para dar cumplimiento al compromiso relacionado a la rehabilitación de los peticionarios a sus cargos. Al respecto, comunicó que: en cuanto al Informe No. 50/06, el 21 de abril de 2006 el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura remitió a la Ministra de Justicia, las Resoluciones No. 156-2006-P-CNM y No. 157-2006-P-CNM. Dichas resoluciones dispusieron la rehabilitación de los títulos correspondientes a 19 fiscales y 33 jueces. En cuanto al Informe No. 109/06, el 11 de enero de 2007 el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura remitió a la Ministra de Justicia, las Resoluciones No. 19-2007-P-CNM y No. 20-2007-P-CNM, que dispusieron

la rehabilitación de los títulos correspondientes a 13 jueces y 14 fiscales. En cuanto al Informe No. 20/07, el 25 de abril de 2007 el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura remitió a la Ministra de Justicia, las Resoluciones No. 123-2007-P-CNM y No. 124-2007-P-CNM que dispusieron la rehabilitación de los títulos correspondientes a 46 jueces y 17 fiscales. Finalmente, en cuanto al Informe No. 71/07, el 17 de octubre de 2007 el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura remitió a la Ministra de Justicia, las Resoluciones No. 319-2007-P-CNM y No. 320-2007-P-CNM que dispusieron la rehabilitación de los títulos correspondientes a 11 jueces y 3 fiscales.

2219. El 21 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes. A la fecha de cierre de este informe la parte peticionaria no ha presentado la información solicitada.

2220. El 23 de noviembre de 2016, el Estado presentó información en relación al cumplimiento de los compromisos. En relación las cláusulas 1 y 2, el Estado afirmó haber cumplido con estas medidas a través de diversas resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura. En los casos particulares, el Estado señaló en relación a Miguel Grimaldo Castañeda, que luego que se dejara sin efecto la resolución de no ratificación y se rehabilitara a su título, decidió renunciar a su cargo. Respecto a Alejandro Espino Méndez, luego que se rehabilitara a su título, se procedió a un nuevo procedimiento de evaluación y ratificación, en el cual se decidió renovar la confianza y en consecuencia ratificarlo en su cargo. Por último, respecto a Hammerly Rosendo Carrasco Vergaray, luego que se rehabilitara a su título, ejerció el cargo hasta que mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación No. 1632-2016-MP-FN, se le cesó por límite de edad.

2221. En relación a la tercera recomendación, el Estado manifestó que el pago se realizó en su totalidad, entre el 2007 y el 2008 respecto de los peticionarios que forman parte de los acuerdos homologados a través de los informes No. 50/06 y No. 109/06. Respecto a los peticionarios que forman parte de los informes No. 20/07 y No. 71/07, el pago se realizó en dos partes, la primera durante el año 2011 y la segunda se completó en enero de 2015.

2222. Finalmente en relación a la quinta recomendación, el Estado indicó haber realizado la ceremonia de desagravio público a favor de los peticionarios que forman parte de los acuerdos homologados a través de los informes No. 50/06 y No. 109/06, y que se mantiene pendiente dicha ceremonia a favor de los peticionarios que forman parte de los informes No. 20/07 y No. 71/07.

2223. El 27 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa. Los peticionarios no presentaron información actualizada en esta oportunidad.

2224. El 27 de octubre de 2017, el Estado informó en relación a la tercera recomendación, que el 8 de enero de 2015 se realizaron los respectivos pagos a Aldo Nervo Atarama Lonzo, Berly Gustavo Francisco Cano Suárez, Víctor Manuel Cubas Villanueva, Isabel Brígida Heredia Vilchez, Berna Julia Morante Soria, Fabiola Janet Peña Tavera y María Ysabel Rabines Briceño. Finalmente, en relación a la quinta recomendación, el Estado informó que está pendiente la ceremonia de desagravio a favor de los peticionarios que forman parte de los informes N° 20/07 y N°71/07.

2225. La Comisión valora la información suministrada por el Estado. En atención a la información presentada por las partes, la CIDH concluye que se ha dado cumplimiento parcial a los acuerdos amistosos comprendidos en los informes de la referencia y en consecuencia, seguirá supervisando los puntos pendientes. La CIDH insta al Estado y a los peticionarios de los acuerdos de solución amistosa suscritos, a proporcionar información integral sistematizada que contenga una relación de beneficiarios y documentación que permita verificar los pagos efectuados por concepto del inciso N° 2, los actos de desagravio a favor de los peticionarios que forman parte de los informes N° 20/07 y N° 71/07, que se encuentran pendientes de ejecución, las listas de invitados y asistentes a dichos eventos, de manera que se pueda valorar a cabalidad cuales serían los extremos pendientes de cumplimiento.

#### **Petición 494-04, Informe No. 20/08, Romeo Edgardo Vargas Romero (Perú)**

2226. El 13 de marzo de 2008, mediante Informe No. 20/08, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en la petición de Romeo Edgardo Vargas Romero.

2227. De conformidad con el acuerdo de solución amistosa:

1. El Consejo Nacional de la Magistratura rehabilitará el título correspondiente dentro de los 15 (quince) días siguientes a la homologación, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del presente acuerdo de solución amistosa.

2. El Poder Judicial o el Ministerio Público, en los casos de jueces o fiscales, respectivamente, dispondrá la reincorporación del magistrado a su plaza original dentro de los 15 (quince) días siguientes a la rehabilitación del título. De no estar disponible su plaza original, a solicitud del magistrado, éste será reincorporado en una plaza vacante de igual nivel en el mismo o en otro Distrito Judicial. En este caso, dicho magistrado tendrá la primera opción para regresar a su plaza de origen apenas se produzca la vacante respectiva.

3. El Estado Peruano se compromete a reconocer el tiempo de servicios no laborados contados desde la fecha de la Resolución de no ratificación, para los efectos del cómputo de su tiempo de servicios, jubilación, y demás beneficios laborales que le corresponden conforme a la ley peruana. La antigüedad de los servicios prestados por los magistrados acogidos al presente acuerdo de solución amistosa, en caso fuera necesario, para cumplir con éste, que se les traslade a otro Distrito Judicial, será reconocida para todos sus efectos en la nueva sede.

4. El Estado Peruano reconoce al peticionario que se acoja a la presente Solución Amistosa una indemnización total de US\$ 5,000.00 (Cinco Mil Dólares Americanos y 00/100) que incluye los gastos y costas derivados del proceso nacional e internacional correspondiente a su petición.

5. El representante del Estado Peruano se compromete a realizar una Ceremonia de Desagravio Público a favor de los magistrados reincorporados.

2228. Mediante comunicación recibida el 3 de febrero de 2011 el Estado anexó la copia de la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura N° 133-2008-CNM de 22 de mayo de 2008, en la cual se dispuso la rehabilitación del título de fiscal por parte del señor Romeo Edgardo Vargas. En dicha resolución se solicitó información al Fiscal de la Nación sobre la reincorporación del señor Edgardo Vargas en la plaza que ocupaba o, en su defecto, en una correspondiente al título rehabilitado. El Estado no indicó si la reincorporación fue efectivamente cumplida por el Fiscal de la Nación.

2229. El Estado señaló que el 6 de enero de 2011 la Procuraduría Pública Especial Supranacional ofició a la Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia a fin de que disponga un cheque a nombre del señor Edgardo Vargas, por el valor de US\$ 3,400 (tres mil cuatrocientos dólares estadounidenses). Al respecto, proporcionó la copia de un comprobante de pago emitido por la referida oficina general.

2230. El Estado remitió una comunicación el 18 de diciembre de 2012, en la que indicó haber dado cumplimiento a los puntos 1, 2, 3 y 5 del acuerdo de solución amistosa, previamente reseñados. El Estado reiteró mediante comunicación recibida el 27 de noviembre de 2013 la información proporcionada en años anteriores.

2231. El Estado indicó que el pago de la indemnización se completó en enero de 2015, luego de que aprobara el Decreto Supremo No. 375-2014-EF por medio del cual se autorizó la incorporación de recursos al presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. El Estado indicó que aún estaría pendiente la ceremonia de desagravio. La CIDH valora altamente la información proporcionada por el Estado, y queda a la

espera de información adicional sobre el monto específico que se canceló en esta oportunidad al beneficiario, para determinar si se cumplió con el pago total del monto establecido en el acuerdo.

2232. Asimismo, la CIDH reitera que continua a la espera de información sobre si el magistrado fue efectivamente reincorporado por el Fiscal de la Nación y los datos específicos del cargo, y finalmente, sobre los esfuerzos desplegados por el Estado para llevar a cabo el acto de desagravio con la comparecencia del beneficiario.

2233. El 21 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos. El 7 de noviembre de 2016, la parte peticionaria presentó información actualizada. Por su parte, el Estado presentó información el 21 de noviembre de 2016.

2234. El peticionario señaló que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo de Solución Amistosa, ha remitido al Consejo Nacional de la Magistratura su solicitud para que se le rehabilite en su cargo de Fiscal Superior de Lima, sin embargo, hasta la fecha no se ha producida lo requerido.

2235. El Estado presentó información respecto al señor Diomedes Anchante Andrade, Máximo Gómez Benavides, y el peticionario y firmante del Acuerdo de Solución Amistosa aprobado por la CIDH mediante Informe No. 20/08, el señor Romeo Edgardo Vargas Romero. En este sentido, y en cuanto al compromiso relacionado con la rehabilitación de los títulos, reincorporación de los magistrados y reconocimiento del tiempo de servicio, el Estado señaló que mediante Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura No. 133-2008-CNM se dejó sin efecto la resolución que no lo ratificó y se dispuso reincorporarlo, convocando en esa misma Resolución a un nuevo proceso de evaluación y ratificación.

2236. En cuanto al compromiso relacionado a la indemnización, el Estado informó en relación al peticionario del presente caso, que el pago se realizó en tres partes, la primera y la segunda durante los meses de enero y marzo de 2001 y la parte final en enero de 2015, luego de que se aprobara el Decreto Supremo No. 375-2014-EF. Finalmente, en relación al compromiso relacionado con la ceremonia de desagravio público, el Estado reconoció que se mantiene pendiente su realización.

2237. El 4 de mayo de 2017, el Estado informó reiteró que el peticionario Romeo Edgardo Vargas Romero fue incorporado al cargo de Fiscal Superior del Distrito Juridicial de Lima el 23 de julio de 2008, mediante la Resolución Judicial de la Nación N° 974-2008-MP-FN. Sin embargo, en la Resolución Judicial de Fiscales Supremos N° 056-2008-MP-FN del 26 de julio de 2008, se aceptó la renuncia del peticionario al cargo. Adicionalmente, el Estado comunicó que la renuncia del peticionario fue confirmada por el Ministerio Público el 3 de abril de 2017. Por lo anterior, el Estado indicó que cumplió cabalmente con la cláusula 1) del acuerdo. Dicha información fue trasladada al peticionario para que presentara sus observaciones.

2238. El 26 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa.

2239. El 24 de octubre de 2017, el Estado reiteró la información suministrada en relación al inciso 1) del acuerdo, y la solicitud de que se dé por cumplido el punto previamente mencionado.

2240. Frente a la información suministrada, y frente a la falta de observaciones de la parte peticionaria, la Comisión declara el cumplimiento total del punto No. 1 del acuerdo de solución amistosa.

2241. La CIDH considera que no tiene información suficiente y específica sobre las gestiones realizadas con el objeto de dar cumplimiento a los demás compromisos asumidos en el acuerdo de solución amistosa, en particular sobre la ceremonia de desagravio público. Al respecto invita a las partes a presentar mayor información e insta al Estado a avanzar de manera ágil hacia el cumplimiento integral de los compromisos asumidos.

2242. Por lo expuesto, la CIDH, la CIDH concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes y en consecuencia, seguirá supervisando los puntos pendientes.

**Petición 71-06 y otras, Informe No. 22/11, Gloria José Yaquetto Paredes y otros (Perú)**

2243. El 23 de marzo de 2011, mediante Informe No. 22/11, la Comisión aprobó los términos del acuerdo de solución amistosa de fecha 24 de septiembre de 2010, suscrito por el Estado peruano y veintiuno magistrados no ratificados, cuyos reclamos fueron acumulados bajo la petición 71-06.

2244. De conformidad con el texto del acuerdo de solución amistosa, el Estado:

1. Se comprometió a rehabilitar el título correspondiente y a disponer la reincorporación de los magistrados.
2. Se comprometió a reconocer el tiempo de servicios no laborados para los efectos del cómputo del tiempo de servicios, jubilación, y demás beneficios laborales que corresponden conforme a la ley peruana.
3. Reconoció una indemnización total de US\$ 5,000.00 (Cinco Mil Dólares Americanos y 00/100) que incluye los gastos y costas derivados del proceso nacional e internacional correspondiente a su petición.
4. Se comprometió a llevar a cabo un nuevo procedimiento de evaluación y ratificación a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura respecto de los magistrados comprendidos en los acuerdos de solución amistosa, el cual se encontrará a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura y se realizará de conformidad con las normas y principios constitucionales (artículos 139 y 154 de la Constitución Política del Perú), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia vinculante que garantiza el debido proceso dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Las disposiciones normativas correspondientes en lo que fuere necesario serán adecuadas para tal efecto.
5. Se comprometió a realizar una Ceremonia de Desagravio Público a favor de los magistrados reincorporados.

2245. El 15 de enero de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a ambas partes en relación a los avances en el proceso de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en virtud del acuerdo de solución amistosa. En esa ocasión, la CIDH no recibió respuesta dentro del plazo fijado.

2246. Durante el seguimiento que ha realizado la CIDH sobre el cumplimiento del anterior Informe de Solución Amistosa en el año 2012, el Estado presentó información en relación a algunos de los Magistrados no ratificados. En relación con los compromisos 1 y 4 del Acuerdo, el Estado puso en conocimiento de la CIDH que: por resolución N° 029-2011-P-CSJS de 1 de septiembre de 2011, el señor Manuel Vicente Trujillo Meza fue reincorporado en el cargo de Vocal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Junín, pero no pudo ocupar la plaza por el límite de edad establecido en la legislación; por resolución N° 029-2011-P-CSJSU-PJ de 1 de septiembre, el señor José Miguel La Rosa Gómez de la Torre fue reincorporado en el cargo de Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima, pero posteriormente no fue ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura, dentro del proceso individual de evaluación y ratificación que se realizó ese mismo año; y que por resolución N° 122-2011-CNM de 14 de abril de 2011, el señor Carlos Felipe Linares Vera Portocarreño fue reincorporado como magistrado hasta principios del año 2012, ya que con base en un nuevo proceso individual de evaluación y ratificación de diversos magistrados, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no renovar su confianza. En relación al compromiso 2, el Estado únicamente presentó información en relación con el magistrado Manuel Vicente Trujillo Meza y José Miguel La Rosa Gómez de la Torre.

2247. Igualmente durante el año 2012, el señor José Miguel La Rosa Gómez de la Torre informó a la CIDH en relación con el compromiso 3, que el Estado había abonado una cantidad de \$3,000, quedando faltante de pagar \$2,000. En relación con el compromiso 4, el señor José Miguel La Rosa Gómez indicó que el nuevo proceso de evaluación y ratificación al que fue sometido, no se realizó conforme con las normas y principios constitucionales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Igualmente indicó que el Estado no había dado cumplimiento al compromiso V del Acuerdo.

2248. El magistrado Carlos Felipe Linares Vera Portocarreño, mediante comunicación de 30 de enero de 2013, informó a la CIDH en relación al compromiso 1 del Acuerdo que el Estado no le reincorporó a su plaza original, pese a estar disponible. En relación con el compromiso 4, el señor Linares señaló que en el nuevo proceso de evaluación y de ratificación al que fue sometido no tuvo derecho a una juez imparcial en segunda instancia.

2249. El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes en relación a los avances alcanzados en el proceso de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en virtud del acuerdo de solución amistosa. En esta oportunidad, el Estado informó mediante comunicación de 27 de noviembre de 2013 que mediante Resolución N° 123-2011-CNM de 14 de abril de 2011 resolvió rehabilitar los títulos correspondientes a los magistrados comprendidos en el presente acuerdo de solución amistosa, y solicitó a la Comisión dar por cumplido este compromiso. Igualmente, el Estado informó que ha pagado a los peticionarios la suma de US\$3,400 por concepto de reparación económica, quedando pendiente el pago de US\$1,400 a favor de cada uno de ellos.

2250. La mayoría de los peticionarios no presentaron información dentro del plazo fijado por la CIDH. El peticionario Edwin Elías Vásquez Puris informó, mediante comunicación de 6 de noviembre de 2013, que en relación a la cláusula segunda relativa al reconocimiento del tiempo de servicios, el Estado no ha cumplido con efectivizar todos los derechos a “la jubilación y demás beneficios laborales”, que le correspondían conforme a la legislación peruana. En relación con el compromiso de abonar US\$5,000, señaló que solamente había recibido US\$3,000, y que no se sometió al nuevo proceso de evaluación y ratificación ya que las condiciones que habían antecedido a su no ratificación no habían variado, por lo que renunció al cargo de Vocal Superior. Igualmente informó que el Estado no ha realizado a la fecha la ceremonia de desagravio público.

2251. El peticionario Fidel Gregorio Quevedo informó, mediante comunicación de 14 de octubre de 2013, que el Estado solamente le había pagado US\$3,500 en concepto de reparación económica, y que tampoco había reconocido el tiempo de servicios por el periodo no laborado por la no ratificación a efectos de la pensión, por lo que había entablado un proceso judicial al respecto. Por su parte, el peticionario Carlos Felipe Linares Vera Portocarreño informó, mediante comunicación de 9 de octubre de 2013, que el Estado no ha cumplido con el compromiso sobre incorporación a su plaza original, y con el relativo a contar en el nuevo proceso de ratificación con un juez imparcial.

2252. El 30 de septiembre de 2015, La CIDH solicitó información actualizada a las partes.

2253. El Estado reiteró, el 9 de noviembre de 2015, que a través de la resolución N° 122-2011-CNM y No. 123-2011- CNM, ambas del 14 de abril de 2014, se habrían dejado sin efecto las resoluciones de no ratificación y se rehabilitaron los títulos de los magistrados comprendidos en el acuerdo. Al respecto, la CIDH observa que el Estado había proporcionado dicha información con anterioridad, dándole seguimiento al efecto de dichas resoluciones desde el 2012.

2254. Por otro lado, el Estado también reiteró de manera general, haber realizado los pagos de las reparaciones económicas.

2255. Por su parte, Gloria Jose Yaquetto, indicó el 17 de noviembre de 2015, que hasta la fecha no se ha realizado la ceremonia de desagravio. Indicó además que en el primer semestre de 2015 se cumplió con el pago del monto indemnizatorio, pero que el Estado no ha cumplido con reconocer el tiempo de servicios

para el cómputo de los beneficios sociales. Finalizó su escrito reconociendo que fue reincorporada al cargo y se le rehabilitó el título correspondiente.

2256. La Comisión valora altamente los avances del Estado peruano hacia el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. La Comisión observa que en relación con la señora Gloria Yaquetto, se ha cumplido parcialmente el acuerdo, presentándose avances sustanciales en materia de reparación y reincorporación.

2257. Al mismo tiempo, la CIDH advierte con preocupación que no cuenta con suficiente información en relación a los demás beneficiarios del acuerdo de solución amistosa incluidos en el Informe 22/11. En ese sentido, la CIDH insta al Estado a presentar información sustancial, con documentación de soporte sobre el cumplimiento de los compromisos, en particular sobre la reincorporación, reconocimiento de tiempo de servicios, monto de indemnización pagada, nuevo proceso de evaluación o ratificación y ceremonia de desagravio, en relación a las siguientes personas que fueron incluidas en el acuerdo: Pedro Alberto Córdova Rojas (P 109-06), Pedro Lucio Ramos Miranda (P 120-06), Heriberto Hugo Lévano Torres (P 513-06), Víctor Ladrón de Guevara De la Cruz (P 572-06), Carlos Felipe Linares Vera Portocarrero (P 594-06), Juan Nicanor Zúñiga Bocanegra (P 634-06), Javier Rolando Peralta Andía (P 834-06), Edwin Elías Vásquez Puris (P 1066-06), Genaro Nelson Lozano Alvarado (P 1160-06), José Francisco Jurado Nájera (P 1285-06), Luís Rafael Callapiña Hurtado (P 184-07), Ricardo Quispe Pérez (P 364-07), Fidel Gregorio Quevedo Cajo (P 451-07), Aquiles Niño de Guzmán Feijoo (P 492-07), José Domingo Choquehuanca Calcina (P 627-07), José Miguel La Rosa Gómez de la Torre (P 986-07), Rodolfo Kádagand Lovatón (P 1179-07), Simón Damacén Mori (P 1562-07), Carmen Encarnación Lajo Lazo (P 638-07) y Manuel Vicente Trujillo Meza (P 714-07). Es de anotar, que el seguimiento de todos los asuntos anteriormente mencionados se realiza dentro del marco de la petición No. 71/06.

2258. Finalmente, en relación con todos los beneficiarios, la CIDH observa que el Estado aún no ha perfeccionado el acto de desagravio, el cual podría ser cumplido a través de un evento colectivo para este caso, para lo cual se podrían tomar las medidas necesarias para asegurar la participación de todas las víctimas. La CIDH queda a la espera de información actualizada sobre este punto.

2259. El 21 de octubre de 2016, la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes en relación a los avances alcanzados en el proceso de cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud del acuerdo de solución amistosa.

2260. El 4 de noviembre de 2016, el peticionario Carlos Felipe Linares destacó en relación al escrito presentado por el Estado en fecha 6 de noviembre del 2015 sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos, que éste Estado no reseñó como ha llevado a cabo el procedimiento de evaluación y ratificación sobre su persona. En este sentido, el peticionario indicó que éste se ha realizado violando elementales normas y principios constitucionales previstos en el Art. 139 y 154 de la Constitución Política del Perú, la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, el peticionario recalcó que se ha violado el principio de Juez imparcial al instalar un proceso interno dentro del CNN de reconsideración que viola la doble instancia. Finalmente, el peticionario ratifica sus observaciones y planteamientos expresados en las comunicaciones enviadas a la CIDH a lo largo de los años 2013 al 2015.

2261. El 22 de noviembre de 2016, el Estado indicó en relación a los compromisos establecidos en los numerales 1 y 2, que ha cumplido con esta medida a través de las resoluciones No. 122-2011-CNM y No. 123-2011-CNM, las cuales dejaron sin efecto las resoluciones de no ratificación y se rehabilitaron los títulos de los magistrados comprendidos en este acuerdo. En particular, el Estado señaló la situación individual de 10 de los peticionarios, entre ellos se mencionan a: Gloria José Yaquetto Paredes, quien mantiene su cargo como Fiscal Adjunto; Heriberto Hugo Lévano Torres, quien mantiene su cargo como Fiscal Adjunto Superior; Víctor Ladrón de Guevara De la Cruz, quien fue ratificado en su cargo; Juan Nicanor Zúñiga Bocanegra, quien fue ratificado en su cargo; Edwin Elías Vásquez Puris, quien decidió renunciar luego de que se rehabilitara su cargo; Ricardo Quispe Pérez, quien fue cesado por límite de edad luego de haber ejercido su cargo; Fidel Gregorio Quevedo Cajo, quien fue cesado por límite de edad luego de haber ejercido su cargo de Juez Superior; José Miguel La Rosa Gómez de la Torre, quien no fue ratificado en su cargo; Rodolfo Kádagand

Lovatón, quien no fue ratificado en su cargo; y Carmen Encarnación Lajo Lazo, quien mantiene su puesto de Juez penal.

2262. En relación al compromiso establecido en el numeral 3, el Estado explicó que el pago de la indemnización se realizó en dos partes, la primera se realizó durante el 2011 y la segunda se completó en enero de 2015. En este sentido, el Estado afirmó que se le pagó a cada uno de los peticionarios un monto ascendiente a S/. 4667.20.

2263. El Estado como último punto en su comunicación, reconoció que aún está pendiente la realización de una Ceremonia de Desagravio Público a favor de los magistrados reincorporados.

2264. El 18 de abril de 2017, el Estado informó en relación al punto 1) que mediante Resolución Administrativa N° 210-2011-CSJPI-PJ de mayo de 2011, el señor Carlos Felipe Linares Vera Portocarrero fue reincorporado como Juez Superior Titular de la provincia de Sullana y no como Juez Titular de la Primera Sala Penal de la provincia de Piura debido a que la plaza original no se encontraba vacante al momento de la reincorporación. Asimismo, el Estado advirtió que en el acuerdo se contempla la posibilidad de que se reincorpore en una plaza de un distrito judicial distinto cuando la plaza original no se encuentre disponible.

2265. En relación a la vulneraciones de derecho alegadas por el peticionario durante el proceso de ratificación posterior, el Estado informó que la ratificación se realizó a través de la Resolución N° 122-2011-CNN, que debidamente se le permitió acceder al expediente e informe individual y que en todo momento se le respetaron las garantías del derecho al debido proceso. Asimismo, el Estado alegó que el señor Linares Vera Portocarrero tuvo la oportunidad de cuestionar la resolución, mediante un recurso en contra. Adicionalmente, indicó que el peticionario no ha agotado la vía judicial interna. Por todo lo anterior y tomando en cuenta que los resultados del proceso de ratificación no forman parte del acuerdo, el Estado consideró que este punto del acuerdo se encuentra cumplido totalmente.

2266. El 16 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa. El 26 de septiembre de 2017, la parte peticionaria presentó información actualizada. Por su parte, el Estado presentó información el 10 y 27 de octubre de 2017.

2267. El Estado ratificó lo alegado en escritos anteriores e informó que no solamente se le devolvió la plaza en el mismo nivel que tenía antes, sino que se incorporó como Presidente de la Sala Especializada Penal Liquidadora Descentralizada de Sullana, lo que el Estado consideró constituye un cumplimiento adecuado del inciso 1) del acuerdo. En relación al proceso de evaluación y ratificación judicial posterior, el Estado ratificó lo comunicado en informes anteriores y destacó que según la Resolución N° 009-2012-PCNM al peticionario no se le ratificó debido a una serie de denuncias interpuestas en su contra por haber sido detenido conduciendo bajo los efectos del alcohol y haber agredido a varios funcionarios policiales. Asimismo, recordó que el proceso de amparo del expediente N°14491-2015-00 es objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional que aún no concluye. Finalmente, el Estado solicitó se declare cumplido este extremo del acuerdo.

2268. El 27 de septiembre de 2017, el Estado informó en relación a Pedro Alberto Córdoba Rojas, que con posterioridad a que se dejara sin efecto la resolución de no ratificación y se rehabilitara su título, se realizó un nuevo procedimiento de evaluación y ratificación, el cual concluyó, mediante la Resolución N° 047-2012-PCNM, con la no renovación de confianza, por lo tanto, la Fiscalía de la Nación concluyó su designación mediante Resolución N° 2313-2012-MP-FN del 11 de septiembre de 2012.

2269. En relación con Pedro Lucio Ramos Miranda, el Estado informó que mediante la Resolución N° 071-2012 PCNM se procedió con la ratificación en su cargo y en consecuencia, el señor Ramos Miranda se encuentra en su puesto de Fiscal Provincial en la Fiscalía Provincial de Lampa.

2270. Respecto a Javier Rolando Peralta Andía, el Estado informó que con posterioridad a que se dejara sin efecto la resolución de no ratificación y se rehabilitara su título, se realizó un nuevo procedimiento

de evaluación y ratificación, el cual concluyó, mediante la Resolución N° 610-2012-PCNM, con la renovación de confianza, por lo tanto, el señor Peralta Andía ejerció como Juez Superior Titular de la Corte Superior de Huara, hasta el 24 de septiembre de 2013, fecha en la que se cesó por límite de edad según la Resolución Administrativa N° 091-2013-CE-PJ.

2271. En relación con Genaro Nelson Lozano Alvarado, el Estado indicó que con posterioridad a que se dejara sin efecto la resolución de no ratificación y se rehabilitara su título, se realizó un nuevo procedimiento de evaluación y ratificación, el cual concluyó, mediante la Resolución N° 008-2012-PCNM, con la renovación de confianza, por lo tanto, se procedió con la ratificación. Posteriormente, el señor Lozano Alvarado renunció a su cargo, lo que fue aceptado mediante Resolución Administrativa N°072-2013-P-CE-PJ.

2272. Respecto a Luis Rafael Callapiña Hurtado, el Estado indicó que con posterioridad a que se dejara sin efecto la resolución de no ratificación y se rehabilitara su título, se realizó un nuevo procedimiento de evaluación y ratificación, el cual concluyó, mediante la Resolución N° 017-2012-PCNM, con la renovación de confianza, por lo tanto, se procedió con la ratificación de su cargo. El señor Callapiña Hurtado ejerció como Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia del Cusco hasta 24 de octubre de 2016, fecha en la que se cesó por límite de edad, según la Resolución Administrativa N° 095-2013-CE-PJ.

2273. En relación a José Domingo Choquehuanca, el Estado indicó que con posterioridad a que se dejara sin efecto la resolución de no ratificación y se rehabilitara su título, se realizó un nuevo procedimiento de evaluación y ratificación, el cual concluyó, mediante la Resolución N° 171-2011-PCNM, con la renovación de confianza, por lo tanto, se procedió con la ratificación. Posteriormente, el señor Choquehuanca renunció a su cargo, lo que fue aceptado mediante Resolución Administrativa N°497-2012-MP-FN

2274. Con respecto a Simón Damacén Mori, el Estado comunicó que con posterioridad a que se dejara sin efecto la resolución de no ratificación y se rehabilitara su título, se realizó un nuevo procedimiento de evaluación y ratificación, el cual concluyó, mediante la Resolución N° 120-2014-PCNM, con la renovación de confianza, por lo tanto, se procedió con la ratificación. Posteriormente, el señor Damacén Mori renunció a su cargo, lo que fue aceptado mediante Resolución Administrativa N°076-2015-CNM.

2275. En relación a Aquiles Niño de Guzmán Feijoo, el Estado informó que mediante el Oficio N° 004-2016-PRO-CNM del 9 de enero de 2017, se comunicó la muerte del magistrado el 5 de febrero de 2013.

2276. Sobre José Francisco Jurado Nájera, el Estado informó que con posterioridad a que se dejara sin efecto la resolución de no ratificación y se rehabilitara su título, se realizó un nuevo procedimiento de evaluación y ratificación, el cual concluyó con la renovación de confianza, por lo tanto, se procedió con la ratificación de su cargo. Posteriormente, mediante la Resolución N° 224-2011-CNM, se canceló su título por límite de edad.

2277. Finalmente, en relación a Manuel Vicente Trujillo Meza, el Estado indicó que con posterioridad a que se dejara sin efecto la resolución de no ratificación y se rehabilitara su título, se realizó un nuevo procedimiento de evaluación y ratificación, el cual concluyó con la renovación de confianza, por lo tanto, se procedió con la ratificación de su cargo. Posteriormente, mediante la Resolución N° 213-2011-CNM, se canceló su título por límite de edad.

2278. La Comisión toma nota del detalle de la información suministrada por el Estado la cual será trasladada a la parte peticionaria para que presente sus observaciones antes de pronunciarse sobre el cumplimiento los puntos 1 y 4 del acuerdo de solución amistosa.

2279. Por otro lado, el peticionario Carlos Felipe Linares indicó que en la Resolución Administrativa N°2010-2011-P-CSJPI/PJ de mayo de 2011, se puede observar que la plaza en el Distrito Judicial de Piura se encontraba vacante al momento de su reincorporación y que era potestad del Presidente de la Corte Superior proceder con la reincorporación, pero que decidió enviarlo a una plaza ubicada a 50km de Piura.

2280. La Comisión observa que en relación con el señor Carlos Felipe Linares Vera Portocarrero, se ha cumplido parcialmente el acuerdo, presentándose avances en los compromisos 1) y 4) del acuerdo. Por lo que insta al Estado a avanzar de manera ágil hacia el cumplimiento integral de los compromisos asumidos.

2281. Respecto al pago de indemnización y ceremonia de desagravio, el Estado ratificó la información suministrada en el 2016 y presentó como anexos a su informe los comprobantes de pago de cada uno de los diez peticionarios del presente caso.

2282. La Comisión toma nota del detalle de la información suministrada por el Estado la cual será trasladada a la parte peticionaria para que presente sus observaciones antes de pronunciarse sobre el cumplimiento del punto 3.

2283. En atención a la información recibida, la CIDH resalta los avances obtenidos por el Estado en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo de Solución Amistosa. Al mismo tiempo, la CIDH insta a los peticionarios a suministrar información que consideren pertinente a la brevedad.

2284. En atención a la información recibida, la CIDH concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes y en consecuencia, se pronunciara sobre el cumplimiento de los puntos señalados en el próximo informe anual.

**Petición 288-08, Informe No. 69/16, Jesús Salvador Ferreyra González, (Perú)**

2285. En fecha 30 de noviembre de 2016, la CIDH aprobó el informe de Solución Amistosa No. 69/16, sobre el caso Jesús Salvador Ferreyra. El caso hace referencia a los hechos a través de los cuales, luego de más de 22 años al servicio del Poder Judicial, el Señor Jesús Ferreyra fue sometido a un proceso de evaluación y ratificación dentro del cual se le habrían violado sus derechos y se habría decidido de manera arbitraria y sin fundamentación su no ratificación en el cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Ica, y como consecuencia se le separó definitivamente del cargo.

2286. Las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa el 31 de octubre de 2016 en el cual se señaló por parte del Estado Peruano que:

1. Reconoce su responsabilidad en el proceso de ratificación de jueces y fiscales, en el que no se incorporaron ciertas garantías de la Tutela Procesal Efectiva, particularmente la exigencia de resolución motivada, que debe ser observada en todo tipo de procedimiento.
2. Ordenará la rehabilitación del título correspondiente dentro de los quince días hábiles contados a partir de la homologación del acuerdo de solución amistosa y dispondrá la reincorporación del magistrado Jesús Ferreyra dentro de los 15 días siguientes a la rehabilitación del título, de no poderse su plaza original, a solicitud del señor Ferreyra será reincorporado en una plaza vacante de igual nivel.
3. Se compromete a reconocer el tiempo de servicios no laborados contados desde la fecha de la Resolución de no ratificación, para los efectos del cómputo de su tiempo de servicios y jubilación conforme a la ley peruana, dejando debidamente señalado que, corresponderá al trabajador asumir el pago de los aportes previsionales por los años de servicios reconocidos.
4. El Estado Peruano se compromete a la realización de un nuevo procedimiento de evaluación integral y ratificación, a los fines de que este esté ajustado a las normas y principios constitucionales.

2287. En su informe de Solución Amistosa No. 69/16, la CIDH valoró el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado peruano dentro del acuerdo de solución amistosa por la violación de las garantías de la tutela judicial efectiva, a la luz de las normas nacionales, regionales y la jurisprudencia del

sistema interamericano de derechos humanos, y tomó nota de los compromisos asumidos por el Estado peruano para reparar integralmente a señor Jesús Salvador Ferreyra González.

2288. En atención a lo anterior, y tomando en especial consideración la solicitud conjunta de las partes respecto a la aprobación del acuerdo de solución amistosa, la CIDH indicó que la totalidad de los compromisos se encontraban pendientes de cumplimiento y les daría seguimiento a todos los compromisos asumidos en el acuerdo hasta su total implementación con posterioridad a la emisión del informe, a través de su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

2289. El 12 de julio de 2017, la CIDH recibió una comunicación por parte del Estado en la que informó en relación a la rehabilitación del título y la reincorporación del señor Ferreyra, y manifestó que mediante acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, en la Resolución CNM N°036-2017-CNM del 18 de enero de 2017, y en Resolución Administrativa del Poder Judicial N° 071-2017-CE-PJ del 31 de enero de 2017, se rehabilitó al título de Juez Superior de la Corte Superior del Distrito Judicial de Ica. Dicha información fue trasladada al peticionario para que presentara sus observaciones.

2290. El peticionario confirmó que la información suministrada por el Estado peruano es correcta y que por acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) N° 090-2017 del 18 de Enero del 2,017, se rehabilitó el título de Vocal (hoy Juez Superior) de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Ica a su favor, habiéndose dictado para ello la Resolución del CNM N° 036-2017-CNM del 18 de Enero de 2,017. Asimismo, el peticionario indicó el Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 071-2017-P-CSJIC/PJ, de fecha 31 de Enero de 2,017, expedida por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, efectivizó la Resolución N° 036-2017-CNM, disponiendo su reincorporación en las funciones como Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Ica, a partir del 01 de Febrero del 2,017 como Presidente de la Segunda Sala Civil de Ica. Asimismo, indicó que se encuentra inmerso en la convocatoria N003-2017-Ratificación/CNM, que aún no ha concluido y se encuentra en trámite, teniendo como fecha para su entrevista personal el día 18 de enero de 2018 a las 8:30 am.

2291. Tomando en consideración la información proporcionada por las partes, la CIDH declara los puntos 1,2 y 3 se encuentran cumplidos y que el punto 4 del acuerdo de solución amistosa se encuentra pendiente de cumplimiento.

#### **Petición 1339-07, Informe No. 70/16, Tito Guido Gallegos Gallegos, (Perú)**

2292. El 30 de noviembre de 2016, la CIDH aprobó el informe de Solución Amistosa No. 70/16 sobre el caso Tito Guido Gallegos Gallegos. El asunto se relaciona con violaciones al debido proceso en perjuicio de la víctima, quien luego de siete años de ejercicio de la magistratura fue sometido a un proceso de evaluación y ratificación dentro del cual se le habrían violado sus derechos y se habría decidido de manera arbitraria y sin fundamentación su no ratificación en el cargo de Vocal de Superior de la Corte Superior de Justicia de Puno, y como consecuencia, se le separó definitivamente del cargo.

2293. Las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa el 26 de octubre de 2016, en el cual se dejó señalado lo siguiente:

1. El Estado Peruano reconoce su responsabilidad en el proceso de ratificación de jueces y fiscales, en el que no se incorporaron ciertas garantías de la Tutela Procesal Efectiva, particularmente la exigencia de resolución motivada, que debe ser observada en todo tipo de procedimiento.
2. El Estado de Perú se compromete a ordenar la rehabilitación del título correspondiente dentro de los quince días hábiles contados a partir de la homologación del acuerdo de solución amistosa y dispondrá la reincorporación del magistrado Tito Guido Gallegos Gallegos dentro de los 15 días siguientes a la rehabilitación del título, de no poderse su plaza original, a solicitud del señor Gallegos será reincorporado en una plaza vacante de igual nivel.

3. El Estado Peruano se compromete a reconocer el tiempo de servicios no laborados contados desde la fecha de la Resolución de no ratificación, para los efectos del cómputo de su tiempo de servicios y jubilación conforme a la ley peruana, dejando debidamente señalado que, corresponderá al trabajador asumir el pago de los aportes previsionales por los años de servicios reconocidos.

4. El Estado Peruano se compromete a la realización de un nuevo procedimiento de evaluación integral y ratificación, a los fines de que este esté ajustado a las normas y principios constitucionales.

2294. En su informe de Solución Amistosa No. 70/16, la CIDH valoró el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado peruano dentro del acuerdo de solución amistosa por la violación de las garantías de la tutela judicial efectiva, a la luz de las normas nacionales, regionales y la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, y tomó nota de los compromisos asumidos por el Estado peruano para reparar integralmente a señor Tito Guido Gallegos Gallegos.

2295. En atención a lo anterior, y tomando en especial consideración la solicitud conjunta de las partes respecto a la aprobación del acuerdo de solución amistosa, la CIDH indicó que la totalidad de los compromisos se encontraban pendientes de cumplimiento y les daría seguimiento a todos los compromisos asumidos en el acuerdo hasta su total implementación con posterioridad a la emisión del informe, a través de su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

2296. El 11 de julio de 2017, el Estado informó que según el acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) N° 089-2017 del 18 de enero de 2017 y mediante Resolución N° 035-2017-CNM del 18 de enero de 2017, el señor Gallegos fue rehabilitado al título de Juez Superior de la Corte Superior del Distrito Judicial de Puno, pero de conformidad con la Resolución Administrativa N° 121-2017-CE-PJ y N° 2025-2007-CNM del 1 y 6 de abril de 2017, respectivamente, se dispuso la cancelación del nombramiento en el Distrito Judicial de Puno y se ordenó la reincorporación del señor Gallegos como Juez de la Corte Superior del Distrito Judicial Ica. Todo ello debido a que la plaza en Puno no se encontraba disponible al momento de la restitución. Asimismo, el Estado manifestó que el acuerdo permite que de no estar vacante la misma plaza que tenía antes de la destitución, se reincorpore en una plaza de igual nivel en otro Distrito Judicial. Dicha información fue trasladada al peticionario para que presentara sus observaciones.

2297. A la fecha de cierre de este informe, la CIDH no ha recibido observaciones de la parte peticionaria.

2298. En atención a la información recibida, la CIDH concluye que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el acuerdo de solución amistosa se encuentran cumplidos parcialmente. Como resultado, la Comisión seguirá supervisando su cumplimiento.

#### **Caso 12.269, Informe N° 28/09, Dexter Lendore (Trinidad y Tobago)**

2299. En su Informe N° 28/09 aprobado el 20 de marzo de 2009, la Comisión Interamericana concluyó que Trinidad y Tobago es responsable de la violación de los derechos del señor Lendore, protegidos por los artículos 8(1) y 8(2) de la Convención Americana, en conjunción con la violación del artículo 1(1) del mismo instrumento internacional, debido a que no se le proveyó de asistencia legal competente y efectiva durante un procedimiento criminal; y que el Estado es asimismo responsable por la violación de los derechos del señor Lendore protegidos por los artículos 25 y 8 de la Convención Americana, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, así como también la violación de los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana, por no otorgar al Señor acceso efectivo a una Moción Constitucional para la protección de sus derechos fundamentales.

2300. En base a estas conclusiones la CIDH recomienda a Trinidad y Tobago:

1. Conceder al señor Lendore un recurso efectivo, que incluya un nuevo juicio conforme a los mecanismos de protección del debido proceso preceptuados por el artículo 8 de la Convención Americana, o bien, si no es posible llevar a cabo un nuevo juicio en cumplimiento de esos mecanismos de protección, la liberación y el pago de una indemnización al señor Lendore.

2. Adoptar las medidas legislativas o de otro género que sean necesarias para garantizar al señor Lendore condiciones de detención congruentes con las normas internacionales de tratamiento humano previstas por el artículo 5 de la Convención Americana, los artículos XXV y XXVI de la Declaración Americana y otros instrumentos pertinentes, incluido el traslado del señor Lendore del pabellón de la muerte.

3. Adoptar las medidas legislativas o de otro género que sean necesarias para garantizar la observancia efectiva, en Trinidad y Tobago, del derecho a la protección judicial previsto por los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana, en relación con la posibilidad de promover Mociones Constitucionales.

2301. El 9 de octubre 2013, el 4 de diciembre de 2014, el 1 de octubre de 2015, el 12 de octubre de 2016 y el 27 de septiembre de 2017 la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.

2302. Con base en información suministrada por los peticionarios, la Comisión Interamericana observa que el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas continúa pendiente. Por lo tanto, la Comisión seguirá vigilando el cumplimiento de sus recomendaciones.

#### **Caso 12.553, Informe No. 86/09, Jorge, José y Dante Peirano Basso (Uruguay)**

2303. En el Informe No. 86/09 de fecha 6 de agosto de 2009, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado era responsable por haber violado los derechos de Jorge, José y Dante Peirano previstos en los artículos 7(2), 3, 5 y 6, 8(1) y 2, y 25(1) y 2, en función de las obligaciones de los artículos 1(1) y 2, de la Convención Americana y, en consecuencia, formula recomendaciones específicas. En resumen, los peticionarios alegaron que los tres hermanos Peirano Basso fueron privados de su libertad desde el 8 de agosto de 2002, sin que hasta la fecha de presentación de la denuncia el 18 de octubre de 2004 hubieran sido formalmente acusados ni llevados a juicio. En enero de 2005 se habrían cumplido los requisitos para su liberación, según los peticionarios, por haber cumplido dos años y medio privados de su libertad. El Estado les había imputado la violación a la ley 2.230 (1893), que sanciona a los directores de compañías en disolución que cometan fraude u otros delitos financieros. Según la denuncia, ese delito admite la libertad durante el proceso, a pesar de lo cual los señores Peirano Basso permanecieron privados de su libertad en virtud de la “alarma social” provocada por el colapso del sistema bancario uruguayo y su supuesta responsabilidad en él.

2304. En su informe la Comisión decidió lo siguiente:

1. Que el Estado uruguayo tome todas las medidas necesarias para que los peticionarios sean puestos en libertad, mientras esté pendiente la sentencia, sin perjuicio de que continúe el proceso.

2. Reiterar la recomendación relativa a que el Estado produzca la modificación de las disposiciones legislativas o de otro carácter, a fin de hacerlas consistentes en un todo con las normas de la Convención Americana que garantizan el derecho a la libertad personal.

2305. Mediante nota del 20 de diciembre de 2010, el Estado informó que el proyecto de ley de modificación del Código Penal fue remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento el 9 de noviembre de 2010 y puesto en consideración de la Comisión de Constitucional, Códigos, Legislación General y Administración de

la Cámara de Representantes el 16 de noviembre de 2010. Al respecto, explicó que desde el 15 de diciembre al 30 de marzo de 2011 el proyecto quedó abierto a la presentación de enmiendas por parte de los Representantes Nacionales, para luego pasar a la etapa de discusión del proyecto de ley.

2306. En notas del 15 de julio de 2010 y 7 de febrero de 2011, los peticionarios solicitaron audiencia ante la CIDH y señalaron que a pesar de la derogación del art. 76 de la ley N° 2.230, por la cual los señores Peirano habían sido procesados y encarcelados, la jueza del caso había decidido la prosecución de las actuaciones. Informaron, además, otras supuestas arbitrariedades como la prohibición a los peticionarios de salir de Montevideo, la suspensión del título profesional de Jorge Peirano y el desconocimiento del tiempo sufrido como prisión preventiva en Estados Unidos por Juan Peirano. Posteriormente los peticionarios presentaron un escrito de fecha 18 de julio de 2011, en el que alegaron como un hecho muy grave la decisión de la Suprema Corte de Justicia del 15 de abril de 2011, de continuar con la causa contra los hermanos Peirano, a pesar de haberse derogado el art. 76 de la ley 18.411 en el 2008. En su decisión, la Suprema Corte consideró que si bien dicho delito había sido derogado, el proceso debía continuar en virtud de la ampliación de la acusación fiscal contra los Peirano realizada en octubre de 2006 por el delito de “insolvencia societaria fraudulenta” (art. 5, Ley 14095). Los peticionarios consideran que dicha decisión viola el principio de retroactividad de la ley penal más benigna contemplada en el art. 9 de la Convención Americana, ya que la ampliación de la denuncia fiscal fue una maniobra del Estado para justificar el largo plazo de detención ante la inminente derogación del art. 76 de la ley N° 2.230. Además, contradiciendo el criterio de la Suprema Corte, señalan que dicha ampliación de la acusación fiscal era improcedente por no existir hechos nuevos posteriores al auto de procesamiento (que en su criterio es inamovible); y que en dicho auto sólo se les había acusado por el delito ahora derogado.

2307. En relación con la reforma legislativa, los peticionarios informaron a la Comisión en comunicación del 21 de noviembre de 2011 que aun cuando se encuentra en estudio en el Parlamento observan síntomas preocupantes respecto a su materialización, por un lado la falta de voluntad política por parte del Ejecutivo para llevar adelante los cambios necesarios; y de otra, las previsiones existentes de que solo hasta el 2014 se podrá comenzar a probar el nuevo sistema procesal penal. Los peticionarios solicitan a la CIDH que emplace al Estado uruguayo a rendir cuentas sobre las acciones ejecutadas con posterioridad a la adopción y publicación del informe.

2308. En comunicación recibida el 15 de diciembre de 2011, el Estado uruguayo remitió el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo al Parlamento con el Código del Proceso Penal propuesto al Congreso, así como las versiones taquigráficas de las sesiones de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores de los días 3, 10 y 31 de mayo y 19 de julio de 2011.

2309. En su comunicación de 3 de enero de 2013, el Estado informó que el proyecto de reforma del Código Penal continúa en estudio de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes al igual que los proyectos de reforma de los Códigos General del Proceso y Código del Proceso Penal. Además, el Estado refirió que simultáneamente se verifican otros avances relacionados con las modificaciones al régimen de penas y medidas alternativas a la prisión. En tal sentido, menciona que el proyecto de ley modificatoria de la Ley N° 17.726 sobre Penas y Medidas Alternativas a la Reclusión, ha finalizado su proceso de consultas en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes encontrándose a la espera del correspondiente informe para ingresar al plenario de dicha Cámara.

2310. Por otra parte, en su comunicación el Estado indicó que deseaba efectuar una serie de precisiones sobre las afirmaciones de los peticionarios efectuadas en su nota de 6 de agosto de 2012, en el sentido de que "a pesar de la derogación del artículo 76 de la ley 2230 por la cual los señores Peirano habían sido procesados y encarcelados, la jueza del caso había decidido la prosecución de las actuaciones".

2311. El Estado indicó que dicha decisión judicial se basa en una sentencia interlocutoria por la cual la se resuelve sobre el pedido de clausura y archivo presentado por las diferentes defensas de todos los encausados en el proceso, entre ellos los hermanos Peirano. Indica que la resolución fue recurrida y el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno revocó la sentencia disponiendo el archivo de las

actuaciones. Ante lo cual se planteó un recurso de casación por parte del Ministerio Público, y la Suprema Corte de Justicia revocó la sentencia del Tribunal de Apelaciones y confirmó la dictada por la sede. En consecuencia, el Estado sostiene que el proceso iniciado respecto de los hermanos Peirano y demás coencausados continuó las instancias procesales correspondientes; y que la decisión de la Corte Suprema determinó la no clausura del proceso - como lo pretendían los peticionarios - pero de modo alguno afectó el principio de retroactividad.

2312. En consecuencia, el Estado señala que no es posible considerar que se viola el principio de retroactividad de la ley penal más benigna dado que la derogación del artículo 76 de la citada ley 2.230 se verificó en el año 2008, cuando la demanda acusatoria ya había sido planteada mucho tiempo atrás por un delito diverso (artículo 5 de la Ley 14.095 del año 1972). El Estado considera que no se verifica ningún supuesto consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana. En efecto, no se trata de la aplicación de una norma que al momento de los hechos *no fuere* derecho aplicable (*ya se ha señalado que la ley 14.095 data de 1972 y los hechos que se ventilan en juicio refieren a una época claramente posterior*). Indica que tampoco se trata de la imposición de una pena más grave cuando el Ministerio Público calificó en su demanda acusatoria la conducta de los enjuiciados en las previsiones del artículo 5 de ley 14.095. Precisa, que la demanda acusatoria marca el inicio del juicio penal siendo la imputación por la que se enjuicia pasible de ser sujeta a cambio siempre que se refiera a los mismos hechos que motivaran el procesamiento. Finalmente, indica al respecto que se derogó una norma que no había sido considerada por el Ministerio Público en su demanda acusatoria, por lo que las vicisitudes de una norma que no fue utilizada en la acusación fiscal es irrelevante para los enjuiciados desde que es la demanda la que marcará la actividad procesal de la defensa, al contestar la misma y sobre la que habrá de expedirse la sentencia cuando deba analizarse la imputación jurídica.

2313. Por otra parte, el Estado indicó que la sede penal no ha negado la posibilidad de salir del país a los peticionarios sino que los habría autorizado a ello bajo caución real. Añadió que la suspensión del título de Jorge Peirano fue una consecuencia de la aplicación concreta del artículo 140 de la ley 15.750. En consecuencia, sostiene que la aplicación de la normativa vigente no puede constituir una arbitrariedad judicial. Sobre la afirmación del desconocimiento del tiempo sufrido como prisión preventiva en Estado Unidos por Juan Peirano, el Estado indicó que se debía considerar que se trata de un proceso diverso al de los hermanos Peirano, Jorge, José y Dante. En efecto, señala que la extradición de Juan Peirano desde Estados Unidos se realizó de conformidad a determinados requisitos previstos de antemano por la legislación y el tratado de extradición, que no forma parte del expediente 12.553 tramitado ante la CIDH.

2314. Los peticionarios mediante comunicación recibida el 11 de septiembre de 2012, señalaron su preocupación en vista de que el Estado no había dado cumplimiento a lo dispuesto en la segunda recomendación estipulada por la CIDH respecto a la adecuación normativa de la legislación interna relativa al derecho a la libertad personal; no sólo como una garantía de no repetición, sino como una medida de cesación de las violaciones sufridas por las víctimas del presente caso. Sostienen que la falta de cumplimiento de la segunda recomendación de la CIDH ha tenido el efecto de privar a las víctimas de toda protección frente a la arbitrariedad judicial, y asegurar que las violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de los hermanos Peirano se tornen continuas.

2315. Mediante comunicación de fecha 1 de noviembre de 2012, los peticionarios indicaron que luego de otorgarles la libertad por imposición de la 1ª recomendación del Informe 35/07 a las víctimas del caso, se los había sometido a una "libertad a medias", dado que los mismos no podrían salir de Montevideo; además uno de ellos no podría ejercer la profesión, porque se le habría suspendido su título profesional aún sin estar condenado, y se les habrían concedido extradiciones, etc.

2316. Mediante comunicación recibida el 18 de julio de 2012, los peticionarios informaron que los hermanos Peirano Basso seguían sometidos a proceso penal. Indicaron que si bien la promulgación de la Ley No 18411 el 14 de noviembre de 2008, derogó el artículo 76 de la ley No 2230 -por el que los hermanos Peirano habían sido procesados-, y derivó en el archivo de la causa penal, decidido por el Tribunal de Apelaciones del 3º Turno mediante resolución de fecha 29 de julio de 2010; la misma fue recurrida por

Fiscalía, siendo que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, en fecha 15 de abril de 2011 dispuso dejar sin efecto el archivo de la causa ordenando la continuación de las actuaciones penales.

2317. Los peticionarios precisan que el fundamento invocado en dicha sentencia es que el objeto del proceso se fija recién con el acto de acusación formal y no con el procesamiento, respecto de lo cual estiman constituye una interpretación contraria a la doctrina nacional e internacional en este aspecto. En consecuencia, indican que no se trata sólo del incumplimiento de la segunda recomendación sino de un ilícito internacional.

2318. Añaden que en el procedimiento de los hermanos Peirano existe un auto de procesamiento firme que solo les atribuye el delito que fuera derogado y que dicha resolución judicial que se encuentra firme es la que determinaría el objeto de ese proceso. Señalan que en la resolución judicial se estableció que el cuadro táctico de la imputación formulada encuadraba en el artículo 76 de la Ley 2230 y no en el artículo 5 de la Ley 14095 (insolvencia societaria fraudulenta) por el cual hoy se tramita el proceso. En consecuencia sostienen que el cuadro fáctico existente al momento de dictarse el auto de procesamiento y el existente al momento de presentar la acusación habría variado, y ello no es así.

2319. El 18 de noviembre el Estado reiteró que la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores se encuentra estudiando la reforma al Código de Proceso Penal, siendo la misma la primera Cámara que le da tratamiento y se espera poder lograr su aprobación en el mes de diciembre de 2013. Se informa además que el referido proyecto forma parte de una reforma más amplia en el área penal dado que se encuentra en estudio un proyecto de ley Orgánica que crea la Fiscalía Nacional como Servicio Descentralizado, la cual hasta ahora es parte de la estructura del Ministerio de Educación y Cultura; y el proyecto de ley que reforma el Código Penal se encuentra actualmente en estudio en la Comisión de la Cámara de Representantes.

2320. Por su parte, el 25 de noviembre los peticionarios remitieron información en la cual indican que el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal no podría aprobarse en el presente Gobierno, dado que en octubre de 2013 venció el plazo para aprobar leyes que impliquen un gasto. Indicaron que próximamente habrá elecciones nacionales, y que por ende tampoco se podría aprobar leyes que impliquen un gasto en un año electoral, con lo cual recién en 2015 un nuevo Parlamento podría volver a discutir todo el proyecto. Indicaron además que los hermanos Peirano siguen teniendo que pedir autorización judicial para salir de Montevideo y que Jorge Peirano seguiría inhabilitado después de 8 años de que lo sancionaran preventivamente, y aunque ya se haya dictado la sentencia de primera instancia que lo condenó a 6 años de prisión, con lo cual indican, estaría siendo inhabilitado por más tiempo de lo dispuesto por la misma condena penal. Añadieron que una novedad que tuvo lugar con respecto al caso, es que se habría dictado la referida sentencia de primera instancia, luego de transcurridos 11 años de iniciado el proceso, el que además había sido archivado, con lo cual sostienen se afectó la presunción de inocencia, las garantías del debido proceso, y otras garantías internacionales. Precisarón que la sentencia se encuentra actualmente apelada. En suma, indican que los señores Peirano siguen sometidos al mismo proceso penal y reglas procesales que la CIDH ubicó debajo del estándar de la Convención y que la demora por parte del Estado respecto del cumplimiento de la recomendación pendiente afecta a miles de personas que son y serán sometidas a un proceso arbitrario. Los peticionarios sostiene que a pesar de su libertad, las víctimas, de otra manera, siguen siendo sometidas a una continua violación a su derecho a un proceso penal justo e imparcial.

2321. El 2 de diciembre de 2014, la CIDH solicitó información actualizada a las parte sobre el cumplimiento de la recomendación pendiente. El Estado envió información el 29 de diciembre de 2014 que daba cuenta de la aprobación y promulgación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) el 19 de diciembre de 2014.

2322. El 11 de febrero de 2015, por su parte, los peticionarios presentaron información sobre el cumplimiento, indicando que efectivamente se había aprobado el Código Procesal Penal pero que no hubo un dictamen de la CIDH sobre el proyecto y consideraron que no se sujeta a los estándares internacionales. Los peticionarios solicitaron que se organizara una audiencia pública con el pleno de la CIDH para que se reconsiderara el envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los peticionarios reiteraron

que sus representados continúan sometidos a un proceso penal y que el Código de Proceso Penal aprobado no indica en su exposición de motivos que haya sido aprobado en cumplimiento a la recomendación del Informe No. 86/09. Asimismo, los peticionarios indicaron que no hay un solo Juez en la República que ha aplicado el estándar en materia de plazo razonable establecido en el informe ni que haya al menos citado este documento. Los peticionarios resaltaron que el mentado Código comenzaría a regir en el año 2017 y criticaron el hecho de que no comenzara a regir con mayor prontitud.

2323. En relación a la afirmación de los peticionarios respecto a un proceso penal que se sigue en contra de sus representados, la CIDH observa, que en el informe bajo seguimiento se había recomendado “*Que el Estado uruguayo tome todas las medidas necesarias para que Jorge, José y Dante Peirano Basso sean puestos en libertad, mientras esté pendiente la sentencia, sin perjuicio de que continúe el proceso*”, recomendación que fue considerada cumplida por la CIDH en el mismo informe No. 86/09<sup>169</sup>.

2324. En relación con la segunda recomendación del Informe No. 86/09, la Comisión valora la información suministrada por el Estado y toma nota de la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal de Uruguay mediante la Ley 19.293, así como de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo el 19 de diciembre de 2014. La Comisión, procederá a realizar un análisis sobre el cumplimiento, en el sentido de que los preceptos establecidos en el nuevo CPP, sean “consistentes en un todo con las normas de la Convención Americana que garantizan el derecho a la libertad personal”.

2325. En comunicación de fecha 27 de enero de 2015, los peticionarios expresaron su inconformidad por la falta de un dictamen de la CIDH sobre el nuevo Código de Procedimiento Penal de Uruguay, el cual consideran que no se sujeta a los estándares internacionales y al respecto, informan sobre el debate existente en torno a la adscripción de los fiscales al Ministerio de Educación o de la Presidencia de la Nación. Asimismo, consideran que la recomendación de la CIDH no puede darse por cumplida con la mera sanción del texto normativo, el cual recién entraría en vigencia a partir del año 2017. Adicionalmente, los peticionarios lamentan que los jueces uruguayos no hayan concedido ninguna libertad provisional con fundamento en el estándar sobre los límites de la detención preventiva establecido en el informe de fondo de la Comisión en el presente caso, ni que hayan citado dicha decisión en sus resoluciones. Por lo tanto, solicitan que la CIDH dé por incumplidas las recomendaciones y reconsidere su decisión de no enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2326. En cuanto a la solicitud de los peticionarios de reconsiderar la decisión de no remitir el caso a la Corte Interamericana, es de indicar que de conformidad con el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la Comisión decidió en su momento no someter el caso dicho Tribunal, sino que por el contrario, decidió hacer público el Informe No. 86/09 de fecha 6 de agosto de 2009 e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA, como efectivamente así lo hizo.

2327. Adicionalmente, la Comisión considera oportuno aclarar que en el citado informe de fondo solo mantuvo la recomendación consiste en que el Estado produjera la modificación de las disposiciones legislativas o de otro carácter, a fin de hacerlas consistentes en un todo con las normas de la Convención Americana que garantizan el derecho a la libertad personal. En ese sentido, el Estado informó a la CIDH sobre la aprobación y promulgación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) el 19 de diciembre de 2014, el cual, efectivamente, entrará en vigencia el 1 de febrero de 2017.

2328. La CIDH solicitó información actualizada a las partes el 21 de octubre de 2016.

2329. En relación a la Recomendación No. 2, mediante nota del 26 de noviembre de 2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Uruguay hizo referencia a la audiencia celebrada en el marco del 153 Período de Sesiones de la CIDH. En la misma se habría informado sobre la aprobación de un Código del Proceso Penal sancionado por el poder Legislativo, promulgado por el Poder Ejecutivo el 19 de diciembre de 2014 y publicado en el Diario Oficial el 09 de enero de 2015, con la indicación de que se adecua

<sup>169</sup> CIDH informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, Jorge, Jose y Dante Peirano Basso, República Oriental del Uruguay, 6 de agosto de 2009.

a los principios establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado indicó a la CIDH que de este modo demostraba la intención de Uruguay de dar cumplimiento con las recomendaciones realizadas por la CIDH.

2330. El 25 de abril de 2016, los peticionarios indicaron que el Estado de Uruguay no había cumplido con la Recomendación No. 2, y que las víctimas seguían siendo sometidas a una “libertad a medias”, dado que se siguen viendo violados sus derechos a un proceso penal justo, debido e imparcial. Los peticionarios solicitaron a la CIDH que inste al Estado uruguayo a rendir cuentas sobre las acciones ejecutadas con posterior a la adopción y publicaciones del Informe de Fondo. Los peticionarios indicaron que las víctimas no pueden salir de Montevideo sin una autorización judicial e indican que Jorge Peirano sigue inhabilitado, aun habiendo cumplido la condena de prisión.

2331. Los peticionarios se remitieron a sus notas del 15 de julio de 2010 y 7 de febrero de 2011 en las cuales refieren a distintas arbitrariedades producidas, incluyendo la apertura de la causa luego de haber sido archivada por un Tribunal de Apelaciones por haberse derogado el delito por el que estaban procesados los peticionarios. Los peticionarios indicaron tener voluntad de dialogar con el Estado por fuera de las reuniones de trabajo, sin embargos indican que no han sido recibidos por el Estado, lo que consideran una falta de voluntad política para cumplir con la Recomendación No. 2.

2332. Mediante comunicación de fecha 26 de octubre de 2016, el Estado reiteró lo informado en comunicaciones anteriores, e indicó que el Código de Procedimiento Penal entrará en vigor en julio de 2017, dada la necesidad de realizar reformas sustantivas en sedes judiciales para poder poner en práctica el nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y público. El Estado indicó que en el nuevo sistema acusatorio le dará un mayor protagonismo al Ministerio Público, el que llevará adelante la investigación de los ilícitos penales y no el juez.

2333. En nota del 16 de noviembre de 2016, los peticionarios mantuvieron su negativa a considerar cumplida la recomendación No. 2, dado que con la simple sanción del Código del Proceso Penal no se estaría cumpliendo a cabalidad. Señalan que es necesaria la reforma de la legislación en materia de libertad como principio general aplicable a toda persona sujeta a proceso penal, conjuntamente con la adopción de medidas de “otro carácter” en torno a la adecuación de la práctica judicial de los estándares emergentes de la Convención Americana en materia de libertad personal.

2334. El 20 de febrero de 2017 y 24 de marzo de 2017, los peticionarios reiteraron la información suministrada en escritos anteriores y resaltaron que la mera promulgación del nuevo Código Penal no se debe interpretar como el cumplimiento de la recomendación No. 2, ya que esa nueva normativa no puede implicar un cambio de paradigma en el sistema judicial uruguayo, en cuanto a la prisión preventiva se refiere.

2335. El 26 de mayo de 2017, el Estado reiteró las comunicaciones anteriores, y manifestó que el nuevo código va a realizar una reestructuración general del proceso penal, ya que cumple con los estándares de derechos humanos del sistema interamericano. Adicionalmente, informó que la entrada en vigor del Código ya no se realizará de forma progresiva, como se había informado con antelaciones, debido a que esto podría afectar el derecho a igualdad. Asimismo, informó que se han realizado diferentes cursos de capacitación a nivel nacional para que los operadores judiciales estén preparados para su aplicación inmediata.

2336. El 28 de septiembre de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de la recomendación pendiente de cumplimiento. A la fecha del cierre del presente informe el Estado no ha presentado la información solicitada.

2337. El 26 de octubre de 2017, los peticionarios notificaron a la CIDH que la entrada en vigor del Código Procesal Penal se postergó y se pautó para el 1 de noviembre de 2017, e indicaron que para que la CIDH dé por cumplido la recomendación No. 2, consideran que el Estado debe publicar y dar amplia difusión al Código, y que la CIDH debe homologarlo, para así poder dar por sentado que efectivamente el Código cumple con los estándares del sistema interamericano.

2338. El 1 de noviembre de 2017, los peticionarios ratificaron la información suministrada con anterioridad y resaltaron que el 19 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia les notificó la Sentencia No. 586, mediante la cual se desestimó el Recurso de Casación interpuesto, por lo tanto quedó firme la sentencia por la que se condenó a seis años a Jorge Peirano Basso y a nueve años a José y Dante Peirano Basso, por el delito de Insolvencia Societaria Fraudulenta.

2339. La CIDH toma nota de la información suministrada por las partes en relación a las gestiones adelantadas por el Estado, para dar cumplimiento a la recomendación No. 2 del Informe 86/09. Al respecto, es de indicar que en el mencionado informe, la CIDH determinó la incompatibilidad de la legislación penal uruguaya con los estándares interamericanos en cuanto a tres aspectos: a) la ausencia de un límite a la prisión preventiva (párr. 152); b) la imposición de la prisión preventiva en razón de la pena (párrs. 159 y 160), y c) la posibilidad de que una persona en prisión preventiva iguale o supere la expectativa de permanecer privado de su libertad con motivo de una condena (párrs. 162 y 163). Al respecto, y después de analizar la Ley No. 19293, se desprende que las disposiciones de la misma no responden a las consideraciones realizadas en el Informe de Fondo No. 86/09 por parte de la CIDH.

2340. Por lo anterior, la CIDH considera que el Estado uruguayo no ha cumplido aún con la recomendación No. 2 del informe 86/09, y decide continuar la supervisión de su cumplimiento.

**Caso 12.555 (Petición 562/03), Informe No. 110/06, Sebastián Echaniz Alcorta y Juan Víctor Galarza Mendiola (Venezuela)**

2341. El 27 de octubre de 2006, mediante informe No. 110/06<sup>170</sup> la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Sebastián Echaniz Alcorta y Juan Víctor Galarza Mendiola. El Caso versa sobre la deportaciones de Juan Víctor Galarza Mendiola, el 2 de junio de 2002 y del señor Sebastián Echaniz Alcorta el 16 de diciembre de 2002, ambos de origen vasco y de nacionalidad española, de Venezuela a España.

2342. Mediante el acuerdo de solución amistosa, el Estado venezolano aceptó su responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos de Juan Víctor Galarza Mendiola y Sebastián Echaniz Alcorta, al haber procedido a realizar una deportación ilegal y entrega ilegal al Estado español. Asimismo, el Estado de Venezuela reconoció la violación de los siguientes artículos de la Convención Americana: Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Libertad Personal), Garantías Judiciales (artículo 8), Protección a la Honra y a la Dignidad, la Protección de la Familia), Derecho de Circulación y de Residencia, Igualdad ante la Ley y Protección Judicial, en concordancia con la obligación general de respeto y garantía prevista en el artículo 1(1) del citado instrumento; asume también la violación del artículo 13 (no devolución por riesgo a ser torturado o ser juzgado por tribunales de excepción) de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado se comprometió a otorgar una reparación pecuniaria y garantías de no repetición, entre otros aspectos.

2343. El 21 de octubre de 2006 la Comisión adoptó el Informe No. 110/06 mediante el cual valoró los esfuerzos desplegados por ambas partes para lograr la solución amistosa y aclaró que el acuerdo hacía mención de una serie de cuestiones que se encuentran fuera de la competencia y/o que no fueron objeto de la materia del Caso en la Comisión. En este sentido, la Comisión consideró necesario afirmar que el Informe aprobado de ninguna manera implica un pronunciamiento sobre las personas que no aparecen como víctimas en el Caso ante la Comisión ni sobre la ciudadanía de los señores Juan Víctor Galarza Mendiola y Sebastián Echaniz Alcorta, ni sobre el trato que los mismos habrían recibido en terceros países ajenos a la competencia de esta Comisión.

---

<sup>170</sup> Informe No. 110/06, Caso 12.555, Sebastián Echaniz Alacorta y Juan Víctor Galarza Mediola, 27 de octubre de 2006, disponible en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Venezuela12555sp.htm>.

2344. En fechas 4 de octubre de 2013, 25 de noviembre de 2014, 5 de octubre de 2015 y 12 de octubre de 2016 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes, sin recibir repuesta.

2345. El 23 de agosto de 2017, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa. A la fecha de cierre de este informe ninguna de las partes ha presentado la información solicitada.

2346. Por lo expuesto, la CIDH concluye que no se ha dado cumplimiento al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

### **Caso 11.706, Informe No. 32/12, Pueblo indígena Yanomami de Haximú (Venezuela)**

2347. El 1 de octubre de 1999, con los buenos oficios de la Comisión, se suscribió el acuerdo de solución amistosa entre el Estado venezolano y los peticionarios. El caso versa sobre la muerte de 16 indígenas Yanomami, a cargo de un grupo de *garimpeiros* brasileños, que además habrían herido a otro grupo, en la región de Haximú, Estado de Amazonas, Venezuela, en la frontera con Brasil.

2348. En el acuerdo el Estado se comprometió a establecer la vigilancia y control del área Yanomami, estableciendo un Plan de Vigilancia y Control Conjunto y Permanente, para monitorear y controlar la entrada de *garimpeiros* y la minería ilegal en el área Yanomami; respecto a la salud del Pueblo Yanomami, se comprometió a diseñar, financiar y poner en funcionamiento, a través del Ministerio de Sanidad y en coordinación con el Consejo Regional de Salud del Estado Amazonas, un Programa Integral de Salud dirigido al Pueblos Yanomami. Respecto a la investigación judicial de la masacre, se comprometió a hacer un seguimiento de la investigación judicial sobre el proceso penal que se adelanta ante las autoridades brasileras, a fin de que se establezcan las responsabilidades y se aplique las sanciones penales correspondientes. Asimismo, se comprometió a estudiar y promover medidas legislativas de protección de los pueblos indígenas y la designación de un experto en materia indígena. Posteriormente, la CIDH recibió información sobre las propuestas de cumplimiento del acuerdo entre las partes, específicamente lo relativo a la vigilancia y control del área Yanomami y el plan de salud Yanomami.

2349. El 20 de marzo de 2012, la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 32/12<sup>171</sup> mediante el cual reconoció la voluntad del Estado de cumplir con los puntos del acuerdo y los avances registrados en ese sentido, de conformidad con la información aportada por las partes durante el trámite del presente asunto. Asimismo, valoró las propuestas acotadas de cumplimiento presentadas por los peticionarios. En relación con los procesos judiciales de investigación por los hechos de este caso, la CIDH tuvo en cuenta que la investigación culminó en la sanción de los responsables por parte de las autoridades brasileras.

2350. En ese sentido, la CIDH decidió:

5. Aprobar los términos del acuerdo de solución amistosa alcanzado por las partes con las modificatorias respectivas.

6. Hacer público el presente informe e incluirlo en su informe anual a la Asamblea General de la OEA.

2351. El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 25 de noviembre de 2014, la CIDH recibió una comunicación conjunta del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y CEJIL, mediante la cual se brinda información sobre los dos puntos pendientes del acuerdo: la vigilancia y control del área Yanomami y la prestación de salud al pueblo Yanomami.

<sup>171</sup> Informe No. 32/12, Petición 11.706, Pueblo indígena Yanomami de Haximú, 20 de marzo de 2012, disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/amistosas.asp>

2352. Con respecto al primer punto, los peticionarios expresaron su preocupación por la presunta falta de vigilancia y control de entrada ilegal de *garimpeiros* en la zona, así como por la proliferación de la minería ilegal, manifestando que tanto los primeros, como los segundos, estarían entrando con la complicidad de la Fuerza Armada y la Guardería Ambiental. Alegan los peticionarios que dichos hechos han tenido efectos negativos sobre la comunidad, ya que habrían representado grandes amenazas a la integridad y vida del pueblo Yanomami, contaminación del río Atabapo, alteración del ecosistema fluvial de la zona, introducción y expansión de enfermedades endémicas, delincuencia organizada, diversas formas de violencia contra las mujeres indígenas y tráfico de sustancias. Por lo anterior, los peticionarios afirmaron que el Estado venezolano sigue adoleciendo de políticas y medidas acertadas que permitan el control de la entrada ilegal de *Garimpeiros*, así como de políticas certeras para controlar la corrupción de integrantes de la Fuerza Armada que contribuyen a la permanencia y crecimiento de la minería ilegal en la zona.

2353. Con respecto al segundo punto, los peticionarios manifestaron que pese a los avances reconocidos por la CIDH frente a este tema, han constatado algunos retrocesos: falta continua y permanente de personal de salud adecuado en las zonas rurales y su constante rotación; falta de continuidad en los tratamientos médicos lo que dificulta la erradicación eficaz de epidemias; aumento de la tasa de mortalidad en el año 2013 por enfermedades infecciosas como malaria, neumonía y tuberculosis; falta de transporte adecuado que permita la llegada a las zonas de difícil acceso y falta de dotación de equipos médicos idóneos para tratar la crisis de salud descrita; necesidad de continuar con las capacitaciones a los miembros de la etnia como “Agentes Comunitarios Yanomami en Atención Primaria en Salud”, especialmente se pide que los esfuerzos realizados hasta el momento sean acompañados de mayor seguimiento por parte de las instituciones, así como de mayor provisión de medicamentos e insumos necesarios para que puedan cumplir con su tarea; finalmente, los peticionarios afirman que el Plan de Saludo Yanomami no cuenta en la actualidad con presupuesto suficiente.

2354. El 5 de octubre de 2015 y 12 de octubre de 2016 la CIDH solicitó información actualizada sobre el cumplimiento. A la fecha, las partes no han presentado la información solicitada.

2355. El 23 de agosto de 2017, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. A la fecha de cierre del presente informe los peticionarios no han presentado información.

2356. El 19 de octubre de 2017, el Estado informó que, en relación al Programa Integral de Salud, en el año 2004 creó la Dirección Nacional de Salud Indígena en Caracas; en el año 2005 se instaló la Oficina del Plan de Salud Yanomami (PSY) en Puerto Ayacucho; en el año 2006 se inició el Programa de Sustitución de Nuevas Tribus; en el año 2008 el Estado suscribió la Resolución CD48/10 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mediante la cual el Estado se comprometió a la eliminación de toda morbilidad ocular atribuible a oncocercosis y a interrumpir la transmisión de la enfermedad; en el año 2009 el Estado suscribió la Resolución CD49.R19 de la OPS, sobre la eliminación de las Enfermedades Infecciosas Desatendidas (EID) y otras enfermedades relacionadas con la pobreza, para el período 2008-2015. En el año 2010, el Estado desmontó un campamento de minería ilegal “garimpo”, prestó atención integral en salud a la comunidad Yanomami e inició un programa de visitas regulares. En el año 2012, se graduó la segunda promoción de Agentes Yanomami de Atención Primaria de Salud. En el año 2013, la Ministra de Salud viajó al Alto Orinoco y aprobó 40 horas trimestrales de vuelo en helicóptero para realizar atención a las comunidades Yanomami en la frontera con Brasil. En el 2014, el Estado firmó un Memorando de Entendimiento con Brasil para la atención integral de salud en las comunidades Yanomami ubicadas en la zona fronteriza. En el 2015, el Estado aprobó una nueva propuesta de plan de salud Yanomami. En septiembre de 2016, el Estado suscribió la Resolución CD55/15 del Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la eliminación o control de las enfermedades infecciosas desatendidas para el período 2016-2022.

2357. Adicionalmente, el Estado venezolano informó que debido a las medidas tomadas por el Gobierno con el apoyo de la población Yanomami y a la aplicación de tecnología de biología molecular, se interrumpió la transmisión de la oncocercosis en el área y estimó que el 75% de la comunidad Yanomami vive en áreas sin riesgo de infección. En cuanto a la incorporación de nuevas comunidades al Sistema de Salud, el

Estado informó que gracias a los vuelos de helicóptero y a las imágenes satelitales se logró identificar e incorporar al sistema a 4.768 yanomamis, por lo que en la actualidad 15.040 yanomamis forman parte del sistema de salud. Asimismo, el Estado informó que se realizan operativos regulares que movilizan aproximadamente a setenta trabajadores de salud en las zonas de más difícil acceso del estado Amazonas, por lo que se ha logrado realizar el diagnóstico, vacunación y tratamiento de personas con malaria y oncocercosis. Dicha información fue trasladada a los peticionarios.

2358. Al respecto, la Comisión se encuentra a la espera de las observaciones de la parte peticionaria para pronunciarse sobre el cumplimiento del acuerdo.

2359. Por lo expuesto, la CIDH concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones realizadas en el informe 32/12. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las mismas.

### **Caso 12.473, Informe No. 63/13, Jesús Manuel Cárdenas y otros (Venezuela)**

2360. El 2 de marzo de 2005, con los buenos oficios de la Comisión, se suscribió el acuerdo de solución amistosa entre el Estado venezolano y los peticionarios. El caso versa sobre la alegada responsabilidad de la República Bolivariana de Venezuela por el incumplimiento de dos fallos judiciales dictados por tribunales internos en los que se ampara el derecho a la seguridad social de las 18 presuntas víctimas.

2361. El 16 de julio de 2013, fue homologado por la CIDH el acuerdo de solución amistosa en el que el Estado se comprometió a lo siguiente:

1. Pagar a las 18 personas jubiladas y a sus herederos, cuando sea el caso, el ciento por ciento de las pensiones adeudadas hasta la fecha de la cancelación.
2. Adoptar un mecanismo que le permita [a] las víctimas y sobrevivientes cobrar a futuro sus pensiones de jubilación a partir del momento del pago de lo adeudado, de conformidad con la legislación venezolana.
3. El pago de seis mil dólares americanos (\$6.000) o su equivalente en Bolívares, por concepto de indemnización de daños morales y materiales a cada una de las víctimas y sus familiares. Para el cumplimiento de esta reparación el Estado podrá requerir un lapso de dos meses adicionales al término anteriormente establecido.
4. Adelantar medidas orientadas a satisfacer las peticiones de carácter no pecuniario de tal manera que se garantice el desagravio por parte del Estado de las víctimas y sus familiares. Que consisten en:
  - a. El reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado venezolano de la violación de los derechos humanos ocurrida durante el año 1992 a raíz de la privatización de la empresa VIASA, habiendo afectado derechos adquiridos por las personas jubiladas, y el reconocimiento del Presidente Hugo Chávez Frías de solucionar la situación.
  - b. Publicar en un diario de circulación nacional el desagravio a las personas jubiladas y sus familiares.
  - c. Realizar un programa especial de televisión en el canal oficial de mayor cobertura a nivel nacional en homenaje del jubilado fallecido Jesús Manuel Naranjo, Presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de VIASA, y en reconocimiento a la perseverancia de los jubilados a la lucha por sus derechos.

d. Realizar un programa educativo en donde se dé a conocer los derechos y beneficios que le asisten a las personas jubiladas en Venezuela.

2362. Con respecto al primer punto, quedó establecido en el informe de homologación que el Estado viene cumpliendo de manera constante y puntual con los pagos mensuales de jubilación y pensión a favor de las víctimas del caso. No obstante, la Comisión decidió seguir dándole seguimiento a todos los puntos del acuerdo.

2363. El 25 de agosto de 2015, los peticionarios indicaron que el Estado venezolano ha venido cumpliendo con los aspectos fundamentales del acuerdo. Los peticionarios confirmaron que las personas beneficiarias han recibido los pagos mensualmente, los que se depositan en su cuenta bancaria individualizada en un banco estatal. Dicho desembolso se ha realizado de manera constante y puntual desde que recibieron su primera mensualidad. Los peticionarios reconocieron la voluntad política del Estado venezolano de cumplir con los compromisos de carácter pecuniario. Asimismo, indicaron que el Estado ha mantenido también la medida de asimilar a los jubilados beneficiarios como jubilados del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, y en consecuencia reciben todos los beneficios que el ministerio les otorga a sus jubilados, y que exceden el propio acuerdo amistoso. Los peticionarios consideraron que el Estado cumplió con los aspectos pecuniarios del acuerdo.

2364. Los peticionarios indicaron que el Estado no ha cumplido con los compromisos sobre reconocimiento de responsabilidad y programas televisivos establecidos en el punto 4 del acuerdo. Por lo anterior, la CIDH continuara supervisando dicha cláusula.

2365. El 1º de octubre de 2015 y 12 de octubre de 2016 la CIDH solicitó información actualizada sobre el cumplimiento de los puntos del acuerdo. A la fecha, ninguna de las partes ha respondido.

2366. El 23 de agosto de 2017, la CIDH solicitó nuevamente a las partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. A la fecha de cierre del presente informe los peticionarios no han presentado información.

2367. El 19 de octubre de 2017, el Estado se refirió a los incisos 4c) y 4d), y reiteró su compromiso y disposición para dar cumplimiento a lo acordado. El Estado indicó que el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información designó a la Gerencia de Programas de Venezolana de Televisión como responsable de realizar la difusión del programa televisivo. Asimismo, el Estado informó que se puso en contacto con el representante de los peticionarios para realizar las gestiones necesarias para la producción del programa. Sin embargo, el Estado informó que a la fecha del presente informe, los peticionarios no han dado respuesta a su requerimiento.

2368. Por lo expuesto, la CIDH concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones realizadas en el informe 63/13. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las mismas.